

MINISTERIO DE EDUCACION

**D I C T A M E N E S**  
EN LO  
**ADMINISTRATIVO**  
DE LOS  
**PROCURADORES GENERALES**  
DE LA  
**NACION ARGENTINA**



Corresponde a los Procuradores Generales:  
Dr. Sabiniano Kier (1892-1905)  
Dr. Julio Botet (1905-1917)

**TOMO II**

**DEPARTAMENTO DE INFORMACIONES, BIBLIOTECA Y ESTADISTICA**  
**PARERA 55** **BUENOS AIRES**

**1,949**





**PRESIDENTE DE LA NACION**  
**GENERAL D. JUAN D. PERON**

**MINISTRO DE EDUCACION**  
**DOCTOR OSCAR IVANISSEVICH**

**SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO**  
**DON CARLOS FRATTINI**

**SUBSECRETARIO DE CULTURA**  
**DON ANTONIO P. CASTRO**

**SUBSECRETARIO UNIVERSITARIO**  
**DOCTOR CARLOS I. RIVAS**

**Departamento de Informaciones, Biblioteca y Estadística**  
**DIRECTOR D. MANUEL VILLADA ACHAVAL**



RELATOR GENERAL:

Abogado, D. ARTURO ALONSO GOMEZ,  
Secretario del Departamento de Informaciones, Biblioteca y  
Estadística, del Ministerio de Educación



**Procurador General de la Nación**  
**Dr. Sabiniano Kier**  
**(1892-1905)**



Una Sociedad Anónima constituida en el extranjero de conformidad a las leyes del país de origen, aunque el número de accionistas sea menor que el que exige el art. 318 de nuestro Código de Comercio y no determinen sus estatutos un término, por el cual va a durar, puede ser reconocida por el P. E. siempre que se sujete a las prescripciones de los arts. 286 y 287 del código citado. El reconocimiento de la Sociedad en tales condiciones debe serlo, con la declaración de "en cuanto haya lugar, y sin perjuicio de la jurisdicción y leyes de la Nación".

**La Sociedad "The Jewish Colonization, Association" — solicita el reconocimiento de persona jurídica.**

*Excmo. Señor:*

Se ha llenado por un traductor público a fs. 17 vuelta, la formalidad de ratificar la versión al español de estatutos y demás documentos relativos al establecimiento en Londres de la Sociedad "The Jewish Colonization Association" según lo ordenado por V. E. a fs. 40.

Resultando de esas piezas que la Sociedad ha sido constituida en país extranjero y aceptada por sus autoridades, e incorporada al Registro, con sujeción a las leyes del lugar que rigen el acto; esa Sociedad aún constituida por menos número de accionistas que el que requiere el art. 318 de nuestro Código de Comercio, para aquellos que se forman bajo el amparo de sus prescripciones, puede ser aceptada por V. E. pero sujeta a las prescripciones de los artículos 286 y 287 del mismo Código.

Examinando los Estatutos que rigen la constitución de la sociedad, nada encuentro que contrarie ni la moral ni las conveniencias públicas. Si esa asociación es dirigida al fomento de la inmigración y la colonización de extensas regiones, con propósitos agrícolas, comerciales e industriales, según lo consignan sus estatutos, puede al contrario ser benéfica en nuestro país, donde tan grande extensión de tierra inculta llama así la actividad de grandes masas productoras.

Pero para que esos resultados se obtengan es necesario que ninguna expresión o interpretación de los estatutos o reglamentación anterior o ulterior pueda aparecer contrariando nuestra legislación territorial y sus tendencias descentralizadoras y subdivisoras de la propiedad raíz, ni en el tiempo ni en la extensión.

El art. 318 del Código de Comercio coadyuvando a estos propósitos de nuestra legislación general, requiere por su inciso 4º, que la Sociedad sea por tiempo determinado, como medio sin duda de dar una solución a los derechos adquiridos por ella.

No obstante, esta Sociedad no fija un término para su duración ni designa una época para su disolución. Cuando *ella* tenga lugar, el art. 50 de los Estatutos previene, que los concesionarios con títulos de propiedad, conservarán esa propiedad libre de toda anualidad u otra contribución. Si este artículo fuera contrario a la liberalidad de nuestras leyes sobre adquisición de la propiedad o envolvese un pensamiento de intrasmisión de la propiedad o imposición de gravámenes por tiempo indefinido, tales propósitos tendientes a crear la inmovilidad del dominio o la perturbación de su movimiento normal, vendrían a contrariar nuestro sistema facilitador de la transmisión inmobiliaria.

Por ello opino que al acordar V. E. si lo creyere conveniente, la inscripción de la Sociedad "The Jewish Colonization Association" en el Registro Público, lo sea con la declaración de en cuanto ha lugar y sin perjuicio de la jurisdicción y leyes de la Nación a que están subordinados todos los establecimientos radicados dentro de sus límites territoriales. — Febrero 15 de 1892.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 17 de 1892.*

=====



No tiene personería el encargado de un Consulado extranjero, para representar ante el P. E. a un súbdito de su país, en gestiones de carácter privado.

No corresponde al P. E. evacuar la consulta que se le formula, acerca de si un casamiento celebrado ante el pastor de la Iglesia Metodista en 1886, es legítimo ante la ley, por cuanto no tiene competencia el P. E. para interpretar las disposiciones del Código Civil, que rigen el matrimonio; ello es atributo del Poder Judicial.

**Consulado Alemán — consulta si el casamiento celebrado ante el pastor de la Iglesia Metodista, en 1886, es legítimo ante la ley.**

*Excmo. Señor:*

El Encargado del Consulado de Alemania, pide a nombre de la súbdita alemana Ana F. S. A. Rissmann se sirva V. E. expresarle si su casamiento que expresa el testimonio de partida acompañada, es legítimo ante la ley.

Sería aventurado declarar la solidez o legitimidad de un matrimonio, sin tener a la vista y traer a examen todos los antecedentes que escapan a la generalidad de términos de una partida de inscripción.

Pero aun cuando esto fuera posible, opino que V. E. no deberá hacer tal declaración.

No existe personería en el Encargado del consulado de Alemania para representar a una súbdita alemana en una gestión de carácter civil y privado.

No existe tampoco jurisdicción en V. E. para hacer declaración alguna al respecto. La verificación de los múltiples hechos que conducen a la celebración del matrimonio y la aplicación e interpretación de las disposiciones del Código Civil que lo rigen, son atribuciones del Poder Judicial que juzga los hechos y aplica la ley procedente en cada caso.

Son sus decisiones consentidas o ejecutoriadas en juicio contradictorio, los que pueden producir efectos civiles en cuanto a la adquisición y participación de bienes, derechos hereditarios y demás efectos legales.

La declaración de parte de V. E. sería improcedente e ineficaz

para producir aquellos efectos y es por ello que opino que V. E. debe declararse incompetente para dictarla. — Febrero 23 de 1892.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 24 de 1892.*

=====

La exención de pago de impuestos que de conformidad al Derecho Internacional se acuerda a los Representantes Diplomáticos, no alcanza a las tasas, con las que se retribuyen servicios públicos.

**El Sr. Ministro de Francia — consulta si el Cuerpo Diplomático debe abonar el impuesto por el servicio de las aguas corrientes.**

*Excmo. Señor:*

Antes de expedir el dictamen solicitado por V. E. en la consulta dirigida por S. E. el Sr. Ministro de la República Francesa, necesitaría conocer la norma de procedimientos de la Comisión Directiva de las Aguas Corrientes.

Ruego a V. E. se sirva en consecuencia pedir informe a esa Comisión, y que expedido, corra la vista. — Marzo 5 de 1892.

*Excmo. Señor:*

Según la doctrina más autorizada del Derecho Internacional, los Ministros Extranjeros están exentos de todo impuesto personal, pero no de aquellos que sólo importan la retribución por el uso de un servicio.

La administración de las Obras de Salubridad, se subordina al último extremo. Empresa puramente administradora de servicios que ha adquirido y sostiene a costa de grandes dispendios, ofrece esos servicios al público mediante un precio remuneratorio, proporcional al costo relativo.

Por ello, de conformidad con lo expuesto en el precedente dictamen pienso que el impuesto, o más propiamente, el precio fijado

a la provisión de aguas corrientes, a que se refiere S. E. el Sr. Ministro de la República Francesa, no debe comprenderse entre las exenciones acordadas a los agentes diplomáticos. — Marzo 16 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Marzo 17 de 1892.*

=====

No existiendo tratado, debe mediar ofrecimiento de reciprocidad, para hacer lugar a un pedido de arresto provisorio.

**La legación de los Estados Unidos de América — sobre la detención de Gedeón Marsh.**

*Excmo. Señor:*

S. E. el Sr. Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, en perspectiva de una solicitud de extradición del prófugo Gedeón Marsh, que se supone se encuentra en esta Capital bajo el nombre de Morrinson pide su detención provisoria.

Expresándose la naturaleza del delito de falsificación de documentos públicos, relacionados con el Banco Nacional local de Filadelfia, la formación de un proceso y la gravedad de las penas a que tal delito está sujeto, opino que V. E. podría acordar el arresto provisorio bajo el principio de la reciprocidad por no existir tratado al respecto, con sujeción a lo dispuesto en los arts. 671, 672 y 673 del Código de Procedimientos en lo Criminal.

Si V. E. se sirviera aceptar la solicitud de arresto provisorio, los antecedentes, previo aviso a S. E. el Sr. Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, deberían pasar al Juez Nacional de la captura para que proceda con arreglo a derecho. — Marzo 8 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución rechazando el pedido por no ofrecerse reciprocidad. — Marzo 8 de 1892.*

=====

Habiéndose presentado ante el P. E. una Sociedad Anónima pidiendo la aprobación de las reformas introducidas en sus Estatutos en virtud de las cuales se ha disminuído, por así convenir a la entidad, el patrimonio social, corresponde antes de aprobar dichas reformas, que se establezca que quedan a salvo los derechos de terceros que contrataron con la Sociedad teniendo en cuenta su patrimonio primitivo y que en consecuencia la disminución de capital se autoriza sin perjuicio de las responsabilidades a que por operaciones anteriores estuviese afectado.

**La Compañía Nacional de Seguros “La Buenos Aires” — solicita la aprobación de las modificaciones introducidas en sus Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

La Sociedad Anónima “La Buenos Aires” ha reformado los Estatutos llenando los procedimientos requeridos al efecto.

La convocatoria que demuestran los periódicos acompañados, ha sido hecha en la forma prevista por el artículo 2º de los antiguos Estatutos acompañados a fs. 1ª. La Asamblea se ha constituido con número suficiente de accionistas y acciones, según el acta legalizada por el Presidente y Secretario de la Sociedad, corriente de fs. 14 a 19, y las reformas aprobadas en la Asamblea, a que esta acta se refiere, no afectan en general ningún interés público, ni contrarían las disposiciones del Código de Comercio.

En el título 2º referente al capital social, se encuentra una reforma sustancial, en la disminución del capital social que era de tres millones según los antiguos Estatutos.

Esta disminución conviene a la Compañía dada la limitación que impone la actual crisis financiera. Pero es necesario que al aprobarla queden salvadas las acciones de los que hubiesen contratado con la sociedad, pues siendo la masa social compuesta de fondo social y de los beneficios acumulados, responsable en las compañías anónimas según el artículo 315 del Código de Comercio, y los socios, “responsables de las obligaciones hasta el valor de las acciones que tengan en ellas” según el artículo 316, la disminución de ese capital sólo puede autorizarse sin perjuicio de las responsabilidades a que por operaciones anteriores estuviese afectado. Sírvasse V. E., al apro-

bar las reformas en los nuevos Estatutos, establecer la referida salvedad. — Marzo 22 de 1892.

*Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Octubre 24 de 1893.*

=====

El auto de prisión dictado por autoridad competente —requisito indispensable para que proceda una extradición— debe fundarse en pruebas suficientes que establezcan la delincuencia del encausado, caractericen la existencia y naturaleza del delito, y la pena que corresponda aplicar.

**Sobre la extradición de José Esteban, procesado por robo,  
solicitada al Gobierno de Portugal.**

*Excmo. Señor:*

La ley de 25 de agosto de 1885 y el Código de Procedimiento en lo Criminal, han fijado requisitos en cuyo mérito puede el Gobierno Argentino conceder la extradición de criminales, fundado en el principio de la reciprocidad. La aplicación de ese mismo principio en el caso, una vez que se hallen comprobados los extremos exigidos en los artículos 12 y 18 de la ley citada, autorizarán la solicitud de extradición del encausado José Esteban. Pero para ello es necesario que la culpabilidad resulte comprobada al menos con la semiplena prueba indispensable para fundar un auto de prisión.

Examinando estas actuaciones no resultan comprobados los extremos necesarios.

Si bien el Juez de Instrucción de Córdoba ordenó la formación del sumario, a fin de averiguar los hechos denunciados y libró oficio al Juez de Paz de Bell Ville, para tomar declaración al Jefe Político y a cualquiera otra persona que tuviera conocimiento de los hechos, no existe otra declaración al respecto que la del mismo acusador y las del Jefe Político de Bell Ville.

El primero es parte en la acusación, y el segundo no tiene otro conocimiento que el que le ha suministrado, el mismo acusador. Quedan aún el recibo del dinero que se dice sustraído y las cartas

detenidas transcritas a fs. 2; pero ese recibo y cartas no están reconocidas en su letra y firma y no han sido autenticadas por ningún otro medio legal, en su estado actual no constituyen todavía un elemento probatorio.

Con estos antecedentes se decretó a fs. 6 vuelta la detención preventiva, y obtenida recomendó V. E. a fs. 9 la urgencia de recabar entre otras diligencias, la sentencia condenatoria o el mandato de prisión expedido por el Tribunal competente (fs. 9).

Para cumplir esta disposición debiera haberse procedido a completar el sumario para dejar comprobado la existencia del delito imputado y dictar en su consecuencia el auto de prisión. Pero en vez de esto y no obstante haberse autorizado por la Excm. Cámara de la Provincia de Córdoba al Juez del Crimen para atender en el sumario y complementar los extremos legales según diligencias de fs. 7 vta., el interesado pidió a fs. 10 el mandato de extradición y el Juzgado del Crimen, sin más trámite, así lo dispuso por su auto de fs. 11 y en mérito de las constancias preexistentes.

Si esas constancias de autos fueran bastantes para obtener la detención preventiva, no lo eran para pedir la extradición.

A este objeto se necesitaba acompañar un auto de prisión dictado por autoridad competente; y como ese auto debe ser fundado en recaudos suficientes a establecer la delincuencia del encausado y caracterizar la existencia y naturaleza del delito y su pena, encuentro que las declaraciones que he examinado no bastan a ese objeto.

Antes que exponerse al rechazo de las rogatorias sería oportuno devolver estas actuaciones por el conducto que corresponde al Juez del Crimen, a fin de que proceda a ampliar el sumario hasta obtener la prueba necesaria y dictar y fundar el auto de prisión contra el encausado dirigiendo exhorto en forma para la extradición con los requisitos conducentes a un éxito seguro, que fueron expresados en el telegrama de V. E. acompañado bajo el N° 4. — Marzo 15 de 1892.

*Excmo. Señor:*

El artículo 12 de la ley de extradición de 25 de agosto de 1885 autoriza a V. E. a acordarla mediante la existencia de una sentencia condenatoria o auto de prisión dictado por autoridad competente y las demás circunstancias previstas en los incisos 2° y 3°. Las mismas

causas y circunstancias autorizan a V. E. para pedirla de una nación extranjera en ejercicio del principio de reciprocidad.

Los extremos legales necesarios, al efecto, están autenticados en las constancias de este proceso.

Las declaraciones y demás antecedentes suministrados por el Jefe Político de Bell Ville y testigos examinados y las cartas secuestradas y agregadas a lo actuado han dado mérito a la clasificación del delito de sustracción fraudulenta de dineros ajenos.

Expresado el delito, dictada la orden de prisión por la autoridad competente del Juez del Crimen de Córdoba, determinada la penalidad de 3 a 6 años de penitenciaría que a ese delito corresponde, según los artículos 202 y 203 del Código Penal, cuyo inciso 6 se ha transcripto a fs. 11 vta., demostrada en fin la identidad de la persona con las designaciones expresas que constan en el sumario confirmadas por la exhibición del retrato del procesado, no encuentro obstáculo legal para que V. E. pueda dar curso al exhorto recibido, solicitando del Gobierno de Portugal la extradición del procesado José Esteban. — Marzo 28 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resoluciones de acuerdo con lo dictaminado. — Marzo 20 de 1892.*

=====

La declaración en una Bula Pontificia que instituye Obispo "in partibus infidelium", de que el elegido conservará la Canonía de la dignidad en la Catedral de Salta, no es obstáculo para conceder el "exequatur", cuando dicha manifestación está conforme con las disposiciones que rigen la Iglesia de Salta y con los derechos del Patronato de la Nación, que deben quedar a salvo en todos los casos.

**El Pbro. Dr. Pablo Padilla — pide pase a la bula en que se le instituye Obispo de Pentacomia "in partibus infidelium".**

*Excmo. Señor:*

Las Bulas que instituyen Obispo de Pentacomia *in partibus infidelium*, a S. S. el Dr. Pablo Padilla, proceden de Su Santidad León XIII y están revestidas de las formas externas que caracterizan la autenticidad.

Nada encuentro en el conjunto de facultades acordadas al Obispo preconizado, que pueda contrariar los derechos de la Iglesia Argentina, desde que todas las atribuciones y prescripciones de la Bula de Su Santidad se refieren al cuidado, régimen y administración de la Iglesia de Pentacomia perteneciente a regiones extrañas a esta jurisdicción territorial.

Pienso que las declaraciones de la última parte de la Bula Pontificia, referente a la conservación de parte del Sr Obispo preconizado, de la Canongía de la dignidad en la Catedral de Salta, no pueden obstaculizar el *exequatur* cuando esas declaraciones se relacionen con las disposiciones que rigen la Iglesia de Salta al respecto, y con los derechos del Patronato de la República que deben quedar salvos en todo caso.

Para que V. E. pueda proceder en la forma indicada necesita previamente, obtener el acuerdo de la Suprema Corte, con sujeción a lo establecido en el inciso 9º del artículo 86 de la Constitución Nacional.

V. E. se ha de servir en consecuencia, disponer pase previamente esta gestión a ese Supremo Tribunal, al objeto prescripto en la Constitución, disponiendo en seguida con sujeción a sus conclusiones. — Marzo 30 de 1892.

#### *Suprema Corte:*

A V. E. toca según el artículo 86, inciso 9º de la Constitución Nacional, otorgar el acuerdo para que el Poder Ejecutivo pueda conceder el pase a la Bula del Sumo Pontífice que instituye Obispo de Pentacomia a S. S. el Dr. Pablo Padilla.

Desde que la Institución se refiere a un Obispado *in partibus infidelium*, en nada afecta los derechos del Patronato de la Iglesia Nacional Argentina.

V. E. ha resuelto, de conformidad, el caso análogo del Pbro. Sr. Aráoz que fué instituido Obispo de Berissa: V. E. de conformidad con lo pedido por el Procurador General, dió su acuerdo para el pase de las Bulas Pontificias en 9 de abril de 1872.

Ningún obstáculo encuentro en que V. E. proveyera el caso actual en la misma forma. — Abril 1º de 1892.

*Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Abril 2 de 1892.*

=====



El testimonio de un auto de otorgamiento de ciudadanía argentina, sólo implica el reconocimiento de dicha ciudadanía, mas para entrar en ejercicio de los derechos que esta acuerda, es requisito indispensable, que se expida la "carta de ciudadanía" a que se refiere el art. 6º de la ley de la materia.

**La Legación de Italia — sobre el caso de ciudadanía de don Luis Minetto.**

*Excmo. Señor:*

El inciso 1º del artículo 2º de la ley de ciudadanía argentina, de octubre de 1869 declara "son ciudadanos por naturalización los extranjeros mayores de 18 años que residen en la República dos años continuos y manifiesten ante los Jueces Federales de Sección su voluntad de serlo".

De esta prescripción se deduce que basta tener las condiciones de edad y domicilio y hacer manifestación de voluntad, ante el Juez de Sección, para ser ciudadano naturalizado. De otro modo la ley habría dicho "podrían serlo" y no afirmativamente "lo son".

La carta de ciudadano a que se refiere el artículo 6º de la misma ley sólo determina una forma de autenticación, como en todos los actos de la vida civil, la carta pública o privada del contrato no es el contrato mismo sino la comprobación auténtica de la preexistencia de aquél.

Opino en consecuencia, que la declaración del auto del Juez Nacional, testimoniada en el precedente certificado, importa el reconocimiento de la ciudadanía del peticionante, pero que, sin la carta que requiere el artículo 6º de la ley, como fórmula de la comprobación, no es permitido el ingreso de los derechos adquiridos. Abril 15 de 1892.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Mayo 9 de 1892.*

=====

Corresponde acordar funciones de oficiales del Registro Civil a los Jueces de Paz, hasta tanto no se creen las respectivas Oficinas.

**El Jefe del Registro Civil de Formosa — pide autorización para encargar a los Jueces de Paz de los Departamentos, la ejecución de la ley de Registro Civil.**

La ley sobre Registro del Estado Civil, de noviembre de 1884, prescribe en su artículo 2º, que en los Territorios Nacionales donde no exista Municipalidad, el Poder Ejecutivo nombrará los empleados necesarios para el Establecimiento del Registro y determinará los límites de distrito en que deban ejercer sus funciones.

Las funciones de los Jueces de Paz de esos territorios, determinados en la ley de 18 de octubre de 1884, no están en contradicción con los de Registro Civil.

Tratándose de obviar las grandes dificultades que al Registro oponen las grandes distancias, y carencia de las vías públicas a que se refiere la precedente nota, habrá conveniencia en instalar oficinas en los distritos que por su población las requieren; y si esto no fuera practicable todavía, hacer recaer provisoriamente el nombramiento en los Jueces de Paz respectivos. Abril 30 de 1892.

*Departamento de Justicia. Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Junio 9 de 1893.*

=====

- I.— La compra que el F. C. Oeste hizo a la Provincia de Buenos Aires del ramal ferroviario del Muelle de Catalinas a Once de Septiembre, sólo implica la adquisición del ferrocarril y no la calle pública donde corría, por cuanto ésta no puede entrar en el dominio privado y la utilización que de la misma puede hacerse es a título de uso temporario y jamás de dominio, máxime si las leyes, actas y documentos producidos en ocasión de la mencionada venta demuestran que la Provincia de Buenos Aires, nunca entendió vender la vía pública en cuestión.
- II — La ocupación de la vía pública no crea sino derechos de uso y posesión por tiempo indeterminado y esta indeterminación no crea derechos a perpetuidad que son de la esencia del dominio pleno.
- III — La autoridad concesionaria puede reprimir o restringir el uso acordado, cuando las necesidades del servicio público así lo requieran.
- IV.— Las cosas públicas y en especial las calles públicas no son apropiables ni aún a título de prescripción inmemorial
- V.— La Municipalidad de la Capital, puede disponer el levantamiento de los rieles sin indemnización alguna —fuera de lo que se justifique haber pagado por fracciones de terrones para rectificar la vía— si el Ferrocarril corre sobre calles entorpeciendo el tráfico y comprometiendo la vida de los transeúntes.

**La Intendencia Municipal de la Capital — sobre el levantamiento de rieles del F. C. del Oeste, en la calle Centro América.**

*Excmo. Señor:*

Los fundamentos que la Intendencia de Capital aduce para la supresión de los ramales del muelle de Catalinas a Once de Setiembre y de ésta al Riachuelo, son incontestables.

Una vía férrea de locomoción a vapor, no debe jamás correr sobre las calles de una ciudad, perjudicando el tráfico, comprometiendo la vida de los que la transitan y sacrificando el bienestar y libre acceso de sus vecinos.

Contra esos fundamentos que la Empresa del F. C. del Oeste no desconoce sólo opone sus derechos de propiedad del ferrocarril adquirido por compra a la Provincia de Buenos Aires.

La adquisición por compra es un hecho innegable constituido por documentos públicos.

Pero importa averiguar si la Provincia, al vender sus Ferrocarriles, incluyó en esa venta las calles públicas de la Capital Federal por las que corren algunas de sus vías.

Evidentemente no.

La propiedad de las vías públicas, no constituye un derecho privado ni entra en el dominio privado por ninguno de los medios legales de adquirir, puede concederse de su uso temporario, jamás su dominio.

La Provincia de Buenos Aires no ha vendido lo que no se puede vender, lo que tampoco ha declarado vender, lo que finalmente no estaba bajo su jurisdicción desde que la Capital con todo el territorio de su municipio, pasó a la administración federal por la ley de 21 de setiembre de 1880.

No teniendo la empresa la propiedad, sino el uso; ese uso puede ser suspendido cuando las necesidades del servicio público lo requieran.

Y en ese caso ha llegado, según la exposición de la Intendencia Municipal e informes de las respectivas Oficinas Técnicas

Toca al recto criterio de V. E. resolver, de acuerdo con ellos, el tiempo y medios más oportunos y menos perjudiciales para la renovación de ramales, solicitada en estas actuaciones. — Mayo 15 de 1892

Para apreciar el derecho a la ocupación a perpetuidad de la calle Ecuador, que esta empresa sostiene haber adquirido por la compra del Ferrocarril a la Provincia de Buenos Aires, sería necesario tener a la vista la escritura de compra y los antecedentes relativos a la primera ocupación e instalación de los rieles sobre esa vía, por la administración constructora. Lo primero depende de la Empresa, lo segundo, del P. E. de la Provincia de Buenos Aires en cuyo poder deben existir los antecedentes de construcción del Ferrocarril.

Ruego a V. E. se sirva se agregue la escritura y se traigan *ad effectum videndi* aquellos antecedentes, solicitándolos por oficio del Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, octubre 29 de 1892.

*Excmo. Señor:*

La discusión promovida y sostenida con tanto brillo como ilustración por la Empresa del Ferrocarril del Oeste, arranca de una

báse fundamental equivocada: la propiedad de la calle Centro América, que el Ferrocarril se atribuye, en virtud de la compra al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Si la venta hubiera incluido expresamente la vía pública sobre que corre el ramal de las Catalinas, y esa vía pública fuese susceptible de apropiación en pleno dominio, las garantías constitucionales invocadas por la empresa cesionaria, serían de incontrovertible aplicación, y la jurisprudencia, lo mismo de la Suprema Corte Argentina, que los Jueces y Tribunales de los Estados Unidos de la América Septentrional, cuya autoridad, con razón se encomia, no harían sino corroborar una verdad latente e incontestable, de que da testimonio el art. 17 de nuestro Código fundamental en esta fórmula concisa: “La propiedad es inviolable”.

Pero no en vano he solicitado, por sensible que me fuera demostrar la solución urgente de este reclamo, las diligencias de fs. 70 y 53 del expediente agregado.

Ellas han sacado de los archivos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y exhibido ante V. E. antecedentes, inventarios y escrituras que demuestran que jamás la Provincia de Buenos Aires enajenó al Ferrocarril del Oeste, las propiedades de la vía pública “Calle Centro América” que recorre longitudinalmente el ramal en cuestión; jamás la ley que autorizó la construcción de ese ramal para la Provincia le atribuyó propiedad sobre la vía; jamás la Provincia al ceder el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires para Capital de la República, se reservó la propiedad del terreno que constituye la vía pública, jamás tampoco incluyó esa vía pública de la Ciudad Metropolitana, en la enagenación y transferencia del dominio de sus ferrocarriles.

Demostrados estos antecedentes con los documentos que paso a desenvolver en presencia de V. E. quedará evidenciado el derecho que asiste a la autoridad pública para disponer el levantamiento de los rieles.

El ramal en cuestión toma origen en un proyecto del Directorio del Ferrocarril del Oeste, que adoptado por el P. E. de la Provincia de Buenos Aires en 25 de octubre de 1867, dió origen a la ley Provincial que autorizó su construcción en 21 de junio de 1869.

Ni en la comunicación del Directorio, ni en el mensaje del Ejecutivo, ni en la ley concerniente, se refiere a la adquisición en pro-

propiedad del terreno para la vía. Todos los documentos de referencia expresan solamente "que el P. E. invertirá la suma de 3.000.000 en la construcción de un ramal que arranque del 11 de Setiembre y llegue al puerto de las Catalinas."

Verificada la traza, se la hace recorrer una parte de la calle Centro América, es verdad; pero este hecho de carácter puramente administrativo no altera la propiedad pública, *el uso público* ese dominio comunal e individualmente inapropiable que es de esencia en los casos destinados al uso permanente de la comunidad.

Sin una ley especial que declaren de propiedad del ramal autorizado, la parte de la calle ocupada por sus rieles, el Ferrocarril no pudo invocar propiedad y si sólo un uso eventual de la vía pública por tiempo indeterminado. La indeterminación en materia administrativa, no crea derechos a perpetuidad, que son de esencia del dominio pleno. Deja a la autoridad concesionaria en libertad de reprimir o restringir el uso acordado, cuando las necesidades del servicio público a que están destinadas lo requieran. Porque las cosas públicas y en especial las vías públicas, no son apropiables ni aún a título de prescripción inmemorial. Desde la ley 7, título 29 de la partida 3ª hasta nuestro Código Civil en su art. 3952, viene repitiéndose una prescripción negativa uniforme al respeto y esa prescripción de nuestra legislación antigua y moderna tiene fundamentos incontestables en la doctrina sostenida por todos los tratadistas de derecho administrativo. El principio de la inapropiabilidad e imprescriptibilidad de las cosas destinadas al uso público, constituye hoy un axioma tan reconocido como universal.

Siendo evidente e incontestable la preexistencia de la vía pública que no fué suprimida por la autoridad municipal de cuyo régimen dependía y que tampoco la ley de autorización del ramal acordó su supresión o enajenación en favor de la línea férrea, el hecho de la ocupación no crea sino derechos de uso y posesión, sujetos a las determinaciones administrativas.

Tal era la situación de hecho creada al Ferrocarril del Oeste por la Provincia misma constructora, cuando la ley de cesión del municipio de la ciudad de Buenos Aires, para Capital de la República, fijó en 21 de setiembre de 1880, los derechos adquiridos por la Nación y los expresamente reservados para la Provincia.

El art. 4º de esa ley prescribe a este último respecto "que la

Provincia mantendrá igualmente la administración y propiedad de sus Ferrocarriles y Telégrafos, aunque empiece su arranque en el municipio de la ciudad, conservando asimismo la propiedad de los demás bienes que tuviera en él.

La administración y propiedad de un Ferrocarril y Telégrafos no ha sido discutida ni contestada; la propiedad de los demás bienes que tuviese la provincia en el Municipio Federal tampoco. Pero ni puede pretenderse que la calle Centro América, quedase por esa ley en el dominio y administración de la Provincia como parte accesorio de sus Ferrocarriles y Telégrafos, ni menos que esa calle pública quedase en su dominio, como *uno de los bienes de su propiedad reservada*.

La ley de federalización de 1880 nada ha establecido que pudiera cambiar el carácter esencialmente inapropiable de la vía pública. Sus términos generales, la interpretación doctrinaria por razón de la materia y el criterio con que ha sido aplicada por ambas partes, limitan su mandato a lo expresado: Ferrocarriles, Telégrafos y otros bienes.

No es lógico ni jurídicamente posible deducir de esta ley, la conservación por parte del Ferrocarril de la Provincia de un derecho que por otra parte, he demostrado no tuvo jamás sobre dominio o uso perpetuo de la calle Centro América con el ramal a Catalinas. Esa ley no justifica, pues, en ninguna de sus prescripciones la propiedad que el Ferrocarril invoca.

Las leyes actas y documentos producidos con ocasión de la venta de los Ferrocarriles demuestran que la provincia de Buenos Aires, así lo ha entendido también.

En efecto, la ley sancionada por su legislatura en 23 de Setiembre de 1889 anuncia en términos generales, la venta por licitación, de las líneas y empresas de los Ferrocarriles de la Provincia, con todos sus terrenos, vías, estaciones, talleres, etc., etc., y el decreto del P. E. de diciembre 16 del mismo año, que anunció la licitación prescribió por su artículo 2º que la entrega de los ferrocarriles del Estado, se efectuara por la Dirección General de Ferrocarriles, *con sujeción al inventario practicado* por la Comisión de Contadores aprobado por decreto de la misma fecha (actas y testimonios a fs. 23).

Celebrado el contrato con sujeción a los antecedentes relaciona-

dos, el P. E. otorga escritura pública de venta según el testimonio de fs. 40, en el que transfiere la propiedad y dominio de todas las pertenencias y declarando, al mismo tiempo, que los terrenos comprendidos en este contrato, son los que figura en los estados levantados por la comisión de contadores, que practicó los inventarios y que se agregan, como parte integrante de la escritura.

Era muy importante estudiar minuciosamente esos estados, y por ello pedí a V. E. la agregación que en testimonio corre de fs. 40 en adelante.

En este testimonio se refiere la transferencia de tres diversas categorías de terrenos ocupados por los Ferrocarriles vendidos, a saber:

1º) Terrenos sobre los que la Provincia tiene derecho de propiedad y absoluto dominio.

2º) Terrenos sobre los que la Provincia carece de propiedad y quedan sujetos a expropiación.

3º) Terrenos sobre los que la Provincia sólo tiene derechos de posesión y no garantiza la evicción de la propiedad.

He estudiado y analizado en detalle, todos los terrenos comprendidos en las tres divisiones mencionadas.

Ninguna de ellas comprende los terrenos ocupados por el ramal en cuestión, sobre la calle Centro América.

Dudoso sobre mi propio estudio, pedí a V. E. dispusiera un informe técnico al respecto.

Dispuesto por V. E. el expediente, volvió al efecto a la Provincia de Buenos Aires y puedo concluir mi dictamen con el texto expreso de la Contaduría General de fs. 55 vta. que afirma "*En el inventario del ramal a Catalinas no se ha incluido la calle Centro América ni terreno alguno*". Es evidente, pues, que la Provincia que contrató la venta, otorgó, la escritura e hizo entrega con sujeción al detalladísimo inventario que su Contaduría practicó al efecto, no incluyó el terreno de los ramales, ni como propiedad escriturada, ni como un bien suyo comprendido en ninguna de las tres categorías determinadas en los estados levantados expresamente, para fijar el valor de la entrega.

Resulta entonces que el Ferrocarril no había adquirido propiedad, por el hecho de autorizarse la construcción de sus ramales;



qué no invocó ni reservó tal propiedad, al ceder el municipio para Capital Federal que no inventarió ni enagenó propiedad alguna a su respecto; y que la mera ocupación, no crea a la empresa derechos perpetuos, cuando se trata de vías públicas imprescriptibles, según leyes vigentes.

Opino en consecuencia, que V. E. puede disponer el levantamiento de los rieles *sin indemnización* alguna, fuera de lo que la compañía pudiera justificar haber pagado por alguna fracción de terreno, para rectificar la vía; y que la necesidad de esa medida, solicitada por las administraciones a cuyo cargo está la defensa de la seguridad, dentro de los límites del municipio, se impone de una manera ineludible, ante los progresos de su vecindario y los reclamos unánimes de la opinión. Mayo 27 de 1893.

*De acuerdo con el precedente dictamen, el P. E., en Junio 22 de 1893, ha ordenado el levantamiento de esa vía.*

=====

El acuerdo de 1890, según el cual, el Gobierno Nacional, no seguía ningún juicio contra los revolucionarios, por actos propios de la revolución no implica un pacto de indemnidad para cubrir delitos comunes, cometidos por los individuos en armas. La responsabilidad en tal caso, no recae en la autoridad, sino en los particulares que resulten autores o cómplices (art. 231, Cód. Penal). El P. E. no puede acordar una indemnización fundándose en razones puramente equitativas, pues carece de facultad para ello y de los fondos necesarios, que sólo el Congreso puede al efecto votar.

**El Dr. José M. Astigueta — sobre violación de domicilio, robo, etc.  
por las fuerzas revolucionarias de Julio de 1890.**

*Excmo. Señor:*

La violación de domicilio, el robo, el saqueo, el incendio de la propiedad privada son delitos comunes cuyo juzgamiento y castigo caen bajo la jurisdicción y penalidad impuestas por los Códigos en lo Criminal.

Cuando la capitulación de las fuerzas revolucionarias, se acordó

por el Gobierno Nacional, que no se seguiría ningún juicio ni procedimiento por su conducta a los revolucionarios, ya sean militares o particulares, se refirió a los actos propios de la revolución, a los hechos punibles que la caracterizan con arreglo a las leyes, a las responsabilidades en fin, contraídas por sus autores respecto de la vindicta pública, de la autoridad Nacional y de la propiedad y bienes fiscales.

Pero ni la voluntad ni el Poder Constitucional del Gobierno de la Nación, fueron, ni pudieron ir en la Capitulación aceptada, hasta cubrir un pacto de indemnidad los delitos contra el derecho privado: cuando esos delitos afectan la propiedad garantida por la Constitución y leyes, a todo habitante de la Nación Argentina.

La capitulación no ha amparado ni podido amparar esos delitos porque ellos caen bajo la acción independiente del Poder Judicial y porque la circunstancia de proceder de individuos en armas contra la autoridad Nacional no desvirtúa su carácter y responsabilidad. El art. 231 del Código Penal prescribe al respecto. “que los que cometen delitos comunes con motivo de la rebelión, motín o asonada, o con ocasión de ella, serán castigados con la pena que corresponde a esos delitos”.

Los gravísimos hechos de violación, robo e incendio, reclamados en la solicitud del Sr. Astigueta, no pueden responsabilizar a la autoridad con sujeción a ninguna ley ni doctrina, sino a los particulares que resultaren sus autores o cómplices.

En cuanto a una indemnización puramente equitativa, no creo a V. E. autorizado para acordarla. El Poder Ejecutivo sólo procede con arreglo a las leyes y V. E. carece de su autorización y de los fondos que sólo puede votar al efecto el H. Congreso. Sirvase V. E. así declararlo, pudiendo no obstante si en su elevado criterio lo juzgase oportuno pasar la solicitud del Sr. Astigueta al Poder Legislativo, a los efectos por él solicitados. — Mayo de 1892.

*Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Mayo 19 de 1894.*

=====

Las reclamaciones contra un cónsul argentino, por actos realizados en ejercicio de sus funciones oficiales, deben plantearse ante la Cancillería del mismo Consulado —art. 30 del Reglamento Consular de 6 de noviembre de 1862— y no ante las autoridades de la Nación, ante las cuales se encuentra acreditado el Cónsul.

**Negativa del Consulado General en la Asunción, a legalizar una protesta contra los actos de esa Oficina**

*Excmo. Señor:*

El proceder del Sr. Cónsul Argentino en el Paraguay, desestimando la protesta del capitán del vapor Curuzú-Chali, es arreglado. Un Cónsul, por los actos en ejercicio de sus funciones oficiales, sólo responde ante su Gobierno. Si el capitán se creyó agraviado con la multa impuesta según las ordenanzas consulares, no ha debido recurrir a protestar ante autoridad extraña, sino ante la Cancillería del mismo Consulado como expresamente lo determina el artículo 30 del Reglamento Consular de 6 de noviembre de 1862.

Opino en consecuencia que la aprobación de este proceder se impone en el caso, mucho más, si, como lo expresa la precedente nota del Señor Ministro Argentino en el Paraguay, ella tiene precedentes en resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, dictadas en diversos casos análogos. — Mayo 24 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Mayo 31 de 1892.*

=====

Habiendo duda acerca de la nacionalidad de los procesados, corresponde que el P. E. pida la extradición si resulta que los asilados en Francia no son franceses, o el juzgamiento y castigo por las autoridades de aquella Nación, en caso contrario.

**Caso de extradición de Juan Alfonso Heroux y Adela Bellon — por asesinato en la persona de Blanche de Cantillac.**

*Excmo. Señor:*

Todos los requisitos legales para una solicitud de extradición han sido cumplidos en estas actuaciones.

Hay duda sobre la nacionalidad de los procesados, pero las mayores probabilidades resultan a favor de la nacionalidad francesa, y en ese país aparecen asilados.

No pudiendo V. E. en tal caso ofrecer la reciprocidad según el artículo 3º inciso 1º de la ley de extradición de 1885, correspondería que V. E. autorizara la acción diplomática, al objeto de obtener bajo promesa de reciprocidad, la extradición, si los asilados en Francia no son franceses, o el juzgamiento y castigo por la autoridad de aquellos tribunales, si resultasen ciudadanos. (Artículo 1º y 5º Ley de Extradición). — Junio 4 de 1892.

*Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Junio 20 de 1892.*

=====

Contra una resolución de la Administración de la Aduana, recaída en una causa por diferencias de calidad en la manifestación que ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia, procede el recurso de reconsideración.

El procedimiento legislado para el recurso de reposición, en el Cód. de procedimientos para la Capital y la ley de 14 de Septiembre de 1863, puede aplicarse en lo administrativo, con respecto a la clasificación de mercaderías por parte de la Aduana.

**A. Franzoni y Cía. — sobre recurso de apelación por diferencia de calidad en una manifestación.**

*Excmo. Señor:*

Como un antecedente indispensable para conocer la importancia y alcance jurídico de las cuestiones resueltas, necesitaría tener a la vista los autos, como ellos son ofrecidos ahora espontáneamente a V. E., por el Procurador Fiscal a fs. 7, no obstante la oposición que refiere el oficio del Juez Federal, pido a V. E. se sirva pedirlos *ad effectum videndi* y disponer que corran con la vista conferida. — Junio 6 de 1892.

=====

*Excmo. Señor:*

Los autos traídos, confirman lo que ya expresaban las constancias de las actuaciones corrientes, que la gestión de Franzoni, ha

sido fallada por sentencia de la Suprema Corte confirmatoria de la Administración de Aduana que hay al respecto cosa juzgada, y no existe Poder Constitucional que pueda modificarla ni impedir su ejecución.

Preocupándome entonces de los puntos que determinaron preferentemente la consulta de V. E. de fs. 9 opino:

1º — Que aún cuando no existe regla de procedimiento especial en lo contencioso administrativo; debiendo la administración de Aduana proceder a la resolución de los asuntos de tal carácter administrativamente por escrito, y a continuación del sumario levantado según el art. 1054 de sus ordenanzas procede el recurso de reconsideración. Es éste un recurso que se da por las leyes generales de procedimientos en todos los juicios contra todos aquellos autos que causen gravamen a las partes, con mayor razón debería acordarse entonces a los agraviados por resolución de la Aduana en lo que se refiere a la calificación de mercaderías, por cuanto siendo esa resolución inapelable según la ordenanza y declaraciones de la Suprema Corte, las partes quedan sin recurso alguno contra posibles errores de hecho, que deben y pueden encontrar un camino abierto a la enmienda en la revocación o reposición de una clasificación equivocada.

2º — Tanto la ley de Procedimientos para los Tribunales de la Capital, como la de Procedimientos en los Tribunales Nacionales, de 14 de Setiembre de 1863, han fijado en títulos especiales, el del recurso de reposición.

Debe interponerse dentro del tercer día de notificada la resolución, ante el mismo Juez que la dictó; y éste con un solo traslado a la contraparte, que es, en el caso, el representante del fisco, decidirá en el punto de la reposición, sin más trámite.

Opino que este procedimiento podría aplicarse en lo administrativo respecto a la clasificación inapelable de las mercaderías con mayor justicia cuando esa clasificación se hace en las actuaciones del sumario y sin audiencia del interesado, cuyos derechos pueden, sin embargo, ser gravemente lesionados por un error posible de hecho. — Junio 30 de 1892.

*Ministerio de Hacienda. — Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Agosto 4 de 1892.*

=====

La facultad acordada a los Ministros extranjeros por el art. 2º del Decreto de 11 de octubre de 1872, de dirigir directamente a los Tribunales de Justicia, los exhortos para su diligenciamiento, siendo de carácter potestativa, no excluye el que dicho diligenciamiento se lleve a cabo por la vía diplomática. Dirigido el exhorto por esta vía directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y por este Departamento al Superior Tribunal que corresponda, el envío mismo, implica el reconocimiento de la autenticidad de las firmas que suscriben el exhorto, correspondientes a autoridades del país requirente, no siendo necesario en tal caso un certificado de autenticidad por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.

### **Diligenciamiento de un exhorto expedido por el Juez Letrado de la Florida (República Oriental).**

*Excmo. Señor:*

Si el exhorto remitido por el Señor Ministro de la República Oriental del Uruguay tuviese las formalidades justificativas, de su autenticidad, nada sería más práctico que pasarlo inmediatamente al presidente del Superior Tribunal de Mendoza para su diligenciamiento.

Pero si es exacto, como debo creerlo, en virtud de lo expuesto por el Procurador Fiscal de la Provincia de Mendoza en su precedente vista, que el exhorto carece de los requisitos indispensables para su cumplimiento por parte de los Tribunales del país, lo que correspondería es devolver a la autoridad de que procede, para que llenados los requisitos pueda dirigirse en legal forma directamente al Juez o Tribunal competente, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 2º del decreto de 20 de Mayo de 1885. — Setiembre 16 de 1892.

*Excmo. Señor:*

La autenticación de las firmas de los Jueces inferiores por el Superior Tribunal del país requirente ha sido en nuestra legislación formalmente requerida (Ley de 28 de agosto de 1863 y decreto de 20 de marzo de 1885).

La creo también procedente en el caso, una vez que, dada la multiplicidad de funcionarios de ordne inferior y su frecuente cambio en las administraciones públicas, no es posible que el Ministro

Residente en país extranjero, o su Agente Consular pueda conocerles; de aquí la necesidad de suplir la falta de un conocimiento personal con la autenticación del Tribunal Superior, Jefe de la Administración Judicial; excepto los casos como el precedente de la Legación de Italia, en que el exhorto procede directamente de la Corte de Apelaciones.

Pero llenada esa formalidad, no justifican la exigencia de un certificado de autenticidad, por parte del Ministro de Relaciones Exteriores, ni la ley expresa, ni conveniencia alguna de orden público. Si el exhorto es directamente dirigido por ese Ministerio, en virtud de requisición diplomática, es perfectamente admisible, pues, la facultad acordada a los señores Ministros Extranjeros por el Art. 2º del decreto de 11 de octubre de 1872, de dirigirlos por sí mismos a los Presidentes de los Tribunales de Justicia, siendo potestativa, no excluye la vía diplomática. Y dirigido el exhorto por esa vía directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por ese departamento, al Superior Tribunal que debe darle curso, el envío mismo implica el reconocimiento de autenticidad de las firmas del país requirente. La alta respetabilidad de la vía diplomática, suple entonces con ventaja aquel requisito de trámite, como fué declarado por el Señor Ministro de Relaciones Exteriores, en gestión análoga de la Legación de Italia acompañada por orden de V. E. a estas actuaciones.

En tal caso, el envío del exhorto al Gobernador de una Provincia, no importa atribuirle funciones judiciales, como equivocadamente ha deducido de ese acto el Señor Fiscal de la Provincia de Mendoza, sino la elección de un medio de comunicación previsto por el Art. 110 de la Constitución Nacional a fin de que por intermedio del P. E. llegue al Superior Tribunal de Justicia y por el de éste, al Sr. Juez requerido.

Si V. E. creyere aceptables los propósitos de esta vista, correspondería en el caso:

1º — Que el exhorto del Señor Juez del Uruguay, sea devuelto a S. E. el Señor Ministro Plenipotenciario de esa República, en solicitud de la autenticación de la firma de aquél por el Superior Tribunal de Justicia.

2º — Que así formalizado se dirija de nuevo al Excmo. Señor Gobernador de la Provincia, o al Señor Presidente del Superior Tri-

bunal de Justicia de Mendoza, para que se le de la dirección conducente a su explotación. — Noviembre 5 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre de 1892.*

=====

El P. E. tiene facultad para otorgar carácter nacional a una vía férrea perteneciente a una empresa privada, atento a la naturaleza de los servicios, que dicho ferrocarril presta.

**La Empresa Depósito y Muelle de las Catalinas — pide se le reconozcan oficialmente sus vías férreas al puerto, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier ferrocarril.**

*Excmo. Señor:*

La vía férrea del Muelle de Catalinas no puede decirse de un uso privado, puesto que como lo expresa su concesión y lo informa la Inspección de Ferrocarriles Nacionales, tiene por objeto poner en comunicación los depósitos con los Muelles y Puerto, está empalmada con líneas importantes de la República, como el Central Argentino y Ensenada y transporte carga perteneciente al público.

Con tales antecedentes podría legítimamente aspirar a las prerrogativas de los Ferrocarriles Nacionales, sin que por ello esas prerrogativas puedan invocarse en favor de vías de carácter <sup>y</sup> uso puramente privado.

La ley de 24 de Noviembre de 1891, no ha requerido otras condiciones al efecto, que las establecidas en el art. 3º y cuyo inc. 2º comprende expresamente los ferrocarriles autorizados por la Nación. No pienso que esa autorización debe indispensablemente proceder del Poder Legislativo porque la Nación, en su entidad jurídica, puede ser representada respectivamente según el caso por cualquiera de los Poderes de la Constitución. Así, si el Poder Legislativo puede ser indispensable cuando se trata de garantías o subvenciones, el del Ejecutivo procede, cuando se trata de una concesión de carácter administrativo, precaria y sin subvención alguna.

El reconocimiento del carácter de Nacional no alteraría ni modificaría ninguna de las condiciones expresas de la concesión — la vía férrea de las Catalinas entraría, pues, con todas las cláusulas



incorporadas en el convenio de concesión, a participar de las ventajas y responsabilidades de los Ferrocarriles Nacionales.

Si a ello no se opone ni la ley general y ninguna otra, si en ello se consultan verdaderas conveniencias públicas como lo reconoce la Inspección, si la misma división de fiscalización y responsabilidad consulta el mejor servicio público, no puedo menos que concluir adhiriendo a la opinión del Señor Procurador del Tesoro, aceptando la nacionalización de esta vía, en la forma expresada en su dictamen precedente. — Setiembre 22 de 1892.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre ' de 1892.*

=====

Un decreto que exonera de pago a las multas no cobradas, no es aplicable a los casos en que las multas han sido pagadas con anterioridad.

**D. Julio B. Velar** — pide la devolución del importe de una multa que le impuso la Comisión de Obras de Salubridad por infracción a sus reglamentos.

*Excmo. Señor:*

El solicitante pagó la multa por infracción a los decretos sobre ejecución de planos y cloacas con sujeción a disposiciones terminantes y expresas.

El decreto posterior exoneratorio de multas no cobradas, no comprendió indudablemente a los que ya las habían pagado, mucho más cuando, como lo expresan los informes de fs. 2 y 3 vta., estaban a su respecto vencidos nuevos términos de prórroga, sin presentarse los planos requeridos. Esta es la legalidad estricta, como lo expresa el Sr. Procurador del Tesoro, sin que por ello V. E. esté inhibido de proceder equitativamente como lo indica la Contaduría, en un punto regido por disposiciones meramente administrativas. — Setiembre 27 de 1892.

*Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 24 de 1892.*

=====

No implica menoscabo al ejercicio del Patronato Nacional, el que el P. E. en lugar de efectuar nombramientos de Vicarios limite su acción a la sola aprobación de dichos nombramientos, realizados con anterioridad por un Obispo

### Sobre nombramientos hechos por el Ilmo. Obispo de Salta.

*Excmo. Señor:*

Los derechos del Patronato Nacional, que con tanto celo defendieron los Monarcas Españoles y los Gobiernos Patrios que les sucedieron en la soberanía de la República, desde nuestra emancipación, fueron expresamente atribuidos al P. E. por la Constitución y leyes nacionales, y constantemente mantenidos por V. E.

El juramento prestado por el Ilmo. Obispo de Salta, al tomar posesión de su cargo, en virtud del pase concedido por V. E. a la Bula de su institución, lo ha reconocido también.

En ejercicio de sus prerrogativas, V. E. ha concurrido a la provisión de las vacantes ocurridas, unas veces designando de *motu proprio* dignidades del Cabildo Metropolitano, otras, a indicación y pedido de los Ilmos. Obispos Diocesanos como puede verse en las páginas 393 y 400 de la Memoria del Ministro de Justicia y Culto de 1884, en la página 183 de la Memoria de 1881 y en la 462 de la Memoria de 1892.

Y cuando algún Prelado Diocesano ha omitido la presentación en forma, como en el caso de Gobernador del Obispado de Salta nombrando un Vicario de Oran, V. E. tomando ese nombramiento como una mera designación, ha acordado su nombramiento, con sujeción a los términos del decreto expedido en 9 de Febrero del corriente año.

Aceptando la comunicación del Ilmo. Obispo de Salta, contenida en su nota precedente en el mismo carácter con que lo han sido de otras análogas, como una designación atendible, dado el mejor conocimiento que el Jefe de aquella Iglesia debe tener de las personas agraciadas, opino que V. E. podría acordar su nombramiento. — Setiembre 29 de 1893.

*Excmo. Señor:*

La cuestión traída al acuerdo de V. E. por S. S. el Ilmo. Obispo de Salta, no es nueva; viene preocupando la atención de Gobiernos

y Prelados, desde épocas remotas y preciso es reconocerlo, no ha encontrado solución uniforme, ni en la legislación, ni en la doctrina, ni en las prácticas administrativas.

El art. 86 de la Constitución Nacional al determinar las atribuciones del Poder Ejecutivo, prescribe en su inciso 8º “que ejerce los derechos del Patronato Nacional, en la presentación de Obispos para las Iglesias Catedrales, a propuesta en terna del Senado”. El art. 67, en su inciso 19 “difiere al Congreso aprobar los concordatos con la silla Apostólica y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la Nación”. Pero ni en la ley fundamental ni en ninguna otra patria, se ha fijado todavía la extensión ni el límite de aquel derecho, en lo relativo a la provisión de las demás investiduras, cargos y dignidades de la Iglesia. Las mismas leyes españolas llamadas a suplir la deficiencia de aquellas, carecen de carácter uniforme, preocupándose más de consultas y competencias, que de soluciones amplias y generales.

En dictámen anterior expuse a V. E que en el ejercicio de aquella prerrogativa constitucional, el P. E. había concurrido siempre a la provisión de los cargos vacantes; unas veces designado de *motu proprio*, dignidades del Cabildo Metropolitano y otras a indicación y pedido de los Obispos Diocesanos.

En Enero de 1881 surgió una desinteligencia con el Prelado Metropolitano sobre nombramiento de Canónigos Honorarios. El P. E. sostenía su derecho a designar las personas que hubieran de ser nombradas por el Cabildo, y el Prelado Metropolitano el del Cabildo para desechar a los propuestos sin justificar ni expresar las razones inductivas de la denegatoria. Ese incidente terminó con el nombramiento, de acuerdo con el Cabildo, de los Canónigos designados para el cargo en decreto del Gobierno Nacional.

En 1884, sucedía diversamente. Por decreto de 18 de Febrero, el P. E. sin referencia a propuesta alguna, nombraba para la dignidad vacante de Canónigo del Coro y Cabildo Metropolitano.

Pero en Marzo del mismo año, con motivo de vacantes producidas en el Coro de la Catedral de Salta, el P. E. proveía aceptando las propuestas hechas por S. S. el Obispo de Salta.

Todavía recordaré un antecedente. El Venerable Cabildo de Salta, nombró Vicario Capitular de la Diócesis, según acta comunicada al Gobierno Nacional para su aprobación, de 8 de Mayo de

1885. Ese nombramiento fué comunicado por telégrafo para su aprobación que el Gobierno Nacional dictó por decreto de Junio 17 de mismo año.

Estas referencias y otras que omito por no ser difuso, demuestran que es un principio reconocido y aceptado, la doble intervención de las Potestades Temporal y Eclesiástica, en los nombramientos de dignidades de la Iglesia. Que esa doble intervención emana de una parte de los Cánones, y de la otra de la Constitución y Leyes Nacionales.

Que si bien en ellas no está determinada de una manera explícita, la forma y extensión de las atribuciones respectivas, la práctica, emanada de una cordial inteligencia del espíritu de aquellas disposiciones, ha relacionado respectivamente el derecho de presentación, con el de aprobación de la investidura.

Que si en lo fundamental y más altamente caracterizado, el Presidente de la República ejerce el derecho de Patronato en cuanto a la presentación de Obispos cuya investidura sólo incumbe a la Santa Sede, las dignidades y cargos inferiores con mayor razón debieran designarse por el P. E., ya nombrado, ya aprobando el nombramiento hecho mediante aquella condición, por los Prelados en ejercicio. La Real disposición de Carlos III comunicada a las Audiencias de Indias así lo disponía con estas palabras: “para que mereciendo nuestra real aprobación, se lleve a efecto el nombramiento de tal persona, y si hubiere legítimo reparo, se mande al Arzobispo u Obispo proponer o destinar otra persona”.

Tratándose de persona que ha de sustituir al Obispo investido en las funciones anexas a su cargo, debe merecer la confianza del que le propone y del que le constituye, y parece aplicable la doctrina de la citada Real Orden, que autoriza al Obispo para designar, y al Poder Secular para la aprobación.

Por ello, opino que no menoscabaría el Patronato atribuido a V. E. por la Constitución, y se armonizaría con las leyes y prácticas citadas, una declaración en el sentido solicitado en el segundo término de la nota del Ilmo. Sr. Obispo de Salta; esto es, que el decreto de V. E. de 25 de Octubre de 1893, a propósito de las designaciones hechas por el Prelado Diocesano, se entienda de aprobación de la designación de Vicario General del Obispado de Salta, y de las otras dignidades propuestas para el lleno de las vacantes enunciadas. — Agosto 7 de 1895

En un pedido de extradición fundado en el Tratado con la Rep. Oriental del Uruguay, debe darse cumplimiento a los arts. 6 y 7 del mismo, determinando al efecto con precisión, el delito en virtud del cual se reclama al reo, las circunstancias justificativas de su identidad y la transcripción por lo menos de la parte dispositiva de la sentencia que lo condena.

**El Gobierno de la Provincia de Mendoza — reclama la extradición de Julio Ortiz, fugado de la cárcel de esa Provincia.**

*E. cmo. Señor:*

El delito de envenenamiento, cometido por Julio Ortiz esá comprendido en el homicidio alevoso, reconocido como causa de extradición en el artículo 1º del Tratado con la República Oriental del Uruguay

Pero para que la extradición no encuentre tropiezo según sus artículos 6º y 7º, se requiere la exhibición de los documentos habilitantes para la aprehensión y enjuiciamiento en el país requerido.

Correspondería, entonces, que V. E. solicitase del Juez de Mendoza por intermedio del P. E. de la Provincia, una requisición en forma con determinación precisa del delito, de las circunstancias conducentes a justificar la identidad de la persona del reo requerido, y la transcripción por lo menos de la parte dispositiva de la sentencia que le condenó, a presidio indeterminado; hecho lo cual V. E. podrá requerir la extradición solicitada en la precedente gestión. — Octubre 10 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 18 de 1892.*

=====

Corresponde acordar el "pase" a un Breve Pontificio que nombra Obispo "in partibus infidelium", que no confiere jurisdicción alguna en la República. El Breve instituye al Obispo, en auxiliar del Titular de Córdoba, lo que no implica jurisdicción en ejercicio, sino el ser auxiliar para los actos pontificales y demás oficios de su ministerio.

**Los Presbíteros Dres. D. Uladislao Castellano y D. Rosendo de la Lastra — piden pase a los Breves que les instituyen, respectivamente, Obispos de Ankialo y Miletópolis.**

*Excmo. Señor:*

El Breve Pontificio, por el que S. S. León XII instituye Obispo de Ankialo al Sr. Dr. Castellano, Dean de la Iglesia de Córdoba, no afecta a las prerrogativas del Patronato atribuido a V. E. en el inciso 8º del artículo 86 de la Constitución Nacional. El se refiere a una Iglesia *in partibus infidelium*, sin vínculo jurídico con la Nacional. Aunque según el testimonio debidamente autorizado por el Notario Eclesiástico de Córdoba, cuya traducción por el Sr. Provisor y Vicario General del Arzobispado corre agregada, se constituye al Obispo instituido en auxiliar del Titular de Córdoba, esto no implica jurisdicción en ejercicio, sino como el Breve lo expresa, el ser auxiliar para los actos Pontificales y demás oficios de su ministerio.

No encuentro nada en oposición al ejercicio de los derechos del Patronato en la institución del Breve Pontificio exhibido, y opino que, con el acuerdo de la Suprema Corte, requerido por el art. 86, inciso 9º, de la Constitución Nacional, V. E. podrá acordar pase solicitado. — Noviembre 15 de 1892.

*Departamento de Culto. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 18 de 1892.*

=====

No procede la vía diplomática para reclamaciones en que sólo están en juego cuestiones privadas, susceptibles de sustanciarse por exhortos entre funcionarios judiciales.

**El Juzgado de Paz de la Sección 8ª — pide que a D. Alberto Deleste se le embargue la herencia de su padre.**

El 15 de Noviembre de 1892 el Juez de Paz de la Sección 8ª se presentó al Ministerio de Justicia a solicitud de parte interesada, en el juicio seguido por D. Desiré Niederhamer contra D. Alberto Deleste por cobro ejecutivo de pesos, para que recabase del de Relaciones Exteriores y éste por intermedio de la Legación de Francia, que le fuese embargado a D. Alberto Deleste la parte que le correspondía de la herencia de su padre que entonces poseía doña María Romaxeilles de Deleste residente en Francia.

Pasó a dictamen del señor Procurador General de la Nación, y este funcionario expresó lo siguiente:

*Eacmo. Señor:*

Actuaciones de interés privado y de carácter judicial están fuera de los propósitos de la vía diplomática. Ellas deben gestionarse de Juez a Juez, por medio de exhorto debidamente autorizado. Opino en consecuencia que V. E. no debe dar curso al precedente oficio. — Noviembre 25 de 1892.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 29 de 1892.*

=====

No corresponde dar curso a un pedido de arresto provisorio si se han omitido los requisitos exigidos por el art. 25 de la Ley de Extradición.

**Requisición de la captura de John Alex Rosenthal — a las autoridades de Santos (Brasil).**

El artículo 25 de la ley sobre extradición de criminales de Agosto 25 de 1885, autoriza el pedido de arresto provisorio siempre que se invoque la existencia de una sentencia u orden de prisión, y se determine con claridad la naturaleza del delito.

En el oficio anterior no se expresa *si hay ya sentencia o auto*

*de prisión dictado en el proceso con las formalidades legales; tampoco se expresan las circunstancias del hurto que pueda ser simple y no dar lugar a la extradición, que según el principio de nuestra ley y el derecho común, sólo se acuerda cuando la pena es mayor de un año de prisión*

Por ello opino, que sin que esas omisiones sean llenadas, V. E. no estaría en aptitud de dar curso al pedido de arresto provisorio.

En caso de solicitarse la extradición bajo promesa de reciprocidad, la requisición deberá dirigirse a nuestro Ministro Plenipotenciario en el Brasil, por tratarse de una gestión de carácter internacional cuya solución depende del Gobierno de los Estados Unidos de aquella República. — Noviembre 26 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 23 de 1892.*

=====

No corresponde se haga lugar al pedido de creación de un Registro de Contratos Públicos en Territorio Nacional, atento a lo que dispone la ley de 9 de noviembre de 1889 que modifica el art. 44 de la ley de Organización de los Territorios Nacionales.

**D. Ernesto Sánchez, Escribano Público — solicita abrir un Registro de Contratos Públicos en Posadas (Misiones)**

*Excmo. Señor:*

La ley de 9 de Noviembre de 1889 modificó el artículo 44 de la ley de Organización de los Territorios Nacionales, en esta forma: “Habrá un Escribano Secretario, encargado de actuar en los juicios que se sigan ante el Juez Letrado *el que será también de Registro*”.

Ante la prescripción de esta ley, posterior a la de organización de los Tribunales de la Capital y especial para los Escribanos de los Territorios Nacionales, la petición del Escribano Sánchez, es, a mi juicio, inadmisibile. Sólo podrá tener lugar, según la ley citada, en otro centro de población, distante de la Capital, siempre que, teniendo más de 5.000 habitantes, V. E. juzgara oportuno dotarla de Registro propio. — Noviembre 29 de 1892.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Diciembre 1º de 1892.*



La denuncia de un agente de un Banco, de carácter privado, no es requisito suficiente a los efectos del art. 25 de la ley de Extradición, y arts. 671 y 673 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal.

**La Legación del Brasil — solicita la prisión de Juan Bachard.**

*Excmo. Señor:*

Lo mismo el artículo 25 de la Ley Nacional sobre extradición de criminales, de 25 de agosto de 1885, que los artículos 671 y 673 del Código de Procedimientos en lo Criminal, requieren para el arresto provisorio de un prevenido, que la autoridad requiriente invoque la existencia de una sentencia o de una orden de prisión y que se determine con claridad la naturaleza del delito condenado o perseguido.

En el caso traído a V. E. por S. E. el Señor Ministro Plenipotenciario del Brasil, no se invocan aquellos antecedentes de carácter jurídico fehaciente, y sí sólo una denuncia del agente de un Banco, de carácter privado, e ineficaz por tal causa para substituir las declaraciones judiciales, autoritativas del arresto preventivo. Por ello opino que V. E. no estaría autorizado por la ley, en el caso, para acordar el solicitado arresto. — Noviembre 30 de 1892.

*Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con el dictaminado. — Noviembre 30 de 1892.*

=====

Reconociendo la Sociedad de Beneficencia de la Capital, por su reglamento aprobado por el P. E. en 15 de abril de 1895, que depende del Gobierno de la Nación, le incumbe al P. E. la atribución de autorizarla para la venta de una propiedad.

**La Sociedad de Beneficencia de la Capital — pide autorización para vender un terreno.**

*Excmo. Señor:*

La Sociedad de Beneficencia, a pesar de la grandeza de sus propósitos y de la labor fecunda que dedica a la administración de los establecimientos públicos a su cargo, no ha tenido hasta ahora una

constitución que determine eno claridad la extensión de sus atribuciones.

La misma sociedad en su reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo en 15 de Abril de 1885, reconoce por su artículo 1.<sup>o</sup> que depende del Gobierno de la Nación.

En tal caso, creo como el Señor Procurador del Tesoro, que es a V. E. que incumbe la atribución de autorizarla para la venta de la propiedad a que se refiere esta gestión; correspondiendo al elevado criterio de V. E. y al celo nunca desmentido de tan benéfica sociedad, el apredar la oportunidad y ventajas de esa venta, con relación a los propósitos de la donante. — Diciembre 26 de 1892.

*Departamento del Interior. Resolución de acuerdo con lo determinado. — Abril 20 de 1893.*

=====

No procede la reclamación oficial ni aún la recomendación oficial ante el Gobierno de otra Nación, cuando se pide para la defensa de intereses privados que se encuentran en litigio ante el tribunal extranjero y pendiente de resolución.

**Don Octavio J. Molina — pide la intervención del Gobierno Argentino para solucionar un asunto de deslinde que tiene en el Paraguay**

*Excmo. Señor:*

La solicitada del Sr. Molina, tendente “a obtener una atención preferente y con ocasión de sentar un precedente, necesario a los intereses argentinos, radicados en la vecina República del Paraguay”, ni determina un propósito concreto, ni procede en el caso de gestiones de carácter privado pendientes de la resolución de Tribunales Extranjeros.

Las copias acompañadas carecen de las legalizaciones indispensables para constituir su autenticidad y aún teniéndolas, ellas sólo demostrarían, que hubo un juicio de deslinde y otro ejecutivo, por cobro de arrendamientos, ambos concluídos por sentencia favorable al peticionante. Y si bien a fs. 1 se refiere a un nuevo deslinde, solicitado por el Fiscal del Paraguay, y a un comparendo, realizado

ante el Juzgado, no consta que el interesado haya empeñado la prosecución de trámites ulteriores, ni requerido despachos, ni promovido, en fin, los recursos conducentes a obtenerlo. En tal situación, opino que no es llegada la oportunidad de una reclamación oficial ni aún recomendación oficiosa y que V. E. deberá mandar devolver estas actuaciones al interesado, para que lleve adelante los procedimientos ante los Tribunales de la República del Paraguay por medio de los recursos legales. — Diciembre 26 de 1892.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Diciembre 30 de 1892.*

=====

- I. — La construcción de un Mercado Naval en terrenos del Puerto Madero, no excluye la jurisdicción de la Municipalidad de la Capital sobre dicho Mercado, en lo que se refiere a las medidas de seguridad e higiene que están a su cargo en todo el Municipio, con arreglo a su ley orgánica.
- II. — La fijación de un radio para el mercado, importa la concesión de un privilegio, y estos no pueden ser otorgados por el P. E. sino en los casos expresamente autorizados por ley.

**Los Sres. Kropff y Compañía — sobre la construcción de un mercado naval en el Puerto Madero.**

*Excmo. Señor:*

La circunstancia de ser ejecutable la obra proyectada en terrenos contiguos al Puerto de la Capital no excluye la jurisdicción de la Municipalidad de la Capital Federal, en cuanto a la seguridad e higiene que están a su cargo en todo el municipio, según la ley orgánica.

Esto en cuanto a su intervención legal, para la observación de las disposiciones relativas a la consecución de aquellos propósitos.

En cuanto al radio importa un privilegio y la concesión de privilegio fuera de los casos expresamente autorizados por ley, cae fuera de las atribuciones peculiares del P. E. De acuerdo al respecto, con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, opino que tal concesión, no es del resorte administrativo. — Enero de 1893.

No corresponde que el P. E. ordene al Cónsul en París que expida un certificado en el que conste que el Banco de Crédito Territorial y Agrícola de Santa Fe, está constituido con arreglo a las leyes de la República, por cuanto ello importaría para el P. E. el atribuirse una facultad revisora o declaratoria de actos provinciales, que lesionaría la autonomía que a las Provincias corresponde, en nuestro régimen federal.

**Expedición de un certificado por el Cónsul Argentino en París referente al Banco de Crédito Territorial y Agrícola de Santa Fe.**

*Excmo. Señor:*

El punto que V. E. se sive pasar a mi dictámen, ha sido ya resuelto de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro.

A mi juicio, ha sido bien resuelto. Los Estados Federales conservan todo el poder no delegado en la Nación, según la Constitución Nacional. Las leyes sancionadas por sus respectivas Legislaturas, como las instituciones que se dan por ellas, son actos legítimos de Administración, que emanando de un poder autonómico, producen todos los efectos legales.

Esta es la doctrina abstracta. Pero ni el P. E. ni el Judicial de la Nación, fuera del caso de demanda expresa sobre nulidad de un acto Legislativo, o de Administración Provincial, tienen el derecho de rever los actos de las Legislaturas Provinciales, ni conveniente, el de declarar o certificar la validez o nulidad constitucional de aquellos.

Esos actos llevan en sí la presunción de validez. Pero V. E. no puede certificarla, sin atribuirse una facultad revisora o declaratoria, que la Constitución no le acuerda, dada la independencia de las Provincias Argentinas, en todo lo que no han delegado expresamente en la Autoridad nacional. Por ello opino que V. E. debe mantener, en el caso, su resolución de fs. 11. — Febrero 27 de 1893.

*Departamento de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Marzo 6 de 1893.*

=====

El P. E. no tiene facultad para rectificar errores en las partidas del Registro de Estado C<sup>iv</sup>il; ello corresponde únicamente al Juez competente. Tiene facultad en cambio, para tomar las medidas administrativas que crea conveniente, contra el funcionario encargado de un Registro Civil.

### Inscripción en el Registro Civil.

*Excmo. Señor:*

Lo que especialmente afecta al derecho de la reclamante; la inscripción de su nieta en el Registro del Estado Civil de Martín García, como *ilegítima*, no puede ser rectificado por orden de V. E.

Los arts 22 y 23 de la ley sobre Registro del Estado Civil, atribuyen exclusivamente esa facultad al Juez competente. Es a él, que debe recurrir la peticionante con sujeción a lo dispuesto en los arts. 87 y 95 de la expresada ley.

En cuanto a lo demás expuesto contra el empleado encargado del Registro y sus procederes, es de tomarse en consideración. A V. E. toca pedir los informes y producir la resolución administrativa que mejor consulte el buen servicio y decoro de aquella repartición. Abril 12 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Agosto 22 de 1893.*

=====

I.— La incompatibilidad del cargo de Procurador Fiscal Federal con el de Diputado Provincial, no obstante no existir disposición que así lo declare, ni en la Constitución Nacional ni en las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Nación, se deduce del principio de la separación e independencia del Poder Judicial de la Nación y Legislativo de una Provincia.

II.— El Poder Ejecutivo no tiene facultad para declarar la incompatibilidad, ni tampoco la Suprema Corte, mientras no se le plantee la cuestión en forma de caso concreto.

**El Procurador Fiscal Nacional de Jujuy — consulta si existe incompatibilidad entre este cargo y el de Diputado Provincial.**

*Excmo. Señor:*

No conozco prescripción alguna de la Constitución Nacional, ni

de las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Nación, que prohíbe a los representantes fiscales el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. De la separación e independencia de los Poderes Judicial de la Nación y Legislativo de una Provincia, del conflicto que podría resultar de la sujeción del Fiscal en el orden judicial y la amplitud de garantías e inmunidades atribuídos a los miembros del Poder Legislativo según la Constitución de Jujuy, podría deducirse empero, sin violencia, la incompatibilidad en el ejercicio conjunto de ambos cargos.

Pero creo que V. E. no está habilitado para decidir el punto como atribución propia ni tampoco la Suprema Corte, mientras el caso no se lleve a su jurisdicción por alguno de los recursos legales que determinan su competencia. Opino por ello, que V. E. podría limitarse a hacerlo así saber al Sr. Fiscal consultante, a los efectos que viere convenir a su derecho. — Abril 13 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Abril 18 de 1893.*

=====

El edificio del Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, no es de propiedad municipal. Quedó bajo la jurisdicción de la Nación en virtud de lo preceptuado en el art. 2º de la ley de 21 de Septiembre de 1880.

### **Sobre propiedad del edificio del antiguo Cabildo.**

*Excmo. Señor:*

Sin desconocer la importancia de los títulos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, que se refiere la Contaduría Municipal a fs. 5, es un hecho que en el antiguo Cabildo fué erigida la audiencia pretorial del Virreynato, siendo desde entonces ocupado por los Tribunales de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y de la Capital Fedreal de la Nación Argentina.

Antes de abrir juicio sobre la importancia jurídica de esa ocupación, conviene averiguar qué títulos o antecedentes existe, entre los que se refiere la Contaduría General de la Nación que pidió y han debido pasarle, a fs. 4, o en el Archivo General, u otra repartición pública.

Sírvase V. E. disponer se agreguen los antecedentes que pudieran existir al respecto en las reparticiones citadas, y que fecho, corra vista. — Abril 25 de 1893.

*Excmo. Señor:*

El art. 2º de la ley de 21 de Setiembre de 1880, al fijar la Capital de la República en la Ciudad de Buenos Aires, declaró textualmente “que todos los establecimientos y edificios públicos situados en el municipio, quedarán bajo la jurisdicción de la Nación, sin que los municipales pierdan por esto su carácter”.

De esta declaración inicial de la reorganización del Poder Nacional en la antigua Capital metropolitana, surge esta cuestión; ¿el edificio erigido para Cabildo o Ayuntamiento, tenía un carácter esencialmente municipal?

Antecedentes históricos y legislativos conducen a una solución negativa. Tanto la antigua Audiencia Pretorial como los Tribunales de Justicia instalados en sustitución, tuvieron su asiento propio en el local denominado *Cabildo*. Este nombre no significaba Municipalidad; pues sabido es, que por las leyes españolas que le dieron régimen, el Cabildo o Ayuntamiento, se componía del Alcalde, Corregidores y Administradores; esto es, de los encargados de la justicia y de la Administración, y por ello la ley 15, tít. 6º Lib. 3º de la Recopilación Castellana, disponía que los Corregidores hicieran casa de consejo y cárcel donde no los hubiere; lo que se practicó sin duda en Buenos Aires, cuando en ella actuaron siempre y administraron la justicia, los Alcaldes, Regidores y hasta las Audiencias, y tuvieron allí la cárcel dependiente de su jurisdicción criminal.

Puede prescindirse del derecho antiguo y tradicionales peninsulares.

Derrocado el poder monárquico de España, la Asamblea Nacional asumió desde los primeros momentos de su instalación, la representación de la Soberanía Nacional.

Uno de sus actos fué la supresión de la audiencia pretorial, que funcionaba desde su segunda instalación en....., para dar forma a la denominada “Excmo. Cámara de Apelaciones” que continuó funcionando en su mismo local.

Y desde entonces como antes, las autoridades judiciales continuaron ocupando la casa de justicia, como es de pública notoriedad.

La disolución de los vínculos nacionales hizo pasar a la Provin-

cia aquellas jurisdicciones; la parte administrativa del antiguo Ayuntamiento o Cabildo pasó al P. E. de la Provincia, y la casa de justicia con su cárcel adyacente, continuó bajo la misma dependencia de los Tribunales.

Fué en esa situación que la ley de la Provincia, de 11 de Octubre de 1854, organizó la Municipalidad de Buenos Aires, y dotó a la Municipalidad creada, según su art. 43, de las casas y temporalidades del extinguido Cabildo; esto es, de las propiedades y rentas apropiables a un uso privado, y de las casas de la cuna, huérfanos y de todas las que estén alquiladas a nombre del Estado, *y no sean o estén apropiadas a su servicio.*

La regla era general, pero la excepción era explícita.

Si es verdad que la casa del antiguo Cabildo Metropolitano estaba al servicio del Estado ocupada por su Administración de Justicia, entraba de lleno en la excepción que dejo transcripta.

Y la Municipalidad así lo entendió, pues no entró en su posesión; y el P. E. de la Provincia continuó en esa posesión, gastando ingentes sumas en reparaciones, arreglos y construcciones valiosas, como las que bajo el gobierno del Dr. Tejedor la adaptaron para concentrar toda la administración de justicia y todas las Escribanías y Registros públicos.

La Municipalidad organizada en 1854, ni siquiera creyó tener el derecho ante las prescripciones de su ley orgánica, de instalarse en la casa de justicia.

Respetando esa destinación por la Soberanía Nacional y Provincial, desde tiempos tan remotos, se estableció y funcionó en la casa central y edificios propios.

Resulta que la casa del antiguo Cabildo no tenía carácter municipal, y que ella quedó bajo la jurisdicción de la Nación, según los términos prescriptivos de la ley de 21 de Setiembre de 1880.

Nada importa entonces que el solar en que fué construída, se destinase expresamente en la repartición de D. Juan de Garay, para casas del Cabildo, cuando el Cabildo lo formaban reparticiones de índole, en parte diversa, de la actual Municipalidad; cuando la Soberanía Nacional le dió un destino público diferente de aquél; cuando ese destino fué continuado bajo la administración provincial, y cuando, finalmente, la ley de Capital lo ha declarado en términos precisos.



Por ello opino que V. E. debería declarar que el Estado no debe alquilar alguno a la Municipalidad por la ocupación del edificio en cuestión. — Mayo 16 de 1894.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Mayo 23 de 1894.*

=====

Si la redacción de una Bula expedida por la Santa Sede, da lugar a observaciones por parte del Gobierno Argentino, esas observaciones sólo pueden ser objetadas por el Sumo Pontífice o un representante suyo debidamente autorizado (En el caso las observaciones fueron formuladas por el Arzobispo de Buenos Aires, de oficio y sin invocar representación alguna).

**Pase acordado a la Bula de institución del Obispo de Salta,  
Pbro. Dr. Pablo Padilla.**

*Excmo. Señor:*

La Bula Pontificia que traslada a S. S. el Illmo. Obispo de Pentacomia a la Iglesia Episcopal de Salta, reviste en su forma todos los caracteres de la autenticidad y en sus disposiciones no afecta los derechos del Patronato Nacional.

Las reservas que la Bula de S. S. consigna para la provisión de todas las iglesias sin que nadie haya podido y pueda intervenir en ello, no desconocen el ejercicio del Patronato, que especialmente consiste en la presentación del Obispo instituido.

La citada Bula, no se refiere, en verdad, a que la constancia de la vacante haya llegado a conocimiento de S. S. por comunicación del Patrono de la Iglesia Nacional, pero esa omisión ha sido salvada en la carta auténtica de S. S. León XIII al Presidente de la República Argentina, en la que, mencionando la recomendación hecha por su antecesor, del Pbro. Doctor Padilla, como digno de ser promovido a la silla Episcopal de Salta, S. S. declara que ha juzgado, después de considerarlo con madurez, *que se debía acceder a la opinión y deseo de él.*

Nada se opone, a mi juicio, a que V. E. previo el acuerdo de la Suprema Corte que prescribe el inciso 9 del art. 86 de la Constitución Nacional, conceda el pase a la Bula de institución del Señor

Doctor Padilla para el Obispado de Salta, debiendo en caso afirmativo, el Ilmo. Obispo instituido prestar juramento ante S. E. el Señor Ministro de Culto, con sujeción a la fórmula acordada para casos anteriores. — Junio 2 de 1893.

=====

Suprema Corte: En dictamen de fs. 8 expuse al P. E. los fundamentos de mi opinión sobre el pase de la Bula Pontificia que instituye a S. S. el Ilmo. Obispo de Pentacomía para la Diócesis de Salta. Reproduciendo ese dictamen ante V. E., concluyo que ningún obstáculo legal se opone a que V. E. preste su superior acuerdo al objeto expresado. — Junio 13 de 1893.

*Ercmo. Señor:*

Las observaciones que el Señor Arzobispo eleva a V. E. relativas a la nota dirigida a S. S. el Pontífice León XIII con motivo de la Bula de institución del Obispo de Salta, no proceden.

El Señor Arzobispo carece de atribuciones para representar a la Santa Sede al respecto.

Si la redacción de las Bulas expedidas por la Cancillería Romana da origen a observaciones de parte del Gobierno, esas observaciones pueden ser objetadas por el S. Pontífice o sus delegaciones especiales, pero nunca por el Prelado de una Iglesia, oficiosamente y a su propio nombre, y sin ejercer ni invocar representación alguna de la Suprema Autoridad Eclesiástica a que iban dirigidas.

Por otra parte, el Señor Arzobispo reconoce, aunque implícitamente, que el fundamento de las justas y repetidas exposiciones de V. E. al Pontificado, emanan del Patronato que V. E. tiene el deber de ejercer con sujeción al art. 86, inc. 8 de la Constitución Nacional; *y su desecho relativo a que se piense que debe ser reformada la Constitución*, no es de considerarse aisladamente; la reforma envuelve cuestiones complejas; debe subordinarse al juicio que V. E. y el H. Congreso formen después de maduro examen y ella debe diferirse a otra oportunidad. Entre tanto, la Constitución vigente debe cumplirse sin vacilación.

En mérito de estas consideraciones, opino que V. E. debiera limitar su resolución, por ahora, al archivo de la precedente nota

con sus antecedentes y a hacerlo saber al Señor Arzobispo Metro politano. — Mayo 2 de 1894.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con la dicta minado. — Mayo 8 de 1894.*

=====

I. — El P. E. no tiene facultad para ordenar la detención de sus empleados, ni de ningún ciudadano, ni aún por delitos contra el régimen administrativo, salvo el caso de ser sorprendido "in fraganti".

II. — Existiendo prueba o indicios de culpabilidad, corresponde que el P. E. pase los antecedentes al señor Jefe de Policía, para que este proceda a la detención de los inculcados de conformidad a la facultad que le confiere el art. 4º del Cód. de Procedimientos en lo Criminal y para que proceda según el art. 184 del mismo Código.

**El Ministerio de Hacienda, consulta si tiene atribuciones para detener a sus empleados complicados en desfalcos.**

*Excmo. Señor:*

El art. 18 de la Constitución, prescribe que ningún habitante de la Nación Argentina puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente, y el art. 20 de la ley sobre jurisdicción y competencia de la Justicia Nacional: "que cuando un "individuo se halle detenido o preso por una autoridad nacional, la "Corte Suprema o los Jueces de Sección, podrán a instancia del "preso, o de sus parientes o amigos, investigar sobre el origen de "la prisión, y en caso que ésta haya sido ordenada por autoridad "o persona que no esté facultad por la ley, mandará poner al preso "inmediatamente en libertad".

La ley de organización de los Tribunales de la Capital, atribuye a los Jueces Federales y del Crimen el conocimiento de las causas de defraudación de dineros fiscales, y el Código de Procedimientos en lo Criminal prescribe en su artículo 2º: "que nadie puede ser constituido en prisión preventiva *sin orden escrita de juez competente*".

Coordinando estas disposiciones fundamentales, deduzco que la requerida orden escrita de autoridad competente, no puede referirse

al Poder Ejecutivo, sino al Judicial, al que en la repartición de los poderes limitados de la Constitución, ha correspondido el de conocer de todo delito y aplicar el derecho penal.

Confirma este juicio la circunstancia de no existir ley alguna al respecto que atribuya al Poder Administrativo la facultad de proceder por sí a la prisión, la que, ni en los delitos nacionales de defraudación de rentas de aduanas, correos, impuestos internos, etc., etc., se haya desprendido esa facultad del conocimiento de los jueces federales, y la que en el mismo art. 20 de la ley 1863 citada, la investigación del caso de “habeas corpus” se atribuye al Poder Judicial, *respecto de las órdenes emanadas de las autoridades nacionales.*

Deduzco de tales antecedentes, que el Poder Ejecutivo carece en absoluto de facultades jurisdiccionales para ordenar la prisión, fuera del caso “in fraganti”, ni aun por delitos contra el régimen administrativo.

Pero el Jefe de Policía es autoridad competente para detener, no sólo a los delincuentes sorprendidos “in fraganti”, sino también “a aquellos contra quienes haya indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad”. Así lo dispone expresamente el art. 4º del Código de Procedimientos en lo Criminal. Y el art. 184, refiriéndose a las autoridades que pueden instruir el sumario o prevenir su instrucción, al especificar las atribuciones de los funcionarios de Policía, en los delitos públicos, prescribe por su inciso 4º “*proceder a la detención del presunto culpable*, en los casos mencionados en el art. 4º, esto es, cuando resultan indicios vehementes o semiplena prueba de culpabilidad.

Opino por todo ello que existiendo en el caso que motiva la consulta de V. E. prueba o indicios bastantes, V. E. podría pasar los antecedentes al Sr. Jefe de Policía, quien en mérito de ellas, procedería a la detención de los inculpadlos, y ampliando los antecedentes demostrativos de la culpabilidad, hasta donde fuera necesario, ponerlos con los detenidos, a la disposición del Sr. Juez que haya de conocer en la causa jurisdiccionalmente.

Es cuanto puedo exponer a V. E. dada la urgencia recomendada, en cumplimiento de lo solicitado en su nota precedente. — Julio 25 de 1893.

=====

Es equitativo que el P. E. haga extensivo a las hijas viudas, los beneficios de la ley de Pensiones Militares. La pensión en tal caso, debe correr desde el día que se acuerde y no desde el fallecimiento del causante.

**La Señora Eduviges Saravia de Falcón — solicita el pago de atrasos en la liquidación de su pensión**

*Excmo. Señor:*

La ley de Pensiones se refiere únicamente a las viudas e hijas solteras; cuando V. E. hace extensiva la pensión a la hija viuda, es interpretando equitativamente la ley.

Si dentro de esos términos expresos y estrictos, la pensión debe computarse desde el día del fallecimiento del causante, opino que tal derecho no corresponde a la gestionante, que ha obtenido de V. E. por un acto de interpretación equitativa el beneficio de sustituir en el goce de la pensión militar, siendo viuda, a sus hermanas solteras.

Por ello me adhiero al dictamen precedente del Señor Procurador del Tesoro. — Julio 25 de 1893.

*Departamento de Guerra. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Julio 27 de 1893.*

=====

Para que tenga lugar un procedimiento de revisión de un contrato concluido entre el P. E. y particulares, luego de transcurrido un largo tiempo (en el caso 6 años) a efectos de investigar si ha habido defraudación, es indispensable que resulte "prima facie" algún dolo o culpa imputable a los contratantes.

**El Banco de Santiago del Estero — en queja por el precio de la impresión de billetes.**

*Excmo. Señor:*

El contrato que el P. E. celebró en 14 de Noviembre de 1887, con los Sres. Bradbury, Wilkinson y Cía. de Londres, era un acto autorizado por ley del H. Congreso, y concluido con las formalidades exigidas por la ley de Contabilidad.

Para que después de seis años de terminado y consumado, pudieran iniciarse gestiones sobre su legalidad o acciones tendientes a

la averiguación y castigo de la defraudación que haya, pretendiéndose derivarla del precio elevado de los servicios contrados, sería indispensable que resultara *algún dolo o culpa* imputable a los contratantes.

Pero de la exposición del representante de la casa contratante, de los informes de la Caja de Conversión, de las referencias de los contratos y de la comparación de sus obligaciones, no sólo no resulta la existencia de hechos dolosos o culpables que pudieran autorizar un procedimiento de revisión, sino que esos informes, referencias y contratos, explicando satisfactoriamente la causa del alto precio pagado por la emisión de los Bancos garantidos, alejan la idea enunciada de una defraudación al erario.

Por ello, de acuerdo con el bien fundado dictamen del Sr. Procurador del Tesoro, adhiero a las conclusiones de fojas 26 vta. — Setiembre 11 de 1893.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 24 de 1893.*

=====

Repútese inconveniente la ampliación de funciones de la Escribanía de Marina, en el sentido de extender su actividad a la protocolización de todos los títulos de propiedad de la Armada y contratos de cualquier género que celebren los Jefes, Oficiales y Marineros.

**El Escribano General de Marina — pide la escrituración de todos los asuntos concernientes a ese ramo.**

*Excmo. Señor:*

Diversos artículos de los Códigos Civil y de Comercio, establecen y prescriben la escritura pública ante Escribano de Registro, como única forma para la validez de determinados actos de comercio y navegación.

A esas disposiciones debía ajustarse el Escribano de Marina, en lo relativo a los actos y contratos de que puede dar fe, dentro de la circunscripción marítima a que se limita el registro a su cargo.

Por ello, el reglamento dictado para la escribanía de marina, en 6 de Diciembre de 1883, dice textualmente en su art.3º, “que el escribano titular, tendrá a su cargo el otorgamiento de escrituras,

testimonios, protestas y demás instrumentos que hasta ahora ha tenido a su cargo, dentro del territorio de la Capital”.

Ampliar las atribuciones de ese registro, haciendo obligatorio su servicio para la multiplicidad de actos que indica el actual escribano en su solicitud precedente, no sólo contraría el espíritu de la legislación y la reglamentación de su oficina, imponiendo a las transacciones, gravámenes y gastos a que ninguna ley les obliga, sino que dificultaría, complicaría y demoraría los procedimientos, obligando a buscar en el centro común de un archivo voluminosísimo, antecedentes que están bien en las diversas reparticiones administrativas a que han sido adscriptos, según su género y especie.

Por ello, opino que no resulta conveniente la medida en la extensión y la generalidad con que la propone el escribano de marina. Si alguna adición aconsejara la práctica a las atribuciones que confiere al escribano el reglamento de 1893, en sus arts. 3º y 4º, habiendo ese reglamento sido formulado por la Prefectura Marítima, a esa repartición podrían pasarse estos antecedentes a informe, y si de ese informe pareciera necesaria o conveniente alguna ampliación de atribuciones, la Prefectura Marítima estaría en aptitud de expresar con mejor acopio de conocimientos prácticos, las bases de reforma para el reglamento vigente que ella proyectó, y V. E. mandó poner en práctica. — Setiembre 26 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 21 de 1893.*

=====

La autorización contenida en una Bula que instituye Obispo “in partibus infidelium”, según la cual el elegido queda facultado para auxiliar al Arzobispo de Buenos Aires en el ejercicio del culto, sin que pueda ejercer acto alguno episcopal sin el consentimiento del mismo Arzobispo, no implica acordar jurisdicción, sino simplemente facultad para recibirla del Arzobispo, dentro de las facultades que éste posee y ejerce con arreglo al Patronato y juramento prestado.

**Sobre institución de Obispo Titular de Tiberiópolis, en la persona del Canónigo Dr. Antonio Espinosa.**

*Excmo. Señor:*

La Bula de Su Santidad el Pontífice León XIII instituyendo

Obispo de Tiberiópolis al Vicario General del Arzobispado de Buenos Aires, Dr. Antonio Espinosa cuyo pase se pide al Alto Patronato de V. E., no afecta sus prerrogativas.

Esta Bula se refiere a una Iglesia extraña al territorio y jurisdicción de la Constitución y leyes Nacionales, exenta por consiguiente de todo vínculo jurídico con la autoridad de la República.

La dispensa que en ella se acuerda al Obispo instituido para continuar en el ejercicio de las prebendas de que goza en la Catedral Metropolitana, no modifica ni altera las atribuciones autorizadas por V. E. con anterioridad. ..

Si bien la Bula Pontificia faculta también al Obispo de Tiberiópolis, para que pueda auxiliar al Ilmo. Arzobispo Metropolitano, celebrando los Pontificados y ejerciendo los demás oficios Pastorales en la ciudad y Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires como Auxiliar de dicho Prelado, previene que no podrá ejercer acto alguno episcopal, sin el consentimiento del mismo Arzobispo. Tal autorización, limitada entonces al ejercicio de actos Pastorales o Pontificales en la ciudad y Arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, que el Sr. Arzobispo juzgue poder encargarle, está sujeta a las atribuciones del Metropolitano, las que posee y ejerce con sujeción a las prerrogativas del Patronato y en virtud del juramento prestado sobre su observancia. La autorización no implica atribuir jurisdicción sino simplemente facultad para recibirla del Metropolitano, dentro de la esfera de la que ejerce constitucionalmente.

No encuentro, por ello, que la Bula Pontificia presentada a V. E. contradiga las regalías del Patronato Nacional, que consagra el art. 86, inciso 8º de la Constitución; y opino que previo el acuerdo de la Suprema Corte, requerido en el inciso 9º del artículo constitucional referido, V. E. podría conceder el pase solicitado. — Setiembre 27 de 1893.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 11 de 1893.*

=====



No corresponde acordar protección consular a un ciudadano argentino naturalizado, si está radicado permanentemente fuera del país.

Sobre protección consular solicitada por el ciudadano  
D. Pedro Haas

*E. a. S. E.:*

Las leyes sobre naturalización de extranjeros, tienen por objeto atraer al suelo argentino el concurso de la inteligencia y brazos de aquellos, para la labor común.

Tanto la Constitución en su art. 20, como la ley sobre ciudadanía argentina, sancionada por el H. Congreso en octubre de 1869, han tomado como fundamento, para el reconocimiento de la naturalización, o al residencia por dos años consecutivos, o el matrimonio con mujer argentina, o el desempeño de empleos públicos u otros actos que suponen la estabilidad en el territorio, lo que constituye el *animus manendi*.

Se ve claramente en todo el contexto de la ley, que la República, al conceder la naturalización, se propone adquirir ciudadanos residentes en el país, aptos para el ejercicio de todas las industrias y aún de los derechos y cargos públicos. Por ello, todo extranjero que se naturalice en esta República, y va a establecer su residencia permanente fuera de ella, haciendo servir la carta de ciudadanía al objeto de adquirir privilegios para su persona y comercio en el extranjero, defrauda los propósitos de la ley, y viola las condiciones de residencia, de asimilación al país y de cooperación al ejercicio de los derechos y obligaciones que propenden al progreso de su población, de su industria y de su comercio. Violadas así las condiciones de la carta, deben cesar consiguientemente sus efectos.

Opino, en consecuencia, que V. E. podría autorizar el temperamento denegatorio de protección consular, enunciando en la precedente nota de S. E. el Ministro Plenipotenciario argentino en Alemania, respecto del súbdito rumano Haas, establecido con residencia permanente y comercio, en la Capital de la Turquía. — Octubre 5 de 1893.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 7 de 1893.*

=====

No procede la extradición, por un delito cometido fuera de la jurisdicción del país requirente, y por no invocarse además, sentencia u orden de prisión, ni tratado de extradición, ni la reciprocidad que en materia internacional puede suplir el tratado.

**La Legación de Francia — sobre arresto provisorio de  
Juan Bistague.**

*Ercmo. Señor:*

Según el art. 1º de la ley de extradición de 25 de agosto de 1885, el Gobierno argentino podrá entregar a los gobiernos extranjeros en condición de reciprocidad, a un individuo perseguido, acusado o condenado *por los tribunales de la Potencia requirente*.

Según el art. 25 de la misma ley, el arresto provisorio, que según el art. 27 puede ser solicitado por un Ministro Diplomático, requiere se invoque la existencia de *una sentencia u orden de prisión*.

En el caso referido por S. E. el Ministro Plenipotenciario de Francia, el delito que se atribuye a Bistague, se ha cometido en Chile, fuera, por ello de la jurisdicción de la Potencia requirente; no se invoca la existencia de una sentencia u orden de prisión, tampoco tratado de extradición, ni la reciprocidad que en materia internacional puede suplirle. Por ello opino, que V. E. no podría acordar, con sujeción a la ley de la materia, el arresto provisorio requerido en la precedente nota. — Octubre 23 de 1893.

*Ministerio de Relaciones Exteriores. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Octubre 23 de 1893.*

=====

En virtud del principio de separación de poderes, el P. E. no tiene facultad para evacuar una consulta de orden procesal, que le formula un Procurador Fiscal Federal. Las opiniones del P. E. en materia judicial, por autorizadas que sean, no pueden ni deben hacerse oír ante un Tribunal, ni influir en el ánimo de un Procurador Fiscal, el que por su parte hallará en las leyes que rigen su mandato la norma adecuada, según la cual debe proceder.

**El Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Entre Ríos,  
consulta al Ministerio de Justicia en un caso contencioso.**

*Ercmo. Señor:*

V. E. no podría satisfacer la consulta que envuelve la nota del Sr. Procurador Fiscal de la Provincia de Entre Ríos.

El P. E. carece de atribuciones judiciales; ellas corresponden, según las divisiones de los Poderes de la Constitución, al Poder Judicial.

Si el Procurador Fiscal no encuentra mérito para la acusación que por su intermedio solicita el Gobierno de Entre Ríos, el Código de Procedimientos en lo Criminal debe determinar sus procedimientos, ya limitándolos a comunicar la denuncia al Juez que debe instruir el sumario, según el art. 169; ya solicitando el sobreseimiento, que en cualquier estado del sumario autoriza el art. 432; ya declinando la responsabilidad de la acusación, con sujeción a las prescripciones de los arts. 460, 461 y 462.

Pero, cualquiera que sea la actitud asumida por el Procurador Fiscal, sólo puede ser considerada, apreciada y resuelta por el Juez de Sección. Las opiniones de V. E. por autorizadas que ellas sean, no pueden ni deben hacerse oír en su recinto, ni influir en las opiniones del Procurador Fiscal, que, en lo contencioso, sólo deben fundarse en las leyes que rigen su mandato.

Pienso que V. E. podría responder en este sentido la nota precedente, salvo los dictados de su más ilustrado criterio. — Noviembre 4 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con la dictaminado. — Noviembre 8 de 1893.*

=====

Repútese contrario a la ley de Presupuesto y violatorio de la ley de Contabilidad, la inversión de dineros públicos, hecha con objetos distintos a los que estaban destinados por ley de Presupuesto. No incurre en responsabilidad el habilitado, cuando dió a sumas de dinero un destino diferente al indicado por el Presupuesto, si procedió así, dando cumplimiento a órdenes superiores, impartidas en Acuerdo de Ministros.

### **Consulta de la Contaduría General de la Nación — relativa a irregularidades de inversión de fondos por los habilitados.**

*Excmo. Señor:*

Las observaciones de la Contaduría General a las cuentas de gastos pagadas por el habilitado de la Sub Secretaría de Marina, son de una verdad y justicia incontestable.

Nada más irregular, y contrario a los propósitos de la ley de Presupuesto y a la de Contabilidad, que el uso de los dineros entregados por Tesorería, con un objeto especial, para pago de partidas y gastos de un carácter completamente distinto.

Tales proceder es son violatorios de la ley de Contabilidad.

Pero por evidente que esto sea, no se desprende que la responsabilidad de esas violaciones haya de recaer sobre el habilitado, que dió cumplimiento a órdenes comprobadas y no denegadas del P. E. de la Nación.

El habilitado ha podido y debido objetar esas órdenes, según el Acuerdo de 14 de diciembre de 1882; pero de no haberlo hecho y de darles al contrario cumplimiento, no se deduce que incurra en la responsabilidad que la Contaduría establece en sus resoluciones.

Ni el Acuerdo, ni ninguna ley, crea esa responsabilidad al habilitado.

La de Contabilidad en su art. 15, responsabiliza a los encargados de la Administración de Rentas Públicas, cuando pierden dinero, o pagan indebidamente, esto es, en mayor suma que lo ordenado, o cuando no lo hacen en virtud de libramiento u orden de pago en su caso.

El art. 16 prescribe: “que ningún pago, se hará, sino en virtud de orden del Presidente de la República refrendada por el respectivo Ministro”. Pero estas prescripciones no afectan al habilitado, que ha procedido en virtud de órdenes del P. E.

Las prescripciones prohibitivas de la misma ley de Contabilidad se refieren *a las órdenes o decretos de pago*, dictados por el P. E. y la responsabilidad de su inobservancia recae en el mismo Poder, que ha debido observarlas, o en la Contaduría General en su caso, pero en ninguna disposición la encuentro prescrita contra el habilitado, que extraño a los procedimientos de comprobación de un crédito y su reconocimiento, sólo ejecuta la orden de abono que le comunica el P. E.

El Acuerdo General de Ministros que subsana los defectos de imputación, no es requerido en la ley para el habilitado que ejerce una función subalterna al cumplir el mandato de pago, sino para la Contaduría que controla la legalidad de las órdenes dictadas. Por ello, los arts. 22 y 26 de la ley, se refieren *a toda orden de pago, a la responsabilidad de todo decreto de pago*. Como en lo relativo al procedimiento y disposición de esos mandatos o decretos de pago no interviene el habilitado a quien se ordena su cumplimiento de acuerdo con lo expuesto en el dictamen del Sr. Procurador del Tesoro, pienso que la responsabilidad del habilitado no procede, en el caso de ser ciertos los comprobantes acompañados y los decretos del P. E. que le ha sido ordenado cumplir, y que si la del P. E. resultase procedente por inobservancia de las prescripciones de la ley de Contabilidad al decretar esos pagos, sólo pueden hacerse efectivas ante el H. Congreso con sujeción a o prescrito en el art. 67, inciso 7 de la Constitución Nacional y art. 3º de la ley reglamentaria del examen de la contabilidad de 22 de agosto de 1878. — Noviembre 7 de 1893.

=====

Las palabras "compartir el uso" del art. 22 de la Ley de Ferrocarriles Nacionales, suponen la adquisición de derechos sobre la cosa destinada a un uso común. Implica dicho artículo, la constitución de una comunidad de derechos.

#### **Interpretación del art. 22 de la ley de Ferrocarriles Nacionales.**

*Excmo. Señor:*

Se afirma la existencia y se designan a fs. 1, documentos agregados al expediente que tramita ante la Dirección General de Ferrocarriles, sobre uso común de las vías y se pide se traigan a la vista

al resolver este expediente. Considerando oportuno el examen de esos documentos, ruego a V. E. se sirva disponer sean agregados y corran con la vista conferida. — Octubre 6 de 1893.

*Excmo. Señor:*

La Dirección de Ferrocarriles Nacionales ha interpretado el art. 22 de la ley reglamentaria de aquéllos, con sujeción a la común inteligencia de sus términos.

Con arreglo a esa prescripción legal, toda empresa está obligada a compartir el uso de cualquiera de sus estaciones, con las compañías cuyas líneas se unieran a la suya.

Compartir el uso, implica adquisición de derechos sobre la cosa destinada a un uso común, ejercicio recíproco de un derecho sólo limitado por el del copartícipe. De otro modo, no existiría coparticipación sino subordinación manifiesta de la empresa que no pudiera expender por si sus billetes ni encomiendas, a la que se arrogase la administración de aquellos intereses. Esto sería contrario a la expresión de la ley, que ha empleado una forma clara y común para establecer la comunidad de derechos de uso de tales estaciones.

Pero la interpretación oficial del texto del art. 22 de la ley de 1891, sólo puede imponerse con carácter provisorio, en la forma establecida por la resolución de la Dirección de Ferrocarriles, a fin de que no se interrumpa el servicio público.

La determinación de un uso adecuado a las exigencias de ambas empresas con relación a su tráfico respectivo y a las aptitudes del local común, para el obtenimiento del mejor servicio, deben reglarse definitivamente por un convenio entre ambas empresas; y en caso negativo, por la decisión arbitral que expresamente requiere el art. 24 de la ley citada.

Opino, por ello, que V. E. podría dar su aprobación a la resolución del Directorio de fs. 9 que abraza los extremos legales; menos a la parte que impone a la Empresa del Ferrocarril Central Norte a fs. 14 vta. una multa por falta de cumplimiento, por cuanto esa falta de cumplimiento está bien excusada en el recurso elevado por la Empresa a fs. 12. — Noviembre 7 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 30 de 1893.*

=====

El delito de defraudación de dineros fiscales cometido en la Penitenciaría Nacional, cae bajo la jurisdicción federal.

**Sobre jurisdicción de los Tribunales Federales, en un delito de defraudación de dineros fiscales cometido en la Penitenciaría Nacional.**

*Ercmo. Señor:*

La Penitenciaría es un establecimiento carcelario, sujeto en su régimen al Gobierno Nacional. Su propiedad, su destino, el alojamiento no sólo de los procesados de la Capital, sino de los procesados y penados por la jurisdicción federal, su provisión por cuenta de la Nación, el nombramiento por el P. E. y la dependencia de sus empleados, todo el régimen de su gobierno interno, lo hace depender de la exclusiva jurisdicción del Gobierno General.

Con prescindencia de estos caracteres, se trata de defraudación al fisco; de una extracción de dinero de la Nación, ejecutada por un empleado nacional encargado de su custodia, y dentro del establecimiento, sujeto a la exclusiva jurisdicción de aquélla.

El hecho cae, entonces, bajo la jurisdicción de los Tribunales Nacionales, con sujeción a lo prescripto en el art. 3º, inc. 4º de la ley sobre jurisdicción y competencia, de 14 de septiembre de 1863 y arts. 80 y 83 de la ley de la misma fecha, relativa a los crímenes contra la Nación.

En tal caso, es al Procurador Fiscal a quien corresponde la atribución de sustentar la acción fiscal, ante la jurisdicción federal. — Noviembre 22 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Noviembre 24 de 1893.*

=====

No se considera necesaria la sanción de una ley que establezca la uniformidad del procedimiento policial a seguir con los conductores de trenes, cuando éstos ocasionan desgracias o son causa de accidentes, por cuanto son suficientes para ello las reglas de los Códigos de Procedimientos en lo Criminal referentes a los casos de prisión y arresto preventivo.

**La Dirección General de Ferrocarriles, propone la uniformidad de los procedimientos de las autoridades policiales en las desgracias o accidentes comunes que se producen en los ferrocarriles.**

*Excmo. Señor:*

No solamente creo, fundado en las mismas consideraciones del precedente dictamen del Sr. Procurador del Tesoro, que la ley solicitada por la Dirección de Ferrocarriles no procede en el caso, sino que la creo innecesario. Los perjuicios en la marcha de los trenes, y vejámenes a sus conductores, que justamente llaman la atención de la Dirección General, proceden, más que de falta de una ley, de la errada interpretación que de ella hacen las autoridades policiales. En el mismo error incurrieron los policías de la Provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte, en la acordada citada y transcrita por la Dirección, no necesitó para disiparlo, solicitar nuevas leyes y sólo estableció la verdadera interpretación de las reglas del procedimiento en lo criminal. Las mismas reglas fija nuestro Código actual. El hecho de un descarrilamiento, de un choque, aun causando víctimas, no constituye por sí solo un delito, tratándose de una fuerza generadora de un poder, a veces irresistible y de un trayecto férreo inevitable. Más que nunca, entonces, se requiere la constancia de antecedentes demostrativos de una voluntad o negligencia culpables, para que pueda proceder la prisión de los causantes del hecho. Porque la prisión no procede *ipso facto* en derecho, sino como lo establece el art. 4º del Código de Procedimientos, cuando haya indicios vehementes o semi-plena prueba de culpabilidad. Por ello el art. 169 prescribe a los Jueces “iniciar las diligencias necesarias para la averiguación del hecho y los delinquentes”; el 178, “comprobar la existencia de un hecho punible”; y el 184 referente a las policías, “proceder a la detención de los presuntos culpables en los casos mencionados en el art. 4º, esto es, cuando resultan indicios o semi-



plena prueba de culpabilidad''. Es verdad que el Código de Procedimientos en lo Criminal sólo rige para la Capital y Territorios y causas federales, pero los Códigos de Provincias deben contener disposiciones análogas porque se trata de garantías individuales prescriptas en la Constitución Nacional.

Resultando que el choque de un Ferrocarril y sus consecuencias no constituyen un delito *a priori*, que ese delito *no se presume*, dadas las circunstancias especiales de su movimiento obligado, y que la semi-plena prueba de la culpa debe legalmente preceder a la prisión, ésta no puede producirse mientras el tren no llegue a su destino y la investigación arroje luz bastante sobre la culpabilidad del conductor. Tratándose de ferrocarriles nacionales y de servicios de carácter público, opino que V. E. estaría autorizado a pasar una circular a las Administraciones de Provincia, llamando su atención sobre los perjuicios denunciados por la Dirección de Ferrocarriles y la conveniencia de recomendar a los funcionarios de las policías, la rígida observancia de los procedimientos que prescriben los casos de procedencia de prisión o arresto preventivo. — Noviembre 23 de 1893.

*Resolución de conformidad con lo dictaminado. — Febrero 26 de 1894.*

=====

La vigilancia sobre la provisión, buen régimen de alimentación e higiene que a la Comisión de Cárceles le corresponde con respecto a la Penitenciaría Nacional, no la autoriza a la entrada sigilosa e imprevista para sorprender "in fraganti" a empleados y penados de la Penitenciaría Nacional.

La Comisión de Cárceles no tiene atribuciones para aplicar sanciones disciplinarias; las infracciones que constate debe ponerlas en conocimiento del Poder Ejecutivo para que sea éste el que ordene las medidas que el caso requiera.

#### **Atribuciones de la Dirección de la Penitenciaría Nacional y de la Comisión de Cárceles.**

*Excmo. Señor:*

Un celo digno de consideración por cuanto emana del deseo de propender al mejor servicio público, ha producido lo que no es

propiamente un conflicto de atribuciones, sino el roce de las que respectivamente corresponde al Director de la Penitenciaría y a la Comisión de Cárceles y Casa de Corrección.

Al expresar a V. E. que las divergencias surgidas no son bastantes a producir un verdadero conflicto, me fundo en que su resolución puede encontrarse sin esfuerzo, aún dada la diversidad de funciones, en el Reglamento mismo de la Penitenciaría y en el decreto de creación de la Comisión, que ha modificado aquél en parte.

Es innegable que la Comisión tiene a su cargo la provisión del establecimiento; los contratos consiguientes con los proveedores, la vigilancia, destinación de lo proveído en cantidad y calidad reglamentaria, así como lo relativo a higiene del establecimiento.

Es con relación al cumplimiento de esas atribuciones relativas a la provisión, alimentación e higiene, que la Comisión puede, según el art. 3º del decreto del P. E. de 31 de octubre de 1890, proponer la separación de sus puestos, de los empleados que a su juicio falten a su deber.

La Comisión no tiene la facultad de destituir empleados; sólo la de proponer su separación a la autoridad que tenga atribución para nombrarlos y destituirlos, que es el P. E. en cuanto a los puestos superiores y el Director en cuanto a los subalternos cuyo nombramiento le haya sido diferido.

Fuera de estas atribuciones, primordiales en lo relativo a los objetos fundamentales de la institución de la Comisión de Cárceles, el Director ha conservado todas las demás que le asigna el Reglamento provisorio, mandado observar por decreto del P. E. de la Provincia de Buenos Aires en 22 de mayo de 1877, que no ha sido derogado.

Según ese Reglamento en vigencia, la Administración de la Penitenciaría está a cargo del Director, los empleados le deben obediencia y es responsable del régimen del Establecimiento, de la seguridad de los encarcelados y de la exacta observancia de los Reglamentos (arts. 1º y 2º).

Esas atribuciones, que más en detalle consignan los arts. 18 y 20, exceptuando lo relativo a proveedurías y a la vigilancia de su buena distribución, son necesarias en establecimientos de ese género. La disciplina requiere su concentración en un jefe, que debe residir

en el mismo establecimiento y ejercer continua vigilancia en todos los momentos, que ha de mantener esa disciplina entre empleados y presos, sin tolerar, como expresa el art. 17, la más mínima insubordinación.

Todo acto que tienda a menoscabar las atribuciones de cuyo ejercicio debe cuenta a V. E. según el art. 20 del Reglamento, conduciría fatalmente al desprestigio de su autoridad moral, y es sin embargo esa autoridad moral incólume, la que habilita al Director de una Penitenciaría para mantener un régimen digno y firme, al mismo tiempo que humano.

No pienso, por ello, que la vigilancia sobre la provisión, buen régimen de alimentación e higiene y aún del fiel cumplimiento de las disposiciones o reglamentos, autoricen como medios ordinarios la entrada sigilosa e imprevista para sorprender *infraganti* empleados y penados, como lo pretende la Comisión; ni menos que pueda mantener una fiscalización permanente de todos los empleados sin excepción alguna incluyendo al mismo Director, como se consigna a fs. 5.

Mientras V. E. no haya conocido la existencia de causas graves de sospechas, será injustificable y ofensiva toda fiscalización del personal administrativo de la Penitenciaría. Su Dirección debe gozar el concepto de consideración respetuosa que le reconoce la elección misma de V. E. para tan importante cargo; sus actos como Director deben estar fuera de la jurisdicción de la Comisión de Cárceles, y la única forma de proceder contra él, si desgraciadamente llegasen a presentarse casos concretos de manifiesta violación de los Reglamentos, sería la información a V. E. de lo ocurrente para la provisión de las medidas de represión oportunas.

No siendo entonces necesario ni procedente la entrada sigilosa e imprevista y reconociendo el Director el derecho de la Comisión a entrar y vigilar el régimen sin requerir venia suya, lo sucedido queda encerrado en los estrechos límites de una cuestión de etiqueta.

Cuando el Tribunal pleno y aún la Suprema Corte de la Provincia visitaban la Penitenciaría con facultades legales no contestadas, siempre hizo anunciar su llegada al Gobernador del establecimiento. Este, que bien comprendía su deber de abrir ampliamente las puertas ante el Supremo Tribunal, creía, más que un derecho, un deber, dictar como jefe las órdenes del caso y aún acompañar al Tribunal, si no le excusaba expresamente de esa atención.

Este es el proceder que correspondería usar en el caso de la Comisión; ella debe, cortésmente anunciar su llegada al Director, éste recibirla y poner a su disposición todos los elementos que requiera para el ejercicio de sus atribuciones y aún acompañarla, si no fuese excusado, para oír y conocer todas las observaciones que la visita sugiera y mandarlas ejecutar en lo procedente, porque el orden y la disciplina requieren que las observaciones se trasmitan al Director, y no a los subalternos que de él dependen, y que las disposiciones de la comisión se comuniquen también y entiendan directamente con el Director o quien lo represente, para que como jefe, dé las órdenes para su cumplimiento.

Opino que con estas observaciones, que surgen del contexto de los Reglamentos y decretos orgánicos, quedarán allanados los obstáculos que han entorpecido el camino a seguir por la Comisión de Cárceles y Director de la Penitenciaría y que una invocación de V. E. al patriotismo y sentimientos de una y otro, restablecerá la concordia tan necesaria a la consecución de sus manifiestos propósitos en favor del mejor servicio público. — Diciembre 6 de 1893.

*Departamento de Justicia. Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 14 de 1894.*

=====

Corresponde autorizar al Asesor Letrado del Departamento de Obras Públicas para que represente y defienda los intereses puestos bajo la dependencia de esa repartición, en los juicios que se instauren contra particulares.

**Facultando al Asesor Letrado del Departamento de Obras Públicas, para gestionar el pago de perjuicios causados a embarcaciones de las obras del Riachuelo.**

*Excmo. Señor:*

La regla general de derecho en lo contencioso y administrativo, es que el Ministerio Público represente y defienda la causa pública en los casos y asuntos en que su interés lo requiera. Así lo han prescripto siempre las leyes orgánicas de su institución. Pero esa regla no es absoluta. “La ley de organización de la administración de justicia para la Capital Federal, en su art. 119, prescribe: “que

corresponde a los agentes fiscales, intervenir en todo asunto en que haya interés fiscal a menos que la representación de esos intereses estuviese asignada a otra representación administrativa." La representación general del Fisco puede ser sustituida entonces por una representación especial. Estas representaciones especiales se han atribuido en muchos casos y en diversas reparticiones administrativas a los Inspectores de Ferrocarriles, a los Inspectores de Impuestos Internos, a los de Obras de Salubridad y aún a abogados o agentes especiales, como en los casos de defensa de los terrenos públicos denominados de la Chacarita y de Palermo, y en todos los que el P. E., que según el art. 86 de la Constitución Nacional tiene a su cargo la administración general del país, ha juzgado conveniente a sus intereses hacer una delegación especial. La conveniencia pública sería bien consultada con la representación del Asesor de la repartición del Departamento de Obras Públicas. Siendo la materia especial de su ramo; estando en contacto con el Departamento, y teniendo en consecuencia todos los elementos de apreciación de los hechos a la mano, ningún funcionario estaría en condición de hacer una defensa más oportuna y ventajosa a los intereses de la repartición a su cargo. Opino, en consecuencia, que no oponiéndose la ley y más bien reconociendo el derecho del P. E. a establecer representaciones especiales que han sido autorizadas por una práctica constante, habría conveniencia en atribuir al Sr. Asesor del Departamento de Obras Públicas la representación y defensa de los intereses públicos sometidos a la administración de aquel Departamento. — Enero 22 de 1894.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Febrero 28 de 1894.*

=====

La posesión de hecho de una marca, no acuerda preferencia alguna contra el que ha ocurrido en primer término a solicitar el registro a su propio nombre.

#### **Sobre registro de una marca**

*Eccmo. Señor:*

Aun cuando este caso parezca a primera vista semejante, es de todo punto diferente al de los Sres. Shaw y Mac-Gregor, sobre el

que dictaminé en 13 de enero del corriente año. En aquel expediente la marca "Gladiator" ha sido registrada por Shaw y la "Vencedor" por Mac-Gregor. Ambas casa tienen por consiguiente una marca propia, garantida por el registro legal. Su cuestión no versa sobre si la marca "Gladiator" pertenece a Shaw, porque esto es incuestionable; sino solamente, si después de registrada a su favor, puede limitarse su uso y asignarse, a Mac-Gregor para artículos virtualmente comprendidos en la concesión a Shaw. En el caso actual, los recurrentes no tienen registrada marca alguna y sin ese registro, no pueden invocar derecho contra terceros a quienes ha sido legalmente acordada la marca "Pito". Ellos han comprobado, es verdad, que están en posesión de la marca "Pito" con que designan vinos italianos y grapas fabricadas e introducidas a su consignación.

Pero esta posesión de hecho, ninguna preferencia determina, según la ley de 18 de agosto de 1876, contra el que ha ocurrido en primer término a solicitar el registro a su propio nombre.

El art. 15 de la ley, es explícito al respecto: "El derecho de prelación para la propiedad de una marca, se acordará por el día y hora en que sea presentada la solicitud a la oficina". Esa prescripción terminante sólo tiene la excepción que consigna el art. 38 de la misma ley. Pero esa excepción que no afecta el caso del recurrente, confirma la general amplitud del mandato del art. 15, cuando en el 40 prescribe "que no habiéndose hecho registrar una marca dentro del plazo fijado en el art. 38 nadie podrá prevalerse del uso hecho por ella antes de la sanción de la ley para reclamar el derecho de prioridad". Por incorrecto y aún repugnante a los impulsos de la moral que parezca el proceder del negociante que usa de deslealtad para apropiarse una marca que reconoce que otro poseía, el derecho estricto se antepone a los procederes que reclamaría la equidad; y por ello, ante las prescripciones explícitas de los arts. 15 y 40 de la ley sobre marcas de fábrica, estoy forzado a dictaminar por la confirmación de la resolución recurrida. — Febrero 20 de 1894.

*Resolución de acuerdo con lo dictaminado. — Junio 20 de 1894.*

=====

**Procurador General de la Nación**

**Dr. JULIO BOTET**

**1905-1917**





Solicitada por un Ministro Diplomático la detención de un súbdito acusado de delito de los que dan lugar a la extradición, ella debe ser acordada, a cuyo efecto los antecedentes deben pasarse al Juez Federal en Turno de la Capital, que es a quien compete librar la orden de detención.

**Legación de Francia, pide la extradición de Benito Pérez Araguez.**

*Excmo. Señor:*

El delito que se imputa a la persona referida en la precedente comunicación siendo de fuero común, es de los que dan lugar a la extradición en los casos determinados por la ley.

En tal concepto y teniendo en cuenta la expresión de reciprocidad que se hace por el señor Ministro requiriente, creo que puede facilitarse por V. E. la vigilancia que se desee ejercer en los buques que se designen y deben autorizarse los procedimientos para la detención que se solicita.

Como la orden para hacer efectiva ésta, compete al Señor Juez Federal de la Capital de acuerdo a los arts. 671 y 673 del C. de P. Penal, creo que V. E. sin perjuicio de ordenar los medios concernientes a facultad la vigilancia deseada, debe remitir estos antecedentes al expresado Juez Federal a los efectos indicados respecto a la detención del imputado. — Enero 31 de 1905.

=====

Los permisos para el reconocimiento de sustancias de aprovechamiento común, deben considerarse aisladamente. Conviene dictar una reglamentación al respecto, que impida el monopolio o el acaparamiento por parte de algunos.

**División de Minas — consulta sobre arenas metalíferas  
comprendidas en la 2ª categoría del Código de Minas**

*Excmo. Señor:*

Es indudable que la indicación que hace la oficina de Minas y Geología sobre concesión de permisos para reconocimientos de sustancias de aprovechamiento común, es conveniente y aún propicia para el progreso de la riqueza nacional.

Pero esos permisos deben someterse al acordarse, a una pru-

dente reglamentación que ponga a salvo el derecho común de aprovechamiento acordado por el art. 70 del Código de Minería, contra el monopolio o acaparamiento por algunos.

Si en la práctica es posible tal reglamentación, como la expresada oficina lo afirma y si con ella puede salvarse el derecho de todos evitando exclusiones ilegales y contribuyendo al mismo tiempo a fomentar la acción de capitales en esos reconocimientos, creo que V. E. puede autorizar aquellos permisos.

En caso contrario habría el peligro de caer en una ilegalidad que podría lesionar derechos reconocidos sin justificación alguna.

La solución pues en este punto, depende de la mencionada reglamentación, debiendo suspenderse la concesión de los permisos de que trata, hasta que aquélla se dicte y se compruebe que no choca contra las prescripciones legales que se han tenido presente. —  
Enero de 1905.

=====

Procede que los fondos públicos votados por la ley para la Caja de Jubilaciones y Pensiones entren a devengar intereses simultáneamente con el pago de las pensiones que gravitan sobre dicha Caja.

**Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones pide los intereses de los \$ 10.000.000 en fondos públicos desde 1º de octubre de 1904.**

*Excmo. Señor:*


Al cumplimentarse la Ley 4349 entregándose a la Caja de Pensiones los fondos públicos por ella votados, se ha estado dentro de lo justo y lo legal fijando la misma fecha (1 de Enero), para que esos fondos empezaran a devengar intereses, y las pensiones a que estaban afectadas, pasaran a gravitar sobre la Caja de la nueva institución.

Con tal acto se respondía fielmente al objeto y espíritu de la mencionada ley, que al par que descargaba a la Nación del pago de esas pensiones le imponía las obligaciones inherentes a los fondos públicos que mandaba crear y entregar; nada más correcto pues que el principio simultáneo de ambos casos, según el art. 8º del P. E.

Con dicha fijación se procedía de acuerdo con la más estricta

justicia y con los principios de la más correcta administración; tan justa era que los derechos de la Caja empezarían cuando empezaran sus obligaciones, como que se iniciaban las obligaciones de la Nación cuando cesaran de gravitar sobre su presupuesto las pensiones de la ley; y tan de buena administración era descargar a la Nación, y gravar a la Caja simultáneamente, que de no procederse así, se hubieran echado como saldo en contra del erario público, los intereses del trimestre pretendido, sin descargarla del fuerte desembolso que era todavía necesario hacer para pagar los beneficios existentes hasta la fecha señalada en el decreto. Estas consideraciones unidas a las expuestas por el Sr. Procurador del Tesoro en su precedente vista, me inclinan a adherir a su dictamen y conclusiones. — Enero de 1905.

=====

Los impuestos a la navegación a que se refiere el art. 1377 inciso 3º del Código de Comercio y la Ley 3756, no crean a favor del Fisco un privilegio excepcional ni un derecho real, y si el buque que los adeude ha sido vendido judicialmente, el Fisco debe ocurrir ante el Juez del concurso a hacer valer los derechos y privilegios que por la ley le correspondan, y que gravitan sobre el precio del buque. 

**Juez de Comercio, sobre concurso formado a don José Lussich; da cuenta de la venta de un vapor que adeuda derechos al Fisco y debe resolver si concurre o no al concurso como deudor privilegiado.**

*Excmo. Señor:*

Los impuestos a que se refiere el art. 1º de la Ley 5756, que gravan los buques que entren al puerto, son los impuestos a la navegación a que se refiere el art. 1377, inc. 3º del Código de Comercio, y que según la misma disposición gravitan con el privilegio que expresan, sobre el buque mismo.

No habiendo disposición en ese Código, ni en ley alguna, que ponga ese privilegio en condiciones excepcionales, le son aplicables los arts. 864 y 1578, inc. 1º que decretan la extinción de todo privilegio sobre el buque, de cualquier naturaleza que fuera, en el caso que fuera vendido judicialmente pasando a gravitar sobre el precio.

En el caso sub júdice, vendido el buque de que se trata, en venta judicial por orden del Juez de Comercio, dentro de las prescripciones de la Ley de Quiebras, todos los privilegios sobre aquél se han extinguido, entre ellos el del Fisco por los impuestos de la navegación reclamados, y han pasado a gravitar sobre el precio obtenido, que según constancias de autos, se halla depositado a la orden del Juez del mencionado concurso.

Contrariamente a lo manifestado por el señor Procurador del Tesoro, creo que V. E. debe ocurrir al Juez del concurso expresado, requiriendo el cobro de aquellos impuestos, del precio obtenido por la venta del buque ya que por tal venta judicial, el fisco perdiendo el privilegio que tenía carece de los medios legales para proceder por sí, contra el mismo buque.

La Ley 3756 está muy lejos de crear un derecho real, ni un privilegio excepcional que no sea el mencionado, a favor del Fisco, sobre los buques que gravan los impuestos que él establece.

Su art. 6º excluye la idea de una acción real o hipotecaria sobre el buque, cuando prescribe que el pago del impuesto debe hacerse por la agencia a cada consignatario, lo que sólo supone una acción personal con el privilegio mencionado.

Y el mismo artículo se limita a determinar que el mencionado cobro se ha de hacer por los medios ordinarios establecidos para casos análogos por las Ordenanzas de Aduana. Y esos casos análogos no son seguramente las excepciones de los arts. 168 y 172 de las expresadas Ordenanzas, pues no se trata de la ejecución de deudores que tengan mercaderías en la Aduana, ni los buques surtos en los puertos están en igualdad de condiciones con esas mercaderías.

Los casos análogos de la referencia, son los que prevee el art. 175 de las Ordenanzas, cuando el deudor no tiene mercaderías en las Aduanas, (lo que sucede en el caso) el Administrador debe ocurrir a los tribunales ordinarios a proseguir el cobro de la deuda con los privilegios que las leyes acuerdan al Fisco.

Ahora bien, según el art. 12 de la ley sobre competencia de los tribunales nacionales de septiembre de 1863, el tribunal ordinario ante el cual ha debido y debe ocurrir el Fisco para hacer efectivo el cobro de los impuestos de que se trata, es el juez ordinario de Comercio, que conoce el concurso de Lussich, el que por una parte

atrae a todos los créditos contra el concursado y por otro es extraño a la jurisdicción federal.

Por estas consideraciones y teniendo en cuenta que V. E. está inhibido a mérito del art. 95 de la Constitución de revoer o revocar la resolución válida dictada en este juicio y comunicada a V. E. por oficio, opino que V. E. debe ordenar se gestione el cobro de que se trata en la forma indicada, por medio del procurador fiscal correspondiente como lo tiene hecho en casos análogos. — Enero de 1905.

*Decreto en disconformidad: Boletín Oficial N° 3548, página 952, de agosto 21 de 1905.*

=====

I. — La organización de una Empresa Ferroviaria hecha en el extranjero se rige por las leyes del lugar en que se constituye. Pero si esa empresa es concesionaria del Gobierno Argentino, por un contrato que aquí debe cumplirse, son éstos, los principios que rigen la concesión.

II. — El capital que determina el límite para la intervención del P. E. en las tarifas, es el que surge de la ley respectiva argentina.

### **Ferrocarril Gran Oeste Argentino, sobre garantías.**

*Excmo. Señor:*

La Compañía Anónima de que aquí se trata no puede ser sometida, para juzgar de su capital y demás circunstancias de su organización a las leyes de la República.

Esa sociedad o compañía se formó en Londres y según nuestra ley civil es la legislación inglesa la que rige respecto de lo dicho; pero esto no impide que el contrato de que se hizo concesionario Don Mateo Clark, del Gobierno de la Nación, sobre compra del Ferrocarril que hoy le pertenece, debe ser juzgado en sus obligaciones y derechos por las leyes argentinas, no sólo porque ese contrato se hizo para cumplirse aquí, sino porque así se estipuló y a cuyo efecto la Compañía fijó su domicilio en la República.

De aquí que considere que los arts. 321, 329 y 341 del Código de Comercio Argentino no sean aplicables a la Compañía del Gran

Oeste Argentino por cuanto tales disposiciones se refieren a su organización y no afectan directamente el contrato con la Nación.

Apartando pues el juzgamiento de la Compañía, bajo el punto de vista de su constitución y por ende de la formación de su capital social y limitando a encaminarlo bajo el punto de vista del contrato celebrado con la Nación, es indudable que el capital en que el art. 5º de la ley de garantía asienta el interés del 7 %, como límite para la intervención en las tarifas, es el invertido material y directamente en el ferrocarril y sus derivados, ajeno a todo abultamiento extraño como ser quebrantos, capitalización de intereses y demás, que sólo nacen de las operaciones financieras que por razones propias, habrá efectuado la Compañía.

Ese capital real y directamente empleado en el ferrocarril, según resulta de la prueba que la empresa está obligada a producir, según cláusula del contrato, es la única base en que debe asentarse el 7 % cuyo exceso determine la legítima intervención del Gobierno en las tarifas.

Ahora bien, según los principios que rigen en general el punto, el capital referido está constituido única y exclusivamente:

1º Por el capital empleado en la construcción que en el caso sub-júdice sería el precio de compra de la línea.

2º Por la compra de materiales y otras inversiones necesarias para poner la línea en servicio y explotación; está claramente determinada por el informe respectivo.

3º Por el gasto anual de conservación y renovación indispensable que se demuestre que es tal, pues de lo contrario no es computable, como no lo son las adquisiciones de inmuebles que no estuvieran directamente afectados a la línea garantida, ni los intereses que se digan pagos por dineros tomados a tales efectos.

Aún cuando no lo expresa, éste parece ser el concepto del informante y el que en realidad corresponde tener en cuenta.

Creo pues, que si examinado el informe que motiva este dictamen dentro de las reglas establecidas se llega por la operación numérica del caso al límite marcado por la ley, debe procederse a la intervención de las tarifas en la forma que corresponda. — Enero de 1905.

=====

Las reconsideraciones de resoluciones administrativas en principio son improcedentes. Quien se sienta damnificado por una resolución administrativa tiene siempre expedita la vía judicial.

No deben reconocerse títulos de particulares sobre la tierra pública, si no llenan las condiciones de validez que prescriben las respectivas leyes.

### Dr. Fermín Grande, sobre tierras.

*Excmo. Señor:*

Es principio de buena administración no acceder a reconsideraciones de decretos o resoluciones como la de aquí se trata, y de carácter definitivo en cuanto es posible dentro del orden administrativo.

Fuera de que tal concepto responde a mantener la autoridad y prestigio del poder administrador y de que se busca dar estabilidad a los derechos que se reconocen u obligaciones que se contraen, se tiene presente que nunca se hiere con esas resoluciones, los derechos de una manera irreparable, dado que siempre queda expedito el camino para recurrir a los tribunales respectivos, en demanda por lo que se entiende tener derecho.

Por otra parte, el decreto de junio 30 de 1896, resolvió y estableció como precedente que las reconsideraciones no tendrán lugar a menos de tratarse de errores de hecho y de conocimientos posteriores lo que no sucede en el caso.

Estos motivos son los que en primer término me inducen a aconsejar a V. E. el rechazo de la reconsideración pedida.

Pero prescindiendo de ello y enrtando a estudiar la cuestión en su fondo y en el terreno colocado por el reciente pedido del interesado, persisto en creer, como mi ilustrado antecesor, el señor Dr. Kier, que no debe reconocer V. E. como eficaz el título presentado por Don Fermín Grande, o sea que V. E. debe rechazar la reconsideración pedida manteniendo el decreto objetado.

Las razones que a tal opinión me inducen son las siguientes:

1º Que según los títulos, su origen probado y constante es sencillamente una encomienda.

2º Que la merced que se alega en contraposición a lo dicho no existe, y aun cuando hago referencias a su respecto, ello no basta

para darlo por existente y para reconocer los derechos que en ello se fundan.

3º Que la falta de esa merced impide juzgar sobre la realidad de la propiedad elegida, pues no puede ni individualizarse la cosa, ni su extensión, ni menos las condiciones en que esa merced (caso de existir) fué otorgada, de lo que puede depender perfectamente la adquisición, conservación o transmisión del derecho alegado.

4º Que no se ha constatado debidamente la posesión de la mencionada cosa, ni en parte, ni en totalidad, por algunas de las diversas transmisiones, desde el primer señor hasta el presente, lo que impide a su vez el reconocimiento de la propiedad alegada, dado que siendo un derecho real sólo se ha podido transmitir con la cosa objeto del derecho, no pudiendo haberlo efectuado quien no lo tenía en su poder.

5º Que, por último, el recurrente no ha probado tampoco su posesión legal, como lo pretende, por cuanto ha resultado por una parte que es reciente, según se desprende de los informes del Gobernador del territorio, y por otra que deponen en contra de lo afirmado por él en las presentaciones que corren de autos y que afirman posesiones muy anteriores a lo que tiene justificado el Dr. Fermín Grande.

Al terminar es de observarse que si V. E. resuelve en el sentido indicado y el recurrente se considere lesionado en su derecho, tiene el camino abierto, como lo he dicho, para hacerlo valer ante la autoridad policial que es la que puede y debe juzgar y resolver en definitiva sobre la eficacia y legalidad de los títulos que V. E. tiene hoy para desconocer. — Enero de 1905.

=====

El pedido de extradición, fuera del tratado vigente con la Nación que lo requiere, si encuadra dentro de nuestras leyes y viene acompañado de la reciprocidad que es de práctica, debe despacharse favorablemente.

**Legación de Italia pide la extradición de Genaro Moccia.**

*Excmo. Señor:*

A título de reciprocidad y fuera de los términos del tratado vigente, el señor Ministro de Italia amplía su pedido de extradición



· formulado el 5 de enero ppdo., contra el súbdito italiano Genaro Moccia.

Teniendo en cuenta que V. E. ya accedió a la referida extradición, pasando los antecedentes al juez respectivo, fundándose en que la reciprocidad ofrecida obliga a V. E. a acceder a la ampliación pedida, como sucedería con cualquier otra Nación amiga, y por último teniendo presente que sólo importa, autorizar al Gobierno requiriente a juzgar al reo por los delitos de que aquí se trata, además del que motivó el anterior pedido, pienso que V. E. debe acordar lo solicitado, por el señor Ministro de Italia y ordenar en consecuencia que los antecedentes pasen al señor Juez Federal de La Plata quien conoce en el pedido de 5 de enero de 1905. — Febrero 13 de 1905.

=====

No debe aceptarse la cláusula de los estatutos de una Sociedad Anónima que disponga que el Directorio se reserva el derecho de autorizar o no las transferencias que se hagan de las acciones. Estas deben quedar dentro de lo prescripto por el Cód. de Comercio (arts. 326 y 327).

Tampoco debe aceptarse por inocua, una cláusula que determine las disposiciones que no podrán modificarse, pues la asamblea podrá siempre hacerlo y los suscriptores tendrán siempre el derecho que les acuerda el art. 354 del Cód. de Comercio.

### **Aprobación de los Estatutos de la Soc. Anónima "La Renta Vitalicia"**

*Excmo. Señor:*

Los estatutos de la Sociedad mutua de pensiones "La Renta Vitalicia" reproducen casi en su totalidad las bases y condiciones de las similares que V. E. ha aprobado anteriormente, como por ejemplo los de la "Caja Internacional Mutua de Pensiones" que hoy funciona en esta Capital.

En aquella sociedad, como en ésta, se ha cuidado de no alterar la índole de la institución, ni chocar con las prescripciones del Cód. de Comercio que las rige, y evitar todo rozamiento o agravio a lo moral y buenas costumbres.

En tal concepto serían de aprobarse los mencionados estatutos sino mediaran las observaciones hechas por la Inspección de Justicia que son en buena parte de tomarse en cuenta.

La primera relativa a la facultad que el Directorio se reserva (art. 7º) de autorizar o no, las transferencias que se hagan de las acciones, es indudablemente inconveniente.

Con ello se ataca el carácter impersonal de la Compañía, como Sociedad Anónima, como reunión de capitales, entrado su directorio, a calificar, y aún discutir las personas que son legalmente extrañas a ella.

Pienso como lo Inspección que esta cláusula debe suprimirse dejándose la transferencia a que se refiere, dentro de lo prescripto por el Cód. de Comercio (arts. 326 y 332 y concordantes).

La última, relativa al art. 76 de los Estatutos, que establece que nunca podrán ser modificadas las cláusulas que determina, fuera de encontrarla fundada, de parte de la Inspección, repito que dicha cláusula es inocua. No sólo porque la Asamblea que puede modificar los estatutos podrá modificarlos, en el citado art. 76, sino porque, a pesar de lo que se estipule, siempre existirá, para los terceros o suscriptores, en el caso, la expresa disposición del art. 354 del Cód. de Comercio.

Creo que debe hacerse también la supresión de esta cláusula.

Con estas modificaciones no creo inconveniente en que V. E. apruebe los estatutos presentados. — Febrero 22 de 1905.

=====

No es posible de acuerdo con tratados y leyes vigentes, acceder al pedido de la Agencia "Havas" sobre rebajas de un 50 % en las tarifas de los telegramas que vengan o vayan a Chile, pues nuestra ley de tarifas vigente se refiere, al permitir esa rebaja, a las noticias destinadas a la Prensa y nunca a agencias telegráficas como la recurrente. Si la ley no lo prohibiera sería todavía difícil acceder a lo solicitado dado los inconvenientes que ofrecería el control a ejercer sobre las noticias que vayan en realidad destinadas a la Prensa. También se opone al pedido el Convenio Internacional que nuestro país tiene celebrado con Chile.

**Agencia Telegráfica Havas — sobre tarifas de los telegramas de la prensa.**

*Excmo. Señor:*

De aceptarse serias las razones que basan el pedido de la Agencia "Havas" para la reducción en un 50 % de la tarifa ordinaria para los telegramas que vengan o vayan a Chile, igualmente lo serían las consideraciones que se hacen en apoyo de aquel pedido porque tanto unas como otras, hacen valer la muy legítima circunstancia de que esa rebaja tiene por objeto facilitar las comunicaciones que llevan al conocimiento común el movimiento universal y dependen eficazmente la cultura general del país.

Pero ello no es posible para V. E. encargado de cumplir la ley, porque hay de por medio una disposición legal, y cláusulas de un Convenio Internacional, cuya precisión y seriedad no admite interpretaciones por más atendibles que sean las consideraciones en que se las apoya.

Cuando la ley de tarifas vigente, en sus arts. 10 y 15 autoriza la disminución pretendida, se refiere sólo a los telegramas para la prensa, sin mencionar para nada las agencias, que como la recurrente son empresas independientes de comunicaciones, de noticias y agentes intermediarios, cuando más en las publicaciones que la prensa les compra o inserta en diarios y periódicos.

Ante tal circunstancia toda interpretación que amplíe o restrinja el título de esas disposiciones, es improcedente.

La Dirección General de telégrafos en su precedente informe, después de establecer con toda claridad la reglamentación adoptada en Europa al respecto de hacer notar las condiciones y requisitos

exigidos para el beneficio de que se trata, y que la República Argentina es extraña a esa reglamentación, que en consecuencia no le comprende.

La Dirección General de Correos en su precedente informe ha acentuado esa improcedencia, mostrando que es imposible controlar a la Agencia, para que los telegramas que recibe, sean exclusivamente destinados a la prensa y no vendidos o distribuidos en otra forma o a otras personas, lo que es muy posible dado que esas comunicaciones las recibe de sus propias agencias o sucursales.

Hace notar igualmente la desigualdad que ante la ley misma habría entre los diarios o periódicos que publicasen las noticias de la agencia y aquellos que se sirviesen de sus propias comunicaciones.

Esta imposibilidad de control, esta posible desigualdad, así como la liberalidad de que ya gozan las agencias por la ley vigente apoyan decididamente el texto legal y mueven a pedir su estricta aplicación.

Tan respetable como la ley misma, es el convenio celebrado con la República de Chile, cuyo texto quedaría alterado como el de aquella, si se accediera a lo que la agencia "Havas" pretende.

En ese convenio nada se dice respecto a la rebaja del 50 % a que se hace referencia. Su artículo 8º sólo contiene una disposición que establece: que las tarifas de los telegramas especiales se establecerá de común acuerdo entre ambas administraciones, siendo proporcional a la del art. 5º; que los de la prensa se establecerán por acuerdo de las Direcciones de ambos países contratantes.

El acuerdo ha sido celebrado y V. E. lo ha probado recientemente.

En su texto no se descubre que haya habido la intención de incluir como telegramas especiales los de las agencias, como la recurrente, ni menos incluibles en la rebaja establecida para ellos y en proporción a la del art. 5º del Convenio.

Por otra parte ello no podía ser de otra manera dada que el art. 17 de la Convención con Chile prohíbe terminantemente aplicar tarifas inferiores a las establecidas en ella, en los telegramas de las empresas telegráficas particulares de ambos países dirigidos a las oficinas de su respectiva propiedad. La tarifa que motiva el reclamo de la Agencia Havas es justamente la de los telegramas que por más que muchas veces lleguen a la Prensa, vienen o van a sus propias oficinas.

Si bien es cierto que el mencionado acuerdo se ha convenido entre las Direcciones respectivas la rebaja del 50 % para los telegramas de la prensa, de acuerdo con el mencionado art. 8º de la Convención no es menos cierto que no se ha hablado allí sino de la prensa y para nada de las agencias, lo que hace presumir que no se ha entendido, como en la ley de tarifas, acordarles semejantes beneficio siendo por otra parte, muy dudosa la facultad que para ello hubieran tenido esas Direcciones dado el citado texto del art. 17º de la Convención telegráfica.

Creo, pues, que de acuerdo con el texto de la ley y del convenio mismo que se invoca considerado en la manera que corresponde para su aplicación, no debe accederse a lo solicitado por la Agencia recurrente. — Febrero 24 de 1905.

=====

Cuando un particular reclama por tener menor superficie de tierra de la que le corresponde según venta que le hizo el gobierno, debe ordenarse una mensura por un ingeniero del Departamento de Obras Públicas, no siendo necesario que ello se haga por la vía judicial.

**Alejandro Cernadas, pide indemnización por compra de un campo que ha resultado con menor superficie.**

*Excmo. Señor:*

Considero que no hay razón para exigir que el recurrente practique una mensura judicial a que en ningún concepto se halla obligado bastando se efectúe esa operación por un ingeniero designado por V. E. y a costa de Cernadas como él mismo lo propone.

Con esa operación se podrán determinar los puntos que aún quedan por aclarar después de la exhibición de la mensura de la sucesión Alvear, y a que se refiere el precedente informe de la dirección de tierras.

Practicada esa operación, y claramente individualizado el déficit que debe el Sr. Cernadas tener, en el campo adquirido, habrá llegado el momento de establecer con toda precisión los derechos que en el caso le asisten y las obligaciones que a V. E. puedan corresponder. — Febrero de 1905.

=====

Una patente de invención debe reputarse que ha sido otorgada fuera de la ley de la materia, si el invento existía, aunque con ligeras variantes en poder del Gobierno. Deben pasarse los antecedentes al Procurador Fiscal respectivo, a efecto de que inicie las acciones que correspondan, hasta obtener la anulación de la nueva patente.

**Sociedad Werf Conrad, sobre patente de invención de drogas.**

*Excmo. Señor:*

Prescindiendo de la parte técnica del precedente informe que la Oficina de Obras Hidráulicas, a cuyo respecto no se encuentra el que suscribe en condiciones de manifestar opinión, y tomando en cuenta las consideraciones que se registran en el final del citado documento así como las disposiciones legales que se citan, no reparo en manifestar a V. E. que reputo mal acordada por la oficina respectiva, la patente de invención de que aquí se trata.

En efecto, si es exacta como resulta aceptado, que el invento con ligeras variantes es el que pertenece al Gobierno; que la modificación en que se le hace consistir estaba ya difundido en publicaciones del Ministerio de Obras Públicas (art. 4º Ley de Patentes) y por último que el mismo comisario no ha estado en condiciones de otorgar aquella, dada la divergencia técnica que existía; si todo esto es cierto digo, forzoso es coincidir que la patente otorgada contra un derecho adquirido por V. E., contra una prescripción legal expresa y con un criterio notoriamente incompleto, debe ser declarado y considerada nula.

A tal efecto y en guarda de los derechos de la Nación, lesionados con el otorgamiento de la patente de que se trata, creo que, V. E. debe ordenar pasen estos antecedentes al Sr. Procurador Fiscal de la Capital, para que a mérito de la Ley respectiva entable y prosiga las acciones pertinentes. — Febrero de 1905.

=====

Las rectificaciones en las manifestaciones aduaneras pueden hacerse siempre antes de la verificación.

**Eduardo Raimondi, pide a la Aduana rectificación de la manifestación de un documento de despacho.**

*Excmo. Señor:*

El art. 129 de las ordenanzas de aduana, prevee el caso de encontrarse en un bulto inspeccionado, artículo de especie o calidad inferior o de menor cantidad de lo manifestado. En tal situación prescribe que el vista no suspenderá el despacho sino que anotará la diferencia y aforará la mercadería manifestada.

Los art. 312 y 352 de los mismos, poniéndose en el expresado caso imponen a manera de pena, el pago de los derechos por la totalidad de lo manifestado, con prescindencia del exceso encontrado entre esto y lo realmente existente.

En estas disposiciones encuadraría el caso sino concurriere la especial circunstancia de no tratarse de bultos inspeccionados, ni de error conocido de la autoridad aduanera por verificación o principio hecho por ella.

El error advertido es denunciado por la recurrente, espontáneamente, con poca diferencia de tiempo de entrada a la aduana, y con anterioridad a todo principio de verificación.

La ley, la jurisprudencia de la Suprema Corte y antecedentes administrativos, bien conocidos, son favorables a la rectificación que se pide, por haber establecido invariablemente:

1º En unos casos, que es un atenuante de consideración la denuncia del error por el interesado y su pedido de rectificación antes de todo principio de verificación por parte de la Aduana.

2º En otros, que son y deben ser permitidos las modificaciones de los manifiestos en general, cuando son espontáneos y previos al conocimiento y verificación mencionada.

Tratándose de rectificar manifiestos, y aún en situación más grave que la presente, con peligro para la renta fiscal, y con penas aplicables, los arts. 934, 980 y 981 de las Ordenanzas, sancionan y autorizan, como atenuante y como capaz de modificar la pena incurrida por el error, la circunstancia de su advertencia por el interesado antes de encontrarse por la Aduana, o antes de que haya tenido lugar algún principio de verificación por ella.

En los manifiestos de los buques que arriban al puerto, los arts. 51 y siguientes de las ordenanzas permiten toda rectificación dentro de las 48 horas de estar ese manifiesto en poder de la Aduana, siempre naturalmente que no haya un principio de verificación o renuncia de aquella.

La Suprema Corte, en los innumerables casos que tiene resueltos al respecto, ha sentado en general que la rectificación puede hacerse en todo caso, antes de la verificación, sancionando invariablemente como atenuante, cuando aquella ha sido hecha con anterioridad por el interesado mismo (Fallos de la S. Corte, tomo 48, pág. 40; Tomo 52, pág. 71; Tomo 82 pág. 66).

Tan notoria es la poca importancia que la autoridad administrativa ha dado en defensa de la renta fiscal a las manifestaciones en más hechas por los comerciantes, dado el texto expreso de los decretos del 22 de agosto de 1891 y 10 de febrero de 1893, como la facilidad con que la autoridad aduanera ha acordado las rectificaciones en casos como el presente.

No se opone a tales acuerdos el decreto de 22 de diciembre de 1893 que se ha limitado a establecer ciertas reglas y definiciones que sólo tienen por objeto dictar un criterio único en materia de clasificación de mercaderías, de aforos y de errores.

De lo dicho pues, y teniendo en cuenta la ley, la jurisprudencia y antecedentes recordados, resulta claramente establecido.

1º Que la manifestación en más, hecha por el recurrente no está regida por las disposiciones de los arts. 129, 312 y 352 de las ordenanzas, por no tratarse de error conocido y verificado en bultos inspeccionados por la Aduana.

2º Que aún suponiéndola bajo el imperio y pena de esas disposiciones sería el caso de aplicarles por analogía, el atenuante de los artículos 934, 980 y 981, atenuante que aplicado a la pena mínima del caso (pago de derecho sobre el exceso entre lo manifestado en más y lo realmente existente) conduce a la exoneración de la pena misma, tanto más, cuanto que es de tenerse presente la espontaneidad de la denuncia del error, la existencia de la mercadería en depósito, el pedido de su rectificación mucho antes del mes de la introducción al país, y por último lo muy explicable de error cometido.

3º Que el pedido de rectificación del interesado y la propia denuncia "bonafide" del error cometido, pone a cubierto a la Adua-



na de todo daño que de él pudiera venirle, haciéndole imposible de pasar desapercibido en cualquier circunstancia que fuese.

Estos resultados, las consideraciones expresadas e informes que corren de autos, unidos a la convicción que abrigo de que en estos casos la liberalidad del Gobierno, sin dañar la venta ni contrariar la ley, estimula al comerciante a denunciar los propios errores, que de permanecer ignorados, pudieran disminuir a quella o imponer responsabilidades serias a la Aduana, todo ello, digo, me inducen a aconsejar a V. E., conceda la especial autorización que se requiere para permitir la rectificación solicitada por el recurrente. — Marzo 3 de 1905.

=====

Siendo libre por nuestra Constitución la libertad de cultos y el derecho de aprender y enseñar, no procede el reconocimiento de un pastor protestante, a los efectos de autorizarlo previamente para el ejercicio de su ministerio. No obstante, procede el registro de la firma del expresado pastor, a los efectos de la autenticación de los documentos que expida.

**Don Carlos Kruger, pide ser reconocido como pastor evangélico en la Colonia Esperanza (Provincia de Santa Fé)**

*Excmo. Señor:*

La amplia libertad, expresamente garantida por la Constitución (art. 14) a todos los habitantes de la República, para profesar libremente su culto para enseñar y aprender, así como para asociarse con fines útiles, excluye la necesidad y procedencia del reconocimiento que de V. E. requiere, como previo el recurrente, en su carácter de pastor de una iglesia disidente.

Creo, sin embargo, que constando tal investidura de los documentos que se acompañan, legalizados en forma completa y legal; sin perjuicio de no acceder al reconocimiento pedido, puede V. E. como se ha hecho en casos análogos, ordenar el registro de la firma del expresado pastor, a objeto de autenticarla y comunicar al Gobierno de la Provincia de Santa Fé, su destino a Esperanza, una de sus colonias, según se desprende de los mencionados documentos. — Marzo 13 de 1905.

=====

No viola ninguna disposición legal la cláusula de los Estatutos Sociales, que dispone que el Gerente no podrá ser removido sino por resolución de la Asamblea, en que estén representados por lo menos  $\frac{3}{4}$  partes del capital.

### **Sociedad Plantadora Isleña, sobre aprobación de Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Son exactas las referencias y textos de los arts. 335 y 336 del Cód. de Comercio, recordadas en oposición al art. 11 de los estatutos de cuya aprobación se trata, modificado como lo tiene resuelto la Sociedad Anónima solicitante (Plantadora Isleña).

Si bien es cierto que los mencionados arts. establecen el régimen general de la administración y dirección de las sociedades anónimas, no es menos cierto que tal régimen no es absoluto de tal manera que en ningún caso pueda ser modificado por la voluntad legalmente expresada de los que formen la sociedad anónima.

Los intereses privados que se reúnen para formar una sociedad, tienen amplio campo para buscar su conveniencia dentro de su reunión y organización interna y externa, con la sola limitación de que no deben ni pueden nunca dañar ni atacar las leyes de orden público. Entiendo en el caso, por leyes de orden público aquellas que envuelven, traducen y aplican principios inatacables de moral, de justicia, de tranquilidad pública, de bienestar general y cuyas prescripciones son un valladar insalvable para las combinaciones de los intereses privados en su continua lucha por el beneficio y su provecho.

Al establecer el art. 11 de los estatutos modificados, que el gerente no podrá ser removido sino por resolución de la Asamblea, en que estén representadas las tres cuartas partes del capital, no se ataca ninguna de esas leyes, sino que, por el contrario hay razón para presumir que se satisfacen los intereses de todos desde el momento que así lo han manifestado y resuelto en la asamblea general en que sancionaron el artículo.

Por otra parte, a estar al texto escrito de los arts. 335 y 336 del Cód. de Comercio que se refieren a los directores y síndicos que administran y fiscalizan las operaciones de la sociedad, y con referencia al caso sub-júdice conviene hacer notar:

1º Que el gerente de la sociedad peticionante y a que se re-

fiere el observado art. 11, no forma parte de la comisión directiva, si no que es concurrente, con su voz y con su voto, según el texto expreso del art. 7º de los expresados estatutos.

2º Que se trata, como lo afirma el precedente escrito, no de un simple director, sino de un gerente técnico que aunque tenga asiento en el Directorio, la asamblea quiere que tenga la mayor estabilidad posible por que así se supone que conviene a los intereses comunes, sin que en ello resulte daño por nada ni para nadie.

3º Que por último, el gerente de que se trata está designado por los mismos estatutos (art. 20), quien según los antecedentes acompañados es dueño de más de las dos terceras partes del capital social.

Estas circunstancias particulares del caso, concurren en mi sentir a demostrar que la cláusula observado no tiene los defectos que se le atribuyen y que V. E. puede aprobar los estatutos con ella, sin daño para la ley ni para el interés público (art. 318, C. de Comercio) — marzo 30 de 1905.

=====

Al reglamentar el P. E. una disposición de ~~modo~~, como la del art. 25 del Código de Minería para los permisos de cateos, no debe alterar los plazos que allí se fijan; debe sólo reglamentar el procedimiento en defensa del cumplimiento de dichos plazos.

#### **División de Minas, sobre necesidad de reglamentar el término de permisos de cateos.**

*Excmo. Señor:*

Es improcedente dentro de lo administrativo una multa como la que se propone en la proyectada reglamentación de la División de Minas y Geología para los permisos de cateos.

Esa reglamentación debe pues modificarse.

Al hacerlo debe reducírsele a simples disposiciones de procedimiento para cumplir el art. 25 del Cód. de Minería evitando los abusos que se señalan a la sombra de los plazos que fija.

A tal efecto creo que esa reglamentación debe hacerse sobre la base.

1º De que los términos que fija el citado art. 25 sean perentorios e improrrogables.

2º De que la prueba en la tramitación (publicación) sea a cargo exclusivo del peticionante, y su presentación sujeta a su vez a términos también perentorios.

3º De que las notificaciones tengan las condiciones legales para que surtan su debido efecto.

Creo que dentro de tales conceptos pueden salvarse los abusos señalados sin tocar en lo más mínimo las prescripciones de la ley de fondo. — Marzo de 1905.

=====

Las empresas de ferrocarriles tienen obligación de conducir gratis las valijas de correspondencia pública del Correo, ya sean de la República, o para la República, o de tránsito a través de la misma, con destino a otra Nación.

**Ferrocarriles Trasandino, Pacífico y otros — sobre inconvenientes que se presentan para el transporte de la correspondencia en tránsito internacional en grandes cantidades, y muy especialmente por el Ferrocarril Trasandino.**

*Excmo. Señor:*

La obligación de los ferrocarriles recurrentes de transportar gratis la correspondencia pública en toda la extensión de sus líneas, radica en su propio contrato de concesión y en las leyes sobre la materia.

En el primitivo contrato de esas empresas, de 26 de enero de 1874, se incluyó el art. 20 que dijo textualmente: “El concesionario se obliga a conducir gratis todas las valijas de la correspondencia pública...” “El contrato posterior de 19 de marzo de 1878, que substituyó al citado de 1874, repitió el texto transcrito del art. 20, en su art. 22.

Esos mismos ferrocarriles se autorizaban y sus contratos se concluían, bajo el imperio de la ley general, vigente entonces, nº 531 de 18 de setiembre de 1872, cuyo art. 58 imponía a toda empresa ferrocarrilera, como un gravamen general, la conducción de “la valija de la correspondencia que gire por los correos”, como textualmente lo consignaba el inciso 1º del expresado artículo.

Y esa obligación o gravamen ha sido impuesta invariablemente y sin distinción alguna a todas las empresas de la República, y se ha repetido en la ley de ferrocarriles vigente n° 2873 cuyo art. 18° en su Inc. 1° repite lo dispuesto por la citada Ley 531.

Ahora bien, el texto claro de los contratos y de las leyes referidas, no admiten distinción al ser aplicados, entre la correspondencia de o para la República, y la de tránsito para Chile o para cualquier otra nación amiga.

Tanto en una como en otra, es *valija de correspondencia pública*, y como tal se reputa, aquella que se gira por los correos, bajo la responsabilidad de la Nación y en las condiciones estipuladas en las respectivas convenciones internacionales.

El hecho de que por esas convenciones tenga derecho la Nación a cobrar una suma de dinero por el tránsito de la correspondencia, no implica que los ferrocarriles tengan o puedan tener un derecho a que se le compense el transporte que efectúan, y que se impusieron gratuitamente y voluntariamente al estipular las bases de su concesión.

Creo pues que las Empresas peticionantes, están obligadas a transportar la correspondencia de tránsito, en las mismas condiciones que la de o para la República, sin derecho a remuneración alguna, y con obligación de poner los elementos adecuados y necesarios para ese transporte, en condiciones regulares de tiempo y seguridad, en todo el trayecto de sus líneas.

Toca a ellas precaverse contra los accidentes que se relacionan en la precedente comunicación y prepararse como mejor convenga a sus intereses, para el aumento de correspondencia señalado y que seguramente se ha de repetir.

En atención al mejor servicio de pasajeros y de cargas, y teniendo en cuenta las dificultades, con que las empresas recurrentes dicen tropezar para cumplir, creo que V. E. podría adoptar medidas que sin declinar del derecho perfecto de hacer transportar toda la correspondencia pública, sea interna o de tránsito, pusiese a las Empresas en condiciones de llenar la obligación contraída de hacerlo.

A tal efecto puede V. E. ordenar que el Correo reglamente la formación, expedición, peso y condiciones de las valijas de que se trata, de manera que dañando lo menos posible el tránsito de la correspondencia, no se dañe tampoco el movimiento de los ferrocarriles peticionantes.

Puede igualmente V. E. fijar un plazo prudencial para que esas Empresas se pongan en aptitud de llenar sus obligaciones al respecto, con arreglo a lo que tiene estipulado en sus concesiones, y bajo el imperio de la sanción penal de la ley de ferrocarriles.  
— Marzo de 1905.

=====

La renuncia de un Juez Federal de la comisión distribuidora de los fondos de la Lotería Nacional en las Provincias, debe aceptarse si tal comisión le fué dada administrativamente, pero no procede si lo fué por ley.

**Juez Federal de Jujuy, renunciando de la comisión de Culto  
y Beneficencia.**

*Excmo. Señor:*

A partir de noviembre de 1895, en que se dictó la ley 3313, han funcionado y funcionará en todas las provincias, dos comisiones de vecinos y funcionarios que tienen a su cargo la administración y distribución de los fondos que se destinan a subvenciones del Culto y fines de beneficencia.

La primera radica en su origen, en los decretos de enero 12 de 1884, y mayo 18 de 1894, los que se dictaron a efecto de la fiel distribución y guarda de los fondos que por primera vez votó el Congreso para Culto y Beneficencia en las Provincias.

Radica la segunda, en el art. 8º inc. 2º de la citada ley 3313.

Estas comisiones han funcionado y funcionan separadamente en todas las Provincias con la misión de administrar y distribuir las primeras subvenciones para el culto, y las segundas, los fondos a que se refiere el art. 7º de la citada ley.

Es de notar, en este punto, que los jueces federales, que formaban parte de las primitivas comisiones creadas y organizadas por los citados decretos, fueron incorporados por mandato de la ley, a las comisiones creadas para distribuir los fondos exclusivamente de beneficencia a que se refiere el citado artículo.

De aquí que los expresados funcionarios hayan dejado la comisión que les confirió el P. E., para desempeñar las que le dió la ley.

Por razones que no conozco, la Provincia de Jujuy ha sido una excepción a lo que dejo relacionado; allí no parece existir sino una sola comisión para ambos fines, y el Sr. Juez Federal aparece formando parte de ella, aún presidiéndola.

Ahora bien, como la renuncia que dicho Juez tiene presentada ante V. E., no especifica si rehusa desempeñar uno y otro de los fines antes indicados, es el caso de suponer que lo hace respecto de la totalidad de la comisión.

En tal concepto considero que esa renuncia debe ser aceptada en lo que se refiere a su intervención en el movimiento de los fondos destinados al culto, y no aceptada en su intervención respecto a los fondos de la beneficencia.

Las razones que tengo para esto son las siguientes:

1º Que proviniendo la intervención del Juez Federal renunciante, en el manejo de los fondos del culto, de los decretos de 1884 y 1894, sus funciones en tal sentido, de índole administrativa, se presumen voluntarias y por ende pueden ser legítimamente renunciadas por él.

2º Que no se opone a tal renuncia, la manera como se entregan y distribuyen esos fondos por el art. 7 de la ley de Presupuestos para 1899, se deduce la cantidad, que esa disposición expresa, y se entrega separadamente, de aquella que es destinada a la beneficencia, por la comisión de la Lotería de la Capital.

3º Que existe el precedente de los decretos de diciembre 11 de 1893 y febrero 28 de 1895, en que se aceptaron las renunciaciones de los Jueces Federales de Catamarca y de Santiago del Estero, de miembros de la respectiva comisión de culto y beneficencia.

4º Que no sucede lo mismo respecto de la intervención del Juez Federal renunciante, en el recibo y distribución de los fondos de la beneficencia a que se refiere el art. 7º de la Ley 3313. — Abril 7 de 1905.

=====

No debe acordarse personería jurídica a una asociación, cuyo fin no es el bien general o común, y menos cuando establece en sus estatutos, restricciones a la libertad de trabajo de las personas que la integran y tiende a la implantación de monopolios contrarios a dicha libertad de trabajo.

### **Sociedad Unión de Prácticos Patentados del Puerto Rosario, sobre aprobación de Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

La Sociedad “Unión de Prácticos patentados del Puerto de Rosario”, que según se desprende del art. 2º de sus estatutos se propone la protección mutua entre sus asociados, necesita en primer término, tener por objeto el bien común, para encuadrar sus propósitos dentro de lo dispuesto en el Inc. 6º del art. 33 del Cód. Civil.

El art. 6º de los referidos estatutos, establece qué: “Si entre los miembros de la Sociedad hubiese alguno o algunos, con patente de Práctico de los Ríos, que por cualquier circunstancia y en cualquier momento *quisiera pilotear buques fuera del Puerto, perderá por ese solo hecho, la parte proporcional que le corresponda del dividendo del mes que se efectuara el pilotaje.*

No sólo nada gana el bien público, con semejante restricción impuesta a los Prácticos de los Ríos patentados del Rosario, sino que ella resulta perjudicial a la comunidad, desde que tratándose de un puerto nuevo que necesita facilidades de todo género para el servicio de carga y descarga, dicho artículo de los estatutos prohíbe y castiga a los socios que, legalmente habilitados para pilotear buques fuera del Puerto, lo llegaran a hacer.

Y esta restricción impuesta a los socios puede decirse que se extiende a todo el gremio de Prácticos patentados del Puerto de Rosario, porque tratándose de un Puerto nuevo, es lógico presumir que dicho gremio, es aún reducido allí.

El art. 7º que establece que los socios no pueden ausentarse del Rosario (asiento de la Sociedad) bajo ningún pretexto sin dar previo aviso a la Sociedad informándola del motivo de su ausencia, sólo implica una restricción a la libertad de elegir y cambiar domicilio, restricción que repugna al art. 99 y concordantes del Código Civil que, por otra parte, traba la circulación y rápido transporte de los



Prácticos de los Ríos entre los Puertos de la República, con perjuicio del interés general de la comunidad.

De las citadas disposiciones de los estatutos y de otras concordantes de los mismos, aparece la proyectada Sociedad con tendencias a monopolizar el ejercicio del pilotaje en el Puerto de Rosario. Y precisamente, aunque tal monopolio sea benéfico a los asociados (que sólo alcanzan a 13 personas) daña las conveniencias generales que resultan de la competencia entre los diversos Prácticos de los Ríos para ejercitar su profesión, contratando el pilotaje de buques surtos fuera del Puerto, con entera libertad y con las solas restricciones de la oferta y la demanda en sus servicios.

Los recurrentes citan en apoyo de sus pretensiones, el caso de la “Sociedad de Prácticos de la Rada y Puerto de Buenos Aires”, que fué reconocida en el carácter de persona-jurídica por decreto de V. E de fecha 17 de marzo de 1893.

Pero hay una diferencia fundamental entre esa Sociedad y la que motiva esta gestión.

Aquella se propuso, como resulta del art. 2º de sus Estatutos, pilotear los buques de la Rada, conducirlos al Puerto Madero o al Riachuelo de la Boca; *proporcionar Prácticos del Puerto diplomados y patentados a los armadores, agencias o capitanes que lo soliciten; facilitar prácticos al Gobierno, cuando los necesite ya sea para emplearlos en la conducción de buques o para formar parte de la comisión examinadora ante la cual rinden las pruebas los aspirantes, gestionar del Gobierno los derechos del gremio o, el deslinde de atribuciones de los prácticos lemanes de los ríos, a fin de que los movimientos de los buques en la rada y puertos, en ningún caso se hagan sino bajo la dirección de prácticos diplomados y patentados, informar a quien lo solicite, sobre la causa determinante de las varaduras o daños sufridos en la rada y puertos, etc.*

Y si bien con todos estos propósitos se favorece el interés de sus asociados la “Sociedad de Prácticos de la Rada y Puerto de Bs. As.”, consulta y promueve el interés de la comunidad, sin tendencias excluyentes para los del gremio, sin propósitos de monopolio que choca con el libre ejercicio de las industrias, actos que son accesibles a todos los habitantes del país en armonía con el espíritu de nuestras instituciones y el bien de la comunidad.

La Sociedad “La Unión de Prácticos patentados del Puerto de

Rosario'', por las razones expuestas, no se encuentra en condiciones de obtener el beneficio de la personería jurídica que solicita, con sujeción al citado Inc. 6º del art. 33 del C. Civil. Su situación, es diferente de la citada sociedad de ''Prácticos de la Rada y Puerto de Buenos Aires'' como lo he manifestado.

La asociación recurrente puede alcanzar sus fines, sin el carácter de persona jurídica, quedando sus asociados cuando contraten con terceros, sujetos a las responsabilidades personales que señalan las leyes del país. — Abril 1905.

=====

Denunciado ante el P. E. el descubrimiento de una mina de oro, y notificado el interesado para presentar la muestra del mineral dentro del más breve plazo posible (art. 115 del Cód. de Minería), no puede acordarse a otro la misma pertenencia minera, por no haberse presentado la muestra de mineral, y considerarse por ello, que ha habido abandono de la pertenencia, mientras no se fije dicho plazo, a efectos de acompañar la muestra.

**Salvador Trotta y otros, sobre pertenencia minera ''Aventurera'' en el Neuquén.**

*Excmo. Señor:*

Según se desprende de las constancias del expediente letra U, nº 3787, Don Pedro Félix Vicuña se presentó ante V. E. en noviembre de 1903, como descubridor de un criadero de mineral de oro en cerro desconocido, ubicado en el Territorio del Neuquén, en terreno del Estado.

Vicuña solicitó que se adjudicaran las pertenencias mineras que como descubridor, decía corresponderle, según lo dispuesto en los arts. 111, 113 y 132 del Código de Minas y V. E. dando curso a esta petición, en 21 de octubre de 1904, ordenó el registro y publicación conforme al art. 119 del referido Código, habiéndose cumplimentado esta diligencia según consta a fs. 9 vta. de dicho expediente.

Por resolución de fecha 27 de octubre de 1904, la repartición correspondiente dispuso que se notificara al interesado para que, *a la brevedad posible*, fíjase los límites de la mina descubierta, lla-

· mada "Aventurera" y entregarse la muestra del mineral extraído de la misma, de conformidad con el art. 115 del citado Código.

Esta resolución fué notificada al representante legalmente constituido por Vicuña, Don Enrique Tagle Jordán, en la misma fecha del 27 de octubre del año ppdo.

En tal estado de cosas y no habiendo cumplido Vicuña con la obligación de presentar la muestra del mineral descubierto, para cuya ejecución se le señaló *el más breve plazo posible*, se presentan los Sres. Salvador C. Trotta, J. M. Espeche y otros, en fecha 4 de enero del cote. año a denunciar por abandono la referida mina invocando el art. 179 del Cód. de Minería.

Pero como ha sido tramitado el escrito en cuya virtud Vicuña hizo manifestación de su descubrimiento, a pesar de no haber acompañado el interesado la muestra del mineral como lo manda el art. 113 del citado código y por otra parte, no se ha señalado un plazo perentorio para que Vicuña satisficiera dicho requisito (art. 115 del citado Código), desde que no puede interpretarse como plazo sino como condición, la época del *más breve plazo posible*, considero que no es procedente declarar abandono de dicha pertenencia minera, sin antes fijar términos categóricos para que Vicuña satisfaga aquella condición.

Por otra parte, después de registrada y publicado el registro de la "Aventurera", el descubridor tiene hasta el plazo de 100 días para hacer labores en la mina, que ponga de manifiesto el criadero, etc. de acuerdo con el art. 133, plazo que es prorrogable en el caso del art. 134 del Cód. de Minas.

Y habiéndose registrado la mina el 21 de octubre de 1904 es obvio que, hasta el 4 de enero del año que corre, fecha en que se han presentado los Sres. Trotta y otros denunciando el abandono del descubridor Vicuña, éste tenía perfecto derecho para elaborar la mina, con sujeción a los arts. 133 y 134 del citado Código.

Por las consideraciones precedentes y en atención a que en el caso ocurrente, no se ha dado cumplimiento al art. 115 del C. de Minería, considero que es procedente satisfacer las prescripciones de este precepto legal, antes de dar curso a la petición de los Sres. Trotta y otros. — Abril de 1905. Decreto aclarando abandonada la mina: Boletín oficial N° 3510, página 98, de julio 6 de 1905.

=====

A falta de tratados de extradición, ésta se requiere y concede a mérito de la reciprocidad. Cuando esta reciprocidad es imposible, como sucede con el Brasil, cuya legislación atingente no armoniza con la nuestra, la extradición no puede ni debe requerirse.

### **Juez Federal de Corrientes, envía exhorto para pedir la extradición en el Brasil.**

*Excmo. Señor:*

No existiendo tratado de extradición con los Estados Unidos del Brasil, rige para los casos de otorgar o requerir la extradición, el principio de la reciprocidad o *la práctica uniforme* de las naciones, según lo prescribe el Cód. de Procts. Penal en su art. 46, Inc. 2º.

Los dos términos que emplea el expresado inciso pueden perfectamente reducirse a uno sólo, es decir, que en caso de no existir tratados, es de aplicación el principio de la reciprocidad, que la práctica uniforme de las Naciones ha adoptado para ejercer la facultad privativa y soberana de otorgar o requerir la extradición, sin menoscabo de la propia y de la ajena soberanía.

Este principio cuya importancia radica en los actos de soberanía que la entrega o pedido de un criminal supone, exige la condición esencial de que, tanto la Nación requirente, como la requerida, quieran o puedan, según sus propias leyes e instituciones, ejecutar los actos o llenar las exigencias respectivas, necesarias al pedido u otorgamiento de la extradición.

Y así, si una de esas naciones no puede producir el acto o actos que la otra exige como indispensables para el arresto, identificación y entrega del requerido, o la otra está inhibida de acceder a tal entrega por sus propias leyes el principio de la reciprocidad, como su nombre lo indica, no puede ser aplicado, y en consecuencia y no habiendo tratado, la extradición es imposible entre países que se encuentran en tales condiciones.

Esto es lo que, según antecedentes que existen, sucede en el caso de la extradición que por intermedio de V. E. requiere el Sr. Juez Federal de Corrientes del Sr. Juez del Crimen de San Borja, jurisdicción de los Estados Unidos del Brasil, de los guardas fiscales de esa Nación Alvaro Silveyra Escobar, Honorio Ferreyra y Palonio

López acusados de homicidio en territorio Argentino del individuo Camilo Julián de Sena.

Las circunstancias especiales que rodean el caso y las leyes y prácticas vigentes en la vecina República del Brasil, en materia de extradición, colocan a su gobierno en tan distinta condición del nuestro, que a falta de tratado, el principio de la reciprocidad es de aplicación imposible, resultando por ende improcedente, bajo todos los aspectos, la extradición que dejo mencionada.

En primer lugar, cuadro en el caso la vehemente presunción de que, los guardas fiscales reclamados, son ciudadanos brasileños, no sólo por su procedencia y su apellido, sino por sus funciones en el momento, en que se dice, cometieron el hecho de que se les acusa.

Este sería el primer inconveniente para que pudiera prosperar la extradición solicitada, no sólo por la oposición que seguramente opondría el Brasil para librar sus propios ciudadanos, sino porque V. E. nunca podría ofrecer reciprocidad en este concepto, dado que la ley prohíbe la entrega de los ciudadanos argentinos a un gobierno extranjero salvo el caso improbable, siempre como ahora, de que los requeridos quisieran ser juzgados por los tribunales del país extraño y requiriente. (Art. 669 del Cód. de P. Penal).

En segundo lugar y aun poniéndonos en la hipótesis de que los referidos reclamados no fueran ciudadanos brasileños —hipótesis en que se coloca el Sr. Juez requirente, en su providencia del 9 de diciembre de 1904 (fs. 32)—, aún en tal caso la extradición es improcedente por ser siempre imposible la reciprocidad con la República del Brasil.

Además de los documentos y antecedentes que por nuestra ley re requiere, para juzgar sobre el derecho del Gobierno requirente de la presunción y extensión de la culpabilidad del acusado o condena del ya juzgado que se reclama, así como de su identidad personal (art. 651 C. de P. Penal), el gobierno brasileño, con arreglo a sus propias leyes exige como indispensable para dar curso al reclamo de un acusado, la clausura del sumario de que haya sido objeto, y el pronunciamiento sobre su culpabilidad.

En efecto, la ley brasileña de enero 30 de 1892, en su art. 1º, inc. 7, calcada sobre lo dispuesto en el art. 72, incs. 13 y 14, de la Constitución de la República, vigente en febrero de 1899 —ley que aunque fué dictada para la extradición entre sus Estados se aplica

invariablemente en las extradiciones solicitadas por Naciones amigas—, esa ley digo, en la disposición citada, exige, además de otros requisitos generales, el original o copia legalizada del auto llamado de pronuncia que clausurado el sumario, se pronuncia sobre las constancias de autos, califica el delito y establece la presunta culpabilidad del requerido.

Este auto de *pronuncia* dictado en la manera y oportunidad en que la ley brasileña lo exige, y que ha obstaculizado otras extradiciones solicitadas con anterioridad a la presente (extradición de los hermanos Krieger en 1900) no figura ni se inserta en los antecedentes y documentos con que el Sr. Juez Federal de Corrientes instruye su pedido de extradición.

Y es natural que tal cosa suceda, por la sencilla razón de que, con arreglo a nuestras leyes procesales, es materialmente imposible dictar semejante auto, ni nada que se le asemeje, según el texto expreso de los arts. 10 y 150 del Cód. de P. Penal.

En efecto, esos artículos prescriben que la locura, la fuga o la rebeldía del procesado no suspenden ni paralizan el sumario, sólo que, ocurrido ésto, se guardarán los autos y piezas de convicción hasta que el procesado sea habido, se presente o en su caso recupere su razón, en cuya oportunidad debe proseguirse aquél hasta su clausura.

Tales disposiciones, como se ve, alejan la posibilidad de dictar un auto semejante al de *pronuncia* que supone la clausura del sumario, la calificación del delito y la presunta culpabilidad del acusado, lo que según nuestras leyes sólo puede dictarse en presencia del procesado responsable o previa su declaración indagatoria.

De estas diferencias de legislación surge el diverso criterio que en materia de extradición, tiene el Gobierno de la República del Brasil, criterio que siendo soberano e imprescindible dentro de su jurisdicción, como de que viene de la ley, quiebra la reciprocidad con la República, dado que V. E. no podrá nunca presentar los autos y diligencias que aquella Nación exige para otorgar una extradición como la de que se trata.

De aquí pues, que aún en el caso de que los prófugos requeridos no fueran ciudadanos brasileños, no es posible basar su extradición en el principio de reciprocidad, única base para su requerimiento a falta de tratado.

Iguales consideraciones son aplicables, al pedido de que tales prófugos sean juzgados por los tribunales brasileños, no ya como erróneamente lo insinúa el Sr. Juez Fedreal de Corrientes en su citada providencia de diciembre de 1904 (fs. 32 vta.) sino con arreglo a sus propias leyes, como en caso análogo sucedería en territorio argentino (art. 669, Cód. de P. Penal).

Faltando a tal pedido el despacho de *pronuncia* a que me he referido, la misma autoridad brasileña no podría requerir el arresto de los prófugos de que se trata, no sólo por la prescripción constitucional que allí rige, de que ninguna persona puede ser detenida ni retenida en prisión sino por culpa probada (art. 72, incs. 13 y 14 de la Constitución del Brasil de 1891) salvo el caso de infragante delito, sino porque nunca sería base para la iniciación de un proceso judicial los documentos enviados por un país extraño, que no satisficieran las exigencias de su ley respectiva. (Ley citada de enero 30 de 1892).

Aún cuando haya de sentirse, que en el caso sea imposible la extradición solicitada por el Sr. Juez Federal de Corrientes, con el elevado objeto de satisfacer las exigencias de la justicia, V. E. no puede ni debe tentar un pedido, cuya negativa tiene razón para esperar de un gobierno sujeto a prácticas y leyes que no armonizando con las de la República hacen imposible la reciprocidad, única condición que podría fundarla en el caso presente.

Y si esta imposibilidad de extradición con un país vecino y amigo, crea una situación desfavorable para la acción de la justicia y la protección de nuestras relaciones políticas y nuestros intercambio comercial, la celebración de un tratado, como ya se ha iniciado y proyectado antes de ahora, sería el medio de hacerla desaparecer sin necesidad de chocar con una legislación y una práctica que no admite otro camino.

En mérito de lo expuesto, considero que V. E. debe devolver estos antecedentes al señor Juez Federal de Corrientes, haciéndole presente los inconvenientes que obstan al giro de la extradición que se requiere. — Abril de 1905.

=====

Es contraria al espíritu y letra del Código de Minería, la limitación de una zona alrededor de una mina registrada, dentro de la cual se prohíba toda exploración o cateo.

**División de Minas, solicita se derogue el decreto de julio 1º de 1895, sobre permiso de cateo a 5 kilómetros de una mina registrada.**

*Excmo. Señor:*

Es indudable que el decreto de julio 1º de 1895, cuya derogación se indica como conveniente, fué dictado al objeto de evitar confusiones y choques entre concesionarios de minas y recurrentes de permisos de exploraciones y cateos.

No puede negarse que ese decreto, al prohibir que se dé curso a tales permisos, sobre región que esté a menos de cinco kilómetros de una mina concedida, ha evitado confusiones, choques y aún litigios entre dueños de minas y exploradores y cateadores.

Que ha evitado el abuso de que fraudulentamente diversas personas confabuladas, hayan detentado o podido detentar por largo tiempo, toda una zona minera a fines de exclusiva especulación.

Y por fin ha contribuído a garantizar y hacer, por demás cómoda, la situación de los concesionarios de minas conocidas u obtenidas de V. E.

Estas ventajas, sin embargo, no compensan ni han podido compensar los inconvenientes y trabas que ese decreto tiene impuesto, no sólo al movimiento que se produce, de un tiempo a esta parte, sobre exploraciones mineras, sino también a los derechos que el mismo Cód. de Minería acuerda, a los que emprenden tales tareas y verifican descubrimientos de filones y cuarzos.

Pueden señalarse como inconvenientes serios y muy de tomarse en cuenta, dentro del primer grupo:

1º) El monopolio y exclusividad que el decreto sanciona a favor del concesionario de una mina registrada, no sólo sobre ella, sino también sobre una extensa zona de sus alrededores —5 kilómetros alrededor de una mina, cerrada a toda exploración, cateo o reconocimiento.

2º) La misma posibilidad de parte de este concesionario de perpetuarse en el dominio exclusivo de esa región, por medio de los cateos fraudulentos que señalan para los cateadores y exploradores.

3º) La dificultad impuesta al descubrimiento de nuevos criade-



ros en los alrededores de una mina o mineral conocidos, con detrimento de la riqueza que de allí pudiera extraerse, siendo de notar que esas regiones son las más propicias para esos descubrimientos, dado que los filones de una mina determinada, suele extenderse en diversas direcciones, que si escapan al concesionario de ella, pueden no escapar al explorador y cateador de los alrededores.

Fuera de estas consideraciones relativas a los inconvenientes del decreto para el aumento de la riqueza minera, que es riqueza pública, es de observarse que lo que dispone, extrema una disposición legal, de tal manera, que violenta y falsea su espíritu y el de la ley misma:

1º) Porque si bien es cierto, como lo observa la Dirección de Minas y Geología, que el art. 36 del Cód. de Minería protege al concesionario de una mina registrada, contra toda exploración o cateo dentro de sus límites, no es menos cierto, que ni en su texto ni en su espíritu se opone a que esas exploraciones se hagan en los alrededores y cercanías de la expresada mina.

2º) Porque, desde que la ley admite la posibilidad (art. 111) de que se descubra nuevo criadero dentro del radio de los cinco kilómetros de una mina ya registrada, es lógico deducir que, siendo las exploraciones y cateos, los que pueden conducir a tales descubrimientos, la ley no puede haberlos limitado, pues ello importaría anular lo que ella misma autoriza y admite.

\*3º) Porque los derechos del dueño de la mina registrada, amparados de la manera completa, en que la ley los ampara, no puede confundirse ni chocar con los transitorios del explorador y cateador, fuera de los límites de su concesión, tanto más que, la acción de uno y otro se desenvuelve bajo la inmediata vigilancia de la autoridad correspondiente, interesada en la acción de ambos. Estas razones me inclinan a adherir a la derogación del decreto de julio 1º de 1895. Creo sin embargo conveniente, que al propio tiempo que tal derogación tenga lugar, si así entiende V. E. que debe hacerlo, debe dictarse una prudente reglamentación destinada a evitar los inconvenientes posibles y señalados en el libre ejercicio de los derechos, autorizados por los arts. 111 y 112 del Código de Minas, así como a regularizar los procedimientos que le son consiguientes. — Abril de 1905.

=====

Los funcionarios públicos no pueden ser traídos personalmente a juicio en razón de los actos que realizan en el desempeño de su cargo. Las acciones que hayan de interponerse en tal concepto, deben dirigirse contra la Nación, ya sea dentro de la Ley 3952 o con la venia del Congreso cuando corresponda.

**Departamento de Higiene, sobre demanda interpuesta por  
Don Joaquín S. Vázquez, por imposición de una multa.**

*Excmo. Señor:*

La demanda establecida contra el Presidente del Departamento de Higiene, con motivo de una resolución dictada en ejercicio de las funciones de su cargo, y de que ese funcionario informa a V. E., acompañando sus copias respectivas, es perfectamente improcedente y llama la atención que se le haya dado curso por el Sr. Juez Federal de la Capital.

De acuerdo con principios bien conocidos, y de la Jurisprudencia constante de la Suprema Corte (entre otros, fallo de la página 7, tomo 68) los funcionarios públicos no pueden ser traídos a juicio oficialmente en razón de los actos que ejecutan como tales, en cumplimiento de las obligaciones o en ejercicio de las funciones de su cargo.

Las acciones que se entendieran tener derecho a interponer, semejantes a las que en el caso se trata, pueden sólo motivar una demanda contra la Nación, por tratarse de funcionario o repartición que son meras dependencias de la Administración General de la Nación.

En tal concepto mirada la demanda de que se da cuenta a V. E., ella es de todo punto improcedente:

1º) Porque a causa de su motivo, de la falta de los recaudos consiguientes y de la no realización de los procedimientos indispensables, ella no encuadra absolutamente dentro de los términos del art. Nº 1 de la Ley 3952, sobre demandas contra la Nación.

2º) Porque tratándose de la nulidad de un acto dictado a nombre de la Nación como autoridad política y no como persona jurídica —que no otra cosa importan los actos que tienden al ejercicio de la policía sanitaria dentro del país—, sería necesario para dar curso a esta demanda la autorización del Congreso para ello, la que no resulta haberse obtenido, ni menos acompañado.

En consecuencia de lo dicho, debe V. E. mandar pasar estos antecedentes al Sr. Procurador Fiscal de la Capital para que, en atención a las circunstancias notadas, asuma la actitud que a su Ministerio corresponde en el sentido de procurar en el caso, el imperio de los principios de la ley y de la jurisprudencia que dejo citadas.

Al propio tiempo debe someterse al mismo funcionario, la acción correspondiente para el cobro de la multa impuesta por el Departamento de Higiene, al individuo Joaquín S. Vázquez, pues dado el carácter civil de ese cobro según el art. 567 del Código de Procedimientos Penal, al Procurador Fiscal corresponde la acción en tal concepto. — Mayo 23 de 1905.

=====

El adquirente de tierra pública que no paga la contribución territorial que le corresponde, cae en mora y es pasible de la sanción penal que la ley establece, no pudiendo ampararse en la circunstancia de no estar catastrada la tierra vendida.

### **Sobre pago de contribución directa atrasada.**

*Excmo. Señor:*

\* La obligación de pagar la contribución directa de la tierra adquirida, desde el año siguiente a su adquisición, no podía ni pudo nunca ignorarse por el recurrente, tratándose de una disposición de la ley que debió conocer, mayormente siendo contratante con el Gobierno, en virtud de su propio texto (art. 20 del Cód. Civil).

No habiendo hecho el pago o pagos anuales de que se trata, en las oportunidades determinadas por las leyes de contribución territorial vigentes, desde el año siguiente a la adquisición, ha incurrido, el recurrente, en las multas, que como sanción penal, han establecido y establecen aquéllas, para el deudor que cae en tal mora.

La circunstancia de no estar *catastrada* la tierra vendida, el error o ignorancia supuesta en el P. E. del impuesto adeudado, no disculpa la mora existente, ni exime al moroso de pagar el impuesto adeudado desde el momento determinado por la ley, ni de caer bajo el peso de la sanción penal, que ella establece para el caso.

Pienso pues que corresponde aplicar la ley en su texto y sanción, haciendo efectivo el pago del impuesto y multas en la forma que proceda. — Mayo 1905.

*Decreto de acuerdo. Boletín Oficial N° 3562, pág. 1249 de septiembre 7 de 1905.*

=====

En un contrato de venta de tierra, de conformidad a la Ley 2875, con determinadas obligaciones para los compradores, habiendo éstos cedido sus derechos, corresponde hacer efectiva la sanción penal convenida, en la persona de los cesionarios, si éstos no cumplen con las obligaciones contratadas por los primitivos compradores.

**Larthois Frères, pide reconsideración de una resolución relativa a una multa, en una concesión de tierras.**

*Excmo. Señor:*

Se ha comprobado en este expediente que el Poder Ejecutivo le la Nación por escritura pública de 16 de abril de 1895, vendió a don Juan Bautista Aimá José Dumortier, ochenta mil hectáreas de tierra fiscal en el Territorio del Chaco, dentro de los límites y linderos de antemano establecidos y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 2875, de 21 de noviembre de 1891.

El comprador ha quedado obligado a cumplir las siguientes condiciones, según ha establecido en el contrato:

*Primera:* A introducir en cada diez mil hectáreas, un capital de cuatro mil pesos m/nacional en cualquier industria permanente o cría de ganado vacuno o lanar.

*Segunda:* A construir en cada diez mil hectáreas, un edificio cuyo costo no sería menor de mil quinientos pesos.

Los contratantes han señalado los términos para que el comprador satisfaga tales requisitos y, por otra parte, se ha estipulado, como sanción aplicable al comprador, que si éste no cumple dichas obligaciones en esos plazos pagará al Gobierno, una multa del cuádruplo del valor de la Contribución Directa que deba abonar por sus tierras.

Está debidamente justificado, en las constancias obradas en este

expediente, la falta de cumplimiento a las referidas condiciones del contrato, por parte del comprador.

Se trata de un convenio de compra-venta, celebrado de acuerdo con la Ley 2875 y su armonía con lo dispuesto en el art. 134, inc. 4º del Código Civil, y no de la venta a satisfacción del comprador, a que se refiere el art. 1365 del citado Código.

La venta así operada, ha sido bajo la sanción de la multa expresada, como cláusula penal, cuyo cumplimiento es ineludible para el comprador por haber faltado a las condiciones estipuladas, en armonía con lo dispuesto en los arts. 652, 653 y 654 del Código Civil y con el art. 14 de la Ley 2875 que en carácter especial, rige la materia.

Los recurrentes, señores Larthois-Frères, como sucesores de don Juan Bautista Aimá Dumortier (según consta en autos) en el dominio y propiedad de las referidas tierras, no pueden eludir las obligaciones de su cedente, desde que éste no ha podido transmitirles mejor ni más derechos que los que tenía sobre el inmueble cedido.

La multa que el P. E. exige a los recurrentes, pues, implica una doble obligación establecida contra ellos; en primer término por el art. 14 de la Ley 2875, que el P. E. no puede dejar de cumplir sin resolución del Congreso; y en segundo término, por la citada cláusula penal del contrato, que es ley para las partes, art. 1197 del citado Código Civil.

Por ello y sin perjuicio de las gestiones que los postulantes pueden y tienen derecho a hacer o proseguir ante el H. Consejo:

Opino que V. E. no debería acceder a lo solicitado y mantener en todo su vigor, el decreto de fecha 27 de noviembre de 1903. — Mayo 1905.

=====

Aun cuando las letras de tierra no hayan sido legalmente, protestadas, ellas devengan el interés que establece la ley respectiva, especialmente cuando ha mediado prórroga a favor del deudor.

**Don Juan Ansaldi, solicita prórroga para el pago de letras por compra de tierras.**

*Excmo. Señor:*

Don Juan Ansaldi, compró en remate una área de tierra que perteneció a Ansaldi Hnos. y que se puso en venta por no haber satisfecho esos señores, en oportunidad, las letras que firmaron en pago.

Al hacer el pago de la compra y al examinar la liquidación que se tuvo en cuenta como base de la nueva venta, con el descargo de las sumas que los señores Ansaldi Hnos. habían entregado en algunas ocasiones, el comprador de ahora Juan Ansaldi protesta de los intereses cargados por la mora de las letras vencidas, *que nunca fueron protestadas*, diciéndose dueño del activo y pasivo de los tres Ansaldi y Hnos., primitivos compradores.

Como lo observa el Sr. Procurador del Tesoro, los mencionados intereses nada tienen que hacer en el caso, siendo la obligación de Ansaldi de pagar el precio de su compra, sobre la base del remate perfectamente conocido al ordenarse y anunciarse.

En cuanto a la inclusión de los intereses reclamados en la planilla referida y que sirvió de base al remate, si bien no procedería cargarlos si se tratase de una deuda ordinaria, constante de una o más letras no protestadas, procede en el caso *sub júdice*, por cuanto ese interés estriba y estuvo siempre ordenado por la ley, cuando se acordaba o consentía la prórroga de las letras de tierra (ley de 3 de noviembre de 1882).

Basta tener presente los antecedentes y constancias de este expediente para ver, que a pedido de los mismos Ansaldi Hnos. se prorrogaron las letras que adeudaban, y que cada vez que se acordó tal prórroga, se hizo bajo la condición expresa de pagar el interés mencionado del 6 %.

Este consentimiento tácito de Ansaldi Hnos. al aceptar esa condición en las prórrogas acordadas, ha suplido y suple legal y eficazmente el protesto de sus letras, y por ende, razón ha tenido V. E.,

al cumplimentar la ley, incluyendo en la planilla reclamada y en el saldo presentado a Juan Ansaldi, los intereses, contra los que injustificadamente protesta.

Creo pues que no debe hacerse lugar a lo pretendido por don Juan Ansaldi. — Mayo 1905.

=====

Otorgadas a un particular por la Nación, tierras en amortización de certificados de premios como expedicionario al Río Negro, ella no está obligada a la evicción y saneamiento, estando obligada simplemente a integrar el área que haya de menos en lo otorgado, por culpa de actos del gobierno.

**Domingo Vélez, pide indemnización por resultarle diferencia en contra, en la ratificación de mensura de su concesión en La Pampa.**

*Excmo. Señor:*

De los informes que obran en este expediente, resulta comprobado que de las 1919 hectáreas que corresponden al peticionante don Domingo Vélez, en el lote 7, fracción D, de la Sección XII de la Pampa Central, como cesionario de don Enrique Berbó sólo tiene una superficie de 479 hectáreas, a causa de diferencias ocasionadas por mensuras judiciales practicadas por orden del Gobierno de la Nación.

En virtud de estas circunstancias, el recurrente propone al Poder Ejecutivo, entre otras cosas: 1º) que se le cambie la ubicación al lote 22 de la misma Sección y letra, donde afirma que existen 5000 hectáreas de tierra fiscal disponibles; 2º) que se le dé una indemnización; 3º) que se le autorice a emplear las cinco mil hectáreas al precio de ley.

Para apreciar la improcedencia de las pretensiones del postulante, basta considerar desde luego, con sujeción a los informes producidos, que él no es comprador ni cesionario del Gobierno de la Nación, sobre las tierras referidas, de manera que el Poder Ejecutivo no tiene respecto a él la obligación de evicción o saneamiento a que se refiere el art. 1414 y concordantes del Código Civil.

Las 1919 hectáreas que posee, como cesionario del citado don Enrique Berbó, fueron entregadas a éste a título gratuito, como

amortización de certificados de los premios que la Nación otorgó a los expedicionarios al Río Negro.

Y si es obvio que el mismo Berbó no tiene derecho de colocarse en la situación legal de comprador de las citadas tierras, responsabilizando a la Nación por el saneamiento de la cosa, puesto que era un agraciado con esas tierras, al amparo de certificados otorgados por una ley de premio y de estímulo patriótico, y no por una ley de compra-venta, con menos razón, pues, puede pretender el cesionario de Berbó o sea el recurrente, tener más y mejores derechos que su cedente, según principios fundamentales que rigen la materia.

Ahora bien, si las mensuras practicadas por orden del Gobierno, han sido la causa de que se hayan cercenado al postulante las 1919 hectáreas, quedando reducidas a sólo 479, lo que importa una disminución de 1440 hectáreas, considero de justicia que el Gobierno se limite a integrar esa superficie de tierra de acuerdo con el principio que establece el art. 1109 del Código Civil.

En este concepto, el Poder Ejecutivo sólo debería entregar al postulante igual superficie de tierra que la que le falta por causa de las referidas mensuras, aceptando la ubicación que corresponda, pero sin reconocer ni la más remota obligación de pagar indemnización alguna, ni concederle en venta mayor superficie, ni menos contrariar injustificadamente la ley de tierras vigentes y que le señala la forma de la subasta pública para la enajenación de la tierra fiscal. — Mayo 1905.

=====

Los sueldos son legalmente embargables, cualquiera que sea la modalidad de su pago.

**El Alcalde de la Sección 22 pide embargo de la cuarta parte del sueldo del músico Natalio Tacüini.**

*Excmo. Señor:*

El presupuesto vigente asigna el sueldo mensual que deberá pagarse a los músicos, ya sea de 1ª, 2ª o 3ª categoría, de las bandas militares del Ejército.

Tal remuneración de servicios, consignada en la ley de presupuesto, no puede ser considerada sino como un sueldo, sin que



cambie este carácter en razón de la modalidad empleada, de acuerdo con el art. 5º del Reglamento e Instrucciones para los Comisarios pagadores del Ejército, para entregar el sueldo a cada soldado de tropa, sueldo que se entrega individualmente en *tabla y mano propia*.

El art. 2º de dicho Reglamento, al disponer que “los Comisarios pagadores recibirán del Tesorero los ajustes de los Cuerpos cuyo abono les fuere recomendado, así como las planillas de los *descuentos que por embargo u otras causas deban efectuar*, ha previsto el caso de que se trata.

Respecto al embargo cuyo cumplimiento pide el Alcalde de la Sección 22, en asunto de su jurisdicción, sobre la cuarta parte del sueldo mensual que recibe el músico don Natalio Tacüini, de la Banda del 3º Batallón de Infantería de Línea, se ajusta a lo dispuesto en el inc. 6º del art. 476 del Código de Procedimientos Civiles, cuyo cumplimiento es ineludible por ser ley de la Nación, en razón del principio establecido en el art. 31 de la Constitución Nacional.

Por ello, creo que V. E. debe resolver este asunto, de conformidad a lo pedido por le citado Alcalde. — Mayo 1905.

=====

Procede la disposición de los estatutos de una sociedad anónima, que consigna el no aumento del capital en lo sucesivo. Tal disposición no choca con el art. 354 del Código de Comercio. La fusión de la sociedad con otras, sólo podrá hacerse con conocimiento de la autoridad respectiva.

**Sociedad Anónima de Petróleo del Neuquén, pide personería jurídica.**

*Excmo. Señor:*

No contraría la ley, la disposición del art. 5º de los estatutos de esta sociedad, cuando dispone terminantemente que el capital establecido no podrá ser aumentado en lo sucesivo.

La ley admite que los estatutos dispongan al respecto sin limitación expresa, y ella misma respeta lo que digan según el art. 354 del Código de Comercio que estatuye que deja a salvo la disposición contraria de aquéllos.

Al autorizar el inc. 5º la reintegración o aumento del capital

social en las condiciones que el art. 354 lo establece, es naturalmente en el concepto de que ello sea posible, por no haber disposición contraria en los estatutos, la que se reputa existente, cuando se dice que el capital no será aumentado en lo sucesivo.

Es de notar, por otra parte, que los mismos requisitos exigidos para el aumento de capital, existen para modificar los estatutos (inc. 7, art. 354), lo que quita mucho de la importancia a la disposición y por ende a la observación formulada contra ella.

Creo pues, que los estatutos pueden aprobarse sin modificar el mencionado art. 5º, tanto más cuanto que él puede importar una verdadera garantía para los accionistas en el sentido de mayor estabilidad en el precio y rendimiento de sus acciones.

Dejando esto de lado, creo que debo observar el inc. 1 del art. 4º de los estatutos, por cuanto considero que pueden en casos dados, comprometer intereses públicos, lo que basta, en mi sentir a justificar la observación.

Dada la generalidad de las operaciones sociales según el citado art. 4º, las fusiones o combinaciones autorizadas por su inc. 1º con firmas domiciliadas dentro o fuera del país, deben sujetarse al conocimiento y consentimiento de la autoridad, que en cualquier caso podría velar por el interés público comprometido en la fusión o combinación propuesta.

A tal efecto, considero que al final del citado inc. 1º, convendría agregar lo siguiente: "Las fusiones o combinaciones referidas serán hechas con autorización del Gobierno siempre que afecten un servicio o interés público".

Hecha esta modificación, creo que los estatutos podrían aprobarse, tal como han sido presentados, y acordarse, en consecuencia, la personería jurídica solicitada. — Mayo 1905.

=====

La disposición de los estatutos sociales, que prohíben disminuir el capital, no choca con el art. 354 del Código de Comercio ni con ninguna otra disposición legal.

### **Compañía Sutphen de Lavadores de Oro, sobre aprobación de Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Creo que V. E. puede aprobar las modificaciones introducidas en los estatutos de la sociedad "Sutphen de Lavadores de Oro" propuestas en el escrito de fs. 26 y sancionadas por las asambleas que constan de las actas de fs. 29 y 31.

La de la base 4ª que se refiere a la *prohibición de disminuir el capital*, a que hacía referencia el art. 7 de los primitivos estatutos, y que ha sido observada por la Inspección de Justicia, ni choca, en mi sentir, con el art. 354 del Código de Comercio, ni es una modificación tan fundamental que pueda comprometer las disposiciones legales, la existencia de la sociedad, ni interés público alguno.

No choca con el expresado artículo, porque si bien su inc. 4º pone la facultad de disminuir el capital como propia de la asamblea celebrada en las condiciones que expresa, no es menos cierto que ello es como textualmente lo dice, *salvo disposición contraria en los estatutos*.

Esa disposición contraria, en el caso, es justamente la que encierra la modificación observada que no está por otra parte, prohibida ni implícitamente por la ley.

Quita mucho de su importancia a la observación presentada, el limitado alcance que tiene la prohibición de que se trata, en presencia de la observación que hacen los mismos recurrentes, cuando recuerdan que, con el mismo *quorum* y número de votos que necesitarán para la disminución del capital, pueden también reformar los estatutos y aún la modificación de que se trata.

Es de observarse, por último, que el mismo art. 354 del Código de Comercio, muy poca importancia atribuye a la reducción del capital social que menciona su inc. 4º, cuando excluye a los disidentes de tal medida, del beneficio y derecho que acuerda a los disidentes de los actos a que se refieren los incs. 2º, 3º, 5º y 6º.

Y esto se explica sin esfuerzo, teniendo presente que la disminución del capital social es casi siempre, una medida de prudencia,

que no tiende a disminuir el beneficio de los accionistas ni causa el descuento del precio de sus acciones, salvo el caso de ampliación de los negocios sociales, lo cual, va por lo general, acompañada de una reforma de los estatutos.

Creo que de acuerdo con lo que dejo expuesto, puede V. E. aprobar las modificaciones propuestas a fs. 26, manteniendo la personería jurídica acordada. — Mayo 1905.

=====

No debe admitirse bajo ningún concepto, que en los estatutos se sobrepase el límite de reserva que impone el art. 321 del Cód. de Comercio.

### **Sociedad La Caranday, sobre aprobación de estatutos**

*Excmo. Señor:*

La modificación propuesta por los mismos interesados al art. 8º de los estatutos, que fué oportunamente observado por la Inspección de Justicia, coloca esa disposición dentro de lo prescripto por el artículo 354 inc. 5º del Código de Comercio, y por ello debe autorizarse en la forma propuesta.

En cuanto a las disposiciones de los estatutos (arts 3 y 41) que se reservan para los fundadores el 10 % de las utilidades, distribuído 9 % a los Sres. Alterin y Cía., por razón de compras, y 1 % a don Guillermo Lagleize como iniciador, creo que es justa la observación que se presenta por la Inspección de Justicia, pues es evidente que salva el límite que a tal reserva impone el art. 321 del Código de Comercio.

Si en cualquier forma los recurrentes redujesen ese porcentaje al 10 % que marca la ley, lo que no ha de serles difícil, y tomada en cuenta la modificación que ellos mismos proponen respecto a la duración de lo otorgado a Lagleize por el art. 41 de los estatutos, no encontraría inconveniente en que se concediese la personería jurídica que solicitan.

En caso contrario creo que ella debiera ser denegada. — Mayo 1905.

=====

No debe admitirse administrativamente una excepción de prescripción opuesta al cobro de la contribución territorial, por el Banco Hipotecario Nacional. Dicha prescripción debe resolverse ante el Poder Judicial.

**Banco Hipotecario Nacional, pide se ordene a la Administración de Contribución Directa expida certificado de un campo.**

*Excmo. Señor:*

V. E. no puede ni debe tomar en cuenta la prescripción que opone el Banco Hipotecario Nacional, al cobro legal, que hace la oficina respectiva, de la contribución territorial del bien raíz que aquel trata de enajenar.

V. E. no puede ni debe dar por existente ni declarar una prescripción, lo que en ningún caso le corresponde hacer, menos en detrimento de los intereses públicos que guarda y administra.

Tampoco debe aceptarla hasta tanto no se promueva el juicio respectivo, donde puesta como excepción sea juzgada o establecida, si ella corresponde, por el juez competente para hacerlo.

En consecuencia creo que V. E. debe aprobar y apoyar la actitud de la oficina de contribución territorial que considero legal y correcta. — Mayo 1905.

*Decreto de conformidad: Boletín Oficial N° 3483, pág. 890 de mayo 31 de 1905.*

=====

El P. E. no puede administrativamente prohibir la venta de bebidas alcohólicas a los indígenas en los territorios, pero puede, reglamentando esa venta, obtener los beneficios que se buscan, con aquella prohibición.

**Gobernador del Chaco, consulta si se podría dar un decreto prohibiendo el expendio de bebidas alcohólicas a los indígenas.**

*Excmo. Señor:*

Creo que V. E. no debe autorizar, de una manera absoluta, la prohibición que indica el gobernador del Chaco, porque con ello se lesionaría el derecho que asiste a los comerciantes para vender las

bebidas a que se refiere, y por las cuales pagan impuesto a la Nación, y el de los mismos indígenas para comprarlas.

Pienso sin embargo, que V. E. puede autorizar una prudente reglamentación, en ejercicio de la facultad que le confiere el Inc. 12 del art. 8 de la Ley 3727, que sin dañar tales derechos ponga remedio a la situación a que se refiere el expresado Gobernador.

Esa reglamentación podría fácilmente regularizar y limitar el expendio de bebidas alcohólicas a los indígenas, al objeto de salvar su salud, de evitar su degradación moral y de poner una valla a los estragos que se señalan.

A tal efecto, podría V. E. encomendar a ese funcionario que proyecte la aludida reglamentación, dentro del concepto que dejo expresado, poniéndolo en vigencia una vez que V. E. se sirviera aprobarlo. — Mayo 1905.

=====

La excepción del servicio militar, que de conformidad con la ley de la materia se acuerda por un año, debe computarse por ese lapso y a partir del día del otorgamiento, no pudiéndosele cercenar con motivo del cobro de la tasa respectiva el 31 de diciembre de cada año, dispuesto por un Decreto Reglamentario.

### **Consulta sobre el término del pago de la tasa militar, en las excepciones del servicio.**

*Excmo. Señor:*

La excepción del servicio militar a que se refiere el art. 100 de la Ley 4031, es un derecho acordado a los ciudadanos que se encuentran en las condiciones y circunstancias que se enumeran en los incisos que lo constituyen.

Ese derecho está limitado al término de un año, según el texto expreso del art. 120 (in fine) de la misma ley, y sujeto al pago anual del impuesto correspondiente y establecido por el art. 119 bajo el título de Tasa militar.

No habiendo, en la citada ley, expresión alguna que autorice su interpretación fuera de su texto, es evidente que cuando ha dicho que la excepción será válida por un año, ha establecido esa medida de tiempo como duración del derecho acordado.

Y así, en cualquier tiempo en que se acuerde la excepción del servicio militar a un ciudadano, una vez pagada su tasa militar, tiene derecho a usarla como válida y legal durante un año contado desde su otorgamiento, y computado en la manera que corresponde por la ley civil.

En tal concepto, reputo que lo dispuesto por el art. 118 del Decreto Reglamentario de la citada ley, es y debe ser considerado como improcedente e incapaz de producir efectos, en cuanto fija el 31 de Diciembre como época general para la caducidad de las excepciones, cuando cercena con ello, el término claramente establecido por la ley.

El Decreto Reglamentario que he citado, ha sido dictado por el P. E. a mérito de la facultad que le acuerda el art. 86 inc. 2º de la Constitución, y en tal concepto, la reglamentación dada a la ley 4031, no ha podido ni alterar su espíritu, ni violentar sus disposiciones.

Y esto ha sucedido, cuando el citado art. 118 del decreto, ha alterado el término de validez de la excepción, fijando el 31 de diciembre, aun para aquellos que la hubieran obtenido después del 1º de Enero del año correspondiente.

Este cercenamiento por el P. E. de un derecho acordado por la ley, es tanto más improcedente, cuanto que se le subordina al pago de un impuesto, que es previo a su reconocimiento por el término expresado.

Comprendo que es un inconveniente administrativo el no proceder a la renovación de las excepciones a un mismo tiempo y a fin de cada año, como lo prescribe el citado decreto reglamentario, pero ello no es ni será nunca razón bastante para autorizar una alteración en el texto y el espíritu de la ley, y una disminución del derecho que ella ha entendido otorgar.

De acuerdo con lo que dejo expuesto, creo que V. E. al proceder a la reglamentación que se propone, debe tener presente el término legal de un año para la validez de las excepciones del servicio militar, pues de otra manera, salvaría injustificadamente los límites expresos de la ya citada disposición constitucional en la interpretación de la ley. — Mayo 1905.

=====

La Junta de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, debe pronunciarse sobre lo que se le haya sometido, y de su resolución compete conocer al P. E. en las condiciones de los arts. 29 y 57 de la Ley 4349.

**Francisca G. Armstrong de Besler, solicita su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Este expediente debe, en mi concepto, ser devuelto a la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones, para que su Junta de Administración resuelva el caso, acordando o negando la jubilación pedida, de acuerdo con la facultad que le confieren los arts. 29 y 30 de la Ley 4349, y en cumplimiento de las resoluciones de V. E. de noviembre 30 de 1904 y mayo 10 del corriente año.

Una vez producida esa resolución definitiva, en cualquier sentido que lo sea, y elevada a V. E., de acuerdo con el citado art. 29 de la ley, será recién el caso de que el P. E. se pronuncie, ya sea aprobando la pensión, si siendo acordada la creyera procedente, ya sea juzgando la negativa, en caso contrario, de la manera establecida por el art. 57 de la ley respectiva.

En tal oportunidad será el momento en que el que suscribe podrá legal y eficazmente dictaminar sobre el fondo del asunto. — Mayo 1905.

=====

La existencia de relativa autonomía, en que la ley ha entendido colocar a la Junta de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, impide que el P. E. pueda reglamentar el art. 19 de la ley de la materia, por cuanto dicho reglamento supondría un avance del P. E. contra la autonomía de la Junta.

**Caja de Pensiones y Jubilaciones, pide reglamentación del Art. 19 de la Ley 4349.**

*Excmo. Señor:*

Los arts. 1, 4, 5 y siguientes de la Ley 4349, que creó la Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones, separó de la renta pública y de su administración, los fondos destinados a aquellos objetos, cui-



dando de declarar, como lo hizo, que ellos pertenecían a los empleados y funcionarios que comprende.

Consecuente con tal espíritu de separación, la ley estatuyó en sus arts. 29 y 30 que la disposición de esos fondos, a los objetos de acordar jubilaciones o pensiones, ordinarias o extraordinarias, correspondía privativamente a su junta de administración, creada por el art. 5, con la sola limitación de elevar al P. E. las resoluciones para su aprobación, en la manera general o en la especial que establece el art. 57 de la citada ley.

Tal independencia y libre acción de la expresada junta, desaparecería por completo, en caso de dictarse la reglamentación que se indica en la nota que encabeza este expediente.

El criterio de la Junta quedaría sometido en cuanto a las jubilaciones extraordinarias, al que el P. E. estableciere en el decreto respectivo, y entonces serían letra muerta, los arts. 29 y 30 de la ley, e inútiles los procedimientos que establece en ellos y aún en su art. 57 citado.

Quedaría convertida, con evidente alteración de la ley, en una de las tantas oficinas administrativas, a cuyo concepto, justamente la ha querido sustraer la ley, dándole facultad de aplicar su criterio y de disponer de los fondos propios de la caja, con el único límite de la aprobación oportuna del P. E.

Bien está que éste, en cada caso, se pronuncie y controle las resoluciones de la junta, que es lo único que la ley exige, pero no puede ni debe, con motivo de una reglamentación, desnaturalizar y relegar la junta creada, a la modesta función de aplicar el decreto reglamentario que se dictará, en contraposición al texto y espíritu manifiesto de la ley.

Estas consideraciones me inducen a pronunciarme en contra de la reglamentación que se insinúa y a aconsejar a V. E. no dicte el decreto consecuente, sin perjuicio de ejercer en cada caso la facultad de revisión que la ley le acuerda sobre las resoluciones de la Junta. — Mayo 1905.

*Adoptado como resolución: Boletín Oficial N° 3490, pág. 1127, de junio 17 de 1905.*

=====

Habiendo dispuesto la ley 3195, que las pensiones anteriores y posteriores a su vigencia caducarian a los 10 años de otorgadas, la ley 4350 que prorrogó ese término por 5 años más, debe entenderse que comprende todas las pensiones a que se refirió la ley 3195 tanto anteriores como posteriores a su sanción.

**Contaduría General** — qué corresponde establecer si las pensiones que caduquen en virtud de las prescripciones del art. 12 de la ley 3195 y aún aquellas que hubiesen fenecido por haber sido acordadas por un tiempo menor del que prescribe dicho art. 12, están también comprendidas dentro de la prórroga de que habla la ley 4350.

*Excmo. Señor:*

La ley 3195, en su art. 12, fijó el lapso de diez años, como máximo del término fatal de toda pensión que de ahí en adelante fuera acordada por el Congreso.

El art. 14 de la misma ley —teniendo en cuenta, sin duda, la injusticia que podría producirse, dejando persistir las pensiones anteriores a la ley, cuando se limitaban las posteriores—; prescribió que éstas caducarian a los diez años de su propia vigencia.

Esto basta, en mi sentir, para denunciar el espíritu real y positivo de la ley: fijar el término de diez años, como máximo para la existencia de toda pensión, anterior o posterior a ella.

Ahora bien, llegado el año 1904, aunque cumplían los diez años a que se refiere el art. 14 de la misma, se producía *ipso facto* la caducidad de las pensiones anteriores a ella y empezaba a producirse la de las acordadas posteriormente a su fecha (art. 12).

En tal circunstancia y habiendo coincidido ésto, con la sanción de la ley 4349 que ha creado la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la que limita, considerablemente, el derecho a ambas cosas, el Congreso, por un acto de liberalidad, dictó la ley 4350, que prorrogó por cinco años el plazo extinguido y a extinguirse, de las pensiones referidas por la ley 3195.

A este objeto, sin duda, mencionó el texto de su art. 1º no sólo las pensiones del art. 14 de la expresada ley 3195, sino también las demás “regidas por dicha ley”.

En tales conceptos de interpretación del texto y espíritu de las

leyes mencionadas, y coincidiendo con los informes que preceden, reputo que la prórroga a que se refiere la citada ley 4350, debe entenderse que comprende todas las pensiones anteriores o posteriores a la Ley 3195. — Mayo 1905.

*Decreto prorrogando por cinco años: Boletín Oficial N° 3492, de junio 12 de 1905.*

=====

Las mejoras hechas en un servicio público, por persona remunerada para ello por la Nación, pertenecen a ésta, y quien realizó dichas mejoras, no tiene derecho a pretender que se le paguen, al dejar de prestar sus servicios a la Nación.

**Dr. del Valle — cobrando una suma por un índice que hizo para la oficina de hipotecas.**

*Excmo. Señor:*

Al confeccionar el libro de que hace mérito el peticionante, señor del Valle, para requerir la compensación extraordinaria que requiere, entendió como el mismo lo afirma, atender y facilitar cumplidamente el servicio del público, con la rápida expedición de los certificados y demás diligencias de su oficina.

Esto lo hizo respondiendo:

1º — A su obligación implícita de servir al público con la precisión y deferencia que la Nación está en el derecho de exigir de sus empleados, a quienes remunera y compensa en forma de sueldos o comisiones.

2º — A sus propios y particulares intereses, beneficiarios directos de la rapidez y corrección de sus servicios.

Todo lo que haya hecho en el primer concepto, ya sea organizando el mecanismo del registro, ya sea confeccionando libros auxiliares y necesarios, lo ha hecho como concesionario de un servicio público, a cambio de una comisión bien remunerativa, y en tal sentido todo lo que dejó en la oficina en mira de ese servicio, pertenece a ésta, dado que con la comisión percibida sobre su producido, le habría sido ampliamente pagado.

Poco esfuerzo se requiere, bajo el segundo concepto, para com-

prender que la Nación no tiene por qué pagar lo que su concesionario hizo para el mayor y mejor rendimiento de su concesión, tanto más si se tiene presente, que al otorgarle la esperada concesión se le confió la mejor organización, mecanismo y funcionamiento, creando y estableciendo, como inherentes a la oficina, los elementos necesarios a tales objetos.

Estas consideraciones me inducen a pensar que V. E. debe desestimar la petición presentada. — Mayo de 1905.

*Decreto de acuerdo: Boletín Oficial N° 3557, pág. 1129 de septiembre 1° de 1905.*

=====

Vencido los términos dentro de los cuales debió construirse una línea férrea, según concesión de la ley 2884, procede su caducidad, si no se ha hecho la expresada construcción.

Para tomar en cuenta a una sociedad extranjera, que pretenda una determinada concesión, debe la sociedad justificar su existencia legal.

#### **Pelleschi y Cía. sobre transferencia del F. C. Rufino and Bahía Blanca.**

*Excmo. Señor:*

En setiembre del año ppdo., se presentaron ante V. E. los Sres. Juan Pelleschi y Cía. y el Dr. Miguel Piñero Sorondo, en representación éste último de una compañía titulada "The Rufino and Bahía Blanca Railway Limited" —a mérito de un poder que se acompaña— y de común acuerdo peticionaron lo siguiente:

1º) La autorización de V. E. indispensable a los primeros, para transferir la concesión que les fué acordada, por la ley 2884 para construir un ferrocarril entre Rufino y Bahía Blanca a favor de la expresada compañía, de acuerdo con el texto expreso de la cláusula 21 infine, del contrato respectivo, escriturado en 13 de diciembre de 1890, por ante el Escribano de Gobierno.

2º) La liquidación de lo que hubiere lugar a pagar por la mora del concesionario, según el art. 15 de la citada ley y 18 del referido contrato.

Examinados tales pedidos con la detención que requieren las

cuestiones que plantean y los intereses fiscales que comprometen: considero que V. E. no debe hacer lugar a ellos y debe resolver en definitiva este asunto, en la manera que determinaré al final de este dictamen.

Las razones que motivan y que abonan tales indicaciones son las siguientes y se refieren:

A las personas.

A la concesión.

A su transferencia administrativa y económicamente considerada.

Aún cuando en autos no conste el documento que abona la existencia legal de la sociedad Juan Pelleschi y Cía., no creo sea ésta la oportunidad de levantar observaciones a su respecto:

1º) Porque es de presumirse que cuando se le acordó y escrituró la concesión de que se trata, se tendría a la vista su contrato social y 2º) porque V. E. ha aceptado su personería en la larga tramitación del expediente respectivo.

No me sucede lo mismo respecto de la sociedad que se presenta como concesionaria. No existe a su respecto ningún antecedente serio que lleve a su conocimiento, a no ser las referencias incompletas del documento de poder que acompaña el Dr. Piñero Sorondo para justificar su representación.

En ese documento que corre a fs. ..., se dice:

1º) Que el Dr. Piñero Sorondo deberá empezar las funciones de su mandato, haciendo reconocer y registrando la compañía, en la República, a los fines de su creación.

No consta de los antecedentes, ni de acto alguno, que ese *reconocimiento haya sido hecho* con arreglo a la ley, ni aún que haya sido gestionado por ante las autoridades respectivas.

2º) Que la compañía ha sido constituida y establecida en Londres, con arreglo a la ley inglesa.

Fuera de que no se determina ni se justifica cómo corresponde, el día de la constitución social ni el nombre de sus directores y administradores, no se da tampoco a conocer cuál es el capital social con que la compañía cuenta para llenar las obligaciones que supone la concesión que pretende adquirir.

3º) Que comparecen a nombre de la Compañía el Sr. George Grinnele Melne y William Henri Avery, como director el primero y secretario el segundo, para otorgar el poder de que hace mérito el Dr. Piñero Sorondo.

Es de observarse que en este documento ni consta el carácter que esos caballeros invocan en el caso, ni resulta de acto justificado la autorización que ejercen al conferir el poder otorgado.

Basta la enumeración que acabo de hacer para que fácilmente se comprenda que no puede tomarse como capaz y legalmente existente en la República, la Compañía que pretende ser autorizada para adquirir una concesión de la importancia de la que se trata.

La facultad establecida a favor de V. E. en la cláusula 21 del contrato con Juan Pelleschi y Cía., cláusula común a todos los contratos similares, tiene justamente por efecto, poner a V. E. en condiciones de no permitir la transferencia de las concesiones que haga, sino a personas o compañías, cuyo conocimiento convenza de su existencia legal y de sus recursos financieros, que les hagan capaces de adquirir los derechos concedidos y de cumplir las obligaciones contraídas.

No existiendo pues, como fácilmente se deduce de lo expuesto el mencionado conocimiento, es evidente la improcedencia de la autorización solicitada bajo este primer aspecto.

Sin declinar de lo dicho y examinando la conceción, materia de la transferencia que se pretende, resulta evidente:

1º) Que su adjudicación y escrituración de 13 de diciembre de 1890 y ordenada por decreto del P. E. de setiembre 30 del mismo año fué hecha con desconocimiento y violación de la resolución general y administrativa dictada en el acuerdo de Ministros de marzo 21 de 1890.

En efecto, el art. 4º del mencionado acuerdo dice textualmente: “Queda suspendida toda concesión otorgada por ley del Congreso, que importe una garantía o desembolso del Tesoro, y la cual no se halle escriturada. Ninguna oficina dará curso a la tramitación de dichas concesiones”.

A pesar de tan terminante disposición y con intervalo de unos meses, el Poder Ejecutivo, después de permitir que las oficinas tramitaran este asunto, contrariamente a lo dispuesto, dictó el citado decreto de 30 de setiembre de 1890, ordenando la escrituración de

la concesión Pelleschi, a pesar de que no estando está escriturada todavía, estaba comprendida dentro de la prohibición del acuerdo citado de 21 de marzo.

Es cierto que el decreto a que me refiero arguye, en su único considerando, que los Sres. Pelleschi y Cía. se habían presentado a escriturar la concesión antes de aquel acuerdo; pero es cierto también que tal circunstancia ni mejoraba la situación de los concesionarios, ni sacaba el caso de la prohibición del acuerdo, que se refirió exclusivamente a las concesiones no escrituradas hasta entonces.

La concesión que hoy se trata de transferir, no estaba escriturada el 21 de marzo de 1890.

2º) Que con arreglo a los arts. 4 y 17 de la Ley 2484 de 23 de agosto de 1889 y arts. 4 y 20 del contrato respectivo, la presente concesión caducó, cuando venció el término dentro del cual debían los concesionarios presentar los *estudios definitivos* de la línea, así como cuando venció el designado para el comienzo de los trabajos.

Escriturada la concesión en 13 de diciembre de 1890, los concesionarios, que disponían de 18 meses, para presentar, con arreglo a la ley, los *estudios definitivos* aludidos, ocurrieron recién al Gobierno con los iniciales y provisorios en 11 de junio de 1892, estudios que fueron devueltos observados como inaceptables en su mayor parte, según informe del Departamento respectivo de 3 de octubre de 1892.

De esta fecha en adelante no se hizo presentación de nuevos estudios ni menos de los definitivos a que la ley se refirió (art. 4º) obteniéndose por los concesionarios a mérito de propias gestiones un decreto del P. E. que, en 15 de noviembre de 1894, prorrogaba la mencionada obligación por 18 meses más.

Tal decreto y tal prórroga son y deben ser considerados nulos y sin valor de ninguna especie en el sentido de ampliar los plazos que amplía.

1º) Porque cuando se dictó aquél, la concesión estaba caduca y el contrato rescindido, dadas las disposiciones citadas de la primera y cláusulas del segundo, y la circunstancia de no haberse presentado los *estudios definitivos* a pesar de haber transcurrido más de cuatro años desde la escrituración y más de dos desde el rechazo de los planos y estudios iniciales.

2º) Porque en cualquier oportunidad que ese decreto se hubiera

dictado, siempre sería nulo, por cuanto disponía la renovación de un término expresamente establecido por la ley como resolutorio según el art. 17 citado.

Cuando el P. E. da la instrucción o reglamenta la ejecución de las leyes del Congreso, en uso de la facultad que le confiere el art. 86, inc. 2 de la Constitución no debe alterar su espíritu, ni puede contrariar su texto, cuando como en el caso, es expreso y terminante.

Los términos acordados por una ley del Congreso, en calidad de perentorios y con la sanción de caducidad por ella misma establecida, no pueden ser ampliados ni renovados, sino por el Congreso y menos por el P. E., so pena de violar la ley y de caer en insanable nulidad.

Basta lo dicho en este punto para que se afirme la inexistencia de la concesión y la imposibilidad consecuente de autorizar su transmisión.

3º) Que con arreglo al mismo art. 4º (infine) de la Ley 2484 y cláusula 4 del contrato, los trabajos del Ferrocarril debían quedar terminados dentro de los 4 años de empezados.

Ese término ha vencido, con exceso, como el mismo concesionario lo declara en la presentación de que me ocupo y según resulta de la misma comparación de la fecha actual con el 11 de junio de 1897, en que el mismo declaró empezados los trabajos.

Sería el caso de reputar a los concesionarios en mora y proceder a la liquidación que pertenecen, según su propio escrito, y de acuerdo con el art. 15 de la ley y cláusula 18 del contrato si hubiera de considerarse existente este último.

Pero lo dicho, respecto al vencimiento de los plazos legales, para la presentación de estudios y comienzo de los trabajos y su abandono notorio por los propios concesionarios, es bastante para demostrar que la falta de terminación de las obras dentro de los plazos estipulados son el resultado de un abandono y no de una simple mora, cayendo hoy el caso, bajo el imperio de la ley común, ya que el contrato no puede ni debe considerarse existente, de acuerdo con la misma ley que lo autorizó.

Comunicado por los concesionarios en 11 de junio de 1897 haber empezado los trabajos, se mandó hacer una inspección en diciembre 26 de 1898, la que se llevó a efecto, como consta de autos, dando por resultado que en abril 10 de 1899 eran aquéllos de tan poca



importancia, que según la misma inspección técnica, se hacía imposible que concluyeran las obras en 1º de julio de 1901, término que se les atribuía entonces aún dando por válidas las prórrogas administrativas, cuya nulidad he demostrado.

Se requirieron medidas para compeler a los concesionarios a llevar adelante sus trabajos, pero todo se redujo a un activo expediente de vistas, reservas y alegatos, que no adelantaron en nada la situación de aquéllos; llamando la atención que no se llegase, entonces y a pesar de todo, a la aplicación de las multas de la ley y del contrato, que hoy se gestionan, cuando ya no es ocasión de aplicarlas.

Las demás constancias del expediente muestran y denuncian con claridad el abandono, a que me refiero. Fuera de los movimientos de tierra en una mínima parte de la línea, fuera de una estación no terminada, en el punto de arranque, y algunas alcantarillas de muy poca importancia, no se han observado ni se adviertan trabajos que denoten en los concesionarios la intención de proseguir la obra, y que permiten reputar tan escaso movimiento, en tanto tiempo transcurrido, como una paralización accidental y susceptible de multa con arreglo al contrato.

La obligación de hacer contraída por los concesionarios no ha sido cumplida, según la intención de las partes, en el tiempo propicio y forma que fué pactado.

La imposibilidad, hoy evidente, de cumplir los términos de la concesión, es el resultado de la culpa del obligado.

En uno y en otro caso se ha faltado a lo convenido, y por ende ha quedado sin efecto el contrato, sin perjuicio de que el obligado mismo indemnizase, si a ello hubiese lugar, los perjuicios que hubiera causado (art. 625 y siguiente del Cód. Civil).

Bajo este punto de vista, se destaca también la caducidad del contrato, por inacción de los concesionarios, que en más de seis u ocho años no han hecho obra que alcance a la centésima parte de su concesión.

Bajo el mismo aspecto resulta imposible la autorización para la transferencia que se solicita de V. E.

Poco tendré que agregar a lo dicho por el Sr. Procurador del Tesoro, respecto de lo imposible y aún inconveniente, administrativa

y económicamente, del otorgamiento de la autorización solicitada, y aún de la transferencia que se requiere de V. E.

Aparte de que, el acceder a lo pedido importaría resucitar una concesión, muerta según la ley que la autorizó, fuera de que con ello se perjudicarían seriamente los intereses fiscales imponiéndoles el gravamen de una garantía que ya no tiene ni oportunidad, ni razón de ser, se dañaría por el Gobierno mismo, los intereses de otras empresas que hoy recorren la zona de la concesión Pelleschi y Cía., recorrido que hacen con capitales propios y sin que la Nación esté obligada a desembolso alguno, por garantía, ni por ningún otro concepto.

Puede llegarse hasta convenir que, cuando los Sres. Pelleschi y Cía. hicieron su propuesta, fuera el caso de acordarles la garantía pedida, lo que es muy discutible, como pudo demostrarlo el ilustre Dr. Aristóbulo del Valle al tratarse el asunto en el Senado de la Nación.

Puede reputarse conveniente la línea proyectada, a los efectos de la competencia con las otras empresas que le son vecinas, dado que de esa competencia podría ser beneficiario el pueblo o el comercio.

Pero a nadie le ocurrirá sostener que en la época presente, deba y pueda la Nación gravar sus ventas con garantías injustificadas, ni tampoco imponer una competencia ruinosa y subvencionada a otras empresas que ella misma ha autorizado, y que se han desenvuelto y continúan desenvolviéndose por sus propios medios y capitales.

En tales conceptos, acordar la autorización pedida sería un acto inconveniente dentro del orden administrativo y económico de la Nación.

Lo dicho pues, me induce a afirmar que V. E. debe resolver este asunto.

Negando la autorización que se requiere, como ya lo he pedido al principio.

Declarando inexistente esta concesión Pelleschi y Cía., en presencia de la demostración que dejo hecha de su caducidad evidente.  
Mayo 1905.

=====

La consideración hacia una Nación amiga, no puede llevar hasta alterar prescripciones de la Ley Civil de fondo. Dados los plazos del Cód. Civil para la presentación de los herederos que se hallen en el extranjero, a una herencia vacante, su prórroga por el Poder Ejecutivo sería contraria a la ley y a los derechos privados comprometidos en la sucesión de que se trata.

**La Legación de Italia, pide ampliación del término de 30 días para la presentación de herederos en sucesiones que se reputan vacantes.**

*Excmo. Señor:*

La ampliación de los términos para la presentación de los herederos, residentes fuera de la República, no puede ser materia de un protocolo, dado que se trata de términos expresamente establecidos por la ley, a menos que ese protocolo sólo encerrase la promesa de promover la modificación de ella, en cuanto fuera posible, o que fuera concluída una vez hecha la modificación por el Congreso, si así fuera su voluntad.

De otra manera sería admitir la posibilidad de *modificar la ley por un protocolo*, lo que fuera de ser inconstitucional, sería contrario a la propia estabilidad de la ley misma.

Tampoco creo que fuera prudente, justo, ni eficaz, promover a los efectos indicados, la modificación y ampliación del término de treinta días fijado en la ley civil y de procedimientos de la capital para la declaración de vacancia de las herencias, cuando no hubiera herederos presentes o conocidos dentro de ese plazo.

La declaración de vacancia de una herencia, después de treinta días de llamar a los que se consideren con derechos a ella, no tiene por efecto desconocer, ni desmembrar los derechos de los herederos que pudieran haber dentro o fuera del país; por el contrario, y como resulta del texto de los arts. 3239 y siguientes del Cód. Civil que a ello se refieren, tal declaración tiene por objeto poner los bienes hereditarios a cubierto, regularizar su administración, satisfacer deudas y cumplir obligaciones del difunto, admitiendo la posibilidad de que, durante esa liquidación se presenten los herederos, quienes como lo establece el art. 3542, están naturalmente obligados a tomar las cosas en el estado en que se encuentren por efecto de las operaciones regulares del curador o administrador legal de la sucesión.

Y durante ese lapso, que por lo general no es corto, y que se emplea en liquidar la testamentaria del intestado, no sólo tienen tiempo los herederos del exterior de venir a presentarse, sino que también sus derechos, presentes o posibles, no están huérfanos de representación, dado que existe la Ley 163 de 30 de setiembre de 1865 que da intervención al Cónsul de la nacionalidad del causante, justamente en protección y defensa de los derechos hereditarios o de otro carácter, que pudieran existir en su país de origen.

Otra garantía existe en favor de los expresados derechos de los herederos.

Con arreglo a los arts. 3588 y 3589, el Fisco Nacional o Provincial, son herederos obligados en caso de vacancia, con todos los derechos y obligaciones de tales, así ellos, como cualquier otro heredero que hayan adquirido bienes de una herencia, están sujetos a la acción de revindicación de parte de los herederos retardados dentro de los amplios términos de la prescripción de tal acción.

Y si como queda establecido, no hay peligro para los herederos del exterior en la declaración de vacancia, esa declaración prorrogada de la manera que se insinúa, tendría graves resultados en el sentido de que vendría a herir o dañar intereses que están siempre íntimamente ligados a la liquidación de la herencia.

Estos intereses serán:

Los de los acreedores. Los del Fisco Nacional o Provincial. Sufrirían los primeros: la demora en el reconocimiento y liquidación de sus créditos, suspendidos al aplazarse la declaración de vacancia y en espera de los herederos del exterior; los gastos que la conservación de los bienes hereditarios requiriesen, disminuyendo el caudal responsable a sus respectivos derechos. Sufrirían los segundos: de la misma demora en la adquisición de un derecho perfecta y legalmente reconocido, de acuerdo con los principios que rigen en todos los países del mundo, como herederos obligados de bienes quedados sin dueño.

Tales derechos que la ley ha contemplado en las disposiciones que dejo citadas, no pueden ni deben ser desconocidos, ni aún prorrogados en el momento oportuno y legal de su adquisición, al solo efecto de una cortesía internacional; tanto más, cuanto que, como queda demostrado, el amparo de la ley es evidente respecto de aque-

llos que tengan dentro o fuera del país, derechos concurrentes o contrarios.

Cumple aquí observar y para mayor ilustración del caso, que la misma ley civil italiana, con ligeras variantes, pone las cosas en igual situación a lo que sucede con nuestra ley.

En efecto, el art. 758 del Código Civil del Reino de Italia declara, lo mismo que el nuestro, el derecho hereditario del fisco, en las herencias vacantes. En el art. 980 y siguientes del mismo, se prevén las medidas de guarda y administración de los bienes de la herencia, casi en términos iguales a los que emplea nuestro mismo Código Civil en sus arts. 3539 y siguientes.

Y el art. 898 del Código de Procedimientos Civiles italiano, va más lejos que nosotros, prescribiendo como lo hace, que después de 30 días de practicado el inventario, podrán venderse los bienes, y el art. 899 acuerda facultades de disposición al curador nombrado, en las mismas condiciones y oportunidad que nosotros.

Creo que V. E. ha de acordar importancia a estas citas y referencias, que denotan que la ley civil italiana declara los mismos derechos que la nuestra, establece el mismo amparo y garantías para su adquisición y reconocimiento, y por último designa hasta los mismos plazos necesarios para ello.

Esto basta para convencer que allí se contemplan y consideran los mismos derechos que acá, y que sería, aquí como allá, si no imposible, por lo menos injusto, borrar disposiciones legales que reposan en principios universales, para proteger unos derechos, que en realidad no peligran, con grave detrimento de otros perfectamente respetables.

Lo expuesto, es lo que me induce a manifestar mi decidida oposición a la prórroga de que se trata, y en el concepto indicado, lo considero, como ya lo he manifestado, injusto e ineficaz.

Pero si el Gobierno de la Nación desea mostrarse liberal con el Gobierno del Reino de Italia, y en obsequio a las buenas relaciones que con él nos ligan, podrá sin tocar la ley civil, diferir a la prórroga requerida, comprometiendo exclusivamente en ello sus intereses privados, como presunto heredero en las sucesiones vacantes.

Esto se conseguiría promoviendo una ley, que en la Capital y Territorios Nacionales, dejase los términos, dentro de los cuales, la Dirección General de Escuelas, a quien de antemano están destinados

los bienes de una herencia vacante (art. 44, inc. 10 de la Ley 1420), tomara su posesión definitiva; esa posesión podría mantenerse como provisoria, una vez liquidada la sucesión vacante y por el término que se fijase, en atención a los posible herederos que vinieran o pudieran venir del extranjero.

Con esa ley, o con simple autorización legislativa, el Gobierno de la Nación podría concluir tratados, no sólo con Italia, sino con cualquier otra Nación, con quien conviniera hacerlo y acordando la prórroga que se gestiona sin dañar los derechos de los particulares, ni los de las provincias (art. 3588, Cód. Civil). Es entendido, que esto es simplemente una indicación en el sentido de lo que puede hacerse, si el Gobierno cree necesario o conveniente: facilitar la presentación de herederos residentes fuera del país en las sucesiones vacantes dar curso a lo requerido por el Sr. Ministro de Italia en el caso, e imponerse una demora en la adquisición de los derechos que la ley civil acuerda respecto de esas sucesiones.

Me abstengo de pronunciarme sobre las ventajas que pudieran encontrarse en esta modificación de lo que es nuestra legislación vigente e imprescindible en materia de herencias vacantes, dado que carezco de los elementos de juicio para ello. Y por ello y sin dar otra importancia que la que V. E. quiera dar a las indicaciones hechas, creo que debo insistir sobre mi oposición a la prórroga de que se trata. — Mayo de 1905.

*Adoptado como resolución según nota del Ministerio de julio 4 de 1905.*

=====

No debe accederse al pedido de rebaja de derechos por averías sufridas por las mercaderías a bordo del buque que las trajo y en el viaje, si el Capitán del mismo no ha cumplido con la obligación que le impone las Ordenanzas de Aduana en casos de averías, de dar cuenta inmediata de ellas y probarlas ante la Aduana a la entrada del buque o modificar el manifiesto dentro de las 48 horas siguientes a su arribo al puerto.

**Pellerano y Gandulfo, apelan de un fallo de la aduana denegando rebaja de derechos por avería en una partida de 10.000 cajones de kerosene.**

*Excmo. Señor:*

De las constancias que obran en este expediente, aparece comprobado el hecho de que se trata de una avería por derrame o falta del contenido, ocurrida a bordo del vapor “Good-Hope”, relativa a una partida de 10.000 cajones de kerosene, consignados a los comerciantes de esta plaza, señores Pellerano, Gandolfi y Cía.

Con respecto a las averías de las mercaderías durante el viaje, el inc. 1º del art. 801 de las Ordenanzas dispone, “que el capitán del buque, en caso de acontecimiento de mar, lo declare al dar la entrada o dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles para enmendar el manifiesto; expresando los sucesos de mar que causaron la avería, los volúmenes que la sufrieron, cuál fué la avería y el nombre del respectivo dueño o consignatario”.

Esta obligación, impuesta al capitán del buque, en previsión de los intereses fiscales y de los del consignatario de la mercancía averiada, es correlativa con el inc. 3º del mismo art. 801 citado, desde que éste dispone: “que la avería se compruebe por el reconocimiento de las mercaderías y por los demás medios que el Administrador de la Aduana juzgue necesarios para comprobar el suceso de mar que la ocasionó”.

En el caso ocurrente, el capitán del vapor “Good Hope”, no ha cumplido con tan clara y terminante disposición de las Ordenanzas, que rigen la materia.

Pues la circunstancia de que el capitán haya formulado una declaración, con respecto a la avería de que se trata, ante la Escribanía de Marina, y su manifestación a la Aduana, antes de termi-

nada la descarga, no implica el cumplimiento de los citados requisitos legales.

El capitán, al dar la entrada al buque o dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles para enmendar el manifiesto de carga, debió declarar lo sucedido, con los detalles que especifica el inc. 1º del art. 801, ante la Aduana, que es la autoridad revestida de la competente jurisdicción para conocer del caso ocurrente.

No ha podido, pues, en virtud de tal omisión del capitán, el Administrador de Aduana, constatar la comprobación de la declaración del mismo capitán o de los consignatarios, con el libro de abordaje y diario de navegación, como lo establece el art. 809 de las Ordenanzas.

En mérito de estos antecedentes y con sujeción a lo prescripto en el art. 807 de las citadas Ordenanzas, con las cuales concuerda el decreto de 25 de abril de 1902, considero que V. E. no debiera acceder a lo solicitado por los recurrentes y, en consecuencia, debiera dejar subsistente, en todo su vigor, la resolución de fecha 13 de abril del corriente año, cuya revocación se pretende. — Mayo de 1905.

*Decreto de acuerdo. B. O. nº 3628, pág. 960, de noviembre 27 de 1905.*

=====

Estipulado en la ley de concesión que la empresa concesionaria abonará una multa por el mes de retardo en la conclusión de la obra, cumple al P. E. hacer efectiva esa sanción penal, sin poder hacer remisión de la misma, por carecer de facultades para ello.

**Tranway La Capital pide derogación de las multas impuestas por no haber comenzado la línea de Mataderos a Liniers.**

*Excmo. Señor:*

Al conceder la Ley 3184 de noviembre de 1894 a los Sres. Quesada Hnos. el establecimiento de una línea de tranways a tracción eléctrica o a vapor entre esta capital, los nuevos mataderos y el pueblo de San Justo de la Provincia de Buenos Aires, estableció en su art. 4º que los estudios y trazados de toda la línea, se presentarían dentro de los noventa días de firmado el contrato.



Que los trabajos deberían empezarse a los tres meses siguientes a la aprobación de esos planos.

Que la línea se entregaría al servicio público en dos secciones, la primera, hasta los mataderos, la que debía quedar terminada dos meses después de inaugurada éstas, la segunda seis meses después de aquel acto.

El art. 5º estableció a su vez, las siguientes cláusulas penales en el sentido de asegurar el cumplimiento del contrato:

1º) Que los concesionarios depositarían \$ 30.000 en el Banco de la Nación Argentina al firmarse el contrato, depósito que ellos perderían en caso de caducidad, *por no haber empezado los trabajos*, dentro de los tres meses siguientes de la aprobación de los planos a que hace referencia el artículo anterior;

2º) Que los mismos concesionarios pagarían una multa de mil pesos por cada mes de retraso, *si no terminasen* las secciones de la línea en los dos y seis meses a que también se refiere el art. 4º anterior.

Estas condiciones y cláusulas penales fueron repetidas en los arts. 4º y 5º del respectivo contrato que fué firmado y aprobado en 31 de diciembre de 1897.

Transferida la concesión a sus actuales empresarios sobre las mismas bases de su otorgamiento, y librada al servicio público su primera sección, aun cuando en realidad no hubiera sido terminada de una manera completa, la empresa gestionó la devolución de los \$ 30.000 depositados en garantía, sosteniendo haber empezado la línea dentro del plazo del art. 4º de la ley y del contrato.

El P. E. negó, en dos ocasiones esa devolución, fundándose en que la empresa no había empezado la segunda sección, ni había terminado completamente la primera.

Pero la empresa arguyó en su alegato de setiembre 13 de 1899, que el dinero depositado era en garantía del comienzo de la línea, dentro de los tres meses estipulados, lo que había hecho, cumpliendo su obligación, y sin dar lugar a que se hiciese efectiva la expresada garantía.

Que en cuanto a la pena de \$ 1.000 mensuales por la *no terminación* de las obras dentro de los plazos estipulados, ella era inde-

pendiente de la garantía y sólo era aplicable en el caso que faltare a lo convenido en aquel concepto.

El P. E. tomó en cuenta esta argumentación y dictó el decreto de 24 de octubre de 1899, en que canceló la expresada garantía y mandó devolver a la empresa los \$ 30.000 en fondos públicos que a tal fin tenía depositados.

Desaparecida con esto la garantía por haber satisfecho la empresa, lo convenido en cuanto al comienzo de las obras y sólo quedó en pie, según el decreto citado de octubre de 1899 la multa de \$ 1.000 mensuales, para el caso de la no terminación de aquéllas en los plazos convenidos.

Ahora bien, librada la primera sección al servicio público, y transcurridos dos y seis meses después de inaugurados los Mataderos en 1º de mayo de 1901 ha resultado que la empresa ni ha concluído completamente la primera sección, ni menos la segunda (de Mataderos a San Justo) que ni siquiera ha empezado.

Consta lo primero del informe de la Oficina de Vías de Comunicación que corre a fs. ..., y lo segundo resulta de la notoriēdad y confesión de la empresa de no haber empezado la segunda sección.

En tales condiciones sería el caso de aplicar a la empresa la expresada multa desde el 1º de julio de 1901 por la no terminación de la primera sección dentro del plazo estipulado y desde el 1º de noviembre del mismo año por la no terminación de la segunda, hasta la fecha, dado que la empresa está tan ligada hoy como antes, a las obligaciones contraídas en la concesión.

Pero este tiempo ha sido interrumpido por la Ley 4121 dictada en octubre 3 de 1902, en la cual se acordó a la empresa un año de plazo contado desde la promulgación de esa ley para la construcción de la segunda sección de la línea, es decir de Mataderos a San Justo.

En esa ley se estipuló además (art. 2º), que sólo en el caso de cumplir la empresa dentro del plazo fijado, la expresada obligación quedaría exenta de las multas del contrato, y en caso contrario se harían ellas efectivas de acuerdo con la citada Ley 3184.

En 3 de octubre de 1902 o sea un año después de la promulgación de la referida Ley 4121, la empresa no sólo no había terminado, como ya lo he hecho notar, la primera sección, ni aún empezado la segunda, a pesar de sus gestiones anteriores y de su tácita aceptación de esta ley que conoció y debió conocer en su oportunidad.

De aquí pues la mora en que ha incurrido la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones, y la aplicabilidad a su cargo de la multa de \$ 1.000 por cada mes de retardo, desde el 1º de julio de 1901 hasta el 3 de octubre de 1902 en que se dictó la Ley 4121; y desde el 3 de octubre de 1903 hasta la fecha, en que ligada aun la empresa a las obligaciones contraídas no las ha cumplido como corresponde.

La persistencia en la aplicación de pena de multa a que me he referido, proviene de la obligación de hacer cumplir por los concesionarios el contrato celebrado con ellos, a mérito de la Ley 3184, cumplimiento de que no pueden ser desligados sino por el Congreso y nunca por V. E.

De acuerdo con lo que dejo expuesta, pienso que V. E., debe modificar los decretos de julio 25 de 1904 y de noviembre del mismo año, ordenando:

Se haga la liquidación de las multas en que ha incurrido la compañía hasta la fecha en la manera que lo dejo establecido.

Se intime a la compañía cumpla sus obligaciones concluyendo definitivamente la primera sección y comenzando la segunda en plazo determinado, so pena de seguir haciendo efectiva la multa en la forma establecida e independientemente de la garantía que se canceló en 24 de octubre de 1899. — Mayo 1905.

=====

La facultad de juzgar las elecciones practicadas, y autorizada por el P. E. a una Municipalidad de territorio, que no tiene origen electivo, es una facultad de carácter administrativo y por ello está sujeta a la revisión de las autoridades de este carácter de que aquellos dependen; el gobernador y el P. E. en su caso.

Deben mandarse los antecedentes, para que el gobernador se expida sobre la anulación decretada, con recurso de apelación por ante el P. E.

**Municipalidad de Santa Rosa de Toay, comunica que han quedado cesantes los Miembros del Consejo Municipal.**

*Excmo. Señor:*

La anulación de las elecciones municipales, practicadas el 30 de abril del corriente año, en Santa Rosa de Toay, ha sido dictada por

la Municipalidad que actualmente funciona allí, nombrada por el P. E.

Aun cuando esta última circunstancia, quite a esa corporación el carácter electivo de la ley, sin embargo, por disposición de V. E., en decreto de 19 de abril de 1904 (que corre agregado a estos antecedentes), ella conserva la facultad de juzgar y pronunciarse sobre las elecciones municipales, a que se refiere el art. 24, inc. 3º de la Ley 1552.

Pero tal prolongación, hecha en favor del Consejo Municipal del territorio, por una disposición administrativa, no puede conferirle la facultad legal aludida, sino como una función de esa índole, y por ende sujeta a revisión, por parte de la autoridad administrativa de quien provienen y dependen estos consejos municipales de territorio.

Así pues, la anulación de que se trata ha podido y debido ser revisada por el Gobernador del territorio, como representante de la autoridad administrativa según la ley 1532, y según el decreto de V. E. de 29 de enero de 1902.

Y si bien es cierto que ese funcionario ha producido su resolución de fecha mayo 3 del año corriente (fs. 20), no es menos cierto que nada resuelve sobre la expresada anulación según su parte dispositiva, en que se limita a elevar los antecedentes para la resolución de V. E.

En tal circunstancia creo pertinente observar el procedimiento que V. E. mismo tiene observado en un caso anterior y análogo al presente.

Me refiero al conflicto producido con motivo de la elección municipal en Viedma, Capital de Río Negro, en febrero de 1902, conflicto que V. E. zanjó, en decreto de marzo 15 de ese año, ordenando la devolución de los antecedentes al Gobernador del Territorio para que resolviese el caso ocurrente, y acordase al propio tiempo un término prudencial para recurrir en apelación ante V. E.

En el caso presente, considero que debe hacerse la devolución indicada: el Gobernador del Territorio podrá reunir todos los antecedentes necesarios y resolver como corresponde; y si se recurriera de tal resolución ante V. E. dentro del plazo que ese mismo funcionario acordara a tal efecto, V. E. estaría en mejor condiciones para resolver en definitiva. — Mayo 1905.

=====

Todo permiso de cateo es un derecho sujeto a revocatoria por parte del P. E. si no se cumplen las condiciones que prescribe el Código de Minería referentes a la instalación de los trabajos de explotación y a la prohibición de suspender los mismos sin causa justificada.

El denunciante que pretende para sí, un permiso de cateo ya concedido con anterioridad, debe probar las circunstancias antedichas, para que el P. E. revoque el permiso anterior, y justificar que dispone del capital necesario para continuar la explotación.

**Don Miguel Esquivel — sobre cateo de minerales en el Neuquén  
a una concesión otorgada a Don Carlos P. Delfino**

*Excmo. Señor:*

El permiso de cateo, otorgado por el P. E. en favor de don Carlos P. Delfino, según las referencias que se hacen en este expediente por la División de Minas, constituye un derecho, en favor de aquél, aunque sujeto a las obligaciones de instalar los trabajos de exploración, dentro del término que establece el art. 28 del Código de Minería.

Pero como este mismo precepto dispone en su inc. 6º, “que no podrá diferirse la época de la instalación, ni suspenderse esos trabajos después de emprendidos, sino por causa justificada, y en virtud de decreto de la autoridad”; la causa del abandono del derecho de cateo, que formula el recurrente, requiere para prosperar, no solamente la comprobación del hecho de que se han vencido los plazos marcados por el art. 28 para instalar los trabajos de exploración, sin que éstos hayan sido instalados, sino también, la falta de *causa justificada*, que pueda asistir al denunciado en tal caso.

Por otra parte, con sujeción al art. 39 del Código de Minería, la autoridad puede revocar la concesión del permiso de cateo a solicitud de un tercero interesado en continuar la exploración, o en emprender una nueva, en el mismo terreno, en los dos casos siguientes: 1º) cuando no se han instalado los trabajos de exploración en el tiempo prefijado y 2º) cuando se han suspendido tales trabajos, sin el permiso correspondiente.

De manera, que de acuerdo con este último requisito de la ley misma, es necesario que el tercero interesado, compruebe también, estar en condiciones de emprender la obra nueva cuyo permiso solicita

le sea revocado al denunciado, en su defecto, que compruebe estar en situación de continuar la exploración.

No considero que el certificado de depósito bancario, por cincuenta pesos moneda nacional, que acompaña el denunciante y que dice también, que representa el dos por ciento del capital con que afirma contar para su exploración, compruebe, en manera alguna, la existencia del capital que se invoca.

Y, se hace necesario que el recurrente esté en situación de efectuar los trabajos de exploración, pues, cuando la ley faculta al P. E. para autorizar exploraciones de determinados parajes, cediendo gratuitamente a un particular, terrenos del Estado o imponiendo un gravamen en los del dominio privado, consulta únicamente el interés de la sociedad, en el sentido de aumentar por nuevos descubrimientos mineros, la riqueza pública.

Y para que este objeto de la ley se satisfaga, cuando el particular favorecido con un permiso de cateo, incurre en abandono, que ocasiona una revocatoria, en favor de un tercero, es indispensable que, esta tercera persona, acredite la existencia de un capital necesario a la exploración de que se trate en cada caso.

La división de Minas, sería la Oficina llamada a justipreciar el monto del capital que requiere una exploración minera, así en el caso ocuurrente, como en otros análogos, dada la naturaleza técnica de sus funciones.

Y por último, en cuanto a la aplicación por analogía, en los casos de *denuncia del permiso de cateo*, del procedimiento que marca el art. 157 al 161 inclusive, del Código de Minería, referentes a la *denuncia* de minas, encuentro conveniente su adopción de acuerdo con los principios aceptados en este punto.

Por lo expuesto, opino que V. E. debiera: 1º) dar vista al interesado, de la presente denuncia; 2º) requerir del denunciante, la justificación de que tiene el capital necesario para la exploración de que se trata, sin perjuicio de que el mismo justifique la verdad de los hechos que motivan la revocatoria que se solicita. — Junio de 1905.

=====

Una pensión graciable acordada por el Congreso, debe hacerse efectiva según la ley respectiva prescindiendo de toda reglamentación del P. E. de pensiones similares, provenientes de otras leyes.

**Pilar Guido de Isla, hija del Brigadier General don Tomás Guido, Guerrero de la Independencia, reclama de la Contaduría General que le liquide solamente \$ 400 como pensión graciable.**

*Excmo. Señor:*

La pensión acordada a la recurrente por la Ley 4451, en la manera y forma en que ella lo expresa, no es si no el ejercicio de la amplia facultad que al Congreso confiere el inc. 17 del art. 67 de la Constitución.

En tal concepto, su voluntad no puede ser trabada sino cumplir tal como ha sido expresada en la ley respectiva.

La existencia de una ley anterior, que somete a una reglamentación determinada y a límites precisos, el ejercicio de esa voluntad —como sucede con la Ley 3195—, se entiende que rige los acuerdos, en tanto que el mismo Congreso no la haya derogado total o parcial, explícita o implícitamente.

En el caso sub júdice, aun cuando reputo que la pensión acordada por la Ley 4451 a la recurrente, es una pensión graciable, creo que, en cuanto a su monto está sujeta a lo que expresamente estatuye esa ley, cuando dice que la pensión que acuerda será, “la que por las leyes vigentes, corresponde a los hijos de los Guerreros de la Independencia”, y reputo en consecuencia, que deroga con tal concepto el art. 11 de la ya citada Ley 3195.

De acuerdo con lo expuesto, es mi opinión que la Contaduría no ha tenido razón para hacer la observación que hace, y que V. E. debe ejecutar la ley en su texto expreso, mandando abonar a la recurrente su pensión en el monto que ella pretende. — Junio 1905.

=====

Los vales, bonos, o figuritas, que como promesa de premio se pongan en algunos paquetes de cigarrillos, constituyen un juego de azar, o invitan a ello, por lo que deben prohibirse. Si esos bonos, vales o figuritas están en todos los paquetes y determinan un premio, o en colección o en reunión, no hay juego, y son los verdaderos "regalos reclame", que lejos de prohibirse, deben fomentarse.

**Rodríguez y D'Amico, piden se declare que los "regalos reclame" no están comprendidos en la ley 4097.**

*Excmo. Señor:*

Pretenden los recurrentes que los vales, bonos o figuras que colocan en algunos de los paquetes de cigarrillos que fabrican y expenden, y que dan derecho a los consumidores a recibir un premio en cigarrillos o en dinero, no están comprendidos dentro de las *loterías o de cualquier otro juego semejante*, a que se refiere el art. 4º, inc. a), de la Ley 4097.

Y, partiendo de tal suposición, sostienen que los "regalos reclame", como han dado en llamar a aquéllos, no tienen otro alcance que el de nuevos instrumentos de propaganda comercial, para la lucha honesta de la competencia, con artículos similares de la plaza; de manera que, la existencia de ese *reclame* en su carácter de industria lícita, no requiere autorización del P. E.

La Ley 4097, en su art. 1º al prohibir *los juegos de azar*, en la capital de la República y territorios nacionales, como *asimismo todo contrato*, etc., etc., que no se halle *expresamente autorizado por ley de la Nación*, deja en todo su vigor, la eficacia y validez de los contratos sobre los cuales legisla el Título XI del Libro II del Código Civil.

De manera, pues, que si los "regalos reclame" de que se trata, no implican un contrato de los referidos, ni tampoco una lotería, en el concepto legal de este vocablo, como lo ha demostrado, con suficiente acopio de doctrina, la parte recurrente, habría razón sin duda, para que la resistencia de tal medio de propaganda no requiriese autorización gubernativa, siempre que tampoco esté el caso comprendido, en alguna de las otras prohibiciones de la misma Ley 4097.

Esta ley es amplia, en cuanto a las atribuciones que ella da al P. E., para que éste autorice o prohíba ciertos juegos de azar.

En efecto, con excepción de las loterías, cuyo establecimiento



constituye el delito penado por el inc. a) del art. 4º, cuando no está legalmente autorizada, y la habilitación de los campos de carrera, que sólo son admitidos en las condiciones del art. 7º, el P. E. está facultado para autorizar *cualquier otro juego semejante* con sujeción a lo dispuesto en la 2ª parte del citado inc. a) del mismo artículo.

Desde luego, en el caso ocurrente, en cuanto se refiere a los vales o bonos o figuritas que enumerados en orden de serie, van colocadas dentro de ciertos paquetes de cigarrillos, llevan la esperanza y el incentivo de un premio, para el comprador que tenga la suerte de que le toquen los vales, bonos o figuritas que completen el número o la serie premiada.

Y bien, esta insinuación que hace el comerciante al comprador de cigarrillos, sugestionando su voluntad de comprar con el posible premio, caracteriza a mi juicio lo sustancial del juego, que es lo aleativo de la ganancia, y la lisonjera ventaja con que se le tienta a comprar la mercadería que se le ofrece, junto con la posibilidad de obtener el premio ofrecido.

La Ley 4097, tuvo el propósito moralizador de cortar, con mano eficaz, no sólo la explotación del azar en todas sus formas clandestinas, sino también el de obstruir todo acto tendiente a incitar o cultivar el sentimiento o la inclinación al juego.

Y así, para evitar, en primer término la clandestinidad es que la Ley 4097 no prohíbe en absoluto el juego, sino que lo reglamenta en el sentido de que faculta al P. E. para autorizar determinados juegos, como los de carrera, sin perjuicio como lo hace, de castigar severamente aquélla, allí donde la encuentre.

Y previendo, en segundo término, la existencia de cualquier otro juego semejante a los prohibidos, capaz de la incitación o cultivo del sentimiento antes aludido, confiere al P. E., la facultad de autorizarlo o no, con sujeción al espíritu de la ley de cuya aplicación se trata.

El senador Dr. Pellegrini, miembro informante de la Comisión de Legislación, que aconsejó la sanción de la Ley 4097, ante el Senado Nacional, expresaba el alcance de la misma en los siguientes términos: "Lo que la ley trata de limitar no es precisamente el juego, pues nuestra legislación siempre ha sido contraria a estos principios de tutela individual, y por eso ha suprimido toda la legislación sobre la prodigalidad, dejando al hombre libre para decidir de sus intereses

y de su destino, protegiendo únicamente a los incapaces y a los menores. *Lo único que castiga o que trata de disminuir o de suprimir, es el vicio clandestino, es la incitación al vicio y es la explotación al vicio*”.

Y continuó diciendo: “Esta ley nace a consecuencia de que la penalidad actual, ha hecho pulular una infinidad de pequeñas explotaciones al juego, de ese juego que seduce a las clases más fáciles, de seducir, a las clases bajas, a las clases ignorantes, al pueblo trabajador, a los menores de edad”.

De acuerdo con lo dicho y en mérito de lo que dejo transcripto, que caracteriza con toda precisión el espíritu de la Ley 4097, es que considero que, cuando la adquisición de los vales, bonos o series premiadas de figuras, está librada a la suerte de hallarlos o no dentro de los paquetes de cigarrillos que se compran, existe un juego de azar, contrario a la ley y que por ende debe prohibirse: 1º) como un juego clandestino, en el sentido de que se opera fuera de la vigilancia, y consentimiento de la autoridad, e imposible de controlarse eficazmente; 2º) como una invitación poderosa al juego, que justamente se ejerce entre aquellas mismas clases a quien se quiere proteger, según el espíritu de la ley.

Pero si apartándonos de estos conceptos y colocándonos en el caso de que se ofreciese un vale, bono, o figura, que fuera segura y realmente en cada paquete como promesa de un premio a obtenerse después de un determinado número de compras, y sin que para nada interviniese el alea ni la suerte, recién podría considerarse que hay el verdadero “regalo reclame” a que los recurrentes se refieren, y no una lotería o incitación al juego disfrazado con semejante calificativo. Y esos “regalos reclame”, de tal manera considerados, no sólo no están comprendidos en la ley, ni en su espíritu, sino que V. E. nada tendría que decir a su respecto, por cuanto, ellos serían una de las tantas formas lícitas de la competencia comercial, sin comprometer los extremos que la ley defiende en las disposiciones que dejo enunciadas.

Creo por el contrario, que tal forma de reclame, en que el comerciante devuelve a sus compradores, una parte de sus utilidades, debe ser ampliamente consentida y aún fomentada, porque además de ser una manifestación de nuestra libertad de comercio, es un abaratamiento de la misma casa vendedora y una incitación al orden

y al cuidado, que supone la tarea de conservar en buenas condiciones el número de bonos, vales o figuras, que dan derecho al premio ofrecido.

Ahora bien, y a mérito de lo que va expuesto, considero que V. E. debe resolver este asunto de la siguiente manera:

1º) Reputar lotería o juego no autorizado, los vales, bonos, o figuras, puestos en *algunos* paquetes de cigarrillos, librando a la suerte del comprador el encontrarlos y adquirir derecho al premio ofrecido.

En tal concepto y amoldándose V. E. al espíritu manifiesto de la Ley 4097, debe dictar su prohibición, resolviendo en este punto contrariamente a lo solicitado.

2º) Declarar que los vales, bonos, o figuras, puestos en todos y *cada uno* de los paquetes en venta, asegurando un premio después de un número de compras, son los *regalos reclame* que sin suponer azar ni incitación al juego, constituyen una forma de competencia perfectamente lícita y por ende libre de todo permiso o autorización previa. — Junio 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3496, pág. 1123, de junio 17 de 1905.*

=====

Toda pensión es personal y sólo transmisible a la viuda e hijas solteras, y nunca a los demás herederos, acreedores o legatarios, del causante.

**Herederos de Doña Mercedes Torres de Díaz Vélez, viuda del Coronel de la Independencia Don Ciriaco Díaz Vélez — sobre pensión.**

*Excmo. Señor:*

Considero que V. E. debiera rechazar el presente reclamo que formula el representante del titulado albacea testamentario de doña Mercedes Torres de Díaz Vélez, ex pensionista militar, como viuda del Coronel de la Independencia don Ciriaco Díaz Vélez, en el que se pretende que el Gobierno le abone diferencias de pensiones, a que

dicha testamentaria cree tener derecho, a contar desde la promulgación de la ley de 9 de octubre de 1865 hasta 1895 inclusive.

Pues aparte de que el recurrente, no ha acreditado que su mandante don Ezequiel Paz, tenga el carácter de albacea de la referida testamentaria, lo que implica que aquél carece de personería para hacer esta gestión. Resulta:

1º) Que habiéndole sido pagadas en vida, a la extinta viuda del Guerrero de la Independencia Coronel Díaz Vélez, desde el 1º de enero de 1896, todas las diferencias de pensión, que en tal carácter tenía derecho a reclamar, según lo informa la Contaduría General, retrotraer como se pretende, la liquidación de tales diferencias, hasta la época de la promulgación de la citada ley de 1865, importaría modificar y anular los efectos jurídicos de aquel pago, que tiene la validez legal de cosa juzgada, en el orden administrativo.

2º) Que el beneficio de la pensión militar, acordada a la viuda del Coronel Díaz Vélez, como Guerrero de la Independencia importa un derecho esencialmente personal de la beneficiada, no transmisible a sus herederos, acreedores o legatarios, ya sea que se considere la pensión como un subsidio del Estado a sus servidores, extensivo a la viuda e hijas solteras, ya sea en vista de lo dispuesto en el art. 38, de la ley de 1865 que invoca el postulante: “Toda pensión es personal y será nula toda cesión o traspaso que se pretenda hacer por cualquier causa que sea”. — Junio de 1905.

=====

La Ley 4235 llamada de amparo no ha sido derogada por la Ley General de Jubilaciones y Pensiones 4349.

**Policía de la Capital, pide se declare comprendida en la Ley de Amparo 4235, a la viuda e hijo del agente Ventura Rodríguez.**

*Excmo. Señor:*

La Ley 4235, que autoriza al Poder Ejecutivo para acordar pensiones, con sueldo íntegro, a los cabos y agentes de policía y cuerpo de bomberos de la Capital y Territorios Nacionales, inutilizados por heridas y accidentes en el desempeño de sus funciones es una ley que por sus objetos, por su carácter especial y por la amplitud de

sus términos, no puede considerarse derogada, en forma implícita, por la Ley General 4349, que ha creado la institución de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

La Ley 4235, ha sido sancionada por el Congreso por razones de estímulo a la vez que de justa recompensa al personal de policía y cuerpo de bomberos, que ya en la numerosa población de la metrópoli o en las despobladas regiones de los Territorios Nacionales, exponen su vida en el desempeño de sus delicadas funciones, hasta resultar en muchos casos, inutilizados o muertos en el cumplimiento inflexible del deber.

La Ley 4349, por el contrario no ha sido inspirada en aquellos propósitos, sino en el vehemente deseo de crear una institución nueva entre nosotros, que librando al Estado de las crecidas obligaciones que le habrán impuestos las Leyes 1909, 2219 y 3744, en concepto de jubilaciones para los empleados y agentes civiles de la Nación, hiciese recaer el pago de tales estipendios, en la masa de bienes formada por el descuento del 5 % mensual a cada sueldo, y demás recursos de que habla el art. 4º de la misma ley.

Para acentuar más la diferencia entre ambas leyes, en cuanto a sus propósitos, diferencia que aparece de su propio texto, debo recordar que el miembro informante de la Comisión de Legislación del Senado, al tratarse de la ley 4235, decía: “Este proyecto, señor Presidente, se funda por sí mismo. Todos los señores senadores saben la misión tan noble que desempeñan en la sociedad, estos humildes funcionarios que viven consagrados, día y noche y de enero a enero, a velar constantemente por el orden, la vida y los intereses de los habitantes, exponiendo a diario su vida a las asechanzas de los malhechores o de las llamas del incendio y, recibiendo como compensación por tan importantes y abnegados servicios, una modesta remuneración”.

“Es justo, pues —agregaba—, que el Estado, que tan importantes servicios recibe de ellos, provea a la subsistencia de los que quedan inutilizados por heridas o accidentes, recibidos en el ejercicio de sus funciones y que ampare a sus familias, cuando es la propia muerte, la que encuentran en el desempeño de su cargo”.

De manera que la Ley 4235, es justamente llamada de *amparo* en beneficio de los agentes y oficiales de policía y del cuerpo de bomberos de la Capital y Territorios Nacionales.

Se trata de una ley especial, no sólo porque la N<sup>o</sup> 4235, lo es, en cuanto legisla para una clase determinada de empleados, en virtud de las consideraciones expuestas sino porque acuerda una facultad al P. E. para estimular los sacrificios de los guardianes del derecho privado y del orden público.

Y bien, pues, una ley especial, auspiciada con tales antecedentes, no puede quedar derogada implícitamente por la Ley General de Jubilaciones y Pensiones, tanto menos, cuanto ésta en su art. 1<sup>o</sup>, sólo deroga expresamente las Leyes 1909, 2219 y 3744.

La jubilación ordinaria, como la extraordinaria a que se refieren los arts. 17, 18 y 19 de la Ley 4349, en cuanto comprenden a los empleados que se *inutilizan física o intelectualmente en un acto del servicio y por causa de accidente, y exclusivamente imputable al mismo servicio*, no se refiere, en particular, a los cabos, agentes y oficiales de policía y del cuerpo de bomberos, sobre los cuales legisla, únicamente, para casos de accidentes, la Ley 4235.

Y por otra parte, tampoco puede interpretarse como derogatorio de la Ley 4235, al art. 31 de la Ley 4349, el cual establece que *el derecho acordado por el art. 18 (la jubilación ordinaria con 30 años de servicio y 55 de edad) podrá ser ejercido por los maestros de instrucción primaria, los cabos y agentes de policía de seguridad y por los jefes, oficiales y tropa del cuerpo de bomberos con 25 años continuados de servicio y 50 de edad.*

Pues este artículo, tan solo modifica el número de años de servicio y de edad, que requiere el citado art. 18 para la jubilación ordinaria, aparte de ser facultativa el ejercicio del derecho que acuerda, desde que emplea la palabra *podrá*.

Por último, si bien el art. 65 de la Ley 4349, deroga todas las leyes y disposiciones que se opongan a ella, considero que tal derogación se refiere a las leyes de jubilaciones anteriormente en vigencia, así como las leyes análogas, a cargo del tesoro público; pero, dada la naturaleza tan especial de la Ley de amparo 4238, sancionada por el Congreso con los propósitos ya señalados, considero que esta última, sólo estaría derogada por expresa disposición de otra ley que así lo disponía y, por consiguiente, creo que el art. 65 de la Ley 4349, no le comprende.

Por último, mi anterior, el ex Procurador General de la Nación, Dr. Kier, a propósito de una petición de amparo a la Ley 4325, del

agente de policía Farías, dictaminó a V. E., en fecha 29 de agosto del año 1904, en la siguiente forma, que reproduzco, por coincidir con la interpretación que da al caso ocurrente.

Decía el Dr. Kier con respecto a la Ley 4325:

“Esta fué sancionada por el Congreso en favor de los cabos y agentes de policía y cuerpo de bomberos de la Capital de la República y Territorios Nacionales, con el propósito manifiesto y expícito, respecto de los que *hayan sido inutilizados por heridas recibidas y accidentes*, en el desempeño de sus funciones, en ocasión del servicio debidamente comprobado.” Como la ley no distingue épocas, debe estarse a los términos generales y amplios de su mandato; pero el postulante, debe comprobar en forma, las situaciones que exige el citado art. 1º de la Ley 4235”.

Bien, pues, por lo expuesto, y en atención a que la peticionante doña Anselma Giménez, viuda del agente de policía Ventura Rodríguez, ha justificado, mediante el informe de la Jefatura de Policía que obra en el expediente respectivo, y demás constancias del mismo, que dicho agente murió víctima de heridas recibidas en el desempeño de servicio, debidamente constatado, considero que el P. E. está facultado para acceder a lo solicitado, con sujeción al art. 2º de la Ley 4325. — Junio de 1905.

=====

La Prefectura Marítima no debe obstaculizar la acción policial y el dominio inmediato que la Provincia de Buenos Aires tiene de pleno derecho, sobre las islas y riberas del delta del Paraná, comprendidas dentro de su jurisdicción territorial.

**Provincia de Buenos Aires, sobre conflictos de jurisdicción que se producen entre la Prefectura Marítima y la Policía.**

*Excmo. Señor:*

Los informes que corren en este expediente, tanto de las autoridades provinciales de Buenos Aires como de la Nación, me eximen de mayores desenvolvimientos, relativamente al asunto de que se trata, el que ha sido ya estudiado y resuelto con anterioridad.

Por otra parte, esos informes hacen valer resoluciones terminantes del Gobierno de la Nación —como el decreto de 14 de noviembre

de 1891— y opiniones tan fundamentales y decisivas en el caso, como los dictámenes de los señores Procuradores Generales, don Eduardo Costa y don Sabiniano Kier, y lógicamente se inclinan en el sentido de que no debe obstaculizarse por la autoridad marítima la acción policial y el dominio inmediato que la Provincia de Buenos Aires tiene de pleno derecho para ejercer en las Islas y sus riberas del Delta del Paraná, comprendidas dentro de su jurisdicción territorial. En consecuencia, creo que V. E. debe proceder de la manera que se desprende de los mencionados antecedentes. — Junio 1905.

=====

Debe derogarse un decreto que se opone a una expresa disposición de las Ordenanzas de Aduana, con tanta más razón cuanto que es con respecto de una garantía para el comercio, en sus relaciones con la Aduana.

**Inspección de Aduanas, eleva nota de la Aduana de la Capital, que pide se derogue el decreto de 6 de Octubre de 1902.**

*Excmo. Señor:*

Es indudable que la Resolución Ministerial de octubre de 1902 a que se refiere este expediente, importó una modificación parcial de las Ordenanzas de Aduana, en el punto en que obliga al comerciante a declarar la mercadería introducida en todos los detalles de calidad, peso y medida.

Esta modificación hecha de manera tan ilegal, por cuanto un decreto no deroga, ni puede derogar, ni parcialmente una ley, no ha debido subsistir, como muy bien se observa.

Por otra parte, subsistiendo la expresada resolución, el contralor establecido por la ley para establecer la calidad de ordinario, fino, o regular de las mercaderías, está librado al supremo criterio del empleado que intervenga, el que se sustituye al de la ley que es el del mismo comerciante, bajo la garantía de la sanción penal que la ley establece, para el caso de falsedad en su manifestación.

Esta otra circunstancia, esencialmente inconveniente para el exacto percibo de la venta, es también inconveniente para el mismo comerciante, quien tiene que someterse al buen pensar de un empleado subalterno, que no siempre ha de tener la independencia de criterio



que se supone en la ley misma, juzgando la manifestación del propio comerciante.

Es de observarse, por último, que si el comerciante no puede o no quiere hacer la manifestación, en cuanto a la calidad de la mercadería, siempre está abierto el camino de la verificación, que salva el inconveniente y que tiene la ventaja de ser un procedimiento siempre legal en los casos dados.

Por esto me adhiero a lo propuesto por la Dirección de Aduanas, creyendo que V. E. vuelve al procedimiento legal, dictando la derogación indicada. — Junio 1905.

*Decreto de acuerdo derogando el de 6 de octubre de 1902; Boletín Oficial N° 3496, pág. 1126 de junio 16 de 1905.*

=====

La asimilación del personal del Cuerpo de Sanidad del Ejército y la Armada, acordada por el art. 4º de la Ley 2377, implica el goce y los privilegios inherentes al estado militar.

### **Sobre asimilación de los médicos de Sanidad.**

*Excmo. Señor:*

La asimilación acordada por la Ley 2377 al personal del Cuerpo de Sanidad del Ejército y la Armada, tiene, según el art. 4º de dicha Ley, por efecto, el goce y privilegio inherente al estado militar.

Esto coloca a los oficiales de ese cuerpo en condiciones especiales; sin ser combatientes están sin embargo, en posesión de todas las preeminencias y atributos que a los oficiales del ejército corresponde, a diferencia de otros asimilados, como el personal de la Intendencia de Guerra y Marina, cuya asimilación no causa estado militar, y cuya graduación está librada al P. E. (art. 10 de la Ley 3305).

En tales conceptos creo que lo que reclama el Sr. Inspector General de Sanidad, está muy puesto dentro del texto de la ley citada, y por ende que V. E. puede y debe hacerlo, no sólo en su cumplimiento, sino aún en guarda del respeto que el mismo estado militar supone. — Junio 1905.

=====

Otorgada una concesión, debe entenderse que ella caduca si no se realizan o empiezan los trabajos en los plazos señalados. No puede admitirse, aunque los trabajos no se hayan hecho o empezado, que la concesión subsiste en virtud de no haberse establecido sanción penal. Ninguna concesión se reputa a perpetuidad.

**Planes y Cía., concesionario para construir un muelle en Bahía Blanca, pide reconsideración del decreto que declara caduca la concesión.**

*Excmo. Señor:*

Después de seis años, viene el recurrente a pedir la reconsideración del decreto del P. E. de noviembre 30 de 1898, que declaró caduca la concesión que le hizo la Ley 1367, de 24 de octubre de 1883, para construir un muelle en Bahía Blanca, que debía empezar seis meses después y terminar a los dos años.

En casos análogos al presente, he tenido ocasión de manifestar mi opinión adversa a estas reconsideraciones, cuyo consentimiento es contrario a toda buena administración, no sólo porque deprimen el prestigio de las resoluciones de ese carácter, sino porque los derechos que se crean u obligaciones que con ellos se extinguen, no tienen ni pueden nunca tener la firmeza y seriedad que debe atribuírseles.

Tal opinión que ha sido aceptada anteriormente por V. E. debe serlo mayormente en este caso, en que el tiempo transcurrido entre la Ley 1367 y el decreto citado de 1898, y entre éste y la reconsideración que hoy se pretende, es y ha sido sobrado para motivar varias veces, la conclusión de la concesión, que sólo tuvo por término de existencia el de dos años.

Es el caso pues, de que V. E. en primer término y por simples razones de buena administración deseche la pretendida reconsideración.

Fuera de lo dicho, basta recordar los antecedentes de este asunto, para mostrar que ha sido juzgado y definitivamente concluído, no sólo en el orden administrativo sino aún en el orden judicial.

La obra que constituía la concesión, nunca se trató seriamente de hacer, y el concesionario se inició con un reclamo ante V. E. y un pleito después contra el Ferrocarril del Sur, asuntos que perdió como consta de autos.

Con esto desapareció ya, y antes del decreto cuya reconsideración se pide, el único pretexto que el concesionario oponía para no efectuar aquello a que estaba obligado por su concesión.

Entre tanto, el tiempo transcurría y de cualquier manera que se computasen los términos, los dos años fijados por la ley, como plazo para la construcción de la obra, y por ende, para la duración del contrato, habían esperado varias veces, sin que nada se hubiera hecho.

Se dictó el decreto de noviembre 30 de 1898 y los dos años volvieron a esperar varias veces entre esa fecha y el de la reconsideración de que me ocupó, y sin embargo, la obra no había dado señales de vida.

En tales condiciones, apreciada la situación del concesionario, ha habido razón sobrada para dictar la caducidad del expresado decreto, así como para sostenerla ahora mismo :

1º) Porque el hecho de que la Nación haya dado una concesión a efectuarse dentro de un término, nunca puede administrativa ni racionalmente considerarse perpetua, como parece reputarse por el recurrente, alegando, como también se insinúa por la Dirección de Obras Hidráulicas, de que no existe una sanción penal en la ley misma.

Con sanción o sin ella, nunca podrá desfigurarse la ley, haciendo aparecer como perpetua una concesión simplemente temporal.

2º) Porque la cuestión bajo el punto de vista civil y como una obligación de hacer de parte del concesionario, debió ejecutarse dentro del plazo y en la manera en que fué convenido su cumplimiento, si no se hizo en tiempo propio, el contrato se extinguió quedando sólo la acción de daños y perjuicios contra el remiso en su cumplimiento (art. 625 y siguientes del Código Civil).

Desde que vencieron los dos años, término de la concesión —lo que ha sucedido repetidas veces como se ha visto— las relaciones entre la Nación y Planes habían terminado, y no habiéndose hecho nada, dejando el concesionario de cumplir su concesión, ella estaba y está hoy caduca en todas sus partes.

Las consideraciones hechas, las del decreto citado de noviembre de 1898, y las que se han expuesto y repetido en los diversos informes de las Oficinas, así como las de los Sres. Asesores Letrados del Gobierno, me inducen a manifestar a V. E. que reputo legalmente

procedente y necesaria al buen orden administrativo y buena guarda de los intereses públicos, el rechazo de esta reconsideración que se presenta huérfana de toda justificación legal o razonable. — Junio de 1905.

*Resolución de acuerdo: Boletín Oficial 3509, pág. 77 de julio 5 de 1905.*

=====

El acto de la primera elección municipal de Santa Rosa de Toay debe ser juzgado con criterio liberal y en relación al ambiente en que se ha realizado; basta para su aprobación que no surjan indicios de falsedad, ni de presión sobre los electores, aunque no se haya ajustado estrictamente a las prescripciones de la ley electoral.

**Gobernador de la Pampa Central, sobre las elecciones municipales y de Juez de Paz que se efectuaron en Santa Rosa de Toay.**

*Excmo. Señor:*

No encuentro en estos antecedentes ni razón seria, ni circunstancia determinante que me incline en el sentido de la anulación de la elección de Santa Rosa de Toay, decretada por la Municipalidad existente, nombrada por V. E.

Creo por el contrario que el acto se ha producido en condiciones aceptables, ya que no estrictamente ajustados a leyes y principios que no son aplicables nunca, con la estrictez que lo serían en centros organizados, allí donde la población es rudimentaria y donde la vida municipal no es por ahora, sino un ensayo o un primer paso en el sentido de iniciar a sus habitantes en el ejercicio de su propio gobierno.

Tal es el concepto que de este Gobierno Municipal de los Territorios ha tomado antes de ahora V. E., y en el que debe tomársele hasta que mayores desenvolvimientos no le cambien y modifiquen.

Como el señor Gobernador lo expresa en su resolución, la elección municipal de que se trata, tuvo lugar en el día señalado para ello, cumpliéndose fielmente las disposiciones dictadas previamente y a tal efecto.

Según parte de la policía local y según todos los indicios y de-

claraciones, el acto de la entrega y recepción de los votos se llevó a cabo dentro de lo regular, en plena tranquilidad, sin más accidente que la detención de dos personas que por desobediencia ordenó el presidente del comicio, los que más tarde recobraron su libertad.

La deficiencia en los procedimientos de los miembros de la mesa al no ajustarse a las prescripciones de la ley de elecciones, con que se motiva la nulidad electoral que se requiere, no asumen, en mi sentir, proporciones tales, que induzcan a pensar en una adulteración o falseamiento de la voluntad del vecindario expresada en el voto, que no se hayan entregado los registros o padrones electorales a la mesa en las condiciones del art. 66 de la ley electoral vigente; no tiene importancia desde que consta que hubo un padrón para todos, y que por él se votó sin observación.

Que hubiera más o menos personas en el atrio o local de las que esa ley autoriza (arts. 71 y 72) no tiene tampoco importancia, dado que ni se protestó oportunamente contra ello, ni ha resultado nada inconveniente de esa circunstancia, que por otra parte ha sido razonablemente explicable por las declaraciones e informes.

Que no se hayan llenado con toda estrictez, los detalles a que se refieren los arts. 76 y siguientes, tiene su explicación en lo diverso de la elección de que se trata, con la de diputados o electores, siendo de notar que en las actas levantadas y presentadas se ha hecho constar el momento de la terminación de la elección y aún la protesta que fué presentada por el Sr. Enrique del Busto en tal oportunidad.

No creo que deba darse la importancia que se da, para pedir la anulación del acto electoral de que se trata, a la circunstancia de que los escritores hayan estado trabajando hasta las 8 p. m. en que entregaron las actas de la elección a la Municipalidad.

Es notorio que se hicieron las copias, actas, notas, etc., etc., que la ley exige lo que verosímilmente debió o pudo ocupar todo ese tiempo, sin que conste ni una ocultación, ni una clandestinidad, que pudiera autorizar sospechas.

Y esto es más evidente si se tiene en cuenta, que el resultado del comicio, después de esas operaciones, fué el mismo que ya se conoció al terminar la elección a las cinco y pico de la tarde y que fué protestada por el referido Sr. Busto.

Creo pues que la demora en la entrega de las actas, tiene explicación razonable en las complicadas operaciones a que me he referido,

la que es tanto más aceptable, cuanto que, tratándose de personas que, por primera vez, ejercen estas funciones no es de extrañar que demoraran en practicarlas.

Por último, la presión que se denuncia como habiendo actuado durante tal acto electoral, ya que se refiere a la protesta presentada al terminarse la elección, ni se ha constatado, ni resulta de los informes policiales, ni de las declaraciones tomadas por la Municipalidad del punto, ni tampoco resulta de otra afirmación que de la del protestante.

Esta reunión de circunstancias resultantes de los autos mismos, las consideraciones de la resolución del señor Gobernador del Territorio, y las que dejo hechas, me hacen pensar que V. E. debe considerar válida la elección Municipal efectuada en Santa Rosa de Toay, y a que estas actuaciones se refieren.

Creo, sin embargo, que V. E. debe modificar la resolución mencionada del Gobernador, en la parte que manda poner en ejercicio a los electos, sin más trámite, ni diligencia.

Creo que V. E. sujetándose a la práctica electoral y al principio que rige la existencia de todo cuerpo electivo y de posible aplicación al caso, debe ordenar que por el Sr. Gobernador se comuniquen a los electos, su designación, se les invite a reunirse y a que, tomando en cuenta las circunstancias y antecedentes de la elección, la purguen ellos mismos y se pronuncien, aprobando o desaprobando sus propias designaciones o diplomas, en la manera correspondiente. .

En cuanto a los Jueces de Paz, titular y suplente, que han sido elegidos, V. E. se limitará a ordenar sean puestos en posesión de sus funciones respectivamente.

Creo que de esta manera, zanjará V. E. prudentemente y dentro de lo justo y razonable, el conflicto municipal suscitado en Santa Rosa de Toay, con motivo de su primer acto electoral y pondrá en la vía que corresponda este acto inicial de un gobierno propio, llamado a desenvolverse en el futuro, dentro de los principios de la Constitución y las leyes de la Nación que lo protegen. Junio 1905.

*Decreto de aprobación en el Boletín Oficial N° 3492 de junio 12 de 1905.*

=====

El patrimonio propio de una sociedad, que aspira a ser persona jurídica, debe ser real y presente, no prometido ni futuro.

### **Centro Vitivinícola Nacional, sobre aprobación de estatutos.**

No basta para satisfacer las exigencias del patrimonio social de la ley y decreto, a que hizo referencia la Inspección de Justicia en su precedente informe, el hecho de acompañar una nómina de socios como pagando cuotas determinadas, ni la simple afirmación de que pasa a formar parte del patrimonio de la Sociedad, el que perteneció a la titulada “Defensa Vinícola Nacional”.

Ni una ni otra cosa constituye, como corresponde, el patrimonio tal cual lo requiere el art. 33 del Cód. Civil (in-fine).

Si bien con la nómina de los socios se llena el requisito del art. 3º inc. 3 (última parte) del decreto de Abril 30 de 1897, a los efectos de conocer las personas que lo son, con ello no se denuncia ni establece positivamente aquel, sino que, lo único que se dice es lo que la sociedad llegará a tener, cuando se atesoren las cuotas que los socios entregarán periódicamente.

Esto no es lo que la ley requiere, ella exige un patrimonio presente y no futuro.

En cuanto a la afirmación del precedente escrito y del art. 6 de los estatutos, respecto al pase a la Sociedad del patrimonio de la titulada “Defensa Vinícola Nacional”, no es difícil apercibirse que no se denuncia su monto, ni se justifica su cesión o pase, ni se establecen las condiciones en que ella se hace, ni menos se indica el Banco o empleo donde tal patrimonio se encuentra depositado o colocado.

Tal afirmación, huérfana de tales justificaciones, constituye la omisión de lo exigido por el art. 3, inc. 5 del decreto citado, de 30 de abril de 1897.

Hasta tanto no se subsane esta deficiencia, creo que no debe acordarse la personería jurídica solicitada.

En cuanto a la capacidad para adquirir bienes por la sociedad, considero que basta la enunciación del inc. (e) del art. 2 de los estatutos, para que se le dé por existente. Junio de 1905.

=====

El P. E. no debe usar de la autorización que le da una ley del Congreso, sino en la oportunidad que corresponde; hacerlo en otro momento es faltar al espíritu de la ley, mayormente cuando con posterioridad se han dictado otras leyes que derogan aquélla.

### **Mercedes D. de Gómez, su sucesión, sobre ubicación y escrituración de tierras en Formosa.**

Excmo. Señor :

La Ley 2368, de 6 de octubre de 1888, al autorizar al Poder Ejecutivo para vender, a la viuda del Senador y Teniente Coronel de la Nación don Agustín Gómez, señora Mercedes D. de Gómez, tres leguas de tierra fiscal en el paraje que el gobierno estimase conveniente, y mediante el bajo precio que señala la ley de tierras de 3 de noviembre de 1862, no manda ni prohíbe, se reduce a crear una facultad que el P. E. como administrador de la tierra pública, puede ejercitar o no, cuando y en la manera que lo creyera conveniente.

Se trata, pues, de una ley facultativa y no autoritativa.

Y aparte del carácter facultativo que tiene la Ley 2368, el beneficio que ella estableció en favor de la hoy señora viuda de Gómez, implica un verdadero privilegio, desde que actualmente el P. E., en cumplimiento de leyes posteriores del Congreso, le está prohibido vender ni un palmo de tierra fiscal, sino en remates público y al mejor postor, por precios excesivamente superiores a los marcados en la ley de colonización, del 3 de noviembre de 1882 (Ley 4167).

De manera que, a más de la razón que asiste al Poder Ejecutivo, consultando las ventajas del erario al vender hoy las tierras del Estado, en las referidas condiciones impuestas por el Honorable Congreso, todavía media contra la petición de los recurrentes el principio fundamental de derecho, que aconseja interpretar restringida y limitadamente toda ley que como la N<sup>o</sup> 2368, importa un privilegio, contrariando el derecho que tienen todos los habitantes del país, para comprar tierras fiscales, al más alto precio en subasta pública.

La facultad que acordó al P. E. la citada Ley N<sup>o</sup> 1888, en favor de la señora de Gómez, consistente en poderle dar tres leguas de tierra del Estado, al precio de la ley de tierras de 1882 indudablemente pudo ser ejercitada por el Gobierno, en aquella época, satis-



faciéndose el doble propósito de aquella ley, en cuanto otorgaba una justa recompensa, por los importantes servicios prestados al país por el Senador Gómez, en la persona de su esposa viuda y, en cuanto, la misma ley, consultaba las ventajas de la población y colonización de nuestros territorios, en aquel entonces.

Pero en la actualidad, después de haber transcurrido cerca de diez y siete años desde que aquella ley fué sancionada, después del abandono de sus gestiones por el anterior representante de la beneficiada durante diez años, considero que el Poder Ejecutivo no puede, ni debe ejercitar la autorización que le dió la Ley 2368, porque el Honorable Congreso le ha impuesto el criterio actual mediante el cual se deberá vender la tierra del Estado. Por último el P. E. administrador de las tierras públicas no puede vender hoy día, a los herederos de la señora Gómez, por el precio de la ley de tierras de 1882, tierras que han centuplicado su valor, porque ello sería ejecutar una atribución que dañaría los intereses económicos del Tesoro Nacional, y por lo tanto, constituiría un acto de mala administración.

El decreto de fecha 23 de Febrero del corriente año, cuya reconsideración pretenden los recurrentes, se ajusta a las consideraciones expuestas.

Por ello, y sin perjuicio del derecho que los recurrentes tienen para solicitar del Honorable Congreso, la sanción de una ley en cuya virtud el P. E. deba acceder a lo solicitado, opino que V. E. no debiera hacer lugar a la revocatoria del referido decreto, dejando a éste, en todo su vigor. — Junio de 1905.

=====

Los gobernadores de territorios son competentes para pronunciarse, acerca de la apertura de tranqueras en campos privados que dan acceso a caminos vecinales o generales. La apertura de tales caminos es procedentes, dentro del texto del art. 27 del Cód. Rural y son correlativos.

**D. Pablo C. Pera, reclama de la resolución del Gobernador de la Pampa Central, sobre apertura de tranqueras en un campo de su propiedad, situado en la Estación Uriburu (F. C. O.).**

*Ercmo. Señor:*

De las constancias que obran en este expediente, resulta por una parte, que la Comisión Municipal de Santa Rosa de Toay, Gobernación de La Pampa Central, dictó una resolución, con fecha 17 de Abril del corriente año, en virtud de la cual acordó permiso al recurrente Sr. Pablo C. Pera, para alambrar su campo, aprobándose la ubicación de las tranqueras dejadas por éste.

Por otra parte, el vecino del peticionante Sr. Picot, considerando que tal resolución municipal le infería agravio, por cuanto, le privaba de una tranquera que le diese acceso a un viejo camino que comunica a sus establecimientos agrícolas con la Estación Uriburu (F. C. O.), la apeló ante el Gobernador del Territorio, interinamente desempeñado por el Secretario de la Gobernación.

Este último funcionario, ha dictado la resolución que se transcribe en este expedinete, y cuya revocatoria pretende el Sr. Pera ante V. E.

Partiendo de la base legal de qué, en el caso ocurrente y en armonía con los hechos referidos, en realidad pretende Pera que se le exonere en su calidad de propietario, de establecer en su fundo la tranquera, cuya apertura reclamó Picot, no puede negarse la competencia jurisdiccional del Gobernador del Territorio, para avocarse el conocimiento del caso que le fué llevado en apelación, a tenor de lo dispuesto en el art. 44 del Código Rural, vigente en los territorios nacionales a mérito de la Ley 3088.

Y, a más, invocándose ante la Gobernación citada, el derecho de tránsito consagrado en el Cód. Rural, que es ley-nacional, el Gobernador también resulta competente para conocer del caso citado, con sujeción a lo prescripto en el inc. 1º del art. 7 de la Ley 1532 de los Territorios Nacionales.

El Gobernador interino (art. 9 inc. 6º de la Ley 1532) declara que, después de una vista ocular sobre el fundo del recurrente, así como después de oír los informes de la autoridad policial de Uriburu y, habiendo tenido presente el expediente obrado al respecto, ante dicha Comisión Municipal, se ha formado la convicción de qué, el Sr. Pera ha clausurado un camino que, desde veinte años atrás ponía en comunicación el feudo del Sr. Picot con los Establecimientos “La Gaviota” y otros, hoy con la Estación Uriburu del F. C. Oeste.

Y bien, pues, en presencia de tal circunstancia y del art. 27 del Cód. Rural, que declara “caminos municipales los que, dentro de un municipio o distrito cruzan varias propiedades y dan acceso a caminos generales, etc.”, considero que, la resolución recurrida, se ajusta a tal precepto legal del Cód. Rural citado, desde que, la tranquera cerrada por el peticionante, implica interceptar un camino municipal cuya conservación corresponde a la municipalidad respectiva, de acuerdo con el art. 30 del mismo Código.

Por lo expuesto considero que, en la vía administrativa, ha sido legalmente dictada la resolución que se recurre, aunque conceptúo escaso el término de veinte días fijados al postulante para la apertura de las tranqueras de que se trata, por lo que, siendo esto una cuestión de hecho, corresponde que V. E. la resuelva, de acuerdo con su ilustrado criterio. — Junio de 1905.

=====

Con carácter de concesión precaria, puede acordarse a los ribereños de un río navegable, la excavación de su lecho o el ensanche de su costa, avanzando sobre el río con muelles y defensas, pero nunca como el ejercicio de un derecho adquirido contra la Nación, por desmembraciones que haya sufrido la costa en razón de inundaciones, o pase violento de las aguas, y con el fin de reconstruir el terreno, que el agua se hubiera llevado.

**Rezzonico, Ottonelli y Cía., piden autorización para construir muelles y defensas necesarias en su propiedad sobre la ribera del Riachuelo.**

*Excmo. Señor:*

En estas actuaciones iniciadas por los señores Rezzonico Otto-

nelli y Cía, en requerimiento de autorización para efectuar algunas obras sobre el Riachuelo de Barracas, en el punto en que tienen un importante establecimiento industrial, exhiben esos señores dos propósitos distintos:

1º) Hacer obras y construcciones para avanzar sobre el río, ensanchando muelles que actualmente existen en su ribera.

2º) Recuperar con el expresado avance, terrenos que según afirman, le han sido arrebatados por las aguas en crecientes e inundaciones que tuvieron lugar con anterioridad.

Poco tengo que decir respecto del primer punto, que envuelve casi exclusivamente cuestiones técnicas que me son extrañas y que, por otra parte, ya ha considerado y estudiado detenidamente la oficina respectiva, suscitando muy previsoras observaciones, en cuanto a las construcciones proyectadas, las condiciones en que han de hacerse y los derechos que ellas puedan suscitar.

En tal concepto, creo que en el caso en que V. E. resolviera acordar autorización para las obras que los recurrentes proyectan, debiera hacerlo sobre la base que la Dirección General de Obras Hidráulicas presenta en este expediente.

En cuanto al segundo punto, examinado detenidamente el caso, pienso que V. E. no debe autorizar lo que se propone por los recurrentes, relativo a la excavación del lecho del río, al relleno de una parte de la ribera, y al avance sobre el mismo curso de agua en el concepto de propietarios, es decir en ejercicio de un derecho a recuperar tierra, que dicen le ha sido arrebatada por las aguas y que según ellos, la Nación ha debido reintegrarlos oportunamente.

Tales pretensiones tienen por base un error de hecho y una confusión y error de derecho.

Surge lo primero, del examen comparativo que ha hecho la Dirección Hidráulica del título de los recurrentes, en relación a la ribera actual del Riachuelo en el punto de su propiedad, el que he verificado y lo que puede V. E. hacer en cualquier momento, consultando los planos que corren en autos.

El área de tierra que los títulos acompañados arrojan en favor de los recurrentes, está intacta, sin que por el movimiento de las aguas, crecientes e inundaciones que refieren, haya disminuído en cantidad apreciable.

En tal situación, los señores Rezzonico, Otonello y Cía. nada

tienen que recuperar, dado que nada tenían anteriormente fuera de su título, ni aún en el supuesto de que tal reintegración fuera legal y constituyese un derecho en su favor.

Pero suponiendo que los recurrentes tuvieran realmente tierra arrancada por las aguas en determinada época, el derecho al reintegro que se aribuyen en la forma que expresan, nace a poco que se lo considere, de la confusión en que incurren al aplicar en apoyo de sus pretensiones el art. 2643 del Cód. Civil.

Ese art. faculta a los ribereños a remover obstáculos, construir obras defensivas o reparar las destruídas cuando las aguas de los ríos se estancasen, corriesen impetuosas o torciendo su curso, los perjudicasen en su heredad, pero en manera alguna habla tal disposición, de un derecho en favor de esos ribereños para excavar el río y con su arena reconstruir el terreno que el agua se hubiera llevado o hubiese socavado.

Se confunde en tal caso, el derecho a defenderse contra el avance del agua de las diversas maneras que el art. indica, con el supuesto derecho de extraer del mismo río o cauce lo que la corriente o el estancamiento arrancó o socavó en determinado momento.

Y se incurre en esa confusión, olvidando el art. anterior (2642) que prohíbe —salvo concesión de autoridad competente— mudar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas . . . , prohibición que no existiría seguramente, si el derecho de reintegración que pretenden los recurrentes existiera por la misma ley civil.

Olvidan también, al caer en la confusión señalada, las disposiciones de los arts. 2583 y 2584 del Código Civil, cuando establecen que se pierda el dominio de las cosas susceptibles de adherencia natural, como tierra —que sería el caso— arena, o plantas, que el río por una fuerza súbita arranca y adhiere a un terreno inferior, o en opuesta orilla, y no se reclaman antes de su adherencia natural.

En el mismo error, en la misma confusión incurren los peticionantes, cuando afirman que al hacer las obras que indican para recuperar lo que suponen suyo, se proponen ejecutar lo que la Nación debió hacer, con arreglo al art. 2644 del Código Civil, dado que el desmembramiento de su tierra fué debido a una inundación que reputan un caso fortuito.

La confusión y el error en este punto, consiste en cambiar la obligación que esa disposición impone al Estado General o a las

Provincias, de remover los obstáculos, construir defensas, o reformar las existentes, cuando por accidentes fortuitos se cambiara el curso natural de un río, con la que ellos atribuyen a la Nación, de responder a los ribereños y a perpetuidad por el saneamiento de lo que por accidentes imprevisto, fortuitos o de fuerza mayor, perjudicase a los ribereños.

De aceptarse tan errónea interpretación, habría que convenir que sería innecesario para los propietarios colindantes con los ríos, hacer defensas, ni remover obstáculos, desde el momento que siempre estaría la Nación ahí, para resarcirles el daño o devolverles lo que las aguas, por inundación o lluvia imprevista, les hubiera arrancado.

Basta enunciar lo dicho y recordar el texto del art. 2644 del Cód. Civil, para comprender lo insostenible de tales conceptos.

Excuso recordar en este punto, partiendo del supuesto en que me he colocado que la propiedad de los recurrentes no ha sido desmembrada, y así aún cuando la Nación estuviera obligada a lo que ellos pretenden por error o confusión, nunca tendría nada que integrar dado que nada les falta.

Creo haber demostrado con lo que dejo expuesto, que los recurrentes al proponer lo que proponen, sólo solicitan una autorización que V. E. puede acordar o no, si así lo entiende y bajo las condiciones más convenientes a sus intereses, pero nunca como respondiendo al ejercicio o imposición de un derecho que en realidad no existe bajo concepto alguno.

Y esta creencia me induce a pensar, respecto del primer punto (las construcciones), que V. E. debe resolver como ya lo he significado.

Respecto del segundo, acordar parte o todo lo que se pide (avance sobre el río) pero como una concesión de carácter temporal precaria, si se quiere, pero nunca como reconocimiento de un derecho que no existe y que por ende, no hay razón para reconocer ni contemplar. — Julio de 1905

=====

Las Sociedades Anónimas constituidas en el extranjero, pero reconocidas por el P. E. que realizan en nuestro país "actos de comercio", deben abonar la patente que les corresponde por la ley respectiva.

**Compañía "San Juan de Oro", reclama de la patente de \$ 500 que le impone la Administración de Patentes.**

*Excmo. Señor:*

Como informa la División de Contribución Territorial y Patentes, se trata en el presente caso de cuatro sociedades anónimas distintas.

La Primera Compañía "Río San Juan de Oro", Limitada, constituida de acuerdo con los requisitos de las leyes inglesas de compañías de 1862 y 1900, cuyo funcionamiento está autorizado con el carácter de persona jurídica por el P. E. es una sociedad anónima cuyo directorio, encargado de administrar los negocios de la compañía, tiene entre otras muchas facultades las siguientes: realizar corretajes y comisiones para conseguir solicitudes o colocar acciones, obligaciones u otros valores, pudiendo ejercer todos los poderes de la compañía y realizar en nombre de ésta, todos los actos y asuntos que la compañía misma pueda ejercer o realizar según el art. 90 de sus estatutos.

Con sujeción al inciso "e" del art. 91, puede ejercer todos los poderes de venta, cambio, arrendamiento y alquiler, especificados o a inferirse del memorándum de constitución, incluso el poder de recindir la totalidad o cualquier parte de la empresa, negocio, propiedad o retiro de la compañía, así como el poder de distribución del activo y utilidades, y los poderes que tiene la compañía de adquirir negocios, propiedades, derechos y privilegios y de formar compañías (como en efecto ha formado) para iguales fines.

De acuerdo con el inciso "i" del mismo art. 91, tiene también la de "ejecutar, girar, aceptar, endosar y negociar pagarés, letras de cambio, cheques y otros instrumentos negociables, con la firma e intervención de la o las personas que nombre el Directorio para este objeto".

Y según el inciso "j" del citado art. 91, tiene también la facultad para emplear o prestar los fondos de la compañía que no necesitan para uso inmediato de la manera que juzgue más conveniente,

con la salvedad del art. 18, pudiendo también de tiempo en tiempo dar otro destino a cualquier dinero así empleado.

La compañía tiene su Directorio local domiciliado en la Capital de la República, siendo su representante el señor James Marjoribauks, quien invoca tal personería, al presentarse a V. E. aunque la compañía tenga su domicilio en Londres.

De lo expuesto, así como de las demás concordancia de sus estatutos, aparece claro e indudable el hecho de que, dicha compañía, ejerce una serie de actos de comercio, que constituyen parte importante de su giro o negocio en esta capital.

No basta para destruir esta circunstancia, la de que la compañía citada, explote lavaderos de oro en la República de Bolivia, mediante los capitales, las acciones, los actos esencialmente clasificados como actos de comercio, verificados en esta ciudad por su Directorio o por el representante designado por él.

En cuanto a las otras tres sociedades anónimas, la Compañía “Río San Juan de Oro”; la “Tercera Compañía Río San Juan de Oro” y la “Cuarta Compañía Río San Juan de Oro”, todas las cuales tienen su *domicilio principal* en la ciudad de Buenos Aires, habiendo sido constituídas por la primera sociedad Anónima, en ejercicio de las expresadas facultades que su Directorio tiene, por el art. 91 de sus estatutos; basta la simple lectura de los objetos, operaciones diversas de índole comercial y los múltiples actos de comercio que, dichas sociedades anónimas se proponen realizar en esta capital, para adquirir la convicción de que, tales actos constituyen parte esencial de su giro y comercio en esta plaza, a pesar de que, tales sociedades apliquen, parte de su capital, a los lavaderos de oro de la República de Bolivia.

Y bien, pues, el inciso 15 de la ley de impuestos de patente, dispone que las *sociedades anónimas en general cuyo giro o negocio no esté patentado por esta ley, pagarán una patente de 500 a 5.000 pesos.*

En virtud de que este precepto legal y tratándose en el caso de cuatro *sociedades anónimas en general*, cuyo giro o negocio se extiende y se realiza en esta capital, resulta improcedente en un todo, la pretensión del recurrente, porque si a ella se accediera, se haría una odiosa excepción o privilegio que la ley de la materia está muy lejos de autorizar, al referirse a las *sociedades anónimas en*



*general* y que repugna a la igualdad que en nuestro régimen impositivo sirve de base a los impuestos y cargas públicas. — Julio de 1905.

*Decreto de acuerdo: Boletín Oficial N° 3570, pág. 1408, de Septiembre 18 de 1905.*

=====

Antes de otorgarse título definitivo de dominio, a todo adquirente de tierra pública, debe exigírsele estrictamente el cumplimiento de las obligaciones que le impone la ley de 3 de noviembre de 1882, respecto a su ocupación y población.

**Osvaldo Piñero, solicita título definitivo de tierra en La Pampa.**

*Excmo. Señor:*

Adhiero en el caso a la opinión del señor Procurador del Tesoro, inducido por el texto claro del inc. 8 del art. 12 de la Ley de Noviembre 3 de 1882, el que aplicado al caso propuesto, muestra que el recurrente, con lo hecho en el campo por él adquirido, no ha cumplido con sus obligaciones legales de ocuparlo y poblarlo como corresponde.

Si bien es cierto que ha hecho o tentado hacer jagüeles, y en ello ha invertido una suma mayor quizá que la que debió invertir en la tierra adquirida, según la disposición legal citada, no es menos cierto que no ha introducido en el término correspondiente, en hacienda y población lo que en tales casos debió introducir, según la misma disposición.

Los jagüeles tentados y el mismo contrato que se exhibe, denotan la intención de poblar, pero no el cumplimiento de la obligación de hacerlo, lo que por otra parte, está declarado por el mismo recurrente, cuando hace notar la escasez de agua potable en el campo.

Pienso pues, que mientras no se satisfaga el texto de la ley, en la manera correspondiente, debe estarse a lo aconsejado por el señor Procurador del Tesoro. — Julio de 1905.

=====

Corresponde a los gobernadores de territorios nacionales (art. 7 de la ley 1532) la autoridad suprema como representantes del P. E. a los efectos de hacer cumplir las leyes dictadas o que dicte el Congreso y las resoluciones del Poder Ejecutivo.

**Gobernador de Formosa, sobre petición formulada por la Sociedad “La Formosa”, solicitando autorización para efectuar el desvío de una línea férrea.**

*Excmo. Señor:*

Los Gobernadores de Territorios, en razón de lo dispuesto por el inc. 1º del art. 7º de la Ley 1532, están revestidos dentro del límite territorial de sus Gobernaciones, de la autoridad suprema encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones nacionales que dicte el P. E.

En armonía con tal prescripción legal, V. E. adoptó la resolución de fecha 9 de Noviembre de 1899, que menciona el señor Gobernador de Formosa, en el caso ocurrente.

Y bien, pues, de acuerdo con tal resolución, creo que, dicho funcionario, está facultado para acceder al pedido de la Sociedad “La Formosa”, sin que se oponga a ella la otra resolución de V. E. que también se cita, de fecha 4 de Marzo de 1904.

Esta última, que deslindó un conflicto de jurisdicciones, entre la Subprefectura del Puerto Barranqueras y la Gobernación del Chaco, no tiene otro alcance que consignar, que en materia de jurisdicción, a los efectos aduaneros, la Subprefectura debe mantenerla sobre la ribera, respetando el mantenimiento expedito de los 35 metros que establece el art. 2639 del Cód. Civil y sin perjuicio, de la atribución que el P. Ejecutivo o sean sus representantes en los Territorios Nacionales tienen, con relación a los permisos de que se trata.

Por ello, opino que V. E. debiera declarar en la consulta que motiva este dictamen, que está vigente la resolución de 9 de Noviembre de 1899, con las limitaciones que establecen los arts. 2640 y 2641 del Cód. Civil, según se trate de riberas de ríos que atraviesan ciudades, o de ríos navegables. — Julio de 1905.

=====

La Nación no debe reconocer déficit en la tierra que haya enajenado, que no resulte de sus propias constancias, o de actuaciones judiciales en que haya sido parte. Los adquirentes tienen siempre esta vía para obtener los derechos que puedan asistirles.

### **Sucesión de J. E. Anchorena, reclama sobre diferencias de superficie de tierras.**

*Excmo. Señor:*

La integración de superficie que interpone el recurrente contra la Nación, consiste en el reclamo de un déficit que aparece en un campo por él adquirido de otros particulares, cuyos títulos, después de repetidas transmisiones y aún divisiones, arrancan del Gobierno como primitivo enajenante.

Ese déficit no ha sido justificado como corresponde para motivar el reclamo interpuesto, de manera que V. E. no está obligado a reconocerlo, sin que antes se corran los trámites necesarios que basen y justifiquen el derecho que se atribuye al reclamante.

En primer lugar, la diligencia de mensura que se acompaña para establecer el objeto requerido, es una diligencia por ahora extraña a V. E. , ordenada por un Juez de Provincia y aprobada por él, sin que V. E. haya tenido conocimiento ni haya sido parte en el procedimiento que la originó, ni en el que la aprobó.

\* Tampoco la Nación, ha tenido ocasión de verificar, por medio de sus oficinas respectivas, ni por su representación legal, el contenido de esa diligencia, no pudiendo, por ende, reconocer el déficit encontrado, ni menos que provenga de hecho suyo, y que en tal concepto le sea imputable.

En segundo lugar, y bajo el punto de vista administrativo, considero que no es práctica prudente ni regular, reconocer derechos como los que se pretenden, por la simple afirmación de quien los reclama, basado en constancias de documentos extraños a la Nación. La guarda celosa de sus intereses requiere, que cualquier derecho que contra ella se reclame u obligación que de su parte se reconozca, debe estar basada legal y oficialmente en razones y antecedentes que evidencien su existencia.

Podrá decirse, que esto supone, en determinados casos, la secuela de tramitaciones quizás largas y costosas de carácter judicial, como

puede suceder en el caso presente, pero ello es necesario, dado que nunca será inoficioso lo que se haga y aún se gaste, para reconocer los derechos u obligaciones que afecten o puedan afectar los intereses de la Nación.

En último término, y aplicando lo dicho al caso sub-júdice; es necesario determinar judicialmente el déficit que se alega, su motivó y su origen, así como las responsabilidades, que puedan existir a cargo de la Nación u otros antecesores del reclamante, se impone un procedimiento judicial y serio que establezca legalmente aquellas circunstancias, la importancia de las responsabilidades, así como los mismos responsables, después de hacerse valer todas las defensas y recursos que la ley concede para su evidente demostración.

En tales conceptos pues, creo que V. E. no debe hacer lugar a lo que se solicita, como ya lo tiene hecho en el caso de Cernadas, en que por Decreto de Febrero 9 de 1905, negó la integración de un déficit de superficie análogo al presente, y un resarcimiento de pretendidos daños, sin perjuicio naturalmente de dejar a salvo, como en ese caso, las acciones que a los reclamantes puedan legalmente asistirles, para ocurrir ante la justicia en procura de sus derechos, donde tienen amplio campo para establecerlos, probarlos, y obtenerlos, si por la ley les corresponde. — Julio de 1905.

=====

Las cuestiones de hecho son extrañas al dictámen del Procurador General de la Nación, que sólo se expide cuando aparece controvertida una cuestión constitucional o legal.

**Don Tomás Arias, Auditor de Guerra “ad-hoc” del Consejo  
Guerra especial de Rosario, cobrando honorarios.**

*Excmo. Señor:*

No estando comprometida en el caso, ninguna prescripción constitucional o legal, y tratándose sólo de la especificación de un hecho, cual es el servicio que dice haber prestado el recurrente, como auditor de guerra “ad-hoc”, apreciación que, por otra parte, ya ha sido competentemente hecha por el señor Procurador del Tesoro, nada creo tener que decir respecto de la regulación del honorario correspondiente, practicada por aquel funcionario.

Considera el que suscribe, que las cuestiones simplemente de hecho, dentro de la administración le son extrañas, dado que no perteneciendo a ella carece, en general, como en el presente caso, de los elementos de juicio indispensables para pronunciarse debidamente.

En tales conceptos pues, nada tengo que agregar a lo que dejo dicho. — Julio de 1905.

=====

La justificación de un depósito en un banco, la avaluación de muebles y útiles que representan un valor positivo, y la cantidad existente en caja, es suficiente para acreditar el patrimonio actual, exigido por el art. 33 del Cód. Civil y obtener el reconocimiento de la personería jurídica.

#### **Centro Vitivinícola Nacional, sobre amprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Considero que con las justificaciones que acaban de hacer los recurrentes, relativas al patrimonio propio de la sociedad que forman y para la cual solicitan la personería jurídica, se satisfacen las exigencias del art. 33 del Cód. Civil y art. 3 inc. 3 (última parte) del Decreto de abril 30 de 1897.

La justificación de un depósito actualmente en un Banco, la avaluación de muebles y útiles que representan un valor positivo, y la cantidad que en caja se constate, es bastante para establecer la existencia de un patrimonio, que si no es considerable, es bastante, en mi sentir, para iniciar las funciones sociales, cuyo objeto se desprende de su propia constitución.

Reputo pues salvada la dificultad levantada anteriormente, por la ausencia de justificación de un patrimonio social presente y capaz de habilitar a la sociedad para la iniciación de su tarea.

En cuanto a la capacidad para adquirir bienes por la Sociedad, considero que basta la enumeración del inc. "e" del art. 2º de los estatutos, que citan los interesados, para que se le dé por existente.

Bajo tales conceptos, creo que V. E. puede acordar la personería que se pide por el "Centro Vitivinícola Nacional". — Julio de 1905.

=====

La autoridad a que se refiere el art. 332 del Código de Minería, no es la administrativa, sino la judicial local, que sea competente.

### **Zenobio Valdez, sobre boratera "Antuco".**

*Excmo. Señor:*

Con motivo de que don Zenobio Valdez, uno de los propietarios de la boratera "Antuco", se ha presentado ante V. E. a fin de que sea requerido don Belisario Rivero Jofre, su consocio en aquella, para concurrir a los gastos de su explotación, se hace necesario determinar si es la autoridad del P. E. o la del Poder Judicial, a la que se refiere el art. 332 del Cód. de Minería, invocado por el recurrente.

Este precepto legal para casos como el presente establece dos situaciones. En su primera cláusula determina que cualquiera de los socios contribuyentes puede pedir a la autoridad que el socio inconcurrente sea requerido de pago con apercibimiento de tenerle por desistido de sus derechos.

En la segunda estatuye que, no verificándose el pago dentro de los treinta días siguientes al requerimiento, la parte que el segundo tenga en la mina, acrece proporcionalmente a la del socio o los socios contribuyentes.

Se trata pues, de una declaración de caducidad y de un acrecimiento de derechos sobre una propiedad minera, que depende de un pedido promovido por parte interesada, que deberá sustanciarse con sujeción a las leyes de forma y sentenciarse por la autoridad competente. El poder administrador cuya jurisdicción en materia de minas, sólo responde al interés del Estado en beneficio del progreso colectivo que juega rol importante en la explotación de tal industria, tiene por límite precisamente, el dominio de los particulares.

Partiendo de este principio, es lógico deducir que, la autoridad llamada a declarar tales derechos con arreglo al art. 332 del citado código, no puede ser la administrativa sino la judicial local, que sea competente (art. 67, inc. 11 de la Constitución Nacional). Esta conclusión se desprende, por otra parte, del comentario de tal artículo del Código, el que, con respecto al requerimiento del socio inconcurrente establece que su término corre desde el día en que ha sido judicialmente requerido (nota al art. 332 del C. de M.).

Por estas consideraciones opino, que sólo la autoridad judicial es quien debe conocer en el caso a que se refiere el art. 332 del Código de Minería. — Julio de 1905.

*Decreto de acuerdo: agosto 24 de 1905.*

=====

La extracción de huano de las costas patagónicas está prohibida por la Ley de 9 de octubre de 1880 y aunque no lo estuviera, no sería posible acordar a los particulares permiso para extraerlo, dado que previamente, por ley debe ser clasificada dicha sustancia a los efectos de su explotación, pues ella no se encuentra comprendida entre los clasificados en los arts. 3, 4 y 5 del Cód. de Minería, dando cumplimiento así, a lo preceptuado por el art. 6 del Cód. citado.

**Eufasio Goñi, solicita pertenencia huanera en la isla Diana,  
en el Chubut.**

*Excmo. Señor:*

Los recurrente, invocando el carácter de descubridores de varios depósitos de huano en algunas islas e islotes de la costa Patagónica, pertenecientes al Estado, sostienen, que tal descubrimiento puede asimilarse al de las sustancias comprendidas en la 2ª categoría, clasificadas en el Código respectivo.

Está prohibida la extracción del huano en las costas patagónicas por la ley de 9 de octubre de 1880, derogatoria de la del 18 de agosto de 1871, que declaraba libre la explotación, en tales parajes, mediante el pago de ciertos derechos. No habiendo sido modificada aquella ley, ni aprobados por el Congreso, los reglamentos que deberá dictar el Poder Ejecutivo con sujeción al art. 3º de la misma, referentes a la extracción de huano, considero que V. E. no está legalmente habilitado para acordar la pertenencia huanera de que se trata.

Por otra parte, aún suponiendo, que la prohibición establecida por esa ley fuera derogada, siempre sería indispensable la sanción de otra que clasificase dicha sustancia, a los efectos de la explotación misma, dada la circunstancia de que el huano no se encuentra comprendido entre las sustancias clasificadas en los arts. 3, 4 y 5 del Cód. de Minería.

Por último, las anteriores consideraciones encuadran dentro de lo prescripto en el art. 6º, el cual establece, que *una ley especial determinará la categoría correspondiente a las sustancias no comprendidas en la mencionada clasificación, ya sea por omisión de ésta, o ya sea que se trate de sustancias descubiertas con posterioridad.* — Julio de 1905.

=====

No habiendo tratado con la República Oriental, que modifique lo preceptuado en los arts. 925 y 926 del Cód. de Comercio, debe exigirse su cumplimiento a los buques que hacen la carrera al Paraguay y a Montevideo, sin que sea razón para no proceder así, el hecho de que las Autoridades Orientales no tengan iguales exigencias con los buques argentinos.

**Prefectura General de Puertos, consulta sobre patentes de navegación de buques orientales y aplicación de los arts. 925 y 926 del Código de Comercio.**

*Excmo. Señor:*

Dados los informes que se han producido, opina el que suscribe:

1º) Que la reciprocidad a que se refiere el decreto de febrero 4 de 1892, en cuanto al uso de la patente de la bandera respectiva, debe continuar observándose.

La conducta de las autoridades orientales, observándola, a su vez, como consta de lo informado, así lo imponen.

2º) Sin embargo de que se constate por la Prefectura informante que las Autoridades Orientales no exigen su patente a los buques de bandera argentina, pienso que las nuestras deben exigir las de su bandera a los buques orientales, no sólo por la razón indicada, de no motivar la inconveniente diferencia entre nuestro cabotaje y el de nuestros vecinos, sino también para evitar el peligro de que nuestra ley de patente sea en muchos casos defraudada con el solo uso de la bandera oriental.

No creo que la obligación de la reciprocidad en el caso, llegue para nosotros hasta inferir el agravio indicado a las que ejercen el cabotaje y a suscitar el peligro mencionado por una de nuestras leyes impositivas.



Si las Autoridades Orientales no exigen la patente referida, será porque tienen otro medio de controlar la percepción de su propia venta, o porque tienen otras razones que les mueven a proceder de tal manera.

3º) Tratándose de una ley de la Nación, cual es el Cód. de Comercio, sus disposiciones deben ser cumplidas como corresponde, sin que la alteren la práctica de otras naciones; siempre naturalmente y como en el caso 'sub-judice' que no haya un tratado vigente que la modifique en caso especial y determinado.

No existiendo pues, esta última circunstancia, creo que debe procederse al respecto con la extensión que determina la Prefectura, es decir, que debe exigirse a los buques que hacen la carrera al Paraguay y Montevideo, el cumplimiento de los arts. 925 y 926 del Cód. citado. — Julio de 1905.

=====

Dictada la Ley 3367, que confiere la representación fiscal a los Procuradores Fiscales, el P. E. no está obligado a ratificar por Decreto esa representación en cada caso, desde que ella nace del propio ministerio de la ley; sólo debe hacerlo, cuando use la facultad que le acuerda la segunda parte del art. 1 de la ley citada.

**Ministro de Agricultura, consulta si debe dar un decreto nombrando al Procurador Fiscal en cada uno de los asuntos que se ventilen ante los Tribunales.**

*Excmo. Señor:*

La representación del Fisco Nacional, en todo asunto de jurisdicción voluntaria o contenciosa, en que sea demandante o demandado compete exclusiva y necesariamente a los Procuradores Fiscales, ante la jurisdicción respectiva y al Procurador General ante la Suprema Corte.

Así lo prescribe terminantemente el art. 1 de la Ley 3367, de 8 de julio de 1896.

En tal concepto, puede afirmarse sin lugar a duda, que la representación de los expresados funcionarios nace directamente y por el ministerio de la ley, sin necesidad de un decreto del P. E. que, en cada caso venga a recordar y establecer lo que la ley dice, y que se

supone conocida y sabida por los funcionarios aludidos y por los mismos jueces y tribunales.

Corroborando la disposición legal recordada, debo citar lo que estatuye el art. 3º de la Ley 3952 de 9 de octubre de 1900, ley que, suponiendo la legal y exclusiva representación de los fiscales, a que me he referido, ordena que la demanda instaurada contra la Nación debe comunicarse por oficio al Procurador Fiscal, quien deberá proceder de la manera que expresa, con arreglo a la citada Ley 3367.

Pero si bien en los casos generales, entre los que debe reputarse incluido el que motiva esta consulta, la representación exclusiva creada por la ley, excluye la necesidad de un decreto especial del P. E. confirmandola, creo que ese decreto es necesario cuando se produce el caso de la segunda parte del art. 1 de la Ley 3367, es decir, cuando el P. E. cree conveniente usar de la facultad que le confiere de sustituir en la representación del Fisco a los aludidos funcionarios, por el Sr. Procurador del Tesoro, en tal caso, siendo necesaria una manifestación de voluntad de su parte, es necesario un decreto que la exprese.

Pero no se trata ahora de tal circunstancia, como lo expresa la nota de V. E., sino de la regla general, que ya he considerado y para la cual no hay necesidad de conocer otra voluntad que la que la ley expresa.

Debo hacer constar aquí, que por mucho tiempo ha sido práctica en el P. E. dictar el decreto a que el Sr. Juez Federal se refiere, pero ello no puede ni debe considerarse, sino como una reminiscencia de lo que se hacía anteriormente a la Ley 3367, en que el P. E. podía nombrar fiscales "ad-hoc", cuando lo creía conveniente. Hoy que carece de esa facultad, los decretos que expide nombrando en cada caso a los representantes permanentes y obligados del Fisco, son actos simplemente voluntarios, que pueden acusar celo administrativo, en defensa de los intereses de la Nación, pero que nunca constituye una obligación, ni menos materia de una exigencia de parte de los Sres. Jueces o Tribunales, llamados a conocer en los asuntos en que aquella es parte.

Creo, pues, de acuerdo con lo dicho, que en el caso consultado, V. E. no está obligado a dictar el decreto exigido, que V. E. debe así comunicarlo al Sr. Juez oficiante y al Procurador Fiscal de la Capital, para que asuma la representación legal que le corresponde y la defienda en la jurisdicción que la ley le confiere. — Julio de 1905.

I. — Por regla general no debe hacerse lugar a las reconsideraciones que se piden de actos administrativos, mas en casos excepcionales el P. E. puede apartarse de esta regla, dado que no puede equipararse el orden administrativo al judicial, pues el primero carece de la estabilidad del segundo, ya que sus resoluciones pueden ser elevadas por los interesados ante los Tribunales Judiciales, y éstos llegar a anularlas.

II — Las Compañías extranjeras cuyo capital, constitución legal y domicilio está en el extranjero, y que sólo tienen en el nuestro representantes o mandatarios, deben considerarse excluidas de lo preceptuado en el art. 286 del Cód. de Comercio (reformado por la Ley 2528) y sólo deben cumplir con lo dispuesto en el art. 287 de dicho código respecto a la obligación de registrar sus estatutos, e inscribir el nombre de sus representantes, a los efectos de la responsabilidad legal que pudiera corresponderle.

**Sociedad Bright, Light, and Power, pide reconsideración del Decreto que le retiró la personería jurídica.**

*Excmo. Señor:*

Las irregularidades e incorrecciones de los fundadores y directores de la Sociedad "Bright, Light and Power" la conducta poco recomendable, entre nosotros, de sus diversos representantes, por una parte y por otra la dudosa personería legal del denunciante don Lorenzo B. Iraut así como sus improbadas acusaciones de manejos, engaños y otros actos por él imputados a la referida Compañía, son las circunstancias que han dado lugar a la laboriosa tramitación que encierran estos autos, y sobre todo, a la confusión que se ha producido al resolver los reclamos que se han formulado en su transcurso.

Examinando esa tramitación, se apercibe fácilmente una serie de incongruencias y de circunstancias contradictorias, que nacidas sin duda, de la confusión señalada y de la acción perturbadora del choque de los intereses privados, impidieron el conocimiento perfecto de los antecedentes, para su justa solución administrativa. Primero, un Decreto del P. E. de 3 de noviembre de 1902, concediendo la personería jurídica a la "Bright Light and Power", en su carácter de Sociedad extranjera y reputándola comprendida dentro de lo dispuesto por el art. 287 del Cód. de Comercio.

Después una serie de afirmaciones, sobre inexactitudes acerca de

la constitución de la Sociedad, sobre su capital, sus negocios y otras circunstancias, hechas por el denunciante con el propósito de que se retirara la personería otorgada anteriormente.

Luego otro Decreto del P. E. de 16 de noviembre de 1903, reconsiderando el anterior y declarando que la Sociedad en cuestión, si bien era extranjera, tenía su principal negocio en el país, y su capital levantado aquí, estando por ello regida por el art. 286 del Cód. de Comercio (reformado por la ley 3528).

Ese Decreto mandó dar un plazo determinado para que la Sociedad se pusiera en las condiciones de la ley, es decir, para que se nacionalizase.

Mantúvose en vigencia, sin conocimiento de la Sociedad, según parece resultar de autos, hasta que volviendo a la carga sus adversarios, constataron el vencimiento del plazo acordado, y entonces con conocimiento del representante judicial de la compañía, Dr. Zeballos, e intervención del señor Procurador General de la Nación, se dictó el Decreto de abril 19 de 1904, que terminando el asunto, derogó el de 3 de noviembre de 1902, retirándose la personería jurídica que se había acordado.

Esta última y definitiva resolución, fundada en las mismas consideraciones que el Decreto de 16 de noviembre de 1903, es la que da lugar a la reconsideración que pide don F. H. Crevalier Boutell como representante de "The River Plate Electricity Company Limited" acreedora reconocida de la mencionada compañía "Bright, Light, and Power" a mérito de los documentos acompañados al efecto.

Sobre esa reconsideración es que V. E. requiere un dictamen, el que paso a dar con los fundamentos que lo basan y tomando en cuenta las cuestiones de derecho que la rigen.

## I

La reconsideración propuesta, en cuanto requiere la derogación de los Decretos de 16 de noviembre de 1903, y abril 19 de 1904, para dejar sólo en vigencia el de 3 de noviembre de 1902, está subordinada a la solución que se dé a dos cuestiones fundamentales en el caso.

Una de forma, o sea la procedencia dentro de lo administrativo de la reconsideración pedida.

Otra, de fondo, o sea la de saber si la Compañía "Bright, Light and Power" debe ser considerada como una sociedad extranjera y

comprendida dentro de los términos del art. 287 del Cód. de Comercio, o debe ser reputada como una sociedad nacionalizada o a nacionalizarse, de aquellas a que se refiere el art. 286 del citado código.

En tal concepto pues, y a efecto de dictaminar sobre lo que se pretende, trataré las cuestiones propuestas, en el orden de su enumeración, y daré las bases sobre qué asiento la opinión que debo emitir.

## II

Es evidente la inconveniencia que en general envuelve la reconsideración de una resolución administrativa por otra y que para mayor abundamiento afecta derechos o intereses privados nacidos o extinguidos a mérito de una o de otra.

Tal concepto ha generalizado el principio aceptado de que las reconsideraciones en ese orden no deben admitirse, no sólo, en obsequio a la seriedad y prestigio de la misma autoridad administrativa que dicta tanto la resolución reconsiderada, como la misma reconsideración, sino la firmeza y seguridad de los derechos e intereses creados o extinguidos por los mismos.

El Sr. Procurador General Dr. Malaver y los que le han sucedido, han sostenido generalmente lo dicho, llegando el Sr. Procurador General Dr. Kier, a motivar, con un luminoso dictamen, una resolución de V. E. en que, al negarse una reconsideración se estableció especialmente que esa negativa se dictaba como antecedente para casos análogos (Resolución Ministerio del Interior de junio 30 de 1895 —leyes y decretos sobre tierra— Ley 849).

Sin embargo, a pesar de la evidente eficacia de tal principio, hay razones en mi sentir, para que tal regla no pueda ser establecida de una manera absoluta e irrevocable, como si se tratara de sentencias judiciales, pasadas por todos los trámites e instancias que aseguran su justicia y su legalidad.

El orden administrativo no puede en este sentido, ser equiparado al judicial.

Carece el primero del procedimiento razonado, minucioso y estrictamente legal del segundo, y por ende, las resoluciones de aquél no pueden tener la firmeza ni la seguridad de las de éste. Y así como la sentencia judicial agotados los recursos legales, tiene todo el prestigio y la fuerza que en derecho se da a la cosa juzgada, la resolución

administrativa envolviendo solamente una manifestación de opinión o voluntad del poder administrador, está sujeta a ser llevada ante los Tribunales, y allí revista y hasta anulada a pedido de quien se crea damnificado por ella.

Esta inconsistencia e importancia relativa, de las resoluciones administrativas, puede derivar en casos excepcionales a la reconsideración de una de ellas, por razones que afecten los derechos privados que le sean relativos o los de la Nación que puedan estar ligados.

Relacionado el caso sub-júdice a los conceptos que dejo expuestos, y tomando en cuenta la reconsideración solicitada, soy de opinión que se trata de un caso excepcional y que V. E. puede y debe acceder a ella.

Por una parte la gravedad que comporta la situación creada por el decreto de 19 de abril de 1904 a las Compañías Extranjeras en el país, la desconfianza que pueda surgir respecto de tal situación con las que viniesen o pensasen venir más adelante.

Por otra parte, la necesidad de una precisa y terminante interpretación de los arts. 34 y siguientes del Cód. Civil y 286 y 287 del Cód. de Comercio, a los efectos de dar a las sociedades extranjeras, la situación legal que les corresponde de acuerdo con sus estatutos y con respecto a la soberanía del Gobierno que las autorizó.

Y por último, proteger los derechos privados que están ligados a tales interpretaciones, cualesquiera que sean sus titulares o responsables.

Son razones bastantes, en mi sentir, que basan la opinión que he manifestado al respecto, tanto más, cuando que en realidad se trata de un Decreto que, a su vez, no es sino el producto de otra reconsideración anterior.

No creo que V. E. trepide si encuentra que hubo error en el Decreto de abril de 1904, en declararlo terminantemente, sin dar lugar a ser llevado a los Tribunales, con menoscabo manifiesto de la seriedad y altura de sus resoluciones y decretos.

### III

Reputando pues, procedente en el caso, la reconsideración de que se trata, me ocuparé de la cuestión indicada como de fondo y de cuya solución depende la existencia o derogación del citado Decreto de 19 de abril de 1904.

Los documentos, estatutos y certificados en forma, que corren en autos, no permiten duda de que la Sociedad "Bright, Light and Power", es una Sociedad extranjera establecida en Londres desde 1898.

De los mismos antecedentes resulta, que fué constituida con arreglo a las leyes inglesas, registrándose sus estatutos en forma correspondiente, en el año indicado, al ser autorizado competentemente por la autoridad respectiva del Gobierno Inglés.

Los fines sociales están claramente expresados en los incs. de A a V de la cláusula 3ª del memorandum y estatutos, siendo de notar que, en los incisos pertinentes se expresa que las operaciones de la Sociedad lo serán en la República Argentina, en el Reino Unido o *en otras partes* como lo expresan los que llevan las letras B. D. F. y M. y en cuanto a su capital, que se fija en 200.000 £, representado por igual número de acciones de 1 £, y si bien se establece la manera de emisión, no se fija el lugar donde han de negociarse, lo que deja ver que su negociación quede librada a hacerse en el mercado o punto que la Sociedad encuentre más conveniente, todo ello naturalmente subordinado al carácter de sociedad inglesa que surge de su constitución y registro legal.

Así constituida la "Bright, Light and Power" es mi opinión que no encuadra dentro de los términos claros y expresos del art. 286 reformado por la Ley 3528.

1º) La expresada sociedad constituida en Londres, no lo ha sido para ejercer su comercio principal en la República Argentina; de la cláusula citada de los estatutos se desprende, que la acción que la compañía se propone desarrollar, es en la República, en Inglaterra o *en otra parte*, como textualmente lo expresan sus estatutos (cláusula 3ª, incisos citados).

Debo hacer notar a V. E. que en este punto disiento con la opinión de mi ilustrado antecesor el Dr. Kier, que sirvió de fundamento al decreto impugnado, debido a que, ateniéndome al texto expreso de la ley, sólo tengo presente la intención o fin social, expresado en las cláusulas citadas, mientras que aquél toma el hecho actual y transitorio, probado o no, de que en el momento en que se expide, la sociedad no tiene otro negocio que el que conserva en la República.

Con el respeto que me merece la reconocida autoridad de mi antecesor, creo que mi interpretación se ajusta con más precisión al texto y espíritu del artículo citado.

2º) Las mismas consideraciones que dejo expuestas, en cuanto a los negocios de la sociedad y el lugar de sus operaciones, es de aplicación en cuanto al capital.

Por más que al considerarse los antecedentes de la “Bright Light and Power”, se haya creído no encontrar otro capital social que las 80.000 £ pagadas a Bright, por sus concesiones de luz eléctrica en Salta y Santiago del Estero, ello no significa que la Sociedad se formara en el concepto de tener por único capital tales concesiones.

Los estatutos en su cláusula 4 y siguientes, expresan claramente el monto de su capital y en ningún momento se refieren a la mencionada operación, ni menos que ese sea su único capital que haya de levantarse en la República Argentina, siendo más bien de presumir que no designándose lugar a tal objeto, se haya tenido la intención de hacerlo en Inglaterra, dada la radicación del domicilio de constitución y de dirección social, como asimismo el lugar de emisión de acciones.

Creo pues, y a pesar de todo, que no puede inferirse de los estatutos (que es de donde únicamente puede hacerse) que se tuviera la intención al fundar la Sociedad, de levantar la mayor parte de su capital en la República Argentina.

3º) Por otra parte, ni la sociedad ha tenido nunca su directorio central en la República, ni menos ha sido designada como lugar de las asambleas de sus socios, y por lo contrario consta de autos que aquí sólo han habido representantes o mandatarios.

4º) Por último, además de la jurisprudencia existente, debo hacer notar, que las cláusulas y constancias apuntadas e insertas en documentos auténticos, convenidos y establecidos bajo la fe del Gobierno inglés, que autorizó la compañía y consintió su existencia legal y su registro, en cuanto a su constitución, capital y propósitos, son indudablemente, los que la han hecho declarar sociedad extranjera y extraña al art. 286 (reformado) del Código de Comercio, por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Capital y por el Gobierno de Salta, en la resolución que también se inserta en autos.

Considero oportuno significar en este punto, que al poner la Compañía en presencia del art. 286 (reformado por la Ley 3528) y al llegar a las conclusiones a que he llegado, he interpretado su texto con la amplitud que impone su espíritu liberal, en el sentido de quitar



toda traba a la existencia o ingreso de capitales extranjeros a nuestro país, en la forma común de las sociedades anónimas.

Tal espíritu derivado, para la Nación y las provincias de los arts. 16 y 107 de la Constitución, y que fué en el Congreso la base angular de la reforma, explica claramente el texto del art. reformado, cuando alega en lo posible el sometimiento de la constitución de esas sociedades a la ley argentina y sanciona su respeto, así como el de la soberanía del Gobierno que las autorizó (Diario de Sesiones de la C. de D., Tomo I, pág. 391, año 1897, id. del Senado, pág. 341. año 1897).

Creo que lo que dejo expuesto, basta para dejar demostrado que la “Bright, Light, and Power” no encuadra dentro del texto y espíritu del art. 286 del Cód. de Comercio, reformado por la Ley 3528.

#### IV

Fuera la compañía de los términos y espíritu de la citada disposición, encuadra por su constitución y por la forma de sus operaciones en la República, dentro del texto expreso del art. 287 del Cód. de Comercio, estando por ende subordinada a lo que en ese artículo se estatuye y ordena.

En primer lugar la “Bright, Light, and Power” al exhibir su constitución en Londres y con arreglo a la ley inglesa y al certificar, como lo hace, su inscripción y registro, satisface la primera condición necesaria para caber en el citado artículo, cuales, la de ser una sociedad *legalmente* constituída en país extranjero (Londres) cuya condición como del propio texto se desprende, no era exigida por el art. 286, a que antes me he referido.

En segundo lugar, de autos consta, que existiendo en Londres el directorio central, aquí en la República sólo han existido y existen los mandatarios que la representan y las sucursales o agencias necesarias para las operaciones o trabajos que aquí efectúa, esto determina lo que prevee y establece la disposición legal citada, para limitar como lo hace, la acción de la ley, sobre las sociedades que, en tales circunstancias se encuentren, al registrar la publicación de los actos sociales y denuncia de sus representantes y mandatarios, a los efectos de las responsabilidades que les incumben por la misma disposición y por las leyes comunes.

Estas dos circunstancias pues, unidas a las que hice notar al ocuparme del art. 286, permiten sin violencia ni temor de equivocarse, la afirmación de que la “Bright, Light, and Power”, encuadrando en el art. 287 citado, está sujeta como las sociedades nacionales a las disposiciones de la ley, en lo relativo al registro y publicación de los estatutos, actos sociales y representaciones, así como a lo estatuido en el art. 1385 del mismo Código de Comercio.

Siendo lógica consecuencia, que no cae bajo la ley argentina, en los demás, es decir, en cuanto a sus estatutos en sí, capital, número de socios, lo que se aceptaba: primero, como consecuencia de su legal constitución en el país de su origen, con respecto siempre al acto público que la establece bajo la fe del Gobierno autorizante; segundo, en el reconocimiento que nuestra ley acuerda al derecho que las sociedades tienen para reunir, administrar y dirigir, desde su respectivo domicilio, los capitales que emplean en nuestro territorio, siempre que con ello no violen nuestras leyes generales, ni falten a las responsabilidades que esas leyes les imponen.

En estas deducciones desprendidas sin violencia del texto del art. 287 de que me ocupo, y que ponen a cubierto determinadas exigencias legales a la sociedad en cuestión, no es difícil apercibirse, como se ha de apercibir V. E. que cumpla siempre el espíritu liberal que ampara las sociedades anónimas en obsequio a nuestro desenvolvimiento económico y con respecto a lo dispuesto en las ya citadas disposiciones de los arts. 16 y 107 de la Constitución Nacional.

## V

Creendo haber demostrado que la sociedad “Bright, Light, and Power” está fuera de lo preceptuado por el art. 286 del Cód. de Comercio, reformado por la Ley 3528, y que se halla comprendida dentro de lo textualmente expresado por el art. 287 del mismo, considero que la personería jurídica acordada a dicha sociedad por el decreto de 3 de noviembre de 1902, le debe ser devuelta, produciéndose por V. E. la derogación de los decretos de 16 de noviembre de 1903 y de 19 de abril de 1904, por resultar evidente el error legal en que se basaron.

Con ello obtendría V. E. dentro de la propia autoridad:

Salvar la situación grave e indecisa creada por los expresados decretos, a las sociedades extranjeras en el país.

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales, dentro de su espíritu y su texto.

Mantenerse dentro de los principios de liberalidad, preceptuados por la Constitución Nacional, respecto de los capitales que vengan o existan en nuestro territorio.

Y por último, prestar el debido acatamiento que para los referidos actos de una autoridad extraña, sanciona implícitamente nuestra ley en las disposiciones que he comentado.

Si hubiese intereses privados que se considerasen lesionados por el acto de la derogación a que me he referido, amplio y abierto está el camino de los Tribunales de Justicia, donde podrán hacerse valer, una vez que, en posesión de su personería una de las partes, pueda presentarse citando o siendo citada, para requerir sus derechos o para responder de sus obligaciones. — Julio de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3530, pág. 507 de julio 29 de 1905.*

=====

Para obtener un buque la patente de paquete, con todos sus privilegios y excepciones, no basta que haya pagado esa patente de acuerdo con la ley respectiva, es necesario además, que cumpla con las condiciones que fijan las ordenanzas de Aduana, para gozar de tales privilegios y excepciones.

**Tobal y Cía., solicita que se deje sin efecto la resolución dictada por la Inspección General de Aduanas, sobre condiciones en que deben estar los vapores con patente de privilegio.**

*Excmo. Señor:*

Para que los buques a vapor establecidos en una línea cualquiera, puedan gozar, a su entrada al puerto de los privilegios y excepciones que establece el capítulo 3° de la Sección Tercera, de las Ordenanzas de Aduana, se requiere que su itinerario, sus escalas, así como la enunciación de sus viajes, sean a tiempo fijo y determinado, con sujeción al art. 836 de las mismas.

Los recurrentes, despachantes de los vapores nacionales “Gua-  
guaychú” y “Famoso Luján”, declaran que estos buques, por ser destinados exclusivamente a operaciones de carga, no tienen un itine-

rario fijo y determinado para la duración de sus viajes, pero como han pagado la respectiva patente anual, de privilegio, establecida en el inc. 2º del art. 7º de la Ley 3739, pretenden que los referidos vapores, tienen derecho a las ventajas de buques privilegiados.

Tratándose de obtener las excepciones, creadas en el citado capítulo 3º de la Sección Tercera de las Ordenanzas, entre las cuales está comprendida la de poder depositar la carga, con intervención del Resguardo, en lanchas o en los muelles o costas, inmediatos al Resguardo, cuando los paquetes a vapor lleguen a horas o en días en que la Aduana no funcione; no puede únicamente invocarse el hecho de haber pagado la patente de privilegio, requerida por la ley impositiva que crea el Tesoro Público.

Pues, la situación de paquete o buque privilegiado, surge de las condiciones enumeradas en el citado art. 836 de las Ordenanzas, que rigen la materia.

Y, como entre tales condiciones, se encuentran las de que, los buques a vapor tengan su itinerario y la duración de sus viajes, a tiempo fijo y determinado, claramente resulta que los vapores de carga, de que se trata en el caso occurrente, no pudiendo tener tiempo fijo y determinado para la duración de sus viajes, carecen de requisitos esenciales, para gozar los beneficios de paquete privilegiado.

Por otra parte, dada la igualdad ante la ley que establece la Constitución Nacional, en favor de todos los habitantes como preciosa garantía de los derechos individuales que ella misma consagra, todo privilegio o excepción, deberá interpretarse restrictivamente.

Y con sujeción a este criterio, sería menester que los buques de que se trata, estuviesen dentro de todos y de cada uno de los requisitos exigidos por las citadas prescripciones de las Ordenanzas, para optar al goce de los privilegios y excepciones que pretenden.

El hecho de haber pagado la patente de privilegio requerida por la Ley 3739, los vapores "Gualeguaychú" y "Famoso Luján", sin encontrarse estos buques, dentro de las citadas condiciones legales para poder gozar de las ventajas excepcionales que menciona el art. 843 y concordantes de las citadas Ordenanzas, sólo acredita un pago indebido, que autoriza, a los recurrentes a solicitar su repetición, si no obtasen por colocar a los referidos buques, dentro de las condiciones prescriptas para que, legalmente, sean considerados como privilegiados.

La resolución de la Inspección General de Aduanas, de fecha 8 de marzo de 1905, se ajusta a las consideraciones expuestas en el curso de este dictamen. Por ello, opino que V. E. debiera confirmarla, no accediendo a la revocatoria que solicitan los postulantes, sin perjuicio del derecho que éstos tienen para que les sea devuelto el valor de la patente de privilegio que, sin estar en condiciones legales para obtenerla, han pagado los citados buques.

Siendo de entenderse, que lo que dejo expuesto, relativamente a los buques que motivan este reclamo, es aplicable a todos aquellos que se hallen en igualdad de condiciones, y así, en el caso de dictarse una disposición general como se indica por la Aduana, que haga cesar este estado de cosas anormal, en que se cobra una patente por un privilegio que no se puede tener por la ley, deben tenerse presente las consideraciones que dejo hechas. — Julio 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3534, pág. 610 de agosto 3 de 1905.*

=====

De acuerdo con la Ley 1532 la Municipalidad de un Territorio Nacional (Formosa) tiene facultad para otorgar una concesión de tranway dentro de la jurisdicción municipal, sujeta a la aprobación del Gobernador del Territorio y del Poder Ejecutivo.

**Gobernador de Formosa, remite nota del Comisionado Municipal sobre concesión hecha a la Sociedad "La Formosa", para la construcción de una línea de tranway rural a vapor.**

*Excmo. Señor:*

Con sujeción a lo dispuesto en el inc. 7º del art. 24 de la ley de reformas a la Ley 1532 de Territorios Nacionales, la Municipalidad de Formosa o su representante legal, tiene facultad suficiente para *conceder o negar permisos para la construcción de tranways.*

Y aunque este precepto de la referida ley no señala, de una manera expresa el radio dentro del cual pueden efectuarse tales concesiones, lógicamente se comprende que, tal facultad, sólo puede ser ejercitada dentro de los límites del Municipio respectivo.

En el caso ocurrente, la Ordenanza Municipal de Formosa, de

fecha 17 de enero de 1905, que corre a fs. 2, concede a la Sociedad Anónima "La Formosa", permiso para construir una línea de tranway-rural a vapor en su municipio, línea que, arrancando de la manzana 274 bis, punto B del plano presentado y firmado por el señor N. Bracht, siga por la calle Paraguay hasta la Av. 9 de Julio y por esta Avenida y siguiendo el trayecto señalado en el mismo plano, cruce el riacho Formosa hasta el límite Norte de la Colonia, en la línea divisoria de ésta con el campo de propiedad del Sr. Domingo Ribolini.

De manera pues, que la concesión de que se trata, en cuanto a la extensión que abarca, cruza por las calles urbanas y dentro del égido del municipio de Formosa, con arreglo a la Ordenanza referida y al plano demostrativo que se acompaña.

En tal concepto, ella se ajusta a las facultades que la Municipalidad de Formosa o su representante tienen, de acuerdo con el inc. 7 del art. 24 de la citada ley de reformas de la Ley 1532, resultando por ende inmotivada la duda de la División General de Vías de Comunicación, en lo relativo a las atribuciones de la Municipalidad de Formosa o de su representante para otorgar la concesión fuera del territorio municipal.

La ordenanza de fs. 2, sometida a la aprobación del Gobernador del Territorio de conformidad al inc. 1º del art. 7º de la Ley 1532, y elevada a conocimiento del P. E. no ha ultrapasado los límites jurisdiccionales del municipio.

Por el contrario, se ha apartado de la solicitud de la sociedad anónima "La Formosa" que corre a fs. 4, en cuanto a la parte en que el concesionario pretendía internar las líneas del tranway-rural de que se trata, en campos que están fuera de la jurisdicción comunal.

En cuanto a las demás observaciones que formula la División de Vías de Comunicación, relativas a la presentación de planos, de los puentes a construirse por la Empresa, así como los de la línea con su perfil longitudinal, sólo importan cuestiones de hecho, que no afectan principios legales y no encuentro inconveniente en que V. E. los tome en consideración.

Igualmente y consultando previsiones de orden público, considero que V. E. podría agregar a las cláusulas de la concesión, que después de sus primeros quince años, la línea y sus accesorios podrán ser

expropiadas por la Municipalidad o el Estado, en las condiciones ordinarias de toda expropiación.

Por lo expuesto opino que V. E. debiera aprobar la Ordenanza de fecha 17 de enero de 1905, dictada por el Comisionado Municipal de Formosa, en cuya virtud se otorga la concesión dentro de su municipio del tranway-rural a vapor de que se trata, sin perjuicio del derecho que le asiste a la Sociedad concesionaria, para solicitar de quien corresponda la amplitud de su concesión sobre zonas territoriales ajenas a las de aquel municipio. — Julio de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4378, pág. 657 de junio 25 de 1908.*

=====

I. — No habiendo cumplido el capitán del buque con las obligaciones que le impone el art. 801 de las Ordenanzas de Aduana, respecto a las averías sufridas por la mercadería durante el viaje, la Aduana debe cobrar los derechos fiscales, sobre toda la mercadería, según el manifiesto general y los conocimientos.

II. — La obligación de declarar la avería ante la Aduana, que le corresponde al Capitán, no puede sustituirla, por declaración que haga ante otra autoridad.

**Juan Arzeno, pide se le acuerde una rebaja de derechos de Aduana, por avería de una partida de 10.000 cajones de kerosene.**

*Excmo. Señor:*

Se encuentran debidamente comprobados, mediante los informes respectivos que obran en este expediente, tanto el hecho de la avería de mar producida por oxidación de lotes conteniendo aceite kerosene, como el hecho de que el capitán del vapor "Osceola", entrado al puerto el 1° de enero del corriente año, ni en la diligencia de entrada, ni durante la descarga, declaró tal avería en el cargamento.

Con sujeción al art. 700 de las Ordenanzas de Aduana, llámase avería de mar en las mercaderías, el daño que sufren éstas por causa de algún suceso de mar, ocurrido desde su embarco hasta su descarga en el punto de destino; la oxidación de las latas de kerosene de que se trata, según el informe de los vistas de Aduana, ha sido ocasionada

por agua salada, a bordo del citado vapor, es indudable la avería de mar en el presente caso.

Tratándose de esta clase de avería durante el viaje, es necesario que el capitán del buque lo declare al dar la entrada o dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles para enmendar el manifiesto, expresando los sucesos de mar que causaron la avería, las mercaderías que la sufrieron, cual fué la avería, así como el nombre del dueño o consignatario de la carga, con arreglo a lo dispuesto en el inc. 1º del art. 801 de las citadas Ordenanzas.

Y tal declaración, incuestionablemente deberá hacerse ante la repartición de Aduana encargada al efecto por la Administración de la misma, no sólo en razón de que ésta es la inmediata autoridad del régimen aduanero, sino en virtud de que el inc. 3º del art. 801 de las Ordenanzas, establece que la avería se comprueba por el reconocimiento de las mercaderías y por los demás medios que el Administrador de la Aduana juzgue necesario para comprobar el suceso de mar que la ocasionó.

La omisión en que ha incurrido el capitán del “Osceola”, al no declarar la avería que tales mercaderías habían sufrido durante el viaje, ni al dar la entrada del buque, ni dentro del término hábil para la enmienda del manifiesto, autoriza a la Aduana, para cobrar al consignatario de tales mercaderías, los derechos íntegros sobre toda la cantidad de mercaderías expresada en el manifiesto general y en los conocimientos según el art. 807 de las Ordenanzas.

La declaración hecha con fecha 26 de enero del presente año, por don Edwin Jonkmi, como apoderado general de los señores Hollders Brotters y Cía., agentes del vapor “Osceola”, ante el Escribano Nacional de Marina Sr. Rotandaro, en cuya virtud, sin justificarse la personería que se invoca, se ratifica aquel apoderado en una exposición que se dice hecha por el capitán con fecha 2 del mismo mes y año, ni implica ni puede traducirse como el fiel cumplimiento de las citadas obligaciones, que el art. 801 de las Ordenanzas impone al capitán del buque.

No habiendo declarado el capitán, la existencia de la avería de mar de que se trata en el caso ocurrente, el término requerido por la ley no tiene aplicación en esta gestión, ni el decreto de 23 de marzo de 1894, ni el decreto posterior de diciembre de 1899, ambos derogados de hecho por el decreto de 25 de abril de 1902, que en



cuanto se refiere a averías ocurridas durante el viaje, concuerda y se armoniza con el texto expreso y con el espíritu del art. 801 de las Ordenanzas.

La resolución recurrida se ajusta a estos preceptos, y por ello opino que V. E. debiera confirmarla. — Julio de 1905.

*Decreto contrario: Boletín Oficial N° 3613, pág. 677 de noviembre 7 de 1905.*

=====

En los contratos que se celebran con menores para su ingreso a las escuelas de Marina, y que obligan a estos menores al egresar de ellas, a prestar servicios durante un mínimo de años, debe intervenir siempre el Ministerio de Menores, bajo pena de nulidad.

**Consulta del Ministro de Marina, sobre si los contratos que se formulen con menores de edad que entren a las escuelas de Marina deben ser firmados, a más del padre, también por el Ministerio de Menores.**

*Excmo. Señor:*

Según nuestro Código Civil, los actos o contratos que afecten la persona o bienes de los menores en general, aun cuando se encuentren bajo la patria potestad, requieren para su validez la concurrencia de tres voluntades: la del padre o tutor en su caso; la del menor tratándose de un adulto; la del Ministerio de Menores.

Los arts. 275 y 276 del Código Civil, son expresos cuando requieren la voluntad del padre, para el abandono de la casa paterna, enroalamiento, ingreso a comunidad religiosa, u otro acto que comprometa la persona de los menores, estableciéndose los medios que los padres tienen (art. 276) para hacer efectiva su autoridad.

El art. 280, dando por sentado que los padres no necesitan la voluntad de sus hijos impúberes para celebrar contratos que los comprometa en su persona y bienes, porque la ley reputa que aún no la tienen, exige la de los hijos menores adultos, para la locación de sus servicios.

El art. 59, con la sola excepción del art. 60 (las mujeres casadas)

y el art. 494 del ya citado código, son bien expresos cuando determinan y prescriben la obligada intervención del Ministerio de Menores, en todo acto o contrato que afecte la persona o bienes de los menores en general, y sin distinción alguna respecto de ellos, ni de los actos o contratos de que se trate.

La importancia de tal intervención, está revelada por la nulidad del acto o contrato, con que la ley castiga su omisión, y sin que por otra parte, haya disposición legal alguna que la limite al caso de no existir el padre, ni quien ejerza legalmente la patria potestad.

Ante tales disposiciones —cuyo texto claro y expreso no admite interpretación— el ingreso de un menor a las escuelas de Marina, sometido a un contrato a los fines del art. 11 de la Ley 3948, y que afecta su persona e intereses por un número de años a su egreso de la escuela, es un acto y un contrato comprendidos dentro de esas disposiciones, para la validez de uno y otro, es indispensable la concurrencia del padre o tutor en su caso, del menor si es adulto, y del Ministerio de Menores siempre.

Piensa pues el que suscribe, que en general y en los contratos de que se trata, es legalmente necesaria la intervención del Ministerio de Menores, lo que debe ser tenido en cuenta por V. E. al celebrar esos contratos, pudiendo promover por medio de los Procuradores Fiscales, la ratificación de los existentes por esa rama del Ministerio Público respectivo. — Julio de 1905.

=====

Autorizando la Ley 120, la expropiación de los terrenos necesarios e indispensables para la vía, estaciones, etc., del F. C. Argentino del Este, el P. E. no puede, ni los particulares tienen derecho alguno, a exigir que la expropiación vaya más allá del límite de lo que es necesario e indispensable para las construcciones mencionadas.

**Torcuato Gilbert, eleva convenio celebrado con el saladero Macoreto por terrenos ocupados por el Ferrocarril Argentino del Este.**

*Excmo. Señor:*

Los recurrentes, señor Bungue y Barso, invocando derechos que dicen adquiridos al amparo del decreto de 7 de agosto de 1900, que

corre a fs. 11. pretenden que el P. E. está legalmente comprometido a expropiarles, la superficie de doscientos cuarenta y seis mil ciento doce metros cuadrados, calculados sobre 30 metros de ancho, al precio convenido de treinta y siete centavos moneda nacional por metro, para la vía, estación y demás construcciones del Ferrocarril Argentino del Este.

Esta petición importa en realidad un pedido de revocatoria del decreto posterior de fecha 17 de julio de 1901, en cuyo art. 1º el P. E. declaró que, “la zona a expropiarse, para el citado Ferrocarril, será de un ancho normal de 20 metros, reduciéndose a 15 en los pueblos y sus égidios, en una extensión de tres kilómetros a cada lado”, estableciendo, a la vez, en su art. 32, la adquisición única y total de ciento sesenta y cuatro mil seiscientos diez y seis metros con sesenta decímetros cuadrados, como la medida necesaria a expropiarse a los recurrentes, con el destino indicado.

Desde luego, al ley de concesión del Ferrocarril Argentino del Este Nº 120, sancionada el 5 de octubre de 1864, que autorizó al Poder Ejecutivo para contratar su construcción, desde la ciudad de Concordia, de la Provincia de Entre Ríos, hasta el pueblo de Mercedes, de la Provincia de Corrientes, se refiere en su art. 8º, a los terrenos necesarios para la vía férrea, estaciones y demás construcciones indispensables, los que serán cedidos a la Empresa Constructora, por el Gobierno, libres de toda carga y previa expropiación si fuese necesaria, de las de propiedad particular”.

De manera que, con sujeción a los términos expresos de la Ley 120, el Poder Ejecutivo está facultado para expropiar los terrenos de los postulantes, como cualquiera otros terrenos, en cuanto sean necesarios para la vía, estaciones y, cuando se trate de construcciones indispensables.

Ni el Gobierno tiene atribuciones para separarse del criterio que le marca la ley citada, ni los particulares, para quienes esta ley es de obligatorio conocimiento (arts. 1 y 20, Código Civil) pueden tener derechos adquiridos contra los mandatos de la misma.

En el caso ocurrente, el Poder Ejecutivo, así lo ha comprendido. Por ello es que, el decreto de 7 de agosto de 1900, invocado por los peticionantes, al aceptar la propuesta de expropiar los terrenos de estos últimos, al precio de 37 centavos el metro cuadrado, agrega:

“entendiéndose este precio o el que resulte si fuese mayor o menor la superficie a expropiarse”.

Y como según el decreto de que se trata en el precio de 37 centavos, estaba comprendida toda reparación o indemnización a que los postulantes pudieran tener derecho, con motivo de la ocupación y expropiación de su propiedad, resulta claro e indudable que no pueden invocar derecho a que sea íntegramente expropiada la citada extensión de tierra, en el caso de que, en armonía con la ley que rige la concesión, se requiriese mayor o menor superficie.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo, asesorado por los informes que obran en el expediente de la División de Vías de Comunicaciones y demás Oficinas técnicas del ramo, dictó el decreto de fecha 17 de julio de 1901, que corre a fs. 28, en cuya virtud declara que el ancho normal de la vía del Ferrocarril Argentino del Este será de 20 metros, reduciéndose a 15 en los pueblos y sus égidios, en una extensión de 3 kilómetros a cada lado, limitando en consecuencia, la superficie del terreno a expropiarse a los recurrentes, bajo la base del precio convenido.

Y como este último decreto, al fijar el ancho y el largo de la zona que deberá expropiarse, se ajusta en un todo a la condición de la necesidad de tal extensión para construir la vía férrea de que se trata, resulta, pues, evidente, que él ejecuta y aplica la ley fundamental de la concesión, que obliga por igual, al Poder Ejecutivo como a los recurrentes.

Por otra parte, tratándose de expropiación, los postulantes no pueden pretender que se les expropie o compre mayor cantidad que la reclamada por la utilidad pública, declarada por el Congreso, en la Ley 120. Lo contrario, sería desnaturalizar la razón de ser de la compra que motiva este reclamo.

Por las consideraciones expuestas, y los concordantes que anteceden, opino que V. E. no debe hacer lugar a lo solicitado, y debe mantener en todo su vigor, el decreto de 17 de julio de 1901, cuya revocatoria se pretende. — Julio de 1905.

=====

El P. E. no tiene facultad para convenir transacciones, cuyo resultado sería extinguir o desvirtuar la acción fiscal ante los Tribunales, así como el derecho que le compete en cumplimiento de una ley impositiva.

**Sepp Hnos. y Cía.,** manifiestan que teniendo dos litigios con el **Fisco Nacional** piden una transacción, proponiendo dejar sin efecto ambos asuntos, pagándose los gastos causídicos por mitad entre las partes.

*Excmo. Señor:*

La transacción que se propone por los Sres. Sepp Hnos. y Cía., en los litigios que dice mantener con la Nación, como demandante y demandado, supone el abandono por una parte, del derecho y la acción legal que al Fisco corresponde, a mérito de la ejecución de una ley del Congreso de carácter impositivo, cuyos preceptos V. E. no puede variar por decretos y menos por transacciones a que no está autorizado.

Por otra parte, supone el desestimiento de los proponentes de un juicio, que dicen intentaron o están en condiciones de intentar, previa una venia del Congreso, que les es indispensable, según sentencia de la Suprema Corte, en juicio anterior sobre el mismo motivo, qu alegarán en el que mencionan.

Sin profundizar mayormente las bases de la transacción propuesta, debo presentar a V. E. las siguientes observaciones que ello me sugiere:

Que V. E. como lo he significado, no puede desistir de la acción y por ende de los derechos a que se refiere el primer punto de la transacción, si bien hay de por medio la interpretación de una ley; en cuanto a su ejecución, esa ley ha sido sostenida y ejecutada por V. E. y si ella ha suscitado oposición, es a los Tribunales de Justicia, a los que está sometida su validez en el caso, a quien corresponde pronunciarse, no pudiendo ni debiendo V. E. contrariarla, ni privar al Fisco de lo que debe percibir con arreglo a sus disposiciones.

Para este desistimiento es indispensable la autorización del Congreso, que es el único que podría hoy, cambiar los efectos de su propia ley.

En cuanto a la segunda base, se me ocurre que los proponentes no desisten de nada: Su primitivo juicio, sobre separación de su des-

tilería y licorería, tuvo resolución favorable para ellos en primera instancia, sufrió muy considerable disminución su derecho en la sentencia de la segunda, y por último la Suprema Corte rechazó su acción por no estar en las condiciones de la ley.

Se ve pues, que el juicio aludido en esa segunda base, no existe y que de reabrirse tendría previamente que pasar por el Congreso y por las instancias correspondientes de la justicia federal, cuyas resoluciones anteriores y mencionadas, están muy lejos de hacer presumir un éxito, para Sepp Hnos. y Cía., que se acerque ni remotamente a lo que representa el juicio sobre el aumento de impuesto al alcohol.

Lo relativo a las costas me parece inaceptable; la Nación no tiene por qué cargar con costas que no le pueden corresponder en juicios de los que se trata, suponiendo como supongo que los proponentes no pretendieran compartir con la Nación las costas necesarias a la marcha de su acción o defensa en el juicio que perdieron, en el futuro que imaginaron entablar y en aquel en que son demandados y a que alude la primera base.

Sin embargo, de las observaciones presentadas y que denuncian la transacción propuesta, como inaceptable por las razones y sobre las bases en que se la presenta, creo que si V. E. en conocimiento de la real responsabilidad de los proponentes en relación a su deuda actual, encuentra conveniencia práctica y eficaz para el Fisco en un arreglo con ellos, podría en mi sentir, celebrarlo en condiciones más razonables y capaces de salvar los intereses fiscales, siendo entendido naturalmente que tal arreglo sería “ad referendum”, es decir, sujeto a la previa aprobación legislativa. — Julio de 1905.

=====

Comprobados 20 años de servicios deben ampliarse los informes médicos o admitirse toda clase de prueba por el interesado, para constatar que la imposibilidad que alega proviene del desempeño de su empleo, y alcanzar así los beneficios del art. 19 de la Ley 4349.

**Martín Posse, maestro normal, pide jubilación extraordinaria.**

*Excmo. Señor:*

Creo que es el caso de pedir lo que en análogas circunstancias he pedido, relativa a la jubilación extraordinaria de un empleado que,

imposibilitado para su trabajo, exhibe más de 20 años de servicios continuados y sin tacha.

Deben requerirse y tener a la vista, informes correctos para determinar con pleno conocimiento, si la mencionada imposibilidad proviene o no del ejercicio de las funciones prestadas, y hasta debe darse ocasión al recurrente, para que suministre la prueba que al respecto tuviera, en un término prudencial.

En el caso, nada de eso se ha hecho, por el contrario, se ha solicitado la ampliación del informe del Departamento de Higiene, esa ampliación se ha hecho, pero la junta de la Caja de Pensiones, no parece haber tenido a la vista esa ampliación, dado que en el expediente aparece cerrada y sellada y en la resolución respectiva para nada se la menta ni menciona.

Como persisto en creer que son muy de tenerse en cuenta los 20 años de servicios honrados de un hombre, pienso que bien vale la pena, el resolver tomar en consideración todos los informes y pruebas que pudieran presentarse para mejor resolver en justicia.

Reproduzco, pues de acuerdo con lo dicho, mi pedido en casos análogos; que este asunto vuelva a la Junta Administrativa de la Caja de Pensiones para que verificando los informes existentes, requiriendo nuevos, o dando un término prudencial de prueba, haga con pleno conocimiento, la declaración de si la imposibilidad del recurrente nace o no del desempeño de sus funciones, tal como lo requiere y establece el art. 19 de la Ley 4349. — Julio de 1905.

=====

La pensión a los herederos de un jubilado, debe determinarse con arreglo a la clase de jubilación que gozaba.

Como esta era extraordinaria, se hace necesario establecer previamente si la imposibilidad que la motivó, provino de las funciones desempeñadas por el causante, 20 años de servicios son acreedores, a que se investigue lo dicho antes de resolver en definitiva.

**Carmen C. de Cáceres, viuda del ayudante 1º de la Prefectura General de Puertos Dn. Fructuoso Cáceres, solicita pensión.**

*Excmo. Señor:*

El causante de los recurrentes, su viuda e hijos, como jubilado

anteriormente, está comprendido a los efectos de la pensión de sus herederos, dentro de las prescripciones de la Ley 4349, según el texto del inc. 4 del art. 2º.

Su jubilación anterior pues, puede causar a su muerte, la pensión de sus herederos, caso de encontrarse dentro de las condiciones requeridas.

Esas condiciones están, en las de los arts. 18 y 19 de la misma ley, aplicables también a las pensiones y por ende al caso, según el art. 41, y dada la circunstancia de haber fallecido el expresado causante, cuando ya esa ley estaba en vigencia.

Resultando de autos, que los servicios de don Fructuoso Cáceres no pasaron de 25 a 26 años, la pensión de sus herederos regida por las citadas disposiciones de la Ley 4349, no es la que podía corresponder por analogía o consecuencia de una jubilación ordinaria, por ser esencial para una y para otra circunstancia, los treinta años de servicios continuados a que se refiere el art. 18 y su correlativo el art. 20 de la misma ley.

Pero como de los antecedentes se desprende, que los servicios de Cáceres fueron por más de 20 años continuados, conviene averiguar si es el caso de apreciar la pensión de sus herederos por analogía o consecuencia de la jubilación extraordinaria, a que se refiere el art. 19 de la ley (primera parte).

Si bien existen los 20 años requeridos por ese artículo, falta la justificación de haber sido declarado imposibilitado por enfermedad resultante del propio servicio.

En tal concepto, no podría establecerse contra el texto de la ley, que la pensión de los herederos de Cáceres pueda y deba considerarse como análoga a una jubilación extraordinaria o como una derivación de tal.

Esta omisión impide la declaración que el art. 19 de la ley supone, y que considero que debe hacerse en uno o en otro sentido, una vez que por los informes recogidos o prueba rendida por los interesados, se haya motivado la justa declaración mencionada.

Por mi parte, reputo que es muy digno de tomarse en cuenta, el servicio constante y sin tacha, de más de 20 años, si no para acordar la pensión por razón de jubilación anterior, por lo menos para suscitar la indagación, en el sentido de conocer si el jubilado lo fué por enfermedad y si esa enfermedad fué el resultado de las funciones desempeñadas.



Esa indagación puede consistir en informes, cuando el caso lo permita, o dar ocasión a los interesados para rendir la prueba que tengan al respecto, prueba que puede ser justamente apreciada por el llamado a resolver y hacer la declaración a que se refiere el art. 19 de la ley, y aplicable a las pensiones a mérito del art. 41 de la misma.

Pienso pues, que lo justo y equitativo en el caso, sería devolver a la junta administradora de la Caja de Jubilaciones este asunto para los fines indicados de informes, o designación de un término prudencial para que los interesados suministren la prueba a que he aludido. — Julio de 1905.

=====

De conformidad a la Ley 4031, el P. E. está autorizado para admitir y ordenar el enrolamiento de un ciudadano, comprendido entre los 19 y 28 años de edad, que alega y prueba no haberlo hecho antes, por haber vivido desde niño en territorio extranjero.

#### **Francisco R. Bisso, pide ser enrolado en la Guardia Nacional.**

*Excmo. Señor:*

Según se desprende de la partida de nacimiento que acompaña, el recurrente Francisco Bautista Bisso, es argentino de 24 años de edad, de manera que le comprende la obligación de enrolarse en el ejército de línea, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36, en armonía con el art. 1º de la Ley 4031, que rige la materia.

La circunstancia que invoca el peticionante, al pretender que el Poder Ejecutivo ordene su inscripción en el registro permanente establecido por el art. 39 de la misma ley, es decir, la manifestación de que no se ha enrolado en la debida oportunidad, a causa de haber permanecido con su familia en Europa (Italia) desde niño, hasta época muy reciente, no sería obstáculo para que V. E. accediera a su pedido, siempre que el postulante hubiese acreditado su declaración de edad, ante el Consulado Argentino establecido en el paraje de Italia, donde el solicitante ha permanecido, según dice, tantos años (art. 38).

Pero en el presente caso, el certificado militar de las autoridades italianas de la comuna de Roma-Sirivia, de la Provincia de Génova,

que el recurrente acompaña, sin estar legalizado por el cónsul argentino en dicha Provincia, si bien no justifica el cumplimiento de la citada prescripción, al menos hace presumir la fecha hasta la cual, el postulante, se encontraba en aquel país, o sea hasta el 5 de abril del corriente año.

Para robustecer esta presunción y a fin de evitar dilaciones que postergarían la época desde la cual, el postulante deberá cumplir sus obligaciones del servicio militar, creo conveniente que V. E. disponga, como medida previa a la resolución que al final aconsejo, pase dicho certificado al Sr. Cónsul General de Italia, acreditado en esta capital, a fin de que, si lo tiene a bien, se sirva manifestarse con respecto a si el documento de referencia, por su forma y detalles, corresponde a los que, en iguales casos, otorga la autoridad italiana.

Hecha que sea esta diligencia, con resultado tal que corrobore la indicada presunción, en consideración de que el art. 36 de la Ley 4031, establece que tratándose de ciudadanos comprendidos entre los 19 y 28 años de edad, o sea del Ejército de Línea —como el recurrente— el enrolamiento de éstos depende exclusivamente del Poder Ejecutivo Nacional y será efectuado en la forma que éste determine; afirmo que V. E. está autorizado por la ley de la materia y en razón de las especiales circunstancias del caso ocurrente, para acceder a lo solicitado. — Julio de 1905.

=====

La ley general de Ferrocarriles, somete a sus disposiciones a las empresas que existen en la República, a los efectos de vigilar su construcción y explotación; en virtud de ello, el Poder Ejecutivo, puede disponer que la Dirección General de de Vías de Comunicación, proceda a demoler toda obra que no se construya con arreglo al permiso o planos aprobados.

**Ferrocarril Central Argentino, reclama de una resolución de Vías de Comunicación, que le manda deshacer un galpón construido sin permiso de la oficina.**

*Excmo. Señor:*

La ley general de ferrocarriles somete a sus disposiciones a todas las empresa que existen en la República, a los efectos de vigilar su

construcción y explotación, de acuerdo con sus disposiciones y con las leyes de concesión.

Esa vigilancia o dirección administrativa y técnica, está confiada según la Ley 3727 (art. 15) al Ministerio de Obras Públicas.

Por decreto de octubre 26 de 1898 (art. 3) lo relativo a tales funciones fué puesto en manos de la Dirección General de Vías de Comunicación.

Más tarde y considerando, con razonable fundamento, que dentro de la aludida vigilancia y dirección, debían comprenderse las construcciones que se hiciesen en las estaciones, vías u otras dependencias de los ferrocarriles y que afectaran su servicio, se dictó la resolución ministerial de 3 de febrero de 1900, por la cual se facultó a la Dirección General de Vías de Comunicación, la demolición de toda obra que no fuera construída por las empresas ferroviarias con arreglo a planos aprobados.

Tal disposición administrativa, legítimamente derivada de los preceptos legales que dejo recordados, no contraría ni desconoce los derechos que la empresa pueda tener con arreglo a la ley civil. Sobre lo que es su propiedad, tratándose de una disposición de interés para un servicio público, que se dicta a mérito de la facultad legal del Gobierno para ejercer la dirección y vigilancia a que antes me he referido, las empresas no pueden tener, en caso alguno, un derecho más amplio que el limitado por esa facultad.

En el caso sub-júdice, la Empresa del Ferrocarril Central Argentino, en conocimiento de las disposiciones legales y administrativas mencionadas, si bien ha podido disponer de su propiedad y alquilarla, no ha debido prescindir de poner en conocimiento de su inquilino, lo que ella misma no podría hacer, ni consentir que se hiciera.

En tal concepto, pienso que la existencia de la interpuesta persona (el inquilino de la empresa) no exime a ésta, de la responsabilidad que pueda caberle por la disposición aludida, habiendo estado por su parte la Dirección de Vías de Comunicación facultada para dar la orden de demolición que dió, y para hacerla cumplir inmediatamente.

Es sin embargo de observarse en el caso, que esa oficina no ha procedido en la ejecución de su orden, con la diligencia que fuera de desearse, pues que, cuando trató de hacerla efectiva, ya el galpón (a demolerse) estaba concluído, produciéndose la situación de tener quizá

que destruir una obra que puede ser de utilidad, si se han llenado las condiciones de buena construcción y si su situación no obstaculiza el servicio público.

En tales circunstancias y teniendo presente que la orden dada sólo tiene carácter administrativo, por lo que puede V. E. suspenderla o derogarla, es mi opinión que el galpón de que se trata, puede no ser demolido, si de una previa inspección resultase que está construído como corresponde, que no obstaculiza el servicio público, y que la empresa presente los planos de la construcción. Todo esto sin perjuicio de significarle que en casos análogos, debe abstenerse de proceder como lo ha hecho ahora. — Agosto de 1905.

=====

Siendo las funciones de la Comisión Administradora de la Lotería puramente internas, no es a ella, que corresponde pronunciarse sobre los derechos que cree tener contra la Nación, un poseedor de un quinto de Lotería Nacional, ni el Ministerio respectivo, sino el P. E. que al emitir a su nombre los billetes, obra como persona jurídica (ley 3952).

**Tomás A. Bustuiza, pide copia de la resolución recaída en su expediente, iniciado sobre cobro de un quinto premiado de la Lotería Nacional.**

*Excmo. Señor:*

Si bien es cierto que, la Ley 313 al establecer una lotería de Beneficencia Nacional, estatuyó en su art. 2º que la administración y vigilancia interna de la misma estaría a cargo de una comisión formada en la manera que determina.

Si bien lo es también que, con arreglo al art. 3º del decreto reglamentario de esa ley, la comisión indicada debía depender del Ministerio del Interior, entonces, siéndolo hoy del Ministerio de Relaciones Exteriores, según el inc. 16 del art. 9 de la Ley 3727 y del art. 2 del decreto de octubre 31 de 1898, dictado por el Sr. Presidente de la República en Acuerdo de Ministros.

No es menos cierto, que todo ello, refiriéndose a la administración y vigilancia interna de la mencionada lotería, no puede comprender ni referirse a los derechos y obligaciones que se creen o contraigan,

entre la Nación y los terceros respectivamente, y con motivo del contrato existente, según el cual, la primera, expende los billetes de lotería y los segundos los compran.

En tal concepto, los mencionados derechos y obligaciones son extraños al orden interno, y afectan a las partes contratantes, una de las cuales en el caso, es la Nación, siendo a su administración a quien corresponde, en primer término, pronunciarse sobre esas obligaciones y derechos en cuanto comprometen intereses que le son propios.

Ahora bien, estando esa administración a cargo del P. E. según lo dispuesto en el inc. 1º del art. 86 de la Constitución, y siendo ese P. E. el Presidente de la República, según el art. 74 de la misma, es a él a quien corresponde pronunciarse en el caso y nunca exclusivamente a la comisión de la lotería, cuya jurisdicción, no va más allá del orden interno de la institución, careciendo de facultad para contratar o estar en juicio por sí, ni al Ministerio, cuyas facultades tampoco alcanzan a comprometer por sí, ni a pronunciarse en definitiva y dentro de lo administrativo, sobre las obligaciones o derechos que afecten a la Nación por razón de sus actos o contratos.

De aquí, que tenga fundada razón el recurrente para requerir, como requiere, una resolución definitiva de parte del P. E. en el caso sub-júdice, en que se trata del derecho que reclama correlativo de una obligación que atribuye a la Nación, con motivo de un quinto de lotería que dice haber tenido o tener en su poder.

En tal sentido, y teniendo en cuenta también que, de no ser así, se anularía el derecho que la Ley 3952 consigna, de poder demandar a la Nación en su carácter de persona jurídica, que es en el que actúa en el caso, por no existir el pronunciamiento requerido por su art. 1º, pienso que V. E. tomando en cuenta las circunstancias que rodean el reclamo, debe resolver por medio de un decreto administrativo su aceptación o rechazo, según por derecho corresponda. — Agosto de 1905.

=====

I. — La autoridad administrativa puede revocar un permiso de cateo cuando los trabajos de exploración e instalación no se han empezado en el término fijado, o cuando iniciados han sido suspendidos sin autorización, para ello. El permiso de cateo es un derecho para quien se otorgue, mas debe ejercerse dentro de los límites que le fija el Código de Minería.

II. — Corresponde aprobar un artículo reglamentario del Código de Minería, que establece, que las solicitudes sobre denuncias de permisos de cateo, serán tramitadas en la misma forma que las solicitudes de denuncias de minas.

### **División de Minas, eleva proyecto de reglamentación de solicitudes de cateo.**

*Excmo. Señor:*

Con sujeción al art. 39 del Código de Minería, la autoridad puede revocar la concesión de permiso de cateo, a solicitud de un tercero interesado en continuar la exploración o en emprender una nueva en el mismo terreno, ya sea cuando no se han instalado los trabajos de exploración en el tiempo prefijado, o sea cuando dichos trabajos se han suspendido sin el correspondiente permiso.

Por otra parte, el permiso de cateo, otorgado por el Poder Ejecutivo, constituye un derecho en favor de quien se otorga, aunque sujeto a las obligaciones de instalar los trabajos de exploración, dentro de los términos que establece la ley misma, no pudiendo diferirse, la época de la instalación, ni suspenderse esos trabajos después de emprendidos, *sino por causa justificada* y en mérito de Decreto de la autoridad, según el art. 28 del Código de Minería.

El artículo reglamentario que la División de Minas somete a la consideración de V. E. estableciendo que, las solicitudes sobre *denuncias de permisos de cateo* que se presenten de acuerdo con el citado art. 39 de la ley de minas, serán tramitados en la misma forma que se tramitan las solicitudes de *denuncias de minas* con arreglo a los arts. 157 al 162 de dicho Código, se amolda y armoniza con aquellos preceptos legales, a la vez que procura la garantía del derecho constituido mediante un permiso de cateo, dando libertad amplia de defensa tanto al denunciante como al denunciado.

Pues la situación del que denuncia una mina, con relación a los intereses que puede comprometer respecto a la propiedad privada o a los colindantes, es análoga a la del que denuncia la caducidad de

un permiso de cateo, de manera que encuentro procedente la reglamentación proyectada, desde que, en su virtud, se hacen extensivas las disposiciones del Código de minería sobre denuncia de minas, a la denuncia de permiso de cateo, dándole a este acto, toda la importancia que tiene con respecto a los intereses del progreso minero.

Debo solamente observar que el agregado que la División de Minas añade al artículo reglamentario que se proyecta cuando dice: “sin otro recurso para el denunciado”, puede dar margen a interpretaciones que comprometan la libertad de defensa en el orden judicial.

Por ello opino, que tal agregado debe suprimirse, quedando el artículo reglamentario tal como se propone en todo lo demás, perfectamente encuadrado dentro de las disposiciones legales del Código que reglamenta, y en consonancia con las facultades que el Poder Ejecutivo tiene para reglamentar las leyes en razón de la Constitución Nacional. — Agosto de 1905.

*Decreto reglamentando el artículo 39: Boletín Oficial N° 3538, pág. 706 de agosto 8 de 1905.*

=====

Debe reputarse pensión graciable o sea favor pecuniario, todas las otorgadas por ley especial del Congreso y que no encuadren dentro de la ley que rige las pensiones ordinarias.

Las pensiones graciales están en un todo sujetas, en cuanto a su término al señalado en la ley 3195, y al descuento, prórroga y limitaciones establecidas por las leyes 4349 y 4350.

**Dña. Brígida Somellera, pensionista militar, como hija del Comodoro D. Antonio Somellera, reclama del descuento que le hace la Contaduría General en su pensión.**

*Excmo. Señor:*

En las cuestiones sobre pensión suscitadas por las Sras. de Beccar, Isla y del Cape, he tenido ocasión de manifestar que reputo graciable o sea favor pecuniario, toda pensión o aumento de una existente, hecha por ley especial del Congreso y que no encuadre dentro de la ley que rige las pensiones ordinarias.

En el caso presente, la hija del Comodoro don Antonio Somellera,

a quien fué transmitida en 1901, la que gozaba su señora madre, tiene una pensión de \$ 400 que proviene de: \$ 300 de la pensión ordinaria que correspondió a la causante y a la hija, en su caso, con arreglo a la Ley de 1865; \$ 100 del aumento que graciamente le acordó el Congreso sobre la mencionada pensión por Ley 3534.

La primera suma debe ser íntegra y permanentemente pagada a la recurrente mientras viva, por ser el monto de su pensión ordinaria y legítima, como hija del señor Comodoro don Antonio Somellera, y con arreglo a la ley de 1865.

La segunda le deberá ser abonada, en el concepto de un favor pecuniario otorgado por el Congreso, pero sujeto a los términos, límites y condiciones que a tales favores imponen las Leyes 3195, 4349 y 4350.

Respecto de este favor, constituido por el aumento referido, por voluntad del Congreso en ejercicio del inc. 11 del art. 67 de la Constitución, es aplicable el término de la primera de las leyes citadas, y el descuento, prórroga y limitaciones de las otras dos.

Considero pues que la manera indicada, es la que justa y legalmente corresponde para liquidar y pagar la pensión de la recurrente.  
— Agosto de 1905.

=====

Las multas a que se refiere la ley 4349 arts. 4 y 8 deben ingresar al fondo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. Dichas multas son las que se imponen en el orden administrativo por faltas de los empleados o de las personas que accidentalmente sirvan a la administración o contraten con ella. Las multas de las leyes especiales como Aduana, Contribución Territorial, etc., tienen su destino legalmente señalado y no corresponden de ningún modo a la Caja.

**Contaduría General, recuerda lo dispuesto en el Inc. 4º del art. 4º de la ley 4349, sobre destino de multas a los empleados y señala el alcance que a su juicio debe dársele.**

*Excmo. Señor:*

La poca precisión del texto del inc. 4 del art. 4 de la Ley 4349, sobre las multas que deben ingresar al fondo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, levanta las dudas y motiva la consulta,



presentada a V. E. por la Contaduría General, a efecto de su justa interpretación.

En el caso corresponde apreciar el significado de la disposición obscura de acuerdo con el espíritu y alcance de la ley que la comprende.

La Ley 4349 ha sido dictada en beneficio exclusivo de los empleados y personal permanente de la Administración Nacional, como se desprende del texto de sus arts. 1, 2 y 3; y al objeto de proveer al retiro y pensión de sus deudos, con recursos tomados de los mismos empleados, bajo dirección independiente, aunque dentro de la administración y con la ayuda del Gobierno en la forma legalmente establecida (art. 4 y siguientes).

De aquí, que sea evidente que el objeto de la ley es exclusivamente el retiro y pensión mencionados con prescindencia del tesoro público, y que el alcance de su acción, esté limitado a lo simplemente administrativo.

Apreciada de acuerdo con tales conceptos, la disposición reputada obscura, cuando habla de las multas que deben ingresar al fondo de la Caja Nacional, no hay duda que se refiere a las de carácter administrativo y que se imponen dentro de la administración misma.

Estas multas no pueden ser otras, como la disposición misma lo expresa, que las que se imponen, dentro de ese orden, a su personal o a los extraños.

Las primeras de estas pueden resultar de descuentos o penas impuestas a sus empleados por los mismos reglamentos administrativos de las diversas oficinas o reparticiones, para castigar faltas o asegurar su mejor servicio; las segundas, pueden nacer de las que se impongan a los servidores accidentales de la administración (incs. 2 y 5 del art. 3) o a las personas que contraten con el P. E. dentro de las facultades que le son propias y a efectos directos de proveer a la misma administración.

Estas son únicamente las multas a que ha podido referirse el inc. 4 del art. 4 de la Ley 4349, dado que son las únicos que pueden comprenderse dentro de su espíritu evidente, su objeto bien determinado y su alcance limitado.

Y ellas son en mi sentir, las que deben ingresar al fondo de la Caja Nacional, pudiendo V. E. al resolver la consulta fijarla con precisión, si lo cree conveniente, dentro de los límites indicados.

En cuanto a las otras multas que radican en leyes generales o especiales, como las aduaneras, de contribución territorial, estadística, etc., etc., y que tienen destino legal señalado, son extrañas a la presente ley porque están evidentemente fuera de su acción. — Agosto de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3549, pág. 970 de agosto 21 de 1905.*

=====

Un comerciante que paga patente de importador, no debe abonar derechos por un galpón particular destinado solamente a poner sus mercaderías, géneros o frutos, pues tal depósito no estando destinado a recibir productos ajenos, no es el depósito a que se refiere el art. 14 de la ley de patentes.

**Varela y Linares, reclaman de una patente impuesta  
como importadores.**

*Excmo. Señor:*

Suponiendo como creo, que los recurrentes siendo importadores paguen su patente de tales, con arreglo al inc. 9, art. 1 de la ley respectiva, lo que no se ha discutido, ni puesto en duda hasta ahora, su depósito o galpón no debe abonar la patente que se le cobra.

Según resulta de la propia afirmación y del informe de la Aduana de Bahía Blanca, de julio 17 del año que corre, se trata de un depósito particular y al solo objeto de almacenar las mercaderías, géneros o frutos de los recurrentes.

En tal concepto, ese depósito no es el que refiere el art. 14 de la ley de patentes, pues no se trata de una “empresa de depósitos particulares de aduana” sino de un galpón para los fines indicados en el párrafo anterior, lo que coloca el caso dentro de la excepción que refiere el inc. 4 del art. 13 de la misma ley.

Ahora, si resultara que los recurrentes no son tales importadores, ni pagan la patente de tales, o se constatare que en su galpón reciben mercaderías, géneros o frutos ajenos, como empresarios o comerciantes en depósitos, su caso cambiaría de aspecto y saliendo del art. 13 de la ley caería en el art. 14 citado.

Entre tanto, no estando esto demostrado, debe estarse a lo que resulta de los informes, y por ende debe resolverse en el sentido que al principio indiqué. — Agosto 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial, N° 3945, pág. 970 de agosto 22 de 1905.*

=====

La jurisdicción arbitral no debe admitirse por el P. E. en los asuntos en que es o será parte, y que por su naturaleza deban ser resueltos por los tribunales de justicia.

**Gran Destilería Buenos Aires, solicita se someta a arbitraje la fijación de los perjuicios que le ha irrogado la aplicación del art. 7° de la ley 3761, sobre separación de destilería y licorería.**

*Excmo. Señor:*

La proposición que hace el recurrente de volver al convenio derogado que le permitía tener unida su destilería y su licorería, con serio agravio de una ley que lo prohibía, es de rechazo inmediato, porque ello importaría volver a un régimen en abierta oposición de la ley mencionada, y por ende causaría una resolución de V. E. tan inconstitucional, como lo fué aquel convenio, atentatorio al inc. 2 del art. 67 de la Constitución.

En la relativo al arbitraje propuesto, huelgan consideraciones perfectamente atendibles, para rechazarlo, no sólo bajo el punto de vista de la inconveniencia de prescindir de la justicia organizada, sino aún bajo el de las conveniencias del tesoro público.

En efecto, si V. E. aceptara el arbitraje propuesto y lo presentara al Congreso para su autorización, como correspondería, siempre empezaría por reconocer que debe una indemnización que, en casos análogos, ha sostenido no deber, y que no ha sido declarada por ningún Juez, ni tribunal competente.

En las demandas de los Sres. Sepp Hnos., Huergo y Cía., y otras, presentadas al objeto de cobrar los daños a que el recurrente se refiere, si bien es cierto que en primera y segunda instancia se declaró a los actores con derecho de sus partes, no lo es menos que tales decla-

raciones fueron anuladas por haberse hecho por jueces incompetentes, según la sentencia de la Suprema Corte dictada a su respecto.

Sin declinar de lo dicho y fuera de lo costoso que para V. E. sería el arbitraje de que se trata, mayormente no siendo indispensable sino conveniente para quien lo propone, se produciría la incorrección administrativa de sacar, sin motivo plausible, la solución de una cuestión importante de derecho a los tribunales federales permanentes, cuya autoridad y rectitud están muy por encima de la que pueden tener los funcionarios transitorios de la jurisdicción arbitral.

Es mi opinión pues, que no debe hacerse lugar a lo que pretende el recurrente con respecto a la justicia y en guarda de los intereses fiscales. — Agosto de 1905.

=====

El capital a invertir en la tierra pública por los compradores, según la Ley 2875 y su decreto reglamentario, debe serlo en cada lote de 10.000 hectáreas, no bastando que se haya introducido un capital mayor en uno solo de los lotes para adquirir los demás. Mientras no se cumpla en esta forma, no debe ordenarse la escrituración y ha de aplicarse la sanción penal del art. 14 de la citada Ley.

**M. Fernández Oro, manifiesta haber cumplido con la ley, con respecto a las tierras de que es concesionario en Río Negro.**

*Excmo. Señor:*

Teniendo en cuenta, por una parte, lo expuesto por el recurrente en su escrito de fs . . así como lo que resulta de los informes producidos por las diversas oficinas del Departamento de la Tierra Pública; y por otra parte, el texto claro y expreso de la Ley 2875 y decreto reglamentario de 24 de Diciembre de 1891, considero que el recurrente señor Fernández Oro no ha cumplido como corresponde, con las obligaciones que le imponen los arts. 4, 5 y 14 de la citada ley, en su carácter de comprador de la tierra pública y dentro de lo prescripto por el art. 13 de la misma ley.

Servirán de base a semejante opinión, las siguientes consideraciones y antecedentes.

1º) Resultando de los informes producidos y de las mismas afirmaciones del recurrente, que la inversión del capital que tiene hecho

en el campo, lo ha sido en un punto dado y dentro de uno de los 4 lotes de 10.000 hectáreas que componen su propiedad, permaneciendo baldíos los tres restantes, es lógico deducir, que no se ha satisfecho la ley, cuando en su art. 4º estatuye terminantemente que, “los pobladores sobre el Río Negro, Neuquén y Limay están obligados a introducir un capital de ocho mil pesos en cada lote de diez mil hectáreas...”

La expresión “en cada lote” determina claramente la distribución que en el campo debe tener el capital a invertirse, haciendo imposible la interpretación, que con ligereza se ha querido dar a la ley, admitiendo equivalencias y compensaciones que su propio texto no admite.

2º) Resultando, por otra parte, que en los informes que corren en este expediente, se ha interpretado erróneamente el texto de la Ley 2875, dando por razón, la existencia del decreto de 24 de diciembre de 1891, al que se atribuye la modificación de la ley, y cuyas disposiciones se aprecian tan erróneamente como se ha hecho con la ley misma; conviene recordar, para destruir las consecuencias posibles de tal ligereza, las siguientes consideraciones.

a) Que cualquiera que sea el texto, o haya sido el propósito del mencionado decreto nunca ha podido modificar ni menos alterar el texto claro y el espíritu evidente de la ley que reglamenta, el decreto de 1891 ha podido ser dictado por el P. E. para reglamentar la Ley 2875, pero “cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”, según lo expresa el Inc. 2º art. 86 de la Constitución.

b) Que basta por otra parte, leer lo dispuesto por el art. 6º del expresado decreto para comprender que lejos de consignar la improcedente modificación que se le atribuye, su texto corrobora la ley y hace práctica su aplicación, de la manera más evidente.

Ese artículo dice textualmente que “las obligaciones prescriptas en los arts. 3, 4, y 5 de la ley (introducción de capital y edificación en cada lote de 10.000 hectáreas) se considerarán cumplidas siempre que se *introduzca el capital que en ellos se determina*, aún cuando los valores no sean iguales en cada fracción de 10.000 hectáreas”. Lo que vale decir, que es permitido variar los valores en el capital y edificios en cada lote, sin peligro del cumplimiento de las condiciones legales, pero siempre sobre la base de la introducción del capital que en las citadas disposiciones se determina.

Esta interpretación, que es la única posible, porque reglamenta la ley sin contrariarla, está muy lejos, por cierto, de la que se le ha dado con algún apresuramiento por algunas de las oficinas informantes, cuando se ha llegado a afirmar que el texto transcripto ha querido significar lo siguiente: "que queda establecido que el capital (introducido) se compute en su totalidad aun cuando no está proporcionalmente distribuido en cada lote".

Basta la confrontación de ambos textos para que se destaque con notable evidencia el *error* cometido.

Y si del texto transcripto y comentado de la ley 2875 y decreto citado, se pasa a recordar su espíritu y propósitos, se acentúa indudablemente, la interpretación y aplicación que dejo hecha en lo que he expuesto.

La Ley 2875 fué dictada con dos propósitos principales, que por sí solos, denuncian su verdadero espíritu.

Arbitrar recursos al erario público, por la venta de la tierra pública, aún en poder de la Nación o retrovertida de manos de los particulares y especuladores.

Dividir la tierra, evitando los latifundios, poniéndola en condiciones de colonizarla y poblarla.

El texto mismo de la ley y su discusión en el Congreso, denuncia tales propósitos, bastándome citar aquí la discusión en la Cámara de Diputados al iniciarse su sanción, la que corre en las págs. 127 y 160 y siguientes del tomo 2 del diario de sesiones de esa Cámara. del año 1891.

Ahora bien, respondiendo a ese segundo propósito, el de la colonización y población, se trató de dividir la tierra, en todas las circunstancias en que se encontrase y que fuera posible.

Y así, cuando había sido adquirida por compra en las condiciones del art. 13 de la citada ley, como lo fué la de que se trata, quedó sujeta a las condiciones de división, por la distribución del capital invertido y la edificación, a que se refieren los arts. 3, 4 y 5, a mérito de lo establecido por el art. 14 y bajo la sanción que el mismo establece.

Este espíritu evidente, que no necesita mayor comentario, porque se desprende claramente de lo dicho, que no ha sido ni podido ser contrariado por el decreto de 1891 que se ha citado, viene a poner de relieve, una vez más, la claridad del texto legal, cuyo ver-

dadero significado he puesto de manifiesto, en contraposición a las interpretaciones erróneas de que ha sido objeto.

Puede pues, decirse con toda seguridad que la Ley 2875, por su texto y por su espíritu, ha querido que la población y colonización de la tierra pública adquirida en la manera que ella determina, se distribuya en la proporción que indica so pena de incurrir en la sanción penal que ella misma establece.

He debido entrar en esta disposición un tanto circunstanciada, no sólo para basar la opinión que respecto del caso he dado al principio, sino aún por la circunstancia de haberse dicho por alguna de las oficinas informantes que existían casos semejantes, resueltos o a resolverse, en la manera ilegal y errónea, en que ha sido interpretada y aplicada la Ley 2875.

Tales precedentes deben destruirse no sólo en defensa de los intereses materiales del fisco, sino en respeto del texto, espíritu y propósitos de la expresada ley.

De acuerdo pues, con la opinión emitida de que el recurrente no ha cumplido, como corresponde, con sus obligaciones respecto de sus tierras, creo que V. E. así debe declararlo, aplicándole por el tiempo que corresponda, y hasta tanto cumpla aquélla, la sanción expresa del art. 14 de la Ley 2875. — Agosto de 1905. •

*Decreto de Acuerdo: de fecha 9 de agosto de 1905.*

=====

La excepción de prescripción opuesta por un escribano de registro contra la condena de un Juez de Territorio Nacional dictada en su contra, no constituye un descargo para evitar su suspensión administrativa.

**Eufrazio Goñi, solicita pertenencia huanera en la Isla Diana,  
del Chubut.**

*Excmo. Señor:*

Según informa el señor Juez Letrado de la Gobernación de Río Negro, a cuya jurisdicción civil se encuentra sometido el recurrente como escribano público, con asiento en Adolfo Alsina, de acuerdo con la exposición del mismo peticionante, éste ha sido condenado al pago de una multa de un mil seiscientos treinta y seis pesos con

setenta centavos moneda nacional por infracciones a la ley de sellos que, entre otras irregularidades ha cometido en el ejercicio de su delicado cargo, por sentencia de aquel juzgado, apelada por el postulante por ante el Tribunal superior correspondiente.

En presencia de esta situación, no habiendo levantado dicho Escribano mediante sentencia pronunciada en última instancia, la condenación que le impone la resolución aludida, resulta que, dicha causa está en manos del Poder Judicial, que deberá pronunciarse en su oportunidad.

Y por otra parte, si la sentencia de última instancia revocase el referido fallo, fundándose únicamente en la excepción de prescripción, que opone el postulante como defensa sustancial contra las infracciones que ha cometido de la ley de sellos, resultaría siempre comprobada la negligencia y las graves irregularidades del postulante en su delicado punto y por ende, bien justificada la suspensión decretada por V. E. con fecha 29 de abril del corriente año, de acuerdo con las consideraciones de hecho y de derecho del dictamen del suscrito.

No encuentro mérito legal para modificar las conclusiones de aquel dictamen, que doy por reproducido y por ello opino que V. E. no debiendo acceder a la pretensión del recurrente, y mantener en todo su vigor la resolución recurrida de 29 de abril ppdo. — Agosto de 1905.

=====

I. — Ni por el tratado vigente con Italia, ni por ley alguna, puede el Ministro de esta Nación apelar de una resolución consentida por el Fiscal, que deniega la extradición de un súbdito italiano.

II. — Las resoluciones judiciales en materia de extradición, aunque consentidas, no implican la cosa juzgada en lo que se refiere a la culpabilidad del detenido, ni impiden a la Nación requirente la apertura de una nueva instancia, en base a documentos o actos que antes no se tuvieron.

**Legación de Italia, sobre extradición de Pablo Viscusi.**

*Excmo. Señor:*

Ni por el tratado vigente con el reino de Italia, ni por ley



alguna de la Nación, es procedente la apelación, que el Sr. Ministro de aquel reino, dice interponer de la sentencia del señor Juez Federal de La Plata, que denegó la extradición del súbdito italiano Pablo Viscusi.

Esa sentencia por otra parte, no es susceptible de recurso, teniendo en cuenta que aceptada por el Procurador Fiscal respectivo, no ha sido apelada en tiempo, lo que es otra circunstancia que se opone a lo manifestado por el señor Ministro de Italia.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las resoluciones judiciales en materia de extradición, si bien son firmes en las condiciones de las sentencias en general, ellas —aunque consentidas—, no envuelven la cosa juzgada, en el sentido de pronunciarse sobre la culpabilidad del requerido, ni de impedir a la Nación requiriente la apertura de una nueva instancia, con documentos o actos propios a satisfacer requisitos que antes faltaron.

La Suprema Corte en su fallo del tomo 42, pág. 409, así lo ha establecido, cuando ha dicho: “el procedimiento judicial en los casos de extradición no constituye un juicio propiamente hablado contra el reo, cuya decisión cause estado e impida la apertura de una nueva instancia con nuevos documentos y nuevas pruebas”...

En tales conceptos, si el Sr. Ministro requiriente no puede válidamente interponer el recurso que menciona, puede reiterar su pedido de extradición, elevando los requisitos cuya omisión ha basado la sentencia denegatoria de que se trata.

Según la sentencia, los aludidos requisitos son: la copia de las disposiciones legales aplicables al caso (art. 12, inc. 5º del tratado vigente); la notificación de la sentencia al condenado, en la forma que por la ley italiana corresponda (art. 12, inc. 1º del mismo).

Lo primero no se ha acompañado, limitándose los recaudos a la mención y citas de las disposiciones aludidas, sin consignar la copia de su texto, lo que resulta de la misma nota original del señor Ministro de Italia, que sólo habla de la mención de esas disposiciones.

No consta tampoco y en la forma usual, la notificación de la sentencia que corresponde cuando se trata de un contumaz como lo es Viscusi y a los efectos propios y especiales, que esa notificación supone en la ley italiana, como lo tiene hecho el mismo Sr. Ministro, en casos análogos (extradición del sacerdote Francisco Sacco).

Así pues, creo que no corresponde el recurso que el Sr. Ministro de Italia manifiesta intención de interponer, sin perjuicio de ser procedente la renovación de su pedido de extradición de Viscusi, así como la reapertura de una nueva instancia a su solicitud. — Agosto de 1905.

*Tomado como resolución: agosto 7 de 1905.*

=====

Toda reglamentación administrativa sobre efectividad del embargo de sueldos de los empleados es improcedente, si altera la ley civil que rige los embargos.

**Contaduría General, solicita la adopción de una resolución respecto a los descuentos y embargos ordinarios en los sueldos de los empleados de la administración.**

*Excmo. Señor:*

Cualesquiera que sean los propósitos que se tengan en vista para someter a una reglamentación administrativa los embargos de sueldos a los empleados por razón de alimentos o deudas ordinarias, es y será siempre improcedente, cuando como en el caso, se altera la ley civil que los rige, el procedimiento que los gobierna, y se contraría la autoridad judicial que los decreta dando la forma de su ejecución.

Tal reglamentación por parte de V. E. y con tales efectos, envolvería la violación del art. 95 de la Constitución que prohíbe al P. E. ejercer funciones que sean de carácter judicial; los embargos de que se trata son accidentes de un juicio entre partes al que es extraño bajo todo concepto el P. E. siendo su única misión el cumplimiento estricto de las órdenes judiciales, respecto al embargo de lo que ella deba al empleado deudor por razón de sus servicios.

Si la reglamentación de que se trata, se limitara a los términos del Acuerdo de diciembre 2 de 1896, en que se estableció el procedimiento administrativo de orden interno para el diligenciamiento, nada tendría que observar por cuanto ello estaría dentro de las facultades y propias funciones del P. E.

En tales conceptos, pues, creo que la reglamentación que propone la contaduría es inaceptable, siendo de notar que si el empleado

embargado deja de guardar el decoro que le corresponde, o de observar la honrada conducta a que está obligado, tiene el P. E. a su disposición los medios eficaces para evitar, una y otra cosa. — Septiembre 26 de 1905.

=====

Cuando el Congreso a señalado implícitamente un término a una pensión graciable, ella debe subsistir durante ese término, pero el monto y condiciones de dicha ley no puede sustraerse a las otras modificaciones que leyes posteriores hayan impuesto en aquellas y que no atacan su texto.

### **Don Carlos María Saravia, sobre pensión.**

*Excmo. Señor:*

La pensión acordada por la Ley 1270 a la viuda e hijos del Sr. don Carlos María Saravia, secretario que fué del Senado de la Nación en el monto de su sueldo y por el tiempo que dure la viudez de su esposa o la minoridad de sus hijos, ha sido modificada por las Leyes 3195, 4349 y 4350 en cuanto aquella ley era opuesta a éstas.

Así, su término fué vencido a diez años contados desde la vigencia de la Ley 3195, su monto lo fué por el art. 54 de la Ley 4349 y al caer a su expiración bajo el amparo de la Ley 4350, fué reducida a \$ 200 al ser prorrogada por cinco años más.

En esta prórroga, la pensión de la Ley 1270 persiste tal como fué acordada y salvo las modificaciones indicadas y que indudablemente la afectaron por expresas disposiciones legales, manteniéndose en las demás, por tratarse de la voluntad del H. Congreso que no modificada por él, debe considerarse persistente.

Así, esta pensión debe existir como fué discernida y con las solas modificaciones apuntadas; en tanto que haya una viuda e hijos menores del causante la pensión existe en toda la integridad que señalan las expresadas leyes.

Si los menores de edad hubieran dejado de serlo, y no existiera la viuda, la pensión hubiera caducado; si los primeros existieran y no la segunda, la pensión existiría íntegramente para los primeros de acuerdo con el texto expreso del art. 1º de la mencionada Ley

1270, correspondiendo a la segunda en el caso inverso, con arreglo al mismo texto.

Esto último es lo que parece haber sucedido en el caso, mayores de edad los hijos del Sr. Saravia, queda aún su viuda que, según los términos expuestos de la ley, es titular de la pensión independiente de la minoridad de sus hijos.

El art. 10 de la Ley 3195 que se opone al acrecimiento de la pensión por una persona con motivo de la muerte de su copartícipe, no comprende ni ha podido comprender a la de la Ley 1270.

1º — Porque esa disposición no se refiere a las pensiones acordadas con anterioridad a esa ley, sino a los que ella comprende, fuera del caso excepcional del art. 14.

2º — Porque el artículo sólo habla del fallecimiento del copartícipe para oponerse al acrecentamiento, no existiendo base ni razón que justifique la extensión de los términos de la ley más allá de lo que ellos expresan.

3º — Porque dado el texto propio de la Ley 1270, que expresa, en su art. 1º que la pensión se da a la viuda e hijos del Sr. don Carlos M. Saravia ..... y en su art. 2º, que ella durará mientras dure la viudedad o minosidad de los agraciados ..... denota claramente que mientras la viuda se conserve tal o los hijos sean menores, la pensión existe para unos u otros independientemente.

El art. 10 citado no puede nunca haberse referido a un texto tan expreso y terminantemente, respecto a cada uno de los agraciados en el caso.

Bajo estos conceptos, considero que la viuda del Sr. don Carlos M. Saravia tiene derecho a gozar de su pensión íntegra con las solas modificaciones a que antes me he referido, y que la reducen a \$ 200.

En cuanto al nuevo descuento que, sobre este monto se asienta reduciendo a \$ 200 reputo que no es procedente, una vez traída a esa cantidad a mérito de la Ley 4350 y haber sufrido anteriormente el descuento de la Ley 4349 (art. 54) nunca ha entendido la ley someter las pensiones a un segundo descuento por el hecho de prorrogarlas por cinco años, tanto más cuanto, que expresamente las reducen en tal caso al minimum mencionado de \$ 200.

Pienso pues, que en definitiva debe liquidarse a la expresada viuda su pensión en el mencionado monto. — Septiembre de 1905.

=====

Dentro del texto y espíritu de la Ley 3764, no cabe conceder a los empleados de las oficinas de impuestos internos el carácter de denunciante de infracciones de la ley y beneficiarlos con un 25 % de las multas que se impongan.

**Administración de Impuestos Internos, solicita una resolución de carácter general que adjudique al empleado denunciante de infracciones, a lo menos un 25% de las multas.**

*Excmo. Señor:*

De acuerdo con los precedentes informes creo que V. E. no puede ni debe acordar a los empleados de impuestos internos lo que por su dirección se indica a objetos de mejor servicio.

No puede V. E. hacerlo, porque no le es dado modificar el texto del art. 45 de la Ley 3764 que sólo se refiere a los denunciantes, por más que buenas razones lo aconsejen en el concepto de esa repartición (art. 86, incs. 2 y 3 de la Constitución).

Tampoco puede, suponiendo un espíritu en la ley, que contraría su propio texto tanto más cuanto que, en casos semejantes en que el legislador ha querido dar la extensión que se supone a la Ley 3764 por ejemplo, lo ha expresado claramente, como sucede con las Ordenanzas de Aduana, en su art. 1030.

Creo que V. E. no debe tampoco hacerlo por considerar un pernicioso e injustificado precedente, acordar estímulos de esta naturaleza a empleados justa y equitativamente remunerados, así como una práctica peligrosa para la regularidad administrativa sobre todo en reparticiones que tan seria y directamente afectan al Fisco y a los particulares. — Septiembre de 1905.

=====

En los estatutos puede establecerse que las acciones se emiten nominales y hasta no endosables, pues esto deriva del derecho de hacerlas transferibles o no, según convenga a los intereses sociales (art. 326 Cód. de Comercio).

Debe aceptarse, pues no está prohibido por ninguna disposición legal, la facultad que se reserva al Directorio, de expulsar un socio y enajenar su capital social.

También debe aceptarse la disposición que establece el momento y condiciones en que un socio puede separarse de la sociedad.

### **Sociedad Anónima Luro Hnos., sobre aprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor:*

No encuentro razón legal para sostener la modificación del art. 9 de los estatutos que anteceden, de la compañía Luro Hnos. ni encuentro que choque con disposiciones del Código de Comercio que rige esta clase de compañías.

Esa cláusula puede perfectamente persistir por ejercitarse con ella el derecho que acuerda el art. 326 de ese Código, de emitir las acciones nominales y hasta no endosables; de lo que deriva el derecho de hacerlas transferibles o no, en la forma escogida y que más entiendan convenir a la compañía en guarda de sus intereses.

Ninguna consideración de interés público, ni disposición del citado Código se oponen a tal ejercicio y a tal derecho.

Sobre lo único que el expresado Código entiende legislar, en los arts. 329 y 330, es sobre las anotaciones de las transferencias efectuadas (en la forma en que hayan tenido lugar con arreglo a los estatutos) sobre las condiciones y momento en que esas transferencias producen efecto contra la sociedad y los terceros, y por último la manera de esa operación en caso de acciones nominales y no endosables.

Los arts. 17 y 18 pueden quedar como están redactados en los estatutos, porque tampoco hieren, ni el interés público ni las disposiciones de la ley.

El ejercicio de la facultad que confiere el primero al directorio, si bien es grave, por tratarse de la expulsión de un socio y de la enagenación de su parte en el capital social, no es menos cierto que tal acto está sujeto a las responsabilidades de los directores a que se refiere el art. 337 del Código de Comercio, ya sea respecto de la

sociedad o del mismo socio expulsado, que desde ese momento es un tercero a su respecto.

Las disposiciones del segundo que tienden a establecer el momento y condiciones en que un socio disidente o no, puede separarse de la sociedad, sólo son medios para juzgar de la oportunidad o derecho a la operación, saldar sus cuentas con la sociedad, y darle el justo valor de su haber actual, por la venta de sus acciones en subasta pública.

En el concepto de que, el derecho limitado que el art. 19 de los estatutos reconoce el sucesor del accionista muerto o ejecutado, es sin perjuicio de los que consagran los arts. 419, inc. 8. 428 y correlativos del Cód. de Comercio y 1742 y 1760 del Cód. Civil, no creo que haya razón para observar su texto.

Estas razones son las que me inducen a dictaminar en el sentido de que V. E. puede acordar la personería jurídica solicitada en el caso, y sin modificaciones de los estatutos presentados que considero que no chocan con el texto de la ley. — Septiembre de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3604, pág. 483 de octubre 27 de 1905.*

=====

Es contrario a la amplia responsabilidad que a los directores de toda sociedad con personería jurídica impone nuestro Código de Comercio, la disposición en los estatutos autorizando a que un director pueda delegar en otro su derecho a votar y a que el voto pueda hacerse por correspondencia telegráfica o epistolar.

### **Compañía Inmobiliaria Franco Argentina, sobre aprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Aun cuando reputo que no es el art. 355 del Código de Comercio el que se afecta con la disposición del art. 19 de los estatutos de la “Compañía Inmobiliaria Franco Argentina”, por referirse aquél a las Asambleas Generales y éste a los actos del Directorio, considero que la observación hecha por la Inspección de Justicia tiene base legal y debe tomarse en cuenta por V. E.

Dada la responsabilidad que el citado Código atribuye a los directores en la administración social, ya sea respecto de terceros, de la sociedad, de sus estatutos y de la ley misma (art. 337, Código de Comercio); la efectividad de esa responsabilidad, sufriría muy seriamente, si hubiera de complicársela con el examen y discusión de las autorizaciones que, en determinados casos, dieran unos directores a los otros.

El espíritu que domina en nuestro Código respecto a la administración y fiscalización de las sociedades anónimas, es el mismo que campea en todas sus disposiciones respecto de ellas, y consiste en garantizar de la manera más amplia posible el interés público o el interés de los socios y de terceros que la sociedad afecta en su funcionamiento.

Y así todo lo que tienda o pueda trabar o anular esa garantía es contrario a ese espíritu, y por ende, a las disposiciones del Código, con cuyo texto y espíritu deben concordar los estatutos de toda sociedad o compañía que requiera la personería jurídica (art. 318, Código de Comercio).

De aquí pues, que sea inconveniente e inaceptable la disposición del art. 19 de los estatutos, que la Inspección de Justicia tacha, relativamente a la autorización que un Director dé a otro miembro del Consejo para votar por él.

Las mismas razones son aplicables, en mi sentir, al voto de los Directores por correspondencia telegráfica o epistolar.

Apoyo pues, en estos puntos, las observaciones formuladas al art. 19 de los estatutos. — Septiembre de 1905.

=====

El examen del invento extranjero cuya patente se solicita en nuestro territorio, es requisito indispensable para que ella pueda ser acordada, de conformidad a las prescripciones de la ley de la materia; no basta para ello la sola mención del invento.

**Obligado y Cía., manifiestan la conveniencia de modificar  
la ley de patentes.**

*Excmo. Señor:*

La ley no sólo debe ser cumplida en su texto expreso, sino que



debe serlo también en su espíritu, cuando como en el caso, deriva clara y evidentemente de sus propias disposiciones.

La ley de patentes de invención al acordar las franquicias que las patentes suponen para los inventos y descubrimientos nacionales o extranjeros (art. 1º y 2º) establece terminantemente en su art. 4º, que no se patentarán los inventos publicados dentro o fuera del país o aquellos que verificados en el extranjero fueran contrarios a las buenas costumbres o a las leyes de la Nación, o en caso de revalidación, hubiera caducado la patente que allí se le hubiera dado (art. 46).

A la estricta observación de estas disposiciones legales, al perfecto conocimiento de la patente extranjera que se trata de revalidar, o se presente con relación a tales condiciones de la ley, así como a la autenticidad y verdad de las constancias con que se acreditan los enunciados requisitos (arts. 1º, 2º, 15 y 46) responde con toda seguridad la medida administrativa que prescribe la presentación de la patente extranjera que se trata de revalidar en el país, y que es la que por los recurrentes se tacha de inconveniente.

La simple afirmación del interesado de tener una patente extranjera, que se limita a enunciar, de un invento, que sólo cita o menciona, no es bastante en mi sentir para que V. E. le acuerde patente, en el territorio de la República, con agravio de la ley y con grave riesgo del engaño que pudiera resultar de una falsa afirmación, o de la interesada apreciación del invento extranjero presentado.

No basta tampoco esa simple afirmación, para que los empleados de la oficina respectiva cumplan con la obligación que les impone el art. 13 de la ley, ni puede servir de base a su examen, que es por otra parte y según el mismo artículo, un requisito indispensable para la concesión de la patente.

Y esa simple afirmación por fin, no bastaría nunca para garantizar los fines de la ley misma, para evitar daños o perjuicios a otros inventores, o para no caer en el ridículo de patentar inventos ya conocidos, caducados, o que no fueron tales inventos.

Estas consideraciones que reputo atendibles, y la circunstancia de que la oficina respectiva, al informar favorablemente lo que solicita, no ha tomado en cuenta lo dicho ni denunciado cuáles son los medios de que dispone para asegurar el cumplimiento de la ley en sus arts. 4, 13, 15, 44 y 46, me inducen a aconsejar a V. E. la nega-

tiva a lo solicitado, por considerar que la práctica observada es la que corresponde seguir, en guarda de la ley y dentro del orden regular administrativo. — Septiembre de 1905.

=====

No hay monopolio en el hecho de que una empresa de ferrocarril contrate con una de transporte el movimiento de viajeros donde no tiene línea, cuando otras empresas a quienes se ofreció también el transporte, no han aceptado sus condiciones, ni se han sometido a las garantías exigidas por el ferrocarril.

**Expreso “La Confianza” y “Transportes Unidos”, en queja contra el F. C. Pacífico, por entrega de pasajes a Chile al Expreso Villalonga.**

*Excmo. Señor:*

Para reducir al mínimun de tiempo y costo los viajes entre Buenos Aires y Santiago de Chile, el Ferrocarril del Pacífico hizo convenios especiales con las diversas líneas que van hasta la frontera de esa República; los hizo también con los ferrocarriles chilenos y existiendo un trayecto en la cordillera desprovisto de línea férrea y servido por compañías de transporte, citó a éstas, iniciando con ellas las mismas negociaciones.

De las tres compañías existentes, sólo aceptó las condiciones de la mencionada empresa ferroviaria, la del “Expreso Villalonga”, quien se conformó no sólo, a prestar sus servicios en el tiempo exigido por la rapidez del viaje, a modificar sus precios en el sentido de abaratarlos, y a prestar plena garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas, sino que también, se sometió a las otras condiciones que por razón del éxito de los viajes propuestos, le impuso el expresado ferrocarril.

En tales condiciones quedaron proyectados los viajes rápidos (40 horas), entre Buenos Aires y Santiago de Chile, con modificación en el sentido de su abaratamiento.

La Dirección General de Vías de Comunicación, haciendo uso de las facultades que le son propias, aprobó los expresados viajes en las condiciones determinadas, los que se verificaron en oportunidad

por medio de los trenes llamados internacionales, y de cuyo horario y condiciones instruye este expediente.

En los antecedentes relacionados, que son el reflejo de la verdad, no existe ni el monopolio que se pretende, ni la injusta exclusión de las compañías recurrentes, ni menos violaciones a la ley de ferrocarriles, ni tampoco los avances injustificados que se atribuyen a la Empresa del Pacífico, ni a las otras que han concurrido al convenio de que me ocupo.

No ha habido, ni hay monopolio, desde el momento que los trenes de que se trata, se han abierto para todos los habitantes de la República de acuerdo con el art. 35 de la Ley 2873.

Las condiciones excepcionales que se hayan impuesto para hacer posible el recorrido de esos trenes, no obstan a los derechos reconocidos a mérito de esa disposición; en efecto, cualquier viajero puede presentarse a tomar su pasaje a Chile, seguro de que no le será negado, siempre que lo haga dentro del término fijado por la Empresa, término que tiene por objeto evidente, garantizarle la comodidad, la rapidez y la baratura de su mismo viaje.

No ha habido exclusión de las compañías reclamantes en la organización de esos trenes.

1º) Porque ellas han sido citadas y en conocimiento de las condiciones indispensables para el caso, las han rechazado por razones propias, según ellas mismas lo tienen expuesto en este mismo expediente.

2º) Porque, como lo expresa la Empresa del Pacífico, el convenio está siempre abierto para que las compañías reclamantes puedan suscribirlo, concurriendo por su parte a la realización de los viajes rápidos de que se trata.

Esta circunstancia por sí sola, deja ver claramente que si hay exclusión de las compañías reclamantes, ella no resulta de un monopolio sancionado ni de una exclusión preconcebida, sino que en realidad es el resultado directo e inmediato de su propia voluntad.

3º) Porque las otras condiciones, como ser abaratamiento de costo, rapidez en el servicio, y en una palabra garantía moral y material de que la compañía no obstaculizará los viajes en las condiciones ofrecidas al público, son indispensables en el sentido de que, si no hubiera la seguridad de tales servicios en la forma requerida, el público mismo quedaría burlado en aquello que se le promete.

Por esto, el Ferrocarril del Pacífico, que es quien expide los pasajes y garante el viaje en un máximo de cuarenta horas, tiene necesidad de asegurar en esa forma la posibilidad de realizar el fin propuesto y prometido; sin tal garantía por otra parte, los mencionados viajes no serían rápidos, ni el viajero tendría nunca la seguridad de su duración, la que siempre sería precaria, así como el costo mismo de su traslación.

La Ley 2873 de ferrocarriles vigente, no contiene disposición alguna que se oponga a la existencia y recorrido de estos trenes rápidos y relativamente baratos, que tienden a facilitar comunicaciones internacionales, cuyas ventajas no necesitan demostración. El reglamento general de ferrocarriles y demás disposiciones atinentes se encuentran en las mismas condiciones de la citada ley.

Basta recordar por último, que la existencia del convenio que se combate, la realización de estos viajes y el recorrido de los trenes internacionales de que se trata, han sido oficialmente autorizados para que resulte injustificada la afirmación de que, los ferrocarriles que en ella intervienen, han producido un acto de autoridad. Dentro de su funcionamiento ellos se han limitado a convenir y proyectar; y el Gobierno por medio del órgano correspondiente, es quien ha autorizado el acto de que se trata.

Estas consideraciones que reputo suficientes para destruir las bases sobre que se asientan las pretensiones del recurrente, me inducen a creer que V. E. debe desestimarlas, manteniendo la autorización prestada a los trenes internacionales, que en épocas determinadas deben correr entre Buenos Aires y Santiago de Chile, con la comodidad, rapidez y abaratamiento prometidos. — Septiembre de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3570, pág. 1411 de septiembre 18 de 1905.*

=====

La falta de testigos en una escritura otorgada por el gobierno, causa su nulidad, pero vale como instrumento privado en que consta una obligación de hacer escritura pública.

**Marcelino González, sobre revalidación de título de tierras.**

*Excmo. Señor:*

La falta de testigos en el título de propiedad otorgado por el

Gobierno a favor del recurrente, ha causado su nulidad de pleno derecho, según el texto expreso de los arts. 1004, 1183 y 1184 del Cód. Civil, siendo en consecuencia inhábil el título, para transmitir la propiedad del campo a que se refiere, dado el texto del último de los citados artículos y la jurisprudencia de la Suprema Corte (Tomo 20, pág. 159).

No valiendo como instrumento público el expresado título, vale sin embargo como documento privado, según el art. 987 del Cód. Civil, para establecer y constatar la obligación de hacer escritura pública, al objeto de que el contrato sea capaz de los efectos de aquél, cuando se trata de la transmisión de los bienes inmuebles (art. 1185, Cód. Civil).

En tales conceptos, y no existiendo antecedente alguno que induzca a desconocer la autencidad del acto jurídico, y de la mencionada obligación de hacer, dado que el Escribano de Gobierno certifica al respecto, considero que la escritura otorgada, no sería la de una revalidación o confirmación, sino la de venta, indispensable para hacer efectiva la trasmisión del inmueble de que se trata, y el cumplimiento de aquella obligación.

Esa obligación de parte de V. E. podría ponerse en duda, dado el informe desfavorable que corre en los antecedentes de este asunto (fs. 11) el que determina la falsa causa o error que motivó en 1888 la adjudicación a favor del recurrente de la tierra que hoy posee, pero es de notarse que esa falsa causa o error, no se hizo valer en tiempo para anular el acto, lo que obliga hoy a aceptar su procedencia y legalidad (arts. 1045, 1046 y 4031 del Cód. Civil y sentencias de la Suprema Corte en los casos de Felberg y Díaz Arana).

En tales conceptos pues, reputo que V. E. debe acceder a lo que se pide, mandando cumplir el acto válido y anteriormente estipulado, con el otorgamiento de la escritura pública respectiva, en la manera y forma que corresponde. — Septiembre de 1905.

=====

Corresponde a los Gobernadores de Territorios Nacionales dentro de las facultades que les confiere la Ley 1532 y no a los jefes de Policía de dichos territorios dictar ordenanzas o reglamentos sobre materia policial, sometiéndolos al P. E. para su aprobación.

**Gobernación del Río Negro, eleva para su aprobación un edicto policial sobre ebriedad y juego de naipes.**

*Excmo. Señor:*

La Ley 1532 sobre Territorios Nacionales, al estatuir en el inc. 9º de su art. 7º, entre los deberes y atribuciones del Gobernador, que éste es el “Comandante en Jefe de la Gendarmería, y deberá colocar en cada distrito, un comisario de policía con su correspondiente dotación”, no ha creado, propiamente, una repartición o administración policial.

Partiendo de este concepto, considero que la Jefatura de Policía de Viedma no está en lo cierto, cuando invoca, para dictar el edicto de policía de que se trata, las facultades que surgen del art. 27 del Código de Procedimientos en lo Criminal. No siendo una administración en el sentido legal de la palabra, la aludida Jefatura, no está incluida en la citada disposición ni en condiciones para dictar ordenanzas como la de que se trata.

Pero si la Jefatura de Viedma no está en el mencionado caso y condiciones, es indudable que el Gobernador del Territorio de acuerdo con el inc. 2º y concordantes del art. 7º de la Ley 1532 puede decretar dichas ordenanzas o reglamentos, sometiéndolos a la aprobación de V. E.

Considerando ahora el proyectado “Edicto de Policía”, como un acto de esa Gobernación resulta:

1º — Que sus arts. 1º, 2º y 3º que permiten los juegos de naipes hasta las 10 de la noche, prohibiendo el juego de la murra, que castiga con multa o arresto, a los infractores de tal disposición, y prohíben, castigando especialmente el juego de naipes a los menores de 18 años, no pueden ser aprobados por V. E. por cuanto ellos implican una infracción a lo prescripto en la Ley 4097 sobre prohibición de los juegos de azar en la Capital y Territorios Nacionales, o envuelven una modificación a su sanción expresa. El Gobernador

del Territorio no puede aprobar esa infracción o esa modificación. n. V. E. consentirla.

2º — Tampoco puede aceptarse el art. 4º del proyectado Edicto, que castiga con una multa o arresto a las personas *que se encuentran en estado de ebriedad manifiesta*, en las calles, caminos, plazas, cafés, almacenes u otros despachos de bebidas; pues por deshonroso que sea el estado de ebriedad público y manifiesto cuando no se perturbe el orden público no existe motivo legal alguno para declarar punible el hecho, que la ley no castiga, por más que lo condenen las sanciones del desconcepto público.

Si no hay desorden, contravención, o delito, no hay razón para la intervención policial.

Por iguales motivos no procede la aprobación del art. 5º del proyectado edicto.

3º — No encuentro óbice legal en que se aprueben los arts. 6º, 7º y 8º, del edicto de la referencia.

Prohibir a los dueños de negocios que den de beber a personas manifiestamente ebrias o a menores de 16 años, al par que es conveniente para la salud y moralidad de las personas y menores, es preventivo de los delitos a que conduce el alcohol, lo que por otra parte, no choca con ley, ni desconoce la garantía que es relativa en las condiciones que la Constitución la establece en su art. 14.

Creo pues que V. E. debe resolver sobre el edicto propuesto, en la forma que dejo indicada. — Octubre 20 de 1905.

=====

La exoneración de derechos a una empresa constructora de un ferrocarril por cuenta del Gobierno no puede pasar de los límites que implícitamente le fije el contrato celebrado, ni puede ir más allá de lo que el gobierno puede acordar en salvaguarda de los derechos de otra empresa (Constructora del Puerto del Rosario).

Toledo, Maraini y Cía., piden devolución de derechos abonados por eslingaje y almacenaje por estar exonerados de ese derecho.

*Excmo. Señor:*

El simple destino de los materiales de que se trata, para la construcción de un ferrocarril de propiedad de la Nación, no es bastante

en el caso para la exoneración de derechos que se gestiona, ni para la devolución, que se pide, de lo pagado en tal concepto.

Si bien es cierto que el Ferrocarril de Serrezuela a San Juan se construye por cuenta de la Nación, no es menos cierto que esa construcción se hace por unos contratistas a mérito de una licitación pública por precios establecidos y en las condiciones precisas y determinadas de un contrato.

Esto marca una primera circunstancia, verdaderamente esencial, en este caso; que los materiales introducidos por los constructores no gozan de otras liberalidades que aquellos que se hayan estipulado en su contrato y con relación a las cuales han fijado de antemano su precio, para cobrarlos a la Nación, por cuenta de quien trabaja; mientras que los que la Nación introduce para lo que construyen directamente y por administración, gozan de las liberalidades que establece la ley para todo lo que a ella pertenezca, siendo en este último caso impropio el cobro de derechos que la Nación vendría directamente a pagarse a sí misma.

Así pues los recurrentes no tienen otra exoneración de derechos para sus materiales que la que la Nación haya querido o podido acordarles y ellos hayan aceptado en su contrato y es en su texto donde debe buscarse la extensión de la liberalidad o exoneración reclamada.

El art. 41 del contrato respectivo se limita a exonerar los materiales necesarios y que introduzcan para la construcción que tienen contratada, de los derechos de Aduana, vale decir, de los derechos de importación a que se refiere y sobre que legisla la ley de Aduana vigente, según su propio art. 1 (Ley 3890).

En esos derechos no están comprendidos ni los de eslingaje, almacenaje ni guinche que son más bien derechos de puerto, a cambio de un servicio directo y legislado especialmente por una ley que se halla vigente hoy bajo el número 3752.

Si la cláusula mencionada pues, no ha referido el eslingaje y almacenaje entre sus liberalidades a los contratistas, ellos carecen de derechos para reclamarlos, en cualquier parte que tenga lugar la introducción de los materiales gravados.

Y no pueden esos contratistas hacer valer la exoneración que por disposición administrativa les haya concedido V. E. porque ello contraría la citada Ley 3752, aún tratándose de mercaderías expresamente exoneradas de derechos.



Sírvase V. E. tener presente el texto de los arts. 5 y 8 de la citada ley que claramente determina, el primero que las mercaderías exoneradas o no por cualquier concepto pagarán el eslingaje que fija, así como el de almacenaje en la manera establecida por el segundo, sirviéndose recordar al propio tiempo la Resolución Ministerial de marzo 7 de 1899 en una solicitud de los señores Bemberg y Cía.

Lo que dejo establecido es aplicable también respecto de la disminución del 50 % en los derechos expresados de guinche hicieron que también gestionaran los recurrentes, a lo que no tienen ellos derechos por tratarse, según el art. 37 del contrato con la Empresa del Puerto del Rosario, de una liberalidad privativa del Gobierno Nacional, y que no se halla consignada en el contrato.

Pero a lo dicho hay que agregar una consideración, cuya importancia no puede negarse en el caso, y que por sí sola basta para rechazar la reclamación de que me ocupo.

El contrato celebrado lo fué después del de la Empresa del Puerto del Rosario a quien se entregó el Puerto y su explotación con la amplitud que es conocida, y en razón de la aplicación económica hecha para su realización.

En tal concepto el Gobierno nunca entendió ni pudo entender que le era dado disponer de lo cedido a la expresada Empresa, para reconocerlo a favor de otras personas, faltando a su compromiso legalmente contraído y sobre el cual no le era ni le es dado volver.

Las liberalidades, pues, reconocidas a los constructores del Ferrocarril de Serrezuela a San Juan además de no haber sido, sino lo que el contrato expresa, no han podido ni pueden hacerse efectivas sino allí donde el Gobierno conserva el derecho de cobrar los impuestos cuya exoneración los constituye y de que no se haya desprendido por ley y por contrato como sucede precisamente en el Puerto del Rosario.

De aquí pues, que pueda afirmarse sin lugar a duda que la exoneración del art. 41 del contrato en cuestión no rige ni puede regir para el Puerto del Rosario en cuanto se oponga a lo que constituye un derecho según el contrato con la empresa constructora de ese puerto.

Estas consideraciones que reputo eficaces son en mi sentir bastante para aconsejar a V. E. el rechazo del reclamo que se presenta por no ser procedente. — Octubre de 1905.

=====

Los servicios en el Cuerpo de Bomberos, son servicios civiles y no pueden computarse a los efectos de ampararse a una ley militar como la 4707, que requiere y sólo computa servicios militares.

**Coronel de Bomberos José M. Calaza, pide acogerse al retiro que acuerda el art. 20 del Capítulo VI de la Ley 4707.**

*Excmo. Señor:*

Como el mismo recurrente lo da a entender, para que su solicitud pueda prosperar se hace necesario se acepten los servicios que manifiesta haber prestado desde el 2 de enero de 1870 hasta la fecha, y ver si esos servicios llenan las condiciones establecidas por la Ley 4707, a los efectos del retiro con el sueldo de un grado superior al que tiene, que es lo que el peticionante pretende.

Ningún inconveniente presentarían los servicios prestados por el Coronel Calaza desde el 5 de enero de 1888, época desde la cual, reconocido por decreto del P. E. ha sido considerado como Teniente Coronel de Línea; pero esos servicios, aunque meritorios y constantes, son sin embargo insuficientes para hacerle acreedor al beneficio de la ley que pretende; sólo se trata de 17 años que no satisfacen como es notorio las exigencias de la ley (arts. 19 y 20 de la Ley 4707).

Quedan los servicios anteriores, es decir, desde enero de 1870, en que, ingresado al Cuerpo de Bomberos, reconoció todos los grados, prestando servicios verdaderamente encomiásticos por su decisión, constancia y corrección; servicios que en mi sentir, y a pesar de la calificación que les he dado, no pueden computarse a los efectos de la Ley 4707.

Tratándose de una ley militar, los servicios cuyo cómputo requiere a los efectos del beneficio solicitado, son servicios militares entre los que, hoy por hoy, no pueden incluirse los prestados en el Cuerpo de Bomberos de la Capital, cuerpo que, a pesar de su organización militar ha sido, según la ley, una institución civil, figurando en tal concepto en la repartición policial y en el ítem respectivo del presupuesto civil de la Nación.

Esto basta pues, al cómputo de esos servicios, a los efectos que el recurrente se propone, y por ende no puede quedar comprendido dentro de las disposiciones legales que sancionan el beneficio del retiro en la manera que lo requiere.

Ahora, si por razones especiales o por méritos de los servicios del Coronel Calaza, se llegaran a reconocer sus grados anteriores al año 1888 como grados militares, recién sería el caso de tomarlos en cuenta a efecto del cómputo exigido por los arts. 19 y 20 de la Ley 4707, recién llegaría el momento de apreciar la aplicación de la ley a los efectos de su retiro con el grado superior inmediato al que tiene.

Estas consideraciones son las que me inducen a pronunciarme en sentido adverso a lo solicitado por el recurrente. — Octubre de 1905.

=====

El P. E. no tiene facultad para pronunciarse sobre el pedido de nulidad de una asamblea social como violatoria de los estatutos, pues sólo a los jueces corresponde pronunciarse sobre la nulidad de los actos jurídicos de las personas civiles.

**Varios socios de la Sociedad Protectora de los Animales, piden se declare nula una asamblea por no haber sido citados de acuerdo con el art. 3º de los Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Sin entrar a examinar con mayor detenimiento la denuncia y protesta que varios miembros de la Sociedad Protectora de los Animales presentan a V. E., sosteniendo la nulidad de una asamblea social, como violatoria del art. 3º de los estatutos, lo que parece justificado por las constancias mismas del expediente debo manifestar que considero que no es a V. E. a quien corresponde apreciar esa denuncia a efectos de pronunciarse sobre la nulidad alegada.

La Sociedad Protectora de los Animales es una persona jurídica de aquellas a que se refiere el art. 33 del Código Civil, y está en pleno funcionamiento desde que ese carácter le fué conferido por V. E. de acuerdo con el art. 45 del mismo Código, y en tal concepto es una persona del derecho civil sujeta en todos sus actos a la ley respectiva.

Y así la nulidad de la asamblea de que se trata, debe ser sometida a los jueces que son los únicos que puede juzgar y dictar la nulidad de los actos jurídicos de las personas civiles, dentro de las prescripciones de la ley.

En cuanto a V. E. reputo que carece de competencia para pronunciarse en tal sentido, por tratarse de un acto judicial extraño a sus funciones, no siendo por otra parte el caso, de retirar a la Sociedad Protectora de los Animales, su personería jurídica, único caso en que correspondería pronunciarse a V. E. para retirar lo que dió por autoridad propia y de acuerdo con la ley.

Estas consideraciones me inducen a pronunciarme en el sentido de que V. E. debe abstenerse de juzgar sobre la nulidad propuesta y mandar que los recurrentes ocurran donde corresponde. — Octubre de 1905.

=====

No obstante no haberse agotado los recursos legales por el reclamante, ante las autoridades de la República Oriental por el servicio militar y castigos que le impusieron a pesar de ser ciudadano argentino, procede la acción diplomática amigable, por quien corresponda, dado que el Gobierno de ese país conviene en que los hechos no le fueron desconocidos, y por la circunstancia de que el reclamante no tiene medios para proceder por sí. La petición en tales condiciones no contraría precepto internacional alguno.

**Legación Argentina en Montevideo, sobre reclamo del ciudadano argentino Bernardino Daglio (hijo), por injurias y malos tratos sufridos en un cuartel.**

*Excmo. Señor:*

La justificación oportuna de la calidad de argentino por Bernardino Daglio (hijo), autor de esta reclamación, la prisión a que fué reducido por autoridades orientales, el servicio militar que por ellas se le impuso, así como las injurias y malos tratos, tan crueles como injustificados, de que se le hizo víctima, según afirma y comprueba; son antecedentes que mueven a considerar el caso y tomar en buena cuenta lo que reclama dentro de lo que por derecho corresponde.

Poniendo de lado lo relativo a la prisión que, además de aparecer justificada, por falta de un pasaporte que parecía ser necesario a Daglio y a sus acompañantes para andar por el punto donde fueron detenidos, ha sido declarada procedente por juez competente, sin que

conste que Daglio haya hecho uso de recurso alguno, es el caso de considerar lo relativo al servicio militar indebido, y a los castigos que le fueron aplicados.

Extraño sería todo esto a V. E. y a la acción diplomática respectiva, hasta tanto Daglio hubiera ejercido las acciones que en justicia le asisten con arreglo a las leyes orientales, contra los que le sometieron al servicio militar indebido y a las injurias y castigos de que reclama, y las autoridades respectivas hubieran negado, demorado, u omitido, hacerle justicia; la acción diplomática en casos como este, sólo procede cuando la persona ofendida no ha obtenido justicia; una vez agotados los recursos legales, recién se considera evidente la negativa, omisión o demora intencional de justicia y se hace imprescindible la acción diplomática a los efectos del amparo debido al ciudadano en país extranjero.

Pero si bien no consta que Daglio tentara esos recursos, no es menos cierto que el Gobierno de la República Oriental ha conocido los hechos que motivan la reclamación, primero, por las autoridades judiciales ante quienes se denunciaron, y quienes insinuaron su delictuosa calificación, y segundo, por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de ese país, quien en conocimiento del hecho, manifestó a nuestro representante la intención de hacer algo en pro del compatriota reclamante, sin llegar nunca a realizarlo.

Esto que consta de los antecedentes, como consta la inacción de la justicia contra el jefe que ordenó y subalternos que ejecutaron los abusos señalados, tiene que ser materia obligada de un juicio que dé por resultado su castigo y la satisfacción e indemnización a Daglio de los perjuicios y daños que se le han causado. A él corresponde presentarse ante la autoridad respectiva de esa República y requerir lo que entienda corresponder a su derecho, pero dado el tiempo transcurrido desde que los hechos tuvieron lugar, dado el conocimiento que el Gobierno Oriental tomó de la reclamación de Daglio y de las promesas y esperas que se hicieron e impusieron por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de esa República, ese juicio sería ya inocuo e imposible para aquél, dada su enfermedad y escasez de recursos, constante en los antecedentes, siendo el caso en mi sentir de hacer efectivo el amparo y la protección, que evidentemente necesita Daglio, en las circunstancias en que se encuentra.

A tal efecto y dentro de los conceptos expresados, creo que V. E. debiera proseguir las negociaciones amigables iniciadas por nuestro Ministro, con el de la República Oriental, entre nosotros, en el sentido de satisfacer la reclamación de Daglio, bajo el punto de vista del castigo de sus autores, por los abusos cometidos; y recordando la promesa y espera impuesta por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores a nombre de ese Gobierno, prohibir una indemnización en favor de aquel, que satisfaga la justicia y borre con equidad los daños y perjuicios que haya sufrido en el caso. — Octubre de 1905 .

=====

La Nación no está obligada a la evicción y saneamiento de las tierras que donó en premio de la expedición al desierto, por cuanto lo fué a título gratuito.

**Antonio Acevedo y Sara A. de Lazcano Roldán, sobre rectificación de mensura en la Pampa Central.**

*Excmo. Señor:*

Los recurrentes Don Antonio Acevedo y Doña Sara Acevedo de Lazcano Roldán, invocando derechos hereditarios en la sucesión de Don Amadeo Acevedo, que tramita ante el juzgado del Doctor Ponce y Gómez, se presentan solicitando que el P. E. apruebe una *rectificación de mensuras* de varias fracciones de tierra que el causante ha dejado entre otras, en la sección XV de la Gobernación de la Pampa Central, en razón de que al practicarse la mensura judicial, decretada por el Juez, de la sucesión sobre tales fondos, resulta que falta superficie con relación al área que marcan los respectivos títulos.

De manera que, en realidad lo que aquellos pretenden es una integración de superficie o saneamiento de dichas tierras.

Partiendo de este punto de vista al considerar la presente gestión debe tenerse presente que, según resulta de las constancias de los expedientes letra A número 830 y número 843, letra R número 762, letra S número 2577 y letra G número 66, que la superficie de tierra perteneciente al causante Don Amadeo Acevedo tiene como títulos originarios, la distribución de certificados de premios

en tierras, con que la Nación en cumplimiento de la Ley 1628 de 5 de septiembre de 1885 estimuló los esfuerzos de los jefes, oficiales, clases o soldados que hicieran la campaña al Río Negro.

El P. E. al distribuir dichos certificados, ha cumplido con aquella ley de beneficio, ley a la cual el miembro informante del despacho de la comisión del Senado que aconsejó su sanción, Senador Barros, en la sesión del 22 de Agosto de 1885, clasificaba como rigurosamente justa en cuanto al “premio que se trataba de dar al ejército que había hecho una expedición verdaderamente penosa, si bien, no por los combates que hubieran tenido, al recordar los sacrificios que importaba una expedición en aquella época”, y teniendo en cuenta, además, que es muy justo distribuir estas tierras a nuestro ejército, tanto más cuanto que, con tanta liberalidad lo hacemos con los inmigrantes que vienen a nuestro país.

El P. E. pues, no ha transferido tales tierras, por ningún título lucrativo ni oneroso que le obligue a la evicción, ni tampoco ha hecho una donación de carácter remuneratorio, dado los claros y generosos propósitos que inspiraron la sanción de la Ley 1623.

Por otra parte, desde que los jefes, oficiales o soldados agraciados por dichos premios, han sido legalmente remunerados en sus sueldos, de acuerdo con las asignaciones respectivas que el presupuesto creó, con relación a su jerarquía militar; no cabe duda de que en el caso ocurrenente, el P. E. no está obligado a la evicción que se pretende, bajo el título de una rectificación de mensura, con arreglo al principio consagrado en el art. 2145 del Código Civil.

Se trata pues de una simple donación gratuita del Estado, de tierras públicas, en favor de los referidos expedicionarios, con sujeción al art. 1º de la misma ley que rige la materia número 1628, y art. 1789 del Código Civil.

Por lo expuesto y de acuerdo con lo que bajo otros aspectos, aplicables al caso, tengo expresados en las reclamaciones sobre integración de superficie de tierras fiscales, en los casos de Cernadas y Anchorena, que V. E. resolvió de conformidad, opino que V. E. no debiera hacer lugar a lo solicitado por los recurrentes, quienes quedan en todo caso en condiciones de hacer valer sus derechos ante la justicia si así entendiera concernirles. — Octubre de 1905.

=====

Una oficina pública como el Correo, no ha podido contratar actos ajenos a sus funciones. Al comprometerse a suministrar a una Empresa para publicación de una guía, los cambios de domicilio, debe entenderse que se refirió a los datos que le llegarán, y no imponerse la tarea de hacer investigaciones particulares para satisfacer aquélla.

**Sívori y Casterán, reclaman por que la Dirección de Correos no ha dado cumplimiento al convenio celebrado con ellos para la publicación de la Guía Postal y piden una indemnización.**

*Excmo. Señor:*

No aparecen justificados los hechos, ni fundada la interpretación en que los Sres. Sívori y Casterán fundan un reclamo de daños y perjuicios contra el Gobierno a propósito de la impresión de una Guía Postal que contrataron con la Administración de Correos.

La protesta con que se inicia este asunto, contiene los hechos y consigna la mencionada interpretación, lo que basta examinar para encontrar una inconsistencia que está muy lejos de ser eficaz, para inducir a V. E. en el sentido que los reclamantes pretenden.

Que la administración de Correos, obligada a suministrar datos sobre domicilios y cambios de domicilio en la República, no lo ha hecho, y si lo hizo fué irregular e incompletamente, ésto sólo resulta de la propia afirmación de los recurrentes, que no acompañan ni escriben la más modesta prueba de su aserto, siendo que, por el contrario, la aludida administración sostiene haber cumplido por su parte, mostrando como lo ha hecho, en los formularios que acompaña.<sup>7</sup>

Que la misma administración ha debido cumplir el art. 4º del contrato que le obligaba a suministrar a la Guía los datos y cambios de domicilio en la República, diariamente, lo que no ha hecho, esta parte de la protesta resulta de una errónea interpretación del contrato.

Si el Correo se obligó a suministrar los mencionados datos fué dentro de lo que era naturalmente compatible con las funciones que le son propias, vale decir, que sólo se obligó a mandar los datos que oficialmente llegaran a sus oficinas, ya sea sobre domicilios, ya sobre sus cambios, y nunca como parecen entenderlo los reclamantes haciendo investigaciones para satisfacerlos.

Basta mencionar esta interpretación dada a la cláusula 4ª del



contrato, para comprender, en primer lugar, que una oficina pública nunca pudo contratar actos extraños a sus funciones, que no otra cosa importaría en el correo, la tarea de hacer investigaciones para satisfacer a los empresarios de la Guía; y en segundo lugar, que aun cuando se le considerase comprometido por el texto de la citada cláusula, ese texto nunca pudo ser interpretado sino de acuerdo con lo que verosímilmente pudieron y entendieron las partes contratar, que es la única interpretación que se ajusta a la conocida regla, de que las obligaciones deben cumplirse en el tiempo y modo que fué la intención de las partes que se cumplieran (arts. 625 y 627 del Cód. Civil).

Si a esta falta absoluta de base en la reclamación presentada por daños y perjuicios, se agrega la ausencia completa de la prueba del perjuicio real sufrido, y de la exactitud de la apreciación en que se la estima (\$ 300.000), evidente resulta la improcedencia de las pretensiones de los recurrentes y forzoso su rechazo por parte de V. E.

Pero, según los informes producidos y según los antecedentes, a pesar de haber cumplido el Correo con sus obligaciones del contrato, en la única manera posible, ya que estaba legalmente obligado, los recurrentes han faltado a las suyas, no presentando la segunda Guía en el término y condiciones estipuladas en ese mismo contrato.

Esta falta de cumplimiento resulta de la propia exposición y va envuelta en la confesión que hacen de su imposibilidad de cumplir.

En esto hay base suficiente y legal para declarar por V. E. la rescisión del contrato con los Sres. Sívori y Casterán.

Por culpa e imposibilidad de estos señores, no se ha cumplido cuándo y cómo debía la obligación de presentar la segunda Guía a que se refiere el contrato con ellos celebrado, de ahí la aplicación al caso de los arts. 627 y 628 del Cód. Civil, que declaran extinguidas las obligaciones contraídas y por ende susceptibles de rescisión al contrato que los contiene, quedando a salvo la acción que deriva de la culpa o imposibilidad de los mismos en el caso.

Esta consideración que no es la oportunidad de ampliar y las que formula bajo el punto de vista administrativo al Sr. Director de Correos son bastantes para que en este punto, como en el anterior V. E. resuelva en la siguiente manera:

1º Rechazando la reclamación presentada por los Sres. Sívori y Casterán.

2º Declarando rescindido el contrato con ellos celebrado, y por ende exonerando al Correo de sus obligaciones, sin perjuicio de ejercer las acciones de otro orden y que en el caso pudiera derivar. — Octubre de 1905.

=====

No hay incompatibilidad entre la jubilación y el desempeño de una función electiva nacional, provincial o municipal.

**Dr. Molina no considera que existe incompatibilidad entre su jubilación como ex Juez Federal de La Rioja y el cargo de Senador que desempeña en la Provincia de Córdoba.**

*Excmo. Señor:*

Es indudable que cuando la ley ha establecido la prohibición de que los jubilados perciban su jubilación y acumulen a ella otro sueldo o ejerzan una función pública, ha entendido que era necesario evitar que esa liberalidad de la Nación se convirtiera en un negocio y que los imposibilitados para el desempeño de sus empleos resultaran hábiles para ejercer otros, percibiendo nuevos sueldos.

Tal fué la base del art. 4 de la Ley 3744 que estableció para el jubilado la incompatibilidad para ocupar puestos rentados, nacional, provincial o municipal (Diario de Sesiones del Senado Nacional, pág. 257 del año 1898).

Este concepto dentro del propio texto y espíritu de la citada ley no ha abarcado ni podido comprender los puestos electivos y temporarios nacionales, provinciales o municipales.

Estos puestos, como el de Senador de una Provincia de que en el caso se trata, ni son puestos públicos, ni menos empleos, son más bien funciones públicas que no puede ni debe prohibirse en respeto del ciudadano que se debe siempre a la Nación o a la Provincia que habita, y en atención al interés público mismo, que puede muy bien obligar ventajosamente al jubilado poniendo a su servicio la misma práctica y conocimientos adquiridos en el desempeño de empleos públicos que motivó su jubilación.

Por otra parte, los puestos electivos y de representación, de que aquí se trata, no pueden reputarse rentados, en el sentido de estar sujetos a sueldos y de ser permanentes. Los Senadores como los Diputados Nacionales o Provinciales sólo reciben una dieta que no es sueldo sino una compensación por el tiempo que emplean en llenar las funciones de tales, y sus puestos sólo son temporarios y por períodos determinados lo que le quita el carácter de empleo o puesto rentado en el sentido efectivo de esas palabras (art. 4 de la Ley 3744, art. 66 de la Constitución Nacional y art. 80 de la Constitución de Córdoba).

En consideraciones de esta índole se ha basado la reciente reforma a la Ley 4349 que acaba de ser puesta en vigencia con la Ley 4870, y cuyo art. 11 establece que los jubilados pueden ocupar puestos electivos nacionales provinciales o municipales sin perder el goce de su jubilación, derogando con esto la disposición del art. 22 de la mencionada Ley 4349 y restringiendo a lo expresado los límites de la ya citada disposición del art. 4º de la Ley 3744.

Por lo dicho y sobre todo por lo establecido en la expresada reforma de reciente vigencia, creo que no hay incompatibilidad para el recurrente entre el puesto de Senador en la Provincia de Córdoba y el goce de su jubilación como ex Juez Federal de la Provincia de La Rioja.

Creo que V. E. debe pronunciarse en ese sentido. — Octubre de 1905.

=====

Adeudada una patente que en las leyes impositivas vigentes ya no figura, corresponde cobrarla al deudor sin multa alguna. La prescripción nunca debe aceptarse de oficio, ni menos administrativamente, sino cuando la opone el interesado y resulta judicialmente declarada.

**José Emparan, solicita se ordene a la administración de Patentes, el levantamiento de la inhibición que tiene por deuda de patente.**

*Excmo. Señor:*

El recurrente es un deudor, por lo menos de la patente que se le cobró, ya que no de la multa, por haber desaparecido la patente

de que se trata de las leyes impositivas actuales, lo que le favorece en cuanto a la desaparición de la pena por su falta de pago.

Sea o no práctica de la administración, llegar hasta la inhibición de los deudores del impuesto de patente, la ley es terminante, para la percepción, prescribiendo el procedimiento de apremio (art. 31 de la ley anterior y 54 de la vigente 3739).

No hay para qué examinar si es el caso o no de la prescripción que se menciona, y que también se desconoce en los diversos informes de este asunto, porque la prescripción no debe establecerse de oficio, ni menos administrativamente, en casos como el actual, en que ni se manifiesta por el recurrente la intención de oponerla, ni resulta evidente del texto mismo de la ley, ni del informe de la Dirección de Contribuciones y Patentes que antecede.

En esto me ajusto a precedentes de la administración, sentados de acuerdo con los asesores letrados y en casos análogos (nota al art. 9 de la ley de contribución territorial 3870, pág. 1229 del Digesto de Hacienda).

En tales conceptos pues, creo que V. E. puede eliminar todo lo que al cobro de la multa en que incurriera Emparan se refiere, pero no puede, administrativamente, reconocer una prescripción que no ha sido opuesta y que no resulta evidente, para dispensarlo de una inhibición que representa una seguridad del interés que el Fisco tiene en la patente que adeuda y que no hay razón actual para renunciar.

Creo en consecuencia que V. E. no debe conceder lo que se solicita. — Octubre de 1905.

=====

Debe aceptarse y facilitarse siempre la devolución de una suma defraudada a la Nación por un empleado; de hacerlo así, se permite al empleado ejercer un derecho, por cuanto la Ley 49 prevee el caso de este reintegro y atenúa las penas.

**Emilio Magnasco, ex-empleado de Correos ofrece reintegrar la suma de \$ 2509, importe del desfalco que tuvo lugar en la oficina de Gualeguaychú.**

*Excmo. Señor:*

La devolución de la suma defalcada y que propone el recurrente

no puede ni debe rehusarse por V. E. dentro de lo que es legalmente aceptable y con los efectos que son propios y legítimos a tal devolución.

Creo más, creo que V. E. debe otorgar las facilidades que sean posibles para que tal hecho tenga lugar dentro de la corrección administrativa.

Lejos de hacer peligrar la acción de la justicia ya iniciada en el caso, se la combina, evitándose al propio tiempo un perjuicio actual en los intereses fiscales, se respeta un derecho, y no se menoscaba en lo más mínimo el texto y espíritu de la ley que gobierna estos casos.

Basta enunciar lo primero para comprenderlo, lo segundo es también evidente, en el sentido del derecho que tiene toda persona de devolver lo que se ha tomado indebidamente y bajo su responsabilidad, sea él o no quien lo tomó, sino también en el que tiene todo encausado, como el presentante, de agrupar en su defensa todas las circunstancias que puedan legítimamente concurrir a demostrar su inocencia o a motivar la atenuación de la responsabilidad de sus actos o al rigor de las penas.

Y en cuanto a la ley, su texto se encarga de justificar lo afirmado.

El art. 80 de la Ley 49 de 14 de septiembre de 1863 sobre crímenes y delitos contra la Nación, castiga con la severísima de 5 a 10 años de presidio, al empleado que, sujeto a rendir cuentas distrajese o hurtase los caudales de la Nación, puestos a su guarda; mientras que el art. 83 de la misma ley, poniéndose en casos análogos a que ella misma equipara al mencionado, atenúa las penas en el caso de que los caudales sean reintegrados, expresando en su final, que si ese reintegro no tiene lugar, es de aplicación el citado art. 80.

Se ve pues, que la ley admite la devolución de lo distraído, hurtado o apresado indebidamente a usos propios, como un atenuante que pone en manos del mismo acusado, y en beneficio evidente de los mismos intereses de la Nación que ampara.

En tales conceptos y dentro del texto y espíritu legal indicado, creo que puede y debe aceptarse y facilitarse el reintegro que en el caso se ofrece.

Ahora, ¿cuáles pueden ser esas facilidades?

V. E. informado por la repartición correspondiente, es quién

puede y está en mejores condiciones para establecerlas, siendo entendido siempre, que la devolución de que se trata y en la manera que V. E. la autoriza, sólo producirá sus efectos legales en la oportunidad de la ley, es decir, a su total reintegro. — Octubre de 1905.

=====

Los empleados de Aduana denunciante, no apelan de las resoluciones del administrador por ante el Ministerio, simplemente reclaman de ellas. Por razones administrativas, no están en las mismas condiciones que los particulares.

### **Enrique Rotger, apela de un fallo de la Aduana de la Capital.**

*Excmo. Señor:*

Por error sin duda, se viene dando al recurso que la Ley de Aduana acuerda a los empleados denunciante de contrabando o defraudaciones, el carácter de un recurso de apelación, quizá por hallarse la disposición que lo establece (art. 62 de la Ley de Aduana) en un capítulo bajo el rubro de “Recursos de Apelación”.

Los empleados de Aduanas referidos, no tienen tal recurso contra las resoluciones aduaneras, dictadas por sus superiores; sólo tienen como la ley lo dice, derecho *a reclamar*, cuando sus derechos de denunciante se hallen afectados por esas resoluciones, siendo bien terminante el especial y rápido procedimiento que la misma ley fija para atender y sustanciar esos reclamos.

No tienen el expresado recurso de apelación, primero, por el texto mismo de la ley (art. 62), segundo, porque no es compatible dentro del orden y disciplina regular de la administración, que un inferior se alce en largos alegatos contra las resoluciones de su superior, so pretexto de recurrirlas, y tercero, porque la ley no ha entendido equiparar en sus derechos, al empleado denunciante con el interesado, dado que a éste le reconoce derechos (art. 63 —Ley de Aduana y arts. 1063 y 1067— Ordenanzas) que no acuerda a aquél, por la situación bien diferente en que respectivamente se encuentran.

De aquí pues, que no sea el caso de que V. E. dicte resolución alguna en el sentido indicado, dado que la ley es bien explícita, cuando califica y establece la acción que acuerda a los empleados y a los comerciantes, acciones respectivas que puedan interponerse y

ejercerse simultánea e independientemente dado que tienen diverso origen, distinto nombre y diferente procedimiento.

La ley por otra parte, con el hecho de permitir el recurso judicial por el interesado de la resolución aduanera que le condena, no ha desarmado ni menos abandonado los derechos del empleado denunciante; esos derechos están incluidos en la defensa que ante los Jueces hacen sus representantes legales (procuradores fiscales) y sobre todo puede ser hecha por ellos mismos desde que les da una acción conjunta con el Ministerio Fiscal, según claramente lo establece el art. 65 de la misma Ley de Aduana.

En tales conceptos pues, no hay perjuicio ni obstáculo que se oponga a que los empleados ejerzan sus derechos de denunciantes en las maneras que la ley se lo autoriza.

O ante el Ministerio de Hacienda en la forma del art. 62 de la ley, y sin perjuicio de los recursos que pudieran tener lugar, o ante los jueces, acompañando la acción fiscal, según el art. 65 de la Ley de Aduana, y amparados por la misma defensa del representante del Fisco.

Considero bastante este amparo legal para los derechos del denunciante, que en ningún caso puede equipararse en su situación con la del comerciante que es una persona inculpada, a quien la ley abre la puerta de su defensa.

Reputo, por ende, que no hay razón para modificar los procedimientos de la ley, con el objeto de igualar situaciones que no hay por qué igualarlas.

Pienso pues, que V. E. dando al reclamo presentado el trámite del art. 62 de la Ley de Aduana, debe resolverlo como corresponda, según resulta de los informes que se produzcan. — Octubre de 1905.

=====

La aceptación por parte del P. E. de un Legado por cantidad líquida y determinada, no requiere autorización previa del Poder Legislativo.

**Consulta del Ministro de Guerra, sobre si puede aceptar una donación, cuyo importe se halla depositado a la orden del Ministerio.**

*Excmo. Señor:*

El Estado dentro de su capacidad jurídica, puede adquirir los derechos que el Código autoriza, según sus arts. 31, 33 y 36.

El P. E. es administrador de los bienes de la Nación, según la Constitución Nacional, y en ejercicio de su mandato puede hacer lo que la ley no prohíba, ni sea materia de autorización especial.

El título de mandato del Código Civil, sólo requiere poderes especiales, entre otros casos, para la adquisición o transferencia del dominio de bienes raíces, según el inc. 7º del art. 1881 y para aceptar herencias según el inc. 16 del mismo artículo.

La legislación para esos casos, salvaguarda las responsabilidades que pudiera envolver la aceptación de bienes raíces, que como la de las herencias, está sujeta a las cargas que pudieran afectarlas.

No sucede lo mismo respecto de los *legados de cantidad* que la ley no ha incluido en la prohibición anterior, porque su aceptación implica sólo adquisición de *derechos personales*, los que no crean obligaciones al legatario. Esos legados implican una adquisición sin condición ni gravamen, y es por ello que no resultan incluidos, ni en disposiciones relativas a las herencias, ni en las de el art. 3739 declaratorio de las incapacidades para recibir legados.

La aceptación del legado por cantidad líquida y determinada, no requiere por ello autorización previa del Poder Legislativo, y aún si duda existiera, siendo el legatario de cosa determinada, propietario desde la muerte del testador, según el art. 3766 del Código Civil, y estando el legado desde tiempo ha, depositado judicialmente a su orden, puede disponer la aceptación por sí solo, pues según el art. 1906 del mismo Código, no se consideran traspasados los límites del mandato, cuando ha sido cumplido de una manera más ventajosa que la señalada por éste. Si hay un beneficio incontestable en la institución del legado, y ningún peligro de perjuicio a la causa pú-



blica, el P. E. debe disponer del importe depositado a su orden para mejorar la condición del Cuerpo de Inválidos, según la intención del causante, en la forma que se creyere más eficaz. — Octubre de 1905.

=====

De acuerdo con la Ley 1420, la autonomía del Consejo Nacional de Educación se refiere a la administración escolar, sin perjuicio de la supremacía en lo demás del Ministerio de Instrucción Pública.

El Consejo no puede escudarse en esa autonomía, para no rendir cuenta de los fondos que le están afectados, y de los que por vacancias u otros motivos pertenecen a la Caja de Jubilaciones.

El habilitado del Consejo, está obligado a rendir cuentas.

**Contaduría General de la Nación, se dirige al Tesorero del Consejo Nacional de Educación en el carácter de habilitado de este último, para que devuelva los sueldos de empleos vacantes a los efectos del art. 4º de la ley 4349 y del Acuerdo de febrero 15 de 1905.**

*Excmo. Señor:*

Dos son las objeciones que formula el Consejo Nacional de Educación, con motivo de la obligación de presentar planillas de contabilidad, que el decreto en acuerdo de Ministros de 16 de febrero del corriente año, reglamentario de la Ley 4349, impone a los habilitados o encargados de hacer pagos en la Administración Nacional.

En primer lugar, pretende el Consejo que su tesorero sólo está obligado a remitir directamente a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, ya sea mensualmente, bimestral, trimestral o anualmente, los fondos nacionales de los incs. 1º, 2º, 3º y 4º del art. 4º de la Ley 4349.

En segundo lugar, sostiene que, no le corresponde tampoco incluir en la anterior obligación el importe de los sueldos de los empleos vacantes a que se refiere el inc. 6º del citado artículo de la misma ley.

El Consejo invoca, para sostener la primera tesis, la entera autonomía con que se considera en el manejo de los fondos sometidos a su cuidado, y se apoya en la misma razón, así como en la especial circunstancias, de que los empleos de maestros que, por muy pocos

días suelen estar sin sus titulares no pueden considerarse como vacantes, a los efectos del inc. 6º del art. 4º de la Ley 4349, puesto que, tales maestros en disponibilidad, constituyen una economía para el Consejo, que no debe ser entregada a la Caja de Jubilaciones, de acuerdo con el mismo inciso de dicha ley.

Con respecto a la autonomía del Consejo Nacional de Educación, si bien es cierto que el inc. 3º del art. 57 de la ley de su creación 1420, menciona entre sus atribuciones, la de administrar todos los fondos que de cualquier origen, fuesen consagrados al sostén y fomento de la educación común, es necesario, tener presente que los fondos de que se forma la Caja Nacional de Jubilaciones, a los cuales se refiere el decreto del 16 de febrero del corriente año, no son de los destinados *al sostén ni al fomento de la educación común*, sino, muy especial y particularmente, a constituir el tesoro perteneciente a las personas de los maestros y empleados del Consejo Nacional de Educación, a los efectos de su jubilación, según lo establecen los arts. 1º, 2º y 4º de la Ley 4349.

El Poder Ejecutivo encargado de reglamentar esta ley, por su art. 60, está facultado para suspender por el tiempo que juzgue necesario la concesión de nuevas jubilaciones y pensiones en el caso del art. 59, así como por el art. 57 de la misma, para revocar las resoluciones negativas de la Junta de Jubilaciones acordando las que ésta designe; así no puede ni debe ser trabado en la reglamentación de la contabilidad de los fondos de la Caja Nacional de Jubilaciones, por ninguna repartición pública, so pena de desnaturalizar estos claros propósitos de la ley citada, que directamente rigen la materia.

Pero del estudio de la ley que creó la Institución del Consejo Nacional de Educación, es decir, de la Ley 1420, se desprende que la autonomía del Consejo, se refiere a la administración escolar, dependiente en lo demás del Ministerio de Instrucción Pública.

Y así el art. 52 de dicha ley establece en su primera parte, que la "Dirección Facultativa y la Administración General de las Escuelas estará a cargo de un Consejo Nacional de Educación, que funcionará en la Capital de la República"; pero en su parte final, agrega: "bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción Pública".

Es de advertir también, que con sujeción a lo dispuesto en los incs. 9, 10, 11 y 12 del art. 11 de la ley sobre Organización de los Ministerios Nacionales 3727, corresponde al despacho del Ministerio

de Instrucción Pública todo lo relativo al fomento de la instrucción pública, a la instrucción primaria y común de la capital, territorios nacionales y provincias, así como al régimen, desarrollo y mejoramiento de la instrucción general o secundaria en toda la República.

De manera que, sería ilusoria esta dependencia del Consejo con relación al P. E., si éste tratándose del cumplimiento de un decreto reglamentario, dictado por mandato expreso de la ley reglamentada, se pudiera considerar excluido de su cumplimiento y observancia.

Si a esto se agrega que el fondo constitutivo del tesoro de la Caja Nacional de Jubilaciones, en favor de los maestros y empleados del Consejo, lo constituye el fondo acumulado por el acuerdo en el art. 45 de la Ley 1420 y con la Ley 1909, según lo establece el inc. 9º del art. 4º de la Ley 4349, no puede invocarse por el expresado Consejo, razones de autonomía para no satisfacer prescripciones reglamentarias obligatorias para todas las dependencias administrativas, sin distinción ni limitación legalmente establecidas.

En cuanto al segundo punto observado por el Consejo, considero que tratándose de vacantes, que se dicen por razones de economía e incluidas en la última parte del inc. 6º del art. 4º de la Ley 4349, el P. E. podría declararlas tales, a los efectos de esa disposición legal, previo informe del Consejo Nacional de Educación, quien es el más autorizado para informar de su conveniencia dada su mayor vinculación con lo que a la instrucción se relaciona.

De esta manera, sin dañar los intereses y la igualdad que la disposición citada de la Ley 4349 contempla en la Caja de Jubilaciones, se respetarían, por una parte, las exigencias de la economía en la administración escolar y por otra, el texto expreso de la ley.

Por lo expuesto opino que V. E. debiera declarar comprendido entre los habilitados a que se refiere el decreto de 16 de febrero del corriente año, al tesorero del Consejo Nacional de Educación y en cuanto a los sueldos de empleos vacantes, su no remisión a la Caja, una vez calificada por V. E. la economía que les puso en vacancia, previo informe de ese Consejo Nacional de Educación. — Octubre de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3602, pág. 463 de octubre 25 de 1905.*

=====

El denunciante que ha motivado un proceso contra una Compañía Marítima, que ha sido absuelta de la infracción que aquel le imputaba, le corresponde la reposición del papel sellado y no a la Compañía absuelta de culpa y cargo.

**Compañía “Messageries Maritimes”, pide se le exima de reponer los sellos que pretende cobrarle la Contaduría en un expediente sobre infracción de Aduana.**

*Excmo. Señor:*

El agente de la Compañía “Messageries Maritimes”, fundándose en que esta empresa ha sido absuelta por sentencia judicial, en un proceso por infracción a las Ordenanzas de Aduana, que se le inició administrativamente, sostiene que no se encuentra en la obligación de reponer el papel sellado de aquellas actuaciones fiscales.

El art. 6º de la ley de sellos vigente, establece que: “los Jueces y funcionarios públicos de la Nación podrán actuar en papel común con cargo de reposición por quien corresponda”.

En virtud de esta disposición, que importa una excepción creada por el legislador, se ha tramitado el proceso de que se trata, haciéndose la actuación en papel simple, con cargo de debida reposición por *quien corresponda*.

Con arreglo a la segunda cláusula del art. 78 de la ley que rige la materia, el valor de los sellos será pagado por quien *origine las actuaciones* y, en el caso de que se trata, es indudable que el denunciante de la infracción y no la compañía es quien ha originado las actuaciones promovidas, mediante una denuncia que no ha prosperado.

La compañía recurrente ha sido absuelta de toda responsabilidad por no constituir infracción el hecho que la obligó a intervenir en dicho proceso, según resulta de la sentencia de la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de la Capital, dictada en última instancia, en fecha 8 de abril de 1904, a fs. 57 del Expediente Nº 158, año 1897.

Por ello opino: que no corresponde a la parte recurrente la reposición de sellos ordenada en el decreto de V. E. de fecha 6 de febrero del corriente año, como lo sostiene el dictamen que antecede del Sr. Procurador del Tesoro. — Noviembre de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial Nº 3634, pag. 1074 de diciembre 4 de 1905.*

La patente debe cobrarse desde el momento en que la persona ejerza el comercio, la profesión o industria gravada por la ley; la inscripción en el Registro de Comercio respectivo no basta para ello.

**César A. Saguier, reclama por patente que se le impone.**

*Excmo. Señor:*

Creo que la patente debe cobrarse desde el momento en que la persona ejerce el comercio, la profesión o industria gravados por la ley.

Apoyo esta opinión en el texto expreso del art. 1º de la ley de patentes vigente que empieza así: “Los que ejerzan cualquier ramo del comercio, profesión o industria, en la Capital y en los territorios nacionales, pagarán patente”...

Pienso que la inscripción en el Registro de Comercio de una persona, además de ser extraña a la aplicación de la patente al comercio inscripto, puede no determinar el principio de su ejercicio por parte del inscripto, y esto basta para que tal circunstancia no deba tenerse en cuenta, para la aplicación de la disposición citada en el texto transcripto.

Creo pues, que el primer acto del rematador que se constata en el recurrente, debe considerarse como la iniciación de su comercio y ese debe ser el punto de arranque del cobro de su patente. — Noviembre de 1905.

=====

El pago hecho al Gobierno por error de hecho, autoriza su repetición como pago sin causa.

**Banco de Italia, pide devolución de dinero pagado de más por el impuesto de sellos a los depósitos.**

*Excmo. Señor:*

Se ha comprobado debidamente que el recurrente “Banco de Italia y Río de la Plata”, por un error proveniente de antiguas resoluciones que están sin vigencia, ha venido pagando durante varios años, el impuesto de sellos de uno por mil, sobre las sumas correspondientes al cobro de cupones y dividendos de títulos depositados

en custodia sobre los cuales la administración no cobra impuesto a ningún Banco.

Se trata pues, de un pago por error de hecho, que equivale a un pago verificado sin causa, a que por lo tanto autoriza su repetición de acuerdo con el inc. 2º del art. 790, art. 792 y en armonía con la última cláusula del art. 793 del Código Civil.

Por ello opino que V. E. debe acceder a la devolución que se solicita por dicho Banco, tanto más cuanto que la forma en que el pago se ha hecho, no justificaría nunca de parte de V. E. la retención indebida de una suma de dinero que no le correspondería percibir legalmente. — Noviembre de 1905.

=====

Al P. E. no le corresponde evacuar consultas sobre la doctrina que haya entendido sostener en documentos suscriptos por él, que se relacionen con la ejecución de leyes. Su opinión no puede tener valor en asuntos que se ventilan ante los Tribunales, máxime si la Nación es parte en ellos, pues es a su representante a quien corresponde sostener en su nombre, la doctrina legal.

**Juez Federal de Santa Fe, sobre si es cierto que con posterioridad al decreto de noviembre 14 de 1901 relativo a la jurisdicción nacional sobre las playas de los mares, el P. E. ha aplicado la doctrina establecida en él.**

*Excmo. Señor:*

Partiendo de la base de que el Sr. Juez oficiante, al hablar del Gobierno Nacional, se ha querido referir exclusivamente al P. E., que es una entidad bien distinta, me permito presentar las siguientes observaciones que, en mi sentir, se oponen a que se evacúe como corresponde el informe requerido.

Sin entrar a examinar cuál haya sido la doctrina sentada por la disposición administrativa que se cita, en la materia a que se hace referencia, considero que el Poder Ejecutivo no puede tener en este asunto, ni en ningún otro, más doctrina que la que envuelve el texto y espíritu de la ley que ejecuta, pues de lo contrario, faltaría al precepto claro y terminante del inc. 2 del art. 86 de la Constitución Nacional.

Bajo este punto de vista, el informe requerido quedaría contestado, resultando inoficioso, dado que no puede aceptarse como existente, ninguna doctrina que no concierne con lo dicho, ni ninguna interpretación a su respecto que no provega de quien pueda legalmente hacerla.

En cuanto a los actos administrativos que se hayan practicado en la materia indicada, y en el largo lapso de tiempo transcurrido entre el año 1891 y el presente, que es al que el Sr. Juez oficiante se refiere, creo que no debe ni puede informarse:

1º — Porque no considero que el informe pedido obligue a buscar y juzgar la doctrina y criterio que en actos tales hayan tenido las diversas administraciones que se han sucedido desde esa fecha, tanto más cuanto que, ellos constan de documentos públicos y que han sido insertados en el Registro Nacional y otras publicaciones que pueden, y son seguramente conocidas por los interesados y sobre todo por el Sr. Juez Federal del Rosario.

2º — Porque aun cuando se aceptase voluntariamente tal tarea, nunca podría transmitirse en el informe, sino la impresión individual del Sr. Ministro requerido en el caso, respecto de la doctrina, interpretada y apreciada con arreglo a su anuencia y conciencia,\* quizás de diversa manera a como la hayan apreciado e interpretado las sucesivas administraciones que anteriormente la hayan aplicado.

3º — Porque, en último término, aún dado el caso que, el Sr. Ministro interpretase cumplidamente la doctrina, y tal cual haya sido entendida y apreciada anteriormente, la importancia de su juicio sería nula (salvo su ilustrada autoridad privada), dado que, como lo tiene resuelto la Suprema Corte, en diversos fallos; las opiniones del P. E. o de los Ministros en asuntos sometidos a los Tribunales tienen un valor tan relativo que, en ningún caso, son ni pueden ser base firme de una resolución cualquiera; siendo de notar en este punto, y para mayor abundamiento que tratándose de un juicio en que la Nación es parte, su representante en él —al defender sus intereses—, habrá seguramente aplicado y sostenido en su nombre la doctrina de la ley que, como ya lo he dicho, es la que le corresponde sostener y sentar al P. E. en todos los actos de su función institucional.

De acuerdo pues, con tales conceptos, reputo que el informe

requerido no debe ser satisfecho, sin perjuicio de contestar al Sr. Juez oficiante, haciéndole presente las consideraciones que obstan a ello, y que dejo indicadas. — Noviembre de 1905.

*Tómase como resolución: Boletín Oficial N° 3637, pág. 1132 de diciembre 7 de 1905.*

=====

Prohibiendo la ley 1055 la pesca en las costas patagónicas, hasta tanto se dicte por el H. Congreso la reglamentación sobre tal materia, el P. E. no puede desconocer dicha ley y autorizar por un decreto la pesca.

**División de Ganadería, sobre conveniencia de resolver un pedido de pesca en los mares del Sud por los Sres. Argulla y Gallup.**

*Excmo. Señor:*

Pienso que V. E. nada puede establecer en el sentido de permitir la pesca en las costas patagónicas, como se indica y gestiona por la oficina respectiva, dada la existencia de una disposición legal que lo prohíbe terminantemente, cual es el art. 3° de la Ley 1055 de octubre 9 de 1880.

Esa ley en su espíritu y en su texto, revelado el primero en el mensaje con que fué proyectado por el P. E., y el segundo por su propia redacción, dictó la mencionada prohibición derogando la ley anterior de 1871 que la permitía, teniendo en cuenta el abuso y daño que por los pescadores se cometía e infería a la misma y a la venta fiscal así como a la necesidad de reglamentos que protegiesen la pesca misma.

Como resulta del texto de la disposición legal citada, la referida prohibición debía subsistir, hasta tanto se dictaren y aprobaren los reglamentos a que hace alusión, y como esos reglamentos no se han dictado, ni menos se han aprobado por el Congreso (quien creo que actualmente tiene a estudio la ley general de pesca que supongo los contiene), la Ley 1055 está vigente y V. E. no puede ni debe contrariarla administrativamente en este punto (inc. 2 del art. 86 de la Constitución).

No creo que sea de tomarse en cuenta la consideración que se insinúa, de que la ley no se ha referido a la pesca fuera de las aguas



jurisdiccionales, porque ni eso ha sido, ni podía ser materia de la Ley 1055, según su espíritu y su texto, ni se concibe un establecimiento de pesquería sin costa de atraque, instalación, amarre, como pudiera pretenderse. Ni creo tampoco y como pudiera pretenderse que el art. 18 del Código Rural vigente en los Territorios Nacionales, según la Ley 3088 haya derogado el citado art. 3 de la Ley 1055, dado su limitado objeto al derecho de pesca de los ribereños de ríos y arroyos.

Aun cuando estos conceptos son, en mi sentir, terminantes en el sentido de lo que sostengo, no dejo de comprender la conveniencia que habría, en hacer cesar la prohibición legal existente, dado el desenvolvimiento que se inicia en los territorios del Sur, pero no pudiendo contrariar la ley, la acción de V. E. se reduce a gestionar y promover en oportunidad el pronunciamiento del Congreso al respecto, para hacer cesar la inconveniente prohibición. — Noviembre de 1905.

=====

La mutua protección entre los socios, es extraña al bien común, principal objeto a que se refiere el art. 33 del Código Civil. La sociedad con tal fin puede funcionar como una sociedad común.

### **Sociedad Democrática Italiana de Socorros Mutuos de Belgrano, sobre aprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor:*

La “Sociedad Democrática Italiana de Socorros Mutuos” cuyo objetivo es la protección y asistencia recíproca entre sus asociados, no puede considerarse como una creación inspirada en *conveniencias públicas* y el *bien común*.

De manera que, del punto de vista general de sus propósitos, no se trata de una entidad de derecho que pueda constituir persona jurídica, al amparo de la autorización del poder público, en favor del interés colectivo (art. 33, Código Civil); y es por esta razón que opino que V. E. no debería acordar el carácter de persona jurídica a la asociación de que se trata, como he tenido ocasión de significarlo ya en el caso de la “Sociedad La Italiana al Plata” y otros análogos, de acuerdo con el Sr. Procurador, Dr. Kier.

Los propósitos de la sociedad se revelan, por otra parte, en las inconveniencias que consignan los arts. 8º y 9º de sus estatutos, siendo por último ilegal la *irresponsabilidad* de la asociación que se establece en el art. 12, como incompatible la declaración de *indisolubilidad* contenida en el art. 13 con las disposiciones de los arts. 25 y 14 de los primeros estatutos.

La sociedad recurrente, que en virtud de lo expuesto no tiene las condiciones requeridas para que el poder público le autorice su existencia ideal como persona jurídica, puede indudablemente, satisfacer sus ideas de mutua protección y asistencia entre los socios que la forman al amparo del art. 46 del citado Cód. Civil, que respeta todas las iniciativas individuales de esta naturaleza, quedando sus miembros sometidos a las leyes generales en sus derechos respectivos y en sus relaciones con terceros. — Noviembre de 1905.

=====

” A partir de la fecha de promulgación de la ley que acepta un legado a favor de la Nación, comienza a correr el término para el cumplimiento de las obligaciones y condiciones que el legado importa.

**Dr. Juan Esteban Anchorena, pide la aceptación del legado  
“Institución Juan Anchorena”.**

*Excmo. Señor:*

Con la aceptación explícita que contiene la Ley 4873 del legado de un millón seiscientos setenta mil pesos en los fondos y rentas pública que se expresan, y que don Juan Anchorena hizo a la Nación en la persona de la “Institución Juan Anchorena” según el testamento que corre agregado, ha quedado legalmente concluidos el acto jurídico que el expresado testador entendió hacer según su propia voluntad.

Tal aceptación de un legado con cargo como el presente —dado que envuelve obligaciones para terceras personas— y que está regido por las disposiciones de las donaciones entre vivos según el art. 3774 del Cód. Civil, es según los arts. 1792, 1793 y 1811 del mismo, el punto de partida obligado de la existencia del acto y el arranque para que se cumplan las obligaciones consiguientes, o para que se

empiecen a contar los términos dentro de los cuales deben cumplirse.

Así, el 12 de octubre del año que corre, fecha de la promulgación de la ley de aceptación (1873), es el momento en que deben empezarse a cumplir las mutuas obligaciones, así como a contarse los diez años que, en la cláusula 56 del testamento, fijó el testador como plazo para que el Congreso dictara leyes necesarias que dieron a la "Institución Juan Anchorena" su plena existencia de persona jurídica y su organización completa dentro de los lineamientos claramente trazados por el mismo.

Si el Congreso no dictara esas leyes, si no constituyese y habilitase aquélla para los fines de su creación, dentro de ese lapso de tiempo, la misma cláusula es expresa en cuanto deja sin efecto el legado y la Institución, y da derecho a sus herederos a exigir la devolución de su importe, que supone ya entregado, con sus intereses y rentas devengadas.

En tales conceptos pues, y reputando implícitamente autorizada la personería jurídica que compete a la "Institución Juan Anchorena" según los arts. 33, inc. 5º y 45 del Código Civil; corresponde hacer efectivo el legado, recibiendo V. E. la cosa legada con los intereses y rentas devengados desde su institución como fué la intención manifiesta del testador, y como la presenta para su entrega el Sr. Albacea don Juan Esteban Anchorena, en su precedente escrito.

A tal efecto, creo que V. E., aplicando los arts. 3767 y su correlativo 1833 del Código Civil, pertinentes al caso, debe requerir del expresado Albacea la entrega de la cosa legada en la forma y estado referido, citándolo para ello, y para que el acto se practique como corresponde, es decir, otorgándose la escritura pública, por ante el escribano de Gobierno, que indica y prescribe la cláusula 56 (1ª parte) del testamento respectivo.

Practicada esta diligencia y en posesión de la cosa legada, es llegado el momento de que V. E. proyecte los estatutos y leyes orgánicas de la "Institución Juan Anchorena" que, dándole la forma establecida por el testador, provea a la administración del caudal legado y la haga capaz de los diversos actos civiles que supone su existencia y los fines indicados por él mismo.

Presentados esos proyectos al Honorable Congreso, en su oportunidad, podrán ser estudiados y sancionados, a medida que lo requiera la organización, guarda y administración del caudal, las obligaciones

a cumplir o derechos que requerir, dentro del plazo de los diez años que establece la cláusula 56 del testamento.

Con estos actos, considero que quedan echados los fundamentos de la "Institución Juan Anchorena", cuya importancia en el capital que ha de acumular y en los beneficios que su oportuna distribución ha de proporcionarle, será grande como obra patriótica y humanitaria, dado que el largo lapso de tiempo que tiene para desenvolverse no deprime esa importancia, tratándose de la vida de un pueblo y aún de la misma humanidad. — Noviembre de 1905.



La inmigración europea debe ser fomentada en todo sentido según el art. 25 de la Constitución Nacional. La ley de inmigración de 1876, se refiere especialmente al inmigrante europeo. El P. E. debe considerar como inmigrantes y ofrecerles su protección, a los europeos que por Misiones, en el límite con el Brasil, entran a nuestro país con fines de trabajo y pidiendo la protección del Gobierno.

#### **División de Inmigración, sobre aumento de inmigración procedente del Brasil.**

*Excmo. Señor:*

Los europeos que constituyen en su mayor parte la espontánea corriente migratoria que, desde algunos años atrás, ha empezado a llegar al territorio de Misiones procedente de la frontera Brasileña en demanda de protección y trabajo, deben ser considerados como inmigrantes, con sujeción a la ley de octubre 19 de 1876 que rige la materia.

El art. 12 de esta ley, al declarar inmigrantes a los efectos de la misma, a todo extranjero jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que llegase a la República *para establecerse* en ella, *en buques a vapor o a vela*, pagando pasaje de segunda o tercera clase o teniendo el viaje pagado por cuenta de la Nación, de las Provincias o de Empresas particulares, se refiere sin duda a los europeos (dado que los asiáticos no vienen a nosotros por ahora), y que son los que llegan embarcados en la manera indicada, por razón del punto de su inmigración o salida.

Y así puede decirse, que a quien protege la ley es especialmente

al inmigrante europeo, habiendo tomado para designarlo su medio necesario de transporte.

Esto se desprende en primer lugar, de que la ley referida de 1876, no hace sino aplicar y reglamentar el art. 25 de la Constitución, el que textualmente dispone que “el Gobierno Federal fomentará la *inmigración europea* (sin distinción de procedencia) y agregando que, no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada a territorio argentino de los extranjeros (no ya solamente europeos) que traigan por objeto labrar la tierra”.

Y en segundo lugar, de que la transcripta declaración de nuestra Carta Fundamental, responde al concepto evidente en ella, de fomentar la población, riqueza y prosperidad nacional, con la fácil entrada al territorio de la inmigración que reputa más apta a tales fines.

De manera que el expresado fomento a la inmigración europea establecida por la mencionada cláusula constitucional, se encontraría restringido, desvirtuado y aún tergiversado, si se aceptase que el art. 2 de la ley referida de 1876 se refiere exclusivamente a los inmigrantes que vienen al país en buques a vapor o a vela; restricción que, por otra parte, resultaría contraria al inc. 16 del art. 67 de la Constitución que encomienda al Congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país, promoviendo la inmigración, entre otros medios eficaces a dicho fin.

Tratándose pues, en el caso ocurrente de inmigración europea y al parecer de aquella a que se refiere el inc. 2º del art. 3º de la citada ley de octubre 19 de 1876, considero que el P. E. no puede ni debe cerrar las puertas de la protección legal a inmigrantes que se encuentran en las condiciones indicadas.

Con ello respetará y hará efectivo lo prescripto por la Constitución, aplicará con justicia el espíritu de la ley y ejercitando atribuciones que le son propias, prestará una protección que, razones de humanidad y de propia conveniencia, aconsejan ofrecer y prestar al obrero, industrial o artesano, que pisa nuestro suelo trayéndonos el concurso de su trabajo honesto.

Aun cuando los Estados Unidos del Brasil, de cuya frontera parece desprenderse la inmigración de que se trata, observaría en el caso la actitud que dejo indicada, dados sus conocidos sentimientos y sus prescripciones constitucionales, creo que V. E. debe tomar, sin

embargo, todas las medidas que concurran a evitar una interpretación torcida o una errónea apreciación de la protección de que se trata, que pudiera dañar, en lo más mínimo, las amistosas y cordiales relaciones que a esos Estados nos vinculan. — Diciembre 6 de 1905.

=====

No está obligada la Nación, como primera enajenante, a integrar la propiedad vendida, que le requiera un tercero o cuarto adquirente, en base a una mensura practicada en juicio, del que no fué parte y por no indicarse las condiciones en que se hizo la primitiva enajenación.

**Manuel C. Reguera, reclama diferencia de superficie de tierra en el Río Negro.**

*Excmo. Señor:*

La integración de superficie que solicita el recurrente don Manuel C. Reguera, consiste en el reclamo de un déficit que aparece de un campo por él adquirido en la Sección XVI, letra D, lotes nueve y doce del Territorio Nacional del Río Negro, de terceras personas, cuyos títulos, después de repetidas transmisiones arrancan de la Nación como enajenante primitivo.

Desde luego, la diligencia de mensura practicada por intermedio del Ingeniero Sr. Pedro Ticiont, en que se funda el postulante para sustentar su derecho, es una diligencia judicial absolutamente extraña a V. E. verificada por ante el Sr. Juez Letrado de Río Negro y aprobada por él mismo, sin la menor intervención del representante legal de la Nación en tales casos.

Tampoco ha tenido ella oportunidad de constatar por medio de sus oficinas técnicas respectivas, la exactitud de esa operación, ni menos del déficit que se pretende y de que se le quiere hacer responsable.

En tal circunstancia no está habilitado V. E. para reconocer derechos como los que se le reclaman, sin más antecedentes que la simple afirmación de la parte interesada y referencia de las mismas. a actuaciones judiciales que le son absolutamente extrañas, como que han tenido lugar sin su directa intervención.

Sería necesario pues, y ante todo, si el recurrente lo desea, un procedimiento judicial con la amplia intervención de V. E. y de su

parte, a fin de establecer los derechos que pretende, así como las obligaciones que podría tener la Nación en su carácter de primer enajenante, y según las formas y condiciones en que esa enajenación fué hecha por su primer adquirente.

Mientras esto no se haga, no hay razón para reconocer derechos ni aceptar obligaciones que no tienen la base legal que le corresponde.

No siendo por otra parte el Gobierno Nacional, vendedor al recurrente de los referidos lotes de tierras públicas, no se encuentra en la situación del vendedor que debe entregar la cosa vendida, siendo su responsabilidad por la evicción y saneamiento, la indirecta y judicialmente establecida que menciona el art. 1414 del Cód. Civil.

En virtud de estos conceptos, que he tenido ocasión de manifestar en los casos de Cernadas y Juan Esteban Anchorena, conceptos que V. E. ha tenido muy en cuenta al resolver, considero que V. E. no debe hacer lugar a lo solicitado. — Diciembre 8 de 1905.

*Decreto de Acuerdo: de diciembre 15 de 1905, comunicado por nota.*

=====

Los herederos de un militar deben acreditar las condiciones de la ley (de 1865) para pedir la pensión que les corresponde, mientras esa justificación no se haga, no existe la obligación de la Nación de reconocer la pensión respectiva.

**Señora Teresa Urquiza de Sáenz Valiente cobrando pensiones atrasadas de su señora madre.**

*Excmo. Señor:*

Si bien es cierto que, por los arts. 24 y siguientes de la ley de 1865 gozan de pensión la viuda e hijos de los militares fallecidos que se encontraban en determinadas condiciones, siendo de notar que los hijos conservan su pensión mientras se mantengan solteros, no es menos cierto que esa misma ley requiere la justificación de las circunstancias y extremos que considera indispensables para que la pensión exista en favor de los herederos, y para que el derecho de éstos sea reconocido en cada caso por la Nación.

Fallecida la Sra. Viuda del General Urquiza, ninguno de sus sucesores se presentaron a requerir la pensión que aquélla dejó de

percibir a su fallecimiento, no habiendo ninguno de ellos, incluso la recurrente actual, señora de Sáenz Valiente, presentado las justificaciones a que he hecho referencia.

De aquí que, desde entonces, septiembre de 1896, no pueda darse por existente la pensión que dejó de percibir por su fallecimiento la expresada Sra. Vda., ni menos un derecho que, ni se requirió ni se justificó cumplidamente, con arreglo a la ley y en la oportunidad debida.

En tal concepto creo que la presente reclamación, no puede ni debe prosperar, tanto más, cuanto que aparte de las deficiencias de representación que en el caso se observan, la recurrente, Sra. Teresa Urquiza de Sáenz Valiente, se halla casada y ausente como su mismo representante lo afirma y justifica, circunstancias que legalmente la inhabilitan para requerir una pensión a que, en todo caso, ha perdido el derecho que hubiera tenido antes, previa justificación.

Estas consideraciones y las de la Contaduría General, me inducen a adherir a sus conclusiones, adversas a lo solicitado por el recurrente. — Diciembre de 1905.

=====

El Poder Ejecutivo no puede establecer por decreto la cesantía de todo empleado que tenga un embargo en su sueldo, pues tal medida se reputa contraria a la Constitución Nacional.

### **Caja de Conversión eleva proyecto relativo a embargo de sueldo de sus empleados.**

*Excmo. Señor:*

No existe ni puede existir ley que prohíba a los empleados de la Nación, contraer deudas particulares y que afecten sus bienes propios; esto no ofende la moral ni el orden público ni perjudica a terceros.

En tal concepto no puede prohibirse, ni menos hacerse objeto de pena, el embargo de los bienes privados de esos empleados, por deudas contraídas que la ley autoriza en parte y circunstancias determinadas.

Hacerlo, como en el caso lo hace la proyectada ordenanza de la



Caja de Conversión es ir contra la ley misma (arts. 258 y 261 del Código de Procedimientos), y contra la Constitución (art. 19).

Por otra parte, los empleados de la mencionada repartición son empleados de la Administración incluídos en el Presupuesto General, y por ende, deben ser admitidos y mantenidos en sus puestos sin otra condición que la idoneidad, la que no debe ni puede considerarse como pérdida, por el hecho de tener una deuda o un embargo de su sueldo, siempre que sus condiciones morales e intelectuales respondan y continúen respondiendo a las funciones y responsabilidades que les son propias (art. 16 de la Constitución).

Y así, si la Caja de Conversión encuentra que sus empleados son personas incapaces de las funciones y habilidades que puedan tener, a ella incumbe promover su remoción en la forma ordinaria y dentro del orden administrativo correspondiente, pero nunca por medio de ordenanzas que la ley no admite y que la Constitución repugna.

Estas consideraciones me inclinan a creer que V. El. no debe aprobar la ordenanza propuesta, haciéndolo así saber a la Caja de Conversión. — Diciembre de 1905.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3646, pág. 1312 de diciembre 9 de 1905.*

=====

La protección y asistencia recíproca entre los socios, no constituye el “bien común” a que se refiere el art. 33 del Código Civil. La asociación con tal objeto puede funcionar como sociedad común, en los términos del art. 46 del citado código.

**Sociedad “El Socorro Fraternal”, sobre aprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor: |*

La sociedad denominada “El Socorro Fraternal” cuyo objeto es la protección y asistencia recíproca entre sus miembros y en general de las personas naturales de los Departamentos de Chuf y Jazni (Siria), no puede considerarse como una creación inspirada en *convenciones públicas* y en el *bien común*.

De manera que, del punto de vista general de sus propósitos, no se trata de una entidad de derecho que pueda constituir persona jurídica.

dica, al amparo de la autorización del Poder Público, en favor del interés colectivo, en armonía con el art. 33 y correlativos del Código Civil.

Esta sociedad puede satisfacer sus ideas de mutua protección y auxilio entre los miembros que la forman y los sirios nacidos en Chuf y Jazni, al amparo del art. 46 del Código Civil que respeta las iniciativas de este género; quedando sus socios sometidos a la responsabilidad de las leyes generales, en sus derechos respectivos y en sus relaciones con terceros.

Por lo expuesto y de acuerdo con las ideas que he manifestado a V. E. en el caso de la “Sociedad Democrática Italiana de Socorros Mutuos” en el de “La Italiane al Plate” y otros análogos, opino que V. E. no debiera acordar el carácter de persona jurídica a la sociedad de que se trata. — Diciembre de 1905.

=====

Cuando las partes por hechos claros e incontrovertibles hacen de común acuerdo modificaciones de un contrato existente, no pueden luego desconocer esas modificaciones alegando el cumplimiento del contrato primitivo.

### **Tomás Hospitaleche, sobre arrendamiento de tierra en Santa Cruz.**

*Excmo. Señor:*

El recurrente don Tomás Hospitaleche solicitó del P. E. el arrendamiento de la superficie *aproximada de siete mil quinientas hectáreas* en la fracción B, sección XIX del territorio de Santa Cruz, que le fué arrendada según el contrato de 16 de junio de 1900; celebrado al amparo del art. 101 de la ley de 19 de octubre de 1876, en armonía con el decreto de 26 de septiembre de 1899 y aprobada por decreto de 6 de julio de 1900.

Estando en vigencia dicho contrato, el P. E. adjudicó en propiedad *dos mil quinientas hectáreas*, de la superficie arrendada a Hospitaleche, a doña Cipriana García por decreto de 22 de enero de 1901.

El recurrente con posterioridad a este último decreto, se presentó ante V. E. según consta a fs. 18, pidiendo se ordenase a la Contaduría de la Dirección de Tierras le cobrase *sólo el arrendu-*

*miento correspondiente a las cinco mil hectáreas restantes en el próximo vencimiento que tenía, y a la vez, la devolución por tesorería, del arrendamiento adelantado que había pagado por las dos mil quinientas hectáreas de menos a contar desde el 22 de enero, el 5 de julio de 1900.*

De esta manera la disminución del área de tierra arrendada al postulante a fs. 13 fué expresa y claramente consentida por él, mediante el escrito a que acabo de hacer referencia.

En consonancia con tal manifestación de voluntad el P. E. dictó el decreto de fecha 27 de noviembre de 1901 en cuya virtud aprobó la mensura practicada por el Ingeniero Olmos de la superficie de 8.142 hectáreas, 50 áreas, 46 centiáreas y 29 dms<sub>2</sub> y declaró que “la que por decreto de 6 de Julio de 1900 se arrendó a don Tomás Hospitaleche, era sólo de cinco mil seiscientos cuarenta y dos hectáreas, cincuenta áreas, y cuarenta y seis centiáreas y 29 dm<sub>2</sub>, ubicada en el lote 19 y parte del lote 22 fracción B, Sección XIX del Territorio de Santa Cruz.

Hospitaleche aceptó en seguida explícitamente la declaración de ese decreto y su limitación cuando se presentó ante V. E. el 30 de mayo de 1903, *como arrendatario de 5642 hectáreas y fracción mitad sur del lote 19 y parte del lote 22, fracción B, Sección XIX del Territorio de Santa Cruz*, pidiendo acogerse a los beneficios de la Ley 4167 de 8 de enero del mismo año, según consta a fs. 45.

Por otra parte y para mayor abundamiento según informe de fs. 53 vta. de fecha 10 de abril del corriente año, el recurrente tiene regularizada su cuenta de arrendamiento de sólo las *5642 hectáreas, 51 áreas y 61 centiáreas, que se le adjudicaron* por decreto de 27 de noviembre de 1901 lo que es bastante a su vez para mostrar que él mismo entiende ser sólo arrendatario de esa área.

En mérito de estos antecedentes, no vacilo pues en afirmar que el contrato de arrendamiento de la superficie aproximada de 7.500 hectáreas, entre el P. E. y el recurrente; contrato que tiene fuerza de ley para los contratantes con sujeción al art. 1197 del Cód. Civil, ha sido posteriormente modificado, por consentimiento expreso de las partes, en forma expresa, indudable y efectiva, en cuanto la extensión de la superficie primeramente arrendada, de acuerdo con la facultad que confiere el art. 1200 del citado Código.

Por ello opino, que V. E. no debe hacer lugar a lo solicitado por

don Tomás Hospitaleche y resolver se esté a lo ya resuelto en decreto de 27 de noviembre de 1901. — Diciembre de 1905.

=====

Cedido a la Nación por la provincia de Córdoba un inmueble determinado, bajo condición de un destino preestablecido. aceptada la cesión y llenadas las condiciones impuestas, la Nación ha adquirido irrevocablemente su dominio. La ocupación permanente por fuerzas de la Nación, ni es condición impuesta, ni puede en caso alguno ser convenida, como condición.

**Gobierno de Córdoba, pide devolución de tierras cedidas al Gobierno Nacional, para ocuparlas con el Batallón Ferrocarrilero.**

*Excmo. Señor:*

Desde el momento en que el Gobierno Nacional hizo los trabajos de edificación de cuarteles y obras accesorias del polígono militar, en el terreno que a tales objetos le cediera el Gobierno de Córdoba, a mérito de una ley de su legislatura, debió considerarse cumplida la condición expresada en la referida ley y que se reprodujo en la escritura, cuya copia corre también agregada.

Esos trabajos, en su importancia y valor, constan del informe que corre a fs. 2 vta. de este expediente, así como la condición de la escritura otorgada inserta en el art. 1 de la ley aludida de 21 de diciembre de 1897, y que textualmente dice al respecto: ...“con destino para la construcción de cuarteles y depósitos del polígono militar...”.

Basta comparar una y otra constancia, para comprobar que la condición no ha sido cumplida en el tiempo y forma que corresponde, y que con arreglo a las disposiciones de la ley civil, la adjudicación de la tierra donada ha sido irrevocablemente adquirida por la Nación.

Ninguna influencia tiene ni puede tener sobre tal hecho, la circunstancia de que el Gobierno de la Nación mantenga o no fuerzas nacionales ocupando los cuarteles construídos: primero, porque la cláusula transcrita no le impone la obligación de una ocupación permanente y no interrumpida de esos cuarteles; y segundo, porque tal condición no hubiera nunca podido establecerse, dado que la permanencia de las fuerzas nacionales en diversos puntos de la Repúbli-

ca, responde a causas extrañas y sobre todo imposibles de subordinar a contratos de índole diversa, como el que se trata.

Por último, y para mayor abundamiento, de la nota que corre a fojas 9, del señor Ministro de Guerra, resulta que V. E. no ha tenido la intención de cambiar el destino de las construcciones en el terreno donado, retirando o disolviendo las tropas que allí había, sino por lo contrario, se trata de desocupación accidental que podrá cesar en cualquier momento en que las necesidades del servicio militar, circunstancias políticas, o exigencias económicas, así lo exigieran.

Entre tanto, el Gobierno de la Nación en ejercicio del dominio perfecto adquirido sobre el inmueble en cuestión, para el cumplimiento de las disposiciones impuestas a sus adquisiciones, puede darle el destino que más estime convenirle y sin omitir el de su ocupación militar, cuando le sea necesario o las circunstancias lo requieran.

De acuerdo con estos conceptos, reputo que V. E. debe insistir en su resolución anterior, y continuar considerando que la donación de que se trata, es de propiedad exclusiva e irrevocable de la Nación,  
—Enero 6 de 1906.

=====

El retiro militar que autoriza la Ley 4707, no alcanza a los asimilados administrativamente por ser empleados de la Intendencia de Guerra; dichos empleados carecen del estado militar que sólo confiere la ley.

**Don Federico Sidders, Teniente Coronel asimilado,**  
solicita su retiro.

*Excmo. Señor:*

En la solicitud con que el recurrente señor Sidders inicia este expediente, manifiesta que previo los trámites de forma, se le conceda el *pase al retiro* de acuerdo con la vigente ley, es decir con la Ley 4707 últimamente dictada sobre la materia.

Para hacer este pedido, el peticionante hace valer su calidad de Teniente Coronel asimilado como empleado de la Intendencia de Guerra, y la dolencia que le aqueja y que prueban los certificados que se acompañan.

Aun cuando no conozca los servicios que alega el señor Sidders

para motivar su retiro, juntamente con la enfermedad que padece, es el caso de examinar su situación con arreglo a la Ley 4707 a la cual se ampara.

Antes de ahora he tenido ocasión de sostener que, con arreglo al Inc. 3º del Art. 18 de la ley 4707, el derecho de retiro y *pensión* correspondiente, así como el ascenso, era uno de los derechos inherentes y propios al estado militar (Art. 15 de la ley citada).

De acuerdo con esto consideré entonces, como considero ahora, que para los asimilados puedan ampararse en la ley indicada para su retiro u otro derecho, necesitan tener el estado militar, el que a tales fines no puede servirles sino por disposición y determinación expresa de la ley (Art. 16 in fine de la ley citada). Ahora bien, el señor Sidders, según el art. 10 de la Ley 3905, es realmente un asimilado y es Teniente Coronel por disposición del Poder Ejecutivo, de acuerdo con el final de la misma disposición, pero no estando su asimilación determinada por la ley entre los que comporta el estado militar, y más negándosele la citada Ley 3905, no tiene los derechos inherentes a ese estado (entre ellos el retiro), según el Art. 18, Inc. 3, Tít. II de la Ley 4707.

Pero si se considera que esa falta de determinación ha nacido de haberse suspendido al sancionarse el capítulo de la ley que a los asimilados se refería, lo que ha dejado sin legislar sus justos y posibles derechos, no es aventurado afirmar que no comprendiendo la ley en sus términos sancionados, el caso del recurrente no puede encuadrarse dentro de aquellos, al menos mientras dure la suspensión legislativa del capítulo de la ley que a la determinación de los asimilados con estado militar se refiere.

Pero como entre tanto, no hay razón como para que los derechos de esas personas se consideren abonados, por más que su reconocimiento se halle detenido por la suspensión votada, y teniendo en cuenta que, si la Ley 4707 ha derogado las leyes anteriores que se le opondan respecto de pensiones y retiros (Art. 13, Tit. IV), es entendido que lo ha hecho para aquellos sobre los cuales ella legisla y no sobre aquellos a cuyo respecto no se ha pronunciado (Capítulo sobre asimilación suspendido).

En tales conceptos, creo, pues, que, dentro de lo justo y estrictamente legal, el presente caso debe resolverse.

No haciendo lugar al retiro del recurrente dentro de los térmi-

nos de la Ley 4707 que evidentemente no le comprende, sin perjuicio de tomar en cuenta el derecho a retiro que pueda tener, según los principios anteriores y no derogados por la citada ley en ese punto, dado el caso que así lo requiriese el mismo interesado. — Enero de 1906.

=====

La pensión de los herederos de un jubilado es la mitad de la jubilación de que aquel gozaba. El hecho de pagarse aquella de fondos municipales sin ser ese su origen, no menoscaba el derecho a la pensión que asiste a sus herederos.

La falta de descuento del 5 % al causante, tampoco destruye el derecho de sus sucesores a quienes siempre se les puede imponer dicho descuento.

### **Señoritas María e Inés Núñez, solicitando pensión.**

*Excmo. Señor:*

La jubilación de que gozaba don Julio Núñez, causante de los recurrentes, le correspondía de acuerdo con la Ley 2219 y su decreto reglamentario de 11 de setiembre de 1888, como lo expresa el decreto del P. E. de 28 de setiembre de 1892, que se registra en este expediente.

De tal jubilación conocida y gozada en vida por el Sr. Núñez, es de donde derivan su derecho los recurrentes a la pensión que gestionan, derecho que tiene por base el texto expreso de la primera parte del art. . . de la Ley 4349 que textualmente dice: “que el importe de la pensión (que la ley acuerda a los herederos del jubilado) será de la mitad del valor de la jubilación que se gozaba...”.

En tal concepto, la Junta de la Caja Nacional de Pensiones no ha podido menos, como lo ha hecho, de pronunciarse favorablemente a la pensión requerida por encuadrar dentro de la ley que ella está encargada de aplicar y cumplir.

La circunstancia de que la pensión del señor Núñez fuera pagada por la Municipalidad, no tiene mayor importancia en el caso, dado que la cláusula del citado decreto de 1892 que la acordó y que por ahí ordenaba su pago, fuera de ser de muy dudosa validez, por disponer de fondos que la ley tenía destinada a una autoridad especial (la Corporación Municipal), solo importó una disposición de

orden administrativo que en nada podía dañar el derecho acordado, y que menos puede dañar hoy el derecho que a mérito de la disposición citada, la Ley 4349, requieren los solicitantes y acuerda la Junta de la Caja Nacional en cumplimiento de la expresa ley.

El hecho de que no se descontara al jubilado, en vida, el 5 % que por la ley debe deducirse, no es bastante para desconocer la existencia de la jubilación acordada en 1892 y gozada desde entonces, tanto más cuanto que, como lo observa la misma Junta en su precedente resolución, cabe hacerse el descuento a los recurrentes, llegado el caso, en los términos del decreto reglamentario de la Ley 4349.

Estas consideraciones y las expuestas en la resolución de cuya aprobación se trata, me inducen a pedir su confirmación en todas sus partes. — Febrero 6 de 1906.

=====

Los procedimientos de extradición, tanto administrativos como judiciales, no constituyen juicio contra el reo, y nada impide por lo tanto, que se abra una nueva instancia, con nuevos antecedentes.

**Legación Oriental, solicita la extradición de Manuel Cordero.**

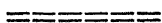
*Excmo. Señor:*

Apareciendo con los antecedentes acompañados todos los requisitos exigidos por el tratado vigente con la Nación reclamante, creo que V. E. debe dar curso al presente pedido del súbdito Manuel Cordero, formulado por intermedio del señor Representante de la República Oriental del Uruguay.

La circunstancia de que esa persona haya sido anteriormente reclamada por el mismo Gobierno, que su extradición fuera concedida según el expediente agregado, y que su libertad fuera también ordenada por V. E., dado que no fué recibido en oportunidad por el mismo requirente, no obsta al curso de este nuevo pedido, teniendo presente que los procedimientos de extradición, tanto administrativos como judiciales, no constituyen juicio contra el reo, ni se oponen a que se abra una nueva instancia con nuevos antecedentes, como sucede en el presente caso.



En consecuencia pues, creo que V. E. debe remitir estos antecedentes al Juez que corresponda a los efectos consiguientes. — Febrero 7 de 1906.



I. — Un impuesto establecido por una Municipalidad del Territorio, que grava la renta de los productos del suelo, en ocasión de su expendio dentro de la jurisdicción territorial, no es inconstitucional, por cuanto no implica gravar el tránsito interprovincial, ni la exportación al extranjero.

II. — Las Municipalidades de Territorio, sólo pueden establecer los impuestos que expresamente les autorizan a percibir las leyes orgánicas de Territorios Nacionales.

### **División de Inmigración, denuncia un impuesto que ha creado la Municipalidad de Apóstoles (Misiones).**

*Excmo. Señor:*

Según se desprende de la denuncia formulada por el Departamento de Inmigración y según resulta del informe expedido por la Gobernación de Misiones, el Congreso Municipal de Apóstoles, cobra un *derecho de guía*, a los productos que los colonos cosechan y transportan a Posadas, capital del mismo territorio.

Los damnificados por tal gravamen, sostienen su ilegalidad, por lo que, para resolver el caso ocurrente, es necesario en primer término tener presente, que no se trata de un impuesto al transporte de tales productos en ocasión de ser lanzados a la exportación o llevados fuera de los límites jurisdiccionales del territorio mismo.

Se trata de un impuesto interno, creado por aquella Municipalidad, en virtud del cual se gravan los productos del suelo, en ocasión de ser llevados al expendio comercial dentro del mismo territorio de Misiones.

De manera que la circulación interprovincial o internacional de los artículos mencionados, no parece trabada en forma alguna con el impuesto de que se trata, que no afectando sino el movimiento de esos artículos dentro del territorio de Misiones, no es violatorio a las garantías de los arts. 10, 11 y concordantes de la Constitución, ni la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia

Nacional que sólo se refieren al tránsito interprovincial o a la exportación al extranjero.

Pero si bien es cierto, que del punto de vista constitucional, este impuesto no tiene óbice que pueda oponerse a su existencia, no ocurre lo mismo del punto de vista de la Ley de Territorios 1532 y su reforma de setiembre 29 de 1890.

Con arreglo a aquella ley, la Municipalidad de Apóstoles, en ejercicio de las facultades del Inc. 4º del Art. 24, puede establecer impuestos puramente municipales.

Mas la atribución que la Municipalidad de Apóstoles tiene conferidas para establecer esos impuestos, sólo puede ejercitarse dentro de los límites y las restricciones que parecen desprenderse del Art. 3º de la ley de setiembre 29 de 1890, agregando al mencionado Art. 24 de la Ley 1532, cuando determina y expresa *cuáles son las rentas municipales*.

Ahora bien, no estando comprendido el impuesto de la referencia, entre las rentas municipales enumeradas por el citado Art. 3º de la ley de Reformas a la 1532, no puede ser aquel sostenido como rentas de las que la ley reconoce.

Desde que una ley del Congreso ha establecido cuáles son las rentas de las Municipalidades de Territorios, e implícitamente ha establecido los impuestos que las deben producir, no es dable a estas corporaciones con la ley misma, establecer impuestos y crear rentas que ella no ha creado, siendo de notar para mayor abundamiento que, en materia de impuestos, no pueden caber la sinterpretaciones por analogía, ni menos ampliativas.

Por estas consideraciones opino que V. E. debe de aclarar, que el impuesto denunciado, es violatorio de los citados preceptos de la ley de Territorios de setiembre 29 de 1890, que reformó la Ley 1532, y que por tanto no debe subsistir. — Febrero 8 de 1906.

=====

La Suprema Corte ha establecido como regla, que los funcionarios que gozan del sueldo establecido por la ley, no devengan honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo.

**Dr. Paunero, Defensor de Ausentes, sobre cobro de costas.**

*Excmo. Señor:*

Conforme con la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte en el caso de un juicio ejecutivo contra Marechal, seguido por el representante del fisco (sentencia de mayo 10 de 1901), es la nota del defensor oficial de ausentes que motiva este expediente, en cuanto da por establecido que a él no le corresponde cobrar las costas devengadas en asuntos en que ha intervenido en tal carácter, y en que la parte contraria ha sido condenada a su pago.

En tal caso, la Suprema Corte estableció como regla, que los funcionarios que gozan de sueldo establecido por ley, no devengan honorarios por los servicios que prestan en el desempeño de su cargo.

Por su parte, la Nación carece, en mi sentir, de acción para demandar y derecho a percibir esas costas, no sólo porque ella no es parte en el juicio, lo que excluye, en todo caso la acción fiscal que para su cobro se indica en la nota del defensor referido, sino también, porque el titular de ese derecho es el ausente quien será el único habilitado, por sí o por su representante, para demandar y motivar su pago.

El hecho de que la Nación costee la remuneración del representante del ausente, no implica el derecho correlativo de percibir las costas que en los juicios se devengan a manera de compensación de tal gasto. Fuera de que ninguna ley establece tal cosa, es evidente que el desembolso impuesto con tal motivo al Tesoro Nacional, nace de la obligación de sostener la administración de la Justicia en la que se comprende el amparo de representación y defensa de los ausentes, independientemente del resultado de los juicios que con tal motivo se susciten.

Respecto de la acción que pudiera atribuirse en el caso a la Dirección General de Escuelas, me refiero en un todo a lo expuesto en el informe del abogado de esa repartición que corre agregado.

Pienso pues, que V. E. debe abstenerse de cometer al Fiscal acción alguna en el sentido de demandar el pago de las costas que se indican. — Febrero 8 de 1906.

La ley 4235 autoriza al Poder Ejecutivo para acordar pensión, a los hijos de los agentes de Policía muertos en sus funciones y en ocasión de su servicio, y no haciendo la ley distinción entre hijos legítimos y naturales, no hay razón para que el Poder Ejecutivo la establezca, bastando se acredite la calidad de hijo.

**Policía de la Capital, pide sea comprendida en la ley de amparo, la hija del agente José Moreno, muerto en el desempeño de sus funciones.**

*Excmo. Señor:*

Ninguna distinción hace el art. 2 de la Ley 4235, cuanto autoriza al P. E. para acordar pensión a los hijos menores de los agentes de policía muertos en ejercicio de sus funciones y con ocasión de su servicio.

Así que no hay para que detenerse a constatar, si los hijos del agente muerto en tales condiciones, son legítimos o naturales, bastando saber que son sus hijos, por constancia que no admita duda.

En el caso sub-júdice está constatada tal circunstancia, una vez aclaradas las confusiones de nombre que determinaron las condiciones irregulares del estado del agente Moreno.

Creo, pues, que no hay inconveniente en que se acuerde la pensión que se solicita, en favor de la hija menor del agente de que se trata. — Febrero 8 de 1906.

=====

Los Procuradores Fiscales de los territorios Nacionales como los demás del fuero federal, pueden ser exonerados por el Poder Ejecutivo.

**Dr. Alfredo Ruiz Vargas, pide reconsideración del decreto que lo destituyó de Fiscal del Juzgado Letrado de Santa Cruz.**

*Excmo. Señor:*

El Decreto del P. E. de fecha 11 de enero de 1905, en cuya virtud fué exonerado del cargo de Fiscal del Juzgado Letrado de Santa Cruz, el recurrente Dr. Alfredo Ruiz Vargas, por sus fundamentos, como por las consideraciones de buena administración y

prestigio de la autoridad que lo dictó, es de aquellos que no pueden reconsiderarse sin daño evidente de esas autoridades y de las mismas instituciones que ampara y consolida. Por otra parte, la exoneración del recurrente, implica el ejercicio de las atribuciones que el art. 124 de la Ley 1893 confiere al Presidente de la República, las que se aplican, con respecto de los Fiscales de los Territorios Nacionales, lo mismo que con relación a los Tribunales de la Capital, por decreto de 16 de febrero de 1895.

La inhabilitación para desempeñar empleos nacionales, que el formulante entiende que le impone el decreto referido, no existe, siendo de notar que, a este respecto, resulta también improcedente su petición, dado que el decreto aludido no dice nada al respecto, ni hay sentencia que lo haya declarado en momento alguno.

Por estas breves consideraciones, opino que V. E. no debe hacer lugar a lo pedido, ordenando se esté a lo resuelto en el decreto del 1º de enero de 1905. — Febrero 8 de 1906.

=====

El pago de una deuda por la Nación al Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ilíquida sin plazo, y desconocida hasta ese momento, no lleva aparejada intereses.

No habiendo mora, no procede el pago de intereses. La naturaleza de la deuda y de las partes, no implica daños ni intereses mutuos por la demora en la liquidación. Sin entender que se paguen tales intereses, por razones de equidad procede la entrega por parte de la Nación de una suma al expresado Consejo, en resarcimiento del daño posible que la falta del pago puede haber causado, a la educación primaria de la Provincia de Buenos Aires.

**Convenio celebrado entre el Consejo Nacional de Educación y el Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, para el pago de intereses, en una deuda por subvenciones.**

*Excmo. Señor:*

Sentadas las bases para la liquidación de las sumas que por diversos conceptos han correspondido a los Consejos de Educación de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, así como para la liquidación del saldo que existía en favor del segundo y en contra del primero, se ha llegado a la cuenta que en autos corre, firmada

por los respectivos representantes, lo que arroja un saldo en favor del Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, de pesos 1.540.936,37 m/n.

Aprobado ese convenio por el Consejo General de Educación de la Nación, después de su estudio y examen respectivo, viene a ser sometido a la superior aprobación de V. E., y fuera de aprobarse uno y otro sin mayor dificultad, dado que todo se haya justificado en la mejor manera posible si no se hubiera levantado el inconveniente que suscitan las exigencias del señor Representante del Consejo Provincial, consistentes:

1º — En el cobro de intereses de las sumas que a ese Consejo se acreditan, en la expresada cuenta.

2º — En el pago que entiende que debe también hacerle la Nación, de subvenciones atrasadas.

Apartando lo relativo al pago del capital adeudado por la Nación, y dejando de lado lo relativo al cobro de las subvenciones atrasadas, por no presentar dificultad lo primero y por ser extraño lo segundo al convenio y cuenta de cuya aprobación se trata, se hace necesario examinar lo relativo al cobro de intereses que, presentándose como parte de la cuenta misma, detiene su pago a los efectos de su completa cancelación.

En mi concepto, el pago de esos intereses no está impuesto ni autorizado por la ley civil, ni por los principios y práctica administrativa.

Hasta el momento de cobrarse el mencionado convenio, la deuda que ha sido reconocida a favor del Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, era una deuda ilíquida y más aún desconocida, sin plazo determinado, ni desprendido de su propia naturaleza, dado que ni se estipuló al contraerse, ni resulta de las obligaciones o actos que le dan origen.

En tal concepto, faltando la cifra precisa de la deuda y la fecha cierta y legal para su cumplimiento, lo que supone la ley civil para considerar al deudor en mora, no puede decirse que la Nación haya caído en ella, dado el texto del art. . . del Cód. Civil, y teniendo presente que el requerimiento judicial o extrajudicial de parte del acreedor, era tan imposible como el mismo pago de lo adeudado, aun sin tal requerimiento, con anterioridad a la liquidación recién aceptada.

Si a esto se agregan las atendidas consideraciones que el señor abogado del Consejo General de Educación Nacional tiene hechas a este propósito, relativas a las obligaciones recíprocas creadas anteriormente y con motivo de la cuenta que hoy se liquida, a la naturaleza de los créditos divididos y que estaban confiados a la circunstancia de haber tomado el Consejo Nacional a su cargo el percibo de impuestos para dividirlos después; se hace tan evidente la improcedencia del cobro de los intereses que se intenta, que es ocioso todo comentario o desenvolvimiento mayor, para establecer que ellos no surgen ni de las convenciones celebradas, ni de la ley civil misma, que se dice aplicable al caso.

Pero tampoco sería acto de buena y correcta administración, reconocer el derecho de esos intereses aun con prescindencia de la ley civil.

Fuera de que nunca procede reconocer administrativamente y contra la Nación, derechos que no están basados en ley, y menos contrarios a ella, no es aceptable que en arreglo y liquidación de saldos entre oficinas públicas, en que no se presume ni negligencia culpable ni daño intencional, procedan a exigir o pagar intereses como si se tratase de particulares, que al arreglar sus respectivas diferencias se hicieran cargos por mutuos agravios o demoras, siendo que, en el caso sub-júdice, ni hay agravios determinados o convenidos, ni demoras imputables ni a uno ni a otro Consejo.

Estas consideraciones que me limito a apuntar aquí, son las que me inducen a pronunciarme en contra de lo alegado por el representante del Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo su injustificado derecho al cobro de los intereses que reclama.

Pero tal pronunciamiento no obsta a que piense que la Nación, apreciando las circunstancias que rodean el caso, y sin perjuicio de desconocer la obligación de pagar intereses que se le atribuyen, pueda y aún deba acordar al Consejo de Educación de la Provincia de Buenos Aires a título de simple equidad, una liberal compensación por el tiempo por el cual ha resultado ser deudora del expresado Consejo.

Para evitar toda confusión o falsa interpretación de ese acto, con el desconocimiento del pretendido derecho a los intereses gestionados, creo que V. E. debería ordenar la entrega de una suma de dinero,

prudencial y correlativa con el monto de la deuda y tiempo de su existencia, la que, se agregaría a la cuenta reconocida, como liberal devolución del posible, aunque indeterminado provecho, que la Nación haya podido realizar con el mantenimiento en su poder de las sumas líquidas, y como equitativo resarcimiento de la posible privación de esos derechos por el Consejo provincial, recién hoy acreedor de suma conocida y legalmente determinada.

De esta manera, sin entrar en reconocimientos improcedentes, legal y administrativamente se satisfacen, con la altura y liberalidad a que le Nación está obligada, las exigencias de equidad y justicia que en el caso imponen los respetados intereses de la educación común de la Provincia de Buenos Aires

Dentro de los conceptos expuestos y dentro de los límites establecidos por la resolución del Consejo General de Educación Nacional, creo que V. E. debe aprobar ésta, así como la cuenta correlativa, con la modificación que surge de la indicación que dejo hecha, si como lo expreso, lo encontrara V. E. procedente. — Febrero 9 de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3722, pág. 1303 de marzo 27 de 1908.*

=====

Las construcciones que intente una empresa particular sobre la ribera de un río navegable son perfectamente legítimas, cuando se llevan a cabo dentro de los límites legales de su propiedad, privada.

La disminución de los 35 metros de ribera, que la separan del río con arreglo a la ley, por razones del movimiento de las aguas u otras causas semejantes, no pueden afectarle por tratarse de terreno de ribera, que al Estado Nacional, Provincial o Municipal, corresponde defender y conservar.

**Sociedad "La Formosa", solicita autorización para efectuar un desvío de una línea férrea.**

*Excmo. Señor:*

La presente reclamación de la Sociedad "La Formosa" debe subordinarse a lo que ella misma solicitó, en 10 de junio de 1906, cuando dijo que pedía permiso: "para ocupar la parte de ella (la "ribera), señalada entre los puntos A y B, con la línea férrea que



“ construye, tal como el plano (que acompaña) lo demuestra”, así como a lo que se le acordó, el 31 de julio del mismo año por Decreto de la Gobernación respectiva que resolvió “conceder a la Sociedad “ La Formosa el permiso de ocupación que solicita de la parte de “ ribera determinada en su petición y con los objetos que expresa”.

Dentro de tales límites y en tales circunstancias, el Decreto de la Gobernación del Territorio de 26 de octubre de 1905 —que corre agregado a fs. 12— no ha podido tener efecto alguno contra la expresada sociedad, en el sentido de obligarla a retirar la *línea férrea* que sobre la ribera del río se le autorizó a construir.

Aunque ese decreto no sea explícito sobre este punto, el mismo Gobernador en su informe de fs. 25, conviene en que tal construcción no está afectada por el mencionado decreto.

Pero es el caso que este funcionario, con exceso de celo, ha mandado practicar una mensura para determinar la ribera en cuestión, y encontrándola modificada por efecto de las grandes crecientes habidas, se opone a las construcciones que, sin ser la *línea férrea* mencionada y sin haber estado antes dentro de esa zona, practica la Sociedad en terreno que, según afirma sin contradicción, está dentro de su título; construcciones que, por estar en lo que hoy reputa ribera el mencionado Gobernador, éste considera que están afectados por su decreto de 26 de octubre de 1905 en el sentido de que violan el art. 2639 del Cód. Civil, que él se considera obligado a defender.

Como lo observa el señor Procurador del Tesoro, esa ribera, o sean los *treinta y cinco* metros a que se refiere el citado art. 2639 del Cód. Civil, no puede ser movable, ni puede estar sujeta a las contingencias del tiempo y movimientos de las aguas del río o canal, ni menos estar subordinada a todo ello, la propiedad de los particulares que en el momento dado legítimamente adquirieron.

El mismo Cód. Civil sanciona esto, cuando en sus arts. 2643 y 2644, prevee el caso de avance de las aguas sobre la tierra firme, por caso fortuito o fuerza mayor (que es lo que parece haber sucedido ahora); en tal situación es el Estado o Provincia a quien corresponde volver las aguas a su estado anterior, mayormente en casos como el sub-júdice, en que, lo que han disminuído o llevado esas aguas, es justamente parte de la zona de propiedad pública, es decir dentro de los treinta y cinco metros a que se refiere el art. 2639 del Cód. Civil.

Esta disposición y sus concordantes, dejan ver que los efectos

de las aguas sobre tierra firme, cuando son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, y que para mayor abundamiento, no afectan sino la zona de ribera, no pueden gravitar sobre la propiedad privada de los ribereños, cercenando su derecho u obligándolos a recogerse o retirarse a medida que las aguas avancen.

Si las construcciones de “La Formosa”, y a que se refiere el Gobernador del territorio, están como parece dentro de su título de propiedad a la tierra, ni el avance de las aguas, ni la disminución de la ribera, ni los estudios que se dicen hechos por una empresa ferrocarrilera que por allá pasa, pueden obstar a que la mencionada Sociedad use lo que es suyo, en toda la amplitud de su derecho de propiedad legítimamente adquirido.

Respecto de los inconvenientes nacidos de la disminución de la ribera para la viabilidad, y aún para el comercio fluvial, antes de ir sobre la propiedad privada, ello debe ser subsanado por el Gobierno del territorio o de la Nación de que depende éste, de acuerdo con los citados arts. 2643 y 2644 del Cód. Civil, dado que a él le compete el mantenimiento de aquélla y sobre todo, la conservación de lo que es la propiedad pública, sometida a su administración y gobierno.

En tales conceptos pues, y trayendo el celo del mencionado funcionario a los límites que el art. 2644 pone al 2639 que entiende aplicar, creo que V. E. debe resolver este punto declarando, que el decreto de 26 de octubre de 1905 que motiva este reclamo, no tiene ni puede tener efecto respecto de las construcciones que la Sociedad reclamante tenga hechas o esté haciendo dentro de su título, todo ello sin perjuicio de establecer lo mismo y en respeto al permiso anteriormente dado, relativo a la *línea férrea* autorizada en la ribera. como ya lo tengo dicho. — Febrero 13 de 1906.

=====

Detenido provisoriamente un extranjero a pedido del ministro plenipotenciario de un país, y transcurrido el término en que con arreglo a la ley debió presentar el gobierno requirente su pedido de extradición en forma, corresponde hacer saber al juez de la causa el vencimiento de ese término, para los efectos que por derecho correspondan.

**James A. Boyd, detenido a pedido de la Legación de Inglaterra, pide ser puesto en libertad por haber cumplido los 45 días del art. 674 del Código de Procedimiento Penal, y no haber llegado los recaudos necesarios para su extradición.**

*Excmo. Señor:*

Siendo exacta y constando de los antecedentes, la referencia que el recurrente hace del día en que fué arrestado, y resultando también verdad, que ha transcurrido con exceso el término marcado por el art. 674 del Cód. de Procedimiento Penal sin haberse recibido su pedido de extradición en forma.

Considero que V. E. debe devolver estos antecedentes al señor Juez Federal de la Capital, a fin de que, tomando en cuenta el pedido formulado por el detenido y las circunstancias sentadas, proceda con arreglo a la ley.

Reputo que la remisión indicada debe hacerla V. E. sin más trámite, por tratarse de la privación de la libertad de una persona, cuya continuación hiere una garantía constitucional desde el momento que no está basada en la ley que la autorizó. — Febrero 15 de 1906.

=====

Acordada una jubilación de acuerdo con la ley 1909, no puede luego el jubilado pretender acogerse a los beneficios de una ley posterior como la 4349, pues importaría dar a ésta efecto retroactivo, para modificar una situación de retiro.

**Don Marcelino Blanco, pide su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

El recurrente don Marcelino Blanco, que goza de la jubilación que le fué acordada por Decreto de 3 de agosto de 1904 bajo el auspicio de la Ley 1909, en su carácter de preceptor de enseñanza pri-

maria, invoca el art. 35 de la Ley 4349 pretendiendo que se amplíe el monto de su jubilación, acumulándosele el sueldo que tenía como director de una Escuela Militar, puesto que afirma haberlo desempeñado durante 13 años conjuntamente con el de preceptor.

Desde luego, siendo improcedente la acumulación de sueldos según la Ley 1909, en cuyos preceptos se amparó el postulante, se daría efecto retroactivo a la Ley 4349, si se aplicase esta última para modificar situaciones de retiro creadas por la primera.

El postulante, al encontrarse comprendido en la Ley 4349, de acuerdo con el inc. 2º del art. 2º y en armonía con el art. 34 de la misma, es tan sólo al efecto de que perciba el importe de jubilación, de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones.

La acumulación de sueldos que prohíbe el art. 35, como principio general, si bien está permitida como excepción por la segunda cláusula de este mismo precepto, cuando se trata de empleos del profesorado y aún aceptando que esta excepción se extienda hasta los empleos de la instrucción primaria, ella se refiere únicamente a los casos de jubilación adquiridos con sujeción a la misma ley, que requiere contar los años de servicio *uno por uno* y no puede extenderse, por lo tanto, a los casos ya legislados y definitivamente concluidos por la Ley 1909.

Por estas breves consideraciones y las concordantes de la resolución recurrida de la H. Junta Administrativa de la Caja Nacional de Jubilaciones, de fecha 30 de diciembre de 1905, en cuanto confirmarían los principios establecidos en este dictamen, estimo que V. E. debería aprobarla. — Febrero 18 de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 2737, pág. 210 de abril 17 de 1908.*

=====

La pesca en río navegable que cruza un territorio de provincia, está sujeta a la jurisdicción provincial, sin perjuicio de la que compete a la Nación, a los efectos de vigilar la libre navegación y comercio marítimo en ese río.

**Victoriano Bellido, pide concesión para extraer la almeja,  
en las márgenes del Quequén.**

*Excmo. Señor:*

Partiendo de la base de que el río Quequén en la parte a que el recurrente se refiere, es un río navegable, la pesca en sus aguas es de público aprovechamiento como lo declara la ley.

En este concepto general creo que no puede ni ha podido prohibirse al recurrente, la pesca de almejas a que hace referencia.

Pero tratándose de un río navegable y que corre en territorio de una provincia, el ejercicio del derecho de pesca está subordinado a las siguientes reglamentaciones:

1º — De parte de la autoridad nacional en cuanto se trata de mantener esa pesca dentro de los límites que sean necesarios, para que no obstaculice la navegación y comercio marítimo.

En este sentido la autoridad nacional, es decir, en el caso la subprefectura local, no ha podido prohibir la pesca del recurrente por más que haya podido estatuir lo necesario, en salvaguarda de la libre navegación y comercio mencionados.

2º — De la autoridad provincial que, dueña de esa riqueza, puede reglamentarla en su *explotación*, sin desconocer el derecho general mencionado de la pesca libre en aguas de uso público.

Así lo ha entendido siempre el Congreso, que salvo los casos de concesiones determinadas de pesquerías en mares jurisdiccionales o de lobos en los mares del Sud, se ha abstenido de reglamentar la pesca en ríos navegables que cruzan territorios de provincias, y legislando como legislatura local, lo ha hecho respecto de los Territorios Nacionales, al poner en vigencia por la Ley 3088 el Cód. Penal vigente para esos territorios, según puede verse en sus artículos, del 18 al 21 inclusive.

En tales conceptos pues, que son bien conocidos al respecto, creo que V. E. debe resolver este asunto en concordancia con lo que dejo

dicho, y sin perjuicio de que la Provincia respectiva estatuya, lo que a su mencionada jurisdicción corresponda. — Febrero 19 de 1906.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3851, pág. 1101 de septiembre 7 de 1907.*

=====

En terrenos de propiedad particular corresponde al propietario la explotación de las sustancias mineras que en él se encuentren; sólo en caso de que éste no lo hiciera, puede el Estado conceder permiso a tal efecto al que primero lo solicite. En terreno fiscal puede concederse dicho permiso, al primer solicitante dentro de las prescripciones del Código de Minas.

**Pelagatti y Temi, solicitan permiso de cateo de minerales  
en el Neuquén.**

*Excmo. Señor:*

Tratándose del permiso de cateo para reconocer la existencia de alumbre, sustancia comprendida indudablemente en la 2ª categoría de las minas, a que se refiere el inc. 6º del art. 4º del Cód. de Minería, su aprovechamiento corresponde en primer término al dueño del suelo, cuando se trate de terrenos de propiedad particular; pudiendo la autoridad dar preferencia al primer solicitante “simepre que el dueño, requerido al efecto, no los explote dentro del término de cien días, o no declare en el de veinte, su voluntad de explotarlos”, con arreglo al Art. 68 del mismo Código.

Pero como la solicitud de los postulantes se refiere a terrenos de propiedad fiscal, y conforme al art. 9, el “Estado no puede explotar ni disponer de las minas sino en los casos expresados en la ley minera”; resulta que el Estado se encuentra habilitado para conceder el aprovechamiento del alumbre a los postulantes, desde que, si tiene este derecho cuando se trata de propiedad particular, con mayor razón lo tendría con respecto a tierras de dominio fiscal, sobre las que el Gobierno ejerce su propia jurisdicción y dominio.

Los recurrentes, por otra parte, usan el derecho a solicitar exploración o cateo de minas, de acuerdo con el art. 23 del Código que

pide la materia y, su solicitud, en cuanto a la unidad de medida para el permiso que pretenden se amolda al art. 27, de manera que debería V. E. concederlo, con las limitaciones impuestas en los arts. 23 y concordantes del mismo Código. — Febrero de 1906.

=====

La interdicción que el Código Penal impone a los presidiarios, es de aplicación restrictiva, y sólo comprende las incapacidades que el mismo establece, entre las que no se halla, la de que no se notifique al penado las acciones civiles que se entablen contra él, y menos la de defenderse de la manera que corresponda.

**Juez de Paz en la Sección 17, pide se le haga una notificación al condenado en la Penitenciaría Nacional, Edmundo Montenegro.**

*Excmo. Señor:*

Según informa la Dirección de la Penitenciaría Nacional, Edmundo Rufino Montenegro, penado N<sup>o</sup> 326, se encuentra cumpliendo la condena de seis años de penitenciaría con los accesorios que esta pena lleva consigo, en virtud de sentencia pronunciada por el Señor Juez del Crimen de la Capital, por el delito de matrimonio ilegal.

Con arreglo al art. 67 del Cód. Penal, los condenados a penitenciaría están sometidos, como los presidiarios, a la interdicción, fuera de la inhabilitación y vigilancia de la policía y, con respecto a la pena de presidio, el inc. 2<sup>o</sup> del art. 63 de nuestro cuerpo de leyes, estatuye que “la interdicción civil priva, mientras se sufre la pena, de la patria potestad, de la administración de los bienes, y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos”.

Este precepto de la ley penal, que ha fijado determinadamente los efectos de la interdicción civil que pesa sobre tales condenados, limitándoles tan sólo en cuanto se refiere a la patria potestad, a la administración de los bienes y al derecho de disponer de éstos entre vivos; no se opone a que el penado tenga conocimiento por notificación verificada por autoridad competente, de las acciones civiles que se entablen en su contra, durante el tiempo de la condena.

La interdicción aceptada por nuestra ley penal y recogida del Código Español (art. 41) tiene los límites precisos que la citada disposición de nuestro Código (art. 69) determina, y por ende, no

puede ni debe dársele mayor extensión que la de su texto, el que no comprende, ni puede comprender, la incapacidad en el penado para conocer y ser notificado de acciones civiles entabladas contra él, ni menos para defenderse o estar en juicio por representante legalmente nombrado o constituido.

Y ese texto es de interpretación restrictiva, no sólo por tratarse de la inhabilidad legal para ciertos actos de la vida civil con que la ley penal hiere a las personas que castiga, sino porque su ampliación o aplicación extensiva y por analogía, chocaría con la precisión legal de la pena misma, y atacaría la garantía constitucional que consigna el art. 18 de la Carta Fundamental cuando declara la inviolabilidad en juicio de las personas y sus derechos.

En tales conceptos pues, reputo que no encontrándose la notificación de que se trata en los términos de las disposiciones citadas de nuestra ley penal, y resultando extraña a ellos, según el comentario hecho, creo que V. E. puede y debe autorizar la notificación que se requiere y a los efectos consiguientes. — Febrero de 1906.

=====

Un Teniente Coronel, asimilado a general de brigada por ser miembro del Supremo Tribunal Militar, tiene derecho al retiro en su asimilación, dado que conserva su estado militar adquirido y no perdido en circunstancia alguna.

**Don Agustín Alvarez, vocal del Consejo Supremo de Guerra,  
solicita su retiro.**

*Excmo. Señor:*

El retiro que requiere el recurrente como vocal del Consejo Supremo de Guerra y Marina, se gestiona bajo el amparo de la Ley 4707 en la parte que a *retiros* se refiere, en las disposiciones que directamente legislan sobre ellos y en las que le son correlativas.

En tal concepto, se hace necesario referir la petición y caso del recurrente a esa ley, con prescindencia de toda otra, así como de cualquier consideración que pueda desviar de su texto y de su espíritu.

Por razones de índole constitucional derivadas lógicamente del inc. 23 del art. 67 e incs. 15 y 16 del art. 86 de la Carta Fundamental, de cuya correlación fácilmente se infiere, que si el Congreso crea el



ejército, el P. E. se limita a organizarle y mandarlo; he sostenido antes, como lo sostengo ahora, que la simulación para dar derecho al retiro, supone el estado militar del retirado, al que es inherente aquel beneficio; y ese estado, a su vez, sólo puede venir según lo dicho, del texto expreso de la ley 4707, arts. 15, 16 y 17 del Tít. II.

Examinando el caso del recurrente de acuerdo con estas ideas, dado que esta ley no ha hecho las designaciones especiales que deja expresar al final del citado art. 16, es innegable que desde el año 1896 en que ingresó al ejército, como oficial de las armas combatientes, el recurrente adquirió el estado militar a que esa ley se refiere, conservándolo hasta la fecha, dado que no han concurrido ninguna de las circunstancias que según el art. 19 de la misma ley y título, hacen perder aquel estado.

Así pues, cuando el doctor Alvarez ingresó al Consejo Superior de Guerra tenía su grado de Teniente Coronel, y con prescindencia de su situación de revista, entonces como ahora, tenía y tiene su estado militar dado que, el puesto de vocal que desempeña, siendo de naturaleza militar está muy lejos de oponerse a la conservación de aquel que es inherente a su grado.

En tal situación la asimilación de que el recurrente goza como general de brigada, según el art. 20 de la ley de Justicia Militar y Decreto correlativo del P. E., le confiere derecho al retiro que pretende, pues al par que aquella le viene de la ley, tiene por base su estado militar, que a su vez constituye la situación legal necesaria a su retención y que no ha perdido hasta la fecha.

Estas consideraciones son las que, unidas a lo establecido por el señor Auditor de Guerra en este documento, me hacen adherir a sus manifestadas opiniones, en el sentido favorable al recurrente. — Febrero de 1906.

=====

No tiene competencia el Poder Ejecutivo para resolver las cuestiones que se susciten entre los Gobernadores de Provincias y las empresas de ferrocarril, sobre derechos y obligaciones nacidas de sus relaciones. Sólo al tribunal judicial competente, incumbe el conocimiento del caso.

**Ferrocarril Central Argentino, reclama de un decreto del Gobierno de Córdoba en que le nombra un inspector, para inspeccionar los ramales de Río Segundo a Alta Gracia, y de Pilar a Villa del Rosario.**

*Excmo. Señor:*

No cabe dentro de la administración, ni cae bajo la competencia de V. E. la solución del reclamo que por la empresa recurrente se formula, con motivo de un decreto del Gobierno local de la Provincia de Córdoba, estableciendo en ella una inspección de ese carácter.

Fuera de que el mencionado decreto, que corre agregado en copia, se refiere exclusivamente al ejercicio de *facultades relativas a las sociedades anónimas*, que el Gobierno decretante deriva de la aplicación del Cód. de Comercio, es de observar que, en lo que estatuye, no ataca ni la jurisdicción de la Nación en la línea de que se trata, dentro de lo establecido por la ley de ferrocarriles, ni la libre circulación de los trenes dentro de las condiciones y franquicias de la misma.

Y si el acto del Gobierno de Córdoba, puede importar un avance sobre los derechos, privilegios, o exenciones de la Empresa, si supone como se insinúa un ataque a las leyes de la Nación que la coloca en determinadas condiciones, no es V. E. a quien corresponde juzgar de ello, sino, sino a las autoridades judiciales respectivas quienes deben derimir la cuestión, previa presentación por el que se considere dañado, como si se tratara de una acción ordinaria entre las partes, que lo serían la Empresa y la Provincia de Córdoba.

En ningún caso puede V. E. entrar a juzgar administrativamente los actos de un Gobierno de Provincia que, como el presente, no resulta atacar directamente las relaciones de V. E. con los ferrocarriles, ni resolver las cuestiones que se levanten entre esos gobiernos y las empresas, sobre derechos y obligaciones nacidos exclusivamente a prima-facie, de su propio contacto y relaciones.

En tales conceptos creo que V. E. debe ordenar que la Empresa ocurra donde corresponde, si así entiende conveniente. — Febrero de 1906.

=====

Las órdenes religiosas no autorizadas por el Congreso en el territorio de la República (Inc. 2, Art. 67 de la Constitución), no tienen personería legal para peticionar a las autoridades, ni pueden adquirir derechos o contraer obligaciones.

### **Padres Lazaristas, solicitan exoneración de Contribución Directa.**

*Excmo. Señor:*

Se ha comprobado que el extenso edificio que los “Padres Lazaristas” poseen con frente a las calles Cochabamba 1467 y San José sin número, interiormente comunicado con el que se encuentra ubicado en la esquina Lasca 1264 y Sahupallos, funciona una escuela en la cual reciben insrtucción gratuita cuatrocientos niños pobres.

Con arreglo al art. 4º de la ley de Contribución Territorial, quedan exceptuados del pago de este impuesto “las escuelas públicas y las particulares donde se enseña gratuitamente y en idioma nacional por lo menos a treinta niños pobres”.

Igual excepción expresa dicha ley, con respecto a los templos destinados a todo culto religioso.

De manera que, con sujeción a estos preceptos legales, considero del todo procedente que sean exceptuados dichos edificios del impuesto mencionado así como el que los “Padres Lazaristas” tienen destinado al templo.

Pues la ley citada, en armonía con lo que dispone el art. 63 de la ley sobre Educación Común 1420, al consignar tal beneficio en favor de las escuelas que educan determinado número de niños sin recursos, y al hacerlo extensivo a los templos de todos los cultos, se amolda a la letra y al espíritu de los artículos 14 y 20 de la Constitución Nacional, que consagran, respectivamente, la libertad de enseñar y aprender, así como la libertad de cultos, que se sienten así estimulados, con la exoneración del impuesto de que se trata a los edificios dedicados a practicarlos.

Pero no ocurre igual situación de derecho, con respecto a la

finca que comprende al convento de los “Padres Lazaristas” y a la casa habitación de los mismos, por cuanto, la excepción del pago del impuesto que pretenden los recurrentes, no está autorizado por el inciso b del citado art. 4º de la ley que rige la materia, desde que, al referirse ésta a los *conventos, las casas de caridad y beneficencia*, comprende lógicamente instituciones que, bajo tales denominaciones, tengan existencia legal dentro del territorio de la Nación.

No consta en el expediente, ni conozco ley alguna, que haya autorizado el funcionamiento de la Congregación o Convento denominado de “Padres Lazaristas”, de acuerdo con el precepto que consagra el inc. 20 del art. 67 de la Carta Fundamental del Estado.

Y, no habiendo *ejercitado* el Honorable Congreso de la Nación, en cuanto respecta a los “Padres Lazaristas”, la atribución que le ha conferido aquella cláusula constitucional, tal congregación carece de personería legal para solicitar las ventajas de la ley, creadas en bien de órdenes religiosas cuya radicación en el país sea permitida por el Poder Legislativo de la Nación, en las condiciones que la Constitución lo prescribe.

La facultad de “peticionar a las autoridades”, como la de “usar y disponer de su propiedad” y los demás derechos primordiales que el citado art. 14 de la Carta Fundamental reconoce, como inherentes a todos los habitantes del país, no pueden ser ejercitados por personas que no tienen existencia constitucional en él, ni son por ende, antes susceptibles de adquirir y practicar tales derechos y sus correlativas obligaciones.

Constitucional y legalmente la congregación de “Padres Lazaristas” no está en la República, ni es persona capaz de los derechos y garantías que ella sanciona.

Y así, cuando el Inc. 20 del art. 67 de la Constitución, que por su art. 37 es ley suprema en todo el territorio sometido a la soberanía argentina, ha establecido, entre las atribuciones propias del H. Congreso, la de admitir en la Nación otras órdenes religiosas a más de las existentes en la época en que fué sancionada aquella, indudablemente que ha delegado en tan alto poder, no sólo el criterio de apreciar las conveniencias que el pueblo tenga con la admisión de dichas congregaciones, sino también la oportunidad con que tales congregaciones religiosas puedan incorporarse al país, anunciando la condición legal de personas.

Y si la congregación titulada de “Padres Lazaristas”, no ha sido autorizada por el Congreso, ni puede ser reconocida como congregación religiosa con calidad de persona jurídica, por otro poder que el Legislativo de la Nación, con sujeción a los citados mandatos de la Constitución, puede afirmarse que esa orden no existe en la República y, por lo tanto, V. E. no debería hacer lugar a las ventajosas solicitadas por la misma.

Creo oportuno dejar constancia de que, el mismo Congreso Nacional, ha establecido jurisprudencia parlamentaria sobre la extraordinaria medida con que ha ejercitado la delicada atribución que le confiere, respecto a las órdenes religiosas, el inc. 20 del art. 67 de la Carta Fundamental. El senado de la Nación, con motivo de una solicitud presentada por la Comisión encargada de la reconstrucción del Colegio del Salvador, incendiado en febrero de 1875, pidiendo la confirmación de tan elevado cuerpo legislativo para llevar a efecto la obra, resolvió en la memorable sesión del 18 de mayo de 1876, no hacer lugar por las fundamentales razones que precisaron en aquel debate.

Sarmiento, sosteniendo el rechazo de la petición e impugnando la moción de aplazamiento formulada por el senador Gerónimo Cortés, decía en aquella ocasión: “El art. 20 dice, entre las facultades o “poderes de las Cámaras: admitir en el territorio de la Nación a “las órdenes religiosas a más de las existentes. La Iglesia del Salvador, señor Presidente, no existe en Buenos Aires, porque no “existe legalmente; pertenece a los jesuitas, los jesuitas no son una “orden admitida en el país y conceder nosotros favores a los jesuitas es darles el carácter legal que la Constitución les niega, que “nuestras leyes les han negado; están bajo una condición legal, “confiscados sus bienes, expulsados del país por leyes que hemos heredado y que constituyen esta sanción.”

“Si, pues, esta ley hubiera de corregirse o abolirse, ha de ser “por medio de una acción clara y franca, pero no por esos medios “indirectos oblicuos, de obtener una especie de sanción moral a “nombre de reparar unas ruinas.”

Y anticipándose Sarmiento a la trascendental importancia, que el asunto de la admisión de las órdenes religiosas indudablemente tiene actualmente para el desarrollo positivo del país, agregaba: “Sólo añadiré una cosa, y es que hay una lucha muy grande en todo

“ el mundo sobre esta cuestión y que, en medio de tantas que nosotros  
“ tenemos, ya las de partidos, ya las de crisis, ya las inancieras, no  
“ creemos voluntariamente una nueva. Esta cuestión nos ha de ve-  
“ nir, no a nosotros sino a nuestros hijos; dejémoslos a ellos que las  
“ resuelvan a su tiempo; entonces se ha de resolver, señor, de con-  
“ formidad con las ideas triunfantes de todos los pueblos más civi-  
“ lizados del mundo”.

El Honorable Senado que por mayoría sancionó el rechazo del aplazamiento, resolviendo *no hacer lugar* a lo solicitado a favor de una corporación que consideraba como no existente en el país, por falta de autorización legal, ha marcado pues, la pauta con que los poderes públicos deben tomar en consideración peticiones como las de que se trata en el caso ocurrente.

El convento y casa habitación de la congregación denominada de “Padres Lazaristas”, que no existe como persona legalmente susceptible de peticiones a las autoridades, ni de adquirir derechos ni obligaciones, ya sea ante la Constitución o ante el Cód. Civil; no debe ser exonerada del pago del impuesto territorial, por las consideraciones expuestas, sin perjuicio de que los recurrentes acudan ante el Honorable Congreso en demanda de lo que entiendan conveniente. — Marzo 10 de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3720, pág. 1259 de marzo 24 de 1906.*

=====

El Poder Ejecutivo no puede ni debe, sin autorización legislativa, prorrogar en favor de empresas concesionarias, los plazos determinados en sus respectivas leyes de concesión.

**The Metropolitan Railway of Buenos Aires, pide reconsideración de un decreto que declara caduca la concesión.**

*Excmo. Señor:*

La sociedad anónima “The Metropolitan Railway of Buenos Aires Limited”, al presentarse invocando el carácter de cesionaria de la concesión otorgada por Ley 3903, de fecha enero 8 de 1900, a don Carlos Bright, viene pretendiendo la reconsideración de los decretos de fecha 22 de junio de 1903 y de junio 15 de 1905, el pri-

mero de los cuales declaró sin valor legal la transferencia, de tal empresa, verificada por don Carlos Brighth en favor de la sociedad recurrente y, el último, en cuyo mérito el P. E. declaró caduca dicha concesión.

Acordado, por la referida Ley 3903, en favor de don Carlos Brighth el derecho a construir y explotar una vía férrea subterránea de tracción eléctrica, en la Capital Federal, bajo las expresas condiciones sentadas en la misma ley, el P. E. de acuerdo con el art. 13, aprobó la transferencia hecha por el concesionario con motivo de la venta judicial de sus bienes en su declaración de quiebra, en favor de don Alejandro Snatoli, por Decreto de 22 de junio de 1903, en el cual, por otra parte, se desconoció todo derecho a la Metropolitan, que había comprado dicha concesión al representante de don Carlos Bright, bajo la especial condición de que tal compra fuera ratificada por parte del vendedor, como del Gobierno, ratificación que no tuvo lugar.

De manera que, la revocatoria de tal Decreto no se apoya en razón alguna como para resultar procedente, puesto que consta en tal expediente, en forma clara e indudable, que la Sociedad "The Metropolitan Railway of Buenos Aires Limited", adquirió la concesión Brighth mediante subordinación al hecho de ser ratificada tal adquisición por el concesionario vendedor, como por el Gobierno.

No habiéndose aprobado la ratificación, lo que importaba en realidad cumplir, una cláusula resolutoria del contrato, a tenor del art. 553 y concordantes del Cód. Civil, quedó disuelto el convenio y por lo tanto, sin personería la sociedad recurrente para promover las presentes gestiones.

Posteriormente el Poder Ejecutivo, por Decreto de 29 de octubre de 1903, en ejercicio de las mismas facultades que le confiere el citado art. 13 de la Ley-Contrato 3903, aprobó la transferencia de la concesión otorgada por Snatoli a los señores B. S. García y Cía.

Presentados los planos al Gobierno, a tenor del art. 14, fueron aprobados por Decreto de 7 de diciembre de 1903. Pero, a pedido de los señores B. S. García y Cía., sucesores del concesionario Carlos Bright, el Poder Ejecutivo prorrogó, por dos veces consecutivas, el plazo de doce meses de la fecha del contrato, que marca el art. 4º de la concesión, para que el concesionario presentase a la aprobación del Gobierno, planos y pliegos de condiciones de la obra.

Es de advertir que, habiéndose firmado el contrato de concesión el *22 de mayo de 1901*, según consta en autos, los planos, estudios y pliego de condiciones que prescribe el 2º inciso del art. 4º de la Ley-Contrato 3903, debían presentarse dentro de los doce meses a contar de aquella fecha, o sea antes del 22 de mayo de 1902, siendo ilegal en realidad las prórrogas acordadas por el Poder Ejecutivo sin autorización legal. Vencido el plazo del 12 de febrero de 1904, señalado por decreto del 24 de diciembre de 1903, para que los sucesores del concesionario los señores B. S. García y Cía., cumplieran tan fundamental requisito, se prorrogó hasta el 15 de junio sin ninguna autorización legislativa y, por último, se prorrogó hasta el 12 de agosto de 1904 sin voluntad legislativa tampoco.

En tal estado de cosas y como los planos y modificaciones propuestas con posterioridad al plazo vencido del 12 de febrero de 1904, no eran aceptables por venir en contra de las bases establecidas en la Ley 3903, como lo demuestra el informe de la comisión de Vías y Comunicaciones de fs. 110: procedía, con sujeción al Decreto de 11 de junio de 1903, considerar aprobados en definitiva los planos primitivos, que lo fueran por Decreto de 7 de diciembre de 1904 y, en consecuencia, contar los términos del art. 4º de aquella Ley-Contrato, desde la fecha del vencimiento del primer plazo, o sea desde el *12 de febrero de 1903*.

No se han empezado los trabajos dentro de los *seis meses* desde el 12 de febrero de 1904, en que se aprobaron los planos, como lo manda el inc. 3º del citado art. 4º del contrato de concesión.

Y bien, pues, no habiéndose empezado los trabajos dentro de los términos del contrato, el art. 6º del mismo establece, como sanción categórica, la caducidad de la concesión con pérdida del depósito de garantía.

El Congreso, en la Ley-Contrato 3903, así lo ha establecido y no conozco ley posterior que modifique tales preceptos.

La actitud del P. E., al declarar la caducidad de la concesión, en el Decreto de 15 de junio de 1905, se ajusta a los términos de la ley de referencia y a los hechos producidos y que constan en el expediente.

La insistencia de la sociedad recurrente de que se constituya tribunal-arbitral para resolver si la “Metropolitan de Buenos Aires Limitada”, tiene o no personería en la concesión de que se trata,



la conceptúa improcedente en absoluto, porque el arbitraje a que se refiere el art. 19 de la Ley-Concesión 3903, sólo procede entre la parte *concesionaria* y el P. E. y, como dejo expuesto, la sociedad recurrente *no es parte en la concesión* y nada tiene que hacer en ella.

En cuanto al proyecto que se presenta, proponiendo, al Gobierno la misma recurrente, opino que V. E. no puede tomarlo en consideración a los efectos de la Ley 3903, puesto que, sólo al Congreso le es dable otorgar otra concesión análoga a la que está caduca por mandato del mismo Poder Legislativo.

Por lo expuesto: opino que V. E. no debe hacer lugar a lo solicitado debiendo mantener, en todas sus partes, los Decretos de 22 de junio de 1903 y de 15 de junio de 1905. — Marzo 20 de 1906.

=====

Los 20 kilómetros de la zona muerta o de privilegio, concedidos a la sociedad Puerto del Rosario, deben contarse desde el centro del puerto de acuerdo con el plano que se tuvo en vista y con el pliego de condiciones al licitar la obra.

### **Empresa del Puerto del Rosario, sobre zona de privilegio en el puerto.**

*Excmo. Señor:*

Sin más antecedentes que los que tuve a la vista cuando di la opinión que encierra mi anterior dictamen, encontré aceptable lo que sostiene la Empresa del puerto del Rosario, es decir que, la zona muerta o exclusiva de los 20 kilómetros aguas arriba y aguas abajo de los arroyos Ludueña y Saladillo, debieran contarse desde la desembocadura respectiva en el río Paraná, vale decir, tomando el puerto como un conjunto y arrancando la medición de sus extremos en los rumbos expresados.

Era indudablemente lo que se desprendía entonces, dado que no se mostraba circunstancia ni consideración que pudiera modificar tal concepto, que aparecía ser el que se tuvo presente al contratar la cláusula referente a ese punto.

Pero en presencia ahora del plano que se ha adjuntado, el que tiene la importancia de ser, el que sirvió para licitar y contratar, según el pliego de condiciones, teniendo en cuenta los antecedentes y

documentos recordados por el señor Inspector del puerto del Rosario los que he tenido ocasión de verificar y examinar detalladamente, así como las atendidas consideraciones que presenta fundadas en aquéllos, y que me limito a dar por reproducidas, para no incurrir en repeticiones ociosas.

Creo que debo modificar, como modifiqué mi anterior opinión, reputando que los 20 kilómetros de la zona muerta o de privilegio de que se trata, debe contarse desde el centro del puerto o sea el centro del plano adjunto, que resulta ser el punto que se tuvo presente en el pliego de condiciones en la licitación y contrato, y por ende en la aplicación de la Ley 3885.

Cualesquiera que sean las dudas que hoy presentan la interpretación de aquel contrato con la Empresa, respecto de este punto por obscuridad o imprevisión de su texto, hay que aplicar la regla que los contratos deben siempre interpretarse de acuerdo con lo que las partes entendieron o tuvieron la intención de contratar, y esa intención se desprende claramente, como lo demuestra la Inspección de los antecedentes y documentos que menciona (la ley, pliego de condiciones, licitación y planos), y que siendo la base de la negociación, fué a su respecto que se ajustó el consentimiento del contrato que se formuló y de que hoy se trata.

Adoptando pues las conclusiones de la Inspección respecto de este punto, creo, como ya lo dije, que debe procederse a la designación sobre el terreno de la zona en cuestión, 20 kilómetros aguas arriba y 20 aguas abajo del centro del puerto del Rosario, determinado en el plano agregado, y evacuada luego la consulta que hacen los señores Freiz y Cía., cuya solución resultará de la operación técnica que se practique de acuerdo con lo que queda establecido. — Marzo de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3727, pág. 4 de abril 2 de 1906.*

=====

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe remitir a los señores ministros extranjeros a la legislación común, cuando consultan puntos de derecho, sin interpretar dichas disposiciones, por carecer de facultades para ello.

**Ministro de la Gran Bretaña, pide legislación sobre averías  
vigente en la República.**

*Excmo. Señor:*

Las prescripciones legales cuyo conocimiento desea el Sr. Ministro de la Gran Bretaña para satisfacer a su vez los datos que le han sido requeridos por el Secretario principal de Estado de su Gobierno, para transmitirlos al Departamento de Comercio del mismo, se hallan comprendidos en los títulos XI y XIV del libro III del Cód. de Comercio vigente en la República.

A esa ley y a los determinados pactos y sus correlativos, es que debe ser remitido al Sr. Ministro oficiante, dado que a V. E. no corresponde la interpretación de esas disposiciones, la que sería necesaria para contestar a las preguntas por él formuladas en los casos especiales a que se refiere.

Creo que V. E. debe resolver en el sentido indicado. — Abril 1º de 1906.

=====

Toda concesión de obra pública, implica una delegación de facultades por parte del Estado, y la constitución de un monopolio a favor del concesionario. Corresponde, declarar la caducidad de la concesión, si la obra pública no se realiza dentro del término fijado por la ley de concesión y el respectivo contrato. El Poder Ejecutivo está obligado a oponer la prescripción en defensa de los intereses públicos, para evitar que un contrato celebrado en época anterior, pueda llevarse a la justicia, en el presente, en condiciones forzosas para el Estado.

**Compañía Ferrocarril Central Sud Americano, sobre reconsideración  
de un decreto que declara caduca su concesión.**

*Excmo. Señor:*

Llama la atención en primer lugar en este asunto, que le hayan consentido estas nuevas gestiones a la empresa recurrente, por las Oficinas del M. de Obras Públicas, con prescindencia y olvido del

texto expreso del decreto de V. E. de Junio 30 de 1900, que declaró caducas todas las concesiones cuyos propietarios no hubiesen cumplido dentro del término, cualquiera de las obligaciones impuestas por las leyes que les dieron origen.

En la fecha de ese decreto habían ya vencido con exceso, los cinco años dentro de los cuales debió terminar la obra concedida (art. 8 de la Ley 2095 y contratos correlativos), exceso cuyo enorme aumento actual no puede ni ha podido dejar el más mínimo asomo de duda de que se está dentro del expresado decreto.

Ahora bien, aplicándoles el art. 1º, la caducidad está fuera de discusión, tanto más si se tiene presente que tanto las unas como las otras se hallan en las circunstancias a que se refiere los considerandos respectivos; y aplicándoles los arts. 2 y 3 del mismo decreto, sin necesidad de declaración previa de parte de V. E., y dando por sentada esa caducidad, las oficinas del Ministerio de Obras Públicas han debido proceder a archivar los antecedentes con su respectiva constancia (art. 2), absteniéndose, en consecuencia, de dar curso a estas gestiones que, a despecho de lo expresamente ordenado por V. E. (art. 3) traen a mi dictamen.

-Bastan estas observaciones para dejar sentado, en primer término, que con arreglo al decreto citado de 30 de Junio de 1900, que no ha sido reconsiderado, ni derogado, ni menos observado en oportunidad por los interesados, la presente concesión está caduca, siendo improcedente la tramitación que se ha impreso al expediente respectivo.

II. — Pero ya que se le ha impreso el trámite observado, ya que el expediente ha llegado a mi dictamen, requerido por V. E., creo necesario demostrar, en defensa de los intereses públicos afectados en el caso, que la concesión de que se trata, no sólo está caduca de acuerdo con los considerandos y prescripciones del decreto citado, sino que también lo está, en particular, bajo su doble aspecto de concesión de una obra pública y de contrato privado con el concesionario para su ejecución.

La concesión de que se trata es la de la construcción de una obra pública, cual es el Ferrocarril proyectado, cuya iniciación, prosecución y explotación corresponde en un principio a la autoridad administrativa, vale decir al Gobierno, en guardia y atención a los intereses generales que le están confiados. Pero el hecho del

Congreso de autorizar a una persona o compañía para esa construcción o explotación, importa la cesión de una facultad propia y la constitución de un monopolio, por razones económicas bien conocidas y dentro de condiciones claramente estipuladas.

Dentro de tal criterio, que es por otra parte el criterio común y conocido en materia de concesión de obra pública, la persistencia de aquella cesión y la continuidad de aquel monopolio es insostenible, dada la circunstancia establecida y no negada de haber vencido con exceso, de doble tiempo, el término porque fué hecha la primera y conferido el segundo; imponiéndose la caducidad de la concesión y monopolio acordado en la persona o compañía que las adquirió y que no usó de ellas con la premura y celo, ni en la oportunidad generosamente estipulada.

El texto mismo de la Ley 2095, ratifica y apoya ese criterio, concurriendo a establecer la caducidad sostenida.

Según su art. 1, la concesión hecha a Pelay y Cía., o a la empresa recurrente, consiste en el derecho de construir un Ferrocarril dentro de las condiciones que se expresan, y dentro del tiempo señalado para su duración, o sea, el estipulado para la construcción que la motiva (art. 8). Y como resulta que ese tiempo ha vencido con exceso, el derecho acordado ha dejado de existir, dado que, en ningún caso, los concesionarios pueden pretender haber adquirido derecho mayor o más extenso que aquel que expresamente le ha acordado la misma ley en que se amparan.

Y ese texto, que como V. El. puede verlo, difiere del de otras leyes similares que ordenan directamente un contrato y que lo rigen, concurre también a denotar que el derecho que concede a Pelay y Cía. no es absolutamente perpetuo, ni la multa del art. 17 del contrato tiene otro efecto que establecer una sanción penal contra el contratista remiso, y una forma de resarcimiento prevista para posible daño causado por demoras en el cumplimiento del contrato; circunstancias ambas consignadas en obsequio al plazo señalado, a la facultad cedida y al monopolio constituido, así como en defensa de los intereses de la Nación afectados y sometidos accidentalmente a la acción del concesionario.

A lo dicho puede agregarse que, la Compañía se encarga de afirmar y convenir en que la perpetuidad de su concesión nunca ha existido, considerando justamente lo contrario, cuando antes de

ahora ha reputado su derecho a construir el ferrocarril, como susceptible de expirar vencido el plazo señalado en la ley.

Su propia afirmación de que los Drs. Lastra y Leny, a su nombre, pidieran una prórroga de tres años para la terminación de la línea, y el informe de la Dirección de Vías que constata que ese pedido se hizo en 6 de Diciembre de 1895, son circunstancias que denotan con evidencia que la empresa o Compañía no consideraba perpetua su concesión ni menos válida más allá del plazo fijado por la ley, desde que pedía con insistencia la prórroga de un plazo que necesariamente tenía que reputar limitado, y que consideraba que debía expirar dentro del tiempo fijado por aquélla.

A esto hay que agregar las propias explicaciones de la Compañía, en su precedente alegato, respecto a las circunstancias que ella califica de fuerza mayor, así como el empeño en pagar la multa del art. 17 de la ley; una y otra cosa envuelve la confesión palmaria de no haber usado el derecho concedido (art. 1º de la ley 2095) en el tiempo estipulado para su existencia, ya fuera por la acción de la fuerza mayor alegada, ya por la propia culpa que le hacía en curso en la sanción de la multa que pretende pagar.

Greco que esto basta para mostrar que la Compañía, cuando pidió la prórroga, como cuando explica la fuerza mayor alegada, si ofrece pagar la multa incurrida, reputa expirado el término de su concesión, y por ende, fenecido el derecho a construir el Ferrocarril a que le autorizó la Ley 2095.

III. — Demostrado pues que, apreciada la concesión como acto administrativo de derecho público, y como cesión de una facultad y constitución de un monopolio, ella está caduca, resta valor apreciarla como materia de un contrato privado. Bajo este punto de vista, aún prescindiendo de lo dicho, sin declinar de su mérito y ajustando el contrato celebrado a los principios y prescripciones del derecho común que le son aplicables, esa caducidad se impone, como espero demostrarlo.

Como consecuencia del derecho concedido por el art. 1º de la Ley 2095, a los Sres. Pelay y Cía., y posteriormente a la compañía recurrente bajo las condiciones de forma y de tiempo que ella expresa, se hizo necesario la redacción del contrato respectivo que regularizase, ordenase y estableciera las obligaciones de parte del Gobierno y del contratista, así como la sanción penal para el caso en

que este último no cumpliera las condiciones a que sometiera voluntariamente la facultad y el monopolio adquirido.

En primer lugar, figura en ese contrato la obligación en el concesionario de empezar la obra ocho meses después del contrato definitivo y terminándola dentro de los cinco años después de comenzados los trabajos.

La empresa cumplió lo primero dentro del plazo estipulado, y faltó a lo segundo, dado que hasta la fecha, después de más de 18 años, la obra no se ha concluido.

Ahora bien, estando a los principios y prescripciones del derecho civil, las obligaciones de (hacer en el caso) que supongan los contratos, deben cumplirse en el tiempo señalado y en la manera y forma que fué la intención de las partes que se cumplieran, si así no se hiciese se tendrá por no hecho, o sea, no cumplido, y lo hecho podrá destruirse (art. 625 Cód. Civil).

La empresa recurrente no terminó la obra en la manera y plazo en que se estableció y se entendió que deben terminar, es el caso de darlo por no hecho o no cumplido el contrato, y por ende, no existente ya, de acuerdo con la intención de las partes enunciadas en la ley y en la aceptación expresa del concesionario.

Y si esa falta de cumplimiento resultara no ser culpa del obligado, la obligación queda extinguida por ambas partes, es decir, disuelto el contrato, y en el caso caduca la concesión (art. 627 Cód. Civil). Y así, suponiendo que la fuerza mayor alegada por la Empresa y consistente en la crisis económica del país que menciona, procesos y otras circunstancias, fuera de aplicación en el caso (lo que no resulta demostrado), ello sólo podría, estableciendo su inculpabilidad, librarla de la multa, pero no de la caducidad o extinción del contrato, no sólo por lo dicho, sino porque la ley misma y el contrato, al fijar el plazo para la construcción no excepciona la fuerza mayor (art. 8), lo que hace, cuando se refiere a la aplicación de la multa por la mora en empezar o en terminar la obra (art. 17).

Y si aquella falta se produce por culpa del obligado, la misma extinción tiene lugar para ambas partes, pero el obligado debe indemnizar los daños e intereses causados o pagar la multa estipulada para asegurar el cumplimiento. No aplicable la fuerza mayor, sería el caso de apreciar la culpabilidad en el contratista de la falta de

cumplimiento y aplicable la multa en la extensión que correspondiere, todo ello, sin perjuicio de la extinción del contrato o caducidad de la concesión producida en todo caso.

Excuso entrar a examinar lo que la Empresa recurrente llama fuerza mayor; primero, porque poca o ninguna influencia tiene sobre la extinción del contrato y caducidad de la concesión, como ya lo he demostrado, y en segundo lugar, porque muy pocas palabras serán necesarias para dar el verdadero significado, bajo este punto de vista, a la crisis económica del país y a los pleitos que han causado a la compañía. Excuso tocar estos puntos que reputo de muy secundaria importancia en el debate.

IV. — A pesar de que bastaría lo dicho, para fundar la inexistencia del contrato que los recurrentes pretenden levantar como base de su reclamación, es de notarse siempre dentro del punto de vista del derecho privado, las dos circunstancias siguientes que concurren eficazmente también a fundar esa inexistencia.

En primer término, ese contrato carece de objeto, desde el momento que no construída la obra dentro del plazo, (hasta Enero de 1896), la concesión de la Ley 2095, que era su materia y objeto, ya que no existía, y por ende, desaparecía la causa y objeto de aquel, es decir, uno de sus elementos esenciales.

En segundo término, y dando por hipótesis que ese contrato no hubiera fenecido, como lo he demostrado, la acción de los recurrentes para requerir su cumplimiento estaría prescripta, con arreglo a la misma ley civil.

En efecto, la acción de la Compañía, apreciada por analogía de lo que pudiera corresponderle ante los Tribunales, caso de que allí ocurriese para hacer efectivos los derechos actuales que se atribuye, sería una acción personal por cumplimiento de un contrato que, con arreglo al art. 4023 del Cód. Civil, estaría prescripto, por haber transcurrido más de diez años desde su celebración y falta de cumplimiento, teniendo en cuenta que se trata de presentes, dado que una de las partes es el Gobierno de la Nación y la otra la Compañía que ha tenido y debido tener en todo tiempo su domicilio en la Capital de la República (art. 22 del contrato con Pelay y Cía. y art. 24 del celebrado con la Compañía "Gran F. C. Central Sur-Americano").

Se ve que aún bajo este último punto de vista, los recurrentes



no pueden traer la reclamación que hacen y que V. E. está obligado a hacer valer la prescripción, no sólo para satisfacer las generales exigencias de los intereses públicos que ella ampara en el caso, sino para evitar que un contrato celebrado en época muy anterior y muy distinta a la actual, pueda llevarse a la práctica en condiciones tan gravosas para el Estado y tan contrarias al desenvolvimiento del país y a la aplicación constante de capitales sin más garantía que nuestro propio progreso.

V.—Examinando, por último, la concesión del “Gran F. C. Central Sur Americano” como operación financiera para la Nación y como obra de progreso para el país, aun con prescindencia de su faz legal administrativa y contractual, creo que no se requieren mayores desenvolvimientos para demostrar que, tal como fué concedida y contratada en su origen, es hoy una operación ruinosa para la primera, y altamente inconveniente para el segundo; de llevarse a efecto hoy, impondría a aquélla gastos tan considerables como injustificados, dado el precio estipulado del Kilómetro de vía y la garantía del 5 % ofrecida, y sería un serio obstáculo para otras iniciativas privadas que pudieran llevar sus capitales construyendo Ferrocarriles sin ayuda del Estado, y a través de la otra zona afectada por el contrato de 1889, que hoy se abre a la acción común ofreciendo las cuantiosas riquezas que encierra.

Y en este último concepto, si la misma Compañía recurrente que dice disponer de capitales, abandonase prudentemente sus pretensiones de revalidar una concesión, evidentemente caduca, y un contrato legalmente fenecido, podría ser la que, con mayores ventajas, estuviera en condiciones de emprender la construcción de un Ferrocarril, cuya importancia ella misma conoce y cuya ventajosa explotación no requiere hoy, ni precios excesivos ni garantías injustificadas.

VI.—Sirvan pues, las consideraciones que dejo hechas bajo los diversos aspectos que el asunto presenta, para aconsejar a V. E., como lo hago, no hacer lugar a la reclamación interpuesta, dar por caduca la concesión de que se trata y por inexistente el contrato respectivo, ordenando el archivo de los antecedentes en la forma que corresponde por el decreto de Junio 30 de 1890; todo ello sin perjuicio de que V. E. los tenga a la vista en caso de que cualquier iniciativa que se produjera en el sentido de emprender la construc-

ción del Ferrocarril de que se trata, en amables condiciones legales, políticas y económicas. — Abril 18 de 1906.

*Confirmado por decreto del P. E. de noviembre 27 de 1906. Boletín Oficial N° 3919, de 29 de noviembre del mismo año.*

=====

La jurisdicción territorial de un Escribano Público, proviene de la ley y por ello no puede ser modificada por resoluciones de un Gobernador de Territorio.

**Santa Ana Urquiza, escribano secretario del Juzgado Letrado del Chaco, denuncia que el Escribano Sacconi hace escrituras en su jurisdicción.**

*Excmo. Señor:*

Considero fundado el reclamo del Escribano Santa Ana Urquiza sobre la jurisdicción acordada a su registro, e incorrecta la conducta del Gobernador del Territorio del Chaco, que se apoya en una mala interpretación de las comunicaciones del Señor Ministro de Agricultura para neutralizar una jurisdicción que viene de la ley.

En efecto, la Ley 2662 modificó el art. 44 de la 1532, autorizando el registro en el escribano secretario del juzgado y facultando tan sólo, al P. E. para crearlos en poblaciones determinadas y que se hallen distantes de la Capital de la Gobernación.

Esta disposición excluye todo otro escribano de registro de la Capital del Territorio que el que la ley autoriza, y es bastante para justificar la queja que el recurrente, como tal escribano, presenta a V. E. contra las exclusiones iniciadas y ejecutadas por el Gobernador, contra lo que la ley le acuerda.

El hecho de que el expresado Gobernador diga, sin presentar causa justificada, que el escribano no le inspira confianza, la contestación del Ministro de Agricultura que, muy lejos de querer ir contra la ley, ha significado a ese Gobernador que puede designar escribano, sin entender salvar naturalmente los términos de la ley, así como la falta de justificación de inhabilidad de parte del funcionario excluido, no son ni pueden ser razones bastantes para des-

conocer el derecho que legítimamente alega el recurrente fundado en las prescripciones citadas.

En consecuencia, pues, creo que V. E. debe resolver este asunto manteniendo al recurrente dentro de la jurisdicción de sus funciones y haciéndolo saber así a las autoridades respectivas para que se abstengan de contrariarla mientras esté amparada por disposiciones expresas de la ley. — Abril 20 de 1906.

=====

Los oficiales en retiro absoluto no tienen derecho al uso del uniforme.

**Consulta del Ministro de Marina, sobre uso de uniforme de los retirados de la Armada que no forman parte de la reserva.**

*Excmo. Señor:*

Son tan terminantes y fundadas las razones expuestas al sostenerse la incompetencia de la jurisdicción militar para conocer en el caso propuesto y aún la de V. E., que sería de todo punto ocioso entrar a repetirlos. Por ello me limito a adherir a las conclusiones y a reproducir los fundamentos del funcionario que los formuló.

En cuanto a la interpretación que debe darse a los arts. de la ley 4865 que se mencionan en la resolución y en lo referente al uso del uniforme por oficiales retirados de la armada, creo que ella surge de su texto y de la correlación de sus disposiciones.

El art. 14, Tít. I de la Ley 4856, designa como formando parte de la reserva a todos los oficiales de baja o retirados, con excepción expresa de aquellos cuyo retiro se deba a la edad, enfermedad o penas disciplinarias: éstos al retirarse, pierden su estado militar saliendo del servicio por no estar ya en condiciones de prestarlo, y, en consecuencia, en ninguna de las situaciones de revista a que se refieren los arts. 21 de la Ley 4707 y 4856.

En la misma designación, aunque de distinta manera, hace la ley orgánica del ejército (Ley 4707) cuando tratando del Estado Militar (tít. III), define entre sus situaciones de revista (art. 21 citado) la del retirado en la reserva, al que siempre considera militar, dentro del ejército y eventualmente capaz de volver a la vida militar activa (art. 33, mismo tít. y ley); excluyendo, como clara-

mente lo estatuyen los arts. 29 y 30 del tít. II y 12 del tít. III, a los que por inutilidad física o edad, no se consideran ya en condiciones de servir; a éstos les reputa fuera del servicio militar aún en los cuadros de reserva (art. 84, tít. II de la misma ley), y en estado de retiro *absoluto* a que se refiere el art. 2º del tít. III de la misma ley.

El art. 11 del tít. II de la Ley 4856, correlativo del ya citado art. 12 del tít. III de la Ley 4707, completa el pensamiento del art. 14 del tít. I de la citada Ley 4856, cuando establece como límite al retiro para pertenecer a la reserva misma, la edad de 45 años.

Ahora bien, la segunda parte del citado art. 14 autoriza únicamente a los oficiales de baja o retirados de la reserva, a vestir el uniforme, previa licencia del Ministerio, concordando en este punto con la 2ª parte del art. 92 del tít. II de la Ley 4707, que se refiere a los mismos oficiales en cuanto al goce de semejante privilegio. Y así los retirados o de baja que, por edad, enfermedad o pena, están fuera de esa reserva no pueden gozar de un privilegio (el uso del uniforme) que la ley acuerda determinadamente a los que a ella pertenecen, a los que supone capaces de prestar eventualmente servicio, y a quienes mantiene en tal situación de revista.

Restringidamente interpretado, pues, el texto de las disposiciones citadas de la Ley 4707 y 4856, como corresponde hacerlo tratándose de una exención o privilegio, cual es el uso de uniforme por oficiales retirados; y derivando de su espíritu claro y terminante que los derechos y obligaciones inherentes a ese uniforme son privativos de aquellos oficiales que están en inactividad o reserva; y es lógico deducir que el silencio de la ley respecto de los que se hallan fuera de tales situaciones, importa sencillamente negarles ese uso, a cuyas exigencias y requisitos, por otra parte, no les considera obligados ni sometidos.

Creo que lo expuesto basa ampliamente mi opinión, de que los oficiales en retiro absoluto no gozan del uso del uniforme en ninguna forma, y es bastante, al propio tiempo, para mostrar que no existe el choque que se supone entre tales conclusiones y el art. 33 del tít. II de la Ley 4707 y su correlativo de la Ley 4856, por cuanto esa disposición se refiere exclusivamente a los retirados que aún revistan en situación de reserva, y aquellos, a los que están fuera de ella misma. — Abril 21 de 1906.

Es en todo punto improcedente que un empleado del Ministerio de Obras Públicas, y en general cualquier empleado, aparezca como contratista del Gobierno, en la realización de obras públicas nacionales.

**Ministro de Guerra, sobre si el Ingeniero Lorenzo Cantón, empleado del Ministerio de Obras Públicas, puede ser contratista de una obra del Estado.**

*Excmo. Señor:*

El contrato celebrado entre los señores Casadio y Sangiorgi con el ingeniero Lorenzo Cantón, y cuyo testimonio se acompaña, es un acto perfectamente extraño a V. E., dado que ni ataca ni modifica en forma alguna el existente entre esos señores y V. E. para la construcción de los cuarteles en Campo de Mayo, a que este contrato se refiere. Sus cláusulas, términos y condiciones, son las mismas, observándose únicamente que aquel contrato es hasta cierto punto ventajoso para la administración, dado que agrega una nueva responsabilidad (la del señor Cantón) a la de los anteriores constructores (Casadio y Sangiorgi).

En este concepto, reputo que V. E. nada tiene que aprobar y que, por el contrario, debe abstenerse de hacerlo, limitándose a hacer efectivas las responsabilidades del contrato existente, en las garantías que presente y cuando a ello hubiere lugar.

Tomando ahora en cuenta la circunstancia de ser el Sr. Cantón un empleado de la Administración Pública y circunscribiéndome al punto determinado por V. E., considero contrario a todo principio de sana y correcta administración que los empleados asuman el *doble carácter* de tales, al par que el de contratistas, en asuntos que afectan o se relacionan con sus propias funciones.

Esta manifestación está corroborada no sólo por las nociones generales de administración recordadas, sino por nuestra práctica y precedentes, en que no sólo se han mirado como incorrectos tales empleados contratistas, sino que así se les ha considerado, aun cuando sin contratar se hayan limitado a tramitar asuntos particulares, propios o ajenos, ante las oficinas públicas (Decreto octubre 27 de 1868).

Tratándose ahora de aplicar este concepto al caso de que se trata, no creo que sea procedente, como ya he dicho, entrar a aprobar o a desaprobar el contrato entre Cantón y Casadio y Sangiorgi,

que, además de ser extraño a V. E., es un acto legal entre esas personas que no corresponde a V. E. reveer. Siendo sólo procedente, en mi sentir, que V. E. comunique al Ministerio de Obras Públicas el contrato y circunstancias del caso, para que, si así lo entiende, tome las medidas conducentes a hacer cesar la incorrección de que uno de sus empleados sea contratista en asuntos que se relacionan con Obras Públicas de la Nación. — Abril 26 de 1906.

=====

Los permisos para instalaciones en las riberas y playas de ríos navegables, competen al Gobierno local cuyo territorio bañan los ríos, pero subordinados siempre a la Autoridad Nacional, en cuanto afecten o puedan afectar la navegación y comercio marítimo o fluvial.

**Ernesto Brandt, solicita permiso para establecer baños flotantes en el paraje denominado "Angelitos", en el Rosario.**

*Excmo. Señor:*

Repnto que los permisos para establecer baños flotantes sobre el Paraná y frente al Rosario, de que se trata, no corresponden ser resueltos por el Gobierno general.

La índole del establecimiento que se procura instalar, su relación directa con los intereses y conveniencias locales y municipales de la provincia de Santa Fe y ciudad del Rosario, así como el carácter notorio de bien público local que tienen la playa y riberas del río que afecta, y cuyo goce y uso está sometido sin ser propiedad privada a la jurisdicción del Gobierno respectivo, son estas razones bastantes para fundar esta opinión dentro de los límites que corresponden.

Esos límites están determinados por la facultad constitucional y soberana que el Gobierno general corresponde, a mérito de los inc. 9, 12 y 16 del art. 67 de la Constitución, y a la cual están sometidos bajo todo punto de vista los permisos de esta índole. Y así, en el caso sub-júdice, cualquiera que fuese la resolución del Gobierno local a su respecto, ella siempre estaría subordinada a los mandatos del Gobierno de la Nación, en cuanto ella pudiera afectar los intereses de la navegación y comercio marítimo, cuyo amparo.

gobierno y desenvolvimiento, confiere al Congreso la Carta Fundamental de la Nación.

En tal concepto, y en los que tengo manifestados a V. E. en una solicitud de permiso presentada por intermedio del Ministerio de Agricultura por el Dr. Hugo Vatta, sobre instalación de un criadero de ostras en costas marítimas de la provincia de Buenos Aires; reputo, además, que los permisos como el de que aquí se trata, deben ser acordados por la autoridad local, con carácter precario, y siempre sometidos al beneplácito del Gobierno general, salvo los casos que él mismo indica. — Abril 27 de 1906.

=====

Las constancias que expiden los funcionarios o empleados públicos, sirven como probanzas admitidas por la ley civil, para acreditar derechos determinados.

**Don Ramón Villalba Villanueva, solicita jubilación como  
contramaestre de la Subprefectura de La Plata.**

*Excmo. Señor:*

Según informa Contaduría General, el peticionante, don Ramón Villalba Villanueva, a quien le computa 29 años, un mes y seis días de servicios como empleado nacional, ha tenido una interrupción, a contar del 1º de agosto de 1888 hasta el 15 del mismo mes de 1893, lo que asciende a *cinco años y quince días*, obstaculizando así el derecho a jubilación extraordinaria que pretende el recurrente, por no ser suficientes los años de servicio anteriores a la interrupción, al tenor a los Arts. 20 y 19 de la Ley Nº 4349.

Desde luego, se hace necesario reconocer, en el caso presente, que la misma Contaduría en la exposición que hace el Contador Mayor, manifiesta que no ha sido posible establecer de una manera evidente la continuidad de los servicios del postulante, debido en gran parte a la deficiencia de los archivos, y considera que, en estricta justicia, tal circunstancia no puede venir a perjudicar a un empleado que confía en que sus servicios se cuenten debidamente.

El informe del Inspector de Farmacia de la Armada don R. Constantino, que obra en autos, demuestra que el postulante ha prestado servicios en los años 1881, 1886, 1887 y 1888, rectificando así

el cómputo de los años de servicio formulado por Contaduría General.

El Subprefecto del Paraná revela que el recurrente ha prestado servicios durante los años 1894, 1895 y 1896, ampliando así, los años de servicios computados por Contaduría, que sólo se refiere hasta el 15 de octubre de 1904.

Y, por otra parte, el informe del Capitán de Fragata Luis F. Casanegra, que consta en autos, también modifica en favor del peticionante el tiempo de servicios prestados en 1866, con respecto al cómputo de la Contaduría General, a que me vengo refiriendo.

Acreditada la insuficiencia de los archivos de la Nación para constatar la continuidad de los servicios del empleado Villanueva Villalba, considero que merecen suficiente fe legal los informes producidos en autos y a los cuales acabo de hacer referencia.

Se trata de descuentos cuya fuerza probatoria está autorizada por el Art. 139 del Código de Procedimientos Civiles y subordinada a las disposiciones del Código Civil.

Con arreglo al inc. 2º del Art. 979 del Código Civil, son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos, aparte de las escrituras autorizadas por Escribanos Públicos, a que se refiere el inc. 1º del mismo artículo, “cualquier otro instrumento que extendieren los “escribanos o *funcionarios públicos*, en la forma que las leyes hubieran determinado”.

Por otra parte, como el Art. 978 de nuestro Código Civil autoriza que la expresión por escrito puede tener lugar por instrumento público o privado, salvo el caso en que la forma de instrumento público estuviese exclusivamente dispuesta; aun suponiendo que los citados informes sólo sean conceptuados como documentos privados, resultaría aceptable legalmente su contenido, en razón de los citados preceptos de las leyes de forma y de fondo, con sujeción a los cuales el postulante ha debido acreditar los derechos que invoca, como lo manda el art. 56 de la Ley Nº 4349.

En razón de tales servicios justificados, desaparece la interrupción de los cinco años y meses en contra del recurrente. Y, como se trata de la jubilación extraordinaria acordada por el Art. 19 de la Ley 4349, al empleado que, como el postulante, aparece con veinte años de servicios cumplidos y cuya incapacidad física ha sido comprobada debidamente como lo requiere el art. 30 de la misma ley:



opino que el recurrente tiene derecho a la jubilación extraordinaria que pretende, cuyo importe, de acuerdo con los arts. 17 y 25 de la ley citada, que rige la materia, deberá ser liquidado con el 2,40 % de su último sueldo, multiplicado por los años de servicios, comprendiéndose por último sueldo, el término medio de lo que realmente ha percibido en los últimos cinco años.

En este concepto, considero que V. E. debería revocar la resolución de la Junta de la Caja Nacional de Jubilaciones, de fecha 30 de marzo del corriente año, elevada a V. E. a los efectos del Art. 57 de la Ley 4349. — Abril 28 de 1906.

=====

Los retirados militares en el carácter de tales, no pueden ni deben ocupar puesto, ni desempeñar función rentada en la administración civil de la Nación ni en ninguna repartición, que no sea de las determinadas por la Ley 4707, y dentro de las condiciones que ella establece.

**Contaduría General, consulta si es la ley 4707 la que debe aplicarse a un militar retirado con empleo civil, o el decreto de 1904.**

*Excmo. Señor:*

En caso alguno pueden primar las disposiciones de un simple decreto, sobre las que contenga una Ley del Congreso.

Desde el momento que la Ley de Organización del Ejército 4707, permite a los oficiales retirados desempeñar puestos en la justicia militar, en el profesorado y cuerpo de la misma administración, debe entenderse que el decreto de febrero 21 de 1905 a que se hace referencia, no tiene vigor alguno en cuanto contraría la expresada ley.

Así, siempre que se trate de los retirados de la reserva y de los servicios y funciones a que se refieren los Arts. 31, 32 y 33 del tít. II de la citada Ley 4707, ninguna observación podrá hacerse a quien los preste o desempeñe, a mérito del decreto de febrero 21 de 1905 ampliatorio del de diciembre 14 de 1904, cuyas copias se acompañan.

Pero, relativamente a aquellos retirados que entran a ocupar puestos extraños a la administración militar, a que la ley se refiere,

a desempeñar funciones que no sean las que la ley ha referido expresa y taxativamente, a esos retirados, continúan siendo aplicados los mencionados decretos, dado que la Ley 4707 ni les ampara ni exceptúa, sino dentro de lo que ella claramente expresa y dentro del orden militar que designa de acuerdo con el objeto de su propia sanción.

En tal concepto, pues, pienso que los retirados militares, en el carácter de tales, no pueden ni deben ocupar puestos ni desempeñar funciones rentadas en la Administración Civil de la Nación, ni en ninguna repartición que no sea de las determinadas por la ley y dentro de las condiciones que ella establece; de lo contrario, resultaría reconsiderado y aun derogado un decreto vigente, los retirados de la ley quedarían inhabilitados para cumplir la ley misma en lo que a la reserva se refiere, y lo que es más, se crearía a su favor un privilegio injusto, permitiéndoles gravitar sobre el erario público cobrando simultáneamente una pensión de retiro y uno o varios sueldos de puestos en la administración civil o militar de la Nación.

Estas consideraciones, unidas a las del decreto de cuya aplicación se trata y al texto expreso de la Ley 4707, me inducen a pronunciarme en el sentido de que los retirados militares están bajo el imperio del decreto citado de febrero 21 de 1905, cuando no se trata de los puestos o la administración que esa ley designa y gobierna. — Abril 28 de 1906.

Tomado como resolución: Boletín Oficial N° 3816, pág. 247, de julio 17 de 1906.

=====

No debe admitirse en los Estatutos de la sociedad "Prácticos de los Ríos" la multa que impone contra el que salga de la sociedad y ejerza su profesión fuera de ella, por constituir ello un monopolio, contrario a la libertad de comercio.

**Sociedad "Prácticos de los Ríos", sobre aprobación de Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Encuentro que la Sociedad "Prácticos de los Ríos" tiene los mismos fines y objetos que la sociedad "Cuerpos Prácticos Argentinos", y que, en tal concepto responde, en sus lineamientos genera-

les, al par que al interés de los asociados, al interés común, en el sentido que concurre a asegurar la regularidad y mejora de un servicio tan general e importante, como es el pilotaje en nuestros puertos, no siempre libre de peligros para la navegación.

Encuentro que si el capital social determinado es exiguo en la cantidad fijada y depositada, es sin embargo bastante para iniciarse. Alados sus objetos que tienen por base principal el trabajo de los mismos asociados.

La facultad social agregada a los estatutos para adquirir derechos, como se afirma haberse hecho, subsana la deficiencia observada por la Inspección, y por ende desaparece este motivo que la excluía del art. 33 del Cód. Civil.

En cuanto al texto del art. 40 de los Estatutos que se presenta modificando al anterior, por el acta acompañada, creo que debe ser modificado nuevamente por los interesados, en el concepto de hacer desaparecer la multa que impone contra el que salga de la sociedad y ejerza su profesión fuera de ella en la manera que entiendan conveniente.

Esa multa es inconveniente del punto de vista legal y económico, además de ser una traba manifiesta el libre ejercicio de una profesión, es una marcada tendencia a crear un monopolio, evidentemente contrario a nuestras instituciones y al beneficio común mismo que suponemos en la sociedad, dado que con ello se contraría el desenvolvimiento y facilidad del ejercicio general del pilotaje, que con ella se entiende amparar.

Si los interesados modifican ese artículo en el sentido de evitar los inconvenientes señalados, a los que V. E. no puede ni debe concurrir con su autorización, y salvando los intereses que quieren salvar los hacen desaparecer, creo que V. E. podría acordar la personería solicitada en las condiciones que lo ha hecho con la sociedad "Prácticos de la Rada y Puerto de Buenos Aires" en mayo 17 de 1893 y "Cuerpo de Prácticos Argentinos" en noviembre 26 de 1904. Abril de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3774, pág. 963 de junio 1° de 1908.*

=====

La multa como pena única, accesoria, o concurrente, debe aplicarse como está ordenado. Se la transformará en pena corporal, cuando el condenado carezca de medios para satisfacerla.

**Director de la Cárcel de Reincidentes de Tierra del Fuego,  
consulta sobre el alcance del art. 79 del Código Penal**

*Excmo. Señor:*

Ya sea que la multa se aplique como pena principal o única, o como accesoria o conjunta, ella debe ser siempre cumplida. Esto sólo se consigue en uno u otro caso y cuando el condenado carece de medios para satisfacerla, transformándola en pena corporal, o sea en arresto o prisión, ya sea que se aplique el art. 79 del Cód. Penal, o el art. 92 de la Ley 49 sobre crímenes y delitos contra la Nación, cuando corresponda su vigencia.

En el caso *sub-júdice*, en que tratándose de la Ley 3972, es de aplicación la transformación más favorable al reo que establece el citado artículo del Cód. Penal, y que autoriza el art. 16 de la citada ley, ella debe operarse aplicando la proporcionalidad que el mismo Código sienta entre las diversas penas, y que a su vez aplica, en su art. 49, cuando estatuye sobre las penas en general (Tít. I de la Secc. II del citado Código).

Creo que V. E. debe pronunciarse dentro de lo expuesto en la consulta que precede. Abril de 1906.

=====

Acordada por el Congreso una pensión graciable a favor de personas que gozaban ya de pensión legal, cumple al Poder Ejecutivo mandarla abonar, pues el Congreso al dictar la ley acordando esa pensión, procedió dentro de facultades propias, que no puede el poder Ejecutivo entrar a analizar.

**Viuda del Mayor Horacio Ascasubi y sus hijas solteras,  
reclaman pago de pensiones.**

*Excmo. Señor:*

Con prescindencia de la pensión legal que por decreto de V. E., de 28 de junio de 1905, se acordó a la señora viuda del Mayor Don Horacio Ascásubi, el Congreso en ejercicio de facultades propias

(inc. 17, art. 67 de la Constitución), dictó la Ley 4873 por la cual acordó a las hijas solteras del mismo Jefe, una pensión graciable de cien pesos mensuales.

Esa ley no puede ser trabada en su aplicación, dado que la voluntad del Congreso, en ejercicio de una facultad constitucional, no puede ser en caso alguno contrariada por V. E. so pena de violentar la textual disposición del inc. 2 del art. 86 de la Constitución.

Que exista o no un principio legal por el cual una misma persona no pueda gozar de dos pensiones a la vez, y que se levante una cuestión de hecho, como la que se ha levantado, diciendo que el Congreso no sabía que las señoritas de Ascásubi tenían ya una pensión, poca o ninguna influencia tienen tales circunstancias contra el texto expreso, claro y terminante de la ley misma, que debe ser cumplido por V. E. sin retencencias, reservas, ni suspensiones.

Por otra parte, lo que en el caso se opone a la vigencia de esa ley en vigor, es un principio de derecho que se dice existir, aunque fuera de todo texto legal, un hecho que se afirma sin justificar cuál es, la ignorancia que se supone en el Congreso de la pensión que se dice gozaban antes las señoritas agraciadas por él, y el antecedente de que nunca el Poder Legislativo ha concedido dos pensiones a las mismas personas, lo que no es del todo exacto, por cuanto en varios casos ha acordado pensión *graciable* para aumentar la legal que ya se gozaba, y hasta ha concedido pensión en el primer concepto, a personas que habían dejado de tener derechos a gozarla en el segundo.

Estas consideraciones en mi sentir bastantes para que V. E. cumpliendo la ley como corresponde, mande abonar su pensión a las hijas del Mayor Ascásubi, de acuerdo con el texto de la Ley 4876. — Abril de 1906.

=====

La respectiva ley de concesión y sus correlativas, así como la propia extensión de los títulos de propiedad de una empresa ferroviaria, rigen su relación con las Municipalidades de los pueblos que atraviesa, para la apertura de calles, obras de cruce y otras exigencias comunales.

**Ferrocarril Central Argentino, sobre apertura de un paso a nivel en una de las calles del pueblo de Junín.**

*Excmo. Señor:*

Es mi opinión en este asunto, que la situación legal en que se encuentra la Empresa del Ferrocarril Central Argentino, relativamente a la Municipalidad y pueblo de Junín, por las calles que se tratan de abrir en su misma estación, es la que resulta de las leyes que rigen su propia concesión y aquellas que se dictan por las autoridades bajo cuya jurisdicción estuvieron y están ahora.

Si como se afirma por la Empresa, el terreno que ocupa con su estación, en el pueblo de Junín, fué adquirido en propiedad por ella cuando no existían calles que ni se mencionaron en sus títulos, si es cierto también que, cuando se construyó esa estación regía a la Empresa la Ley de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires, cuando declara infranqueable el recinto de las estaciones por calles del pueblo vecino, bastando correr una calle de circunvalación a ella, es indudable que, por el hecho de haberse constituido posteriormente la Jurisdicción Nacional sobre la expresada Empresa, no se han modificado las condiciones generales en que aquélla tomó la concesión de la línea respectiva.

Fuera de que ese cambio de jurisdicción, no ha podido alterar la situación de la Empresa respecto de sus derechos adquiridos o de sus obligaciones contraídas, la misma Ley Nacional de Ferrocarriles que hoy rige la Empresa, en sustitución a la de la Provincia que la rigió anteriormente, no cambia en manera alguna esa situación, siendo injustificadas las alteraciones que se quieran encontrar en ella.

Así, la Estación del Ferrocarril Central Argentino en Junín debe estar libre de calles en su recinto, en respeto de la mencionada disposición de la Ley Provincial y teniendo en cuenta de que existe la calle de circunvalación correspondiente; la Empresa está libre de la obligación de abrir las nuevas calles o prolongaciones que se consideren indispensables por la Municipalidad de ese pueblo, dado que, esas calles o prolongaciones no fueron determinadas ni

deducidas de la tierra que adquirió para estación, lo que a su vez, nunca supuso un tráfico público posterior que debiera respetar y mantener expedito, según el inc. 9 del art. 5 de la Ley 2873; tampoco esa Empresa estaba ni está obligada a hacer las obras de desagüe a que se refiere el inc. 10 del mismo artículo, por cuanto resulta de informes técnicos que corren en este expediente, que hasta ahora no se han observado estancamientos de aguas con motivo de la mencionada estación.

Pero si bien tales derechos en la Empresa son de tomarse en consideración, ellos no son bastantes para que si el vecindario de Junín necesita la prolongación de calles para facilitar el tráfico, la Empresa puede oponerse a ello, so pretexto de que le daña en sus intereses o en el libre movimiento de su vía.

El art. 17 de la ley nacional vigente de Ferrocarriles prohíbe a las Empresas oponerse a que sus vías sean cruzadas por caminos ferrocarriles ordinarios, o por obras de canales o conductos de agua siempre que no se perjudique la solidez de la vía; en tal concepto, la Municipalidad de Junín tiene derecho, para satisfacer las necesidades del tráfico, a prolongar las calles a través de las vías del Ferrocarril Central Argentino, pero naturalmente haciéndolo a su costo, dado que esas prolongaciones se hacen satisfaciendo los propios intereses comunales, aunque gravitando sobre la concesión de la Empresa que con arreglo al artículo citado (17) está sujeta a la servidumbre que implica el cruce referido.

Dentro de tal disposición, que es la aplicable al caso, no puede decirse que la Empresa de que se trata, en Junín ni en ningún otro pueblo, tenga la obligación de proveer a su costo la prolongación de las calles, costear las obras de éstas que puedan conceptuarse necesarias, ni dentro del inc. 9 del art. 5 de la ley, hacer expedito un tráfico que todavía no existe, y que sólo se trata de establecer, ejercitando la servidumbre sobre la vía que menciona el citado art. 17.

Estas consideraciones, y las formuladas por la Empresa y las que han expresado las oficinas respectivas me inducen a pronunciar en el sentido de que en el caso no hay razón para compeler a la Empresa del Ferrocarril Central Argentino a ejecutar las obras de corte a que se refiere el decreto de febrero 9 de 1904, decreto que creo que V. E. debe reconsiderar y dejar sin efecto, por no apoyarse en ley alguna que la haga constitucionalmente obligatorio.

Apoyo igualmente la idea de que conviene a los intereses de

Junín y al de V. E. promover negociaciones y arreglos con la Empresa para valorar las dificultades levantadas, continuando en lo que posible sea lo iniciado por la resolución ministerial de 7 de septiembre de 1905. — Abril de 1906.

=====

A los efectos de la ley de jubilaciones, los cargos electivos son computables para completar el número de años de servicios que la ley exige para acordar la jubilación o pensión en su caso.

**Clara Espiña de Figueroa, solicita pensión.**

*Excmo. Señor:*

La única importancia que tiene la disidencia suscitada por uno de los miembros de la junta administrativa de la Caja de Pensiones con sus colegas, es relativa a la cuestión de saber si los cargos electivos son computables a los efectos de la jubilación, cuestión que V. E. debe resolver a fin de aprobar o desaprobar la resolución de esa Junta, que no es otra que la de la mayoría, dado que la ley no exige la unanimidad para motivar la firmeza de sus resoluciones.

Por mi parte considero fundada la resolución expresada de la Junta, reputando en consecuencia que tratándose del ex-procurador fiscal de la Cámara de Apelaciones de la Capital Dr. Benjamín Figueroa, deben computarse, a los fines de la jubilación y pensión en el caso, los años que ese señor ocupó la banca de senador del Congreso por la provincia de Salta.

1º Porque teniendo con anterioridad a su elección de senador, más de 20 años de servicios, según consta de los antecedentes, está incluido dentro de lo prescripto en el inc. 5 del art. 2 de la Ley 4349.

2º Que si bien es cierto que el causante no sufrió descuento en sus sueldos de senador, cuando lo era, ni entonces se acogió a la Ley 4349, no es menos cierto que no existiendo la expresada ley, ni pudo acogerse a ella ni menos sufrir el descuento que prescribe, lo que, por otra parte no anula el derecho adquirido por la ley misma, ni hace imposible ese descuento que puede siempre hacerse efectivo en los términos del inc. e) del art. 2 del decreto reglamentario de la Ley 4349.

3º Que, por último, es de seguirse la jurisprudencia sentada



por la misma Junta, con la aprobación de V. E., en el caso del Dr. Tello, en el cual se tuvieron presentes las consideraciones que dejo expuestas y que consigna la resolución valedera de la Junta.

En consecuencia creo que esa resolución debe confirmarse en todas sus partes, incluso en lo relativo al descuento extraordinario del 3 % por las sumas que el causante adeudaba a la Caja, por el tiempo computado para la jubilación y no sometido al descuento correspondiente. — Mayo 19 de 1906.

=====

Reconocido carácter diplomático a un cónsul extranjero, a pedido de su gobierno, procede dar curso a la extradición que requiere de uno de sus súbditos.

**Consulado General de Dinamarca, solicita la extradición  
de Cornelio Captyn.**

*Excmo. Señor:*

Habiéndose reconocido carácter diplomático al Sr. Cónsul General de Dinamarca, a los efectos de esta extradición, por pedido especial de ese Gobierno, y resultando de los documentos acompañados que el delito de que se acusa al requerido es de los que, por nuestras leyes vigentes (Nº 1612 y Cód. de Proc. Penal), a falta de tratado, es susceptible de motivar la extradición pedida. Y si constatando en los antecedentes, la explícita promesa de la reciprocidad, la orden de prisión, los antecedentes a los efectos de la identidad del requerido, así como la copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al caso en el país requirente. Considero que V. E. puede dar curso al presente pedido de extradición requiriendo al súbdito dinamarqués Cornelio Captyn, siempre que aún se esté dentro del término que fija el art. 672 del Cód. de Proc. Penal, dado que según resulta se halla actualmente detenido en la Policía de la Capital.

A tal efecto, V. E. se ha de servir remitir estos antecedentes al Sr. Juez Federal Dr. Astigueta, a cuya disposición se halla detenido provisoriamente el requerido. — Mayo 21 de 1906.

=====

Caduca la concesión de una obra pública por haber vencido los plazos establecidos en la ley, el Poder Ejecutivo no puede prorrogar estos plazos. Para continuar con las obras paralizadas, debe el P. E. gestionar la sanción de una nueva ley de concesión.

**Gardella y Cía., sobre caducidad de su concesión de construcción de un puerto en el Río Quequén Grande.**

*Eremo. Señor:*

Arranca la concesión de los señores Angel Gardella y Cía. de la ley 3968, que los autorizó para la construcción de un puerto de cabotaje en la desembocadura del río Quequén Grande, firmándose en 5 de junio de 1901 el contrato respectivo entre V. E. y los concesionarios.

La expresada ley estableció las bases fundamentales de la concesión y el contrato referido los repitió con ligeras variaciones.

Por el art. 10 de la citada ley 3968, se establecieron los plazos dentro de los cuales debía firmarse ese contrato, empezar y terminar las obras; seis meses desde la promulgación de la ley para firmar el contrato, tres meses desde esa firma para empezar las obras y dos años de iniciadas para concluir las.

Los dos primeros plazos fueron plenamente satisfechos, según consta de los antecedentes agregados, no habiéndose producido sino inconvenientes de detalles que fueron salvados administrativamente y en oportunidad.

Por razones que no me es dado apreciar, dado que carezco de la competencia suficiente para ello, los concesionarios no concluyeron las obras dentro del término de los dos años fijados por el art. 10 de la ley y cláusula 4ª del contrato.

En tales circunstancias, no negada por los recurrentes, se había producido el caso de inejecución de la obra prevista dentro del expresado término, con arreglo al art. 14 de la primera y la cláusula 18 del segundo, había quedado sin efecto la concesión con la pérdida de la garantía, y lo que es más, por mandato legal que no era posible modificar administrativamente por V. E.

Los Sres. Gardella y Cía. se vieron entonces en el caso de gestionar ante el Congreso la prórroga de su concesión, dado que se encontraban inhabilitados para continuar sus trabajos.

El Congreso dictó el 30 de setiembre del año ppdo., la ley 4891,

en la cual se acordó una prórroga a los referidos concesionarios que debía durar hasta el 31 de marzo del año corriente.

Vencida esta nueva prórroga y producidos los informes de las oficinas respectivas, que denunciaron el estado actual de las obras, resulta evidentemente demostrado que la concesión de los señores Gardella y Cía. ha quedado sin efecto, por no haber terminado sus obras dentro del plazo de la Ley 3898, del contrato respectivo y dentro de la prórroga de la 4891.

Y como esta caducidad nace de la ley misma, dado el texto del art. 10 de la primera y la no derogación de la segunda en cuanto a la sanción establecida por el art. 14 de aquélla, creo que V. E. no puede tomar ninguna medida ni adoptar resolución alguna que importe una alteración o modificación de esa ley (art. 83, inc. 2º de la Constitución).

En tal concepto pienso:

1º Que V. E. no puede prorrogar los términos que las citadas leyes han fijado para esta concesión.

2º Que no puede resolver tampoco la continuación de las obras existentes, en la forma actual o en otra diferente, sino mediante una ley que le autorice a ello y que derogue los mandatos de la vigente.

En el primer caso y dando por terminada la concesión de los Sres. Gardella y Cía., por su falta de cumplimiento del contrato en el tiempo estipulado, debe ser éste considerado rescindido con la pérdida de la garantía y sin recurso alguno para ante V. E., como se desprende del texto expreso de la ley 3968 (art. 14) y del contrato (art. 18).

En cuanto a la situación en que quedan los contratistas, V. E. debe y puede apreciarla, por analogía, según lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas, relativa a los contratistas que no cumplen sus contratos dentro del tiempo estipulado.

En el segundo caso, creo que V. E. debe gestionar una nueva ley que autorice a continuar las obras existentes en el Puerto de Quequén, en la mejor manera que convenga a los intereses de la Nación.

Si esa continuación debe hacerse por administración, si por medio de los mismos contratistas, renovando sus contratos con la nueva autorización legislativa, o utilizando nuevos concesionarios, son cuestiones esencialmente administrativas, económicas y técnicas, que a V. E. corresponde apreciar, dado que dispone de los elementos ad-

ministrativos, datos económicos e informes técnicos, que le pondrían en condiciones de adoptar la mejor forma para la ley aludida.

En tales conceptos y condiciones, insisto en que V. E. debe resolver el presente asunto, dentro de las prescripciones legales que lo rigen. — Mayo 22 de 1906.

*Decreto de conformidad: Boletín Oficial N° 3787, pág. 1228 de junio 18 de 1908.*

=====

Un obispo diocesano no puede oponerse a que entren en el templo la bandera nacional, so pretexto de no estar bendita o de no ser la bandera de guerra u oficial. No hay disposición eclesiástica, que haya obtenido el "pase" que la Constitución prescribe, que autorice tal oposición.

**Obispo de Santa Fe, sobre prohibición de entrar  
la bandera nacional en el templo.**

*Excmo. Señor:*

La actitud asumida por el Sr. Obispo de Santa Fe, al oponerse a la entrada al templo de un grupo de personas llevando la bandera nacional, y la observada más tarde al no oficiar el Te Deum que es de práctica en el aniversario de nuestra emancipación política, a pesar de haber llegado a las puertas del templo las autoridades constituidas, ha suscitado el incidente enojoso que motiva este dictamen.

Si bien es cierto que ese incidente no ha levantado un conflicto con las autoridades civiles de la Provincia, dado que el señor Gobernador de Santa Fe lo menciona limitándose sólo a requerir de V. E. medidas para el porvenir, así como que, por otra parte, ello no ha tenido importancia ni consecuencias mayormente apreciables; no es menos cierto que, la actitud asumida por el prelado, relativa a las banderas nacionales rechazadas, y a la clausura del templo a las autoridades, no tiene justificación en la legislación y decretos pontificios, en la Constitución Nacional, en las declaraciones, del episcopado argentino, ni aún en las mismas circunstancias que rodean el caso.

La declaración hecha por el Santo Oficio el 31 de agosto de 1887, con motivo de una consulta que le fué hecha, de que no

debían admitirse en los templos otras banderas que las que estuvieran benditas, y a la que se refiere la cita de nuestro episcopado que hace el Obispo de Santa Fe en su segundo informe, no es bula, decreto ni rescripto que lleve un mandato, ni encierre la voluntad de la autoridad eclesiástica.

En tal concepto esa declaración no puede ni ha podido obligar a ese prelado de la manera ineludible que refiere y que se desprende del informe ya citado, aún teniendo presente los juramentos a que alude.

Pero aún en el supuesto de que tal declaración tuviera el vigor y condiciones de una disposición canónica o bula pontificia, le faltaría siempre para regir y tener efecto entre nosotros, la autorización del patrono, que nuestros antecedentes históricos, nuestra Constitución y la misma legislación canónica, hacen indispensable para su vigencia en el territorio de la República. Patrono, cuya autoridad por otra parte, juró respetar el Obispo de Santa Fe cuando asumió la autoridad que inviste, a mérito de esos antecedentes, de la Carta Fundamental de la Nación y de la misma legislación que entiende cumplir (inc. 8 y 9 del art. 86 de la Constitución, Leyes 43, 44 y 45, Tít. VI, Lib. I, R. de Indias).

Ajustándose a estas consideraciones, el Episcopado Argentino en sus conferencias se ha pronunciado relativamente a la citada declaración del Santo Oficio de 31 de agosto de 1887, siendo de observar que la conferencia citada por el Obispo informante, está muy lejos de fundar la actitud asumida en el caso para con los particulares y con las autoridades de Santa Fe.

Fuera de que la declaración de la conferencia citada (pág. 5) carece de la autoridad de una ley, capaz de obligar, su texto es expreso cuando deja librado al criterio del párroco o prelado, la aplicación de aquella declaración, en presencia de la prudente apreciación de las circunstancias que rodeen el caso que la requiera.

El hecho de tratarse de una fiesta cívica tradicional en el país, de la presencia de ciudadanos llevando una enseña que exteriorizaba su actitud patriótica al concurrir al templo, no constando que tal presencia fuera en actitud descompuesta, agresiva o irrespetuosa, para el sagrado recinto, y resultando también el obligado retiro de las autoridades constituídas por negativa del oficio divino; son circunstancias muy dignas de haber sido tomadas en cuenta por el Obispo de Santa Fe, para evitar con prudencia el incidente, den-

tro de las mismas facultades que le acuerda la conferencia del episcopado que cita en apoyo de su actitud.

No reputando necesario insistir sobre lo que dejo dicho, debo por fin justificar que no considero antedible el distingo que en el caso se opone a lo expuesto, sosteniendo que las banderas rechazadas no eran banderas nacionales; si bien es cierto que esas no eran las oficiales o de guerra, a que se refiere el art. 1 del decreto de abril 25 de 1894, no es menos cierto que eran las que menciona el art. 2 de este decreto, que eran la bandera nacional de la Asamblea de 1813. así como que el sentimiento y propósitos políticos de los que las llevaban al templo, era bastante para caracterizar la bandera nacional, que están autorizados y pueden enarbolar los particulares.

Estas consideraciones bastan, en mi sentir, para reputar injustificada la actitud asumida por el expresado señor Obispo de Santa Fe en el caso, por más respetable que sea su celo en el cumplimiento de sus deberes eclesiásticos, y para creer que si V. E. participa de ellas, así lo signifique, con objeto de que, teniéndolas presente, se eviten en lo porvenir incidentes de esta índole. — Mayo 31 de 1906.

=====

Los gastos electorales en las elecciones nacionales, son a cargo de las respectivas provincias o distritos electorales de la República.

**Junta Electoral de Santa Fe, reitera pedido de fondos para pago de gastos ocasionados en cumplimiento de la ley electoral.**

*Excmo. Señor:*

Dejando de lado lo relativo al monto de las cuentas presentadas y que motivan estas actuaciones, por no ser el caso de tomarlo en consideración, partiendo de la base de que no se trata de gastos provenientes de convocación a elección nacionales, la que, se conviene, corresponde a los Gobiernos de provincia, y limitándonos a la apreciación realizadas por la junta electoral del distrito de Santa Fe, que es la reclamante. Se desprende en sentir del que suscribe, y de acuerdo con las razones que expondré, que V. E. no debe hacer lugar a la reconsideración que se entabla en el prece-

dente escrito, declarando, por el contrario, que no es al tesoro nacional a quien corresponde abonar los gastos de que se trata.

En primer lugar, las operaciones electorales que proveen a la representación en el Congreso de los respectivos distritos, en que se halla dividida la República, son practicados en beneficio de esos distritos, dado que proveen a una prescripción constitucional que les atañe, a los efectos de que concurran al Gobierno de la Nación en la manera que corresponde.

Hago notar en segundo lugar que la constitución de la junta electoral de distrito, a que se refiere el art. 25 de la Ley 4161, por más que sea presidida por el Sr. Juez Federal respectivo, es una entidad local cuya mayoría es de orden provincial, cuyo punto de reunión es la legislatura y cuyo funcionamiento se inicia y desenvuelve, previa convocatoria y providencias del Gobierno Provincial que, en el caso, provee a su propia representación y al mismo tiempo actúa como agente ejecutor de una ley del Congreso que le atañe.

De aquí que las funciones de esa junta, cuales son la confección, depuración y publicación de los registros, así como el sorteo de comisiones empadronadoras y escrutadoras después, impliquen operaciones de índole esencialmente local, que tienen por base el conocimiento de los ciudadanos y afecta directamente la representación del pueblo del distrito electoral que la provincia constituye.

La enunciación de estas circunstancias y consideraciones son bastantes, en mi sentir, para caracterizar a la mencionada junta como entidad provincial, y por ende para sostener que su funcionamiento está a cargo del erario provincial, como los otros servicios políticos y administrativos de ese orden.

Llamo por último, la atención de V. E., en apoyo de lo que dejo dicho sobre lo dispuesto por el inc. 1 del art. 25 de la Ley 4161, sobre creación y composición de la junta electoral de distrito, lo establecido por los incs. 6º, 8º y 9º del mismo artículo, relativos a la confección, depuración y publicación por ella del registro electoral; lo consignado por el art. 56 y su inc. 2º sobre sorteo y designación de escrutadores, y lo estatuido por el art. 63 de la misma ley, que confía a la autoridad de cada provincia, la distribución de las mesas que constituyen los comicios electorales del respectivo distrito.

Creo que tales conceptos, son base bastante para fundar la opinión que dejo manifestada al principio de este dictamen, no sólo

respecto de la solución de la cuestión propuesta, sino también a la de la reconsideración entablada. — Mayo de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3832, pág. 681 de agosto 13 de 1906.*

=====

Cumple la Nación con entregar a la Provincia de Santa Fe la suma que la Ley 4269 estableció como contribución para la construcción del puerto. Las reclamaciones sobre pago de trabajo e inversión de esa suma, deben dirigirse contra la expresada Provincia.

**Sociedad Puerto de Santa Fe, sobre pago de sumas  
para la construcción del puerto.**

*Excmo. Señor:*

Las obligaciones positivas y reales de la Nación, en el caso presente, son las que, mencionadas en el contrato celebrado con la Provincia de Santa Fe, para la construcción de su puerto, en julio 16 de 1904, están dentro del texto y espíritu de la Ley 4269, cuya ejecución motivó el mencionado contrato.

Según su art. 3 y según el inc. 8º del art. 1 de la ley citada, la única obligación de la Nación, bajo el punto de vista de que aquí se trata, es la de entregar al Gobierno de Santa Fe la suma de dos millones quinientos mil pesos moneda nacional oro sellados en la forma, tiempo y condiciones, establecidos por el texto de la ley y del contrato, en las prescripciones citadas.

Esta suma unida a la que la Provincia de Santa Fe debe invertir por su parte, la que, según el final del inc. 8º art. 1 de la ley citada, y primera parte del art. 3 del contrato, no puede ser menor a la que la Nación se obliga a entregar, constituyen las sumas destinadas en realidad a la construcción del puerto, o sean los fondos de donde debe pagarse, siempre según el contrato (final del art. 3), el importe del proyecto de la Compañía Francesa de Ferrocarriles de Santa Fe, importe que no es otro que el que se cobra en estos obrados.

Ahora bien, como según el art. 1 de la Ley 4269 y art. 1 del contrato, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, es quien dirige y responde de la realización de las obras, y quien tiene y debe



tener en consecuencia, la administración del caudal que ha de costearlas, es a ese Gobierno a quien corresponde su inversión en todo lo necesario, incluso en lo previsto y establecido por el contrato, relativo al proyecto de puerto de que aquí se trata.

En tal concepto es el Gobierno de Santa Fe a quien corresponde tomar en consideración y pagar, si la encuentra de legítimo abono, la cuenta presentada y de que la Nación se ha descargado al imputarla, de acuerdo con la Provincia, a las sumas destinadas a la construcción del puerto (final del art. 3 del Contrato), sumas que están a su cargo y que no son otras que las que he designado anteriormente.

Estas consideraciones son las que me inducen a pensar que la Nación nada tiene hoy que hacer con lo que se le exige, y a creer que el peticionante debe ocurrir ante el Gobierno de Santa Fe a los efectos indicados en el párrafo anterior. — 23 de junio de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3955, pág. 203 de enero 14 de 1907.*

=====

El puesto de ayudante en la Comisión Demarcadora de límites con Chile, no puede considerarse como puesto permanente de la Administración, dado que es de carácter accidental y a tiempo fijo, y comprendido por lo tanto en el Inc. 5º del art. 3º de la Ley 4349.

**Herminia C. de Maldonado, solicita pensión.**

*Excmo. Señor:*

Con sujeción al art. 41 de la Ley 4349, para que la recurrente doña Herminia C. de Maldonado, viuda del ex ingeniero de la Comisión Demarcadora de Límites con Chile, don Lorenzo Maldonado, tenga derecho a la pensión extraordinaria que solicita para sí y para su hija menor Marta Celia Maldonado, sería necesario que el causante, en la época de su fallecimiento, hubiera estado en situación legal de obtener su jubilación.

Se encuentran comprendidas en la Ley 4349, con arreglo a su inc. 1º de su art. 2º, los funcionarios, empleados y ayudantes civiles que desempeñan cargos en la administración, en armonía con el art. 1º de la ley de reformas 4870.

De manera que, en el caso ocurrente, se requiere determinar si las funciones de Ayudante-Ingeniero de la Comisión de Límites con Chile, que ha desempeñado el causante, implican el ejercicio de un cargo en la administración.

Desde luego, aquella Comisión-Demarcadora, creada en virtud de pactos internacionales, no forma parte del engranaje de la administración pública.

Y tratándose de una pensión de carácter excepcional, como es la del art. 19 de la ley 4349, que pretende la postulante, su aplicación ha de ser restringida y limitada en un todo, a los conceptos de la misma ley.

Procediendo con este criterio, reputo que, al declarar excluidas de la Ley 4349 las remuneraciones de aquellos que desempeñan comisiones accidentalmente o por tiempo fijo, en su inc. 5º del art. 3º, tal exclusión debe aplicarse de acuerdo con el sentido gramatical del concepto citado, dada su clara redacción.

Es decir que, en virtud del inc. 5º del art. 8º, toda persona que ejerce por cierto tiempo algún cargo, en mérito de la facultad respectiva que el poder público ha dado para ejercerlo, desempeña una comisión accidental o por tiempo fijo, que no le da derecho a ser jubilado.

De modo que, el Ayudante-Ingeniero de la Comisión Demarcadora de Límites con Chile don Lorenzo Maldonado, que ha desempeñado facultades o funciones que le han sido encomendadas, en razón de actos internacionales de carácter accidental, funciones que terminarían con el hecho de la demarcación de fronteras, está expresamente excluido de los beneficios de la ley 4349.

Por otra parte, como dada la constitución y organismo de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, los fondos y rentas son de propiedad exclusiva de las personas comprendidas en la misma ley, según su art. 1º y si bien por sus servicios y circunstancia de su fallecimiento, puede el causante tener derecho a que el Gobierno atienda la situación precaria de sus deudos, él no tenía derecho a ser jubilado en la época de su fallecimiento ni a dejar pensión a sus herederos, pagadera por la mencionada Caja, por no desempeñar un cargo en la administración pública, como lo he dicho.

Por estas consideraciones, creo que V. E. debería aprobar la resolución negativa de la Junta Administradora de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, sin perjuicio de que la recurrente ocurra donde corresponda, en procura de la justa recompensa a

los servicios prestados por el causante en la Comisión de Límites, fallecido en un acto de tales servicios, en el cumplimiento estricto de sus deberes. — Julio 16 de 1906.

=====

Es incompetente el Poder Ejecutivo para ordenar notas marginales en los asientos del Registro Civil, como lo pide el señor Ministro Alemán, con respecto a un divorcio pronunciado en su país y en cumplimiento de una sentencia de sus tribunales.

**Legación Alemana, pide la anotación marginal del divorcio de los esposos Emilio Gersbach y Clara Naegelen, en el Registro Civil.**

*Excmo. Señor:*

La inserción en el Registro Civil de la Capital de una nota marginal, como la que requiere el señor ministro del Imperio Alemán, con motivo del divorcio pronunciado en su país, respecto de los esposos Emilio Gersbach y Clara Naegelen, que aquí contrajeron matrimonio, sólo puede hacerse por orden del Juez respectivo y no por disposición de V. E., según lo prescripto por los arts. 102 y siguientes de la Ley 2393 (sobre matrimonio), y sus correlativos 22, 29 y 87 de la Ley 1565 (sobre Registro Civil en la Capital de la República).

Obsta también a que V. E. satisfaga los deseos del señor ministro requirente, la circunstancia de que la expresada nota marginal, implica la ejecución en territorio de la República, de una sentencia dictada en país extranjero con el que no existe tratado; esa ejecución sólo puede practicarse por orden del Juez respectivo y en la manera que la ley misma lo expresa, según lo prescripto por los arts. 558, 559 y 560 de la Ley de Procedimientos Civiles de la Capital.

Y suponiendo, por otra parte, esa sentencia, la aplicación de una ley extranjera en el territorio de la Nación (Código Civil Alemán) es al juez respectivo y a petición de partes a quien y como corresponde juzgar de su aplicación, según el texto claro y terminante del art. 13 del Cód. Civil.

Por último, según el propio texto de la sentencia de que se trata, y que se transcribe, ella declara disuelto el matrimonio mencionado antes y celebrado en esta Capital, disolución de evidente

invalidez en la República, en presencia de los arts. 14, 165, 198, 219 y 220 del Cód. Civil, y sus correlativos 7, 64, 81 y 82 de la Ley 2393.

Punto tan serio y que tan directa y gravemente afecta al espíritu y texto de nuestra legislación civil no puede ser materia de una resolución administrativa de V. E., tanto más cuanto que concurren las circunstancias y consideraciones que he dejado expuestas.

En consecuencia de lo dicho, reputo que V. E. debe devolver estos antecedentes al señor ministro requirente, mostrándole la imposibilidad legal de satisfacer su pedido, así como la forma y procedimiento a observarse en el caso, de acuerdo con las disposiciones citadas. — Julio de 1906.

=====

Cuando un empleado ha sido pagado unas veces a jornal, y otras a sueldo, no dependiendo de su voluntad la forma de pago, no hay razón para no considerarlo por ese hecho, como no desempeñando funciones permanentes en la Administración.

#### **Emilio Loutre, solicitando jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Dada la existencia del decreto de junio 9 del corriente año, que corre agregado, sería necesaria una reconsideración en forma, para tomar en cuenta el pedido del interesado contra la resolución de la Caja de Jubilaciones que aquel decreto confirmó.

Aunque el que suscribe, es opuesto a toda reconsideración cuando no hay de por medio un grave interés público, lo que bastaría para cerrar todo procedimiento en el caso, considero justo recordar que, dadas las fechas comparadas de la última presentación del postulante y del mencionado decreto, éste no ha podido tener en cuenta a aquélla.

Reputo también equitativo manifestar que, si bien es cierto que el recurrente ha sido unas veces pagado a *jornal* y otras a *sueldo* y que no siempre se le ha hecho el descuento de la Ley 4349, no es menos cierto que tal manera de pago no ha dependido de su voluntad; que sus servicios en la Administración han sido los permanentes que menciona la excepción del inc. 3º del art. 8º de la Ley 4349, y que la contribución del 5 % no ha dependido tampoco de él, lo

que no impide que, como en casos análogos, se haga con arreglo y en la manera que lo establece el inc. e del art. 2 del decreto reglamentario de la citada Ley 4349.

Estas consideraciones que en justicia pueden oponerse a la resolución de la Junta Administrativa de la Caja de Jubilaciones, podrán ser tenidas en cuenta por V. E., si reputa oportuno entrar en una reconsideración, en obsequio a la justicia que podría haber, en atender el reclamo de un viejo y honrado servidor, de lo contrario sería el caso de mantener el decreto mencionado de junio 9 del corriente año. — Julio de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3874, pág. 101, de octubre 5 de 1908.*

=====

Los ríos no navegables son bienes públicos de los Estados que atraviesan. Las contiendas entre una Provincia y otra por razón de tales ríos, son extrañas al Poder Ejecutivo, compitiendo a la Suprema Corte Nacional conocer de ellas.

### **Gobierno de Córdoba, sobre devolución de un dique en el Río Carcarañá.**

*Excmo. Señor:*

El río Carcarañá es una corriente de agua *por cauce natural*, y en tal concepto y de acuerdo con la doctrina establecida por nuestra legislación civil, es un bien público de aquellos a que se refiere el art. 2340, inc. 3° del Cód. Civil.

Y siendo, según el informe producido, un río no navegable, es un bien público del Estado o Estados particulares que atraviesa, y en la parte que a cada uno corresponde, quedando sujeto a su jurisdicción en cuanto a su *conservación, gobierno y aprovechamiento*, que es hasta donde se extiende el dominio de los Estados, sobre sus bienes de carácter público; siendo, por otra parte, ese río, por su no navegabilidad, técnicamente constatada, extraño completamente al dominio y gobierno de V. E., dado que está fuera de los incs. 9 y 12 del art. 67 de la Constitución.

No navegable de hecho el río Carcarañá, y no siendo por ende adaptable la comunicación por sus aguas, las causas que pudieran

motivar la jurisdicción y dominio excluyente de V. E., en razón de la navegación y comercio marítimo, desaparecen, quedando el dominio en poder de los Estados particulares cuyos territorios cruza y ocupa (art. 104 y concordantes de la Constitución).

Ahora bien, las diferencias que, con motivo del aprovechamiento de tales ríos o cursos de agua no navegables, pudieran suscitarse entre los Estados cuyos territorios atraviesan, deben ser sometidos y resueltos por la autoridad constitucional y legal llamada a dirimir las cuestiones trabadas entre tales entidades, autoridad que no es otra que la Suprema Corte de Justicia, según el art. 100 de la Constitución e inc. 1 del art. 1 de la Ley 48.

Y así, si en el presente caso, la Provincia de Córdoba se siente lesionada por actos o autorizaciones dadas por la Provincia de Santa Fe en el expresado río, es ante ese alto Tribunal y no ante V. E., ante quien deben ocurrir en desagravio de sus intereses o derechos heridos.

Y en cuanto a los particulares que hayan construído diques o represas, en ejercicio del derecho de usar y gozar del río, como bien público, según el art. 2341 del Cód. Civil, si ellos han abusado y salvado los límites que a su derecho pone la expresada disposición y sus correlativos, los arts. 2642, 2643, 2645 y 2646 del mismo, la autoridad judicial respectiva y competente y no V. E., es quien debe traerles al goce y uso legal del río que aprovechan, salvando los derechos concurrentes que aleguen los Estados y aún los otros ribereños que pudieran decirse también lesionados.

En estos conceptos pues, reputo que V. E. debe excusarse de intervenir en este asunto, en la manera requerida, y dirigirse al Gobierno de la Provincia de Córdoba significándole esa falta de jurisdicción para pronunciarse. — Agosto 2 de 1906.

=====

Al lindero de la ribera o camino público sobre un río navegable, no puede afectársele en su propiedad privada para rectificar aquél, salvo el caso que mediara expropiación. Tratándose de un camino comunal, es a la Municipalidad respectiva a quien corresponde el pago de la expropiación, si ella se efectuara.

**Don Horacio Harilaos, reclama del terreno que se le toma con motivo de la nueva línea de la calle Pedro Mendoza.**

*Excmo. Señor:*

Según aparece de los títulos de propiedad que en copia simple acompaña el Sr. Horacio D. Harilaos, en representación de su esposa la señora Adriana Aguirre de Harilaos, y cuyo origen data de una venta efectuada en 1856 por doña Paula Estrada de Ballester a don José Marcelino Lagos, el bien que motiva la presente reclamación no es ni ha sido limítrofe con el Riachuelo, si no quedaba frente a él, *calle por medio*.

Por otra parte, a estar de lo informado por el Departamento de Obras Públicas de la Municipalidad, los galpones de propiedad de la señora de Harilaos, en 1867, estaban ubicados a 34 metros y 54 centímetros, o sea a 40 varas de la línea de ribera, de acuerdo con las prescripciones vigentes en aquella época, es decir, salvando las 40 varas para el servicio público, que a uno y otro lado del Riachuelo, debían respetar los propietarios, según lo disponían los decretos del Gobierno de 6 de noviembre de 1823 y de 29 de noviembre de 1826.

Se ha comprobado también que, antes de la ejecución de la ley provincial de 27 de enero de 1879, las construcciones de la propiedad referida estaban, más o menos, a 35 metros de la ribera, respetándose así la calle o camino público con que lindaba hacia el Riachuelo, en la extensión que marca el art. 2639 del Cód. Civil, ya vigente, y en sustitución de aquellos decretos gubernativos.

Considero con estos antecedentes, y en razón de la inviolabilidad con que el art. 17 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de propiedad, que el camino o calle pública que existió siempre entre el Riachuelo y la propiedad de la señora de Harilaos y que ésta respetó en todo tiempo, con arreglo a las disposiciones citadas, no ha podido ser rectificado ni ensanchado por la Municipalidad en detrimento de la expresada propiedad, no sólo porque no siendo

límitrofe con el Riachuelo, como lo constatan los títulos y el precedente informe de la Oficina de Tierras, no está obligada a lo prescripto por el art. 2639 del Cód. Civil, sino también, porque no hay ley de expropiación en forma, que autorice su desapropio, ni existe pago previo de indemnización por ello.

Pero como el señor Harilaos no resiste ese desapropio que la Municipalidad requiere, siempre que se le indemnice como corresponde, se hace factible prescindir de esa ley, quedando sólo por resolver en el caso, si es a la Nación directamente o a la Municipalidad, a quien corresponde hacer el pago mencionado.

Teniendo en cuenta de que el desapropio de que se trata, ha sido iniciado y exigido por la Municipalidad, respondiendo a propios intereses de carácter comunal en ejercicio de propias facultades, y sin que haya mediado causa, orden o autorización, que venga de Autoridad Nacional, es obvio que ese pago corresponde a aquélla, quien lo origina y quien lo exige. Cualquiera que sea el texto de la ley provincial de 27 de enero de 1879 que la Municipalidad entiende aplicar, y cualquiera que haya sido la modificación sufrida por la línea de la ribera del Riachuelo en las obras practicadas, la propiedad en cuestión, que ningún vínculo tiene con él, tiene que ser indemnizada por ella en la parte que le afecta la rectificación de la calle o camino público, en que se haya empeñada.

En mérito de estos antecedentes, sin negar el derecho del reclamante a ser indemnizado en el caso de desapropio de que se trata, debe considerarse que esa indemnización pertenece a la Municipalidad, siendo extraña a V. E. — Agosto 8 de 1906.

=====

Procede la jubilación de un operario imposibilitado, si ha servido permanentemente a la Administración, aun cuando no haya figurado en cargos de la Ley de Presupuesto, siempre que alcance los años requeridos de servicio.

#### **Don Joaquín Ghiara, sobre jubilación.**

*Excmo. Señor:*

El recurrente Joaquín Ghiara, tesorero de la Casa de Moneda desde 1882, ha sido en realidad, y según resulta de los certificados y circunstancias que anteceden, un empleado a sueldo, pues a pesar



de no haber figurado en el Presupuesto General, resulta que ha trabajado permanentemente, y que como empleado, se le ha pagado siempre su remuneración mensual.

En tal concepto está comprendido dentro del inc. 1º del art. 2º de la Ley 4349, reformada por la Ley 4870, y fuera de la exclusión que sanciona el inc. 3 del art. 3 de la misma ley, por hallarse comprendido dentro de la excepción de su última parte, y ser posible el descuento a que ella se refiere.

A esto corresponde en el caso, como en los análogos, según jurisprudencia establecida, el inc. e) del art. 2º del decreto reglamentario de la citada Ley 4349, que es de todo punto aplicable, para hacer efectiva la contribución del descuento del 5 % referido.

Y resultando, por otra parte, que el postulante ha servido más de 30 años permanentemente sin interrupción y como empleado, así como que del informe del Departamento de Higiene está imposibilitado para el trabajo, le comprende el beneficio del art. 29 de la citada Ley 4349 reformada en las condiciones de la Ley 4870.

En consecuencia, creo que esta jubilación debe ser acordada en la proporción determinada por la Contaduría de la Caja de Pensiones, en su precedente informe, teniendo presente al mismo tiempo, las consideraciones del señor Asesor de la Junta, concordantes con las que dejó hechas, para revocar la resolución denegatoria que ella ha producido. — Agosto de 1906.

=====

El retiro voluntario es aquél que se hace a pedido del militar interesado. Debe acordarse o rechazarse, según encuadre o no en las disposiciones de la Ley 4707, pero no puede el poder Ejecutivo cambiarlo, concediéndolo en condiciones en que no fué solicitado.

**Coronel Gordillo, solicita su retiro.**

*Excmo. Señor:*

El retiro *voluntario* es aquel que se concede a pedido del militar interesado en retirarse, y basado en la propia y expresa manifestación de voluntad en tal sentido.

Si esa manifestación, por error o por cualquier otra causa, pre-

senta condiciones para aquél, que no caben dentro de la ley, aun en relación a las circunstancias y jerarquía del militar recurrente, está en las facultades de V. E. rechazar el pedido, pero no está dentro de ellas, interpretar o extender esa manifestación, acordando un retiro esencialmente voluntario en diversas condiciones de lo requerido, por más que con razón se le encuadre dentro de las prescripciones legales que lo rigen.

Esto último importaría, por otra parte, convertir ese retiro voluntario en retiro administrativo, que la ley no comprende ni autoriza; y por otra parte, implicaría poner al militar peticionante en estado distinto a su pedido, por más que la ley lo haga depender de su propia y exclusiva voluntad.

Si el Coronel Gordillo, por error o por lo que fuere, pidió su retiro de acuerdo con el art. 65, cap. VI, título II de la Ley 4707, y V. E. se apercibió que no era procedente en tales condiciones, tratándose de un retiro voluntario a que se refiere el art. 7º, cap. II, título III de la expresada ley, pudo V. E. rechazarlo por no encuadrar dentro de la ley, dadas las condiciones del pedido, pero no cambiarlo contrariando su propia índole, al concederlo dentro de condiciones en que no fué solicitado.

En tales circunstancias, reputo atendible el nuevo pedido del recurrente, en el sentido de dejar sin efecto el decreto de junio 30 del corriente año que a él se refiere, y que estimo susceptible de reconsideración dadas las razones que acabo de manifestar. — Setiembre 10 de 1906.

=====

El Poder Ejecutivo no puede reconocer antigüedades y sueldos atrasados de un militar, que no nazcan de disposiciones expresas de la ley. El Congreso es el único que puede reconocer servicios que motiven tales antigüedades y sueldos.

**Don Eleodoro Damianovich, Cirujano Mayor del Ejército,**  
sobre pago de haberes.

*Excmo. Señor:*

Resulta de los antecedentes agrupados en este expediente:

1º — Que si bien es cierto que la ley de octubre 18 de 1888,

encontró al recurrente en el empleo de Cirujano Mayor Director de Sanidad, no lo es menos que esa ley sólo empezó a producir sus efectos, según sus propios mandatos (art. 12), desde 1890, en que se organizaron por el P. E. los cuerpos de sanidad creados por ella, y en que, por otra parte, se entregaron al recurrente (20 de mayo de 1890 según informe de la Contaduría) sus despachos de Inspector General, a que se refiere el art. 2 de la mencionada Ley 2377.

2º — Que ya sea que el Congreso esperara la reglamentación referida por el P. E., o que ocurrieran las circunstancias que expresa el recurrente, y que obstaran a que la Ley de Presupuesto de los años 1888 y 1889 no señalaran recursos para satisfacer la nueva organización el hecho es que, esas leyes no dieron lo necesario para atender los sueldos y compensaciones de las jerarquías creadas por la expresada Ley 2377.

3º — Que, por último, el reconocimiento de la autoridad de que hace mérito el peticionante, sólo procede de la simple resolución ministerial de junio 23 del año ppdo., la que en caso alguno puede reconocer ni crear derechos que obliguen a la Nación, como pudiera hacerlo además de la ley, un decreto del P. E., que proveyese a la ejecución de la voluntad legislativa, dentro de lo instituído por el inc. 2 del art. 86 de la Constitución.

Ante tales circunstancias, creo que V. E. no puede reconocer la antigüedad que se requiere, y menos, a los efectos del cobro de sueldos atrasados que se pretende, teniendo en consideración las siguientes observaciones:

1º — Que en ningún caso puede V. E. cambiar la época en que una ley empezó, de acuerdo con sus propias disposiciones, a producir sus efectos; tanto más en el caso presente, cuanto que consta la fecha en que para el recurrente empezaron a producirse aquéllos (20 de mayo de 1890).

2º — Que aún aceptada la antigüedad pretendida, si ello fuera posible, V. E. no podría reconocer derecho a cobro de sueldos en los años 1888 y 1889, dado que las leyes de Presupuesto respectivas, ni ninguna otra, le autorizó en momento alguno para pagarlos, cualquiera que fueran las razones que obstaron a que tal autorización no se dictara por el Congreso en la mencionada oportunidad. (Inc. 13, art. 86 de la Constitución).

3º — Que por último, según el valor secundario de la resolución

ministerial de junio 23 del año ppdo., a que antes me he referido, no ha podido crear el derecho que se dice adquirido y que sirve de base a la reclamación del recurrente, no sólo por lo dicho, de que ella no es capaz de obligar a la Nación, sino porque, aun cuando lo fuera, su texto no da lugar expresamente a reclamaciones ulteriores.

Si los servicios del señor General Asimilado Dr. Damianovich, se prestaron desde la fecha de ley, si desde entonces, le correspondió en justicia la asimilación del art. 3 por encontrarse en esa época en servicio, justo parecería reconocer la antigüedad desde entonces y aún pagar los sueldos devengados en el carácter legal adquirido; pero eso no depende, ni puede depender de V. E., que carece de facultad para modificar los términos precisos de la ley, y así como da los elementos necesarios para pagar las sumas que lo reclamado representa, no habiendo, por otra parte, derecho alguno adquirido que sea capaz de obligar a la Nación en el sentido indicado.

Quien únicamente puede hacer esto, es el Congreso, el que tomando en cuenta las circunstancias anotadas y alegadas por el recurrente, así como la realidad de los servicios prestados en el carácter que se atribuye, puede en el caso especial de que se trata, si así lo encontrare por conveniente o justo, modificar aquella ley y proveer los medios de hacer los pagos requeridos, reconociendo el derecho de antigüedad que se alega, con todas sus consecuencias, lo que entretanto V. E. no está en condiciones de hacer. — Setiembre 11 de 1906.

=====

No procede el reconocimiento de un título de propiedad sobre tierras en la Puna de Atacama, otorgados por la República de Bolivia antes de la fijación de límites entre nuestro país y dicha República.

**Don Pedro Zambrano, sobre derechos a tierras en el Territorio de Los Andes, concedidas por el Gobierno de Bolivia.**

*Excmo. Señor:*

El estudio del expediente promovido por don Pedro Zambrano, pretendiendo que el P. E. ordene la inscripción de los títulos que acompaña, en el Registro de la Propiedad de la Gobernación de Los Andes, previo reconocimiento de su perfecta legalidad, resulta:

1º — Que las tierras a que se refiere esta petición, son unas ciénagas, que don Severo Melgarejo adquirió del Gobierno de la República de Bolivia en 1868, de acuerdo con las leyes vigentes en dicho país y situadas en la costa de Antofagasta, de la Provincia de Atacama.

2º — Que el referido Sr. Melgarejo, perdió la posesión de esas ciénagas en 1879, en que pasaron al dominio de la República de Chile, como consecuencia inmediata de la ocupación, de hecho, por las armas chilenas, de toda la Provincia de Atacama.

3º — Que el postulante Sr. Zambrano, habiendo adquirido dichas tierras de los legítimos sucesores del causante Melgarejo, con posterioridad al Tratado definitivo de límites Argentino-Boliviano de 10 de mayo de 1889, aprobado por Ley 2851, se considera como si las hubiese adquirido del Gobierno argentino, bajo cuya jurisdicción hoy se encuentra la Provincia de Atacama.

Basta enunciar estas conclusiones, para considerar improcedente, en un todo, esta reclamación.

En efecto, con respecto al propietario originario del recurrente, o sea el Sr. Melgarejo, nada tiene que hacer el Gobierno argentino, puesto que aquél adquirió del Gobierno de Bolivia, mediante una suma de dinero que ingresó en su tesoro-público, las ciénagas de referencia.

La circunstancia de que, con posterioridad, de acuerdo con el Tratado de Límites celebrado el 10 de mayo de 1889 entre dichos Gobiernos, y en cumplimiento del laudo de la Comisión Demarcadora de 24 de marzo de 1899, tales tierras hayan quedado en territorio sujeto a la soberanía argentina; sólo demuestra la improcedencia de la venta efectuada a Melgarejo por el Gobierno de Bolivia, sobre tierras no pertenecientes a su soberanía.

Los sucesores de Melgarejo, que no han podido, por ningún título legal, adquirir sobre dichas tierras, mayores ni más derechos que los que tenía el causante, tampoco pueden transmitirlos al recurrente.

Y como la posesión treintenaria que requiere nuestra ley civil, tampoco se ha operado por los antecesores ni por el peticionante sobre dichas tierras, desde que Melgarejo las adquirió en 1868, y perdió la posesión en 1879, sin haberla podido transmitir a sus suce-

sores; tampoco puede invocar el Sr. Zambrano, ni la calidad de ocupante, en favor de sus pretensiones.

Por ello y de acuerdo con prescripciones legales bien conocidas, opino que V. E. no debe hacer lugar a esta improcedente petición. — Setiembre 11 de 1906.

=====

El Poder Ejecutivo no puede autorizar a la Junta de Excepción, a ampliar la interpretación de los términos *madre viuda* (Ley 4707) a la madre abandonada. La viudez debe resultar, ya sea del hecho acreditado del fallecimiento del marido, o de una presunción de fallecimiento judicialmente declarada.

**Junta de Excepción de la Capital, pide se cambie la denominación de madre viuda por la de madre abandonada.**

*Excmo. Señor:*

El texto y espíritu del inc. b) del art. 63 del Cap. XI, Título I de la Ley 4707 sobre organización militar, exceptúa del servicio respectivo al hijo natural o legítimo de *madre viuda*, que atienda a su subsistencia con su trabajo personal o a la de un padre septuagenario o impedido.

Interpretando este texto y traduciendo el espíritu que tal disposición encierra, de la manera restrictiva que corresponde, dado que se trata de una prescripción legal que sanciona una excepción o privilegio en favor de determinada persona, a quien dispensa de prestar el servicio común a que se refiere el art. 21 de la Constitución, se llega necesariamente a la conclusión, de que ni la junta de excepciones que se dirige a V. E., ni V. E. mismo puede entender ni interpretar en la forma que se insinúa, la expresión de la ley *madre viuda*, para comprender en ella la de *madre abandonada*.

La viudedad de que en la Ley 4707 se trata, es un estado perfectamente preciso; la de una mujer cuyo marido ha fallecido, ya sea que ese fallecimiento sea un hecho claramente constatado, sea que constituya un hecho legal, fundado en el caso extraordinario de una presunción de derecho legalmente establecida.

Lo primero no ofrece dificultad en el caso, dado que es elemental la manera de establecer el fallecimiento del marido (arts. 103 y siguientes del Cód. Civil), lo segundo, es decir, la presunción

de fallecimiento, sólo puede resultar del procedimiento legal, de la declaración judicial y de la observancia de los términos y requisitos a que se refieren los arts. 113 y siguientes del Cód. Civil.

Recién, después de todo ello, es lícito considerar la presunción aludida, como el hecho real de fallecimiento y a los efectos que ese hecho es capaz de producir en todo sentido.

En tales conceptos pues, no es lícito a ninguna junta establecer una *viudedad* que no surja estrictamente de una realidad constatada, o de una presunción judicialmente establecida en documento fehaciente; si así procedió la junta oficiante, como ella misma lo expone, extralimitó los términos de la ley, y debe ser reducida a ella de manera que corresponda y dentro de lo indicado por el señor Auditor de Guerra, en su precedente informe.

Me abstengo de pronunciarme sobre los otros puntos que considero de simple procedimiento administrativo, ajenos a la aplicación de la ley, y propios más bien de la acción directa de V. E. dentro del orden interno de las funciones del Departamento de Guerra. — Setiembre 13 de 1906.

=====

Los abogados vocales del Consejo Supremo de Guerra y Marina, sin ser militares, gozan del estado de tales, por asimilación legal mientras prestan servicios, sin distinguir entre permanentes o transitorios. No perciben sino sus sueldos, sin tener derecho a sobresueldos, por no autorizarlos la Ley de Presupuesto.

**Luis María Campos, Vocal del Consejo Supremo de Guerra,  
reclama sobresueldos de asimilado.**

*Excmo. Señor:*

La obligación en el P. E. de dictar la asimilación correspondiente a los vocales abogados del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que establece el art. 20 del Cód. de Justicia Militar, hace creer que en el espíritu de esa ley está la intención de conferirle esa asimilación, sin distinción sobre sus efectos y consecuencias.

Las mismas bases de la organización de esa justicia, la igualdad de condiciones en que se entiende colocar a todos los vocales de ese alto tribunal (art. 19 del cód. citado), su nombramiento y duración en el desempeño de sus funciones, igual para todos (arts. 15 y 17),

así como la responsabilidad común dentro del orden militar (inc. 4 del art. 120, cód. citado), son circunstancias que concurren a demostrar que en ese espíritu ha existido y existe la intención de poner a los vocales abogados en el mismo pie de representación, prestigio, disciplina y responsabilidad de los que son realmente militares.

Dentro de tales conceptos y en atención al espíritu legal, que he invocado por reputar confuso el texto del art. 20 y el que debe V. E. cuidar en primer término (inc. 2 del art. 86 de la Constitución) puede considerarse con fundamento que los mencionados vocales abogados tiene su asimilación directamente de la ley, y por ello sin ser militares, son de los que gozan del estado militar, mientras prestan sus servicios sin distinción, entre permanentes o transitorios, de acuerdo con lo que establece el art. 16 del título II de la Ley 4707.

Así considerados los referidos vocales dentro del Consejo, es decir iguales a los militares por la asimilación legal, creo que no habría razón para negarles los derechos, preeminencias y prerrogativas inherentes al cargo, y procedería en consecuencia se ordenase la liquidación del sobresueldo que el recurrente reclama, si no se presentara el hecho de que la ley de presupuesto vigente no autoriza el pago de ese sobresueldo, hecho que levanta duda sobre la intención del Congreso en tal interpretación de la ley y suscita a V. E. un inconveniente insalvable para efectuar el pago requerido.

En efecto, las dos primeras partidas del ítem 1º inc. 2º del Anexo F (Departamento de Guerra) del presupuesto general sólo autorizan los sobresueldos del Oficial Superior, Presidente del Consejo y de los otros cuatro vocales militares, limitándose la partida subsiguiente del mismo ítem (3º) a consignar exclusivamente el sueldo de los vocales abogados.

Si bien la duda apuntada y nacida de la Ley de Presupuesto, puede desvanecerse ante las razones que dejo manifestadas y que reputo bastantes para dar por sentada la asimilación de los vocales abogados de los Consejos de Guerra, a lo que por otra parte, no se opone la Ley 4707 no sucede igual cosa con el inconveniente opuesto a V. E. por aquella ley. Su texto le pone en la imposibilidad material de ordenar el pago que se requiere por falta de autoridad legal para hacerlo.

En tal situación, considero que V. E. carece de autorización para acceder a lo que se pide, sin dejar de reconocer. por mi parte, el fundamento con que el recurrente podría llevar su reclamo al



Congreso, el que podría V. E. apoyar si coincidiese con lo expuesto dentro del espíritu del Cód. de Justicia Militar citado, ante el silencio de la Ley 4707 sobre asimilados, y en presencia de lo necesario a la más correcta organización de los tribunales militares. — Octubre 3 de 1906.

=====

El concesionario de obra pública no puede transferir su concesión sin autorización del Poder Ejecutivo, ni puede delegar "*motu proprio*" en terceras personas la ejecución de las obras concedidas.

**Gandulfo y Cía., sobre transferencia a la Compañía Tranways del Puerto de Buenos Aires, de su concesión en el Puerto.**

*Excmo. Señor:*

La concesión de la línea de tranvía en Puerto de la Capital, que el P. E. otorgó a los señores E. B. Gandulfo y Cía. por el decreto de 19 de febrero de 1902, en ejercicio de la autorización conferida por la Ley 2371, implica la realización de una obra pública.

En este concepto, esa concesión participa en cierto modo de la locación de servicios públicos, encomendados por el Gobierno a manos de los concesionarios y, en otro aspecto considerada, importa para ellos un privilegio de hecho, que debe interpretarse muy restringidamente, en razón de su excepcional naturaleza.

Del primer punto de vista, como servicio público, la construcción y explotación de aquella línea de tranvía, interesa a la comunidad, que no sea transferida a terceras personas, sin la previa autorización del P. E., que especialmente encargado por la referida Ley 2371 de la ejecución de aquella obra, de interés colectivo, la ha confiado a la acción de un concesionario que ha considerado con las suficientes garantías.

En la concesión de una obra pública, hay de parte del Estado un desprendimiento de soberanía, que se justifica por la conveniencia general que existe, en aprovechar los esfuerzos del capital y del trabajo individuales en la realización de esa obra. Pero el concesionario no adquiere, por el hecho de ser tal, autorización administrativa para delegar *motu proprio* en terceras personas, la eje-

cución de los servicios que le han sido encomendados por el P. E., aplicando la ley.

Pues, si hasta el orden de los derechos individuales, donde no media más interés que el personal, el contrato de locación de servicios, lleva la cláusula resolutoria de no poderse continuar por los herederos del empresario, cuando la obra de que se trate requiera en aquél cualidades que se han conceptuado especiales al celebrar el convenio (art. 1041 del Cód. Civil) tratándose de obras públicas, que afectan el interés colectivo, es indudable que el empresario no puede ser sustituido por terceros sin anterior conocimiento de sus condiciones y antecedentes, por ende sin previa autorización de parte del Estado.

Considerada ahora la concesión de los señores Gandulfo y Cía., del segundo punto de vista expresado, es decir, en cuanto ella importa un privilegio de hecho, es lógico que aquellos no pueden ejercitar mayores atribuciones que los que le confiere, taxativamente el decreto de 19 de febrero de 1902, con sujeción al que les fué acordada. Y es obvio que, por este decreto, los concesionarios no están autorizados para hacer transferencia de la concesión sin venia del Poder Público que se la ha conferido.

Tratándose, pues, de la transferencia de la concesión que los concesionarios han celebrado, sin la previa autorización del P. E. a una Empresa como la es la "Compañía de Tranways del Puerto y Ciudad de Buenos Aires Limitada", no considero oportuno referirme a las condiciones de seguridad y garantía que ofrezca ese nuevo adquirente, desde que V. E. no puede reconocer personería a los señores Gandulfo y Cía. para dicha transferencia, ni tampoco personería en la Compañía expresada para aceptarla.

Por estas consideraciones, sírvase V. E. no tomar en cuenta la transferencia que los recurrentes refieren en su escrito de 13 de marzo del año corriente, hasta tanto V. E. no se pronuncie como corresponde sobre dicha transferencia. — Octubre 4 de 1906.

=====

Careciendo el Intendente de Guerra del estado militar, no obstante su asimilación administrativa, no tiene derecho a cobrar gastos de representación, etiqueta y mesa, y por no autorizarlo tampoco la Ley de Presupuesto vigente.

**Intendente de Guerra, Dr. Seeber, solicita el pago  
de las asignaciones de representación, etiqueta y mesa.**

*Excmo. Señor:*

La asignación mensual que pide el señor Intendente General de Guerra Sr. Seeber, le sea abonada para sufragar gastos de representación, etiqueta y mesa, además del sueldo que le señala la ley de presupuesto vigente, la ampara el recurrente en su situación de asimilado por la Ley 3305, que creó las Intendencias Militares de Guerra y Marina y, a la vez, en el decreto del P. E. de fecha 2 de julio de 1902, que mandó liquidar, de la partida de eventuales del Ministerio de Marina, en favor del Intendente de la Armada, los gastos que reclama el peticionante.

Desde luego, se hace necesario tener presente que si bien es cierto que el Sr. Intendente General de Guerra, mientras desempeña sus funciones, ha sido asimilado al grado de General de Brigada, con sujeción a la que establece la primera y segunda cláusula del art. 10 de la Ley 3305, la última cláusula, de este mismo artículo, determina, en forma clara e indudable, que tal *asimilación no da derecho al estado militar*.

La asignación que precisamente gestiona el Sr. Intendente General de Guerra, es uno de los derechos inherentes al estado militar, del cual carece el peticionante por expreso mandato de la citada ley. Así resulta del inc. 2º del art. 18 de la Ley 4707, el cual dispone que “son derechos del *estado militar*, el goce del sueldo, suplemento o indemnización que la Ley de Presupuesto determine, de acuerdo con cada empleo y con cada situación de revista”.

Si a estas circunstancias se agrega que, no habiéndose derogado, por la Ley 4707, el citado precepto legal de la Ley 3305, que estatuye que “la asimilación no da derecho al estado militar”, y, por otra parte, se tienen en vista que sólo gozan de él los asimilados que se determinan en aquella ley, con arreglo al art. 16 de la misma, la que no le quita sobre los asimilados, se desprende que no procede la reclamación que motiva el caso ocurrente. Así lo ha entendido en casos análogos (caso Dideos).

Y, así en el inc. 1º del citado art. 18 de la Ley 4707, menciona y especifica los sueldos, suplementos e indemnizaciones que la *ley de presupuesto determina*, de cuyas especificaciones no puede separarse el P. E. en cuanto a erogaciones del tesoro público, en este como en ningún caso; resulta también, que según la misma ley los suplementos e indemnizaciones inherentes al estado militar, están subordinados a las prescripciones de la ley anual de presupuesto.

Y como el vigente no consigna ninguna partida, relativa a lo que pide el reclamante, es obvio que, de este punto de vista, tampoco puede ser atendido su pedido.

Por estas consideraciones legales y en razón de que el decreto de 2 de julio de 1902, que invoca el Sr. Intendente General de Guerra en virtud del cual el P. E. ordenó la liquidación de gastos de etiqueta, representación y racionamiento en favor del Sr. Intendente de la Armada, *imputando tal gasto* a eventuales del Ministerio de Marina, es un acto administrativo que no implica reconocer, en aquel empleado asimilado, derechos exclusivos al estado militar de que carece por las leyes, de manera que no siente jurisprudencia con relación al caso ocurrente.

Opino que V. E. no debe acceder a lo solicitado. — Octubre 17 de 1906.

=====

El oficial inutilizado en el servicio para continuar su carrera militar, está por la Ley 4707, en distinta situación, del inutilizado para todo servicio.

Si la inutilización fué anterior a la vigencia de la ley citada, le es sin embargo aplicable, si su retiro tiene lugar después de su sanción.

**Teniente 1º Don César Bobbio, retirado con el 50% del sueldo de su empleo, pide ser comprendido en el art. 17 del tít. III de la Ley 4707.**

*Excmo. Señor:*

La propia afirmación del recurrente al pedir su retiro en noviembre 7 de 1905, y el informe de la Sanidad Militar de diciembre 18 del mismo año, constatan que la fractura de la pierna de que fué víctima, solamente le inutilizó para el servicio militar, es decir para continuar su carrera de tal.

Estas constancias le excluyen de lo prescripto por el art. 17 del título III de la Ley 4707, en que pide ser incluido y le comprenden dentro de lo prescripto por el art. 16 del mismo título y ley que es el que, por otra parte, sirve de base al decreto de V. E. de enero 17 del corriente año, que acordó el retiro solicitado por el recurrente, en las condiciones que expresa.

Es de observarse que, aun cuando el Teniente Bobbio, sufriera el accidente que le inutilizó para el servicio antes de la vigencia de la Ley 4707, sin embargo su pedido de retiro fué presentado bajo su vigencia, siendo imposible a V. E. pronunciarse a su respecto fuera de los términos de esa ley, cuyo art. 13 del tít. IV expresa-mente ha derogado todos los anteriores que se refieran a pensiones, limitándose a dejar subsistentes los efectos de las aplicadas anteriormente.

De aquí, que sea imposible hoy para V. E. aplicar al recurrente la Ley 3239, que antes se aplicó al Capitán Vega.

Estas circunstancias y el hecho de tratarse de la reconsideración de un decreto de V. E. que no adolece de nulidad ni envuelve un interés público, me inducen a creer que V. E. no debe hacer lugar a lo que se pide. — Octubre 22 de 1906.

=====

No deben evacuarse por el Ministro de Relaciones Exteriores, consultas de un Ministro Argentino en el extranjero, sobre asuntos implícitamente librados a la competencia y prudencia que en dichos ministros se supone.

**Ministro Argentino en el Paraguay, consulta sobre la inscripción en el Consulado de Don Felipe Becker.**

*Excmo. Señor:*

Creo que V. E. debe significar en repuesta a la doble consulta del Sr. Ministro de la República en el Paraguay, que están libradas a la confianza y competencia de la alta jerarquía que desempeña.

El registro del reclamante, don Felipe G. Becker en el Consulado General, procede, una vez llenados los requisitos de perfecta identificación y autenticidad a que se refiere el art. 99 del decreto de enero 15 del año corriente, reglamentario de la Ley 4722.

Así como la iniciación de la reclamación a que alude, cuya oportunidad y corrección está llamado a apreciar, identificada la persona que la motiva, comprobados y calificados los hechos que la originan por los medios comunes que los Sres. Ministros Diplomáticos disponen en el país donde actúan a nombre de su Gobierno.

Todo ello sin perjuicio de dar cuenta a V. E. en su oportunidad a los efectos que corresponda. —Octubre 22 de 1906.

=====

La amnistía sólo significa sobreseimiento de causas en curso y olvido o perdón de penas impuestas o en ejecución.

La amnistía por sí sola, no implica la reincorporación al ejército de los oficiales separados por condena, es necesario además, un decreto del Poder Ejecutivo que ordene la reincorporación de los amnistiados.

La colocación en el escalafón de los oficiales amnistiados y reincorporados, a los efectos de su antigüedad, es la que les corresponde por la fecha de su reincorporación.

#### **Tribunal de Clasificaciones Militares, consulta sobre oficiales amnistiados.**

*Excmo. Señor:*

Encuentro suficientemente motivada la consulta del Tribunal de Clasificaciones de Servicios Militares, de que instruye la nota que encabeza este expediente, sobre la antigüedad que corresponde acordar a los oficiales amnistiados y reincorporados al ejército, que menciona.

Creo que V. E. debe resolver esa consulta dando al decreto de agosto 1º del año corriente, el significado estricto y restringido que le corresponde, como aplicación de una excepción legal cual es la reincorporación a que se refiere la Ley de Amnistía (4939) y manteniendo dentro de los límites bien definidos que la ley orgánica militar (4707) establece a la antigüedad asignada a los oficiales de baja, y a los reincorporados al ejército, por razones que ella misma se abstiene de señalar y distinguir.

Así tomado ese decreto, como aplicación de la primera de esas leyes, dentro de lo estatuido por la segunda, y sin entrar en distinguos que ellas no autorizan ni permiten, y de que V. E. debe abste-

nerse según el inc. 2 del art. 86 de la Constitución; creo que V. E. debe resolver la cuestión propuesta en el sentido de declarar que la colocación que esos oficiales deben tomar en el escalafón, a los efectos del cómputo de su antigüedad para el ascenso, y a que se refiere el art. 4 del mencionado decreto, es el de su reincorporación al ejército, de conformidad a los arts. 12, 13 y 14 del tít. 2 de la Ley 4707.

Sirvan de base a esta opinión, las siguientes consideraciones; según el texto y espíritu del art. 1º de la Ley 4959, ella acuerda amnistía general para los delitos políticos y militares conexos con aquéllos y cometidos con anterioridad; dicha amnistía significa sobreseimiento de causas en curso y olvido y perdón de penas impuestas o en ejecución, según la extensión que a esa ley se le dió en la respectiva discusión y según la jurisprudencia establecida entre nosotros en materia de amnistía.

Este alcance no llega a hacer desaparecer la separación de las filas de los oficiales que fueron antes condenados y que después son amnistiados, el citado art. 1º nada dice a ese respecto, lo que hace creer que los mantiene separados tanto más cuanto, que el art. 2 de la misma ley es bien explícito cuando, facultando al P. E. para reincorporar a esos oficiales da a entender que los reputa siempre fuera de sus filas, puesto que exige para su reincorporación un acto expreso y facultativo de parte del P. E.

En presencia del recordado texto de los arts. 1 y 2 de la Ley 4939, dada su correlación observada, teniendo presente la discusión habida en el Congreso a su respecto, y los antecedentes de otras leyes anteriores y análogas, que fueron seguidas de otras, reincorporando a los mismos amnistiados, creo que puede afirmarse sin vacilación que la sola vigencia de la Ley de Amnistía no implica, "ipso-jure", la reincorporación al ejército de los oficiales por ella beneficiados y con efecto retroactivo, sino que persiste su separación anterior hasta llenado el requisito del art. 2 de la ley, es decir, hasta que el P. E. haga uso de la facultad expresa que le confiere el citado artículo de aquella ley.

De aquí que el decreto de agosto 1º del año corriente, no haya podido tomar a los oficiales que reincorpora, sino como separados del ejército, es decir de baja, y que, como a tales, no les haya podido

considerar sino en las condiciones en que la Ley Orgánica Militar los considera cuando están en tales circunstancias.

En este concepto, la colocación en el escalafón, a que alude el art. 4 del citado decreto, no puede ser otra que la de la ley citada a la cual debe conformarse, es decir que, con arreglo al art. 12 del tít. II de la mencionada Ley 4707, no puede ni debe computarles en su antigüedad ni en sus servicios “el tiempo que han estado fuera del ejército por haber sido dados de baja por cualquier causa que sea”, y que, de conformidad con el art. 14 del mismo título, y ley, no puede reconocerle otra antigüedad que la de su reincorporación, aun cuando el tiempo de baja le pueda ser computado a los fines de su retiro.

Conceptuando pues, que al regir la ley de amnistía 4939, no ha expresado derogar ni deroga ninguna de las disposiciones de la Ley 4707, que rige la organización del ejército, y recordando que V. E. al aplicar la primera no puede faltar a la segunda, es que pienso que al art. 4º del decreto citado de agosto 1º del corriente año, no puede dársele otro alcance que el que dejo consignado, resolviendo la consulta presentada en la manera referida. — Octubre de 1906.

=====

No basta que un empleado sea destituido en virtud de un sumario administrativo, para que pierda el derecho a la jubilación; para esto último es necesario, que en dicho sumario se hallan probado, en forma clara y evidente, las faltas imputadas, con sujeción a los principios legales que rigen la prueba.

**Dr. Miguel Rodríguez ex-contador de la Contaduría Nacional,  
pide jubilación.**

*Ercmo. Señor:*

Del estudio del expediente iniciado por el Contador D. Miguel Rodríguez, solicitando su jubilación al amparo del inc. 3º del art. 2º de la Ley 2219, se desprenden varias cuestiones a considerar.

En primer lugar, la separación de Rodríguez conjuntamente con otros miembros del personal superior de la Contaduría General, por decreto de 26 de abril de 1893, después de haber prestado más de 21 años de servicios, pone al recurrente en el caso de haber per-



dido el derecho a la jubilación que procura a mérito del inc. 1º del art. 15 de aquella ley.

Desde luego, resulta de autos que, con motivo de acusaciones formuladas por la prensa contra el entonces contador Rodríguez, por mal desempeño en materia de servicios, éste se encontraba suspendido de su empleo *a solicitud suya* y, en esa situación, V. E. decretó en fecha 7 de octubre de 1892, que *ningún cargo formal* resultaba contra el postulante de las investigaciones practicadas al efecto.

De manera que, en virtud del decreto de 7 de octubre de 1892, quedó aquél inhabilitado para continuar en el ejercicio de las funciones de su empleo, teniendo hasta entonces más de veinte años de servicios, desde que, la resolución de V. E. que declaró que ningún cargo se había comprobado contra el postulante, era la consecuencia lógica de las diligencias verificadas que satisficieron la inconsistencia de las acusaciones que la prensa pronunció.

Pero, según informa la Contaduría General, el ex contador Rodríguez siguió suspendido, a pesar de haber sido declarada por V. E. su rehabilitación en la forma expresada y, posteriormente, por decreto de 26 de abril de 1893, fué destituido con varios otros altos empleados de la repartición mencionada.

¿Cuál fué el origen de este último decreto? Desde que en su considerando primero se afirma, que en el voluminoso expediente formado al efecto, los jefes de la Contaduría *se han formulado recíprocamente acusaciones por faltas graves* cometidas en el desempeño de sus funciones, de las que resultan *probadas algunas*; lógicamente se desprende que, el motivo de tal destitución consistió así en las imputaciones recíprocas de faltas graves que se hicieron los empleados con respecto al desempeño de sus funciones. Es de notarse, por otra parte, que no se especifican concretamente aquellas faltas, apreciándose que sólo algunas han sido comprobadas, sin indicarse cuáles son ellas.

El segundo considerando del decreto de la referencia, al tratar de “omisiones o negligencias graves en el cumplimiento de sus funciones”, tampoco determina, ni clasifica en forma concreta, cuáles son los actos del empleado que merecieron, a juicio de V. E., el calificativo de falta grave castigada con destitución.

De manera pues que, tratándose de un proceso administrativo,

originado por acusaciones de unos empleados contra otros igualmente procesados, entre los que estaba el ex contador Rodríguez, la comprobación clara y evidente de las faltas imputadas, es indispensable para considerarle, dentro de la sanción penal del citado inc. 1º del art. 15 de la Ley 2219, por cuanto, en analogía de circunstancias, el inc. 7º del art. 276 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal en armonía con el inc. 10 del mismo artículo, declaran ineficaz legalmente, la declaración de un coprocesado contra otro, como la del denunciante a quien afecte el hecho denunciado.

Si a estas circunstancias se añade la de que, al dictaminar el Sr. Procurador del Tesoro en aquel expediente, aconsejaba la destitución de Rodríguez por razones de mejor servicio público, *sin que ello afectara la fama del recurrente*, por cuanto sólo respondía a exigencias de orden administrativo; si se añade, también la de que, al dictaminar el Sr. Procurador General de la Nación, su ilustrado antecesor el Dr. Kier, expresa que se trata de “irregularidades de procedimiento, errores de cálculo y apreciaciones equivocadas”, me inclino a creer que el ex contador Rodríguez, no ha perdido el derecho a la jubilación que pretende en virtud de su destitución.

Podrán ser suficientes las irregularidades, faltas u omisiones imputadas por unos empleados a otros, para que V. E. ordene su destitución por razones de mejor servicio público, ya que, la facultad de nombrar y remover empleados de la administración es privativa del P. E., en virtud de preceptos constitucionales, pero, a los efectos de aplicar la sanción penal del art. 15, inc. 1º de la Ley 2219, y 27 de la Ley 4349, para privar a un empleado, con veinte años de cumplidos servicios, del derecho a la jubilación, aquellas irregularidades, faltas u omisiones tienen que ser concretas, atestiguadas por elementos probatorios eficaces, para fundar un castigo o por lo menos la privación de un derecho consagrado por la ley.

Pues, cuando esas disposiciones legales hablan del empleado a quien se hubiere separado por mal desempeño de los deberes de su cargo, presumen la separación fundada en obligaciones mal desempeñadas, con relación a los reglamentos o instrucciones que los rijan y determinan y, cuya realidad, sea debidamente comprobada. Se trata de una pena o pérdida de un derecho adquirido, de modo que la interpretación de la ley debe ser restrictiva y su aplicación basada en hechos, clara y evidentemente demostrados.

Por estas consideraciones opino, respecto a la cuestión planteada, que el ex contador Rodríguez no se encuentra en el caso del inc. 1º del art. 15 de la Ley 2219, y su correlativo del inc. 1 del art. 37 de la Ley 4349.

La segunda cuestión de que se trata, o sea el fundamento de la resolución negativa de la Junta Administradora de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, es decir, en cuanto al descuento del 5 %, con que no ha contribuido el recurrente desde la época legalmente establecida, no puede ser resuelta contra el postulante.

En primer lugar, porque, aparte de que él no tenía sueldo alguno desde 1901, por lo que le era imposible contribuir con el aludido descuento al tesoro de la Caja, tampoco resulta imprescindible dicha contribución, según el texto de los arts. 18 y 19 de la Ley 4349, como lo son los años de servicio, la edad, o la imposibilidad física.

Tal circunstancia puede subsanarse, en armonía con el decreto de 14 de setiembre de 1904, descontando, además del 5 % de la jubilación que se acordara, el 3 % adicional para cubrir lo no descontado anteriormente.

Y, por último, el informe de fs. 23, los certificados médicos de fs. 4 a 5, el informe del Departamento de Higiene de fs. 24 y los documentos de fs. 7 a 10, comprueban legalmente que el recurrente es argentino, tenía 21 años, 2 meses, 26 días cuando fué separado de su puesto, 26 de abril de 1893, así como que estaba imposibilitado físicamente para desempeñarlo.

Estas actuaciones le dan derecho a la jubilación que solicitó el 16 de octubre de 1893, con sujeción al inc. 3º del art. 2º en armonía con el art. 1º de la Ley 2219, concordantes con los arts. 1º y 19 de la Ley 4349.

Por estas consideraciones opino que es el caso de modificar la resolución negativa de la expresada Junta de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, en el sentido de tomar en cuenta lo que dejo expuesto favorablemente al recurrente. — Octubre de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3888, pág. 439 de octubre 23 de 1906.*

=====

Lo concedido como servidumbre minera no puede ir más allá de los límites que marca la ley respectiva.

Lo concedido fortuitamente y en demasía por el P. E., es contrario a la ley, y por ende sin valor alguno, por lo que procede la revocación del decreto de concesión.

**Piaggio, Ferro y Cía., solicitando reconsideración  
sobre servidumbre de salinas.**

*Ercmo. Señor:*

Por decreto de 21 de julio de 1900 fué acordado a los Sres. Piaggio, Ferro y Cía., explotadores de unas minas de sal genuina en la Península de Valdez gratuitamente y en calidad de servidumbre minera, dos fracciones de tierra componentes en su totalidad de una superficie de 40.000 hectáreas.

Tomóse en cuenta como base de ese decreto:

El art. 48 del Cód. de Minería vigente, en cuanto establece las servidumbres de las minas a los objetos y usos que sus diversos incisos refieren.

La calidad inferior de las tierras que rodeaban las salinas explotadas por los concesionarios es lo que parece haber sido base para el otorgamiento de una extensión tan extraordinaria como servidumbre, y la conveniencia de estimular esas lejanas explotaciones de minas, donde según afirma el decreto aludido, trabajaban más de cien hombres, y se estaba construyendo un Ferrocarril Decauville hasta el Puerto próximo.

Más tarde el P. E., teniendo en cuenta la manera impropia e ilegal en que se habían acordado varias extensiones de tierra fiscal, bajo el título de servidumbre mineras, en presencia del uso abusivo que de esas tierras se hacía por los mismos concesionarios, dándoles mayor extensión a sus derechos y muy diversa aplicación de aquella que motivara la concesión misma, dictó el bien fundado decreto de julio 8 de 1905, que hizo cesar las ilegales concesiones gratuitas de grandes áreas fiscales y circunscribió a su verdadero significado y alcance, las servidumbres mineras, con arreglo al Cód. Civil y al Cód. de Minería, y cortó los abusos de los concesionarios que ya habían empezado a mirar las concesiones como derechos adquiridos, oponibles contra la Nación misma.

Y este decreto por sus fundamentos y por sus terminantes dis-

posiciones, comprendió evidentemente la concesión que el anterior decreto de 21 de julio de 1900 acordara a los Sres. Piaggio, Ferro y Cía., lo que éstos señores no tardaron en comprender presentándose ante V. E. con la reconsideración que piden del aludido decreto en lo que a ellos se refiere.

Es mi opinión que V. E. no debe hacer lugar a lo que piden, debe por el contrario mantener en toda su eficacia el decreto de julio de 1905, así como reputar sin efecto la concesión cuya propiedad se atribuyen los recurrentes, en todo lo que exceda los términos de la ley que les ampara como mineros.

Sirvan de base a esta opinión las siguientes consideraciones:

1º — Que no mediando un error de hecho, ni causa de nulidad conocida y probada, ni comprometido un interés de orden público, en el citado decreto de 1905, especialmente en relación a los recurrentes, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa existente y en consonancia con lo establecido en el decreto de junio 30 de 1896, V. E. debe abstenerse de reconsiderar aquél, a efecto de tomar en cuenta las pretensiones de los recurrentes.

2º — Que por otra parte, la concesión de servidumbre minera que en 1900 se hizo a los Sres. Piaggio, Ferro y Cía., siendo gratuita, no estaba dentro de las facultades del P. E.; contrariaba la ley general de tierras públicas y el art. 48 del Cód. de Minería, que no los autoriza en tal concesión, y alteró fundamentalmente el concepto legal de esas servidumbres al atribuirles el efecto de conferir a los concesionarios una posesión ilegal de la tierra que ellos no trepidan en asegurar que tienen exclusivamente y como un derecho adquirido.

3º — Que a estar a los informes producidos, ni la explotación misma de las salinas se hace en la extensión que se pretende, ni los concesionarios están dentro de las aplicaciones de la tierra concedida que mencionan los incisos del citado art. 48 del Cód. de Minería.

Según lo informado por la oficina de tierras, en julio 3 del corriente año, la mina conocida por *Salinas Chicas* no está en explotación quedando *ipso-facto* libre de servidumbre las 15.000 hectáreas que ella tenía afectadas y en cuanto a las 25.000 que afecta la llamada *Salinas Grandes* me atengo al mismo informe que considero autorizado, para afirmar que esa extensa área de tierra es excesiva para la actual explotación, la que según el Inspector Moriset, tiene bastante con 2.500 hectáreas a los fines de las servidumbres deter-

minadas por el art. 48 del Cód. de Minería, siendo de notar, por último, que gran parte de esa tierra sacada de su aplicación legal, está afectada al área de ganado, existiendo en ella una verdadera estancia.

4º — Que, dado lo dicho, no pueden aceptarse los derechos adquiridos que aseguran tener los recurrentes a las 40.000 hectáreas cuya posesión reclaman, tratando con ello de excepcionarse contra lo estatuido por el decreto citado de 1905.

No hay derecho adquirido cuando se obtiene de quien no puede constituirlo, cuando por su gratuidad es contraria a la ley, y cuando teniendo límites legales precisos para su ejercicio, se cambia a sabiendas su destino obligado, se le extiende más allá de la ley que lo autoriza, o se omiten las condiciones a que su goce estaba sujeto.

Unidas estas consideraciones a los fundamentos del decreto de julio de 1905, que son en todos sus puntos aplicables al caso de los Sres. Piaggio, Ferro y Cía., bastan para que V. El., tomando en cuenta los autorizados informes de la oficina respectiva, en cuanto al área necesaria para la explotación de la mina que hoy se trabaja (2.500/a.), resuelva este asunto en la manera que lo dejo indicado, sin perjuicio además de fijar a los recurrentes dentro de los términos del citado art. 48 del Cód. de Minería la indemnización respectiva en la manera que lo encuentre más conveniente. — Noviembre 7 de 1906.

=====

No hay disposición legal alguna, que impida a un pensionado de la Ley 4349, percibir la remuneración graciable que el Congreso quiera acordarle en ejercicio de la facultad que le acuerda el inc. 2 del art. 67 de la Constitución Nacional.

**Delia H. de García Mérou, viuda del Dr. Martín García Mérou,  
solicita pensión.**

*Excmo. Señor:*

No considero fundada la exclusión de la pensión legal que reclaman los herederos del Dr. Martín García Mérou, por la remuneración que le tiene acordada la Ley 4714; exclusión que tiene de

base, la negativa opuesta a su reclamo por la precedente resolución de la junta de la Caja de Pensiones.

El texto claro y expreso de la Ley 4714 denuncia por sí, que no pensiona, sino remunera; que acuerda una suma determinada por una sola vez, y con ello excluye la forma ordinaria y común del pago mensual que caracteriza lo primero.

Es cierto que, aún a despecho de texto tan terminante, se ha dicho en la misma discusión de la ley que, la remuneración acordada sería el monto de una pensión de cuatrocientos pesos mensuales durante un número de años, y de ahí se infiere que, cualquiera que sea la forma, lo acordado a los recurrentes no es sino una pensión.

Fuera de que es regla de sana interpretación no hacer radicar en los conceptos vertidos en la discusión, el espíritu y objetos de la ley, porque no puede nunca decirse que ella sea el resultado de lo que algunos dicen y no de lo que muchos callan; en el caso presente se opuso a lo dicho, que el Congreso no podía, contra su propia sanción (art. 54, Ley 4349), acordar una pensión del monto de la expresada, a menos de derogarla como corresponde, lo que no hizo, y esto concurre a demostrar, una vez más, que en la expresada Ley 4714, se propuso remunerar como su texto lo expresa, y no pensionar como se le atribuye sin razón en la interpretación ampliativa de aquél, contrariando sus palabras y la misma voluntad parlamentaria que ha mostrado mantener la ya referida limitación a las pensiones graciables a que se refiere el citado art. 54 de la Ley 4349.

Ahora bien, si lo dicho basta, como no lo dudo para establecer que los herederos del Dr. García Merón tienen una remuneración y lo que piden es una pensión, la exclusión de la una por la otra, no se produce, aún tomando el art. 49 de la Ley 4349 sin mayor comentario, por cuanto su texto y espíritu claro es oponerse a la acumulación de las pensiones que gobierna, pero no a las liberalidades, que el Congreso puede hacer y hace en ejercicio de la facultad que le acuerda el art. 67, inc. II de la Constitución, y que por otra parte, en nada afectan la economía y el régimen de la Caja, que ni las gobierna ni las paga.

Estas consideraciones me inducen a creer que V. E. debe reformar la precedente resolución de la Junta, en el sentido de acordar la pensión de que se trata, en la manera que por contabilidad se

ha establecido una vez que de los antecedentes resulta que los recurrentes se hallan dentro de las condiciones legales y como lo expresa el dictamen del Asesor Letrado de la repartición. — Noviembre 19 de 1906.

=====

Los matrimonios celebrados ante los Cónsules extranjeros en la República, son nulos, cualquiera que sea el alcance legal que se les atribuya en el país de origen de dichos Cónsules.

**Ministro de Suiza, consulta sobre legalización por el Gobierno Argentino de los casamientos efectuados por los Cónsules Suizos en la persona de sus súbditos.**

*Excmo. Señor:*

Desde 1880 en que el Sr. Cónsul de Suiza que autorizado por su Gobierno para celebrar matrimonios, y más tarde en 1887 en que se denunciaron matrimonios celebrados por Cónsules extranjeros en la República, se declaró que si bien tales matrimonios eran o podían ser válidos en los países a que pertenecían los Cónsules celebrantes, si así lo disponían sus leyes, ellos eran nulos incapaces de producir aquí los efectos legales que la ley civil atribuye a tales actos.

Vigente la actual Ley de Matrimonio, si bien han desaparecido requisitos y formalidades antes exigidos, no es menos cierto que ellos han sido sustituidos por condiciones e intervenciones de funcionarios tan indispensables para su validez como aquéllos.

Y como los Cónsules extranjeros en la República no han sido nunca ni lo son ahora, oficiales hábiles para consagrar válidamente matrimonios, ni con arreglo a la legislación anterior respectiva del Cód. Civil ni con la actual citada ley de matrimonio; los celebrados por los Cónsules continuán siendo nulos aquí, cualquiera que sea su validez que les acuerden las leyes del país a que pertenezca el Cónsul consagrante, por más correctos que se le consideren en general dada la leal intención de los contrayentes.

En tales conceptos, que es lo que nuestra jurisprudencia y ley actual consagra y a efecto de establecer la validez de las uniones de que se trata, queda a los interesados el camino espédito, ante los



tribunales judiciales para ajustarlos a la ley vigente, llenar sus requisitos, dar intervención a los oficiales públicos del caso y asentar la constancia del acto en los registros correspondientes y en la forma legal.

En ese camino es donde están los medios y donde hay que seguir los procedimientos que la ley respectiva indica para llegar a los fines que supone la segunda pregunta del Sr. Ministro de Suiza. —  
• Noviembre 23 de 1906.

=====

Los agregados militares en las Legaciones no son empleados permanentes y efectivos de las mismas, ni forman parte del cuerpo diplomático de la República, por lo que no les corresponde remuneración alguna por dicho concepto. Para reconocerles el carácter de empleados efectivos y permanentes de las Legaciones, se requiere una disposición legal expresa en este sentido.

**Coronel Eduardo Villaruel cobra seis meses de sueldo como agregado militar en la Legación Argentina en Italia.**

*Excmo. Señor:*

Los agregados militares en las Legaciones no son empleados permanentes y efectivos de las mismas, ni forman parte, en vigor del cuerpo diplomático de la República.

La ley de presupuesto que determina taxativamente el personal de las Legaciones existentes en Europa y América no determina la existencia ni la remuneración de tales agregados militares, ni de ninguna otra clase, lo que demuestra que no se les ha mirado por el Congreso como sus empleados.

El Item. 1º del inc. 2 del anexo C (Departamento de Relaciones Exteriores) del Presupuesto General de Gastos, que relaciona el personal de las diversas legaciones de la República en Europa y América, y determina su remuneración respectiva, no sólo no menciona los agregados militares, ni de ninguna otra clase, sino que, cuando se refiere al caso extraordinario del agregado comercial en Roma le menciona en partida independiente, é independientemente fija su especial remuneración.

Si bien es cierto que, los agregados militares, como los civiles

y navales se hallan sometidos al régimen y gobierno de la legación en que se encuentren, así como gozan de las prerrogativas que se discierne en las prácticas internacionales a los miembros de una legación, si bien es cierto también, que aún en casos dados y cuando la representación de la República lo requiera en circunstancias y lugares determinados, los agregados pueden ser empleados efectivos y permanentes de las legaciones (caso del delegado comercial en Roma); ello no implica que, cuando no hay disposición legal especial esos agregados tanto militares, civiles o navales, no sean simplemente lo que su nombre indica, es decir, agregados a la legación sin formar parte de ella, por accidente, comisión o por cualquier otra causa.

Es de notarse por fin y relativamente al caso, que los agregados militares, especialmente son los que menos pueden conceptuarse como formando parte permanente de una legación argentina en el extranjero; las severas ordenanzas a que están sujetos, lo precario de su permanencia en punto determinado, la inmediata obediencia que deben a sus superiores en todo momento, hacen incompatible bajo todo concepto su carácter militar con su carácter diplomático en las condiciones que corresponde.

Un ejemplo terminante de lo dicho es el mismo recurrente, dependiente del Ministerio de Guerra, en cuanto es compatible con el Gobierno de la legación a que va agregado, con una sueldo mensual cuyo monto excesivo es de suyo bastante para demostrar lo accidental de su misión; y sujeto en sus funciones y su estadía a sus superiores jerárquicos dentro del orden militar.

Tales funcionarios pues, si por razones determinadas, se agregan al cuerpo diplomático, en ningún caso puede considerarse que ingresan a él, y por ende, que gocen de lo que la ley respectiva acuerda a estos últimos.

En efecto, el art. 13 de la Ley 4711 se refiere a los que ingresen al cuerpo diplomático, y a ellos acuerda los seis meses de sueldo sin cargo a que se refiere; los agregados militares, como el recurrente no están en esas condiciones, y en consecuencia, no gozan del expresado beneficio.

Estas consideraciones unidas a las ya formuladas por los precedentes informes me inducen a creer que V. E. debe desestimar el pedido del recurrente. — Noviembre 23 de 1906.

=====

La madre natural de un oficial muerto en servicio de la Nación, tiene derecho a la pensión de la ley.

**Doña Victoria Mac Dugall, pide pensión como madre natural del Teniente del Ejército José L. Brown.**

*Excmo. Señor:*

Con motivo de la pensión militar que procura la recurrente doña Victoria Mac Dugall, invocando el carácter de madre natural del Teniente del Ejército José L. Brown, que se dice ha muerto, a manos de los indios, desempeñando sus deberes en el fortín Rivadavia, se promueve cuestión legal, sobre si la peticionante, tiene suficiente personería a los efectos del beneficio que gestiona.

Desde luego, el art. 1º del capítulo 1º del título IV de la Ley 4707 establece que los deudos del militar fallecido que tienen derecho a pensión, son: la viuda, los hijos legítimos, los naturales reconocidos y la madre viuda.

Es principio fundamental de legislación que, a toda obligación personal corresponde un derecho personal.

Con arreglo al art. 330 del Cód. Comercial el padre y la madre tienen el deber de criar a sus hijos naturales, proveer a su educación, darles la enseñanza y hasta costearles el aprendizaje de una profesión u oficio.

Por el art. 331 del mismo los padres están obligados a dar alimentos a los hijos naturales, hasta la edad de 18 años y, siempre que los hijos se hallen en circunstancias de no poder proveer a sus necesidades, obligación que hasta incumbe a los herederos de los padres del hijo natural.

En recompensa de tales obligaciones para los padres, con respecto a sus hijos naturales el mismo Cód. Civil, en sus arts. 327 y 328, consagra los correspondientes derechos que tales hijos tienen con relación a sus padres al establecer, el primero, que las obligaciones de los hijos legítimos con sus padres, se extienden a los hijos naturales respecto a los suyos y en el segundo precepto citado, que el padre y la madre tienen sobre sus hijos naturales los mismos derechos y autoridad que los padres legítimos sobre sus hijos.

De manera que, por analogía de situaciones, si el hijo natural reconocido tiene derecho a pensión militar con sujeción al citado art. 1º del capítulo 1º del título IV. de la Ley 4707, igual derecho

corresponde y debería en justicia corresponder a la madre natural con respecto al hijo que ha reconocido.

Excluir a ésta del derecho a la pensión militar en ocasión de la muerte del hijo natural reconocido, sería realmente injusto desde que, en favor de los hijos naturales, se declara tal derecho con motivo del fallecimiento del padre natural. Por otra parte, los lazos de la naturaleza que vinculan la madre legítima para con sus hijos, no son más dignos de amparo que aquellos que ligan la madre natural con su hijo reconocido. Tan es así, que la misma Ley 4707, en el inc. b del art. 63 exceptúa del servicio militar al hijo natural que atiende con su trabajo personal a la subsistencia de la madre, así como igualmente exceptúa al hijo legítimo de madre viuda en análoga situación; lo que demuestra que, el texto y espíritu de la Ley 4707 al organizar el ejército de la Nación, ha tenido presente los vínculos que existen entre la madre y el hijo natural, los deberes del uno hacia el otro, en igualdad de condiciones con que ha contemplado los vínculos y deberes entre la madre y el hijo legítimo y viceversa.

Estos antecedentes y consideraciones que denotan el espíritu de la Ley 4707 en este punto, concordante con los principios recordados del Cód. Civil, y dentro de la idea de justicia que ampara los raciocinios que dejo hechos, me inducen a creer que V. E., desprendiéndose del texto referido de la ley, sin alterar aquel espíritu, sino con arreglo a la citada Ley 4707, mas bien confirmándolo, puede declarar, que la recurrente tiene derecho a la pensión que gestiona, dentro de lo prescripto en el inc. 2 del art. 86 de la Constitución. — Diciembre 3 de 1906.

=====

No corresponde requerir el pago de impuestos aduaneros que se deben desde diez años atrás, que tienen su origen en errores de cálculo al efectuarse la liquidación, por cuanto el art. 24 de la Ley 4933, limita a dos años el término fijado por los arts. 426, 428 y 433, de las Ordenanzas de Aduanas.

Varios agentes marítimos y consignatarios de Colón, piden se deje sin efecto los cargos que formula la aduana de ese punto, por almacenaje y eslingaje de mercaderías despachadas de diez años atrás.

*Excmo. Señor:*

El informe de la Inspección General de Aduanas acredita que en la Aduana de Colón, las mercaderías de despacho directo, una vez llegado al puerto el buque importador, son conducidas en carros hasta una oficina de aquella dependencia Fiscal, donde se descargan para ser verificadas y luego entregadas sin pagar derechos de almacenaje.

Los recurrentes se encuentran, en cuanto respecta a las mercaderías de despacho directo, dentro de aquel procedimiento observado por dicha repartición.

Aquella oficina donde se descargan tales mercaderías, indudablemente debe ser considerada como depósito fiscal, aun cuando no se encuentre ubicada en la misma situación en que están los almacenes aduaneros, desde que se trata de una instalación que funciona bajo la jurisdicción de la referida Aduana.

De acuerdo con estos antecedentes de hecho, resulta aplicable, al caso ocurrente, el art. 4º de la Ley 4928, en cuanto dispone que todas las mercaderías pagarán almacenaje y eslingaje, cuando entran a depósito, aún cuando sean de despacho directo.

Pero, si bien es procedente formular reparos a los peticionantes, por el cobro de tales derechos fiscales, no considero legal que se les requiera el pago de dichos impuestos aduaneros hasta diez años atrás dado que, con sujeción al art. 24 de la Ley 4933, se limita a dos años el término fijado por los arts. 426, 429 y 433 de las ordenanzas, para los reclamos o cargos por errores de cálculo, liquidación o aforo.

Por último, no cabe duda de que en el caso presente, se trata de un error de liquidación, desde que, en virtud del art. 3º del

decreto reglamentario de aquellos preceptos de las ordenanzas que rigen la materia aduanera, de fecha 22 de diciembre de 1903; el *error de liquidación* consiste en la inexacta apreciación de lo que debe pagar la mercadería, ya por haberse tomado como base para el cálculo un derecho menor que el verdadero, ya por haberse alterado u omitido el percibo de algún impuesto como el adicional, el de *almacenaje* y *eslingaje* (precisamente como en el caso ocurrente), derechos de guinche, impuestos internos, etc.

De manera que, en virtud de las mencionadas circunstancias de hecho y de derecho; considero procedente los reparos al error de liquidación de que se trata, con solo efecto retroactivo hasta dos años atrás, pudiendo ser la resolución que se dicte de aplicación general para casos análogos. — 11 de diciembre de 1906.

=====

Si por decreto el P. E. reconoce a un médico como cirujano del ejército, su incorporación a las listas de los Guerreros del Paraguay, debe hacerse con dicho grado.

**Dr. Lucilo Del Castillo, Cirujano de División, solicita  
ser reconocido como Cirujano del Ejército.**

*Ercmo. Señor:*

Teniendo presente que el Dr. Lucilo del Castillo figura en la lista de guerreros del Paraguay, lo que, le pone en condiciones de ser considerado como militar en actividad, a pesar de estar retirado por su edad y condiciones (art. 23 del título II de la Ley 4707), creo que puede ser tomado en cuenta su reclamo en cuanto a su actual situación, pues de otra manera, caería bajo lo prescripto por el art. 13 del tit. III de la citada Ley.

En tal concepto, y según los informes producidos por la oficina respectiva, de los que resulta que ya en la guerra del Paraguay como más tarde y aún en 1892 en que tuvo lugar su reincorporación, el Dr. Castillo fué considerado Cirujano del Ejército, y como tal dado de alta en esta última fecha, bajo la vigencia de la Ley 2377, no encuentro motivo que explique ni menos que justifique su inclusión en la lista de guerreros del Paraguay con la asimilación al

grado inferior, es decir al de Tte. Coronel correspondiente (art. 3 ley citada) a Cirujano de División.

Creo por el contrario que el texto del decreto de octubre 6 de 1892 que califica al Dr. del Castillo de Cirujano del Ejército y que en tal concepto le da de alta, teniendo en cuenta su misma situación anterior, está dentro del art. 3 de la Ley 2377, lo que le hace valer; y dentro de los términos de esa prescripción legal ha podido autorizar su reincorporación con la asimilación al grado de Coronel; siendo lógico, en consecuencia que, su inclusión en la lista de guerreros del Paraguay lo fuera en ese mismo grado, dado que ninguna disposición legal justifica la disminución de la asimilación y grado acordado en las condiciones referidas.

Soy pues de opinión que V. E. debe resolver favorablemente el reclamo del Señor Cirujano Dr. del Castillo, modificando su asimilación actual en el sentido que lo requiere, teniendo presente lo dicho y la jurisprudencia administrativa sentada por V. E., antes de ahora en el caso del Sr. Coronel Fluquerto, en decreto de junio de 1902. — Diciembre 13 de 1906.

=====

La asimilación militar sólo puede provenir de la ley, no debiendo acordarse o modificarse para disposiciones administrativas.

### **Estado Mayor del Ejército pide asimilación a Teniente Coronel del Ingeniero Julio Lederer.**

*Excmo. Señor:*

Antes de ahora he tenido ocasión de manifestar que, en mi sentir, la asimilación puede venir de la ley, tanto por el texto del art. 16 del texto II de la Ley 4707 (in-fine), cuando por la organización misma del ejército, la que no puede estar sujeta a las modificaciones que puedan imprimirle simples resoluciones administrativas.

Si como se certifica en este expediente, los trabajos y servicios del Señor Ingeniero Lederer son estimables y dignos de encomio, el Gobierno dispone de otros medios para compensar y premiar debidamente esos trabajos y servicios, sin necesidad de recurrir a crear jerarquías o reconocer asimilaciones, cuya existencia es tan precaria para el agraciado como inconveniente para la institución.

Soy de opinión pues que no debe accederse a la asimilación que se requiere, sin perjuicio de que el Sr. Ing. Lederer tenga asegurado un porvenir como empleado civil y dentro de la ley, o de que V. E. proceda a apreciar o premiar sus servicios en la manera que pueda, justa y legalmente hacerlo. — Diciembre 15 de 1906.

=====

La Ley 3884, grava con impuestos las primas de los seguros que celebran las compañías establecidas en la Nación. Dicho impuesto alcanza a todo seguro contratado en el país, sin discriminar si sus efectos se cumplen dentro o fuera de él.

**Administración de Impuestos Internos, sobre que la Compañía de Seguros "La Previsora" no sufraga los impuestos por seguros efectuados en el extranjero.**

*Excmo. Señor:*

El art. 17 de la Ley 3884 grava con el impuesto interno que determina, las primas de los seguros que celebran las compañías cuya dirección y capitales estén radicados en el país. Esa disposición no hace distinción alguna respecto del lugar donde se encuentre el asegurado, la cosa asegurada o el punto donde debe cumplirse el contrato.

Esto basta, en primer término, para desautorizar toda distinción o excepción que pretenda hacerse al aplicar tal disposición, dado que, es principio bien elemental que, cuando la ley no distingue, quien la aplica o ejecuta no tiene derecho a distinguir. Esto determina pues, la evidencia de que, con arreglo al texto de la disposición citada, donde quiera que haya de cumplirse el contrato de seguro celebrado por las compañías designadas por ella —dentro o fuera del país—, la forma respectiva es pasible del impuesto con que grava.

Por otra parte, el texto de esa disposición denuncia claramente el espíritu de la ley; ella entiende gravar la prima de un contrato estipulado en el país, por una persona o compañía que ejecuta el acto dentro de la República, no teniendo importancia que sus efectos puedan ser fuera de ella como si se tratara de los contratos celebrados en el país para cumplirse en el extranjero, ya sea por personas que operan dentro o fuera de aquel, como sucede con los Bancos,



compañías mineras o industriales que, con su dirección y capitales en la República giran y contratan fuera de ella.

La Compañía de Seguros, de que se trata en este caso, tiene su dirección y capitales en Buenos Aires, aquí celebra sus contratos, ya deban cumplirse dentro o fuera de la República, y aquí ingresan las primas que cobra, y de aquí salen los pagos que se hacen, como consta de los antecedentes recogidos de los mismos libros y contabilidad de la Compañía.

Creo pues, bajo este otro punto de vista que V. E. aplicando el impuesto de la Ley 3884 a las primas de los contratos a que me vengo refiriendo, aplica fielmente el espíritu de la citada disposición legal, como cumple a la obligación constitucional que encierra el inc. 2 del art. 86 de la Constitución.

Ante estos conceptos es que creo que V. E. no debe trepidar en ordenar que la Compañía "La Previsora" y las que se hallen en su caso paguen el impuesto del art. 17 de la Ley 3884 ya sean que sus contratos hayan de cumplirse dentro o fuera del país. — Diciembre 20 de 1906.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 3948, pág. 68 de enero 5 de 1907.*

=====

El arbitraje, que en un contrato con una Empresa Ferroviaria se presente para dilucidar cuestiones o salvar diferencias que obstan a su cumplimiento, sólo debe tener lugar con respecto a las cuestiones previstas en el contrato.

### **Ferrocarril Argentino del Norte, sobre arbitraje.**

*Excmo. Señor:*

La Ley 4064 autorizó al P. E. en su art. 5º, para contratar con particulares la construcción de ramales industriales o complementarios del Ferrocarril Central Norte, en las condiciones que él expresa.

Más tarde, y hecho los estudios correspondientes se hicieron variantes a que los licitantes entonces, y contratistas después, se sometieron, como lo fué la del cambio del punto de arranque de

Punita de los Llanos a Serrezuela, en rumbo a San Juan que ofreció la Ley 4271.

A mérito de la mencionada autorización legislativa, V. E., haciendo uso de la facultad de contratar expresada en el art. 5º citado, llamó a licitación, y después de los trámites de forma contrató con los Srs. Toledo, Morani y Cía., la construcción de las dos líneas que hoy constituyen y a que se refieren las diversas reclamaciones presentadas en demanda de arbitraje.

El contrato existente con tales empresarios fué celebrado por V. E. en la forma común y correcta de tales convenciones y en uso de la autorización del art. 5º de la citada ley especial 4064, en circunstancias ambas, que le dan valor legal, en cuanto obliga a la Nación y a los contratistas en su recíprocas obligaciones, dado que está dentro del espíritu de esa ley dar amplia facultad a V. E. para celebrar un contrato que asegura la obra que lo motiva dentro de las estipulaciones que son conocidas y ordinarias en tales actos. En este concepto, el contrato celebrado con Toledo, Morani y Cía. obliga, como la ley misma, a una y otra parte contratante, o sea a la Nación y a los mencionados empresarios en sus derechos y obligaciones.

Ahora bien, en esos contratos existen las cláusulas 72 y 52 respectivamente (la primera en el contrato de Serrezuela a San Juan y la segunda en el de Chumbicha a la Rioja), por las cuales se establece que las cuestiones o diferencias sobre la *manera de cumplir el contrato* que se suscitan entre el Ministerio de Obras Públicas y los empresarios, serán decididas por árbitros arbitradores nombrados y constituidos, en la manera que, cada una de esas cláusulas lo determina.

Y así; para resolver si V. E. debe librar a esa jurisdicción arbitral las reclamaciones de los empresarios, formuladas en los diversos expedientes acompañados, se hace necesario examinar si tales reclamos afectan directamente la manera de cumplir el contrato, de una parte y de otra, y solo en tal concepto procederá la constitución del tribunal y su aptitud para resolver sobre los puntos que se le sometan.

Para llegar a tal conocimiento y sin entrar en el examen circunstanciado y minucioso de todos y cada una de esas reclamaciones tomaré las más caracterizadas y de mayor consideración, sirviendo el pronunciamiento que haga sobre ellas como norma para las demás que son siempre correlativas.

I. — Quéjense, en primer término, los recurrentes de que, en

algunos casos, se han visto obligados a suspender temporariamente sus trabajos por demoras en la entrega de los terrenos destinados a la expropiación para la obra.

Sin entrar a averiguar por ahora, las causas de esa demora, ni los perjuicios que los empresarios deben haber sufrido, lo que sería en su caso material del juicio arbitral mencionado; teniendo en cuenta que, por el art. 4 del contrato respectivo, la adquisición y entrega de los terrenos para la vía y estaciones son de cuenta y a cargo del Estado, creo que, en este un punto que afecta directamente la manera de cumplir el contrato de parte de la Nación, y que procede sea sometido al juicio arbitral, por estar dentro de los términos precisos del art. 73 del contrato respectivo.

II. — Igual cosa pienso sobre la reclamación que los empresarios hacen relativamente a desvíos o modificaciones en la línea, a los efectos de que por el tribunal arbitral se tome en cuenta lo que esas modificaciones o desvíos han podido o pueden representarles, como costos o perjuicios, y se pronuncie al respecto como en justicia corresponde.

Este punto afecta también la manera de cumplir el contrato de parte de la Nación, una vez que es exacto que, los desvíos o modificaciones aludidas han sido ordenadas y se han hecho por los mismos empresarios; los arts. 17 y 18 del contrato establecen la manera de proceder, así como las obligaciones de una parte y otra en tales casos, y su cumplimiento oportuno en la manera estipulada.

III. — Los propios errores de cálculo alegados por los empresarios en varias reclamaciones no son susceptibles de ser en principio material del arbitraje estipulado en el contrato; los daños sufridos por propia culpa o acto propio sin relación a la otra parte contratante, quien tiene siempre derecho a exigir lo estipulado, no afectan la manera de cumplir el contrato y por ende no caen dentro del texto de las cláusulas citadas 73 y 52 de los contratos respectivos no siendo necesariamente materia del arbitraje.

Así la reclamación consistente en el cobro a la Nación del transporte de los materiales del Rosario a Cruz del Eje, que no calcularon oportunamente los contratistas, no puede en caso alguno, ser materiales del Rosario a Cruz del Eje, que no calcularon oportunamente los contratistas, no puede en caso alguno, ser materia del arbitraje, pues no afecta de ninguna manera el contrato, dado que, los mismos reclamantes son los únicos y exclusivamente obligados,

por el contrato mismo, a poner esos materiales en el expresado punto de Cruz del Eje, operando hasta ese momento por su propia cuenta e independientemente de la Nación y del contrato mismo.

Igual cosa sucede con los reclamos que tienen por motivo las excavaciones de tierra en una y otras líneas de las concedidas para construir; el contrato, para obviar toda dificultad, clasificó las tierras a excavar y remover en diversas categorías, en relación a esos trabajos y no como clasificación geológica —que no era la oportunidad ni había objeto de hacer— y en ese concepto se ofrecieron aquellos, se aceptan por los contratistas, se avalúan y por ellos se contrajo el compromiso de ejecutarlos dentro de la mencionada clasificación.

Esto hace desaparecer toda duda y por tanto toda diferencia sobre la materia a excavar, ya conocida y avaluada de antemano y por ende ninguna cuestión respecto al costo y condiciones de la operación puede levantarse, dado que, de antemano está claramente estipulada la manera de apreciar la cosa y de cumplir el contrato en este punto.

IV. — Debo sin embargo al tratar esta parte de las reclamaciones de los empresarios por errores de cálculo, hacer una excepción relativa al precio de las locomotoras a cuya entrega, el contrato se refiere. Las circunstancias que rodean las estipulaciones al respecto, así como la consignación oficial de su valor, levantan, o por lo menos autorizan una duda a su respecto, que es susceptible de discusión y por ello de ser sometida al tribunal arbitral.

Cuando los Srs. Toledo, Morani y Cía., rectificando su primera propuesta, dijeron que entregaran las locomotoras que habían mencionados los Srs. Hopkin y Gorddun pudieron referirse al tipo y a la locomotora en su peso total, siendo que, ahora, tomándose el precio unitario fijado en la planilla oficial del contrato que no fija peso, las locomotoras se entregan de distinto tonelaje y por ende de precio diverso.

Esta circunstancia induce a pensar que, viniendo la confusión de los precios unitarios que son parte del contrato, los que no hablan del peso obligado de las locomotoras, no hay oficialmente un criterio claro, permanente e invariable para poder pronunciarse sobre la manera de apreciar, tomar y aún pagar esas locomotoras.

De ahí, que de esa duda bien explicable en el caso, se infiere la necesidad de aplicar el arbitraje en este punto que afecta la manera

en que ha de cumplirse el contrato a su respecto, ya sea por parte de los empresarios ya de parte de la Nación, cuando se trate de recibir o pagar las mencionadas locomotoras.

Fuera de esta excepción, no veo que existe reclamación seria alguna, por error de cálculo, que pueda motivar la aplicación del tribunal arbitral; ni encuentro tampoco otros puntos, que puedan llevarnos a él.

V. — Creo que nada tiene que ver con el arbitraje y que V. E. puede pronunciarse directamente sobre los dos puntos siguientes que, sino afectan directamente el cumplimiento del contrato, en la manera de ejecutarlo, tienen sin embargo su importancia, bajo el punto de vista de que, comprometen los serios intereses públicos y fiscales que están vinculados a dichas obras 1º) Aplicación a los contratos del art. 70 de la ley de Obras Públicas por haberse aumentado más allá del porcentaje legal, el importe de algunos de sus ítems; 2º) Caducidad del contrato o contratos por expiración de su término. Lo primero es extraño a la convención y a la aplicación de la Ley 775 que se pretende, al objeto de llegar a la rescisión del contrato con los precios actuales y a objeto de que se formule otros para continuar.

El texto del art. 70 citado en su inc. 1º se refiere a las variaciones o modificaciones que alterasen el contrato en una diferencia de una sexta parte en más o menos; entendiéndose que se trata del contrato en su conjunto, pero no, en ciertos y determinados ítems de los cientos de ellos que por lo general se relacionan con esta clase de contratos.

Basta que V. E. lea el texto legal citado y se informe de los ítems que se denuncian como sobrepasados, para que se rechace la aplicación insinuada.

En cuanto a la caducidad, ella se opera según el contrato (arts. 6, 14 y correlativos) de la manera que está allí expresada; siendo el caso de que V. E. cuando se produjeran, si así sucediera, por exigencias desmedidas, incorrectas o ilegítimas de los concesionarios, para obtener por medio de la caducidad, una reforma de precios para continuar las obras, se atenga al texto de esas disposiciones, cuya aplicación estricta no podrá nunca dañar los intereses fiscales comprometidos, sino por el contrario hacerlos respetar en la extensión e importancia que ellos se merecen.

Sin necesidad de arbitraje y solo tomando en cuenta la actitud

de los empresarios, los intereses públicos comprometidos, y la defensa de la obra misma, en cuanto a su realización como fué la intención y propósito que tuviera lugar, son las consideraciones que deben basar el pronunciamiento de V. E. en caso de caducidar, lo que seguramente nunca ha de tener efecto en detrimento de los intereses de la Nación, que la ley y el contrato amparan debidamente.

VI. — No creo que haya ningún otro punto de consideración que sea necesario examinar bajo el punto de vista a su remisión al juicio arbitral; lo dicho es bastante para establecer el criterio que, en mi sentir, debe dominar en este punto, sin peligro, ni de ser injustos con los empresarios, ni desconsiderados con los intereses de la Nación que hay necesariamente que contemplar.

Ahora, en cuanto a la construcción, nombramiento, funciones y sentencia de los árbitros, ello depende directamente del contrato, de las leyes ordinarias que rigen sus procedimientos, y del recto y claro criterio de V. E. para determinar los puntos que, en los casos dados, deben ser la materia del juicio. — 21 de diciembre de 1906.

=====

No puede establecerse en general, si el Gobierno debe o no asegurar las propiedades de la Nación, ello debe juzgarse en cada caso, con relación a los riesgos que soporte el establecimiento o la cosa que se quiera asegurar.

Deben reputarse, a los efectos de su autorización en el presupuesto, como partes de instalación y funcionamiento de la Universidad de La Plata, el seguro de los edificios que le están afectos.

**Compañías de Seguros “La Estrella” y “América”, solicitan la concesión del seguro de los edificios pertenecientes a la Universidad de La Plata.**

*Excmo. Señor:*

Me abstengo de pronunciarme sobre la necesidad, conveniencia y aun ventajas que administrativamente pueda importar el seguro que se propone para la Universidad de La Plata y sus dependencias, así como respecto de sus condiciones y la avaluación que se ha hecho y establecido como base para la prima a abonarse o para fijar la cantidad importe total del seguro.

La expresada Universidad, en sus anteriores informes, se ha pronunciado sobre tales puntos, con conocimiento perfecto de circunstancias, antecedentes y condiciones, afirmando y demostrando aquella necesidad y conveniencia, dando el valor efectivo y susceptible de ser base del seguro, así como lo aceptable de las condiciones propuestas de la operación que supongo las generales.

No creo necesario entrar al estudio y examen detenido de la cuestión suscitada, generalizando la propuesta de que aquí se trata, sobre si es conveniente o no, que la Nación asegure sus propiedades. Fuera de que tal cuestión es extemporánea por tratarse en el caso exclusivamente del seguro en la Universidad de La Plata, no creo que tal cuestión sea susceptible de generalizaciones, ni puede ser sometida a una resolución de ese carácter.

La necesidad, conveniencia o ventajas de un seguro cualquiera —ya sea el asegurado la Nación o un particular—, están tan ligadas a las condiciones, circunstancias y aun situaciones en que se encuentra la cosa asegurada, como a la necesidad que el asegurado tenga que velar por aquélla, o al mayor interés en su conservación.

En tal concepto, no puede ni debe establecerse en general que el Gobierno deba o no asegurar todas las propiedades de la Nación, sino que, en cada caso, debe juzgarse si tal o cual seguro es necesario o conveniente, en relación a los riesgos que corra el establecimiento o la cosa asegurada, a los intereses materiales de la Nación que comprometa, así como a la atenuación oportuna del daño que pudiera resultarle en un posible siniestro.

En este caso se encuentra el seguro de que aquí se trata: Por una parte, la Nación está directamente interesada y aun obligada a mantener los establecimientos que constituyen la Universidad de La Plata y que le tiene cedidos la Provincia de Buenos Aires en condiciones de creciente utilidad para la enseñanza y para la cultura pública (Cláusula 2ª del convenio del 12 de agosto de 1905, aprobado por la Ley 4699).

Para esto es necesario proveer, entre otros casos, a su conservación material y en caso de siniestro al resarcimiento o menos pérdida posible en los dineros afectados a su construcción, conservación y funcionamiento.

Por otra parte, los informes producidos por las distintas reparaciones, dependientes de la expresada Universidad, declaran y enca-

recen la necesidad y conveniencia del seguro propuesto, determinando de una manera expresa su importancia y su monto.

Como carezco del conocimiento necesario para pronunciarme sobre este punto, me refiero a los aludidos informes que considero expresos y cuya seriedad abonan la entidad científica y administrativa que los produce, y al próximo conocimiento que se presume debe tener de los riesgos y necesidades de esos establecimientos.

No veo, pues, inconveniente en que, si V. E. coincide con las conclusiones de esos informes y encuentra aceptables y conscientes las condiciones, decrete administrativamente el seguro propuesto.

Pero, como el seguro supone un contrato y ese contrato supone erogaciones al erario público, se hace necesario determinar los recursos de que puede disponer al efecto.

Esos recursos están dentro de la citada Ley 4699. Su art. 2º manda pagar de rentas generales y con imputación a ella misma, los gastos de instalación y funcionamiento de la Universidad de La Plata.

Como se desprende de lo que dejo dicho, así como de los informes producidos, el seguro es, indudablemente, gasto de instalación y aun de funcionamiento, y en tal concepto encuadra dentro del citado artículo de la ley.

Esa debe ser, pues, la imputación de la erogación de que se trata, pudiendo V. E. aprovechar la oportunidad de la próxima sanción del Presupuesto General para incorporarla a él, ordinarizando el gasto que para el erario público supone este seguro. — 28 de diciembre de 1906.

=====

El decreto de 10 de febrero de 1906, que reconoce validez a los títulos de Universidades Extranjeras presentados por becados argentinos, debe hacerse extensivo a los que presenten los no becados que siguieron análogos estudios.

**Edgard Castro sobre revalidación de su título  
de Ingeniero Mecánico.**

*Excmo. Señor:*

El ciudadano argentino Edgard Castro, que, después de haber terminado el Bachillerato en los Colegios Nacionales de la República,



se ha costeado, con recursos propios, su educación en el "Virginia Polytechnic Institute", de Estados Unidos, pretende le sea reconocido el diploma de competencia profesional en el ramo de ingeniería mecánica que dicho establecimiento le ha otorgado.

Si bien es cierto que no hay ley del Honorable Congreso ni tratado internacional que autorice, con la validez que surge de lo dispuesto en el art. 31 de la Constitución Nacional, la eficacia de dicho diploma en el territorio de la Nación, el decreto del P. E. de fecha 10 de febrero de 1906, en cuya virtud se reconocen los diplomas otorgados por instituciones análogas del mismo país en favor de ciudadanos argentinos becados por el Gobierno, puede y debe aplicarse, en mi sentir, al caso ocurrente.

Pues, como lo expresa aquel decreto, su alcance está subordinado a las prescripciones que, sobre esta materia, dicta la autoridad competente, o sea, el Honorable Congreso.

Y, la circunstancia de que el recurrente, Sr. Castro, no haya verificado sus estudios en Estados Unidos al amparo de las becas que costea el Tesoro Público, lejos de colocarle en situación desventajosa para optar al beneficio del referido decreto, más bien le favorece, por cuanto conviene al Estado estimular tales esfuerzos personales que tienden a separar de las obligaciones del Erario de la Nación el sostenimiento de la instrucción especial y técnica que no le es dable alcanzar a la masa común de los habitantes.

Por ello, opino que V. E. debiera acceder a lo solicitado por el postulante. — Marzo 23 de 1907. — Luis B. Molina.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4021, pág. 155 de 9 de abril de 1907.*

=====

Cuando se pretende una servidumbre de agua para una mina, en extensión superior al perímetro comprendido por la misma (art. 13 del Código de Minería) debe justificarse ante la autoridad competente, el beneficio que se persigue traspasando los límites indicados.

### **Compañía Minera La Concordia, sobre uso de fuerza hidráulica.**

*Excmo. Señor:*

La Compañía Minera “La Concordia”, Sociedad anónima propietaria de pertenencias mineras en el Territorio de Los Andes, solicita una concesión de agua para fuerza motriz y otra para la preparación mecánica de esos minerales.

Como la concesión que se pretende abarca mayor espacio que el comprendido dentro del perímetro de las pertenencias mineras de la referencia, sólo puede justificarla la utilidad pública que de ella resulte, probando la sociedad recurrente ante V. E. la utilidad inmediata que resulte de la explotación que se solicita.

Así lo establece las dos últimas cláusulas del art. 13 del Código de Minería, porque, como dice el comentario a este precepto, “la concesión de una mina lleva consigo la facultad de ocupar el terreno comprendido dentro de sus límites, sin previa autorización”, pero, cuando hay necesidad de traspasar esos límites y penetrar en terreno ajeno, sea subterráneamente como para abrir una galería de desagüe, sea superficialmente como para la construcción de un camino de acarreo, es indispensable que esa necesidad se justifique ante la autoridad.

En el caso ocurrente se ha justificado, a juicio de la División de Minas, del punto de vista técnico, la razón de utilidad pública que envuelve la concesión de que se trata, para el mayor desenvolvimiento de la industria minera en el Territorio de Los Andes.

Hecha esa declaración por el P. E., en armonía con el citado precepto de la Ley de Minas, no encuentro óbice legal que se oponga a que V. E. acuerde lo solicitado, en la forma y con las limitaciones que establece la División de Minas en el informe que antecede. — Marzo de 1907. — Luis B. Molina.

=====

No corresponde el reclamo diplomático a favor de un ciudadano argentino expulsado por el Gobierno de Bolivia, en ejercicio de su propia soberanía. Procede no obstante, que el P. E. se informe y aún que suscite una reclamación confidencial, de ser cierta la violencia inmotivada con que se ha practicado la expulsión, y porque pudiendo el expulsado ser depositado en Territorio Argentino, lo ha sido en cambio en Territorio Chileno.

**Reclamación del ciudadano argentino Federico Martínez, por haber sido deportado por el Gobierno de Bolivia.**

*Excmo. Señor:*

Según resulta de los documentos acompañados del sumario policial que corre agregado y de la afirmación del Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia que consigna nuestro representante allí en su nota de junio 5 del año corriente que está en los antecedentes, Martínez ha sido expulsado del territorio boliviano por razones que ha tenido su Gobierno, de carácter público y en ejercicio de la propia soberanía, ejercicio que V. E. no puede entrar a apreciar ni a rever en el caso, dado que no afecta directa ni indirectamente la que V. E. pudiera ejercer dentro del país y en circunstancias análogas.

V. E., por iguales motivos, dentro de la constitución y de la ley, y por intermedio de las autoridades policiales de la Capital, ha procedido de idéntica manera contra extranjeros residentes en nuestro territorio, imputados de los mismos actos que Martínez, sin haber pensado nunca que pudiera requerirse reclamo alguno por tal acto privativo de la propia soberanía.

Bajo tales conceptos, no creo que sea el caso de la reclamación diplomática que gestiona el conciudadano Martínez.

Sin embargo, de los antecedentes no consta la razón de ser de la violencia, al parecer injustificada, de la expulsión de que se trata, ni aparece razón plausible que motive la circunstancia de haber sido Martínez abandonado en territorio chileno, siendo que pudo serlo en territorio argentino, que era el de su nacionalidad, y en el que es de práctica depositar el expulsado, cuando como en el caso es bien posible.

Tales circunstancias han podido provenir de dos causas: ya sea de la premura un tanto injustificada con que el Gobierno de Bolivia ha procedido en el caso, ya sea de la manera arbitraria o

abusiva en que Martínez denuncia que procedieron los empleados subalternos que llevaron a efecto esa orden de su expulsión.

No hay en los antecedentes, constancias bastantes para apreciar una u otra causa como determinante del hecho de que se trata. A tal propósito considero que V. E. debe requerir nuevamente informes de nuestro Ministro Plenipotenciario en Bolivia, quien puede recogerlos con facilidad de la misma fuente que obtuvo los que ha enviado hasta ahora.

Ahora bien, si de esos informes resultara la primer causa indicada, sería el caso de iniciar una reclamación confidencial, aquí o en Bolivia, donde V. E. lo encontrase más conveniente, a objeto de obtener la aclaración de tal violencia y la razón del abandono de Martínez en territorio chileno.

Si se tratara de la segunda, iniciar y dirigir la expresada reclamación en el sentido del enjuiciamiento de los funcionarios y empleados subalternos que se hubieran excedido en la ejecución de la orden de expulsión, lo que se halla imposibilitado de hacer Martínez, dado el extrañamiento de Bolivia que sobre él pesa.

En uno y otro caso, se podría apreciar la legitimidad de los daños sufridos por aquél en la violencia y abandono en territorio chileno, suscitando la consideración del Gobierno de Bolivia en tal sentir y en la medida que pudiera corresponder, una vez aclarado ese punto por el mismo interesado.

Creo, pues, que, dentro de tales conceptos, al par que se mantiene la reclamación interpuesta dentro de los límites que por derecho le corresponde, se satisfacen las consideraciones que en el caso puede suscitar la situación en que se encuentra el ciudadano recurrente. — Abril 11 de 1907. — Luis B. Molina.

=====

Corresponde que se escriture a favor de la Iglesia los terrenos destinados para la construcción de templos, haciéndose constar en la escritura la perpetuidad de su destino para el culto, y que, como cosa sagrada, queda fuera del comercio

**Gobernación de Misiones, sobre escrituración de tierras  
al Obispado del Paraná.**

*Excmo. Señor:*

El Obispado de Paraná pretende que el P. E. haga escrituración a favor de aquella autoridad eclesiástica de los terrenos que las Municipalidades de Apóstoles, Azara, San José, Cerro-Corá, Candelaria y Santa Ana (Gobernación de Misiones) han destinado para la construcción de templos.

De acuerdo con lo que tuvo ocasión de manifestar a V. E. al Procurador General Titular en el caso análogo al sub-júdice en que el mismo Obispado solicitaba la escrituración de un terreno para levantar una Capilla en la Colonia Yerúa, resuelto por V. E. de conformidad a dicho dictamen, pienso que el título de propiedad que se solicita debe acordarse, exclusivamente a efecto de asegurar la perpetuidad de su destino para el culto, y a nombre de la Iglesia que, con arreglo a los arts. 32 y 33, inc. 4º, del Código Civil, es persona jurídica susceptible de adquirir bienes.

En este limitado concepto, el título que se adjudique, sin dañar en lo más mínimo el derecho de patronato que al Gobierno corresponde, aseguran legalmente y de una manera perpetua el destino de una cosa que, por su naturaleza y objeto, queda fuera del comercio como cosa sagrada.

No considero que un decreto del P. E. sea título bastante, ni ofrezca en su texto y en su espíritu las seguridades indicadas, tanto más cuanto que, siendo susceptible de derogarse o modificarse por otro decreto, habría siempre la posibilidad de traer una situación inconveniente al carácter sagrado de la cosa de que se trata, y desfavorable, quizá, para el culto, que, según el art. 2º de la Constitución, al Gobierno Federal incumbe sostener.

En tal virtud, opino que V. E. debe acceder a la petición del Obispado de Paraná. — Abril 19 de 1907. — Luis B. Molina.

=====

Se reputa contrabando la introducción de mercaderías en contravención a lo dispuesto por los arts. 1036 y 1037 de las Ordenanzas de Aduana, aún cuando no sea con fines comerciales que se introduce la mercadería, sino con una finalidad política —(en el caso, armas para un partido político con fines subversivos)—. El Estado debe apropiarse de la mercadería objeto de contrabando, y pagar a los aprehensores lo que legalmente les corresponde, por concepto de derecho al comiso.

Varios empleados de la Aduana de Gualeguay, piden el pago de una parte del comiso como aprehensores de un contrabando.

*Excmo. Señor:*

Los empleados de la Aduana de Gualeguay, señores Salvador Flores, Clariso Hereñú y Miguel Barroetaveña, legalmente representados por el Dr. Francisco Barroetaveña, invocando la calidad de aprehensores de un contrabando de armas y municiones desembarcado en Puerto Ruiz, clandestinamente, en la noche del diecisiete de junio de mil novecientos cuatro, pretenden que el Gobierno de la Nación les reconozca la parte del comiso a que se consideran con derecho, a cuyo efecto formulan las dos proposiciones siguientes:

1º La apropiación por el Estado del armamento y municiones aprehendidas y la entrega, por Tesorería Nacional, a cada uno de los tres aprehensores Flores, Hereñú y Barroetaveña, de *diez mil pesos* nacionales, por saldo de sus derechos al comiso y a las multas del contrabando.

2º Pasar el sumario al Juez Federal del Paraná para que resuelva el contrabando de armas, por ser de su competencia.

Desde luego, aceptando el hecho de la participación que los tres empleados recurrentes hayan podido tener como aprehensores en el titulado contrabando, puesto que, a tal conclusión, parece llegar el sumario instruido al respecto, es necesario resolver si en el caso ocurrente se trata realmente de un contrabando, previsto y penado por las ordenanzas que legislan sobre la materia.

Las ramas de guerra, fusiles, carabinas, lanzas, espadas y municiones, que fueran clandestinamente transportadas a Entre Ríos en vagones de ferrocarril y que se detuvieron mediante la intervención de dichos empleados aduaneros, si bien han sido allí conducidas, como lo demuestra el dictamen que antecede del Sr. Procurador del Tesoro,

con el propósito patético de servir a un partido alzado en armas contra el Gobierno de la vecina República Oriental del Uruguay, no puede negarse que, en el sentido legal, semejante introducción de armas implica un contrabando.

El art. 1021 de las Ordenanzas dispone que “en las Aduanas de la República será considerado como fraude, y, por consiguiente, materia de pena, toda falta de requisito, toda falta de declaración o todo hecho que, despachado en confianza por ellas o que si pasara desapercibido, produjera menos renta de la que legítimamente se adeude”.

Este precepto no distingue, con respecto a los objetos cuya importación o exportación han motivado la falta de requisito aduanero entre armas u otra clase de mercaderías.

Lo que se garantiza es la renta fiscal. El art. 1026 castiga, con pena de comiso o con pago de dobles derechos, *todo hecho que tienda a disminuir indebidamente la renta.*

El solo hecho de la *introducción clandestina* de ese cargamento de armas y municiones a Entre Ríos, implica, pues, el contrabando previsto y penado. El art. 1036 de las Ordenanzas dispone que serán consideradas contrabando las operaciones de importación y exportación *ejecutadas* clandestinamente, etc., y el art. 1037 establece que serán consideradas como operaciones fraudulentas las practicadas en las aduanas en infracción a estas ordenanzas.

El destino político de ese armamento no descalifica, a mi juicio, el concepto del contrabando aduanero. Para que éste exista, basta que la operación de importación y exportación de que se trate sea ejecutada clandestinamente o en cualquiera de las otras circunstancias a que se refiere el art. 1036 de las Ordenanzas de Aduana.

Estas no hacen distingos de ninguna especie, y es por eso que se considera contrabando la introducción de mercaderías en contravención a lo dispuesto en dicho artículo, aun cuando no sea con fines comerciales.

El presente caso, pues, se halla encuadrado en las disposiciones citadas.

Y en tal concepto, como el derecho al comiso de los aprehensores, surge del art. 1030 y concordantes de las Ordenanzas y en razón de que, la Nación debe apropiarse de ese cargamento, por convenir así a sus intereses y a la conservación de las buenas relaciones que este país mantiene con la vecina República Oriental, creo que sería

legítimo aceptar la 1ª fórmula propuesta por los recurrentes, siempre que se modifique el monto de las sumas que pretenden, con intervención de la Contaduría Militar, a fin de formular una equitativa liquidación al respecto, y se demuestre claramente la calidad de aprehensores que aquéllos se atribuyen. — Mayo 10 de 1907. — *Luis B. Molina.*



Los guerreros del Paraguay, deben ser considerados como militares en actividad dentro de su grado, y por ende, con derecho a todos los beneficios que la ley acuerda a tal situación.

### **Contaduría General, sobre situación de los Guerreros del Paraguay.**

*Excmo. Señor:*

Contrariamente a lo que sostiene el Sr. Auditor de Guerra y Marina, pienso que la Contaduría General no está en lo cierto al suponer “que la situación de privilegio que la Ley 4707 creó para los Guerreros del Paraguay ha caducado en sus efectos y para en adelante”.

Y tal situación de privilegio no ha caducado, por la muy sencilla razón de que nada tiene que ver con esos guerreros, el art. 11 de la Ley de Presupuesto vigente, en que aquella repartición y el Sr. Auditor apoyan sus conclusiones.

Desde luego, debo observar, que la redacción del artículo mencionado es la que indica la Contaduría, no la apuntada por el Sr. Auditor General de Guerra.

Dicho artículo establece lo siguiente: “*Los militares retirados no percibirán otra remuneración que la que actualmente disfrutaban; y a los que en adelante se retiraren, sólo se les computará, como pensión de retiro, el sueldo y sobresueldo de servicio activo, con exclusión de todo otro suplemento o sobresueldo fijado por la Ley de Presupuesto para los que presten servicio efectivo en el Ejército o en la Armada, derogándose toda disposición en contrario*”.

Como se ve, la Ley de Presupuesto se refiere, únicamente, a los *militares retirados* y a los que *en adelante se retiren*, y los Guerreros del Paraguay, lo mismo que los de la Independencia y del Brasil, no



se encuentran ni pueden encontrarse, a menos que se modifique la Ley 4707, en situación de retiro.

En la *situación de actividad*, dice el art. 23 capítulo III, título II, de la Ley Orgánica Militar 4707, revistarán los Guerreros de la Independencia, del Brasil y del Paraguay, y los oficiales que prestan servicios en los cuerpos de tropas o reparticiones militares. Gozarán, en esta situación, *de su sueldo íntegro y de los suplementos que determine la Ley de Presupuesto* para los que desempeñen esas comisiones.

Nada significa, pues, el hecho de que los Guerreros del Paraguay, en su casi totalidad, se encuentren retirados, como lo observa la Contaduría. Si la ley ha creado para ellos esa situación de privilegio, en virtud de la cual gozan de todas las ventajas anexas a la situación de actividad, no puede sostenerse, en el lenguaje de la misma ley, que dichos guerreros son militares retirados.

Y, no siendo militares retirados, con ellos no reza la disposición del art. 11 del Presupuesto del corriente año, ni existe fundamento legal alguno para declarar que aquella situación de privilegio, como piensa la Contaduría, ha caducado en sus efectos y para en adelante.

Los Guerreros del Paraguay, pues, en virtud de la ficción de la ley, son militares en servicio activo, y tienen derecho por consiguiente, a contar del 1º de Enero de este año, de sueldo íntegro y los suplementos que determina la Ley de Presupuesto vigente, para los que prestan servicio efectivo en el Ejército o Armada, con sujeción a lo dispuesto en el recordado art. 23, capítulo III, título II, de la Ley Orgánica Militar 4707.

Por ello opino, que el P. E. debe así declararlo, haciéndolo saber a la Contaduría General de la Nación, a sus efectos. — 16 de Mayo de 1907. — *Luis B. Molina.*

=====

Es improcedente el que un Procurador Fiscal Federal, pretenda hacer efectivos sus honorarios (regulados en una ejecución por él promovida en representación del Fisco) de la suma pagada por el deudor, si ésta no alcanzó a cubrir el crédito fiscal, ni se pagó o imputó a honorario alguno.

**Doctor Marcos Alsina, reitera cobro de \$ 1.100 por sus honorarios en la causa seguida a Muller Hnos. por cobro de Impuestos Internos.**

*Ercmo. Señor:*

El Procurador Fiscal de la sección Salta, invocando el art. 24 de la Ley 3764, que acuerda a los Procuradores Fiscales el derecho a percibir honorarios conforme a la regulación de los Jueces, en caso de condena a los demandados o apelantes del pago de las obligaciones o multas provenientes de impuestos internos, pretende que el P. E. le abone la suma de *un mil cien pesos m/n.* que en concepto de honorarios le han sido regulados por el Sr. Juez Federal de Salta en el juicio ejecutivo seguido por el Fisco Nacional, representado por el funcionario recurrente Dr. Marcos Alsina contra los Sres. Muller Hnos. y Cía. por cobro de impuestos internos.

La condenación en costo que, en el referido juicio ha recaído sobre los ejecutados, en favor del Gobierno de la Nación, indudablemente le da derecho al Procurador Fiscal de Salta, a percibir los honorarios cuyo cobro gestiona; pero se entiende, siempre que el Gobierno haya hecho efectivo el cobro de tales costas, lo que no ha ocurrido en el caso de que se trata.

En efecto, de los antecedentes de este expediente se desprende que el P. E. no ha sido pago, ni en el total del crédito que motivó dicha ejecución, —crédito que tiene privilegio exclusivo y en primer término sobre el producto obtenido por el remate de los bienes ejecutados—, ni tampoco en las costas del juicio.

No habiendo cobrado su crédito el Gobierno, ni las costas, la aplicación del citado art. 24 de la Ley 3764 no tiene razón de ser, puesto que, el privilegio de que goza el ejecutante en el caso de que se trata, por ser deuda de impuesto interno excluye la pretensión del recurrente.

El Procurador Fiscal de la Sección Salta, que por mandato de la Ley 3367, en armonía con disposiciones del Cód. Procesal, estaba obligado, en razón de sus funciones a representar al Gobierno en la

citada ejecución, no puede pues pretender, legalmente, que del producto de tal juicio, que ni aún ha alcanzado a cubrir el crédito fiscal disputado en el mismo, le sean abonadas las costas a tenor del art. 24 de la Ley 3764.

Por ello, opino que V. E. no debiera acceder a lo solicitado. — Mayo 21 de 1907. — *Luis B. Molina.*

=====

De conformidad al Tratado con la República Oriental del Uruguay, de 4 de febrero de 1889, —ley de 11 de diciembre de 1894—. la revalidación del título de Escribano Público de la Matrícula de Montevideo, coloca a su titular en igualdad de condiciones con los Escribanos del país para el ejercicio de su profesión, sin que dicho tratado le acuerde el derecho a pretender que el Gobierno Argentino le cree o conceda un Registro.

**Victorino José Cabral, solicita una escribanía de Registro.**

*Excmo. Señor:*

Habiendo resuelto el P. E., el 17 de julio de 1899, de completo acuerdo con lo dictaminado por el entonces Procurador General de la Nación, Dr. Sabiniano Kier, que la profesión de Escribano Público es una de las liberales cuyo ejercicio garantiza, en la República del Uruguay como en la Argentina, el tratado internacional celebrado entre ambos países el 4 de febrero de 1889, aprobado por ley de 11 de diciembre de 1894, la revalidación del Título de Escribano Público de la Matrícula Nacional de Montevideo, operada en favor del recurrente, le ha colocado en igual situación que cualquier Escribano del país, para ejercer ampliamente su profesión.

Es debido al reconocimiento de la validez de su título, que el postulante se encuentra inscripto en la Matrícula Nacional de Escribanos Públicos, como se desprende del informe que acompaña de la Excmo. Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital.

Se ha dado, pues, fiel cumplimiento, de parte del Escribano argentino, al art. 1º del referido convenio internacional, en cuanto dispone que “los nacionales y extranjeros que, en cualquiera de los Estados signatarios de esa Convención, hubieren obtenido título o diploma expedido por la autoridad nacional competente para ejercer

profesiones liberales, se tendrá por habilitados para ejercerlas en los otros Estados". El recurrente por su parte, ha satisfecho los requisitos que marca el art. 2º de dicho tratado internacional, para que dichos diplomas produzcan sus legales efectos.

En razón del mencionado pacto internacional, es que el Escribano Público Nacional de Montevideo, Sr. Victorino José Cabral, está conceptuado como Escribano Público Nacional en esta República, adscripto a la Matrícula de la Capital. Se encuentra pues en las condiciones que prescriben los arts. 153, 154, 155, 156 y concordantes de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital.

El postulante ha podido y puede ejercer libremente su profesión en el país, porque sus derechos al efecto, le han sido reconocidos por el P. E., en armonía con el tratado invocado, considerado como Ley Suprema en toda la Nación, según el art. 31 de la Carta Fundamental.

Pero, el peticionante pretende, también, que el Gobierno argentino le cree y conceda un Registro, para ser Escribano de Registro, al amparo del mismo Tratado, es decir, para convertirse en *funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los actos y contratos que ante él se extendieren o pasaren*, como establece el art. 169 de la misma Ley Orgánica al definir las funciones de tales Escribanos.

Y, en esta parte, la solicitud del recurrente no puede ampararse en aquel Tratado, desde que éste no determina absolutamente nada respecto a adjudicación de Registros.

Habiendo quedado reconocido y adscripto como Escribano Público Nacional, el peticionante, al solicitar se le adjudique un Registro, no tiene privilegio alguno sobre los profesionales de igual clase que existen en la Capital.

Su petición tendrá que atenerse con entera sujeción a lo que dispone el art. 171 de la Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital, que es ley sancionada por el H. Congreso en su carácter de Legislatura local, en consecuencia de la autonomía legislativa que las Provincias a las cuales está equiparada la metrópoli a los efectos del fuero y jurisdicción tienen por mandato el art. 105 de la Constitución Nacional para darse sus propias instituciones y reglamentar los procedimientos orgánicos de la justicia.

El peticionante entonces, como Escribano Público, puede ser nombrado Escribano de Registro (art. 177 de la Ley Orgánica), pre-

vio los requisitos que ésta misma establece para los que tienen esa profesión, dada la igualdad de todos los habitantes de la República ante la ley, consagrada por la Carta Fundamental.

En mérito de lo expuesto, opino que V. E., reconociendo el carácter de Escribano Público Nacional que invoca el recurrente al amparo de aquel Tratado Internacional, puede crear y concederle el Registro que él mismo solicita, en la oportunidad y previos los requisitos que prescriben los arts. 171, 178, 179 y concordantes de la citada Ley Orgánica de los Tribunales de la Capital. — Junio 21 de 1907. — *Luis B. Molina.*

=====

Las Provincias no pueden emitir billetes, ni aún bajo la forma de vales o bonos, que tiendan a cumplir en sus territorios las funciones de moneda. La Constitución reserva exclusivamente al Congreso la emisión de ésta, para mantener el sistema de unidad monetaria, que económicamente es el mejor.

#### **Caja de Conversión, sobre emisiones de títulos que hacen las Provincias de Salta y Tucumán.**

*Excmo. Señor:*

Las fundadas consideraciones de la precedente nota de la Caja de Conversiones, justifican ampliamente la denuncia que trae a V. E. de las emisiones de títulos de su crédito que, bajo la engañosa apariencia y deliberada imitación de la moneda nacional, hacen algunas Provincias, sin tener en cuenta la situación perniciosa que crean para el país, ni la violación en que incurren de la Constitución, las leyes del Congreso, y los principios que dominan nuestro régimen económico y monetario.

Basta echar la vista sobre los billetes acompañados a la nota de que me ocupo para adquirir la convicción de que, bajo pretexto de utilizar el propio crédito, por su tesorería o por su Banco, las Provincias de Tucumán, Mendoza y Salta han emitido títulos aptos y preferidos para circular y para cancelar como moneda, ya sea en forma de una promesa de pago, con sus intereses, ya sea como reconocimiento a pago del portador de la suma que expresan.

La división de esos títulos en billetes de uno y de dos pesos, le dan esa aptitud de circulación y denuncian el deliberado propósito de atribuírsela, cuando expresamente no se lo atribuyen, como sucede con los billetes del Banco de Salta, en cuyo dorso se estampa la ley provincial que le confiere poder de cancelación y por ende de circulación.

Estos títulos que importan en realidad el movimiento del propio crédito por las Provincias emisoras, no les está vedado por prescripción constitucional ni legal alguna, siempre que se mantengan dentro de tal calificación y sin asumir ni la apariencia ni las condiciones de la moneda, pues en tal condición entran dentro de las prescripciones constitucionales que les prohíbe emitir moneda, perturbando la circulación monetaria que tiene con arreglo a nuestras instituciones, por única fuente el Gobierno Nacional y las leyes del Congreso.

En este punto, nuestra Constitución ha imitado la de los Estados Unidos, cuando en el texto del N° 1 de la Sección 10 de su Constitución estatuyó lo mismo, y cuando su jurisprudencia reveló el espíritu de esa disposición señalando el principio de que a los Estados les está prohibido emitir letras de crédito que imiten el papel de moneda (Corte Suprema de los Estados Unidos, *Briscoe v. Bank of Kentucky* II Peter 257 Cooley).

Tales actos de emisión o movimiento de su crédito en billetes o letras, destinados a llenar las funciones de moneda circulante sin autorización expresa del Congreso, está también prohibido a las Provincias por el art. 108 de nuestra Constitución, y reservado por los incs. 5 y 10 del art. 67 de la misma, junto con la acuñación de moneda, al Honorable Congreso, estando, por otra parte, y necesariamente vedado a la corrección y buena fe de sus Gobiernos encargados de la recta administración local o general como agentes del Gobierno de la Nación, la imitación del dibujo o estampa de la moneda del país que, en ellos implica un daño serio para sus mismos gobernadores, como en un particular importa un hecho castigado por la ley (art. 9 y Ley 3972).

Estas prescripciones constitucionales que reproducen como he dicho el principio sancionado al respecto por la Constitución de los Estados Unidos (N° 1, Sección 10), envuelven el evidente propósito de dotar al país de una única moneda que tenga por única y exclusiva fuente la voluntad del Congreso de la Nación; y a la consecución de ese propósito es que ha tendido notoriamente nuestra legislación

monetaria y bancaria que, a través de nuestra organización política y económica, ha venido sucesivamente, reuniendo los elementos, eliminando los tropiezos y dictando las bases para declarar aquella unidad con toda la amplitud requerida por la Constitución.

Ya en octubre 16 de 1863, en nota dirigida por el Congreso al P. E. con motivo de la iniciativa de un Banco emisor en la Provincia de Entre Ríos, se recordaba que con arreglo al art. 108 de la Constitución, tales Bancos de una Provincia o Estado no podían existir: dando por razón el Congreso, para no autorizarlo, la obligación que ello importaría de recibir sus billetes en pago de contribuciones nacionales.

Posteriormente y después de un largo período de desorden y casi puede decirse de anarquía monetaria en la República, dictáronse las Leyes 1130 y 1354, disponiendo la primera, la fijación de un tipo uniforme a la moneda nacional e imponiendo la obligación a todo el que tuviere emisión circulante a reducirla a ese tipo (art. 13, Ley 1130), y estableciendo la segunda, que los Bancos emisores sólo pudieran hacerlo en billetes pagaderos en pesos *nacionales* oro (art. 1, Ley 1354).

Si bien estas leyes concurrían notoriamente a la unidad monetaria de la Nación, bajo el punto de vista de su tipo y referencias y en la medida que las circunstancias lo permitían, ellas no operaban unidad en toda la amplitud que era de desearse, dado que se dejaban subsistentes las emisiones circulantes y más aún, se les atribuía el privilegio de la inconvertibilidad y del curso legal en los puntos en que eran emitidos o donde la Ley 1734 lo establecía.

Este estado de cosas se prolongó con ligeras variantes, hasta que el Congreso dictó la Ley 2216 que creó los Bancos garantidos. En esa ley, el Congreso si bien autorizó la emisión libre a las corporaciones y aún a las Provincias, revocó de hecho las autorizaciones que tenían estableciendo de una manera terminante (art. 626 y correlativos) que sólo podrían entrar en la circulación monetaria de la República, que por esa ley se autorizaba, la moneda fiduciaria que llevara el sello nacional y que fuera entregada por la Oficina Inspectora creada dentro de la Institución del Crédito Público, en la manera y forma que esa ley lo estatúa.

Esto era un poco más en el sentido de la unidad monetaria, la que se había previsto hasta entonces, sólo en el tipo y en las referencias. Al legislar la Ley 2116 sobre las emisiones de los Bancos garan-

tidos de la manera que ella misma lo prescribe, revocó anteriores autorizaciones y puso exclusivamente en manos de la Nación la fuente de esas emisiones, dado que esos Bancos tenían que recibir de ella, bajo su sello y por intermedio de las oficinas respectivas, los billetes que se proponían poner en circulación.

Cancelada así todas las autorizaciones anteriores por la citada Ley 2216 y fracasada la institución de los Bancos provinciales garantidos, por razones y circunstancias que no son del caso examinar, tomadas por la Nación las deudas y emisiones de esas Provincias en manera y circunstancias bien conocidas también, se creó la Caja de Conversión por Ley 2741 para intervenir en todo lo relativo a la emisión de moneda y para vigilar el cumplimiento de las leyes relativas, que desde ese momento se consideró como una función propia del Gobierno General, gobernada exclusivamente por las leyes del Congreso, como expresamente lo prescribe y establece la Constitución.

Dentro de este régimen y aún conservando la inconvertibilidad de la moneda fiduciaria como había quedado después de aquellos hechos, se mandó por la Ley 3062 renovar el papel circulante y más tarde se dictó la Ley 3871 que, terminando con esa inconvertibilidad nos ha dado nuestra moneda actual, sana y estable dentro de su tipo y valor determinado, en manos exclusivamente de la Nación, y bajo el gobierno de las leyes del Congreso donde y como entendió ponerla nuestra Carta Fundamental.

Ahora bien, estos propósitos tan dura y laboriosamente conseguidos después de muchos sacrificios de parte de la Nación, esas prescripciones constitucionales y las leyes que he enumerado y que en su virtud se han dictado, así como los beneficios que hoy se experimentan en el país con la regularización de nuestro régimen monetario, son contrariados y violados por las emisiones que hacen las Provincias y a que la precedente nota se refiere, debiendo como la Caja de Conversión lo indica, y por razones de la más correcta administración, tender a su desaparición, evitando en cuanto posible sea los perniciosos efectos que el orden económico están llamados a producir.

A V. E. como Jefe Supremo de la Nación y como quien tiene a su cargo la administración general del país, como textualmente lo expresa el inc. 1 del art. 86 de la Constitución, corresponde dictar las medidas o impartir las órdenes necesarias para evitar aquellos perjuicios que tan directamente afectan el régimen, gobierno e inte-



reses de la administración general de la República; la introducción en la circulación monetaria de billetes que no tienen existencia legal ni menos constitucional, con la perturbación consiguiente en la circulación de la legítima, cuya vigilancia por la ley está librada a V. E.; el desalojo de la moneda saneada por los sacrificios de la Nación y autorizada exclusivamente por la Constitución, ante la aparición en determinados Estados, de otra moneda de cancelación, circulación y responsabilidad limitada y precaria. el demérito por fin, que a la buena moneda infiere la circulación de otra, que sin serlo, simula ser la misma; son perjuicios y daños positivos a la Administración General de la Nación, que V. E. debe evitar para mantener, con la estabilidad de aquélla, la buena guarda de los intereses comunes que le están afectos, cumpliendo con todo ello, uno de los deberes primordiales que la citada disposición constitucional pone en manos del P. E.

A V. E. también y de acuerdo con el inc. 2 del art. constitucional citado, corresponde en el caso dictar las instrucciones que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, a que antes me he referido, haciendo efectivas las prohibiciones que ellas han estatuido, y amparando como corresponde el orden de cosas que ellas han creado, evitando en tal manera la regresión a nuestra anterior anarquía monetaria y manteniendo sana y estable nuestra moneda fiduciaria circulante, tal como se ha obtenido después de larga labor y tal como la Constitución y las leyes han entendido establecerla en la República.

De acuerdo pues, con los conceptos expresados, con lo que ha expuesto la Caja de Conversión en su precedente nota, y en ejercicio V. E. de las funciones constitucionales referidas, como administrador general del país y como ejecutor directo de las leyes del Congreso, en cuanto afectan y amparan los graves intereses públicos que van envueltos en el régimen monetario existente y que están librados a la guarda de V. E.; creo que es el caso de significar a los Gobiernos de Tucumán, Salta y Mendoza, como lo indica la Caja de Conversión, lo ilegal de las emisiones de que se trata, así como la falta de fuerza de esos billetes que la ley desconoce, haciéndoles ver los daños que ellos envuelven para la administración general y para los intereses comunes en el orden económico; señalarles un plazo prudencial para el retiro de esas emisiones, y por último, tomar todas las medidas que V. E. encuentre convenientes y que conduzcan en lo sucesivo a

los objetos indicados, en lo que dejo dicho. — Agosto 7 de 1907.  
— *Luis B. Molina.*

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4154, pág. 1408 de  
septiembre 20 de 1907.*

=====

El locatario de tierras públicas, que antes de escriturar transfirió su contrato, sin que mediara aceptación por parte del locador, y no concurrió en término al acto de la escritura, pierde su derecho y es responsable de los daños causados.

**Luis Pampliega, sobre arrendamiento del campo de los Andes.**

*Excmo. Señor:*

El P. E., por decreto de fecha 11 de agosto de 1905, aceptó la propuesta de arrendamiento del Campo Nacional de los Andes ex Melocotón, presentada por el recurrente Sr. Luis Pampliega, por la suma de *treinta mil quinientos pesos m/n.* al año, debiendo ajustarse el proponente a todas las condiciones estipuladas en el pliego que sirvió de base a la licitación celebrada al efecto, y, a su vez, el P. E. dispuso que pasasen los antecedentes del caso al Escribano General de Gobierno, a fin de que se extendiera la escritura correspondiente.

En presencia de esta resolución de Gobierno, la situación legal del recurrente, como locatario, y del P. E., como locador, han tenido que subordinarse, en primer término, a las condiciones estipuladas para la licitación, y en segundo lugar a las prescripciones del Cód. Civil que rigen esta clase de contratos.

Desde luego, el Sr. Pampliega en cumplimiento del art. 12 del convenio, tan pronto como fué aceptado *ad-referendum* su propuesta por la Intendencia General de Guerra debidamente autorizada para ello, por ser su propuesta la más ventajosa para el Tesoro Nacional, depositó, en el Banco de la Nación Argentina, el importe del 5 % del arrendamiento anual.

Satisfecho este requisito, ¿en qué época debía cumplirse con la obligación de escriturar el contrato de arrendamiento, por parte del locatario?

Los arts. 12 y 15 del contrato, determinan aquella fecha. El primero; al establecer que el depósito del 5 % del importe ofrecido

por el arrendamiento por año, quedará a beneficio del Fisco, *si el interesado no concurriese a firmar el contrato dentro del término de quince días desde la fecha en que se le notifique por escrito la aceptación de la propuesta, en el lugar donde ésta se realizó.*

En el caso presente, el decreto de 11 de agosto de 1905, cuyo cumplimiento pretende el arrendatario en sus escritos de 21 de enero, de 17 de abril y de 19 de julio del corriente año, dispuso que pasasen los antecedentes al Escribano General de Gobierno para la escrituración.

El Escribano de Gobierno, según su informe de fecha febrero 27 del presente año, que hace plena fe en la materia, *citó al Sr. Pampliega*, una vez que tuvo en su poder el expediente respectivo y aquél concurrió a su oficina y manifestó que se negaba a firmar la escritura ordenada por el decreto de 11 de agosto de 1906, entre tanto se resolviera la transferencia de sus derechos de locatario, por el Superior Gobierno, que había solicitado en favor del Sr. Francisco Serantes.

El Escribano de Gobierno da fe, en su informe referido de que, tan pronto tuvo conocimiento de que el P. E. negó aceptación a tal transferencia, llamó nuevamente al Sr. Pampliega, para ultimar la escrituración del contrato.

No agrega el Escribano de Gobierno, si la citación que hizo al Sr. Pampliega fué por escrito, indicando, en ésta, que su objeto era la escrituración. Tampoco es de presumir que esa citación fuese verbal contra el uso corriente en casos análogos.

Suponiendo pues, como es de práctica, que la citación del Escribano de Gobierno al locatario haya sido hecha por escrito con indicación de su objeto, considero que tal citación, implica, en el orden administrativo, la *notificación escrita de la aceptación* de la propuesta de que habla el art. 12 del convenio. Un informe del Escribano de Gobierno a este respecto, salvaría de incurrir en un error de hecho. Conviene que V. E. lo solicite.

Hecha aquella notificación, es indudable que el Sr. Pampliega ha faltado a su obligación de escriturar, dentro del plazo fijado por el art. 12 y el art. 15 del contrato que, con arreglo al art. 1197 del Cód. Civil forman, para los contratantes, una regla que deben respetar como si fuese la ley misma.

Partiendo de tal presunción ha faltado el Sr. Pampliega a dicha obligación, la que por ser a plazo fijo y no estar subordinada a la

aceptación o rechazo, por parte del Gobierno, de la transferencia que pretendió de sus derechos de locatario en favor de un tercero, ha debido cumplirse dentro del término, puesto que dicho plazo se estableció en favor de ambos contratantes (art. 570 del Cód. Civil).

Se trata de una obligación de hacer, que el Sr. Pampliega debió cumplir en el tiempo propio y del modo en que fué la intención de las partes (art. 625 del Cód. Civil). Y, si por su culpa no fué a firmar la escrituración, debe al Superior Gobierno, los daños y perjuicios del caso, con sujeción al art. 628 del mismo Código.

La intención de las partes ha sido clara, respecto a la fecha de escriturar; el art. 12 en armonía con el art. 15 del contrato así lo prueban. El largo silencio del interesado, sin presentarse por escrito en su gestión, desde el 11 de agosto de 1905 hasta el 21 de enero de 1907, por medio de apoderado, activando la escrituración revelan visible negligencia de su parte.

Por otra parte, el Sr. Pampliega se presentó ante V. E. el 21 de septiembre de 1905 solicitando la aprobación de la transferencia de sus derechos en favor del Sr. Serantes e invocando, para ello su calidad de arrendatario, de acuerdo con el decreto de 11 de agosto de 1905, que mandó escriturarle por la Escribanía de Gobierno. Y, no es aceptable, sino como morosidad, que negada esa aprobación de transferencia, cuya gestión a él sólo interesaba activar, haya ignorado y olvidado la notificación del Escribano de Gobierno para escriturar, hasta después que el P. E., por decreto del 13 de junio de 1906, dejó sin efecto el decreto aceptando la propuesta del recurrente mandando escriturar, el 11 de agosto de 1905. Es de notar, aunque por un error de redacción aquel decreto deja sin efecto la autorización dada a la Intendencia para arrendar el campo de los Andes al Sr. Pampliega, su intención, su claro propósito, de revocar los efectos del decreto de 11 de agosto de 1905 según se desprende de su fundamento.

Bien pues, por lo expuesto y en el concepto de que el Sr. Pampliega ha sido citado *por escrito*, para escriturar, por el Escribano de Gobierno, opino que V. E. no debiera hacer lugar a lo solicitado por él. — Agosto 7 de 1907. — *Luis B. Molina*.

=====

Los pagos parciales, canjes y pago definitivo, estipulados en determinados casos y condiciones con los empresarios de una obra pública, no pueden alterarse por el P. E., ni por razones de equidad, sino ceñirse a lo estrictamente contratado con aquél.

**Bernasconi Hnos. constructores del Palacio de Justicia  
sobre pago de certificados.**

*Excmo. Señor:*

Los señores J. Bernasconi y Cía., en su carácter de empresarios de la construcción del Palacio de Justicia, pretenden que el P. E. ordene la amortización extraordinaria equivalente a los certificados provisorios expedidos hasta la fecha, ya sea entregándole un título definitivo o en dinero efectivo, por medio de los fondos que la Ley 4087 destina a tal objeto.

I. — La razón fundamental que invocan los recurrentes para sostener su petición, consiste en que dicen haber dado exacto cumplimiento, por su parte, a las condiciones del contrato celebrado al efecto con el Superior Gobierno de la Nación el 12 de noviembre de 1903, y en que, el P. E. se encuentra autorizado por el art. 1º del inc. c) del decreto de 15 de junio de 1903 para hacer la amortización que solicitan, la que vendría a solventar la difícil situación financiera que los contratistas sostienen haberse creado, para realizar la costosa obra de que se trata.

II. — Desde luego, la petición de los contratistas tiene que resolverse con entera sujeción a las cláusulas respectivas del contrato y de la Ley de Obras Públicas, así como de las circunstancias de hecho que han mediado en el caso ocurrente.

El art. 2º del contrato de referencia, establece que las obras que les corresponde verificar a los recurrentes terminarían en un plazo de tres años contados desde los 15 días siguientes al de la fecha en que el P. E. dió a los contratantes la posesión del terreno, estatuyendo la multa en que incurrirían los mismos por cada mes de retardo.

Se han impuesto los Sres. J. Bernasconi y Cía., una obligación a plazo, lo que equivale a decir judicialmente, que el ejercicio de los derechos que a ellos correspondiese en virtud del cumplimiento de tal obligación, está subordinado a dicho término.

III. — Pero, como según informa la Dirección General de Arquitectura, el plazo de tres años estipulado en el art. 2º del convenio está vencido y las obras aún no terminadas, por causas que no son imputables a la Empresa constructora, lógico es considerar, a aquélla, exenta de la sanción penal en que hubiera incurrido en caso de ser responsable de su morosidad.

Por otra parte, tratándose de una obra pública, según el concepto del art. 1º de la ley que rige la materia promulgada el 20 de julio de 1876, la que forma parte integrante del contrato que invocan los recurrentes, según su art. 1º, la Empresa J. Bernasconi y Cía. tiene derecho a la prórroga de que habla el art. 30 de la referida Ley de Obras Públicas, al establecer que, “si por un obstáculo de cualquiera clase, independiente de la voluntad del contratista no pudiese éste comenzar las obras en el tiempo fijado, o tuviese que suspenderlas, se le podrá otorgar una prórroga proporcionada al cumplimiento de su contrato”.

IV. — De manera que, con respecto a la falta de imputación, a los recurrentes, de la morosidad en terminar las obras dentro del plazo de tres años fijado, los contratistas deben ser amparados por la *prórroga prudencial* que presenta el citado precepto de la ley incorporada al contrato.

V. — Pero, es necesario dejar claramente establecido que, la tardanza en terminar las obras convenidas dentro del expresado plazo, no coloca a la Empresa, ni al Gobierno de la Nación, en el caso previsto por el art. 11 del contrato, que textualmente dice: “Si en cualquier momento ordenara el P. E. la suspensión temporaria o definitiva de las obras, *estará obligado a canjear los certificados provisorios por los definitivos a que se refieren los arts. 7º y 8º*”.

No hay en el expediente, documento alguno que pueda comprobar que el P. E., *haya ordenado la suspensión temporaria o definitiva* de las obras, para colocarse en la obligación de canjear los certificados provisorios por los definitivos.

El contratista por otra parte, de acuerdo con el art. 35 de la Ley de Obras Públicas, está en el deber de conformarse con las alteraciones en las obras que le fuesen ordenadas por la Dirección de Departamento de Ingenieros, o por el Ingeniero Inspector de los Trabajos, siempre que esas órdenes les sean dadas por escrito y con más razón, cuando se tratare de la orden de suspensión de la obra,

la Empresa ha debido requerir esta última, por escrito, para ponerse en condiciones de ejercitar los derechos que, en tal caso, le daría el citado art. 11 del contrato.

VI. — Si bien el contrato celebrado entre la Empresa Bernasconi y Cía. y el Superior Gobierno, forma para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, con sujeción al principio consagrado en el art. 1197 del Cód. Civil; no puede desconocerse, tampoco, que las modificaciones introducidas con posterioridad a su celebración en los planos primitivos, ya para adoptar el edificio a las líneas dadas por la Municipalidad como límites de la manzana en que se construye, ya para introducir algunas variaciones en la edificación de acuerdo con indicaciones de los Tribunales de Justicia, así como los aumentos del trabajo en la altura del edificio y en el cambio de materiales, multiplican, en realidad, modificaciones al contrato primitivo verificado por las partes contratantes de común acuerdo, ejercitando el derecho de contratar que consagra la Constitución Nacional en armonía con el art. 1200 y concordantes, del Cód. Civil.

Considero suficiente lo expuesto, para manifestar que, el único efecto de la morosidad de la obra, por causas ajenas a la voluntad de los contratistas y en virtud de convenios accesorios al contrato principal, consiste en que, los recurrentes tienen derecho a la *prórroga proporcional* indicada, sin ser sin embargo caso del art. 11 del contrato.

VII. — Pasando a lo referente a la petición de la Empresa en el sentido de que le sea pagado con el dinero efectivo que existe acumulado en virtud de la Ley 4087 el monto a que ascienden los certificados que le han sido expedidos hasta la fecha, debe considerarse, desde luego que el contrato no ha establecido semejante manera de pagar los servicios convenidos con la Empresa J. Bernasconi.

Con sujeción al art. 740 del Cód. Civil, el deudor debe entregar al acreedor la misma cosa a cuya entrega se obligó. Los arts. 4º, 7º y 8º del contrato determinan, con toda precisión, qué es lo que se debe dar en pagos parciales y en canje total a los recurrentes.

Así, el art. 4º, dice *que, mensualmente se expedirá un certificado del trabajo hecho por la Empresa constructora...*, el art. 7º establece que los certificados mensuales de obra construídas a que se refiere el art. 4º y que se entregarán a la Empresa constructora

serán de la forma del facsímil número uno adjunto y agrega que, estos certificados, a la terminación de la obra, se canjearán por otros definitivos de la forma del facsímil número dos . . . , el art. 8º dispone que, con los certificados definitivos del facsímil número dos hará el Gobierno el pago de la obra y el monto del valor de cada uno será determinado de común acuerdo entre el P. E. y la Empresa constructora, procurando siempre el mayor fraccionamiento, a fin de facilitar su negociación comercial.

VIII. — Bien, pues, el contrato establece que, con los certificados definitivos de la forma del facsímil números dos se hará el pago de la obra, de manera que no es procedente el pedido de los señores Bernasconi y Cía., ni en cuanto pretenden *un título único* en su favor, equivalente a todos los certificados expedidos en carácter parcial, como si fuere un título de la deuda pública, como bien lo dice, en su informe Contaduría General. Sólo es procedente, efectuar dicho pago mediante un *certificado* definitivo, no *título*, que acreditará las obras efectuadas con arreglo a los precios del comercio, en armonía con el decreto de 15 de junio de 1903, reglamentario de la Ley 4087.

En consecuencia, la entrega del dinero efectivo, destinado a la amortización de tales certificados definitivos por la Ley 4087, no está autorizada por el contrato, cualesquiera sean las necesidades financieras de los recurrentes, comprometidas en esta importante Obra Pública.

A lo que tendrán derecho los recurrentes, si están en la situación prevista por el art. 7º del convenio, es a que se les entregue un *certificado definitivo* de las obras realizadas en canje de los certificados mensuales cuya forma expresa el mismo precepto del contrato.

IX. — Ahora bien; ¿cuándo debe el Gobierno entregar tal certificado definitivo?

El art. 7º del contrato, lo dice claramente, *a la terminación de las obras*. Y, como las obras no están terminadas, por modificaciones que los empresarios y el Gobierno no han aceptado introducir en los planos primitivos de común acuerdo, circunstancia que, no siendo imputable a los recurrentes, les da derecho a prórroga *proporcional* del plazo de tres años ya fijado, debe deducirse, lógicamente, que aún no ha llegado la oportunidad legal de que les sea entregado tal certificado definitivo a los postulantes.



Pero, si bien es cierto que, considerando el caso ocurrente, dentro de los términos estrictamente legales que rigen los convenios, los peticionantes no tienen derecho al certificado definitivo. No puede negarse que, tratándose de una costosa empresa, de una obra pública en cuya construcción está interesada la Nación, hay verdadera conveniencia en salvar las dificultades que se oponen a su pronto terminación.

Por ello, y teniendo en cuenta que los fondos acumulados de acuerdo con la Ley 4087, están destinados al pago de la obra, creo que podría ayudarse a los empresarios en tal sentido, entregándoles los \$ 74.385 m/n., que solicitan, como amortización extraordinaria de certificados ya expedidos, y abonando, también, con dichos fondos acumulados, una parte de los certificados parciales que obran en poder de los recurrentes, como créditos del trabajo realizado por los mismos. — Agosto 12 de 1907. — *Luis B. Molina*.

=====

Las cartas de porte y formulario para tarifas especiales, con cláusulas contrarias a la ley de ferrocarriles o al Código de Comercio, deben ser mandadas retirar inmediatamente por la autoridad que corresponda o modificadas en armonía con las leyes citadas y concordantes.

**Ferrocarril Central Argentino, sobre aprobación de nuevas cartas de porte para transporte y tarifas especiales.**

*Excmo. Señor:*

La Empresa del Ferrocarril Central Argentino solicita reconsideración de la resolución de la Dirección General del ramo, de fecha 31 de julio de 1906, en virtud de la cual se dispone el inmediato retiro de la circulación de los formularios de las cartas de porte a tarifa especial en cuanto contienen las siguientes cláusulas:

a) Que la Empresa sólo se recibe de los vagones (no de la mercadería), agregando que, sin su intervención, han sido cargados y acondicionados por el remitente con los efectos que éste mismo indica, quedando el transporte sujeto a la estipulación que establece el art. 177 del Cód. de Comercio.

b) Que el cargador opta por acordar a la Empresa el 50 % más

de los plazos fijados en el art. 222 del Reglamento General de Ferrocarriles.

c) Que la carga, acondicionamiento y descarga, se hará por los remitentes y consignatarios respectivamente, sin intervención de la Empresa, quien facilitará los vagones y lonas en su caso, y verificará el transporte de acuerdo con las cláusulas de tales formularios.

Desde luego, con respecto a los puntos que he señalado con las letras *a* y *c* de las referidas cartas de porte, observadas por la Dirección General de Ferrocarriles, es de advertir que ellas, al consignar que la Empresa sólo recibe vagones, ignorando los efectos con que éstos han sido cargados y acondicionados por los remitentes, así como que la descarga se hará por estos últimos sin intervención de la Empresa, desnaturalizan el verdadero papel que desempeñan las Empresas ferroviarias, ante la ley que rige la materia.

En efecto, la Ley Nacional de Ferrocarriles de 24 de noviembre de 1897, legisla sobre tales Empresas en su doble concepto: en el transporte de pasajeros y el de mercaderías.

El capítulo I del título III se refiere a lo primero. El capítulo II del mismo título comprende lo segundo.

La carta de porte, que las Empresas pueden extender se expiden, única y exclusivamente, con motivo del transporte de mercaderías no del transporte de vagones (art. 17 de la citada ley).

Con arreglo a la última parte del art. 50 de la misma ley, son aplicables a los ferrocarriles las disposiciones de las leyes generales sobre transportes, en los puntos no previstos en aquélla.

De manera que, el contrato de transporte que realiza la Empresa en cada caso, no puede ser otro que el aceptado por la doctrina que al respecto sustenta el Cód. de Comercio, es decir, un contrato en virtud del cual una persona o Empresa se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro pasajeros o mercaderías, y a entregar éstas, a las personas a quienes vayan dirigidas.

Se trata de un contrato comercial, bilateral y a título oneroso. La Ley de Ferrocarriles, en sus arts. 45, 46, 47 y 48, establece todos los requisitos que asegurarán en cada transporte de mercaderías la naturaleza, el peso de los bultos, el importe del flete, el tiempo en que deba hacerse el transporte, el orden en que deben hacerse la expedición de las mercaderías, las declaraciones que cada cargador

debe hacer sobre el número, calidad y clase de las mercaderías que remita.

Bien, pues, la Empresa recurrente no puede ignorar los efectos que transporta en sus vagones, sin faltar a los preceptos citados de la ley que rige, en primer término, sus relaciones como Empresa de transporte.

En tal virtud, considero bien fundada la objeción formulada por la Dirección General del ramo, a la leyenda que contienen los formularios de que se trata, que he designado en los puntos *a* y *c*.

Y, por último, la primera de estas leyendas es improcedente, en cuanto se pretende relacionar, a los efectos de la responsabilidad de la Empresa, con el art. 177 del Cód. de Comercio, el que legisla sobre el transporte de especies determinadas de cosas frágiles, o sujetas a fácil deterioro, de animales o de transportes hechos de un *modo especial, no a tarifa especial*.

Con respecto al punto *b* referente a la condición que establece la Empresa, de rebajar el valor del flete, a los cargadores que le conceden el 50 % más del plazo fijado en el art. 222 del Reglamento General de Ferrocarriles para el transporte de la carga, considero que la Empresa y los cargadores, no tienen óbice legal que se oponga a que celebren ese convenio, en armonía con el art. 49 de la Ley de Ferrocarriles y con la libertad de contratar.

Por las consideraciones expuestas; opino que las cartas de porte de que se trata, puestas en circulación por el Ferrocarril Central Argentino, deben ser modificadas en las dos cláusulas que ellos contienen y que he señalado al comienzo de este dictamen con los puntos *a* y *c*, modificándose en este sentido, la resolución recurrida de 31 de julio de 1906. — Agosto 13 de 1907. — *Luis B. Molina*.

=====

No debe el P. E. ratificar afirmaciones históricas, ni consentir que ellas se hagan en establecimientos de su dependencia, si previamente no han sido comprobadas por la historia misma.

**Director de la Escuela Normal de Paraná, sobre autorización para colocar una placa conmemoratoria de la acción del General Urquiza en esa escuela.**

*Excmo. Señor:*

Ninguna prescripción constitucional, ni disposición legal alguna prohíbe a nadie hacer afirmaciones históricas, erróneas o verdaderas en cualquier forma que ellas se hagan.

De aquí que, en general sea improcedente la autorización que de V. E. se requiere en el caso, para fijar una placa en una escuela consagrando una afirmación respecto de la actuación del General Urquiza en nuestra Organización Nacional.

Ahora, si esa autorización, como parece se requiere al objeto de dar a esa afirmación y a ese recuerdo con la ratificación oficial de V. E., la autoridad y prestigio histórico de que carece, reputo que V. E. debe negar esa autorización y oponerse a la consagración proyectada, en un establecimiento de la directa dependencia de ese Ministerio.

Lo primero, porque no existen los antecedentes necesarios a justificarla oficialmente, ni aún se ha llegado todavía a una evidencia histórica capaz de motivar un pronunciamiento de parte de V. E. al respecto.

Lo segundo, porque no está en las funciones de V. E. prestigiar recuerdos que sólo puede autorizar aquella evidencia histórica, tanto más cuanto que, como en el caso presente, el recuerdo de que se trata sería de carácter precario y sujeto a rectificaciones posteriores. — Agosto 16 de 1907. — *Luis B. Molina.*

=====

Los inválidos del ejército gozan de la situación de retiro que tenían al ser promulgada la Ley 4707, salvo las dos únicas excepciones que esa ley contiene en los arts. 19 y 10 de los títulos III y II respectivamente, sobre inutilización en servicio o combate.

### Consulta sobre situación de los Inválidos, ante la Ley 4707.

*Excmo. Señor:*

Los jefes, oficiales e individuos de tropa que constituyen el Cuerpo de Inválidos Militares, se encuentran en situación de retiro; ya sea con goce de las *dos terceras partes* del sueldo de su clase, como inutilizados por acción de guerra, a tenor del inc. 1º del art. 16 de la ley de octubre de 1865, ya con el sueldo íntegro, en caso de haber sufrido inutilización completa proveniente de función de guerra, de acuerdo con el art. 17 de la misma ley.

Por otra parte, dichos jefes, oficiales e individuos de tropa, en el caso de haber obtenido su retiro militar al amparo de la Ley 3239, de 1895, gozan del *sueldo íntegro* de su empleo, en armonía con el art. 8 de esta última ley y, si hubieren sido inutilizados por heridas recibidas en *combate heroico*, gozan del sueldo correspondiente al empleo inmediato superior cuando no hubieren sido ascendidos en el campo de batalla, con sujeción al art. 9º y en armonía con el art. 10 de la misma Ley 3239.

Bien, pues, los militares retirados en mérito de las dos leyes mencionadas y en virtud de haberse encontrado en las situaciones legales que he referido, dentro de las mismas leyes, gozan de una situación militar permanente que, en lugar de modificar, ha respetado de una manera expresa la ley actualmente en vigencia, 4707.

Las leyes no tienen efecto retroactivo; no pueden alterar los derechos ya adquiridos. El art. 18 de la Ley 4707, en su título 3º, dispone que: “Los que por efecto de heridas recibidas en acción de guerra o en acto de servicio, quedan inutilizados para la continuación de su carrera, pasan a retiro con la pensión del grado superior inmediato, en el caso que no hubieren obtenido ascenso en recompensa de su inutilización. Los que se encuentren en este caso pueden optar, en vez de retiro, por la incorporación al Cuerpo de Inválidos”.

Este artículo, que legisla para los casos que ocurran desde su sanción, ha sido complementado por el art. 13 del título 4º de la misma Ley 4707, que dice: “Quedan derogadas todas las leyes ante-

riores referentes a pensiones y retiros, *para los que se retiren en lo sucesivo*” (pero no se derogan para los ya retirados al amparo de aquellas leyes), como lo declara este mismo precepto al agregar “*subsistiendo la vigencia de todos los efectos que hayan producido*”.

De manera que, en razón de los propios términos del art. 13 del referido título 4º de la Ley 4707, los inválidos retirados con sujeción a las leyes del 65 y de 1895, no están en aptitud legal de alcanzar los beneficios del art. 18 de la ley actual, porque *subsiste la vigencia de todos los efectos que aquéllos han producido*.

Las únicas excepciones, con carácter retroactivo, que marca la Ley 4707, son las contenidas en el art. 19 del título 3º y en el art. 10 del título 2º, las que no se refieren al caso que motiva la presente consulta.

Por ello, opino que V. E. debiera resolver la consulta elevada a V. E. por el Teniente Coronel Guerrero, en el sentido de que, los inválidos del Ejército, gozan de una situación de retiro que no modifica la Ley 4707, salvo las dos únicas excepciones de los arts. 19 y 10 de los títulos 3º y 2º, respectivamente. — Agosto 17 de 1907. — *Luis B. Molina*.

=====

Mientras un ciudadano argentino, que se dice lesionado en sus intereses por un gobierno extranjero, no justifique haber agotado ante dichas autoridades todas las defensas y recursos, que las leyes le ofrecen, no procede una reclamación diplomática en su amparo.

**Canton Hnos. piden se haga una reclamación diplomática al Gobierno de Bolivia para la entrega de unas tierras.**

*Excmo. Señor:*

De los antecedentes que formulan la petición de los Drs. Eliseo y Zoilo Cantón, procurando que el P. E. de la Nación promueva una reclamación diplomática contra el Gobierno de Bolivia, a fin de que, dichos señores, como ciudadanos de la República, sean amparados en el ejercicio de derechos civiles que, según exponen, les han sido desconocidos por actos del Gobierno Boliviano; resulta que, del testimonio simple de escritura pública que obra a fs. 14, los doctores Eliseo y Zoilo Cantón son concesionarios de cincuenta le-

guas de tierra fiscal que el Gobierno de Bolivia, por decreto de 28 de diciembre de 1904, acordó a su cedente, el expedicionario al Acre, Sr. José C. Mora, en compensación de la suma de *cinco mil cuarenta y cinco bolivianos*, procedentes de pensiones alimenticias prestadas por cuenta de aquel Gobierno en el Acre.

Que el Gobierno de Bolivia, por decreto de fecha Mayo 1° de 1906, que testimoniado corre a fs. 12, aprobatorio de la resolución tomada por la Prefectura del Departamento de Tarija, se funda en las consideraciones de hecho y de derecho allí aducidas, para dejar sin efecto la compensación de tierras del Estado para cancelar los créditos del Acre.

Que, por último, el Gobierno de Bolivia, por decreto de fecha 16 de noviembre de 1906, no hace lugar a la reconsideración de aquel decreto, como lo solicitó el Sr. Benigno Lara, en representación de los Srs. Cantón Hnos.

En presencia de tales antecedentes, resulta claro e indudable que, los Drs. Eliseo y Zoilo Cantón no han agotado todos los medios legales que la Carta Fundamental y las Leyes Orgánicas de la Justicia Nacional establecen, en la República de Bolivia, en amparo de los derechos de la propiedad privada, ya se trate de contratos con el Gobierno de la Nación o de convenciones entre particulares.

La Constitución de Bolivia, consagra, en el art. 11 inc. 5°, que son atribuciones de la Corte Suprema, a más de las que señalan las leyes: "Conocer de las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y de las demandas contencioso administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo".

Y, a su vez, el art. 51, de la Ley de Organización Judicial, de 31 de diciembre de 1857, establece en su inc. 12, entre las atribuciones de la Corte Suprema, la de "Conocer de las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del P. E." y, en el inc. 13, "conocer de las demandas contenciosas administrativas, a que dieron lugar las resoluciones del mismo".

De manera, pues, que los recurrentes, que se manifiestan agraviados en sus derechos por las mencionadas resoluciones administrativas del Poder Ejecutivo de Bolivia, tienen expedita la vía judicial, al amparo de la Constitución y de las leyes de aquel gobierno extranjero, para obtener el reconocimiento de sus pretendidos derechos.

Mientras los reclamantes no comprueben haber agotado tales

recursos legales y haber sido víctimas de una injusticia, no hay caso internacional que pueda autorizar, en forma alguna, la reclamación diplomática que se pretende, según los principios universales que rigen la materia.

Tal es la opinión del suscrito, en el caso ocurrente. — Agosto 17 de 1907. — *Luis B. Molina.*

=====

Es improcedente la alegación de inconstitucionalidad ante el P. E. con respecto a un decreto reglamentario de una ley.

Dicha reglamentación en el orden administrativo, constituye un acto firme para el poder que la ha dictado.

**Adolfo de Villalba, sobre aforo para la venta de cigarros habanos.**

*Excmo. Señor:*

El importador de cigarros recurrente, señor Adolfo Villalba, funda su pedido de devolución de la suma de *trescientos pesos moneda nacional*, que la Administración de Impuestos Internos le ha requerido de pago, en los términos del acta de fs. 2 por ser inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo de 20 de junio de 1905, aprobatorio de las tablas de aforo a los tabacos y por lo tanto, ilegal y viciado de nulidad el pago que, dicha oficina recaudadora, le ha obligado a efectuar.

Tratándose de una articulación de inconstitucionalidad, que el recurrente promueve, como base legal de su reclamo, ante el mismo P. E. que ha decretado la reglamentación impugnada de ilegal; desde luego resulta improcedente, por cuanto, habiendo ejercitado el Poder Ejecutivo atribuciones que le confiere el inc. 2 del art. 86 de la Constitución Nacional, al reglamentar el art. 14 de la Ley 3764 por medio del decreto de 20 de junio de 1905, que establece las tablas de aforo que sirven de base al cobro del impuesto interno de que se trata, no es dable al mismo Poder Ejecutivo, declarar la ilegalidad de aquel acto reglamentario, que tiene, en el orden administrativo la autoridad de una manifestación del Gobierno, cuyos actos se presumen y deben necesariamente reputarse como inspirados en la justicia para el fiel cumplimiento de la ley.

Por otra parte, la omisión en que ha incurrido el peticionante, al no colocar, en los cigarros por él importados, la atestación del



*precio de venta al consumidor*, implica un hecho claramente violatorio de lo dispuesto en el art. 2º del referido decreto de 20 de junio de 1905 y disposiciones concordantes a que alude el acta de fs. 2.

Y, mientras el Poder Judicial competente, *ratione materiae*, no declare la inconstitucionalidad argüida por el recurrente, la aplicación de tales reglamentaciones, a casos como el presente, en presencia de hechos comprobados por la repartición del ramo es procedente y opino por ello, que debe ser confirmada por V. E. 17 de agosto de 1907. — *Luis B. Molina*.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4208, pág. 907 de noviembre 25 de 1907.*

=====

No corresponde descontar a los empleados de la Intendencia de Guerra, el 5% de sus sueldos para la jubilación civil, por ser asimilados militares a quienes corresponde el retiro de tales.

**Varios empleados de la Intendencia de Guerra, reclaman del descuento del 5% que les hace la Contaduría.**

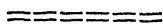
*Excmo. Señor:*

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 3305, el Intendente General, los Vocales y demás funcionarios de la Intendencia de Guerra, *están sujetos a la jurisdicción militar* en las condiciones establecidas en el Código Penal Militar, en armonía con lo que dispone a su vez, el inciso 4º del art. 120 del capítulo 1º del título VI del Cód. de Justicia Militar, al establecer que están sujetos a la jurisdicción militar, entre otros, los que forman parte, con asimilación militar, de la administración militar y demás dependencias del ejército.

Y, por otra parte, con arreglo al art. 16 del capítulo III del título 2º de la Ley 4707, *gozan del estado militar los asimilados que prestan servicios* en los cuerpos auxiliares y *en las distintas dependencias* del Ministerio de la Guerra que se determinan en la misma ley.

Por ello, atenta la jurisprudencia establecida en el caso del ex

Intendente General de Guerra, don Francisco Seeber, cuyo retiro le fué acordado de acuerdo con mi dictamen, y dando por reproducidas las consideraciones concordantes del que precede, del Sr. Auditor General, opino que debe accederse a lo solicitado por los recurrentes. — Agosto 17 de 1907. — *Luis B. Molina*.



La obligación que la Ley 2873 impone a las empresas ferrocarrileras, de transportar preferentemente y con rebaja del 50% en el precio del viaje a las tropas, oficiales y materiales de guerra de la Nación, es aplicable a las compañías de navegación.

### **Empresa Mihanovich, cobra pasajes por conducción de tropas.**

*Excmo. Señor:*

Las consideraciones que preceden formuladas por la Empresa recurrente contra la rebaja de 50 % en los pasajes de tropa y oficiales y en la tarifa de la carga en material de guerra, pueden ser muy atendibles en el caso de dictarse una ley sobre transportes por agua o de modificar la disposición de los arts. 19 y 101 de la ley 2873.

Pero en presencia de esas disposiciones, de cuya aplicación y no modificación se trata, no veo razón para que V. El. abandone un derecho que la ley confiere a la Nación y que la Empresa conoció y debió conocer cuando hizo el transporte de la tropa, oficiales y material de guerra de que se trata.

No veo absolutamente en ello un avance sobre las garantías constitucionales que se dicen dañadas; la rebaja, de que se trata, no es una requisición ni un auxilio forzoso en pro de fuerzas de la Nación, sino el cumplimiento de una obligación legal anterior y concedida, que tiene por razón de ser la manera del transporte de la tropa y oficiales, la calidad especial de la carga, así como el interés público que va envuelto en todo ello.

Naturalmente que tal obligación, que no es contractual sino legal, debe aplicarse restrictivamente, dado que ella gravita como carga impuesta al interés privado; en tal concepto, la aplicación por analogía de la citada disposición del art. 19 de la Ley 2873 a los transportes por agua debe hacerse según su texto expreso; vale decir, exclusivamente sobre el pasaje de la última clase de la tropa.

y sobre el asiento que ocupen los oficiales, descartando naturalmente lo que importa la comida y otras atenciones que no da ni proporcionan los ferrocarriles en igualdad de transporte.

De acuerdo pues con estas consideraciones y las que tengo hechas en mi dictamen anterior de junio 1° de 1906 soy de opinión:

1° Que en todo caso el transporte de tropas, oficiales y material de guerra debe tener preferencia en los transportes por agua, así como en los ferrocarriles.

2° Que la rebaja del 50 % debe hacerse exclusivamente en el valor del pasaje y condiciones de la carga, en esos transportes, teniendo en cuenta lo que esos pasajes y condiciones implican en los ferrocarriles. — 21 de agosto de 1907.

=====

La Penitenciaría de la Capital, no está facultada para expedir testimonios de la orden legal de detención, o de las sentencias condenatorias, de los presos que remite al presidio de Tierra del Fuego. Junto con el preso, deben ir los documentos originales de su arresto o condena.

**Director del presidio de reincidentes de Tierra del Fuego, sobre envío de presos sin el testimonio de sus respectivas sentencias.**

*Excmo. Señor:*

La Penitenciaría Nacional de esta Capital tiene pleno derecho y aún obligación de recibir, con el preso remitido por la autoridad judicial y de guardar y catalogar en la mejor forma posible, los documentos en que conste la orden de su detención, arresto o prisión, en cumplimiento de lo estatuido por el art. 677 y su correlativo 561 del Cód. de Procedimiento Penal.

El presidio y cárcel de reincidentes de Tierra del Fuego, cuya reclamación motiva este expediente, tiene a su vez derecho y obligación a la misma exigencia y guarda, en cumplimiento de las mismas disposiciones legales que le son perfectamente aplicables.

En tal concepto el reclamo que hace la dirección de éste es fundado; la Penitenciaría Nacional de esta Capital no está autorizada para expedir copias que no está facultada para legalizar, guardando la orden original que justifique la traslación y recepción de un

preso en el presidio reclamante, que también está obligado por la ley a tenerla a la vista y a conservarla de acuerdo al reglamento vigente.

Los trastornos de orden interno que puedan ocasionarse con el cumplimiento de la remisión legal de la orden junto con el preso, no son de tomarse en cuenta, dado el texto expreso de las disposiciones citadas, y menos teniendo presente que esa remisión es la satisfacción inmediata y obligada de la garantía asegurada por el art. 18 de la Constitución.

Creo pues que V. E. debe resolver este asunto, haciendo saber a la Dirección de la Penitenciaría Nacional de esta Capital, que debe remitir la orden original de detención, arresto o prisión, junto con el preso cuya traslación practique, absteniéndose de legalizaciones que ninguna ley ni disposición autoriza. — Agosto 21 de 1907.

*Tomado como resolución: Boletín Oficial N° 4139, pág. 1043 de septiembre 3 de 1907.*

=====

No corresponde inscribir un nacimiento en un Consulado Argentino en el extranjero, si con ello se contraviene las leyes sobre Registro Civil de la República.

**Vicecónsul argentino en Milán, sobre que don Sebastián Orsi pide la inscripción en el Registro Civil de un hijo de dos años que nació en esta República.**

*Excmo. Señor:*

Creo que los Cónsules Argentinos en el extranjero, deben abstenerse de hacer anotaciones en el registro respectivo de nacimientos, en las condiciones y con los antecedentes que rodean el caso que motiva la presente consulta.

Según el art. 14 de la Ley 4712 sobre organización del Cuerpo Consular, el registro de nacimiento, defunciones a que están autorizados esos funcionarios, sólo puede ser hecho con arreglo a las leyes de la República.

Ahora bien, esas leyes en general, y en particular la de la Provincia de Buenos Aires, que rige directamente el caso, por tratarse de una persona que se dice nacida en el territorio de ese Estado, se

opone a la inscripción después del término legal que establecen para ello (3 días, aumentando el término en relación de la distancia (art. 31 Ley Provincial de noviembre 5 de 1888), salvando el caso, de que medie orden judicial de autoridad competente que autorice aquélla, fuera de término expresado (arts. 34 y 35 de la Ley Provincial citada).

Creo que lo dicho, unido a la circunstancia de que, según el citado art. 14 de la ley 4712 (*in-fine*) estas anotaciones de los Consules son al efecto de inscribirse oportunamente en los Registros de la República, lo que no podría hacerse en el caso, sin el requisito apuntado y a instancia del interesado (arts. 34 y 35 citados), basta para que V. E. resuelva esta consulta de la manera indicada. — 21 de agosto de 1907.

*Adoptado como resolución.*

=====

Las mercaderías y efectos introducidos por los Ministros Extranjeros acreditados ante nuestro Gobierno, no son susceptibles por las autoridades aduaneras, de los procedimientos ordinarios de inspección de las mismas. La misión de dichas autoridades, en caso de sospecha de fraude, se limita a dar cuenta al P. E.

**Justiniano Moreyra, pide se le tenga por parte en el expediente contra Macario Martínez por defraudación al Fisco, en denuncias del Dr. Alberto Olazábal.**

*Excmo. Señor:*

El alejamiento que impone la ley aduanera (art. 257 Ordenanzas de Aduana) a las autoridades de esa repartición en el despacho de las mercaderías y efectos introducidos libremente a nombre o pedido de los Sres. ministros diplomáticos extranjeros, y la prohibición de la misma disposición legal a esas autoridades de abrir, inspeccionar, y ver aquellos efectos, y aún pronunciarse al respecto, limitando su intervención a poner en conocimiento confidencial y reservado del Gobierno las sospechas de fraude que pudieran tener, quedando a la espera de órdenes e instrucciones escritas para proceder; son circunstancias que hacen inquebrantable para V. E. tales prohibiciones y reserva legal, por razones bien comprensibles, dada la intervención de Ministros representantes de naciones extranjeras,

dignos siempre de las más altas consideraciones, y se oponen a la existencia legal de cualquier expediente que no haya sido extraordinariamente ordenado por V. E. y a que las autoridades aduaneras sometan a su jurisdicción a aquellos altos funcionarios.

En tales conceptos, no hay ni puede haber legalmente ningún expediente que remitir al Sr. Juez oficiante, y en caso de que estos obrados fueran reputados tal cosa, su reserva impuesta por la ley se opondría a ello, pues su simple remisión importaría su publicidad.

No consta por otra parte en lo actuado, la resolución denegatoria de una apelación que no resulta interpuesta ante V. E., contrariamente a lo que se afirma en el oficio que antecede, y que aún en el caso de existir sería de todo punto improcedente, dado que ninguna ley acuerda ese recurso, en forma alguna, para ante los Tribunales Judiciales de las resoluciones administrativas de V. E., extrañas completamente a las de la Aduana a que se refieren los arts. 1054 y 1063 de las Ordenanzas, resolución esta última que no ha existido ni podido existir en el caso, con arreglo al art. 257 ya citado.

A mérito de estas consideraciones, creo que V. E. debe significar al Sr. Juez oficiante, la imposibilidad legal que existe de enviarle el expediente requerido, pudiendo el reclamante ejercer las acciones legales que entienda convenirle contra la resolución de V. E. de mayo 10 del año corriente. — 23 de agosto de 1907.

=====

A la autoridad aduanera corresponde lo relativo a embarques o desembarques en los puertos, no teniendo al respecto competencia alguna la Prefectura Marítima, que debe limitar su acción a lo exclusivamente policial.

**Aduana de Concordia, se queja del proceder incorrecto  
del Sub-Prefecto de ese puerto.**

*Excmo. Señor:*

Mientras ninguna ley, decreto ni reglamento autoriza a los sub-prefectos a inmiscuirse en las operaciones de embarque y desembarque en los puertos respectivos, estando limitada su acción a lo exclusivamente policial, la autoridad aduanera correspondiente está expresamente facultada para intervenir en todo lo relativo a la carga

y descarga de mercaderías y a todos los accesorios y consecuencias de esas operaciones.

En tal concepto, y considerando el zarandeo del carbón a embarcarse y de que en el caso se trata, como una de las modalidades de la carga de ese combustible, reputo que esa autoridad es quien puede estatuir al respecto, cualquiera que sea el punto en que ese zarandeo que practique, y a ella solo compete juzgar de los inconvenientes que él puede causar en las operaciones portuarias.

Soy pues de opinión que en el caso la autoridad aduanera ha tenido razón al sostener las facultades que se ha atribuido. — 23 de Agosto de 1907.

=====

Existe una disposición general —Decreto de 11 de noviembre de 1889— que gobierna las jurisdicciones del Gobierno General o de los Gobiernos Provinciales, sobre las playas del mar y las riberas o lechos de los ríos navegables. Así como el derecho a autorizar su aprovechamiento.

### **Denuncia sobre destrucción de piedras en las riberas de Mar del Plata.**

*Excmo. Señor:*

Sería repetir y repetirme si hubiera de establecer en este dictamen el concepto constitucional, legal y administrativo que existe en materia de la jurisdicción del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Provinciales sobre los ríos, sus playas y costas, así como las de los mares que bañan las costas de la República.

Me limitaré en el caso a recordar a V. E. que, de acuerdo con un dictamen del ilustrado Procurador General de la Nación don Eduardo Costa de septiembre 10 de 1889, quien estudió a fondo la cuestión, el P. E. dictó el decreto de noviembre 11 de 1889, hizo suyas las ideas allí expuestas y adhiriendo a sus autorizadas conclusiones, declaró como entendía las respectivas jurisdicciones del Estado General y de los Estados particulares sobre las playas del mar y riberas de los ríos navegables.

Es de notarse, por lo que ello importa para su mayor autoridad, que ese decreto está firmado por dos hombres de Estado, dignos del

más alto respeto y autoridad científica : el Dr. Vicente F. López y el Dr. Carlos Pellegrini.

En el art. 1º de ese decreto se dijo y estableció de manera terminante:

“Declárase .....”.

El Gobierno posteriormente ha aplicado sin variación tal declaración de acuerdo siempre con sus asesores letrados quienes siempre han coincidido al respecto.

Por mi parte, en diversas ocasiones, ya ante el Ministro del Interior, de Agricultura y aún de ese Ministerio, he tenido ocasión de sostener las mismas ideas, siendo públicas las resoluciones dictadas por el P. E. en el mismo sentido.

Creo pues que puede afirmarse sin temor de error.

Que ya existe una disposición general que gobierna las jurisdicciones del Gobierno General o de los Gobiernos Provinciales, sobre las playas de mar y riberas o lechos de ríos navegables.

Que en consecuencia no pueden ni deben haber los conflictos a que se alude en el precedente informe, a menos de desconocer lo estatuido y reconocido por el mismo P. E. en el decreto citado y sus resoluciones posteriores y concordantes.

Que no es procedente, la suspensión que se requiere de las concesiones que se mencionan, que no consta ni se establece por la repartición informante, que esas concesiones sean ilegítimas ni constituyan actualmente un obstáculo al tránsito público, a la navegación o al comercio exterior de la República, única fuente de la jurisdicción del Gobierno General en el caso.

Creo que los antecedentes recordados bastarán para que V. E. resuelva este asunto dentro de los principios y declaraciones mencionados, cuya aplicación por otra parte, aconseja el que suscribe.  
— Agosto 24 de 1907.

=====



Los actos y resoluciones del P. E., no son susceptibles de apelación por ante el Poder Judicial. Los particulares tienen señalado en las leyes el procedimiento a seguir, si consideran que dichos actos o resoluciones vulneran o atentan derechos que les son propios.

**Juez Federal Dr. Urdinarraín en los autos iniciados por don Juan Sánchez, pide envío “ad effectum videndi” de un expediente sobre abono de papel sellado por los bancos.**

*Excmo. Señor:*

El ejercicio por el P. E. de las facultades que le están expresamente conferidas por los incs. 1, 2 y 13 del art. 86 de la Constitución, no está sujeto, en sus actos y resoluciones, a recursos de apelación, en forma alguna, para ante los Tribunales de Justicia.

Así, ningún juez ni tribunal tiene facultad ni competencia para hacer prosperar el recurso que en el caso motiva el oficio precedente, ni V. E. está obligado a exhibir, ni someterle sus actuaciones ni resoluciones administrativas obradas y dictadas dentro del ejercicio de aquellas facultades.

Las personas que se consideren lesionadas por ellas tienen caminos legales y constitucionales bien marcados, los que una vez emprendidos someten, recién y en forma determinada, esos actos y resoluciones al examen de los jueces y Tribunales respectivos (art. 1 de la Ley 3515, demanda contra la Nación previa venia del Congreso, art. 100 de la Constitución).

Creo que dentro de tales conceptos, y respondiendo a la necesaria independencia y pronta expedición de los actos del P. E. en la administración pública, que evidentemente fundan aquéllos, debe V. E. contestar al Sr. Juez oficiante, informándole tales razones que son las que en mi sentir han de moverle a abstenerse de la remisión solicitada. — 24 de agosto de 1907.

=====

La suplencia de funcionarios judiciales ordenada por la Ley 4162, no autoriza a cobrar la diferencia de sueldos que exista entre el sustituto y el sustituido.

**Don Angel Cao, solicita el pago de la diferencia de sueldo entre Defensor de Menores y Fiscal.**

*Excmo. Señor:*

La suplencia desempeñada por el recurrente por ausencia del Fiscal titular, lo ha sido a mérito de la obligación legal que le impone el art. 7 de la Ley 4162 de enero 8 de 1903, sobre suplencias de funcionarios judiciales.

Como esa ley no expresa que tal circunstancia haya de reputarse extraordinaria, ni que haya de ser remunerada excepcionalmente, se desprende que es una obligación inherente al cargo; siendo lógico deducir que el recurrente no tiene derecho a lo que reclama y que V. E. no debe hacer lugar a ello. — 29 de agosto de 1907.

=====

Es de jurisdicción contenciosa, de carácter judicial la cuestión del mejor derecho de dominio a una tierra en la que existen borateras situada en la Gobernación de Los Andes, concedida por la Provincia de Salta, antes de pasar a jurisdicción de la Nación.

**Ascensión J. de Dávalos, sobre borateras en el Territorio de los Andes.**

*Excmo. Señor:*

La presentación que hace la sociedad "The Cuevitas Trading Co.", pidiendo que el Poder Ejecutivo ordene la inscripción, a su nombre, de 14 pertenencias de borateras ubicadas en el "Solar de Hombre Muerto", Departamento de Molinos de la Gobernación de los Andes, las que han sido materia de un decreto de revalidación de título expedido por el Poder Ejecutivo, en favor de la Sra. Ascensión J. de Dávalos, en fecha de 7 de marzo de 1901; se ampara en que, según la sociedad recurrente, la señora de Dávalos no es dueña exclusiva del terreno en que dichas borateras existen, ni ha exhibido suficientes títulos que acrediten su propiedad sobre el suelo, a fin de estar en las condiciones del art. 81 en armonía con el

art. 92 del Código de Minas, para ser propietaria de tal número de pertenencias mineras.

Según aparece claramente comprobado en este expediente, el referido decreto de V. E. de 7 de marzo de 1901, en cuya virtud se declaró válido el título de propiedad minera otorgado por el Gobierno de la Provincia de Salta a favor de la señora de Dávalos, sólo importa en reconocimiento, por parte del Gobierno de la Nación, a cuya jurisdicción territorial pasó la Gobernación de los Andes en que están situadas aquellas borateras, de una concesión legalmente efectuada por dicho Gobierno de Provincia antes de la Ley 3906.

Tal reconocimiento, en ejercicio de la soberanía nacional sobre aquel paraje, significa simplemente, la aplicación de la doctrina que rige la materia, cada vez que, un territorio sujeto a la soberanía provincial, pasa a la dependencia del poder de la Nación.

Pero, como la petición de la sociedad recurrente, plantea la resolución de una cuestión de dominio sobre el suelo en que están dichas borateras, al negarle eficacia legal a los títulos presentados por la señora de Dávalos, para acreditar un derecho de propiedad sobre el terreno, considero que se trata de un caso *contencioso-judicial*, cuya definitiva y formal resolución no pertenece a la jurisdicción de V. E.

En consecuencia, opino que, en el caso ocurrente, corresponde que V. E. mantenga en todo su vigor, el decreto de 7 de marzo de 1901, haciendo saber a la señora de Dávalos y a la sociedad peticionante que deben resolver previamente en juicio contencioso-judicial la eficacia o invalidez legal de los títulos que obrasen en el expediente para acreditar la propiedad que aquella señora invoca sobre el suelo en que están dichas borateras y que niega la sociedad postulante. — 29 de agosto de 1907.

=====

No procede requerir, y menos otorgar la fuerza pública por el P. E., por resistencia de una autoridad a poner en libertad a un ciudadano por orden de un Juez Federal. Corresponde poner el hecho en conocimiento de la autoridad superior a la que resiste o se opone a la orden de libertad, para que aquélla tome las providencias del caso.

**Juez Federal de Jujuy, pide la fuerza pública para poner en libertad a un ciudadano detenido en un cuartel de línea.**

*Excmo. Señor:*

Considero injustificada la precedente comunicación telegráfica del Sr. Juez Federal de Jujuy a V. E.:

1º Porque, con arreglo a la ley, no procede el requerimiento de la fuerza pública por el juez cuya sentencia ha sido desacatada por la autoridad inmediata que mantiene detenida a la persona cuya libertad ordena. La ley prescribe en análogas circunstancias que el dicho juez ha de dirigirse al Superior de aquella autoridad haciéndole saber su inconducta a los fines consiguientes (art. 634 Código de Procedimiento Penal).

2º Porque en ningún caso es V. E. intermediario para aquel requerimiento; lo es legalmente el Ministro de la Guerra, Jefe del departamento del P. E. por donde se manifiesta el comando de las fuerzas de la Nación confiadas al Sr. Presidente de la República, por expresa prescripción constitucional (art. 86, inc. 15 Constitución; art. 12 Ley 3727).

3º Porque no es el momento, ni menos ante V. E., de declinar responsabilidades que sólo puede y debe apreciar en la oportunidad debida, la autoridad especial, designada al efecto, cuando se trata de funcionarios como el comunicante (art. 45, 51 y 96 de la Constitución).

Si V. E. participara de tales conclusiones, sería el caso de transmitirlas telegráficamente al Sr. Juez de Jujuy, a fin de que adoptando los procedimientos legales del caso, se provea a la mayor brevedad posible a la libertad del ciudadano que se dice indebidamente detenido. — 29 de agosto de 1907.

*Tomado como resolución: Boletín Oficial N° 4139, pág. 1043, de septiembre 3 de 1907.*

=====

La exención de derechos aduaneros a la importación, concedido a una empresa, no implica eximirla del pago de derechos de eslingaje por tratarse de dos impuestos diferentes.

**Ferrocarril de Entre Ríos, pide se ordene a la Aduana de Gualeguay que suspenda el cobro de eslingaje por los materiales que introduce.**

*Excmo. Señor:*

Si bien es cierto que en virtud del art. 11 de la Ley 5041 la Compañía recurrente se encuentra liberada de derechos aduaneros por los materiales que introduce destinados a la construcción del puerto de Ibicuy, esa liberación no puede legalmente alcanzar hasta la exoneración del pago del eslingaje en la descarga de ese material que, en el caso, le ha cobrado la Aduana de Gualeguay.

Estableciendo el art. 5 de la Ley 4928 que, el eslingaje es un impuesto, legislado por una ley especial, y que *se cobrará hágase o no uso de peones fiscales esté o no exonerado de derechos la mercadería, por cualquier concepto*, es lógico afirmar que se trata de un impuesto diverso al aduanero de entrada, que gobierna y establece la ley respectiva (Ley 4933), y que es el único de que en el caso está eximida la “Empresa de los Ferro-Carriles de Entre Ríos” (art. 11 Ley 5041) y es evidente también que ninguna influencia tiene a los fines del reclamo de los recurrentes, ni aquella exoneración, ni el uso de los peones fiscales para su descarga, dado que la ley misma declara inocua una y otra circunstancia como expresamente lo establece el párrafo transcripto.

No creo en este punto aceptable, ni la comparación ni la jurisprudencia que los recurrentes invocan en la situación del Ferrocarril del Sud en su prolongación al Neuquén; el art. 8 del contrato que aprobó la ley 3344 declaró “*eximidos de derechos de introducción e impuestos de cualquier clase los materiales que se introduzcan durante cincuenta años...*”, mientras que el art. 8 de la Ley 5041 relativa a la exoneración de la Empresa recurrente, sólo habla de los derechos aduaneros o de importación, sin hablar de aquellos a que aquel otro contrato y ley se refiere.

En cuanto al derecho de estadística que también resulta haberse cobrado a la Empresa, pienso que no procede en el caso, debiendo devolverse lo por ella exigido.

El art. 8 de la ley 4933 se refiere solo a las casas que ejercen el

comercio de importación o exportación de los productos que enumera o que se ocupen de operaciones de tránsito para el exterior; la Empresa recurrente no puede ser reputada una de esas casas, ni sus operaciones de descarga pueden considerarse de tránsito, dado que es bien conocido que se trata de material para sus construcciones que, por otra parte, está sometido a la estadística que la ley prescribe para todos los efectos introducidos libres de derechos por los Ferro-Carriles. — 5 de septiembre de 1907.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4250, pág. 147 de enero 16 de 1908.*

=====

Un Jefe de Regimiento que tiene detenido a un ciudadano, cuya detención solicitó a la autoridad civil y al que sometió al Juzgado Federal, debe mantenerlo a disposición de éste y ponerlo en libertad si éste lo ordena, sin dar intervención a ninguna otra autoridad militar, sin perjuicio de proceder en cuanto a su jerarquía de conformidad a las ordenanzas que lo gobiernan.

**Jefe de la 1ª Región Militar, denuncia que el Juez Dr. Astigueta ha ordenado directamente al Jefe del Regimiento 1º de Línea, la libertad del conscripto Peregrino Agesta.**

*Excmo. Señor:*

Al limitarse el Sr. Jefe de Comando, General O'Donnell, a pedir la captura del supuesto infractor Peregrino Agesta, a que se refiere la nota que encabeza estas constancias, al abstenerse de hacer él mismo la captura, requiriéndola de la Policía de la Capital, y al dirigirse en la misma fecha al Sr. Juez Federal poniendo a su disposición el detenido, que según consta quedó recluso en el cuartel del Regimiento 1º de Infantería de Línea, ese Jefe de Comando reconoció implícitamente, como no podía menos de hacerlo, que él carecía absolutamente de jurisdicción para esa captura y detención, que tampoco la tenía para juzgar a Agesta a quien, sin más trámite, puso a disposición del Sr. Juez Federal, y si el detenido fué internado en el cuartel del expresado regimiento, no pudo serlo sino en calidad de preso bajo la guarda del Jefe de ese regimiento o cuartel, y en prestación del auxilio a que se refiere la ley (art. 13 Ley 48).

En tales condiciones Agesta no pudo ser dado de alta en otro carácter, por cuanto dependía de su purgamiento, de si había sido o no conscripto obligado al servicio y si era o no un infractor de la Ley 4707.

El Sr. Jefe de Comando fué un simple denunciante de la supuesta infracción de Agesta, la que no tenía carácter militar sino civil, siendo extraño al expresado Jefe el proceso (art. 164 y 168 del Cód. de Procedimiento Penal).

El Cuartel del Regimiento 1° de Línea fué el lugar de la detención, como podría haberlo sido cualquier comisaría u otro punto o establecimiento análogo, y su comandante o jefe, el simple guardador del preso, con todas las obligaciones inherentes a tales funciones, respecto del preso y del Juez de la causa, en cuanto fueran compatibles con el régimen interno del cuartel (art. 677 del Cód. de Procedimiento Penal).

El Juez Federal en este caso, es quien tenía única y exclusiva jurisdicción sobre el detenido y éste estaba sometido directa y exclusivamente a su *imperium* a los efectos del ejercicio de aquélla.

Extraño pues el asunto a la jurisdicción militar (art. 100 de la Constitución) fuera de la acción de los Jefes de la fuerza armada por no formar parte de ellos el detenido, y sólo constituido el Jefe del Regimiento expresado en guardador del reo, la autoridad del Juez Federal, en asunto de su competencia, como es este, se ejerció directamente sobre el encausado con exclusión de toda otra autoridad (art. 100 de la Constitución y 3 de la Ley 48), debiendo aquel Jefe de Regimiento obedecer los mandatos que el Juez expidiera a los efectos del purgamiento y sentencia del reo y en prestación del auxilio referido que menciona el citado art. 13 de la Ley 48.

La intromisión de cualquier otra autoridad, que bajo cualquier pretexto o razón tendieran a detener, rever, autorizar o desautorizar las órdenes del Juez relativas al juzgamiento y sentencia del reo, que su guardador debe inmediatamente cumplir, sería un ataque a su jurisdicción privativa y legal, un desconocimiento de la autoridad Constitucional que inviste; y tratándose de la libertad de un ciudadano por él ordenada, será un atentado contra la garantía constitucional expresa de que nadie puede ser sacado de sus jueces naturales ni arrestado sino por orden escrita de autoridad competente (art. 18), lo que sucedería desde que, una autoridad militar por razones de su propio fuero, viniera a detener aquella orden o a pro-

longar un arresto que ya no tendría base constitucional en que apoyarse.

Soy pues de opinión, concordante con estas consideraciones que así como el Sr. Jefe del Comando obró correctamente separándose de conocer en el purgamiento de Agesta quien nunca pudo ser dado de alta, sino como preso y no como soldado, el Sr. Jefe del Regimiento obró en igualdad de condiciones al presentar al Juez Federal al detenido que custodiaba en su cuartel, cuando le fué requerido en noviembre 3 de 1906 por prestar declaración indagatoria y en ponerlo en libertad cuando el mismo Juez así lo requirió.

Pienso pues, que como regla general, y en casos como el presente los Jefes de Regimientos o autoridades militares que tengan a su inmediata custodia un detenido a disposición de un Juez Federal, deben cumplir sin dilación las órdenes que ese Juez expide dentro de su jurisdicción legal y autoridad constitucional, sin perjuicio de dar cuenta a su superior o llenar las exigencias de su servicio como deba hacerlo dentro de su jerarquía y en cumplimiento de las ordenanzas que le gobiernan. — 13 de septiembre de 1907.

=====

Una sociedad que persigue finalidades de interés común y de interés privado, primando los primeros sobre los segundos, cumple con el objetivo de bien común a los efectos del otorgamiento de la personería jurídica.

### **Sociedad Unión Fabricantes de Harina, sobre aprobación de estatutos.**

*Excmo. Señor:*

Los recurrentes han provisto dentro de las facultades conferidas por los estatutos a su Directorio (art. 26) a las exigencias de la Inspección de Justicia en las observaciones relativas a la facultad de adquirir bienes y a la citación de las asambleas.

En cuanto a los objetos de la sociedad, tal como se consignan en los incisos que componen el art. 1 de los estatutos, y con prescindencia de las no muy inspiradas explicaciones de los interesados en su precedente escrito, soy de opinión que aquellos son convenientes al pueblo y envuelven propósitos que satisfacen el interés común concordante con aquella conveniencia.



Creo que esto coloca a la sociedad recurrente dentro de los términos de la primera y última parte del art. 33 del Cód. Civil.

Cuando se exteriorizan propósitos que, en definitiva, tienden a nuestro progreso común y libre ejercicio de nuestra actividad, por el desenvolvimiento y estabilidad de una de nuestras industrias nacionales, por la regularización del trabajo que la sostienen, con horarios determinados y razonables, selección de operarios y observancia de las leyes y reglas que rigen aquél, y cuando se busca la unión para oponer resistencia a elementos dañosos y adversos a esas industrias y al trabajo nacional; pienso que se satisface seriamente la conveniencia del pueblo y el interés de la comunidad, en el sentido de que tales propósitos abren y garanten nuestras fuentes de riqueza, y franquean el camino de la actividad y labor honesta del país.

Las miras particulares e intereses producidos que corren paralelos con aquella conveniencia y con aquel interés no obstan a su existencia, siempre que por la manera como son contemplados unos y otros por la institución social de que se trata, no se obstruya ni se sobreponga lo primero a lo segundo, sino que por el contrario, lo corroboren, sirvan y garantan.

Creo que en el caso *sub-judice* acontece tal cosa. En los diversos incisos del art. 1 de los estatutos presentados, a los propósitos privados que enuncian van acompañados, los de carácter común y convenientes al punto a que me he referido y éstos por su mayor entidad dominan sobre aquéllos y traen la sociedad a los términos citados del art. 33 del Código Civil.

En tales conceptos y resultando de los informes que anteceden satisfechas las demás exigencias de la ley, creo que V. E. puede acordar la personería jurídica que se pide. — 13 de septiembre de 1907.

=====

Los Gobernadores de Territorios no tienen facultades para dictar edictos estableciendo penas contra la embriaguez y alcoholismo.

**Gobernador de Formosa, sobre edicto reglamentando  
el expendio de bebidas alcohólicas.**

*Excmo. Señor:*

Por más laudables que sean los propósitos del Sr. Gobernador de Formosa y de su Jefe de Policía, al tratar de evitar la embriaguez y el alcoholismo entre sus administrados, creo que debe V. E. ordenarles el retiro del edicto policial que han puesto en vigencia, estableciendo penas, de propia autoridad, y modificando un Código sancionado por el Congreso, Código que esos funcionarios encuentran defectuoso e imprevisor.

Convendría recordar a esos funcionarios, que las penas sólo las establece la ley, que los Códigos sólo los sanciona y modifica el Congreso, y que es obligación ineludible de todo funcionario público dependiente de V. E., ejercer sus funciones dentro de los límites y preceptos expresos de la ley y decretos que los gobiernan (art. 7 Ley 1532 y decretos correlativos de V. E.). — 17 de septiembre de 1907.

=====

La relación entre los empleados y el Estado, su nombramiento, conservación de sus cargos o jubilaciones, no constituye para aquéllos un derecho adquirido a mérito de un contrato. Las concesiones a que aspire un empleado dentro de tales conceptos, pueden pedirse pero no exigirse.

**Augusto Van Gelderen sobre ampliación de jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Cuando el P. E. en el acuerdo de 6 de abril de 1905 concedió al recurrente la ampliación de su jubilación de la manera que lo hizo y dentro de los límites de tiempo que le fijó, usó de un derecho propio y de una facultad consagrada por el inc. 7 del art. 86 de la Constitución y jurisprudencia establecida por la Suprema Corte (inc. 99 pág. 309).

Al proceder así hizo al Sr. Van Gelderen una concesión, sin por ello reconocerle un derecho adquirido contra tal facultad cons-

titucional, dado que en ningún caso puede reputarse que las relaciones que haya entre la Nación y sus empleados por el nombramiento, conservación de los puestos y jubilación, sean las que, en el derecho común, suponen un contrato que no ha existido, ni podido existir (jurisprudencia citada).

En tales conceptos, examinando el escrito del recurrente, resulta infundado, pues no tiene el derecho adquirido que alega, pudiendo sólo ser tomada su pretensión como un llamado de equidad a V. E. para que juzgue y ordene la tercera ampliación de su segunda jubilación, acumulada a la de fundador de la Escuela Normal de Profesores de la Capital.

Bajo este punto de vista y sin entrar a examinar en detalle los servicios a la educación prestados por el recurrente, dado que los considerandos del acuerdo del 6 de abril de 1905, haciéndoles honor, han basado suficientemente la liberalidad con que allí se les aprecia, y han expresado razones además tan serias para fundar la limitación de tiempo que a la percepción de la jubilación de tal cátedra de alemán se impone, que considero justo y equitativo que V. E. mantenga esa resolución, en la seguridad que no hiere un derecho adquirido, que obra dentro de propias facultades, y que contempla con justicia y liberalidad notoria los servicios prestados por el recurrente en el puesto de cuya jubilación se trata. — 21 de septiembre de 1907.

=====

Compete conocer de la inconducta de un agente fiscal de la justicia ordinaria, a la Cámara Civil, que tiene la superintendencia sobre tales funcionarios.

**Florencio Calzada, haciendo denuncias contra el Fiscal  
Dr. Naveira.**

*Excmo. Señor:*

Soy de opinión que estos antecedentes deben ser pasados a la Cámara Civil de Apelaciones de la Capital, a quien con arreglo a la ley corresponde entender de la inconducta denunciada así como de los descargos del Sr. Agente Fiscal de ese fuero y de que aquí se trata.

Envolviendo cargos la denuncia, que suponen negligencia y aún

desconsideración de parte de ese funcionario para con sus obligaciones, creo que es el caso de que aquel tribunal ejerza la facultad de superintendencia que sobre los Tribunales y funcionarios de su ramo le confieren los arts. 102 y 103 (inc. 2) de la Ley 1893 sobre organización de los Tribunales de la Capital.

Radicados en su fuero los procesos que parecen motivar las denuncias expresadas, fácil será para aquel Tribunal llegar al conocimiento exacto de los hechos, al juzgamiento preciso de la conducta del agente fiscal acusado, y al pronunciamiento que por derecho corresponde a su conducta, sin perjuicio todo ello de la acción que a V. E. corresponda a su respecto, una vez conocido tal pronunciamiento. — 23 de septiembre de 1907.

=====

Debe notificarse personalmente al Presidente de la República, la citación de evicción hecha a la Nación, en su carácter de persona jurídica.

**Juez Dr. Derrer citando de evicción al Gobierno Nacional en el juicio seguido por Antonio Guanadrea contra Alfonso Tommasiovin, sobre reivindicación.**

*Excmo. Señor:*

Citada de evicción la Nación según lo expresa el precedente exhorto, procede la notificación requerida por el Sr. Juez Federal, al Sr. Presidente de la República, por ser él, quien tiene a su cargo la administración general del país y está investido de la representación de aquélla en su carácter de persona jurídica, en cuyo único concepto es y puede ser citada de evicción.

Hecha la notificación considero conveniente se comunique al Procurador Fiscal de la sección correspondiente, para que tome conocimiento del juicio que la motiva, y velando por los intereses de la Nación, asuma la actitud más conveniente a esos intereses. — 24 de septiembre de 1907.

=====

Tratándose de un deslinde de tierras dentro de la jurisdicción de la Provincia de Salta practicado por orden de sus autoridades y constatando que en la parte que lindan con Bolivia, la frontera está ya perfectamente determinada, no corresponde dar a conocer dicho deslinde a las autoridades bolivianas, las que son siempre extrañas a los actos jurisdiccionales de una provincia argentina dentro de su propio territorio.

**Exhorto del Juez de 1ª Instancia en lo Civil de la Provincia de Salta, al Ministro de Relaciones Exteriores sobre deslinde y mensura de 93 leguas de tierra.**

*Excmo. Señor:*

Resulta del precedente informe de la Oficina de Límites Internacionales, que las tierras de cuyo deslinde se trata, están dentro del territorio jurisdiccional de la Provincia de Salta, cuyo Gobierno parece haber iniciado ese deslinde ante la autoridad judicial respectiva.

Resulta igualmente que en la parte en que esas tierras son colindantes con la República de Bolivia, la frontera está perfectamente trazada, establecida y amojonada por la comisión mixta de límites Argentina-Boliviana.

Estas circunstancias hacen en mi sentir, de todo punto improcedente el aviso que se requiere al Gobierno de ese país vecino dado que, según resulta el Gobierno de Salta sólo pretende medir tierras dentro de su jurisdicción no siendo de confundirse los límites que la separan de Bolivia en esa parte, por la claridad con que resulta establecida ya, la frontera respectiva.

Y aún en el caso remoto de que llegara a producirse una confusión de límites en ese punto, es de presumirse que el Gobierno de Salta y el técnico que en su nombre, haga el deslinde, sabrán constatar con la precisión del caso, la existencia de la frontera internacional trazada y establecida a mérito de un tratado o convención, cuyo respeto está impuesto terminantemente y para todos, por prescripción expresa de la Constitución (art. 31).

Soy de opinión pues, que para ese respeto, es tan innecesaria la intervención de las autoridades bolivianas, como improcedente su participación en el acto jurisdiccional y de dominio que trata de hacer la Provincia de Salta dentro de su territorio.

En tal concepto pues, creo que V. E. debe hacer presente al

Juez Oficiante el informe que antecede de la Oficina de Límites Internacionales que da la ubicación precisa de las tierras de que se trata, en relación a la frontera con la República de Bolivia, y significarle al propio tiempo, lo innecesario y aún lo inconveniente del aviso indicado a ese Gobierno a los efectos de la operación de deslinde de que se trata. — Septiembre 24 de 1907.

*Tomado como resolución.*

=====

Aun cuando no haya mediado juicio de expropiación, si el Estado adquirió tierras afectadas por una ley de expropiación, a las que luego no dió el destino determinado en dicha ley, debe devolverlas al interesado, si éste lo requiere.

**José M. Burgos, pide devolución de tierras en Belgrano.**

*Excmo. Señor:*

Resultando del precedente título y boleto de compra venta, cuya copia se adjunta por la oficina respectiva, que el recurrente vendió la tierra a que se refiere, a instancia del Gobierno de la Nación a los efectos del cumplimiento de la Ley 4290.

Teniendo presente que, aun cuando no se llevaran a efecto los trámites judiciales de la expropiación, lo que no tuvo lugar sin duda por no haberse producido divergencia en el precio de la cosa —único caso de iniciar el procedimiento respectivo— de acuerdo con el art. 6 de la Ley 189, las gestiones oficiales que denuncian el boleto y la escritura acompañados, dejan ver que se entendió hacer una expropiación a los efectos ya mencionados.

Que en tales conceptos resultantes de los documentos referidos, el recurrente se halla en las condiciones de expropiado, y por ende, habilitado para requerir la devolución que requiere, siempre que la cosa de que se trate se halle dentro de las condiciones del art. 19 de la citada ley.

A este respecto, es explícito el informe de la oficina respectiva, que se registra en estos antecedentes, del cual se desprende que, la tierra en cuestión no está comprendida en la zona en que se construyen o proyectan construirse edificios militares, debiendo constar en ese Ministerio si es que no se entiende destinarla a otros objetos,

aun cuando siempre dentro de la Ley 4290, que motivó la compra por expropiación de que se trata.

En tales condiciones no veo inconveniente que V. E. ordene la devolución pedida dentro del art. 19 de la Ley 189 citado, entendiéndose como corresponde, que la entrega se hará contra el pago de su importe y que los gastos que originen serán de cuenta del recurrente. — Septiembre 25 de 1907.

=====

Es contrario a la Constitución, el reglamento militar, que so pretexto de organización o disciplina prohíba el derecho de asociación con fines útiles.

### **Consulta sobre derecho de los militares para asociarse.**

*Excmo. Señor:*

Por más delicado que se considere en el orden militar, todo lo que afecta su organización o disciplina, no es de olvidarse que el ejército se forma de argentinos y que tienen garantías y derechos consagrados por nuestra Carta Fundamental, que no es dado desconocer, ni someter a la existencia de reglamentaciones más o menos severas o previsoras.

El Comando del ejército tiene la autoridad y medios necesarios para ir hasta la pena cuando de mantener la disciplina se trata, sin necesidad de desconocer o desmembrar de antemano aquellas garantías que justamente él está llamado a apoyar y defender.

Un militar que se asocia con fines útiles, que publica sus ideas, que se propone enseñar o aprender por ejemplo, no puede ni debe ser coartado en el ejercicio de tales derechos, sin perjuicio de que si con ello falta a sus obligaciones militares sea juzgado por sus jueces naturales, y sufra la pena que le impongan las ordenanzas que rigen sus actos dentro de ese fuero.

Soy de opinión pues, que este aspecto no es incompatible con la disciplina militar de nuestra institución armada, disciplina que bien mantenida dentro de la ley y por las autoridades constituídas, no necesita de reglamentaciones que muchas veces denuncian más debilidad que vigor en su mantenimiento.

Creo que V. E. debe resolver en el caso, dejando incólume en los militares la libertad de asociarse, sin perjuicio de poner a cubierto

la disciplina, de cualquier ataque que pudiera llevarsele. — Septiembre 30 de 1907.

=====

Los depósitos particulares, habilitados como fiscales, quedan sometidos a las leyes y reglamentos que gobiernan a estos últimos.

**Compañía Muelles y Depósitos del Puerto de La Plata, consulta si los inflamables que se reembarcan de sus depósitos deben o no abonar derecho de almacenaje.**

*Excmo. Señor:*

Cuando se habilita un depósito particular como depósito fiscal, es fuera de duda que se equipara uno al otro, en el sentido de ponerlos en igualdad de condiciones.

El privilegio o la concesión que se acuerda al dueño del depósito particular de hacer las operaciones y de almacenar lo que sólo compete ordinariamente a los depósitos fiscales, es de suyo una ventaja que representa un lucro para aquel, el que es correcto, en tanto cuanto coadyuva al movimiento aduanero oficial, pero deja de ser tal cuando afecta las franquicias que la ley misma acuerda a todos aquellos que mueven mercaderías y que, por accidente o por obligación tienen que ocurrir a los depósitos particulares habilitados.

Todos sabemos que cuando tales habilitaciones se acuerdan son generalmente pedidas por los dueños respectivos, quienes saben bien y de antemano las franquicias de la ley en materia de almacenaje, franquicias a las que, el P. E. no puede hacer excepciones ni poner límites por falta de distingos y de autorización legal.

Así pues, siendo general la disposición que consagra el art. 11 de la Ley 4928 en cuanto a la franquicia que establece, no autorizando al P. E. a hacer excepciones, entendiéndose que los depósitos particulares habilitados como fiscales, se hallan en igual situación legal, y siendo notorio que esa habilitación y sus condiciones, así como la ley de almacenaje y eslingajes son y deben ser conocidas de antemano por sus propietarios, es obvio para mí que no hay razón alguna para obligar a pagar el derecho de almacenaje que se requiere por la Compañía “Muelles y Depósitos de La Plata” contra la fran-



quicia asegurada a los que allí operan o almacenan por el texto claro y terminante de la disposición citada.

Soy en consecuencia de oponión que V. E. debe declararla obligatoria para la compañía recurrente, como si sus depósitos habilitados fueran realmente depósitos fiscales. — Septiembre 30 de 1907.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4179, pág. 325 de octubre 19 de 1907.*

=====

El P. E. no invade atribuciones judiciales cuando examina el mandato de los Jueces cuyos diligenciamiento se le encomienda, referente a la persona o intereses de Ministros Diplomáticos o Cónsules acreditados en la República.

Los agentes diplomáticos no están sujetos a la jurisdicción civil o criminal de los jueces de la República.

No corresponde dar curso a una notificación ordenada por un juez federal, en la persona del Ministro representante de Inglaterra, en la que se le pide el embargo de fondos de un Cónsul de esa Nación, ordenada en juicio que le sigue el Estado Argentino.

**Exhorto del Juez Federal del Rosario, para que se notifique al Ministro Inglés el embargo de dineros del Cónsul Ingles en el Rosario.**

*Excmo. Señor:*

El Presidente de la República como Jefe Supremo de la Nación, a cuyo cargo se encuentra la administración del país, así como la representación diplomática con las Naciones extranjeras según lo establecen los incs. 1, 10 y 16 del art. 86 de la Constitución Nacional; no invade atribuciones judiciales al examinar los mandatos de los Jueces, cuyo diligenciamiento se le encomienda, cuando ellas se refieren a la persona e intereses de los Ministros diplomáticos o de los Cónsules acreditados por las potencias extranjeras en la República, como sucede en el caso ocurrente.

Entrando pues al contenido de la diligencia judicial de que se trata, no encuentro ley alguna en virtud de la cual, el Sr. Juez Federal del Rosario pueda constituir, al Sr. Ministro Plenipotenciario de Inglaterra en ejecutor de un embargo de dinero pronunciado contra

el Cónsul inglés en esa ciudad, sobre fondos que éste perciba por intermedio de aquella legación.

Sería someter, a dicho diplomático extranjero, a la jurisdicción de los Jueces del país en que se encuentra acreditado, contra la uniforme doctrina de la inmunidad que rodea a tales representantes, como lógica consecuencia de la extraterritorialidad consagrada por el derecho de gentes, sin discrepancia de opiniones.

Los agentes diplomáticos están exceptuados de la jurisdicción civil como de la criminal de las autoridades del país ante el cual han sido acreditados, y la ejecución del mandato judicial que se pretende hacer saber al Sr. Ministro de la Gran Bretaña, por medio de una notificación, importaría el imperio del Juzgado que la ordena, en asunto sometido a su exclusivo conocimiento. No puede por ello, diligenciarse tal mandato, en la forma expedida.

Al Sr. Juez de la causa compete establecer la mejor manera, con arreglo a estos principios, de ejecutoriar la sentencia que ha pronunciado respecto del mencionado Cónsul.

Por lo demás, en cuanto al asunto en sí, es procedente la autoridad de aquel magistrado, para conocer de él, por cuanto dicho Sr. Cónsul no goza de los privilegios de agente diplomático, en razón de que, según la doctrina más avanzada, los Cónsules de su clase están sujetos a la Jurisdicción Civil y Criminal del país donde ejercen sus funciones, salvo el caso de tratados, lo que no ocurren en el sub-judice.

Así lo ha declarado el Gobierno de la Nación con respecto a su cuerpo consular, en los arts. 59 y 62 y concordantes de la Reglamentación vigente de la ley que rige la materia.

Así también lo considera el Gobierno de la Gran Bretaña, referente a los Cónsules extranjeros, que le son allí acreditados.

Bien, pues, siendo procedente ante el derecho de gentes, así como ante la legislación del país, el sometimiento de la cuestión contenciosa por el cobro de pesos contra el Cónsul inglés del Rosario; pero, resultando improcedente la notificación de la sentencia pronunciada al Sr. Ministro de la Gran Bretaña, en la forma que dicho magistrado lo solicita, opino que V. E. no debe dar curso a la diligencia requerida sin perjuicio de que, el Sr. Juez de la causa la reitere en la forma que corresponda y con arreglo de los principios enunciados. — Octubre 11 de 1907.

=====

Excepuada una empresa ferroviaria por la ley y contrato de concesión del pago del impuesto territorial, por un tiempo determinado, no puede pretender que se mantenga esa excepción por mayor término que el señalado.

La exención de impuesto, es en el caso de carácter público y legal, y en tal concepto no puede ella ser prorrogada ni modificada por un simple decreto o contrato privado.

**Ferrocarril Central Argentino reclama de la contribución directa que se le cobra por la Estación Retiro, correspondiente al año 1906.**

*Excmo. Señor:*

Motiva este expediente la resistencia que opone la Empresa del Ferrocarril Central Argentino, al pago de la contribución territorial que le exige la oficina respectiva de la Capital Federal, por el inmueble de su propiedad ocupado por la Estación Retiro y cuyos límites y descripción se contiene en el plano agregado.

La mencionada exigencia es por el pago del referido impuesto durante el tiempo transcurrido de abril de 1906 hasta el fin de ese año, respetando lo estatuido por el decreto de julio 14 de 1906 que provocó hasta esa fecha la excepción acordada a la Empresa por el art. 40 del contrato-concesión aprobado por la Ley 33, de mayo 23 de 1863.

Aun cuando reputo muy dudosa la aplicabilidad al caso del mencionado decreto, porque él no ha podido llevar una excepción legal, de 1903 a 1906, ni se lo puede aplicar por analogía tratándose de impuesto territorial, claro es que él sólo se refiere a derechos de Aduana; quiero aceptar, con las reservas del caso, que recién desde esa época, formula la respectiva oficina la exigencia del mencionado pago para sostener que ella es tan justificada como injustificada la resistencia de la Empresa.

Vencidos con exceso los cuarenta años de excepción de impuestos de la Ley 33 (1863 a 1903) y siendo la Ley de Contribución de aplicación general e igualitaria, la Empresa demandada está sometida a ella como lo están las personas y cosas que le están afectas.

Esto no lo discute ni ella misma; a pagado su patente como sociedad anónima por igual período de tiempo, y a convenido implícitamente en lo dicho cuando se limita a excepcionarse del pago de la contribución territorial que hoy se le cobra, amparándose a las

gracias, excepciones y privilegios, que por el término de 50 años concedieron al extinguido F. C. del Norte de Buenos Aires las leyes de la Legislatura de esa Provincia de 1857 y 1859.

La Empresa resistente invoca esos privilegios y los opone a la exigencia de la oficina de la Contribución Territorial en el caso, sosteniendo que en ellos existe la exoneración de impuestos que ampara aquel inmueble, que fué de aquel Ferrocarril y que es de su propiedad.

Tal invocación no puede hacerse sino por razón de la representación por ella del Ferrocarril Norte de Buenos Aires reputándole existente.

De la compra e incorporación del mismo, de sus líneas y como sucesor de aquellos privilegios.

De la cesión envuelta en la compra del material de aquél, respecto de los derechos, privilegios y excepciones que le pertenecían.

Reputar existente hoy al F. C. Norte de Buenos Aires es contrariar la verdad, los antecedentes positivos y las mismas convenciones de la compañía recurrente. Es público y notorio que aprobada por el P. E. la compra e incorporación de aquella Empresa por ésta, sus líneas pasaron a ser ramales de la adquirente, siendo, como decía el Sr. Procurador General Dr. Costa en su dictamen de 10 de enero de 1889 “la Empresa del F. C. Central Argentino, la que queda subsistente, y la del Norte la que desaparece entrando a formar parte de una nueva entidad y siguiendo naturalmente la condición del todo, siendo ese el concepto de la aprobación del decreto del P. E. de enero 11 del mismo año, cuando hace lugar a las ideas de ese dictamen y al aprobar el convenio respectivo, declara incorporada la una a la otra (art. 1) y reputa sólo al F. C. Central Argentino como el existente al declararlo sometido en toda su extensión (desde la Estación Retiro) a la Jurisdicción Nacional (art. 3).

Esta disposición, pues, sancionada por la intención de las mismas empresas contratantes, por la del P. E. al aprobar la compra e incorporación, y al aceptarla, en adelante, la misma Compañía recurrente, que en ningún caso, en sus relaciones con el Gobierno, ha recordado la Empresa extranjera en 1889, es bastante en mi sentir, para hacer improcedente su representación haciendo valer los derechos que pudo tener cuando funcionaba como entidad propia y existente.

La compra e incorporación convenida por las compañías y apro-

bada por el P. E. en 1889, pudo referirse y abarcar sus líneas, edificios, material y todos los bienes o derechos de carácter privado que le fueran propios, así como otras facultades inherentes al servicio público a que sus bienes estaban afectados llenando los requisitos de las leyes en vigor; pero esas operaciones no podían ni pudieron comprender aquellas excepciones y privilegios de carácter público, como ser, la exoneración de impuestos, que no podría ser materia de un simple contrato privado cuya transmisión el P. E. carecía de facultad para autorizar, desde que nunca hubiera podido otorgarles, y sobre la cual no podían fundarse derechos adquiridos dado el carácter de orden público de las leyes de que procedía.

Lo estatuído pues en el convenio de las empresas no pudo nunca ser eficaz para hacer valedera la transmisión de un derecho de carácter público que en tal concepto estaba fuera de los límites de las convenciones y del derecho privado.

La aprobación del P. E. no pudo ir más allá de la transmisión de las funciones y facultades legales del servicio público a que estaban afectos los bienes, materia de la convención presentada por las empresas y hacer efectiva la ley vigente estableciendo la jurisdicción nacional sobre la única Empresa subsistente: el F. C. Central Argentino.

La adquisición irrevocable por parte de esta Empresa a mérito de su convenio y aprobación del P. E. de los derechos de la extinguida Empresa del F. C. Norte de Buenos Aires, no pudo nunca llegar a los privilegios y exenciones acordadas a ésta por una ley de orden público, como lo eran las leyes de 1857, 1859 y 1854 de la Legislatura de Buenos Aires de donde ellas derivan.

Pero aun suponiendo, por vía de ilustración del punto, que la transmisión de las exenciones y privilegios de que se trata y de que la Empresa recurrente se decía titular fuera procedente, y cayera dentro del campo del derecho privado, aún en tal supuesto, ella no sería valedera dado que no se han cumplido las exigencias de la ley cuando se trata de la cesión de derechos contra un tercero, de quien esos derechos dependen. En materia civil no hay cesión de derechos sin notificación del deudor cedido, ese deudor es en el caso, el Congreso quien debió ser puesto en conocimiento de la transmisión de un privilegio que implicaba una obligación de su parte, cual era la de circunscribir los efectos de una ley impositiva de la Capital, y él era quien debía consentir y autorizarlo dado que tan directa-

mente afectaba sus facultades constitucionales.

De aquí que para considerar cesionaria a la Empresa recurrente de la exoneración de que se pretende titular, aun en el extremo supuesto que menciono, sería necesaria, indispensable una ley del Congreso que consintiere y aprobare en todos sus efectos la cesión de una compañía a la otra de privilegios que excepcionalmente llegó a tener la cedente, mientras existía y funcionaba.

V. E. por el Ministerio de Hacienda significó ya antes de ahora, estas ideas, en resolución Ministerial de 16 de mayo ppdo., y las mismas compañías del Central Argentino en sus negociaciones con el F. C. Buenos Aires y Rosario las han tenido presente, cuando para legalizar su situación y la validez de sus convenios bajo el punto de vista de las excepciones, privilegios y facultades de orden público que entienden transmitirse de una a otra, han tenido que ir al Congreso convencidos que de otra manera no podrían comprenderlos, cederlas ni adquirirlas.

Fuera de estas consideraciones, son de tenerse muy en cuenta las que surgen de la firmeza de las concesiones mismas que tan fácil sería modificacar con estas incorporaciones más o menos provechosas para los intereses privados, pero dañosas a los intereses públicos, las que emergen de la influencia que hoy podría tener o no las leyes de la Legislación de Buenos Aires de 1857 y 1859 con relación a la autoridad territorial de la Capital sobre un inmueble cuyo dueño fué exceptuado de ella, dentro de su jurisdicción, pero que no lo está el actual dentro de la jurisdicción nacional y a cuyo respecto nada se dijo en las leyes de cesión del Municipio de la Capital.

Todas estas razones obran en mi espíritu para creer que no está justificada la resistencia del Ferrocarril Central Argentino al pago de la contribución territorial que se le cobra y que motiva este expediente, no encontrando oportunas las consideraciones que se hacen por el Sr. Procurador del Tesoro en su precedente dictamen, que lo serían tratándose de fundar una ley sobre la situación de los ferrocarriles en relación a las leyes impositivas de la Capital y las Provincias, pero son extemporáneas cuando sólo se trata de aplicar dentro de la función Constitucional correspondiente (inc. 2, art. 86 de la Constitución), ley del Congreso de la Nación única acción que a V. E. corresponde en el caso.

Sin dejar de reconocer su importancia, aparte de las ideas de

ese dictamen, que me llevarían a un estudio que no condice con la importancia de este asunto ni con los motivos de esta consulta.

Manteniéndome pues dentro de los límites del asunto, creo que V. E. debe reputar a la empresa recurrente obligada a pagar lo que se cobra, mandando proseguir las gestiones iniciadas a tal efecto, pues con ello, al par que se requieren los intereses legítimos del Fisco, se ofrece ocasión a esa compañía, para presentar sus defensas, las que serán ampliamente consideradas por los Tribunales, quienes son los que en definitiva deben pronunciarse a su respecto. — Octubre 25 de 1907.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4293, pág. 79, de marzo 9 de 1908.*

=====

En una expropiación, terminado el juicio y mandado pagar por el Gobierno Nacional al expropiado, corresponde a éste presentar los títulos de propiedad para el otorgamiento de la correspondiente escritura. Si no lo hace, es él quien incurre en mora y no el expropiante que exige la presentación de los referidos títulos.

**Banco de la Provincia de Buenos Aires, sobre pago de un terreno en Belgrano vendido al Gobierno Nacional.**

*Excmo. Señor:*

Con motivo de la aplicación de la Ley 4290 sobre expropiación de tierras para construcciones militares, se contrató con el Banco de la Provincia de Buenos Aires la compra de un terreno en Belgrano, por un precio determinado y convenido, precio cuyo pago fué decretado por el P. E. en sus decretos de abril 25 y mayo 20 de 1905, librándose la orden de pago respectiva en mayo 26 con la consiguiente intervención de la Contaduría en junio 7 del mismo año.

Esos decretos y esas tramitaciones que equivalían, sino a un pago efectivo, por lo menos a un depósito a disposición de los vendedores, del precio de la cosa, cuyo pago debía necesariamente quedar pendiente hasta la presentación de los títulos del enajenante, indispensables para el otorgamiento de la escritura, justifican la toma de posesión por el Gobierno de la tierra expropiada, y denotan

el cumplimiento por su parte de las obligaciones que el contrato le imponía en primer término.

Por parte del Banco, que concurrió con su consentimiento al contrato de compra-venta, no consta que presentara los títulos y antecedentes respectivos, como era indispensable para cumplir la obligación de hacer escritura del inmueble-materia y de cuyo acto dependía la entrega del precio referido y decretado.

De esta última circunstancia, que exhibe al Banco como parte en un contrato bilateral, cual es el de que se trata, se deduce que, no habiendo justificado ni menos hecho constar que haya cumplido la mencionada obligación, ni que prometa cumplirla a los fines de la referida escrituración, carece de derecho para el reclamo que trae a V. E. y su amenaza de proceder contenciosamente es de todo punto infundada, al menos mientras no justifique haber cumplido las obligaciones de su parte, o declare que lo hará como corresponde (art. 1201 Cód. Civil).

Pero aun cuando tales cosas hiciere, nunca le asistiría el más remoto derecho para pedir o reclamar la revocación del contrato existente, exigiendo la celebración de otro más conveniente a sus intereses. De acuerdo con el principio de que, los contratos se hacen para cumplirse y no para rescindirse, cuando no hay pacto expreso que autorice a una de las partes a disolver el contrato si entendiere que la otra no lo cumple, sólo hay derecho para pedir o reclamar su ejecución o cumplimiento y nunca su rescisión o revocación (art. 1204 Cód. Civil).

Y así, en el caso y aún dentro de este supuesto, el Banco sólo tendría acción para reclamar o pedir el otorgamiento de la escritura mencionada, dado que se trata de la compra-venta de un inmueble (art. 1184 Cód. Civil), convenida por un documento privado (el boleto) y por ende sujeto a la escrituración a que se refieren los arts. 1185 y 1187 del mismo Código; acto que, como ya lo he significado, no ha tenido lugar por la omisión del Banco en la parte que a él correspondía.

Tan injustificada como las pretensiones analizadas, es la de que V. E. se halla en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y que, por ello, es dendor al Banco de daños y perjuicios que debe haber sufrido por ella. La mora sólo nace para el deudor u obligado a hacer alguna cosa, de su omisión en el tiempo y forma en que debió cumplir según lo estipulado, una vez hecha la respectiva interpela-



ción judicial para establecerla, lo que en el caso, no ha sucedido; por su parte el derecho a los daños y perjuicios que el Banco se atribuye también en la oportunidad, es tan injustificado como lo anterior, dado que se ha evidenciado que él ha sido el omiso en el cumplimiento de las obligaciones de su parte, y en ningún momento ha mostrado ni intentado demostrar que los ha sufrido.

De acuerdo pues, con estas consideraciones, creo que V. E. debe rechazar el injustificado reclamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y exigirle en cambio, cumpla la obligación de concurrir por su parte a la escrituración del inmueble comprado y mandado pagar en oportunidad. — Noviembre 12 de 1907.

=====

No corresponde que el Poder Ejecutivo conozca en una denuncia formulada por un Obispo respecto a medidas tomadas por una Municipalidad de Provincia en la esfera de sus atribuciones.

#### **Obispado del Paraná, reclama de varias ordenanzas municipales.**

*Excmo. Señor:*

No encierra la precedente nota del señor Obispo del Paraná, nada concreto en el sentido de la denuncia que hace, sobre las hostilidades continuas de que según afirma, hacen víctima a la Iglesia y culto católico las Municipalidades de la Diócesis de su Gobierno.

La prohibición de doblar campanas o de llevar a los templos cadáveres de infecciosos, no son actos de importancia tal que impliquen una persecución al mencionado culto, y tiene por el contrario su razón de ser dentro del régimen Municipal, que cada Provincia puede instituir dentro de su territorio (art. 5 y 105 de la Constitución) y en cuanto afecten como en el caso, el bienestar, higiene y seguridad de los comunales.

Pero aun cuando algo serio constituyera el conflicto eclesiástico municipal que envuelve la denuncia, nunca sería V. E. la autoridad encargada de dictar medidas a su respecto, ni de proceder a resolverlo, ni una ni otra concuerda dentro de lo prescripto por los incs. 8 y 9 del art. 86 de la Constitución, ni están las Municipali-

dades de Provincia bajo la jurisdicción de V. E. cuando obran dentro de su propia institución.

Creo en consecuencia, que este asunto debe enviarse al archivo que es lo que en mi sentir corresponde. — 13 de noviembre de 1907.

=====

Las servidumbres acordadas como accesorios de una concesión minera y sólo en atención al interés público comprometido, siendo gratuitas, se rigen por las disposiciones relativas a las donaciones del Código Civil y en consecuencia no es necesaria la escritura pública para su otorgamiento, bastando el decreto del P. E. para que las conceda.

**Compañía Minera La Concordia, solicita el uso de fuerza  
hidráulica para la explotación minera.**

*Excmo. Señor:*

La concesión de agua para fuerza motriz, autorizando la desviación del arroyo Chorrillos y su primer afluente sur, en el territorio de “Los Andes” con destino a la explotación de minerales, así como la construcción de obras correlativas que el P. E. ha concedido, por decreto de 27 de abril último, en favor de la Compañía Minera La Concordia, no tiene más alcance que dar a la Empresa Concesionaria el derecho de disponer de aquellos a nombre de la Nación, sin otra norma ni otra mira que el interés público, con arreglo a los antecedentes que informan el art. 48 del Cód. de Minería.

El privilegio otorgado está sujeto por otra parte, a la limitación que lógicamente corresponde al derecho de terceros, en cuanto afecte mayor radio del que abarca la concesión minera que explota “La Concordia”.

Tratándose de privilegios que importan una servidumbre, es conveniente tener presente, desde luego, que su constitución, en cuanto a su forma, es regida por las disposiciones relativas a la venta, cuando es hecha a título oneroso y, a las donaciones y testamentos, cuando la servidumbre tiene lugar a título gratuito, (art. 2992 del Cód. Civil).

La concesión otorgada, en el referido decreto, implica una servidumbre gratuita, desde que el P. E. no ha puesto ningún precio,

como tampoco le ha fijado un plazo prudencial de duración. Se ha verificado pues, un acto inspirado exclusivamente en razones de interés público.

Sólo las donaciones de bienes inmuebles y las demás especificadas en los cinco incisos del art. 1810 del Cód. Civil, deben ser hechas antes Escribano Público, y aceptadas en igual forma, por el donatario.

De manera que, aplicando el art. 2992, ya citado, al caso ocuriente, con relación a la forma que rige las donaciones, no procede la escritura pública que se pretende en el caso.

Y por último, aún aplicando las disposiciones referentes a *los testamentos*, con arreglo al mismo precepto legal; considero que, el decreto de 27 de abril del corriente año en cuya virtud se ha creado la concesión o servidumbre de la referencia, acredita suficientemente los derechos de la parte beneficiada, como que es un acto emanado de la autoridad competente para verificarlos. — 13 de noviembre de 1907.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4349, pág. 209 de mayo 18 de 1908.*

=====

Un ciudadano argentino, aunque sea infractor al servicio militar, si estando en país extranjero es allí obligado a prestar el servicio bajo las armas de dicho país, debe ser amparado por nuestra representación diplomática.

**Manuel García Sánchez, ciudadano argentino, residente en España reclama por haber sido obligado a servir en la marina española.**

*Excmo. Señor:*

La obligación impuesta a los ciudadanos argentinos de enro-larse y concurrir a la conscripción, en las épocas y condiciones establecidas por la Ley de servicio militar (4707), así como la sanción penal que ella consigna, alcanzan por propia autoridad, a todos los ciudadanos que, como el de que se trata, se hallan fuera del país, y no cumplen oportunamente con las expresadas obligaciones.

Pero siendo imposible la ejecución de la ley en país extranjero, por carencia absoluta de jurisdicción, y no siendo extensible las

infracciones que implican aquella falta de cumplimiento, mayormente en España, cuyo tratado vigente con nosotros no incluye aquellos entre los delitos e infracciones que lo son, necesario sería para exigir lo primero y aplicar lo segundo que el infractor entrase al territorio de la República, en tiempo y condiciones de ser sometido a la expresada Ley 4707, para lo uno y para lo otro.

Inútil sería cualquier gestión en el sentido de hacer efectiva esa ley en el caso de García Sánchez, siendo inócua y poco seria, por otra parte, la insinuación de una promesa de su parte de cumplir con ella, pues siempre se estaría sujeto a la condición, subordinada a su voluntad, de volver o no volver al país; siendo de observarse que es más probable lo segundo que lo primero, según la nota que antecede.

Respecto del retiro de la protección diplomática al ciudadano que, como García Sánchez, en un país extranjero, sin cumplir con el servicio militar en su patria, requiere aquella para negar al que se le exige por razones de diverso concepto de la ciudadanía o por cualquier otra, que no es del caso examinar, cábeme señalar la improcedencia de ese retiro, tal como se insinúa en la nota que motiva este asunto.

Siendo la protección diplomática en país extranjero inherente a la calidad de ciudadano, de acuerdo con los principios generales y propios del derecho público, y tratándose además de un derecho implícito de los que emergen de la Constitución y de la misma Ley de Ciudadanía dictada por el Congreso según el inc. 11 del art. 67, creo que V. E. no puede retirarla ni negarla, en casos como el presente, por más infractor que sea el ciudadano que la requiere, a menos de exponerse a contrariar las garantías implícitas de aquella y a que se refiere su art. 33 y de alterar el espíritu evidente de la mencionada ley, lo que debe V. E. evitar, de acuerdo con el inc. 2 del art. 86 de la Carta Fundamental.

Y aún cuando pueda negarse en ciertos casos que la mencionada protección no asuma los caracteres que le atribuyo en el presente, por ser, por ejemplo, facultativa en el agente diplomático respectivo, cuando sólo se trata de amparar los intereses privados del ciudadano ante la autoridad del país en que se halle, deja de ser tal para ser obligada cuando, como en el caso de García Sánchez, a sus intereses privados van aparejados los propios a la Soberanía Nacional, que en este punto, no sólo tiene derecho a exigir

que el ciudadano preste el servicio militar a su bandera (art. 21 de la Constitución), sino que tiene la obligación de oponerse y evitar que se le compela a prestarlos a una bandera extraña, tanto más cuanto que, la ley misma se opone a que lo haga voluntariamente, con la sanción para ese y otros servicios a país extranjero, que marca el art. 8 de la Ley de Ciudadanía.

Estas consideraciones de orden institucional unidas a las que surgen de la conveniencia de no crear distingos ni excepciones que pudieran sernos opuestas en casos similares o parecidos por los gobiernos reclamados, me inducen a creer, como ya lo he significado que, en casos como el ocurrente, ni debe ni puede ser negada la protección diplomática requerida, ni retirada la reclamación que se tiene presentada ya, con todas las formaliddaes que corresponden.

En cuanto al abuso que se señala en los malos ciudadanos que esquivan el servicio militar en la manera que se denuncia, y que por fortuna para nosotros es reducida, sólo tiene su remedio en la legislación interna, como lo han hecho otras Naciones, sin necesidad de llevarlo ni exhibirlo en las relaciones internacionales en las cuales entraría como un elemento perturbador de discusión y aún de descrédito para la propia nacionalidad.

Es pues contraria mi opinión a las indicaciones de la nota que ha motivado esta consulta. — Noviembre 27 de 1907.

*Adoptado como resolución según nota de diciembre 31 de 1907.*

=====

La jubilación de un Ministro Diplomático, debe computarse, por razones de equidad y de justicia, cuando se trata de continuados servicios, en \$ 1.000 m/n. aún cuando en realidad su sueldo fuera de \$ 800 y \$ 200 para gastos.

**Don Agustín Arroyo solicita su jubilación como Ministro Argentino en el Perú.**

*Excmo. Señor:*

Los antecedentes que instruyen este asunto son bastantes para justificar ampliamente la jubilación solicitada por el recurrente y

acordada por la junta respectiva dentro del texto mismo de la ley que la rige.

Remitido a V. E. a los efectos del art. 29 de la ley 4349 y haciendo uso del derecho de la revisión que le compete en la manera que lo expresa el art. 57 de la misma y en ejercicio de la facultad conferida por el inc. 7 del art. 86 de la Constitución; creo que V. E. teniendo en cuenta consideraciones de equidad y de justicia debe modificar la expresa resolución de la junta en el sentido de acordar la jubilación pedida en el monto en que se solicita en la precedente nota que considero fundada.

Hasta 1893 el sueldo de Ministro Plenipotenciario en el Perú fué de \$ 1.000 habiéndose reducido en el presupuesto de ese año a \$ 800 pasando la diferencia es decir \$ 200 al rubro de gastos de representación, que completaban la asignación que antes correspondía a ese funcionario. (Presupuesto para 1903).

Respondió esto al propósito de no alterar la uniformidad en el sueldo de los agentes diplomáticos, sin perjuicio de proveer a las exigencias de la representación relativamente a las condiciones de la vida que, en cada país variaba y varía necesariamente (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, pág. 727 *in-fine*, tomo 20).

Este antecedente justifica, en mi sentir, el concepto que insinúa el recurrente de que, no habiéndose disminuído la suma expresada por razón de economía ni de menor importancia de sus funciones, y habiendo continuado por el contrario percibiéndola como antes, durante el tiempo requerido por la ley, es justo reconocerle el total como sueldo, es decir \$ 1.000, que en realidad es lo que ha tenido antes y después de aquella modificación y durante todo el tiempo que ha servido.

Creo justo también que V. E. tenga presente, como puede hacerlo al ejercer las facultades a que antes me he referido, los largos servicios prestados sin interrupción apreciable por el recurrente, la circunstancia de que, en realidad él mismo ha gozado aquel sueldo (\$ 1.000) en todo tiempo, así como el precedente de haberse jubilado no ha mucho, agentes diplomáticos con iguales o menos servicios que este, con la suma indicada. Consideraciones que si bien no asientan en el texto estricto de la ley respectiva, radican en su espíritu manifiesto, cual es premiar buenos y continuados servicios, establecer como base de la jubilación, el último sueldo, dentro del término de la ley en el concepto siempre de ser el más favorable al

jubilado, y evitar por último, las desigualdades que pudieran envolver una injusticia; espíritu que, V. E. tiene facultad bastante para hacer efectivo dentro de sus propias atribuciones como ejecutor de la ley y como autorizado a acordar esta clase de jubilaciones (incs. 2 y 7 del artículo 86 de la Constitución).

Creo que estas consideraciones son bastantes para que V. E. resuelva modificar favorablemente para el postulante, la resolución en el sentido indicado, ya que por las atribuciones de su privativa autoridad puede tenerlas presente, y darles la influencia legítima que en su resolución les compete, y que la junta no ha podido darles dentro del límite estrecho de sus funciones administrativas.

— Noviembre 29 de 1907.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4236, pág. 1457 de diciembre 20 de 1907.*

=====

Tiene facultad el P. E. para requerir de los comerciantes y particulares en general, todos aquellos datos respecto de sus negocios o personal empleado, que no comprometan el giro comercial que tengan y no afecten sus garantías personales.

**Departamento del Trabajo, sobre conveniencia de un decreto disponiendo que todos los establecimientos industriales y comerciales tomen nota de la nacionalidad y profesión de sus empleados.**

*Excmo. Señor:*

El derecho que todo habitante de la República tiene para trabajar o ejercer toda industria libre reconoce por única limitación el texto y espíritu de las leyes que reglamentan su ejercicio, como expresamente lo consigna el art. 14 de la Constitución.

Por razones de interés público y de beneficio común, fácilmente perceptible, ese derecho ha sido reglamentado, entre otros puntos, en lo relativo a las exigencias de la Estadística General del país encargado a la dirección respectiva, por la Ley 3180.

A tal objeto el art. 3 de esa ley impone a las empresas, establecimientos, o sociedades y administraciones particulares, la obligación de suministrar todos los datos e informaciones de interés público

que aquélla les solicite, con la sola salvedad de que tales informaciones no comprometan el secreto de su giro comercial o el éxito de su negocio.

Esta disposición legal puede perfectamente ser reglamentada a su vez, como ya lo ha sido en otros puntos la mencionada Ley 3180, por el decreto de diciembre 12 de 1894, siempre que V. E. se mantenga al hacerlo, fuera de la salvedad legal notada y dentro del inc. 2 del art. 86 de la Constitución que le faculta para ello, con la sola limitación de no alterar su espíritu.

En tal concepto, respondiendo a las exigencias de la Administración General del país (inc. 1, art. 86 de la Constitución), siendo evidentemente de interés público los datos a que alude la precedente nota del Departamento Nacional del Trabajo, considerando que por su índole, esos datos no son de aquellos que pueden comprometer el secreto en el giro comercial o el éxito del negocio de los industriales que sean requeridos, y teniendo en cuenta por último, que su exigencia cabe dentro del texto y espíritu de la citada disposición del art. 3 de la Ley 3180.

Soy de opinión que V. E. tiene facultad para dictar un decreto que encomiende a la "Dirección General de Estadística de la República" la recolección de los datos indicados por la Oficina del Trabajo, exigiéndolos de la empresa o establecimientos industriales, dentro de los límites y condiciones notadas y emergentes de la Constitución y de la ley.

En cuanto a las informaciones a obtenerse en el mismo sentido de las oficinas de la Nación, de la Capital, Territorios Federales y aún Gobiernos de Provincias, me permito recordar aquí el ya citado decreto de diciembre 12 de 1894, cuyas disposiciones abarcan en general los mencionados datos, los que la expresada Dirección de Estadística podría requerir dentro de sus términos actuales o ampliados en la manera y forma que se considere más eficaz al logro de su más pronta y eficiente adquisición. — Diciembre 4 de 1907.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4254, pág. 207 de enero 21 de 1908.*

=====



Las legalizaciones que debe realizar el Ministerio de Relaciones, deben limitarse a los siguientes documentos: 1º Los expedidos por autoridades o funcionarios argentinos, para hacerse valer en el extranjero. 2º Los que otorguen ministros, cónsules o representantes argentinos en el exterior, para hacerse valer en la República, y 3º Los que expidan los ministros, cónsules o representantes de naciones extranjeras en el país para hacerse valer ante nuestras propias autoridades.

No corresponde que legalice los documentos suscriptos por los cónsules o agentes extranjeros acreditados en el país, destinados a producir efectos fuera del mismo.

### **Consulta sobre legalización de firmas de los Cónsules extranjeros en documentos que deben ir fuera del país.**

*Excmo. Señor:*

El documento acompañado expedido por un Cónsul extranjero, para hacerse valer fuera del país, dado que entre nosotros no tendría significado alguno por su nulidad manifiesta (art. 1038 Cód. Civil), no debe ser legalizado por el Ministerio del P. E. en la forma que se pide, por no ser de autoridad o para autoridad alguna de la República.

En cuanto a las legalizaciones en general, soy de opinión que el Ministerio prescindiendo del contenido del documento debe limitarse a legalizar las firmas que suscriban los siguientes documentos:

1º Los expedidos por autoridades o funcionarios argentinos, para hacerse valer en el extranjero.

2º Los que otorguen, Ministros, Cónsules o representantes argentinos en el exterior, para hacerse valer en la República.

3º Los que expidan los Ministros, Cónsules o representantes de Naciones extranjeras en el país, para hacerse valer entre nuestras propias autoridades.

Dentro de tales límites se evitan los inconvenientes de autenticar actos extraños y nulos como el presente, se adapta el Ministerio a las reglas comunes del derecho Internacional en la materia, y actúa dentro de lo prescripto por el inc. 9 del art. 9, de la Ley 3727. — Diciembre 16 de 1907.

=====

El derecho de probar la imposibilidad física o intelectual para obtener la jubilación, no es a perpetuidad, sino que debe ejercerse dentro de los cinco años de dejado el servicio.

**Dr. Vicente Giménez, solicita jubilación.**

*Excmo. Señor:*

La constatación de la imposibilidad física para continuar en el desempeño de sus funciones ha podido ser hecha por el recurrente, a pesar de un reconocimiento anterior, hasta dentro de los cinco años de dejar el servicio, pues hasta esa época le acompaña el derecho de pedir su jubilación, sin que la ley distinga su condición o calidad (art. 37, inc. 3, Ley 4349).

La imposibilidad física o intelectual no tiene término por la ley para ser alegada (art. 19); siendo lógico que ese término que, no pudiendo ser perpetuo, dure el tiempo que dura el derecho de **hacerla valer**, lo que tiene su explicación en la casi insuperable dificultad de determinar con precisión y científicamente, el momento en que aquella imposibilidad ataca a tal persona.

Dentro de tales conceptos, creo que debe modificarse la resolución de la Caja que antecede, en el sentido de acordar la jubilación extraordinaria que solicita el recurrente Vicente Giménez, ya que, la demora de la declaración del Departamento de Higiene, de **julio 8 de 1907**, es la única causa que basa esa resolución y aparece obstando al acuerdo de la jubilación extraordinaria que, por las demás circunstancias concurrente, corresponde al postulante. — Febrero 3 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4286, pág. 731, de febrero 27 de 1908.*

=====

Las Municipalidades de los Territorios Nacionales, no pueden acordar concesiones públicas, sólo pueden conceder permisos para ello, sometiénolos al conocimiento del Gobernador, a efecto de que éste lo eleve al P. E. Nacional, quien en definitiva debe otorgar la concesión.

**Gobernación de Misiones, sobre concesión acordada a una empresa de tranway y transporte por el Consejo Municipal.**

*Excmo. Señor:*

Se trata de establecer si en presencia de lo dispuesto en el inc. 7º del art. 24 de la Ley 2735, el P. E. se encuentra legalmente habilitado para dejar sin efecto la concesión de una línea de tranways y de transportes que el Consejo Municipal de Posadas, capital de la Gobernación de Misiones, ha otorgado en favor de don Antonio Tonelli, con grave detrimento de los intereses públicos de aquella comuna, según lo denuncia a V. E. el Gobernador de dicho territorio y lo corrobora el informe expedido por la repartición correspondiente del Ministerio de Obras Públicas.

Las atribuciones que la referida Ley 2735 acuerda a las municipalidades de las Gobernaciones, entre las que se halla la de *conceder o negar permiso para la construcción de tranway*, con arreglo al inciso y artículo ya citado, no pueden ejecutarse sino en armonía con la intervención que, las leyes orgánicas de tales Gobernaciones, dan al P. E., puesto que ellas no implican sino ensayos de la vida municipal que desarrollará en el futuro dichas agrupaciones, cuando sean elevadas a la categoría de provincias.

El gobernador del Territorio según el inc. 1º del art. 7 de la Ley 1532, es la autoridad superior encargada de velar por el cumplimiento de las leyes y *disposiciones nacionales* y, en razón de lo dispuesto en el inc. 4º del mismo precepto legal, *vigila el cumplimiento de las concesiones o privilegios* que se acuerden.

En el caso ocurrente, el Gobernador de Misiones, al comunicar que la Municipalidad de Posadas, cuando ha otorgado la concesión de que se trata, no ha dado cumplimiento a la disposición vigente de 6 de diciembre de 1904, según la cual los Consejos Municipales de los Territorios no podrán acordar concesiones para la construcción de vías de comunicación sin recabar previamente del Ministerio de Obras Públicas por intermedio de V. E. la conformidad necesaria

en lo que se refiere a la traza que se proyecte; ese Gobernador procede dentro de las atribuciones que le confiere el inc. 1º en armonía con el inciso 4º del art. 7º de la ley sobre creación de Territorios 1532, ya citada.

Los Gobernadores de Territorios, por otra parte y con arreglo al mecanismo de las leyes que rigen la materia, dependen directamente del Ministerio del Interior y, a ese Ministerio, a su vez, según lo ha dispuesto el inc. 2º del Art. 8º de la Ley 3727 corresponde “el Gobierno y administración de los Territorios Nacionales”. Dentro de tales conceptos pues, no cabe duda de que, la concesión acordada por la Municipalidad de Posadas, aún implicado el ejercicio de la facultad de *conceder o negar permiso para la construcción de tranways*; ha sido en infracción a la citada disposición de 6 de diciembre de 1904, circunstancia que la vicia y que a la vez importa un acto de mal gobierno y de peor administración para aquella comuna lo que V. E. puede permitir como autoridad bajo cuyo gobierno el citado inc. 2º del art. 8º de la Ley 3727, ha colocado el Gobierno y la Administración de tales Gobernaciones a mérito de esa ley dictada por el Congreso en uso de propias facultades (Inc. 14 del Art. 67 de la Constitución).

Es de notar por otra parte, que la facultad de *conceder o negar permiso para la construcción de tranways*, que según dicho precepto legal tienen los consejos municipales de las Gobernaciones; no puede interpretarse como equivalente a la de *otorgar concesiones y privilegios* a una empresa de comunicación y transporte, porque si ello fuera así esas municipalidades embrionarias, el gobierno y la administración hasta cierto punto rudimentarias de los territorios nacionales quedaría fuera de la acción del P. E. y libradas a una autonomía que la ley no les ha dado; siendo de observar en tal caso el peligro que para el progreso de los propios territorios envolvería la facultad en las municipalidades de conceder privilegios y excepciones que como en el caso presente obstasen tan directamente a los propios intereses comunales.

El Inc. 7º del Art. 24 de la Ley 2735 nada dice de concesión ni de privilegios, sólo se trata de conceder o negar permisos. Para acordar los primeros, dado su carácter excepcional y restringido, debe requerirse el texto expreso de la ley que los autorice. Los segundos sólo implican atribuciones de orden comunal relaciona-

das con la realidad pública, que es a lo que en realidad y seguramente se ha referido la disposición legal citada.

En mérito de lo expuesto; opino que la concesión de que se trata ha sido acordada en infracción a la citada disposición vigente del Ministerio a cargo de V. E. además de implicar el ejercicio de atribuciones que las leyes citadas no han conferido en la extensión en que se les ha debido interpretar por creer que ellas son viables, ni menos en el concepto de crear por las Municipalidades de territorios una autonomía incompatible con la dependencia de las Gobernaciones respectivas del P. E de la Nación. — Diciembre 30 de 1907.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4249, pág. 133 de enero 15 de 1908.*

=====

Antes de acordarse el arresto provisorio a pedido de un Ministro Diplomático, debe exigirse la oferta de reciprocidad por parte y a nombre de su Gobierno.

**Legación de Suecia, pide la detención provisoria  
de Gustavo Martín Liedhom.**

*Excmo. Señor:*

Conforme con las exigencias del art. 673 y sus correlativos 671 y 672 del Cód. de P. Penal, dada la invocación de la existencia de un auto de prisión, determinación de la calidad del delito motivo del pedido, así como datos para la identificación de la persona, creo que V. E. puede acceder a dar curso a este pedido de arresto provisorio, requerido por el Sr. Ministro de Suecia contra Gustavo Martín Liedhom, con la sola condición, aun pendiente, de requerir del expresado señor Ministro la oferta de reciprocidad que es de regla en casos como el presente.

Llenando este último requisito, corresponderá que V. E. se sirva remitir estos antecedentes al Sr. Juez Federal correspondiente, a efectos de dictarse la competente orden de arresto, en el caso de probable desembarco del requerido en nuestro puerto, según lo expresa el mismo requirente. — Febrero 6 de 1908.

*Resolución de Acuerdo.*

Funcionando una persona jurídica en infracción a las leyes y estatutos que la rigen, la acción del P. E. debe limitarse a determinar si las infracciones cometidas dañan el interés público, contrarían la ley o estatuto, o atentan a la moral. La resolución debe circunscribirse al retiro o mantenimiento, según corresponda, de la personería jurídica.

## **Denuncias contra la Caja Internacional Mutua de Pensiones.**

*Excmo. Señor:*

El carácter de persona jurídica con que funciona la “Caja Internacional Mutua de Pensiones”, se debe a la autorización gubernativa en cuya virtud fué creada, y que fué concedida por motivos que solo y exclusivamente atañen al público.

Tal es la doctrina que consagra el inc. 5 del art. 33 del Cód. Civil, al considerar, como personas jurídicas, las asociaciones que tienen por principal objeto el bien común.

De manera que, cuando el P. E. se encuentra en presencia de una sociedad, que funciona como entidad jurídica y contra la cual se formulan denuncias de infracciones a las leyes y estatutos que la rigen; la acción gubernativa tiene que limitarse a determinar si, existiendo tales infracciones, ellas comprometen el interés público, en cuyo único beneficio se acordó la calidad de persona jurídica a la determinada institución.

En armonía con esta conclusión, el inciso 2º del art. 48 del Cód. Civil, establece, entre las diversas manera como termina la existencia de las personas jurídicas, la de haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la autorización legal, en toda la extensión que la ley establece. (Véase la nota del mencionado artículo).

Analizado el caso ocurrente, con arreglo a los expresados conceptos legales, la inspección verificada, por resolución de V. E. y por intermedio del Contador Sr. Amenabar, sobre los libros y procedimientos de la referida sociedad, demuestra que en ella se ha incurrido en dos hechos realmente graves.

En primer lugar se ha repartido, a título de supuestas y futuras utilidades entre fundadores y accionistas, la respetable suma de *cincuenta y nueve mil trescientos setenta y nueve pesos con dieciocho centavos moneda nacional*, que asciende muy aproximadamente al duplo del capital inicial integrado de *treinta mil pesos*.

En segundo lugar, se ha constatado que la sociedad de referencia no lleva, en debida forma, el libro correspondiente al *registro de suscriptores*.

El primer hecho implica una abierta transgresión a lo que dispone, en términos claros e imperativos, el art. 304 del Cód. de Comercio, y el segundo importa una violación a lo prescripto en el art. 329 del mismo Código, y en los mismos estatutos.

De modo, pues, que la “Caja Internacional Mutua de Pensiones”, ha infringido los citados preceptos de la ley comercial, a cuya sujeción ha debido someterse sus procederes, y ha falseado con incorrectos procederes el beneficio común, lógica consecuencia de las conveniencias públicas que motivaron la autorización para funcionar como persona jurídica que V. E. le acordó oportunamente.

Tales circunstancias colocan a esta asociación fuera del privilegio de funcionar como tal entidad, con arreglo a lo prescripto en el citado inc. 2º del art. 48 del Cód. Civil; y fuera el caso de proceder a su inmediato retiro, a no mediar como medían ciertas conveniencias que pueden afectar el interés público y que radican en los intereses, ahorros y economías del pequeño capital y del trabajo, que la asociación guarda en sus cajas y que significaría quizá gran quebranto sometiéndoles a una precipitada liquidación obligada por la continuidad de los malos procederes imputados.

Si las infracciones incurridas pueden subsanarse, debe procederse a ello sin más trámite, si no fuere posible, la conveniencia del público y las leyes invocadas obligarían a V. E. a retirar el carácter de persona jurídica acordado a la Caja Internacional Mutua de Pensiones dentro de los conceptos referidos.

A mérito de lo dicho, pues, creo que V. E. debe establecer un término breve y perentorio dentro del cual se haya de verificar la integración de los dineros malversados por aquellos que los aprovecharon, así como que se haga y organice el libro de suscriptores conforme a los estatutos y a la ley; la brevedad del término indicado para la integración mencionada responde a la necesidad de hacer cesar el estado ilegal actual de la asociación, y su carácter de perentorio se impone por el prestigio mismo de la ley y de la acción de V. E.

Vencido ese plazo, que creo que nunca debe exceder de 5 a 10 días, cumplirá a la Inspección de Justicia, con arreglo a los arts. 5, 6, 11 y concordantes del acuerdo de 30 de abril de 1897, infor-

mar sobre dichas reparaciones, procediendo V. E. en consecuencia a autorizar la continuación de la asociación como persona jurídica, si ellas se hubieran efectuado como corresponde, o retirar dicho carácter sin más trámite, en el caso contrario. — Febrero 6 de 1908.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4408, de agosto 1° de 1908.*

=====

No hay inconveniente legal, ni de carácter internacional, en el hecho de que se use como marca de fábrica, el nombre de una nación amiga, y que en la “viñeta” aparezcan escudos de otras naciones, siempre que no contengan alusiones injuriosas o inmorales.

**Legación de Francia, pide se tomen medidas respecto  
a una marca de cigarrillos.**

*Excmo. Señor:*

La reclamación que formula el Sr. Ministro de Francia, no puede ser satisfecha, por cuanto para ello deberían restringirse las disposiciones de la ley de Marcas y Fábricas, cuyo art. 5° autoriza a emplear en las marcas de fábrica los nombres de lugares o pueblos para distinguir los productos o artefactos de una industria. La adopción del nombre “Francia” ha podido ser admitida por la oficina encargada de autorizar la marca, pues se trata de un nombre geográfico de uso común, cuyo empleo no puede molestar a la Nación que lo lleva. En cuanto a la viñeta en que aparecen los escudos de la República Francesa y del Vaticano, no conteniéndose una alusión injuriosa ni una inscripción inmoral, está dentro de los términos de la ley respectiva, y V. E. no podría impedir su uso.

Estimo por tanto, que V. E. debe hacer conocer al Sr. Ministro de Francia, que dentro de las prescripciones liberales de nuestra ley común, no es posible acceder a su reclamación, pues se atentaría contra la libertad acordada al comercio y a la industria, para su desarrollo y funcionamiento. — Febrero de 1908.

=====



Procede la devolución de los descuentos realizados por concepto de jubilación civil a los empleados de la Intendencia de Guerra, por cuanto por decreto del P. E. han sido asimilados al estado militar, y gozan por ello del retiro en este carácter, en los términos de la Ley 4707.

**Empleados de la Intendencia de Guerra, piden devolución del descuento del 50 %.**

*Ercmo. Señor:*

En presencia del decreto de 23 de diciembre de 1907 que corre agregado y que declara a los empleados de la Intendencia de Guerra como asimilados con goce de la pensión de retiro, con arreglo a la Ley 4707, debo prescindir de mis opiniones contrarias, expuestas por mí antes de ahora, conceptuando que, no teniendo los expresados empleados propiedad de su empleo, ni menos de su grado de asimilación, y careciendo en absoluto del estado Militar que la ley les niega expresamente, no pueden ser considerados como soldados u oficiales efectivos permanentes al servicio de la defensa de la patria y de las instituciones, sino como simples empleados civiles susceptibles de ser jubilados, pero nunca retirados, como puede y debe serlo un veterano del ejército de la República.

Circunscribiéndome pues, a la cuestión levantada por la Contaduría sobre la devolución solicitado por los empleados de la mencionada intendencia, y acatando las conclusiones del citado decreto de 23 de Diciembre de 1907, a pesar de mi disconformidad, creo que la devolución solicitada y dentro de ese único concepto, debe hacerse, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1º) Porque desde el momento que los mencionados empleados han dejado de reputarse como civiles para ser considerados militares con derecho al retiro, se hallan en las mismas condiciones que si hubieran dejado sus empleos por causas ajenas a su voluntad, y, cabe por ende, la devolución a que se refiere la Ley 4349.

2º) Porque desde el momento que se consideran militares, pierden el derecho al cómputo de los servicios prestados en carácter civil fuera de la intendencia o dentro de ella antes de la declaración correspondiente; la Ley 4707 no permite, naturalmente, para el retiro sino computar los servicios de carácter militar.

3º) Porque en caso de abandonar la intendencia, los servicios

allí prestados, no podrían acumularse a los que se prestaran después en reparticiones civiles, dado que, tratándose de servicios retribuidos con retiro militar, no son computables para la jubilación, de acuerdo con el art. 58 de la Ley 4349.

4º) Porque el retiro a que pueden aspirar los expresados empleados no puede ni debe prolongarse más allá de sus días, vale decir que no alcanza bajo ningún concepto a pensión para sus deudos; la ley militar no reconoce ni puede reconocer tal derecho para una asimilación precaria ajena al estado militar, a la propiedad del grado y a la mínima importancia de aquellos servicios en relación a los del soldado o militar de fila.

Dando pues al decreto de diciembre de 1907 toda la extensión que tienen sus términos, y reputando que los empleados de la Intendencia de Guerra quedaran en condiciones de militares al efecto de la pensión de su retiro personal, quedando excluidos en absoluto de la jubilación y pensión civil a que se refiere la Ley 4349, soy de opinión;

Que la devolución solicitada procede dentro del concepto del citado decreto que acato sin estar conforme con él.

Que debe hacerse saber a esos empleados las condiciones en que quedan relativamente a la ley de jubilación civil y la limitación del propio retiro que se les reconoce dentro de la Ley 4707.

Que por último, debe V. E. proceder a subsanar los inconvenientes y contradicciones que existen en la Intendencia de Guerra, y a que se refiere la Contaduría Nacional en su precedente dictamen, por cuanto esas contradicciones afectan los intereses del fisco en la manera en que aquélla lo expresa. — Febrero 12 de 1908.

=====

La donación que se propone hacer a la Nación, los vecinos de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, de un terreno para edificar un Colegio Nacional, debe reputarse y escriturarse como contrato oneroso, por cuanto implica la renuncia del precio de la expropiación que la Nación hubiere de pagarles, a cambio del beneficio que ese establecimiento ha de reportarles.

**Vecinos de Mercedes (Prov. de Bs. Aires), donando al Gobierno Nacional una manzana de tierra para construir el Colegio Nacional.**

*Excmo. Señor:*

Encuentro oportuna como observación de simple forma, la que se hace en la carta que se adjunta: la individualización de la persona que ha de intervenir en la escritura, debe estar perfectamente determinada a los efectos de llenar los requisitos legales a que se refieren los arts. 1001 y correlativos del Cód. Civil.

En tal sentido apoyo la mencionada observación y creo que V. E. debe proveer a ella.

Con motivo de la vista que V. E. ha querido conferirme en el caso, creo que debo formular a mi vez, una nueva observación que reputo fundamental y sobre todo de alta conveniencia tratándose del otorgamiento de un título destinado a una propiedad de la Nación.

Los vecinos de Mercedes (Prov. de Bs. As.), se proponen donar a la Nación una manzana de tierra para el edificio del Colegio Nacional de la localidad. El concepto de tal acto debe ser el que la doctrina y la jurisprudencia atribuye a la donación de inmuebles para obras públicas; es decir, que ha de reputarse una cesión de la casa a favor del Gobierno, a cambio de la utilidad que el donante o donantes esperan obtener con la obra pública de que se trata; así lo entienden los tratadistas cuando hablan de estas donaciones, así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia en su fallo del Tomo 102 pág. 77, y así he tenido ocasión de sustentarlo con motivo de una donación de lotes presentada al Gobierno, por el Empresario de la Colonia General Pico, el 10 de abril de 1906.

Así pues, la donación de los expresados vecinos y de cuya escrituración se trata, no debe ser considerada como donación gratuita, sino que debe reputarse, y en tal concepto otorgarse la respectiva escritura, como contrato de cesión en que los cedentes ceden y renuncian al precio de expropiación que la Nación hubiera de

pagarles en caso de comprar esa tierra para el destino de que se trata, teniendo en cuenta, y como precio de esa cesión o renuncia, la utilidad que reportará a Mercedes y a ellos mismos la ejecución del nuevo edificio del mencionado Colegio Nacional.

Establecido el acto en tal concepto (contrato de *do ut des*), se obtendrán las siguientes ventajas:

1º) Salvar la cuestión que pudiera levantarse a propósito de la facultad del P. E. para aceptar donaciones, dentro de lo estatuido por la ley civil.

2º) Evitar las nulidades que pudieran intentarse más tarde por la situación legal, actual, anterior o posterior de los donantes, en cuanto a su capacidad para donar, a la prórroga del acto mismo y persistencia de sus propios efectos, como acto gratuito.

3º) Dejar el derecho a los cedentes de reclamar la casa cedida si los trabajos del edificio del Colegio Nacional no se hicieren sin motivo por parte del Gobierno, en lugar del pago de otras indemnizaciones, que el contrato oneroso indicado podría dar lugar con arreglo a la ley.

Si como creo, V. E. conviene en la ventaja positiva del justo concepto que indico, reputo que sería oportuno reformar el decreto de Diciembre 6 de 1907, cuya copia se acompaña, o dictar uno nuevo que consignase la salvedad indicada respecto del representante de la Nación en la escritura, y estableciese el acto, y la relación legal de las partes, que correspondan al contrato oneroso de cesión (*de do ut des*) a que me he referido. — Febrero 17 de 1908.

=====

Al reglamentar la Municipalidad el ejercicio de la prostitución, no lo hace teniendo en cuenta consideraciones personales con relación a la prostituta, sino velando por la higiene y moralidad pública, cuya conservación le incumbe dentro de su éjido.

**Defensoría de Menores de la Capital, pide sea derogada una Ordenanza Municipal sobre prostitución.**

*Excmo. Señor:*

Cuando la Municipalidad de la Capital reglamenta la prosti-

tución, como se hace en todas las ciudades del mundo civilizado, tiene sólo en mira la atenuación de su ejercicio y de sus efectos, en relación a la moral y a la higiene pública, que la ley orgánica respectiva libra a su buena guarda.

En tal concepto y con prescindencia de toda otra consideración extraña a su institución y fines indicados, debe tomar aquel ejercicio en relación exclusivamente a las personas que la ejercen, forma general en que se produce y lugares en que se la practica.

Y así, cuando se trata de someter a la reglamentación correspondiente las personas que ejercen la prostitución, se las toma en el momento en que con más generalidad se entregan a tal ejercicio, en la época en que, por su edad, repugna menos aquella, y cuando son más beneficiosas para la moral, para la higiene y aún para la salud de la misma prostituta, las atenuaciones, precauciones y vigilancia sanitaria, que constituyen aquella reglamentación.

La edad de 18 años parece ser entre nosotros el momento mencionado, como lo es en Francia, Alemania, Italia, etc., la de 16 y 17 años.

Es de observarse, por otra parte, y en este punto que, al registrar la prostituta, en virtud del art. 7 del Reglamento, sólo se tiene en mira los intereses comunales referidos de moralidad e higiene pública, sin que tal registro pueda calificarse como una autorización a aquella para traficar, pues no sólo tal autorización sería extraña a la índole de la institución municipal, sino que, por el contrario, el mencionado registro tiene por objeto al par que velar por la higiene, atenuar en lo posible, ya que no es posible prohibir el tráfico inmoral de la prostituta.

La mayoría de edad, la capacidad para la vida civil y aún para la celebración de actos como el matrimonio, no tiene relación alguna con aquellos propósitos de orden comunal, no siendo por otra parte, incompatible con ellos la acción de los padres, tutores, defensores de menores, que puedan y quieran ejercer, con arreglo a la autoridad o representación que la ley les ha dado.

Estas consideraciones son las que me inducen a pensar que V. E. debe mantener la reglamentación de que se trata, tal como se halla en vigencia, haciendo saber al defensor de menores ofician- te, que ella es completamente extraña a las prescripciones legales y consideraciones concordantes que suscita al pedir su derogación,

en cuanto a la edad y otras circunstancias de las que menciona. —  
Febrero 26 de 1908.

=====

La dirección de una cárcel o penitenciaría, debe dar siempre curso a las comunicaciones que los presos dirijan a los jueces de sus causas, no debiendo opinar acerca de la reclamación o pedido de los penados, hasta tanto no se les requiera informe.

**Penado Emeterio Zeballos, quejándose de malos tratamientos  
en la Penitenciaría.**

*Excmo. Señor:*

El prestigio de la justicia y la leal observancia del principio, de que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, así como que “toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”, contenido en el final del art. 18 de la Constitución, se oponen decididamente al archivo de este expediente.

Por el contrario, hay circunstancias que obligan a llevarle adelante, requiriendo la acción de V. E. al objeto de establecer la situación legal de los reclusos en la Penitenciaría en sus relaciones con los Jueces, salvar incorrecciones denunciadas en los antecedentes, y aclarar ciertas dudas que afectan seriamente el principio citado del art. 18 de la Constitución.

Aún cuando encuentro hasta cierto punto justificado, por razón de disciplina, el castigo impuesto por el Sr. Gobernador de la Penitenciaría a un penado que quebrantó la orden de dirigirse a V. E. sin conocimiento de la dirección, y que luego fué insolente al reclamar de malos tratos y hechos de los empleados que, aunque se desmienten, no se establece como corresponde su inexactitud al dirigirse al Juez, creo que el mencionado funcionario se ha excedido al detener la comunicación que ese penado depositó en la Alcaldía, abierta para ser puesta oportunamente en manos del juez de su causa.

Tal detención es improcedente; no está autorizada por ninguna disposición reglamentaria, que si prescribe castigar la insolencia del penado con una de las penas disciplinarias del art. 77 del Re-

glamento vigente, no permite ni puede permitir que la Dirección corte la comunicación entre el reo y el juez, erigiéndose en árbitro único de las reclamaciones que contra sus propios actos levante un recluido, haciendo ilusorias las disposiciones del art. 683 de la Ley de Procedimiento Penal, que ampara a aquellos con toda la liberalidad que deriva del texto final del art. 18 de la Constitución ya citado.

Para evitar pues que tal hecho se reproduzca, ya que el penado de que se trata se encuentra en libertad actualmente, reputo conveniente se signifique a la Dirección de la Penitenciaría que, sin perjuicio de aplicar en cada caso la pena disciplinaria que corresponda, debe abstenerse de poner el más leve obstáculo a las comunicaciones que los reclusos dirijan al Juez competente, evitando pronunciarse a su respecto hasta tanto sea requerida de informe si aquél lo considera necesario.

En cuanto a la divergencia fundamental que se nota entre el informe de los Señores médicos de los Tribunales, Doctores Hernández y Drago que corre agregado, y de los facultativos de la comisión nombrada, por propia autoridad, por la Dirección de la Penitenciaría, sobre la calidad de los cargos disciplinarios y condiciones higiénicas y salubres de las celdas de penitencia en que se aplican, lejos de inclinarme hacia la idea del archivo de este expediente, me incita a requerir la acción decidida de V. E. a los siguientes propósitos:

a) Ratificación de su informe por los Sres. Médicos de los tribunales, teniendo en cuenta lo que se afirme en la precedente nota de la Dirección penitenciaria, sobre deficiencias e irregularidades contenidas en tal informe.

b) Aclaración de la duda levantada por la referida divergencia que tan seriamente compromete y hace inocuas las disposiciones del art. 683 del Cód. de P. Penal y el ya citado principio del art. 18 de la Constitución.

A efecto de esto último, creo que V. E. debe provocar una seria investigación al respecto, que puede cometer al Departamento General de Higiene, quien como asesor técnico de V. E. en la materia, podrá establecer como corresponde la calificación de los castigos de que se trata, las condiciones de las celdas de penitencia en cuestión, y la influencia que uno y otros puedan tener en la vida

y en la salud de los reclusos en la Penitenciaría Nacional; todo ello sin perjuicio de aconsejar al propio tiempo, lo que encontrara más conducente a la justa observancia de la ley procesal y cláusula constitucional citadas. — Febrero 29 de 1908.

=====

Procede que se acuerde la excensión de pago de tasas municipales a favor de un diplomático extranjero, siempre que el gobierno de éste acuerde una estricta reciprocidad, con relación a nuestra legación en su país.

**Ministro de Francia, pide exoneración del impuesto  
de aguas corrientes y cloacas.**

*Excmo. Señor:*

Las inmunidades, privilegios y exenciones de los Agentes Diplomáticos en los países en que se hallan acreditados, están regidos por la mutua consideración y reciprocidad, cuando no existen reglas o estipulaciones positivas que las establezcan y señalen.

Lo mismo sucede con la cortesía, que las Naciones ligadas por vínculos de amistad, se hacen las unas a las otras; los actos de tal índole están siempre sometidos a la más estricta reciprocidad, como cumple entre entidades de igual importancia y consideración internacional.

El impuesto a que se refiere el Sr. Ministro de Francia es de aquellos que, implicando la compensación de un servicio (aguas corrientes y cloacas), no está comprendido entre los que la práctica internacional exime de pagar a los Agentes Diplomáticos; no existiendo, por otra parte, convención alguna con nosotros que estipule su exención, ni aún razones de reciprocidad que la imponga.

La concesión pedida puede ser indudablemente acordada como un acto de cortesía hacia la Nación amiga que el Sr. Ministro recurrente representa; pero, de acuerdo con lo dicho, esa cortesía debe sujetarse a la reciprocidad. Si en el caso, la Legación Argentina en París está o puede estar exenta del mencionado impuesto, sería el caso de acordar la exención pedida, en la manera y forma que corresponda en relación a la ley que creó el mencionado impuesto.

La existencia de la reciprocidad aludida y del hecho de que



depende, ha de constar a V. E., de manera a resolver el caso en la forma que lo dejo indicado y que, en mi sentir, es la que corresponde. — Marzo 14 de 1908.

=====

Cualquiera que sean las facultades de orden militar, que las autoridades de ese orden se atribuyan, nunca pueden afectar la jurisdicción y competencia de los jueces federales, con relación al enrolamiento y conscripción de ciudadanos, según prescripciones de la Ley 4707.

### **Conflicto entre Autoridad Militar y Jueces Federales, sobre conscripción y enrolamiento.**

*Excmo. Señor:*

Adhiero en todas sus partes a la precedente nota del Sr. Ministro de Justicia, cuando reconoce y establece la privativa jurisdicción con que los Jueces Federales han intervenido en los casos a que se refieren los antecedentes acumulados, aplicando como han creído de derecho y de acuerdo con el art. 100 de la Constitución, la Ley nacional 4707, en cuanto gobierna la obligación de enrolamiento y concurrencia de los ciudadanos a la conscripción, en cumplimiento del servicio militar que les impone el art. 21 de la citada Carta Fundamental.

Ni la reglamentación de la ley, dentro del inciso 2º del art. 67 de la Constitución, ni los actos del P. E., como Comandante en jefe de las fuerzas de la Nación, (inc. 15 art. 86 de la misma) —que no comprende a los ciudadanos mientras no son soldados (inc. 16 y 17 art. citado)—, puede modificar la jurisdicción de los expresados Jueces, alterar el orden legal de los juicios en que intervienen, obstaculizar en cualquier forma el cumplimiento de sus sentencias, ni menos atribuirse el conocimiento de las causas que pende ante ellos (art. 95 de la misma).

Como la expresada nota lo dice, los juicios y las resoluciones de esos Jueces, sólo son susceptibles de los recursos legales dentro del orden judicial, recursos que deben ser siempre interpuestos por los funcionarios y en las oportunidades que le ley determine, salvo únicamente el caso de su inconducta, cuya emergencia prevee y gobierna el art. 45 de la Constitución.

Soy pues de opinión, que provocada como ha sido la acción del Ministerio respectivo relativamente al celo de los Procuradores Fiscales, llamados en tales casos a hacer efectiva la Ley 4707, en los casos judiciales y en puntos relativos al servicio militar de los ciudadanos, deben mandarse estos antecedentes al archivo, por no existir otra acción de parte de V. E. en el sentido que motivó la nota de diciembre 14 de 1907. — Marzo 16 de 1908.

=====

El año, pasado el cual deben pagar los adquirentes de tierras públicas el impuesto territorial, debe contarse a partir de la adquisición de la tierra, y ésta sólo puede tener lugar una vez practicada la mensura y el deslinde.

#### **P. Leupol, reclama sobre pago de contribución directa.**

*Excmo. Señor:*

En el dictamen que precede, así como en otros que tengo dados anteriormente sobre el mismo asunto, he atribuído al art. 25 de la Ley 1265 el alcance y significado que, en mi sentir, deriva de sus propios términos.

Cuando esa disposición legal estatuye, que los compradores de tierra pública (y no los simples detentadores u ocupantes) deberán pagar la contribución directa y demás impuestos que graven la propiedad raíz, desde el año siguiente al de su *adquisición*, no ha podido referirse a otro hecho o acto, que el que traduce el sentido vulgar y legal de esa palabra.

En uno y en otro concepto, ADQUISICION significa el acto o hecho por el cual, alguien se hace propietario, dueño o señor de una cosa: y así, cuando aquella procede de una venta, como en el caso *sub-judice*, supone además de otros requisitos esenciales, la previa determinación de la cosa materia del contrato, así como su tradición, con el consiguiente desapoderamiento del anterior señor o propietario; practicados esos actos, recién puede decirse que la venta se ha consumado y que el comprador ha adquirido la cosa comprada, la que sólo en tal momento cae bajo su dominio.

Las conclusiones de mi anterior dictamen, inspiradas por estos conceptos que allí tuve ocasión de significar, tuvieron por base el mismo informe de la Oficina de Geodesia de fs. 7 y constancias

de la escritura pública que corre agregada; allí se constata primeramente que, en julio 22 de 1901, se otorgó un título de propiedad a favor del recurrente, el que fué seguido de una mensura practicada en noviembre del mismo año y aprobada en 1902, pero enseña y del mismo informe resulta que, a pedido del interesado se hizo una nueva determinación de la cosa, la que, a pesar de estar perfectamente precisada, según también se afirma, aparece con una nueva ubicación que difiere de la anterior en los nombres de los propietarios linderos, lo que no podrá negarse, en mi sentir, que es lo más esencial, tratándose de la ubicación de un inmueble. a los efectos de su individualización, para su tradición legal por parte del vendedor y adquisición por la del comprador.

Con arreglo al art. 3 de la Ley 1265, no puede enagenarse ninguna extensión de tierra, sin previa mensura, la que se sujetará a las condiciones que ella misma establece.

De manera que, la enagenación de las 20.000 hectáreas de que se trata, no ha tenido el carácter de un acto jurídico de adquisición para el comprador de la cosa enagenada, sino desde que se precisaron los linderos y la real ubicación de la tierra vendida, mediante la declaración ordenada por el ya referido decreto de 7 de noviembre de 1905.

Se trata de una tierra pública que abarca dos lotes de 10.000 hect. cada una, de la fracción A de la Sección 8 del territorio de Santa Cruz, de modo que está de por medio una enagenación de inmueble, con indicación del área, por un precio cada medida, de acuerdo con lo dispuesto en los títulos 1 y 2 de la Ley 1265, la Ley 3053, y en armonía con el inc. 4 del art. 1344 del Cód. Civil.

Y así, cuando la venta de un inmueble se hace con la indicación de superficie, fijándose el precio por medida determinada, el vendedor, o sea el P. E. en el caso, debe dar la cantidad estipulada con sujeción al art. 1345, del citado Código.

De suerte que, no habiendo el Gobierno precisado la superficie vendida, en el sentido legal expresado, sino desde que declaró su real ubicación y sus linderos definitivos, por el decreto de noviembre de 1905, la *adquisición* de la cosa por parte del comprador no pudo operarse sino desde esa fecha.

Es de notar, por último, que la contribución territorial, según el art. 1 de la Ley 5062, es un impuesto que grava exclusivamente la propiedad privada, y que es en tal concepto que se le impone y

ha podido imponerle, a los compradores de la tierra pública, según el texto expreso del citado art. 25 de la Ley 1265, es decir, desde que, operada la adquisición se incorporó a su patrimonio privado el inmueble vendido.

Entiendo pues, y en consecuencia de lo dicho que, la ubicación que expresa la escritura pública acompañada, practicada por la misma Oficina informante y que dió lugar al decreto de noviembre 7 de 1905, es lo que recién hizo posible la *adquisición* de la tierra en cuestión, y creó por ende, la obligación en el adquirente de pagar la contribución directa, al expirar el término de un año fijado por tales a tal objeto.

De aquí pues, que haya reputado justo el reclamo presentado, con prescindencia del título de propiedad otorgado, y sólo ateniéndome al significado legal de la palabra ADQUISICION en el único sentido en que ha quedado y podido usarla el art. citado de la Ley 1265, cuando se refiere a los compradores de la tierra pública vendida en la forma de esa Ley y la 3053. — Abril 7 de 1908.

=====

Deben computarse a los efectos de la jubilación, los servicios prestados en la Municipalidad de la Capital, con anterioridad a su federalización.

### **Máximo Casa, sobre su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Si bien es cierto, que diez años de servicios de los que acredita el recurrente Dn. Máximo Casa, para pedir la jubilación que gestiona, han sido en la Municipalidad de la Capital, cuando ella era de la Provincia de Buenos Aires y cuando pasó a ser de la Nación, no es por menos cierto que, cuando esto último sucedió, pasó el recurrente a prestar servicios de carácter nacional y en una institución que tenía y tiene la calidad de una dependencia de V. E. (inc. 2 del art. 86 de la Constitución), por más que la ley le haya dado una existencia relativamente autonómica.

En tal concepto, esos años de servicios deben ser tomados en cuenta al peticionante, tanto más cuanto que, ni la institución municipal actual le permite hacerlos valer ante ella, por no contarse

entre sus servidores de hoy, ni poder con esos servicios completar los que ella exige en el caso, ni ante la Provincia de Buenos Aires que siendo ahora extraña a aquéllos, no puede atenderlo en su justa reclamación.

En semejante situación y teniendo en cuenta que el espíritu de la Ley vigente, es el de no dejar en el abandono al que ha prestado servicios por el número de años que prescribe, servicios de que aprovechó una institución que, aún siendo de la Provincia, preparó y ejerció el gobierno municipal de la Capital, que pasó luego a ser esencialmente Nacional, creo que V. E. sin hacer distinguos y limitándose a aplicar la ley dentro de lo prescripto por el inc. 2 del art. 86 de la Constitución, debe computar al recurrente los expresados años de servicios que la mayoría de la Junta rechaza en su precedente resolución.

Agregando en este punto lo expuesto por el Asesor Letrado a fs. 12, así como lo expuesto por la minoría de la Junta en su resolución de fs. 33 y teniendo presente lo sostenido por el que suscribe en casos análogos, tanto como la jurisprudencia establecida por V. E. mismo (expedientes de Pereyra, Núñez, Reissing) soy de opinión que debe modificarse la resolución de la mayoría de fs. 27 en el sentido de confirmar en todas sus partes, la de la minoría de fs. 33. — Abril 8 de 1908.

*Acuerdo favorable: Boletín Oficial N° 4343, pág. 113 de mayo 11 de 1908.*

=====

Una sentencia de juez competente, en causa sobre infracción al enrolamiento, consentida por el Ministerio Fiscal, se reputa ejecutoriada y debe ser acatada por el Ministerio de Guerra.

**Consulta del Ministro de Guerra, sobre sentencia del Juez Federal de San Juan, ordenando la libertad de varios infractores a la ley de enrolamiento.**

*Excmo. Señor:*

Al avisar recibo de la nota de V. E., evacúo la consulta que se ha servido hacerme, relativa a los puntos que indica, y en cuanto es compatible con las funciones judiciales de mi cargo.

Relativamente al mérito actual de las sentencias del Sr. Juez Federal de San Juan, cuyos testimonios se acompañan, debo manifestar que, dictadas y ejecutoriadas en la forma y condiciones de la ley, tienen ellas la firmeza de la cosa juzgada, que nuestra legislación y nuestra jurisprudencia atribuyen a tales sentencias. Dictadas de acuerdo con el Ministerio Fiscal que, no sólo se ha abstenido de acusar a los procesados, sino que ha pedido su absolución, renunciando por el hecho de haberlas consentido, a los recursos legales, que son los únicos medios para obtener su revocatoria o modificación de los Tribunales Superiores, que son a su vez los solos que pueden hacerlo.

En tales conceptos pues, reputo que esas sentencias deben ser acatadas y cumplidas como corresponde, sin perjuicio de que, si V. E., encuentra mérito, requiera del representante del Ministerio Fiscal, las explicaciones que considere oportunas.\*

Ningún procedimiento, a no ser el indicado, tiene V. E. respecto a esas sentencias consentidas; cualquier acto tendiente a revocarlas, revisarlas o modificarlas, implicaría ejercer funciones judiciales, restableciendo o prosiguiendo causas fenecidas por sentencia legalmente ejecutada. El art. 95 de la Constitución es en este punto, valla insalvable para que V. E. se pronuncie en uno de aquellos sentidos.

En cuanto al Sr. Juez sentenciante, creo que no corresponde entrar a apreciar el criterio que haya tenido presente al sentenciar, dada la independencia absoluta que la Constitución garante a sus funciones, fuera de los recursos legales que la ley establece dentro del orden judicial, ni es el caso de suscitar la idea de delito, que no emerge de los antecedentes acompañados, no se desprende del contenido de la causa, ni surge de la sentencia sobre servicio militar, dictada de acuerdo y a pedido del representante legal de la Nación y ampliamente consentida por él.

En cuanto al punto relativo a los ciudadanos que, llamados en carácter complementario a los efectos del reemplazo, no han concurrido en la oportunidad debida, son justiciables por el Sr. Juez Federal, cualquiera que sea la numeración que les haya tocado en el sorteo respectivo.

Esos ciudadanos, además de depender del Gobierno de la Nación desde que se enrolaron, por formar parte del ejército (art. 12, tít. 1 de la Ley 4707), están sometidos al reemplazo, en ausencia

de los números superiores, sin distinción de número, ni serie, según lo estatuye terminantemente, el art. 16 del tít. y ley citada.

Dentro de este concepto, creo que, es el caso de poner en conocimiento de los fiscales el nombre de los inasistentes, a fin de que requieran de los Jueces respectivos la correspondiente orden de detención e inicien y prosigan las acciones penales que en el caso correspondan. — Abril 21 de 1908.

=====

Las personas a quienes por gracia se acuerdan números de lotería para la venta, y que se las entregan a los vendedores de billetes, a cambio de una comisión, no están obligadas a pagar la patente de ley.

**Sobre patente a las personas a quienes la Comisión Administradora de la Lotería Nacional distribuye billetes.**

*Excmo. Señor:*

La Comisión Administradora de la Lotería Nacional, está facultada por el art. 5 de la ley 3313 para distribuir en la forma que encuentre más conveniente, la cantidad de números destinados a la venta; obrando dentro de tal facultad, adjudica los mencionados números, en su mayor parte como lo afirma, a familias y pobres vergonzantes, con fines caritativos, y cuya entrega se hace a los agentes que los venden al público, con autorizaciones que a tal objeto les dan los referidos agraciados.

Estos, en realidad, no compran ni venden los expresados números, sino que actuando como intermediarios, se limitan a recoger una comisión, corretaje o sueldo, que es la simple forma de que ellos perciban la distribución que la Comisión les hace, a mérito de sus expresadas facultades, y a los fines caritativos que manifiesta tener presente cuando ejecuta aquella.

Dentro de tales conceptos, es inaplicable la disposición legal que grava con patente determinada a los vendedores de billetes de lotería, respecto de aquellos intermediarios; la imposición fiscal sólo es para aquellos que, con casa abierta, expenden al público los mencionados billetes, ya sea que los hayan obtenido de los referidos agraciados o de la Administración misma.

Estas consideraciones me inducen a pronunciarme en el sentido de que, no es el caso de aplicar la ley de Patentes a las personas antes aludidas. — Abril 22 de 1908.

=====

La Contaduría General de la Nación, como toda otra autoridad o dependencia nacional, está obligada a cumplir lo requerido por exhorto judicial.

**Sobre cumplimiento de un exhorto del Juez Dr. Quesada  
a propósito del pago de una pensión.**

*Excmo. Señor:*

El oficio dirigido al P. E. por el Sr. Juez de 1ª Instancia en lo civil de la Capital, Dr. Ernesto Quesada, en los autos sucesorios de Dn. Teolindo Juan Linares, es un exhorto judicial que, en principio, debe ser cumplimentado.

Ese Magistrado, bajo cuya exclusiva jurisdicción se tramita la expresada sucesión, ejerce una facultad propia cuando establece con arreglo a la ley, la persona a quien como heredero corresponde, como parte de herencia, la pensión ya acordada a los sucesores del causante; y cumple dirigiéndose a V. E., para que ordene su pago a quien por derecho corresponda, de acuerdo con la ley de pensiones que rige el caso.

Dentro de tales conceptos, el Sr. Juez exhortante ha dispuesto en oficio de 3 de julio del año pasado, reiterado hoy, que la pensión que percibe la Srta. María Matilde Linares, sea entregada en lo sucesivo a Doña Isabel Espinosa de Linares y a su hijo legítimo Federico Jorge Linares, en virtud de no haber sido reconocida aquella como heredera del causante, según sentencia firme dictada por la Excm. Cámara de Apelaciones en lo civil de la Capital.

No tratándose, pues, del acuerdo de una pensión, sino de su simple pago a persona cuyo estado civil resulta del exhorto del Sr. Juez, V. E. debe cumplimentarlo sin más trámite, quedando como justificativo del pago el mencionado documento.

Y así, la liquidación que la Contaduría ha practicado, en la creencia errónea, de que tal mandato judicial no era suficiente para anular el derecho acordado al goce de la pensión por la Srta.



Linares, incluyendo su nombre junto con el de la Sra. Linares y su hijo, únicos éstos a quienes se refiere el exhorto de que se trata. no es procedente, dado que contraría sin autoridad lo que el citado Juez establece dentro de sus propias y exclusivas facultades. La Contaduría de la Nación, como toda otra autoridad o dependencia nacional, está obligada a cumplir las sentencias de los jueces, cuando, como en el caso, se le presentan en forma, de acuerdo con la 1ª cláusula del art. 13 de la Ley 48 y en armonía con la jurisprudencia constante sancionada por la misma Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo dicho, considero muy puestas en razón las observaciones que formula la expresada repartición, en el sentido de satisfacer los requisitos de todo pago que señala el art. 16 de la Ley de Contabilidades (488); en este concepto y dentro del orden administrativo, creo que a V. E. corresponde dictar el decreto, que dentro de ese orden, debe justificar y dar existencia oficial al pago de que se trata, en la persona designada por el juez exhortante.

Sirvan las consideraciones expuestas para fundar la opinión que dejo formulada de que V. E. debe ordenar se cumplimente el exhorto de que se trata, sin perjuicio de los actos administrativos que por la ley de Contabilidad corresponda. — Abril 22 de 1908.

=====

Es procedente el pedido —por medio de exhorto— de un juez federal que requiere documentos administrativos, sin perjuicio de que el P. E. dicte las medidas necesarias a la seguridad y conservación de dichos documentos.

**Juez Federal en lo Criminal y Correccional, pide se le envíen datos para el juicio “Ferrocarril del Sud, sobre supuesta defraudación de Aduana”.**

*Excmo. Señor:*

Tratándose de documentos originales de una repartición dependiente del P. E. de la Nación, como es la Oficina Inspectora de Ferrocarriles, cuya remisión pide el Sr. Juez Federal de la Capital, corresponde sea cumplimentado, como V. E. lo ha ordenado, sin perjuicio de adoptar las medidas conducentes a salvar los inconvenientes que señala la mencionada repartición.

El art. 13 de la Ley 48 de 14 de septiembre de 1863, sobre

jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, dispone que las autoridades dependientes del P. E. Nacional prestarán todo su auxilio para la ejecución de las sentencias del Poder Judicial, estando en tales condiciones las diligencias de prueba que ellos dictan en asuntos que, como el de que se trata “contra el Ferrocarril del Sud sobre defraudación”, están sometidos a su propia y exclusiva jurisdicción.

Las observaciones que formula la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles, en el sentido de que los mencionados documentos son indispensables para el contralor que requiere la introducción, transferencia y existencia de materiales ferroviarios, no obsta al cumplimiento del exhorto de que se trata, aunque deban tenerse presente en el caso.

En vista pues de la necesidad de tales antecedentes en la Oficina expresada, procedería que V. E., al cumplimentar el exhorto como está ordenado, dé las instrucciones necesarias al Sr. Procurador Fiscal, a fin de que, según el estado de la causa, solicite la entrega y devolución de los documentos expresados, previo desglose y dejando si fuese necesario la debida constancia en autos. — Abril 24 de 1908.

=====

Una sentencia de la Corte Suprema debe ser cumplida sin reparos por el P. E. aún cuando su cumplimiento lesione derechos adquiridos por un particular y el daño corresponda resarcirlo a la Nación.

**Rodolfo W. Huntington, pide el desalojo y posesión de tierras en Neuquén.**

*Excmo. Señor:*

Insisto en creer, como ya lo he significado que, acompañada copia autenticada debidamente, V. E. debe proceder a cumplir la sentencia de la Suprema Corte dictada a propósito de la ubicación de que aquí se trata, sin que haya lugar a tachar o a rectificar sus fundamentos o disposiciones (art. 95 de la Constitución).

Si el mencionado cumplimiento lesiona un derecho adquirido por un particular— como sucede con Huntington—, es el caso de que V. E., tomando en cuenta la lesión inferida a los derechos de

éste o de su causante, proceda a resarcir el daño si lo hubiera por causa legalmente imputable a la Nación.

Ya sea que tal cosa se inicie dentro de la Administración, por convenir al lesionado en que el resarcimiento se haga por un cambio de ubicación, dentro siempre de lo que legal y justamente puede corresponder, ya sea que, disconforme el lesionado, ocurra ante los Tribunales en demanda contra la Nación; pienso que deben tenerse siempre presente las siguientes circunstancias:

1º — Naturaleza del error cometido, al vender a Huntington, involuntariamente y sin malicia, la ubicación que la Suprema Corte declara debió hacerse a Joner Jones, en la parte que la afecta aquella venta.

2º — Origen del título de adquisición y posesión concurrente y actual del damnificado Huntington, en cuanto choca con el cumplimiento de la expresada sentencia, bajo el punto de vista del derecho al reconocimiento y extención de la lesión que pueda habérsele inferido, así como de la posible responsabilidad de la Nación en el caso.

3º — Importancia de esa lesión, relativa a su apreciación pecuniaria, la que siempre debe ser ampliamente justificada por el que se diga lesionado.

4º — Todas las otras circunstancias que concurran a establecer las consecuencias legales del error involuntario a que ha sido inducido el Gobierno en el caso, por obra de personas más o menos extrañas a la administración.

Producidos los informes que V. E. crea conveniente a los fines de reunir los antecedentes indicados, estará en condiciones de juzgar y de pronunciarse sobre las consecuencias que, para la Nación tiene el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de que se trata.  
— Abril 26 de 1908.

*Decreto: Boletín Oficial N° 4353, pág. 271, de mayo 22 de 1908.*

=====

Al vender el Estado tierra de su dominio privado, asume el papel de vendedor dentro de su carácter de persona jurídica y en tal concepto, está sujeto a todas las obligaciones inherentes a esa parte, en el contrato de compra-venta.

### **Gobernador del Río Negro, consulta sobre medidas a adoptar en los casos de pedido de desalojo.**

*Excmo. Señor:*

Las leyes sobre enajenación de la tierra de propiedad nacional, dictadas por el Congreso a mérito del inc. 4 del art. 67 de la Constitución, se refieren exclusivamente a las de propiedad privada del Estado, y a que alude el art. 2342 del Cód. Civil.

Las condiciones, requisitos, términos y demás circunstancias que esas leyes establecen para tal enajenación, en nada modifican la situación legal de la Nación, en tal caso. Como vendedora está sujeta a todas las obligaciones que son inherentes a esa parte en el contrato de venta, como lo está a las de cualquier otro contrato de los que puede celebrar dentro de su capacidad de persona jurídica y en armonía con lo prescripto en los arts. 31, 32, 33 del Código citado; a su vez en los expresados casos, es titular de los derechos a tales personas concedidos por las leyes comunes que rigen los actos respectivos.

Dentro de tales conceptos, no existe prescripción constitucional, ni legal, ni menos de jurisprudencia, que coloque a la Nación en situación diferente y privilegiada cuando, como en el caso de esta consulta, ha vendido tierra de un dominio privado y debe entregarla a la persona que con ella contrató.

Como cualquier otro vendedor, debe cumplir lo dispuesto por el art. 1408 del citado Código, es decir, debe entregar la cosa vendida libre de toda otra posesión, con todos sus accesorios, en el día convenido o cuando el comprador lo exija. Los propósitos que el Gobierno haya tenido al hacer tal venta, en el sentido de fomentar la colonización, la población, o la adaptación de la tierra a tales o cuales aplicaciones, no bastan a neutralizar las obligaciones inherentes y legales al contrato aludido, salvo las estipulaciones especiales que, al respecto, se hubieran formulado. Las que se convierten en circunstancias o cláusulas especiales del contrato mismo, que lejos de desnaturalizarlo le confirman en su esencia.

Así pues, el Gobierno cumple un deber legal de contratista entregando al comprador la tierra que le ha vendido, libre de toda posesión, por medio de sus agentes que, en el caso es el Gobernador del Territorio, sin derecho alguno para obligar a aquél a tomar la posesión por sí mismo o a demandarla en caso de oposición; quien compra tierra de propiedad nacional como cualquier otra, entiende adquirir tierra y no un litigio, en que sustituya a la Nación en derechos que ella le vende y que un tercero le disputa.

Y si, como lo indica el consultante, se presenta alguien alegando sobre la tierra vendida, derechos más o menos verosímiles, pero amparados por la ley, no es el caso de proceder violentamente y con empleo de la fuerza pública para dar una posesión que, además de ser violenta sería hasta cierto punto inocua, dado que, un simple interdicto podría hacerla desaparecer, en tal caso deben enviarse los antecedentes al representante judicial de la Nación, el Procurador Fiscal respectivo (Ley 3367) para que entable y prosiga las acciones que, dentro de la ley, den por resultado, el reconocimiento de los derechos que el Estado entiende vender, la adquisición de lo que el comprador debe adquirir, y el desconocimiento de aquéllos que el tercero resulta atribuirse indebidamente.

Esta actitud de parte del Gobierno contratista, pero respetuoso de los derechos ajenos, cuyo reconocimiento está librado a la ley y a los jueces, sin que esté autorizado para hacerse justicia a sí mismo (art. 2468 del Cód. Civil), es la que, por derecho corresponde y la que, en numerosos casos, tiene establecido la jurisprudencia constante de la Suprema Corte, que siempre ha reputado a la Nación cuando contrata, como persona del derecho común, negando jurisdicción a las autoridades administrativas para resolver a su respecto y como juez y parte, reconociéndola sólo en las autoridades judiciales, y declarándola siempre y en tales casos, sometida a la legislación común, sin excepción ni privilegio constitucional ni legal alguno.

A esas autoridades pues, compete juzgar de los derechos alegados por los mencionados terceros, ya sean que ellos emerjan de un contrato o de una prescripción treintenaria, por ejemplo, de que es susceptible la propiedad privada del Estado (art. 3951, Código Civil) sin más distinciones que las que la misma ley contiene, a ella debe ocurrir el Gobierno por medio de sus agentes o representantes, ante ella debe iniciar y seguir, dentro del procedimiento ordinario, las acciones que lleven a reconocer sus derechos y a salvar la posesión

y propiedad de la tierra de la Nación que, el abandono por una parte y la mala fe de pretendidos poseedores por otra, pueden hacer salir del dominio del Estado.

Es cierto que tal situación legal de la Nación, relativamente a su tierra ubicada en toda la extensión del territorio de la República, puede motivar una labor asidua y constante para defenderla del abandono de los propios subordinados o de la mala fe de particulares poco escrupulosos, pero ello no basta para alterar la situación legal mencionada y establecida por leyes positivas, tanto más cuanto que, el Estado cuenta y puede contar con elementos y personal bastante para cuidar de un dominio que no tarda en devolver con creces lo que se invierte en su conservación y defensa.

Sirvan estas consideraciones pues, para fundar en el caso el procedimiento que debe observarse que, siendo el legal es el único que reputo correcto y eficaz. — Abril 27 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4647, pág. 561 de mayo 25 de 1909.*

=====

Un militar retirado, no puede gozar simultáneamente de la pensión de su retiro y del sueldo de un puesto civil que desempeñe; tal cosa es contraria a las leyes vigentes en el orden civil y militar (caso del coronel Calaza).

### **Coronel Calaza sobre acumulación de sueldo civil y pensión de retiro.**

*Excmo. Señor:*

El Coronel José María Calaza se encuentra en situación de retiro con arreglo al art. 19, cap. 6, tít. 3 de la Ley Orgánica 4707, según decreto de julio 16 de 1907, dictado en virtud de la ley especial del Honorable Congreso 3086, que autorizó al P. E. para computar al recurrente a los efectos de su pensión de retiro, los servicios civiles prestados en el Cuerpo de Bomberos de la Capital.

A la vez, el mismo Coronel retirado, desempeña el empleo civil de Jefe del referido Cuerpo de Bomberos.

La Ley 4707, que rige la materia, nada dispone para los casos

en que un retirado militar que goza de su respectiva pensión, ocupa también un empleo rentado de la administración civil.

Es de notar, no obstante aquella omisión, que con arreglo al art. 33 de la mencionada ley, el oficial retirado puede volver eventualmente a la vida militar activa, cuando el P. E. crea necesarios sus servicios en las condiciones previstas en el art. 31 de la misma.

Este último precepto enumera y precisa cuáles son los servicios que pueden desempeñar los oficiales retirados, puesto que dice textualmente: “en tiempo de guerra, en puestos de su grado y, en tiempo de paz, en las reservas, pero sólo cuando dejen vacantes los oficiales del cuadro activo, así como en los puestos de la justicia militar, del profesorado y el cuerpo de la administración militar”.

De manera que, según los conceptos que acabo de mencionar de la Ley 4707, bajo cuyo imperio y jurisdicción se encuentra el recurrente en su situación de retiro, se percibe que, el propósito claro del legislador ha sido que, los oficiales retirados a que se refiere el art. 33, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, se encuentren a las órdenes del P. E. para prestar alguno de los servicios exclusivamente militares, que menciona y especifica el art. 31 de la misma ley.

Si nada dispone la ley de la materia sobre casos como el del recurrente y si de los citados preceptos legales resulta indudable, el propósito referido del legislador de que, los retirados militares no desempeñen otras funciones que las militares a que se refiere el citado art. 31, lógicamente se deduce que la situación del Coronel Calaza es excepcional y procede en consecuencia, encontrar la solución del caso dentro de las disposiciones vigentes y en armonía con lo estatuido en casos análogos por resoluciones administrativas.

La Ley 1188, sobre Pensiones y Retiros Militares de octubre 9 de 1865, previendo casos como el presente, disponía en su art. 19 que “los pensionistas que reciban sueldo por empleo civil, no percibirán sino éste o la pensión, según prefieran, mientras sirvan el empleo”.

Es de notar, a juicio del suscrito que, tanto el retiro militar como la jubilación civil, si bien el primero se refiere a los militares y el segundo a los civiles, ambos se acuerdan o porque el beneficiado ha llegado a una edad avanzada o porque se ha hecho acreedor a una recompensa que satisfaga el descanso merecido, siendo que el

uno y el otro tienen causas análogas y deben producir análogas consecuencias.

La Ley de Jubilaciones 2219, disponía en su art. 11 que, “cuando un jubilado entre nuevamente en servicio, cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo, siempre que fuese mayor, si fuese menor, continuará percibiendo aquélla, y una tercera parte del sueldo correspondiente al empleo que desempeña, de modo que no permitía la acumulación de sueldos íntegros para los jubilados que también desempeñasen empleos rentados.

A su vez, el art. 12 de la Ley 68, de julio 2 de 1856, dispone: “todo empleado en el que se acumulen dos o más empleos, gozará solamente el sueldo mayor de uno de ellos y, por vía de gratificación la tercera parte del siguiente en escala de cantidad”, corroborando la misma tendencia de las leyes anteriormente citadas.

Puede decirse, en consecuencia, que es contraria a los antecedentes de la legislación militar y civil del país, en materia de retiros y jubilaciones, la acumulación de sueldos que pretende el recurrente.

De acuerdo con el espíritu de nuestras instituciones y con los preceptos de las leyes citadas, el P. E. realizó el pedido formulado por el Coronel retirado don Juan C. Boerr, que desempeñaba también el empleo civil de Director de la Penitenciaría Nacional, en el decreto de julio 7 de 1896, en cuyo art. 1 se dispone la siguiente medida de carácter general y que es de todo punto aplicable al caso *sub-júdice*: “Los militares retirados que entren a desempeñar servicios civiles, percibirán íntegro el sueldo de éstos o la pensión, según prefieran y la tercera parte de la otra asignación”.

Bien, pues, en mérito de este decreto, bajo cuya vigencia se encuentra el recurrente, por ser su situación exactamente igual a la del Coronel Boerr, como resulta de los antecedentes y el mismo lo afirma, y en razón de que las resoluciones dictadas por el P. E. en los casos del General Mansilla y del Coronel Dantas, que también invoca, se refieren a muy distintas situaciones legales, porque en ellos se trató de la dieta de diputados, no considerada como sueldo, en razón del carácter electivo del cargo; opino que no procede la acumulación de la pensión militar y del sueldo íntegro del empleo civil que desempeña el Coronel Calaza, no obstante ejercerlo con notoria competencia y dedicación.



En consecuencia, pienso que sus haberes militares y civiles deben seguirse liquidando, como lo indica la Contaduría, con sujeción al decreto de 7 de julio de 1896, no haciendo en consecuencia lugar al reintegro que pide y que también reputo improcedente. — Abril 29 de 1908.

=====

Una concesión acordada para ejercerse y ejecutarse en un plazo dado, no subsiste, ni ella ni sus accesorios, una vez expirado el plazo por la que se concedió.

Lo que posteriormente se intente, debe considerarse una nueva concesión que se acordará o no, según convenga a los intereses de la Nación.

**Ferrocarril del Sud, sobre construcción de muelles, carboneras, vías y pescantes en la ribera Sud del Riachuelo.**

*Excmo. Señor:*

Como la Empresa del Ferrocarril del Sud, al someter a la aprobación del P. E., los planos y memoria descriptiva que acompaña, referentes a la instalación de guinchos transportadores de carbón, sistema Témperley, y demás obras que se propone construir sobre la ribera Sud del Riachuelo, invoca el contrato que tiene celebrado con el Gobierno de la Nación en diciembre de 1885; se hace necesario determinar, si la Empresa de referencia ejercita un derecho o si solicita una nueva concesión del P. E.

Esta Empresa propuso al Gobierno Nacional la construcción de quinientos metros lineales de muelle en la ribera Sud del Riachuelo, y por decreto de agosto 21 de 1885, se aprobaron las bases convenidas al respecto, entre el Departamento de Ingenieros, la Comisión de Obras del Riachuelo y la mencionada Empresa, bajo la condición de que, a ella correspondería *dejar los treinta y cinco metros de ribera* y las demás obligaciones que establecían, según el considerando 3 de aquel decreto.

A su vez, en el art. 4 del contrato celebrado entre la Administración de las Obras del Riachuelo, debidamente autorizada al efecto, y la Empresa del Ferrocarril del Sud, se establece que “la *Compañía dejará los treinta y cinco metros de ribera* que corresponden según el Código, sin construcción permanente, pero sobre ellos

podrá colocar sus vías férreas, pescantes y demás accesorios para la carga y descarga *como se indica en el plano presentado*, haciendo estas obras de modo que, no se interrumpa el tránsito de la ribera, la que siempre deberá estar en condiciones de permitir el paso de vehículos”.

De manera que, desde la aprobación de las bases que sirvieron al contrato mencionado, hasta la redacción del convenio en definitiva aprobado por decreto de octubre 31 de 1885 y reducido a escritura pública en diciembre 4 de este último año, la Empresa se ha obligado a respetar los treinta y cinco metros libres que, según el art. 2639 del Cód. Civil corresponden a la ribera del Riachuelo, pudiendo tan sólo colocar, sobre ella, las vías férreas, pescantes y demás obras accesorias comprendidas y detalladas en los planos que sirvieron de fundamento a aquel contrato.

Han transcurrido más de veintidós años desde que tuvo lugar aquel convenio y la Empresa se presenta hoy, no con los planos a que el contrato se refiere y que forman parte integrante de la convención bilateral realizada, sino con los planos, totalmente distintos, que acompaña.

Si la cláusula 4 del contrato que invoca la Empresa en su favor, concede el derecho a colocar en la ribera Sud del Riachuelo las vías, pescantes y accesorios, para la carga y descarga, *como se indicó en el plano presentado* en 1885, ésta es la materia única del contrato y a lo que sólo están obligadas las partes, con arreglo al principio del art. 1197 del Cód. Civil, según el cual las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la que deben someterse como a la ley misma.

Es de notar también, que tratándose de una concesión y de un contrato que implican indudablemente un privilegio, como es el derecho de colocar rieles o pescantes sobre la ribera, que es calle pública, procede con sujeción a la doctrina y a la jurisprudencia, la interpretación restrictiva.

En mérito pues de lo expuesto, y considerando el caso dentro de los términos expresos del convenio que se invoca, resulta que no tiene el derecho anterior que alega la Empresa del Ferrocarril del Sud, para levantar las instalaciones que hoy proyecta y pretende levantar como si fueran las que convino hace 22 años.

Pero hay otra consideración en apoyo de la negativa que expreso. El art. 11 del contrato invocado por la Empresa estatuye:

“que la falta de cumplimiento a los plazos para la ejecución de las obras estipuladas por el art. 3 (se refiere a la construcción de los quinientos metros de muelle), deja sin efecto la presente concesión y el P. E. podrá disponer de la ribera de que se trata, en la forma que le conviniera”.

Con arreglo al art. 3, los planos fueron sometidos a la aprobación, a los dos meses de celebrado el convenio, a los seis meses de aprobados aquéllos comenzó la obra, y debió quedar terminada a los dos años.

Han pasado más de veintidós, y recién la Empresa viene a ejercitar el derecho de colocar las vías y pescante sobre la ribera que contrató en 1885, siendo que, como se ve, los plazos para la obra principal o sea para la construcción de los 500 metros de muelle eran sólo de dos años como máximo y su expiración motivó la caducidad de la concesión quedando el convenio sin efecto.

La intención manifiesta del Gobierno de la Nación, al celebrar el contrato, en cuanto se refiere a su cláusula 4, es decir, a la ocupación de la ribera con vías, pescante y demás obras accesorias, comprendidas en el plano que sirvió de base al convenio de 1885, fué indudablemente que esas obras se hiciesen en plazos relacionados con aquellos indicados para hacer el muelle, como que eran partes de la misma obra y de la misma concesión, pero no en un plazo de más de veintidós años, término que casi se confunde con el de la concesión misma.

A esta interpretación autoriza el art. 1198 del Cód. Civil: el convenio referido con la expresada recurrente, la obligaba no sólo a concluir el muelle en el término expresado (dos años) sino que ese plazo regía igualmente respecto de los pescantes, rieles, así como que a su respecto regía igualmente la sanción de caducidad vigente para aquél y que registra el citado art. 11 del convenio, como que ambas cosas eran parte de la misma obra y de la misma concesión.

Por otra parte, no puede aceptarse bajo ningún concepto, que un acto administrativo como el de que se trata, haya obligado a la Nación, como lo pretende la Empresa, a entregarle la ribera del Riachuelo en todo tiempo, mientras ella guardase el privilegio de utilizarla cuando le pareciera convenir mejor a sus intereses; es de presumirse que el Gobierno guardó y entendió guardar el derecho de oponerse a tal entrega si más tarde no conviniera a los intereses

públicos a su guarda, cuando estipuló la ya citada cláusula del art. 11 del contrato.

Pero, la negativa que sostengo de un derecho en la Empresa para la exigencia que exhibe, no implica de mi parte oposición a lo que pide, siempre que ello se considere como una concesión recientemente pedida a V. E. para las obras que hoy proyecta y que pueden ser de gran importancia para nuestro puerto, como tal concesión debe ser sometida a estudio en relación a la actualidad, como lo ha sido por las oficinas que han informado anteriormente, reputando por mi parte que, en obsequio a la autoridad de las oficinas técnicas informantes, y a la buena guarda de los intereses públicos comprometidos en el caso (uso de la ribera y calle pública) V. E. podría acordar la expresada concesión de los límites y condiciones aconsejados, si así entiende que conviene a esos intereses y a cuyo respecto me abstengo de pronunciarme por tratarse de algo que considero extraño a mi competencia y por ende a mi dictamen. — Mayo 5 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4374, pág. 603 de junio 19 de 1908.*

=====

El P. E. tiene facultad —sin temor de lesionar alguna garantía constitucional ni prescripción legal—, para autorizar la negativa del Correo, a recibir y hacer circular, diarios, periódicos o folletos, contrarios al orden y seguridad pública o del Estado, o que sus términos configuren un delito.

**Sobre facultad en el Gobierno, para rechazar la correspondencia contraria al orden y tranquilidad pública.**

*Excmo. Señor:*

En ejercicio de la facultad conferida al Congreso por el art. 67, inc. 3 de la Constitución, para el arreglo y establecimiento de las postas y correos generales de la Nación, aquél dictó la Ley 816 que proveyó a tal establecimiento, sancionando después de larga y detenida discusión, el monopolio en el Gobierno General de tan importante servicio público.

En esa discusión, que registra el Diario de Sesiones respectivo,

primaron y sirvieron de amplia base a la expresada ley, consideraciones de orden público y sobre todo de interés para el Estado, así como las ventajas que uno y otro debían necesariamente esperar de tan eficaz agente, tanto para la atención y cuidado del primero, como para la mayor seguridad y mejor gobierno del segundo.

Dentro de tales conceptos y siguiendo la huella marcada por otras naciones que sirvieron de ejemplo, la citada reglamentación de la mencionada ley, organizó la institución general del correo de la Nación, estableciendo su monopolio, la inviolabilidad de la correspondencia en su legal concepto, su clasificación y condiciones de porte, concluyendo por dictar las sanciones penales en garantía del fiel cumplimiento de sus disposiciones, y de la realización de los propósitos que movieron al Congreso al dictarla.

Si bien el art. 3 de la citada ley, contiene la prohibición terminante de conducir correspondencia que no sea despachada por la Administración respectiva, con las solas excepciones de su art. 6; si bien el art. 14 de la misma ley se opone, en general, al rechazo o negativa de despacho de la correspondencia en condiciones legales; sin embargo, la Ley 816 se opone a que se dé curso a las cartas que visiblemente ofendan la moral y la corrección (art. 11), establece que los diarios, periódicos, folletos, deben estar de tal manera acondicionados que se pueda verificar fácilmente su contenido (art. 31) y prescribe el rechazo inmediato cuando contengan inmoralidades o incorrecciones (art. 36).

Tales disposiciones denuncian claramente que, si está consagrada la inviolabilidad de la correspondencia, bajo el punto de vista de la no apertura de las piezas cerradas (art. 9), así como de su circulación y fiel conducción a su destino; el examen de la correspondencia en lo externo, ya sea en la carta por su exterioridad, ya en los periódicos o folletos por su contenido, está también consagrado y permitido a la Administración de Correos, no sólo para vigilar el cumplimiento de las condiciones del porte, sino para cuidar de la moral y corrección indispensable en toda pieza que se presente al Correo de la Nación.

Permitido pues, el examen de la correspondencia abierta, o sea la consistente en diarios, periódicos, folletos, ningún inconveniente ni incorrección existe en el examen y verificación de su contenido, y así como la ley permite el rechazo de la que ofenda la moral pública, no hay razón que se oponga al rechazo o no circulación de aquella

que resulte contraria al orden público, al interés general y sobre todo a la seguridad del Estado, estabilidad de las instituciones, y propia conservación del Gobierno mismo, que sostiene y presta el servicio que conduce y distribuye esa misma correspondencia.

Cuando la Constitución entrega los correos generales al Gobierno de la Nación, en obsequio al interés general; cuando la ley le asegura su monopolio, en mira al bienestar del Estado, así como cuando rechaza las ofensas que puedan inferirse a la moral pública, autorizando a la propia Administración para examinar la correspondencia cerrada y registrar la abierta; no debe ni puede inferirse que una y otra hayan entendido erigir a ese Correo y al Gobierno que lo dirige y administra, en el vehículo obligado de la propaganda abierta y públicamente adversa a la propia existencia, contra el interés público comprometido en ella y hasta atentatoria a la misma institución que entiende cimentar la primera.

Sería esto una verdadera incongruencia, extraña a toda explicación racional; siendo de observarse, que si ello puede limitar en algo la garantía constitucional de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa (art. 14) esa limitación estaría siempre dentro de la garantía citada, no sólo porque la conducción del impreso por el Correo, por razón de defensa del orden y de las instituciones, nunca implicaría una censura a las ideas publicadas, sino porque tal limitación, caso de existir, nacería de una ley de las que reglamentan indirectamente el ejercicio de la mencionada garantía.

Por otra parte, habiendo diarios, periódicos o folletos, cuya propaganda no se limita a la simple exposición de doctrinas más o menos avanzadas, sino que van a la incitación y divulgación de los medios de cometer el delito, a su justificación y aún a su glorificación; no puede ni debe aceptarse que la Administración pública de correos haya de hacerse cómplice a sabiendas de tales actos, cooperando a la circulación de esos impresos, en lugar, no sólo de negarse a ello, sino aún de entregar a la autoridad el cuerpo y los antecedentes de un delito perfectamente caracterizado a su vez.

En tales casos, a V. E. correspondería establecer semejante negativa, haciendo uso de las facultades implícitas que a V. E. vienen de su carácter de administrador general del país, que le atribuye el inc. 1 del art. 86 de la Constitución, así como de la explícita que la asiste para dictar en el caso, las instrucciones y reglamentos necesarios a la ejecución de la Ley 816, cuyo espíritu manifiesto, como

lo he demostrado, permite el registro de la correspondencia abierta y autoriza y obliga a negar la circulación de la que atente al orden y seguridad pública, o del Estado, o que envuelve un delito justificable por la autoridad respectiva (inc. 2 del art. 86 de la Constitución).

Dentro de tales conceptos y consideraciones, es mi opinión que V. E., puede, en cada caso, y sin temor de atacar ninguna garantía constitucional, ni prescripción legal, autorizar la negativa del Correo a circular y aún a recibir los diarios, periódicos o impresos, que se hallen en las condiciones señaladas y que, el espíritu evidente de la citada Ley 816 rechaza de la circulación, en las postas generales de la Nación. — Mayo 6 de 1908.

=====

De conformidad al inc. 5 del art. 50 de la ley Orgánica Municipal, puede esta Corporación dictar disposiciones para evitar el daño que infiere a la moral y al orden público el ejercicio de la adivinación dentro del radio de la Capital. Una ley del Congreso que la prohíba, sería contraria al art. 19 de la Constitución Nacional.

**Municipalidad de la Capital, solicita se obtenga del H. Congreso una ley que autorice la intervención municipal, en casos de ejercicio de la adivinación.**

*Excmo. Señor:*

Si la industria de la adivinación es inmoral y atentatoria a la cultura y a las buenas costumbres, por el espectáculo que ofrece al público, en la manera como se produce y como se practica, la autoridad municipal de la Capital, no tiene sino que aplicar o incitar a que su Concejo Deliberante aplique el inc. 5 del art. 50 de la Ley Orgánica, que la faculta para dictar “las disposiciones necesarias a fin de que no se ofrezcan al público, espectáculos que ofendan la moral o perjudiquen las buenas costumbres o tiendan a disminuir el respeto que merecen las creencias e instituciones religiosas”.

Las resoluciones dictadas por la autoridad municipal, a mérito de las disposiciones y ordenanzas sancionadas en virtud de tal prescripción legal, tendrán siempre el positivo efecto que les asigna el art. 52 de la misma ley.

En tales conceptos, reputo inoficiosa la ley del Congreso cuya gestión se requiere de V. E., basta en mi sentir, la citada disposición de la Ley Orgánica Municipal, para que esa autoridad pueda por sí evitar el daño que al orden y la moral pública infiera dentro del municipio la industria de que se trata.

Pero, si la inmoralidad e incultura de la adivinación, no proviene de espectáculo inconveniente ofrecido al público, sino de la explotación exclusiva y más o menos hábil que hacen los charlatanes de los ignorantes y pobres de espíritu que libremente concurren a requerirla, sin más perjuicio que el de ellos mismos; no veo qué ley podría dictar el Congreso, en presencia del art. 19 de la Constitución, de las leyes penales que castigan los delitos que pudieran cometerse, o de las leyes civiles que protegen los derechos de las personas que esos industriales pudieran dañar, ni menos de cual de las facultades que le acuerda el art. 67 de la misma podría usar, para poner a aquellos bajo la tutela obligada de la Municipalidad.

Bien está el estímulo al celo municipal, mientras se mantenga dentro de la esfera pública de acción que le marca la Constitución y la ley, pero lo reputo excesivo cuando avanza sobre actos y convenciones privadas que bajo ningún concepto caen ni pueden caer bajo su dominio.

En ese segundo punto de vista, es tan improcedente la ley que se gestiona, como inoficiosa bajo el primer concepto; considerando que V. E. debe abstenerse de la gestión que se le requiere e indicando a la Municipalidad la conveniencia en el caso del uso prudencial de las facultades que le da la ley y que dejo referidas. — Mayo 11 de 1908.

*Como resolución: Boletín Oficial N° 4346, pág. 157 de mayo 14 de 1908.*

=====



Concedida a una empresa la construcción del Puerto de Rosario, teniendo por única compensación la explotación del mismo puerto, esa empresa se sustituye al Estado, y tiene todas las atribuciones de las Oficinas Públicas para la percepción de la renta que aquel produzca, así como para proceder breve y sumariamente al cobro de los derechos portuarios que por la concesión le pertenezcan.

**Sobre uso de los procedimientos de la Ley de Aduanas por la Empresa Puerto del Rosario, en el cobro de los servicios de ese Puerto.**

*Excmo. Señor:*

Según dispone el art. 3 de la Ley 3885, que autorizó al P. E. para contratar la construcción y explotación del Puerto del Rosario, los interesados se comprometían a ejecutar sus proyectos por su propia cuenta y riesgo, teniendo *como única compensación* el derecho de explotar el puerto por un plazo determinado.

A su vez, el art. 4 de la misma ley, autorizó también al P. E. en forma amplia, para aceptar *cualquiera otra forma de pago de las obras* con tal que no importase un desembolso inmediato para la Nación y que no afectase más rentas que las que produjese el puerto mismo del Rosario, ni implicase una enajenación perpetua del mismo.

Bien pues, estos antecedentes legales explican el alcance de los arts. 38 y 58 del contrato celebrado entre el Gobierno de la Nación y la "Sociedad Anónima Puerto del Rosario" el 16 de octubre de 1902, invocados por la parte recurrente, al solicitar la revocatoria de la resolución de V. E. de 12 de febrero del corriente año, y a que declare el P. E., en su lugar, que dicha empresa se encuentra autorizada a usar los procedimientos de la Ley de Aduana, para asegurar el cobro de los créditos que se le adeudan por servicios del puerto que construye.

El citado art. 38 del contrato dispone que las facultades de la empresa, "para cobrar los derechos de puerto . . . y, en general, para todo lo referente a su manejo y explotación, serán las mismas reservadas actualmente, en el Puerto de la Capital, a las oficinas públicas encargadas de estos mismos servicios. La empresa podrá en su cumplimiento, pedir la aplicación de las multas previstas en los reglamentos respectivos y requerir el auxilio de la Policía Marítima a

ese efecto, considerándose la empresa, en un todo, como representante del Estado en la explotación del Puerto del Rosario”.

Como los gastos de toda esta obra pública son de cuenta y riesgo de la empresa, razón por la cual, por vía de *única compensación* a tales desembolsos, el citado precepto de la Ley 3885 acuerda el derecho de explotar el puerto, sería cercenar y hacer incompleta esa compensación que de pleno derecho corresponde a la empresa, si no estuviera munida de las atribuciones de las oficinas públicas que desempeñan iguales servicios y que expresamente le asegura su contrato, así como si no fuera considerada representante del Estado en los múltiples actos de aquella explotación, como terminantemente lo estatuye el ya citado art. 38 del contrato.

Corroborando esta interpretación, el art. 58 del convenio determina que en las relaciones entre la empresa y el público en que sea necesario aplicar reglamentos y leyes relacionadas con el contrato de concesión (como la Ley de Aduana), se entenderá que la empresa *desempeña las funciones atribuídas en ellas a las oficinas del Estado*.

Una de las funciones esenciales que la Ley de Aduana 4933 atribuye a la administración del ramo, como oficina fiscal recaudadora, consiste en el ejercicio de los procedimientos breves y sumarios con que debe hacer el cobro de los derechos aduaneros y que estatuyen los arts. 43, 46 y 47 de aquella ley fiscal, en armonía con el art. 170 y concordantes de las ordenanzas.

De manera que, desempeñando la empresa recurrente las funciones que la referida ley acuerda a las oficinas del Estado, es lógico que no pueda desconocérsele, sin vulnerar los términos del contrato, el derecho que tiene de usar de iguales procedimientos fiscales para el cobro de los derechos emergentes de la explotación del puerto.

No puede negarse que, en principio, esto implica un privilegio que repugna a la tendencia de nuestras instituciones, por cuanto el Estado se desprende de facultades que le son privativas, y que delega en una empresa particular; pero, fuera de que se trata de la cláusula expresa de un contrato que obliga formalmente a la Nación, y que ésta debe cumplir en toda la integridad de la propia estipulación, es de observarse que, en toda concesión de una obra pública que se entrega a la acción privada, el Estado se desprende de facultades propias para delegarlas en el empresario y constructor, a los efectos de la realización de la obra misma; mayormente

en casos como el *sub-júdice*, en que el concesionario, además de hacer la obra, suministra el capital, y sólo tiene por compensación el producto mismo de ella, recogido justamente por los medios, leyes y reglamentos con que la Nación hace efectivos los análogos, y que por cláusula expresa de un contrato ha puesto a su disposición.

Negar la facultad en la empresa de emplear esos medios, leyes y procedimientos, a los efectos indicados, sería faltar a ese contrato y dejar trunca esa concesión acordada por la ley; soy, pues, de opinión de que lo pedido por la empresa es procedente, y que V. E. está en el caso de acordarlo, en cumplimiento de la ley que rige el punto. — Mayo 12 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4368, pág. 508 de junio 11 de 1908.*

=====

Las licencias sin goce de sueldo, no deben computarse como interrupciones del servicio, a los efectos de la jubilación.

**Don Gurmésindo Cuscueta, pide jubilación como empleado de la Aduana del Paraná.**

*Excmo. Señor:*

Por razones de enfermedad debidamente justificada, don Gurmésindo Cuscueta pide su jubilación extraordinaria, a mérito del art. 19 de la Ley 4349, por los servicios que tiene prestados en la Aduana de Paraná.

Por motivo de la misma enfermedad que alega, este empleado ha tenido licencia sin sueldo desde el 6 de junio de 1906, circunstancia que induce a la Junta de la Caja de Pensiones y Jubilaciones a no computarle el tiempo de esa licencia, siendo ello la causa por la cual resuelve a fs. 23 en contra de lo pedido.

Como he tenido ocasión de sostenerlo en noviembre 4 del año pasado, a propósito de la jubilación de la señora Dorrego de Sellanes, y como V. E. lo estableció en el decreto de enero 11 del año corriente, respecto de la misma jubilación, las licencias sin sueldo no pueden ni deben reputarse como una interrupción de servicios de aquellas a que se refiere el art. 20 de la citada Ley 4349: el

empleado, en tales condiciones, no deja de ser tal, dado que la voluntad de su superior puede retirarla y llamarle al servicio en cualquier momento.

A mérito, pues, del dictamen recordado, así como por los fundamentos del decreto citado de V. E., creo que debe modificarse el cómputo de tiempo de servicios del postulante a los efectos de su jubilación en el sentido de agregarle el que estuvo con licencia sin sueldo.

Es de observarse que, en este caso, encuadra en apoyo de lo que indico, la circunstancia de que el recurrente ha tenido durante la mayor parte del tiempo de su licencia un reemplazante, en cuya asignación se ha hecho efectivo el descuento del 5 % de la ley, el que no es imputable a éste sino a aquél, dado el carácter de provisional y transitorio del reemplazo: con esto, ni la Caja de Jubilaciones se perjudica, ni deja de hacerse efectiva la ley en punto a descuento, ni es de aplicarse, por último, el decreto reglamentario que autoriza el descuento extraordinario sobre la jubilación misma para satisfacer las exigencias de la ley.

Creo, pues, que la resolución en consulta de la Junta debe ser modificada en sentido favorable al recurrente, proveyéndose como cumple según el nuevo cómputo de sus servicios, a los efectos de la jubilación pedida. — Junio 12 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4397 de julio 20 de 1908.*

=====

Procede la aceptación de la renuncia de un Secretario de Juzgado Letrado, cuando no se ha comprobado contra él cargo alguno que importe delito susceptible de acusación fiscal y no obstante que por aceptarse dicha renuncia, el inculcado quede fuera del alcance de las medidas disciplinarias que contra él pudiera tomar la Corte Suprema de Justicia, de conformidad al art. 11 de la Ley 4055.

**Juez Letrado de Misiones, sobre denuncias publicadas contra el Secretario Dr. Cordero por irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo.**

*Excmo. Señor:*

De las actuaciones de cargo y de descargo que obran en el

sumario instruído por el señor Juez Letrado doctor Tello, con motivo del pedido que este magistrado formula sobre remoción del secretario de aquel Juzgado, doctor Octavio Cordero, en virtud de faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, no resulta justificada, en forma legal, la aplicación de una medida tan grave como la destitución y enjuiciamiento de dicho secretario.

Pudiera haber méritos para que el expediente se elevase a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia Nacional, a fin de que resolviese si el secretario doctor Cordero se ha hecho acreedor, en el caso ocurrente, a alguna de las medidas de apercibimiento y multa que, en carácter disciplinario, pueda aplicar aquel alto Tribunal en ejercicio de la superintendencia que la confiere el art. 11 de la Ley 4055; pero, en presencia de la renuncia presentada ante V. E. por el doctor Cordero en fecha 29 de abril del corriente año, que tengo a la vista, ya no existe caso en que pueda provocarse el ejercicio de la superintendencia de aquel alto Tribunal.

No se ha comprobado, por otra parte, contra este secretario cargo alguno que importe delito de aquellos en que proceda la acusación fiscal, y en esta situación, dicho empleado, al renunciar, ejerce un derecho que no está supeditado por condición alguna.

En tal virtud, opino que, dentro de lo administrativo, procede la aceptación de la renuncia del empleo de secretario del Juzgado Letrado de Misiones presentada por el doctor Cordero, y el archivo de estas actuaciones, sin perjuicio de las acciones que pudieran competir a las personas que se consideren dañadas con los procedimientos observados por aquél. — Junio 16 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4377, pág. 641 de junio 23 de 1908.*

=====

El art. 19 de la Ley 5315 (Mitre) no comprende a las Empresas Ferrocarrileras existentes de origen y jurisdicción provincial, ni a aquella que cualquiera que sea su origen, no se acogen a dicha ley, ni están librados sus bienes al servicio público.

**Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, pide se declare comprendido en los beneficios y obligaciones del art. 19 de la Ley 5315, la línea férrea de Médanos a Patagones, cuyos derechos ha adquirido la Empresa de Bahía Blanca y Noroeste.**

*Excmo. Señor:*

El art. 19 de la Ley 5315 (Ley Mitre) no comprende, en mi sentir, las empresas ferrocarrileras existentes, de origen y jurisdicción provincial, ni aquellas que, cualquiera que sea su origen, no estén en ejercicio ni libradas sus líneas al servicio público.

Fundan esta opinión, respecto de las primeras, o sea las que, concedidas por un Gobierno de Provincia, no salvan en su recorrido los límites del territorio respectivo, las siguientes consideraciones y circunstancias:

Afectando, en primer lugar, el texto expreso y espíritu evidente de la citada Ley 5315, las relaciones creadas entre la Nación y las empresas ferroviarias que autorice, tiene autorizadas y sometidas a su jurisdicción, por razón de su recorrido o concesión, no cabe lugar a duda de que, al establecer la reglamentación que rige para las que en adelante se otorguen (arts. 1 y siguientes), así como para las ya otorgadas (art. 19), sólo se ha referido o podido referirse a las empresas de origen y jurisdicción exclusivamente nacional, o sea aquellas a que se refiere la Ley 2873, como lo expresa el art. 1 de la Ley 5315.

Dentro de tal limitación y concepto, puede considerarse esta ley encuadrada en los términos de la facultad constitucional del inc. 16 del art. 86 de nuestra carta fundamental, en cuanto prevee las franquicias y privilegios que aseguran la prosperidad del país, fomentando y facilitando la construcción de ferrocarriles que cruce el territorio de las provincias, llevándoles el adelanto y bienestar consiguiente: sin perjuicio de que el mismo concepto, a su vez, ponga respeto al poder conservado por las provincias dentro de su propio territorio, que refiere el art. 104 de la Constitución, y que, en lo

relativo al punto en cuestión, expresamente les reconoce el art. 107 de la misma.

Siendo de notar, por último, y en apoyo de lo dicho, la incompatibilidad manifiesta que habría y podría producirse entre las condiciones impuestas por la ley, a cambio de los privilegios y excepciones que acuerda, y las obligaciones contraídas o sumisión obligada de las empresas locales, para con la provincia concedente y las autoridades respectivas (pago a la Nación del 3 % del producto líquido de la empresa, intervención directa de sus autoridades en las tarifas después de determinada oportunidad, derecho de expropiación por aquélla cuando conviene y demás correlativas a la propia acción nacional que la ley señala).

En cuanto al segundo punto, es decir, que el art. 19 de la ley que comento sólo se refiere a la empresa ya en ejercicio y servicio público, basta tener presente que, así como la ley se refiere en su primera parte a las concesiones que se otorgaren en adelante, la segunda parte, es decir, el texto y espíritu manifiesto de los arts. 19 y 20, sólo comprenden las líneas existentes, las que, como lo expresan, podrán ponerse en las condiciones de las primeras, en cuanto a franquicias, garantías y obligaciones, cuando ellas así lo resuelvan, declinando las anteriormente adquiridas, o adelantándose al goce de las de la Ley 5315, en previsión del término más o menos próximo de sus concesiones actuales.

Esta última situación requiere una existencia anterior como la requiere la efectividad de las condiciones que, en detalle, supone el amparo acordado por el citado art. 19 y las salvedades que expresa el art. 20 de la ley comentada.

Estas consideraciones me inducen a adherir las conclusiones que preceden del señor Procurador del Tesoro y a pronunciarme contrariamente a lo solicitado por la empresa del Ferrocarril del Pacífico, en el caso de que aquí se trata. — Junio 25 de 1908.

=====

No corresponde que el P. E. autorice al Jefe de la Oficina de Investigaciones de la Policía, a pedir certificados al Registro de la Propiedad por cuanto siendo dicho Registro una institución destinada a dar seguridad al derecho de propiedad y eficaz garantía a las importantes transacciones de la vida civil de que es objeto, el registro o sus inscripciones sólo será público para el que tenga interés justificado en averiguar el estado de los bienes reales inscriptos, según el art. 286 de la Ley Orgánica de los Tribunales, así como que no se expedirán certificados sino por orden judicial y en las condiciones que enumera el art. 289 de la misma.

**Jefe de Policía, pide que el Jefe de la Oficina de Investigaciones pueda pedir certificados a la Oficina de Hipotecas e Inhibiciones.**

*Excmo. Señor:*

El Registro de Propiedades, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones, que funciona en esta Capital bajo la administración del Estado, con arreglo a lo dispuesto en el inc. d) del art. 3 de la Ley 4087, es una institución destinada a dar seguridad al derecho de propiedad y eficaz garantía a las importantes transacciones de la vida civil de que es objeto.

Es en este sentido que el art. 25 de la ley orgánica de los Tribunales (1893) lo estableció, determinando en su art. 226 cuáles son los títulos y actos que deberán inscribirse en él, disponiendo en seguida, en el inc. b) del art. 230, que toda inscripción deberá contener, bajo pena de nulidad, entre otros requisitos, “el nombre y jurisdicción del Juez o Tribunal que haya pedido la ejecutoria u ordenado la inscripción”, y declarando en su art. 286 que el registro (o sus inscripciones) sólo será público para el que tenga interés justificado en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos, así como que no se expedirán certificados sino por orden judicial y en las condiciones que enumera el art. 289 de la misma.

El P. E., por su parte, al reglamentar el servicio de tan importante repartición, se ha mantenido dentro de los propósitos manifiestos y evidentes de la citada Ley 1893, que ha sometido las inscripciones del Registro en cuestión a la exclusiva jurisdicción del Juez competente, y ha consagrado su reserva para los extraños, haciéndolas solamente accesibles a los directamente interesados o a los



oficiales públicos por razones de contratos, pero siempre con la intervención del juez o tribunal respectivo.

Y así, al establecer el art. 153 del Reglamento de la oficina mencionada que no podrá expedir sino los certificados pedidos por las partes interesadas o por los Escribanos de Registro para los contratos o actos que deban otorgar, y siempre con la previa autorización del Juez y citación de partes o del Ministerio Público en su defecto, se ajusta en un todo a los propósitos enunciados y a las disposiciones de los arts. de la ley que dejo citados.

El espíritu evidente de la ley y de la reglamentación que dejo comentada, es la consagración en sus últimos extremos de la inviolabilidad de la propiedad privada establecida por el art. 17 de la Constitución; esa inviolabilidad se extiende no sólo al amparo de la mencionada propiedad, contra los actos materiales que tiendan a dañarla, sino aun a recatarla de los extraños que carezcan de interés o causa justificada y de autorización judicial, para conocer su estado o el de los derechos que la gravan.

Estos conceptos, pues, unidos a la fuerza legal que nuestro Cód. Civil atribuye a las certificaciones de la Oficina del Registro de la Propiedad, expedidas en las condiciones legales y reglamentarias, son valla insalvable para que V. E. dé curso a la proposición del señor Jefe de la Policía de la Capital, consistente en incluir al Jefe y al segundo Jefe de la Oficina de Investigaciones de su dependencia entre los funcionarios a que se refiere el ya citado art. 153 del Reglamento de la expresada oficina.

No creo que la acción preventiva o represiva que, en casos determinados, pueda y deba competir a la Policía, sea razón bastante para herir disposiciones legales y reglamentarias que tienen una base manifiestamente constitucional: en consecuencia, pienso que V. E., por esto y por lo que dejo dicho, debe desechar la proposición de que se trata, mandando estos antecedentes al archivo. — Junio 30 de 1908.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4388, pág. 96 de julio 8 de 1908.*

=====

Las comisiones de fomento en los Territorios Nacionales, no tienen ni pueden legalmente tener las facultades de las Municipalidades electivas, creadas por la ley respectiva.

**Sobre ilegalidad de un decreto dando a las Comisiones de Fomento en los Territorios las facultades de las Municipalidades.**

*Excmo. Señor:*

De acuerdo con los arts. 22 y 24 de la Ley 1532, aun con la reforma y agregado que a esta última disposición hizo la Ley 2735, las Municipalidades electivas sólo se crean en las secciones o vecindarios que pasen de mil habitantes, y sólo esos vecindarios son pasibles de los impuestos locales enumerados por aquéllas, así como que sólo el gobierno que ellas establecen allí pueden aplicarlos, exigirlos y aun penar, dentro de sus términos, las infracciones que, contra sus ordenanzas, se cometieran.

Las circunstancias expresadas no pueden ser extendidas a las acciones que no estén en las condiciones mencionadas, no puede conferirse a las Comisiones de Fomento —cuya existencia es simplemente administrativa— las atribuciones que la ley confiere a las corporaciones que determina, ni puede tampoco crearse obligaciones ni someterse a impuestos a aquellos vecindarios que la ley no ha considerado imponibles.

De aquí la improcedencia del decreto de enero 28 del año corriente, cuya copia corre acompañada teniendo presente lo dispuesto en los incs. 1 y 2 del art. 86 de la Constitución.

Tal es mi dictamen en el caso de que se trata. — Julio 23 de 1908.

=====

El decreto de noviembre 19 de 1862, rige la intervención de los Cónsules extranjeros en los juicios sucesorios ab-intestato de sus connacionales, debiendo los Cónsules en tales circunstancias, ejercer ante el Tribunal correspondiente los derechos y recursos que autoriza la Legislación procesal.

**Ministro Plenipotenciario de Rusia, sobre dificultades que encuentra el Consulado Imperial en las cuestiones de herencias de súbditos rusos.**

*Excmo. Señor:*

El derecho de intervención que el art. 13 del decreto del P. E. de noviembre 19 de 1862 acuerda a los cónsules extranjeros, en los juicios sucesorios ab-intestato de los súbditos de su nación, debe ejercitarse ante los tribunales civiles, con arreglo a las modalidades que señalan los arts. 1, 2, 3, 4, 5, y correlativos de aquel decreto, como consecuencia de la división de los poderes que nuestra Constitución establece, debiendo ejercerse a tal efecto, por los interesados, todos y cada uno de los recursos que las leyes de la Nación han establecido para que sean judicialmente eficaces los derechos, privilegios o exenciones creados por los decretos de la autoridad nacional.

De los antecedentes referidos por el señor Ministro oficiante se desprende que la resolución del señor Juez doctor Helguera, a que se hace especial referencia, no ha sido materia de tales recursos ni sometida por el Cónsul respectivo a los Tribunales Superiores, mediante el ejercicio de aquéllos y dentro de las reglas procesales existentes.

En tales circunstancias, y dentro de los conceptos enunciados, creo que V. E. puede ejercitar los buenos oficios requeridos por el señor Ministro de Rusia, en el sentido exclusivo de salvar los inconvenientes que pudieran obstaculizar la iniciada acción judicial del Cónsul de esa nación en los juicios referidos, y en el sentido de sus propósitos, sin perjuicio siempre del respeto de V. E. por las resoluciones de los Jueces y Tribunales, cuya consagración y firmeza caracteriza la independencia de sus funciones, declarada por nuestra carta fundamental. Dentro de los límites expresados, creo que V. E. debe resolver sobre la precedente comunicación del señor Ministro Plenipotenciario del Gobierno Imperial de Rusia. — Julio 23 de 1908.

=====

La Ley 2873 de Ferrocarriles legisla sobre cruzamientos y empalmes cuando una línea por lo menos existe, pero no se refiere a los posibles cruzamientos y empalmes que puedan haber en líneas aún no existentes.

No previendo la ley la circunstancias antes dicha, no corresponde requerir al P. E., ni a éste dictar un pronunciamiento al respecto.

**Compañía General de FF. CC. de la Provincia de Buenos Aires,  
sobre cruce con el F. C. Rosario a Puerto Belgrano.**

*Excmo. Señor:*

El cruzamiento de una línea férrea por otra, así como su empalme, son hechos materiales y actuales, cuyas circunstancias, condiciones y consecuencias, sólo pueden apreciarse en el momento en que tienen o deben tener lugar.

Así lo ha considerado la misma Ley de Ferrocarriles (Nº 2873) cuando, legislando en su art. 16 al respecto, se pone en el caso de una línea primitiva y existente y otra en construcción que llega a efectuar un cruce o empalme, para cuya emergencia solamente, establece la relación de derechos y obligaciones en que, como consecuencia, queda una línea respecto de la otra.

Y así, respondiendo al expresado concepto, tanto como a la naturaleza de los actos mencionados (cruce y empalme), la citada ley, al hacerlo obligatorios, se ha abstenido, con razón, de legislar sobre su existencia futura en las líneas concedidas, y que, en adelante, puedan o deban llegar a una u otra circunstancia con motivo de las trazas respectivas.

Abstenida la ley en este punto, no tiene V. E. por qué entrar a pronunciarse, ni a hacer declaraciones en abstracto sobre derechos u obligaciones de empresas privadas con motivo de cruces futuros en sus líneas a construirse, evitando intervenciones injustificadas, afirmaciones que pueden implicar responsabilidades por apreciaciones prematuras e inexactas, así como extralimitaciones de la ley, consistentes en su aplicación fuera de sus propios términos y espíritu (inc. 2 del art. 86 de la Constitución).

Ningún interés fiscal ni general, por otra parte, está comprometido en el caso que haga necesaria la declaración que se pretende, lo que haría injustificada la acción de V. E. como administrador general del país (inc. 1 del art. 86 de la Constitución): según los

antecedentes, se trata de un litigio entre una y otra de las compañías recurrentes, en que cada cual defiende sus intereses privados, con motivo del cruce futuro de sus líneas, así como de la aplicación del art. 16 de la Ley 2873, litigio y aplicación que es extraña a V. E., dado que es a la justicia federal a quien compete aplicar las leyes de la Nación (art. 100 de la Constitución e inc. 1 del art. 2 de la Ley 48).

De acuerdo con estas consideraciones y reputando que no es bastante la mayor o menor ventaja que, en sus cálculos, pueda representar a las empresas una declaración como la que se pretende, soy de opinión que V. E. debe abstenerse de hacerlas, archivando este expediente y dejando que las empresas recurrentes ocurran donde corresponde o entiendan convertirlas. — Julio 28 de 1908.

=====

No procede el requerimiento de la fuerza pública por el Juez, cuya sentencia ha sido desacatada por la autoridad que mantiene detenida una persona, cuya libertad ordena; el Juez debe dirigirse al superior de aquella autoridad, haciéndole saber la desobediencia del inferior, a los fines que corresponda.

**Juez Federal de La Rioja, pidiendo fuerza pública para hacer cumplir una sentencia.**

*Excmo. Señor:*

Considero injustificada la precedente comunicación telegráfica del señor Juez Federal de la Rioja a V. E.

Con arreglo a la ley, no procede el requerimiento de la fuerza pública por el Juez cuya sentencia ha sido desacatada por la autoridad inmediata que mantiene detenida a la persona cuya libertad ordena. La ley prescribe en análoga circunstancia, que dicho Juez ha de dirigirse al Superior de aquella autoridad, haciéndole saber su inconducta a los fines consiguientes (art. 634 Cód. de P. Penal).

De la precedente comunicación no consta el cumplimiento de diligencia impuesta por la ley, como previa, en recursos de habeas corpus, y para el cual el señor Juez oficiante requiere la fuerza pública nacional, a mérito del art. 13 de la Ley 48.

Tampoco resulta de aquélla que las autoridades desobedientes

hayan sido sometidas a sus superiores jerárquicos a los efectos legales indicados (art. 634 C. de P. P.), ni que los desacatantes del auto del señor Juez sean las autoridades superiores de la Provincia de La Rioja, en cuyo caso se trataría de un conflicto de mayor, cuya solución exigiría otro estudio, otra autoridad y muy diversa tramitación.

Estas consideraciones y las concordantes que expuse en un caso análogo en agosto 23 de 1907 y que V. E. aceptó por decreto del mismo mes y año, creo que V. E. debe significarlas al señor Juez oficiante, negando su pedido, y haciendo uso para ello del telégrafo, por estar comprometida en el asunto la libertad de un ciudadano. — Agosto 3 de 1908.

*Tomado como resolución: Boletín Oficial N° 4411 de agosto 5 de 1908.*

=====

No procede la reclamación por reintegro de superficie, cuando se ha estipulado en la escritura respectiva, que aún cuando los límites asignados no encerraran la superficie tratada, el interesado no podría reclamar en ningún tiempo su reintegración.

#### **Don Daniel Cash, sobre ubicación de tierras.**

*Excmo. Señor:*

El terreno cedido por el P. E. a don Miguel Raggio Carneiro, en amortización de certificados de tierras por la expedición a Río Negro, de las que era tenedor, tuvo la ubicación que solicitó el cesionario y, según justifica el testimonio de la escritura pública autorizada por ante la Escribanía de Gobierno que corre a fs. 39 del expediente acompañado letra R N° 2967, en fecha 22 de septiembre de 1896, tal cesión se verificó bajo la expresa condición de que, “aun cuando los límites asignados no encerraban la superficie de veinte mil hectáreas, el interesado no podría reclamar, en ningún tiempo, su reintegración”.

De manera, pues, que el cesionario Raggio Carneiro se impuso la obligación de no hacer la reclamación que hoy pretenden sus sucesores en el dominio de dichas tierras.

Es un principio fundamental de derecho, que nadie puede transmitir a otro mejor ni mayor derecho que el que se tiene sobre una cosa; y así, el cesionario Raggio Carneiro no ha podido transferir al causante de los recurrentes, don Daniel Cash, un derecho del cual aquél carecía en virtud de la citada cláusula del referido contrato de setiembre 22 de 1896, el que, tiene fuerza de ley para las partes con arreglo al principio que establecen el art. 1197 y correlativos del Cód. Civil.

Por otra parte, el título de propiedad que el P. E. extendió en favor de Raggio Carneiro, como representante de los agraciados por los premios de tierras, es el que a tales premios al Ejército acuerda la Nación por servicios extraordinarios, según el art. 8 de la Ley 1628.

De manera que, esa transmisión equivale a una donación gratuita, definida por el art. 1789 del Cód. Civil.

Ahora bien, hecha la escrituración en setiembre de 1896 y estando el cesionario en plena posesión de la cosa donada dentro de sus límites y condiciones, la donación tuvo su efecto legal, con arreglo al art. 1792 del mismo Código, no siendo dable al P. E., modificar el carácter de aquel acto jurídico en el decreto posterior de marzo 23 de 1897, en el cual aparece fijado un mínimun al área cedida (art. 2145 del Cód. Civil).

En virtud de lo expuesto, creo que V. E. no debe acceder a lo solicitado, mandando archivar este expediente como corresponda. — Agosto 6 de 1908.

=====

Mientras los extranjeros no hayan agotado todos los recursos procesales en defensa de sus derechos ante la justicia del país a la que ellos mismos han acudido, no pueden pretender la reclamación diplomática, por retardo o denegación de justicia.

**Don Juan Racalt: reclamación diplomática por retardada justicia.**

*Excmo. Señor:*

No encuentro base a la reclamación que motiva la comunicación que antecede del Sr. Ministro Plenipotenciario de Francia, ni menos encuentro procedente la intervención que se insinúa del Sr. Ministro de Justicia en un asunto que se halla en manos de los Tribunales.

Según la propia exposición del recurrente, toda vez que ha requerido justicia en las diversas incidencias de su pleito, justicia le ha sido hecha, dictándose las diversas sentencias, que él dice sin justificar, demoradas por un Juez de 1ª instancia, más allá de los plazos legales sin determinar cuales hayan sido las gestiones que haya hecho para que los Tribunales Superiores, a quienes corresponde conocer en tal caso, se pronuncien sobre la conducta del Sr. Juez que menciona, en el retardo o la denegación de justicia, que le atribuye (inc. 4 del art. 80 de la Ley 1893 sobre organización de los Tribunales de la Capital, arts. 275 y siguientes del C. de P. Civil en su aplicación correspondiente en la Capital).

Es principio y práctica bien conocida, que mientras no se hayan agotado todos los recursos que la ley da a los extranjeros para defender sus derechos privados ante la justicia del país a que ellos mismos han acudido, las reclamaciones diplomáticas en pro de ellos no pueden ni deben prosperar, por carecer de razón y de motivo.

En cuanto a la comunicación al Sr. Ministro de Justicia, a los efectos que se indica en la nota que antecede, reputo que ella carecerá de toda razón de ser, no sólo por las razones apuntadas, sino porque, dada la independencia del Sr. Juez como autoridad judicial, y la falta de personería del P. E. en el proceso o litigio de que se trata, su intervención y aún los datos que requiriese, podrían serle negados, con arreglo a la ley misma, los que, no lo serían a los Tribunales Superiores del Juez, si el interesado gestionara una y otra cosa, en la manera y tiempo en que las disposiciones legales citadas lo establecen.

Soy de opinión, en consecuencia, que V. E. no debe dar curso a esta reclamación, significando, si V. E. lo cree conveniente, al Sr. Ministro de Francia, las razones expuestas y que fundan tal resolución. — Agosto 8 de 1908.

=====



Antes de aprobarse un tratado de arbitraje celebrado con una Nación amiga, conviene establecer previamente el alcance y significado de determinadas cláusulas, que afectan a nuestra soberanía, la defensa del territorio, y el amplio funcionamiento de nuestras instituciones.

### **Tratado de Arbitraje con Italia.**

*Señor Ministro:*

Expido el dictamen que, por la nota de V. E. de 29 de julio ppdo. se ha servido requerirme, a propósito del Tratado de Arbitraje General celebrado últimamente en La Haya, con el Gobierno de Italia y cuyo texto y antecedentes he tenido a la vista.

Al formularlo, prescindo de las razones políticas económicas o de conveniencia internacional que lo funden. Reputo que, a V. E. y al H. Congreso, corresponde apreciarlas, por encontrarse más próximos y más en contacto con las circunstancias de esa índole que lo hayan motivado, que lo puedo estar yo, desde el puesto judicial que desempeño.

En el supuesto pues, de que aún persistan esas razones, y examinando el Tratado bajo el punto de vista constitucional y legal, creo conveniente subordinar su conclusión y su presentación al Congreso, a los efectos del inc. 67 de la Constitución, a la diligencia previa de poner en conocimiento del Gobierno italiano, el criterio de interpretación que, al argentino, imponen los principios de derecho público que lo rijan, en cuanto a sus estipulaciones fundamentales y que envuelve su art. 1; criterio que, seguramente, fué el único que tuvieron, el P. E. al autorizar su celebración y los Sres. comisionados en La Haya al practicarla (art. 27 de la Constitución).

A tal efecto, debe hacerse saber a aquel Gobierno, que ese criterio y esos principios imponen al nuestro, el concepto de que, dentro de las materias exceptuadas del arbitraje que refiere la primera parte del artículo citado, se hallan comprendidas todas aquellas cuestiones que, en cualquier forma, afecten nuestra soberanía, la defensa de nuestro territorio y el amplio funcionamiento de nuestras instituciones; que tal ha sido siempre el concepto argentino en tratados y cláusulas análogas, y que tal es el alcance y espíritu de la expresada excepción en presencia de nuestra existencia como Nación soberana, de la defensa común que nos impone nuestra Carta

Fundamental y de la realidad y eficacia de los Poderes e Instituciones que ella crea y organiza.

Bajo este último punto de vista, es de observarse y de hacerse saber igualmente al Gobierno italiano, que aplicando siempre el expresado criterio, la segunda parte del citado art. 1 de la Convención —que se refiere a las cuestiones que la ley territorial somete a las autoridades judiciales y cuya solución por el arbitraje se aplaza hasta el pronunciamiento definitivo de ellas—, no puede alcanzar a los Tribunales Superiores de la Nación y menos a la Suprema Corte de Justicia, en los asuntos que son materia de sus sentencias definitivas. Es una garantía eficaz y preciosa para las personas y un principio ineludible del derecho público consagrado por nuestra Constitución y por las leyes dictadas en su ejercicio, al que están subordinados todos los tratados con naciones extranjeras (art. 27). La firmeza y respeto de la cosa juzgada, en los derechos y obligaciones que crean o extinguen las sentencias de los Altos Tribunales, que la Constitución y las leyes, han organizado para la última instancia, que irrevocablemente la declara y establece (arts. 94, 100 y 101 de la Constitución).

Las comunicaciones indicadas darán por resultado inmediato, determinar con precisión el espíritu y el alcance que podemos y debemos dar al Tratado, en los puntos referidos y dentro de los preceptos pertinentes de nuestra Carta Fundamental; no dudando, por lo demás, que el Gobierno italiano ha de apreciar cumplidamente las observaciones formuladas, dado que lo afectan, dentro de la reciprocidad que abona el Tratado, como Gobierno celoso de la soberanía que ejerce, y cuidadoso en la observancia de los principios de su derecho público, coincidentes en muchos puntos con los que nos rigen y a que antes me he referido.

Practicada la diligencia que he insinuado y en conocimiento de la respuesta de aquel Gobierno, a V. E. corresponderá observar el procedimiento más adecuado para los fines propuestos; los que una vez logrados, será la oportunidad de presentar al Congreso el Tratado en cuestión, libre de toda posibilidad de duda en la interpretación futura y permanente de sus estipulaciones fundamentales. Dios guarde a V. E. — Agosto 14 de 1908.

=====

Estando acéfala la Municipalidad de un Territorio Nacional, y habiéndose efectuado nuevas elecciones de municipales, para obtener la aprobación de ésta debe ordenarse que el Gobernador cite a los electos, les invite a reunirse y pronunciarse sobre sus propios diplomas.

**Gobernador de Formosa, eleva un expediente formulado con motivo de las elecciones de municipales y juez de paz.**

*Excmo. Señor:*

La Gobernación de Formosa da cuenta de un incidente electoral surgido allí, con motivo de la renovación de la Municipalidad.

Practicada la elección dentro de las prescripciones legales en cuanto a la citación y procedimientos comunes, el acto fué seguido de una protesta formulada por algunos vecinos, imputando procedimientos incorrectos y circunstancias ilegales en los que la practicaron; imputación que habiendo sido posterior al acto y careciendo de justificativo que abone su seriedad, ha sido considerada infundada, con razón, por el Sr. Gobernador del Territorio, quien hace constar que todo se pasó tranquila y legalmente.

Pero llevada la elección ante la Municipalidad para su examen y aprobación, por razones que no se han establecido de una manera terminante, ésta no sesionó en tiempo oportuno, quedando sin *quorum* por la expiración del mandato de los miembros que justamente se reemplazaban en la elección practicada.

Ante tal emergencia, desoyendo el Gobernador la pretensión de algunos vecinos para una integración especial de la Corporación a los fines de juzgar la elección, eleva el caso en consulta a V. E. proveyendo a las medidas de conservación necesarias, y de acuerdo con el art. 16 del Decreto de enero 29 de 1902.

La dificultad pues, a resolver en el caso, es la que suscita la acefalía de la anterior Municipalidad, para que haya un juez legal para la elección practicada.

Para ésto —y como ya he tenido ocasión de aconsejarlo y V. E. resolverlo (Dictamen de junio de 1905 y Decreto de junio 12 del mismo año, relativo a las elecciones municipales de Santa Rosa de Toay)—, creo que, ateniéndose a la práctica electoral y al principio que rije la existencia de todo cuerpo electivo, y que es de aplicación al caso sub-júdice —dado que el inc. 3 del art. 24 de la Ley 1532

no distingue entre Municipalidad saliente o entrante—, debe V. E. ordenar que el Sr. Gobernador comunique a los electos, los invite a reunirse y tomando en cuenta la elección y sus protestas se pronuncie sobre ella y apruebe o desapruebe sus propios diplomas.

En cuanto al Sr. Juez de Paz y suplentes electos, creo que V. E. debe limitarse a ordenar sean puestos en el ejercicio de sus funciones respectivas.

Procediendo en tal manera habrá resuelto V. E. el caso de acuerdo con principios aplicables, sin contradicción con las disposiciones legales, y a mérito de jurisprudencia ya establecida en casos análogos. — Agosto 18 de 1908.

=====

Tratándose de una locación común, la Nación como arrendataria está sometida a la ley civil.

**Sobre desalojo ordenado por la Municipalidad de la propiedad ocupada por los Juzgados del Crimen por encontrarse en mal estado.**

*Excmo. Señor:*

Como no se registra en los antecedentes que se me remiten, el contrato de arrendamiento a que se refiere el locador en su escrito de fs. 12, ni menos la cláusula 5ª a que alude, y como el Decreto de abril 30 de corriente año, constante a fs. 13, no denuncia cláusulas especiales para la renovación que contiene; debo creer que se trata de una locación común a la que son aplicables las reglas generales establecidas por el Cód. Civil, y que las partes no han entendido derogar ni modificar por estipulaciones entre ellas.

Juzgando pues con arreglo a este criterio, el contrato existente desde el aludido decreto, su rescisión tiene lugar en la manera, forma y condiciones, que ese Código establece para casos como el que se produce, en que un inmediato desalojo motiva aquella rescisión.

En efecto, según la comunicación municipal de fs. 14 que denuncia mal estado en el edificio y peligro para sus ocupantes, que son las oficinas de la Justicia del Crimen de la Capital y el público que allí concurre, el que proviene de obras que se hacen en el piso bajo de la casa, el desalojo es inminente y obligado, siendo su consecuencia inmediata el derecho a la rescisión que se me consulta.

Ahora bien, suponiendo, como debo suponerlo —aun cuando ello no conste de los antecedentes—, que las obras mencionadas se hacen por orden o por lo menos con conocimiento del locador, es fuera de duda que, produciendo el peligro y obligado al desalojo a que la comunicación municipal se refiere, turba la pacífica tenencia, ocupación y goce estipulado de la finca a favor del locatario, es decir, del Gobierno, y basan en este concepto, su pleno derecho para imponer esa rescisión, que existiría aun cuando el hecho se hubiera producido por causas ajenas a su voluntad.

Son de aplicación los arts. 1516, 1522, 1524 y correlativos del Cód. Civil, en cualquiera de los casos supuestos, correspondiendo examinar, en el momento de iniciar la rescisión de que se trata, los perjuicios que sufre el Gobierno por el desalojo que la autoridad municipal y las circunstancias le imponen, dando por sentado, como parece resultar, que el deterioro y peligro de que se trata, yenga del mal estado del edificio o de las obras del piso bajo ordenadas o consentidas por el locador.

En tales condiciones, creo que la rescisión y aun la indemnización a que haya lugar, puede prosperar legalmente, correspondiendo que V. E. pase los antecedentes al funcionario a quien compete tal acción (Ley 3367) para que ocurra en su demanda, como y ante quien corresponda. — Agosto 19 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4427, de agosto 25 de 1908.*

=====

Corresponde que la autoridad administrativa realice la investigación para establecer la verdad de las denuncias contra un juez de Territorio, y luego eleve los antecedentes que se formen a la Corte Suprema, a los efectos de la superintendencia que le corresponde por la Ley 4055.

### **Denuncias contra el Juez Letrado de Viedma.**

*Excmo. Señor:*

Aun cuando los procedimientos administrativos no sean de la competencia del que suscribe, creo que lo que corresponde en el caso y como en el telegrama antecedente se indica, es pasar la denuncia

formulada contra el Sr. Juez de Territorio, Dr. Duarte, a la Oficina de Inspección de Justicia de ese Departamento, la que, por medio del personal y elementos con que cuenta, podrá como en casos análogos la ha hecho, establecer la verdad, importancia y extensión de la denuncia que se formula.

Hecha esa verificación, y si V. E. encuentra mérito, será el caso de remitir los antecedentes recogidos a la Suprema Corte de Justicia para que ella ejercite, si lo cree procedente, la superintendencia que le confieren los arts. 10 y 11 de la Ley 4055.

Creo, por otra parte, que esta resolución, si V. E. la adopta, debe quedar como precedente para casos análogos. — Agosto 22 de 1908.

=====

No tiene facultad el P. E., ni tampoco el Poder Legislativo, para interpretar el texto de la ley en cuanto a su aplicación; ello es facultad exclusiva del Poder Judicial, a quien por nuestra organización institucional le está confiada dicha aplicación.

### **Consejo Nacional de Educación, sobre interpretación de la ley de impuestos a las herencias.**

*Excmo. Señor:*

Creo que no es a V. E. a quien corresponda promover, ni al Congreso a quien corresponda la interpretación del texto de la ley en cuanto a la aplicación de sus disposiciones, sino a las autoridades del propio Poder Judicial que por nuestra organización institucional le está confiada esa aplicación.

Si el Consejo de Educación se siente lesionado por la aplicación que, en el caso que motiva la precedente nota, ha hecho la Cámara de Apelaciones de la Capital de la Ley 4855, él tiene su eficacia judicial y su personería en juicio, que, en este caso o en otro ocurrente, puede analizar la jurisprudencia sentada, compartirla y aún llevarla por los recursos ordinarios o extraordinarios a pronunciamientos de aquel Tribunal y aún de la Suprema Corte, si a ello hubiere lugar.

Fuera de que la gestión insinuada ante el Congreso no daría resultado, dado que éste no interpreta el texto de la ley, ni lo aclara

sino cuando se trata de lo previsto —que no es el caso—, la expresada gestión sería de tardío resultado, aún obteniendo el éxito propuesto.

V. E. pues debería devolver la precedente nota al Sr. Director General de Escuelas, haciéndole presente estas consideraciones, que además de su fuerza legal, reputo que V. E. como él, han de encontrar oportunas aún bajo el punto de vista de los bien entendidos intereses del expresado Consejo de Educación. — Agosto 26 de 1908.

=====

Las carreras de caballos en los Territorios Nacionales, no deben ser autorizadas por el Gobierno de la Nación, no obstante el fin benéfico que con ellas se proponen.

**Gobernador de Formosa, consulta sobre un pedido de la Sociedad de Beneficencia de esa localidad, para organizar carreras de caballos.**

*Excmo. Señor:*

Consecuente con lo que he tenido ocasión de sostener antes de ahora y recordando lo que V. E. resolvió en pedido análogo al presente, según dictamen de setiembre 17 de 1905 y resolución de 20 del mismo mes y año a propósito de una ordenanza dictada respecto de carreras de caballos por la Municipalidad de “General Roca”; reputo que V. E. no debe autorizar la organización de ese juego por la Sociedad de Beneficencia de Formosa.

Fuera de las consideraciones legales que formulé en aquella ocasión y que V. E. hizo suyas (Boletín Oficial N° 3372, pág. 1441 de 1905), fuera de que es obvio que en las apartadas regiones de que se trata, es imposible la mejora de la raza caballar por las carreras, lo que hace inaplicable la única razón legal de su existencia según el art. 7 de la Ley 4097, es de tenerse en cuenta el grave peligro que hay en autorizar oficialmente un juego que, sin justificación alguna, lejos de sacar al pueblo de las tabernas, le acerca a ellas, bastando recordar que, en nuestras campañas es alrededor de las pulperías donde tienen lugar las carreras de caballos.

Por más laudable pues, que sea el propósito de allegar recursos para la caridad pública que, en su gestión, se propone la Sociedad

de Beneficencia de Formosa, reputo que él no compensa el daño que implica el fomento por su parte, de un juego que, sin un control eficiente, puede llegar a producir entre los pobladores del Territorio, el desarrollo de aficiones inconvenientes, así como la relajación del hábito de sus trabajos sencillos, lo que, indudablemente, es un daño mayor y más inmediato que el que señala el Sr. Gobernador oficiante.

Creo pues, que V. E. debe resolver en sentido negativo, como lo dejo indicado. — Agosto 28 de 1908.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4438, de septiembre 7 de 1908.*

=====

Es improcedente la intervención de los inspectores municipales de la Capital en las guías y otros documentos de los ferrocarriles.

Las relaciones oficiales y en representación de la Municipalidad que el Intendente tenga con el Gobierno Nacional, deben serlo por intermedio del Ministerio del Interior.

**Intendencia Municipal, sobre derecho para inspeccionar en las estaciones de ferrocarriles las guías de todas las materias alimenticias que entran al municipio.**

*Excmo. Señor:*

La improcedencia de forma y fondo de este asunto, me induce a pronunciarme en el sentido de que él debe ser devuelto sin resolución, a la Intendencia Municipal, para que proceda, dentro de la ley respectiva, y como mejor entienda convenir a los intereses a su guarda.

El inc. 9 del art. 59 de la Ley Municipal vigente prescribe que, las relaciones oficiales y en representación de la Municipalidad que el Intendente tenga con el Gobierno, deben ser por intermedio del Ministerio del Interior.

La inobservancia, en el caso, de esta prescripción legal, no puede ser silenciada sin menoscabo del expresado Ministerio, a quien por razón de la cita hecha y del inc. 1 del art. 8 de la Ley 3727 corresponde entender privativamente en los asuntos municipales de la Capital de la República.



Por otra parte, y como en este asunto, se trata de la higiene pública de la Comuna, la citada Ley Municipal marca con claridad el camino a seguir por el Sr. Intendente, que seguramente no es el que se ha seguido.

El inc. 12 del citado art. 59 faculta a ese funcionario para presentar proyectos de ordenanzas ante el Concejo Deliberante en la forma que indica y a los fines del Gobierno Municipal, ordenanzas cuya sanción compete a ese Concejo en general, y en particular en asuntos como el presente, según lo estatuye el inc. 6 de su art. 48 que le comete vigilar el expendio de las sustancias alimenticias. El Intendente después de proyectar, sólo está llamado a cumplir la ordenanza sancionada o a gestionar su cumplimiento cuando a ello hubiere lugar.

El olvido de este trámite hace improcedente la presente gestión y podría hacer inocua la resolución que V. E. le diera, con la sola circunstancia de que el Concejo desconociera una gestión de <sup>10</sup> que supone el ejercicio de una de sus facultades legales.

Fuera de estas observaciones que, por ser de forma, no dejan de afectar el reclamo en los conceptos señalados, y es de tenerse presente que, aún introducida la gestión por donde corresponde y aún pronunciado al respecto el Consejo Deliberante, siempre sería un exceso en las funciones municipales, la intervención en las guías y estaciones ferrocarrileras en la forma y extensión que se pretende.

La vigilancia en el expendio de sustancias alimenticias y la adopción de medidas tendientes a asegurar la salud pública a que se refieren los incs. 6 y 9 del art. 48 de la Ley Municipal citada, no puede ir hasta autorizar la intervención de sus inspectores en los papeles y documentos propios a los contratos de porte que celebran los ferrocarriles, ni pueden autorizarse la inspección detallada de las cosas porteadas en el momento de su arribo y dentro de la estación misma, lo que además de prestarse a muy serios abusos, sería un obstáculo para el movimiento naturalmente rápido que allí tiene lugar.

La Municipalidad tiene elementos, recursos y oportunidades mejores para la vigilancia que se propone y que expresa en el caso, sin necesidad de intervenir donde no puede, ni ser un obstáculo donde no debe.

Por último, V. E. carece de facultad legal para imponer la intervención en los ferrocarriles de la Inspección Municipal, en la

forma que se indica ; ninguna disposición de la Ley 2873 la autoriza, ni la impone, y ello basta para que V. E. se abstenga de hacerlo.

Estas son las razones de forma y de fondo que, unidas a las del precedente informe del Sr. Procurador del Tesoro me inclinan a opinar en el sentido que lo he hecho al principio de este dictamen.  
— Agosto 28 de 1908.

=====

Una ordenanza de carácter científico dictada por una Facultad, no necesita la aprobación del P. E.; pero sí la requiere, cuando implica gastos y necesidad de arbitrar recursos que el P. E. debe requerir del Congreso.

**Universidad Nacional, sobre aprobación de Ordenanza de trabajos de recopilación y comentario de nuestra vida nacional en sus diversos órdenes.**

*Excmo. Señor:*

Del punto de vista legal, la Ordenanza sancionada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en agosto 21 del corriente año y que el Sr. Rector de la Universidad prestigia ante V. E., en cuanto al programa de trabajos prácticos que establece, importa, necesariamente, la creación de un régimen científico que aquélla tiene atribución de dictar con arreglo a la Ley 1597 y a sus Estatutos vigentes.

En tal sentido, dicha Ordenanza tiene, como lo expresa el Sr. Decano de aquella Facultad, en la nota que le sirve de comentario, el carácter de una sanción definitiva.

Pero, del punto de vista de los recursos que se gestionan para sufragar los gastos que ocasionará la ejecución de dicho plan de investigación histórica de los hechos sociales argentinos, en sus múltiples facetas de la vida nacional, así como de los gastos que reclamaría la iniciativa patriótica que la misma Ordenanza proyecta, en el sentido de hacer coincidir la inauguración de tal programa, con la celebración de nuestro próximo centenario; corresponde a V. E. apreciar, la conveniencia u oportunidad que haya en las erogaciones que aquellos gastos suponen, debiendo proceder en consonancia a

requerir o no la autorización consiguiente del H. Congreso, para la inversión de los dineros necesarios a la ejecución de las expresadas iniciativas. — Setiembre 19 de 1908.

=====

Celebrado un tratado de extradición con los Estados Unidos, con conocimiento de sus prácticas internas en materia policial, no hay razón para reclamar ante ese Gobierno, por el hecho de que el nuestro deba someterse a dichas prácticas y costear la acción policial para detener al requerido en cada caso.

**Sobre dificultades con que se tropieza en los Estados Unidos de Norte América para obtener, de acuerdo con el tratado de extradición vigente, la captura y búsqueda de los delincuentes.**

*Excmo. Señor:*

No encuentro base, ni para una reclamación de carácter diplomático —aún confidencial—, ni para la iniciación de las negociaciones consiguientes para un protocolo adicional, en los inconvenientes con que se ha tropezado al requerir del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, la extradición del prófugo Ruffin Barrow, Jacks o Rodolfo Buxton, ya que la extradición anterior de Orestes Rosen, no estaba dentro del Tratado, por razón de su delito.

Cuando se celebró el Tratado de extradición que hoy nos liga a los Estados Unidos, es de presumirse que fueron y debieron ser conocidos sus procedimientos internos para el arresto provisional y detención de los requeridos por extradición, así como las facultades que, en la materia, se reconocían y se reconocen hoy, a los agentes diplomáticos extranjeros, así como que, fué consentida y aceptada por nuestra parte, la situación que nos crean esos procedimientos, cuando se estipuló en la cláusula 4 párrafo 3 de ese Tratado que, a los efectos de la extradición las partes procederían de acuerdo con él y con arreglo a las leyes que reglamentan el procedimiento judicial en cada país, y que estén a la sazón en vigencia en el Estado ante el cual sea demandada la entrega.

No hay razón para extrañar que el Gobierno de aquella República someta el pedido de extradición a que me refiero, a sus procedimientos internos, ni son de excusar los inconvenientes y gastos que

hay que hacer en “detectives”, dado que respecto a éstos, es bien explícita la cláusula 11 del Tratado que hace gravitar sobre nosotros (país adquirente en el caso) los gastos necesarios con la sola excepción que consigna y de que ahora no se trata.

Es de notar a este respecto, que las demás naciones han aceptado una situación idéntica a la nuestra, tratándose de extradiciones en los Estados Unidos, siendo de aceptar como se nos tiene ofrecido que, cuando sea posible, la acción pública apoyará nuestras requisiciones con los agentes y funcionarios a sus órdenes.

En cuanto a los inconvenientes que puedan presentarse en nuestra misma Legación en aquella República, por falta de recursos para iniciar o proseguir como corresponde la tramitación de un pedido de extradición, creo que es el caso de reglamentar la manera y oportunidad de proveerlos, haciendo gravitar el gasto sobre el erario público cuando se trate de un prófugo acusado de un delito perseguido exclusivamente por la acción pública, y sobre el acusador o querellante, cuando se trata de la acción privada de un delito susceptible de ella.

Lo expuesto me induce a creer, dada las explicaciones presentadas por el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos a nuestro Ministro allí acreditado, y teniendo presente la igualdad de condiciones con las otras naciones ligadas por Tratados de extradición con esa República (España, República Oriental del Uruguay), que debe V. E. mandar archivar estas actuaciones, sin perjuicio de iniciar, si lo encuentra conveniente, la reglamentación indicada sobre provisión de fondos en los casos ocurrentes de pedido de extradición al Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.

— Setiembre 22 de 1908.

=====

El alzamiento de la autoridad provincial contra la sentencia del Juez Federal, debe ser perfectamente caracterizado, para que proceda el auxilio de la fuerza pública de parte del Gobierno Nacional. Si la cuestión puede reducirse a una contienda de competencia, debe incitarse a que ella se produzca.

### **Conflicto entre el Juez Federal y el Gobernador de La Rioja, sobre orden de prisión del Jefe de Policía.**

*Excmo. Señor:*

Es indudable que se trata en el caso de una sentencia del Juez Federal de Sección de La Rioja, en la cual, usando de la autoridad que inviste, ha condenado al Jefe de la Policía local, a la pena de ocho días de arresto, aplicando los arts. 13 y 19 de la Ley Nacional 48.

Tampoco puede dudarse de que esa sentencia ha sido observada y resistida, sin desconocerse, por el Sr. Gobernador de aquella Provincia, basándose en consideraciones de índole local, y disposiciones legales o administrativas del mismo carácter.

Tales hechos determinan claramente las siguientes conclusiones:

1º) Que no puede clasificarse el acto del Gobernador de La Rioja como un alzamiento contra la autoridad nacional que inviste el Sr. Juez Federal respectivo, a pesar de sus observaciones.

Ello basta, para afirmar que el caso no asume los caracteres de un conflicto que haga procedente el uso extremo de las fuerzas nacionales, como se requiere. No hay una necesidad imperiosa que justifique, en el caso, el ejercicio por el P. E. de la facultad que le confiere el inc. 17 del art. 86 de la Constitución, con respecto a la distribución de la fuerza armada de la Nación.

2º) Que al invocar el Sr. Gobernador de La Rioja, los derechos y garantías que estatuyen las leyes locales en favor del Jefe de Policía de la Provincia y cuya aplicación correspondería, llegado el caso, a la autoridad judicial de la misma, plantea, aunque en forma improcedente, una verdadera cuestión de competencia de jurisdicción, en lugar de un conflicto entre el Poder que ejerce y el Poder de la Nación.

Ahora bien, en presencia de estas circunstancias, brevemente analizadas y teniendo presente, que, por parte del Sr. Juez de Sección de La Rioja se trata de aplicar las sanciones del art. 19 de la Ley 48 en su carácter de ley especial que rige la jurisdicción de los

Tribunales Nacionales, ley que el art. 31 de la Carta Fundamental del Estado declara suprema en toda la Nación y por cuyo respeto de parte de la autoridad gubernativa de La Rioja, su agente natural, debe velar el P. E. Nacional en armonía con el art. 110 de la misma Constitución, y por parte del Sr. Gobernador de aquella Provincia, se invocan a la vez, instituciones locales que el P. E. Nacional debe a su vez considerar, porque son propias y conducentes de la autonomía constitucional de que la mencionada Provincia goza; opino que lo procedente, en presencia de las modalidades según las cuales se ha planteado este aparente conflicto, es que V. E. invite por donde corresponda, al Sr. Gobernador de La Rioja para que, a la mayor brevedad, promueva la contienda de competencia de jurisdicción en la forma y, por la vía correspondiente, y si entendiera convenirle; o en su defecto, se sirva disponer sea cumplimentada la expresada resolución del Sr. Juez de Sección, sin perjuicio de los recursos legales del caso por la parte agraviada, haciendo conocer oportunamente esta resolución al Sr. Juez Federal. — Setiembre 22 de 1908.

=====

Son extrañas al P. E. las cuestiones suscitadas entre una provincia y una empresa ferrocarrilera, con motivo del cobro de impuestos de carácter provincial. Al Poder Judicial compete el conocimiento de la cuestión.

**Ferrocarril Central Córdoba, sobre que la Provincia de Córdoba la ejecuta judicialmente por cobro de impuestos provinciales.**

*Excmo. Señor:*

Reputo a V. E. perfectamente extraño a las cuestiones suscitadas entre la Empresa del Ferrocarril Central Córdoba y el Gobierno de esa Provincia sobre cobro ejecutivo de pesos provenientes del pago de contribuciones provinciales.

La Empresa mencionada tiene personería propia, como la tiene la Provincia, ambas tienen los jueces competentes, para conocer del litigio, dentro del orden judicial, siendo V. E. extraño a él, respecto del uno y del otro.

La situación anterior de la Empresa, la actual resultante de su

acogimiento a la Ley 5315, como las otras circunstancias que hace presente, caben dentro del mencionado litigio y pueden ser perfectamente materia de una resolución judicial.

Estas consideraciones me inclinan a pronunciarme en el sentido de que V. E. debe eximirse de conocer ni de pronunciarse en este asunto, evitando hacer gravitar su opinión o influencia en sentido favorable a una o a otra de las partes. — Setiembre 23 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4490, pág. 112, de noviembre 7 de 1908.*

=====

La ley electoral creó el padrón electoral permanente, y en ninguna de sus disposiciones estatuyó su renovación o sustitución periódica no obstante que en determinadas épocas y por diversas acciones y personas ordena su ampliación o su depuración.

Las comisiones censales, creadas por la referida ley, tuvieron por misión la confección inicial del padrón y su ampliación cada cinco años, librando a la acción exclusiva de los electores, las correcciones del Registro, consistentes en la eliminación o inclusión de nombres, indebidamente inscriptos o excluidos, limitando en este punto la acción de las comisiones censales, las que resolverán con apelación por ante el juez federal respectivo. Sólo una nueva ley del Congreso puede quitar el carácter permanente del padrón.

### **Sobre ampliación quinquenal del Registro o Padrón electoral permanente.**

*Excmo. Señor:*

Cuando el art. 21 de la Ley Electoral vigente dice, de una manera textual y precisa que: El Registro o Padrón Cívico (que crea) es “PERMANENTE”, debe necesariamente entenderse que con ese vocablo, ha querido significar lo que, dentro de la lengua castellana, ese vocablo envuelve y significa.

Lo PERMANENTE es lo que, en contraposición a lo precario, a lo periódico y a lo sujeto a término, es estable, perdurable y constante en la forma y en el tiempo.

Y así, cuando el mismo artículo continúa diciendo que, ese Padrón o Registro será AMPLIADO cada cinco años y que todo elector

tiene acción para pedir en cualquier tiempo su *inclusión* o la *eliminación* de otro indebidamente inscripto, y la aplicación de las penas correspondientes, da necesariamente por existente aquel Registro, donde deben o pueden hacerse tales operaciones. No es concebible la ampliación o la enmienda de un Registro que no persiste para dar lugar a tales actos y a sus efectos.

Lo permanente pues, del Padrón electoral de la ley vigente, en el sentido gramatical y común de ese vocablo, surge de las propias palabras de la disposición citada, y se corrobora ampliamente por el texto expreso de los arts. 42, 44, 48 y correlativos de la misma ley, cuyo capítulo VI se ocupa, exclusivamente, de las CONTINUACIONES DEL REGISTRO, cuando establece que, las Oficinas del Registro Civil serán las Oficinas PERMANENTES del Registro Cívico Nacional (42), cuando libra al cuidado de ellas, su conservación a los efectos de esa continuación (44), así como cuando se refiere a la renovación o apertura quinquenal, en cuyo caso, dando necesariamente por existente a aquél, establece que se inscribirán todos los que en ese tiempo hubiesen alcanzado o recobrado la capacidad legal de electores, o se hallasen, por cualquiera causa, fuera del Registro o Padrón Cívico (48).

La fuente primordial para la interpretación de la ley, es decir, sus propias palabras, según la regla elemental de derecho al respecto (art. 15 del Cód. Civil) no deja, ni puede dejar lugar a duda, sobre la estabilidad y permanencia en la forma y en el tiempo del Registro que me ocupo.

Pero, si el texto de la ley es evidente, en el sentido que lo dejo establecido, el espíritu legal, que es otra de las fuentes de interpretación, y muy principal para V. E. a los fines de su ejecución (inc. 2 del art. 86 de la Constitución), no lo es menos, como fácilmente puede verse en los antecedentes y comentarios que se desprenden de su origen y sus propósitos.

La misma disposición del art. 21 de la Ley Electoral vigente, estaba contenida en el art. 35 del proyecto de ley que, remitido al Congreso en agosto de 1902, sirvió de base al texto de la expresada ley, y al mensaje respectivo que le acompañara, funda extensamente la adopción del padrón permanente, llegando a presentarle como una de las más eficaces modalidades de la reforma electoral, en el sentido de la amplitud, lealtad, seguridad y exactitud del Registro, como condiciones previas y fundamentales para mayor corrección



en los actos electorales. Siendo de notar, por último, las palabras del Sr. Ministro del Interior en la época, Dr. don Joaquín V. González, quién fundándolo decía a su respecto, que la creación del Registro Electoral Permanente, aseguraba esta gran garantía de la libreta cívica, “que debe acompañar —agregaba— al elector, como una partida de nacimiento en la vida del ciudadano”, y los conceptos del Senador Dr. don Carlos Pellegrini, quien fundando el proyecto encarecía las ventajas del Padrón Permanente sobre nuestro viejo sistema del Padrón periódico, concluyendo con estas palabras, a las que no puede menos que acordarse todo el prestigio que les impone la autoridad indisputable de quien las dijo: “Esta ley cambia ese sistema del Registro Electoral periódico, por el Registro Electoral permanente, que quedará confiado a funcionarios públicos, que en toda época y momento puede habilitar al ciudadano para que ejerza su voto. De esta manera, después de hecho el primer censo, todo elector estará permanentemente habilitado para votar en todas y cada una de las elecciones”.

Esa misma disposición del art. 21, por otra parte, ha sido sacada casi textualmente del art. 15 de la ley electoral italiana, donde existe el Padrón permanente, en el sentido común y gramatical de la palabra, y como sucede en Inglaterra, Bélgica y Francia, cuyas instituciones electorales se han tratado de imitar en este punto, según lo afirma terminantemente el ya citado mensaje de 1902.

Creo que lo dicho basta para fundar lo que dejo expuesto, bajo el punto de vista del origen de la disposición legal que comento.

En cuanto a los propósitos de la ley, son ellos bien claros y se exhiben en el comentario que dejo hecho, así como en el espíritu que, evidentemente envuelve el texto claro de sus disposiciones. La Ley Electoral, diré con el Dr. González, autor del Proyecto que la generó, se propuso dar a todo elector inscripto como tal definitivamente ese carácter, en forma duradera y ad perpetuam, mientras subsista la capacidad que lo motiva, es decir, que aquel ciudadano que ha obtenido una vez, su partida cívica, tiene para siempre adquirido su estatuto electoral, sin que nadie pueda desconocerlo y alterarlo, como nadie puede desconocer ni alterar el documento que acredita su inscripción y su título de elector.

No es difícil ni se requiere mayor penetración, para comprender el fin y el objeto de este propósito; la ley ha querido asegurar al ciudadano su calidad de elector, como una propiedad que le es inhe-

rente, para siempre y mientras esté habilitado en el ejercicio de sus derechos políticos, librando su inscripción y su título de elector, de las alternativas a que le sujetaba el Padrón periódico, confeccionado, por lo general, bajo la presión de las pasiones o de la lucha política del momento, tan variada y tan accidentada en democracias incipientes y movedizas como la nuestra.

No es mi ánimo, porque ni es la oportunidad ni me compete, examinar la mayor o menor conveniencia u oportunidad política de tan honroso propósito de la ley, pero si quiero dejar establecido que él ha sido la base angular en que se asienta el Registro o Padrón permanente y constante que ha entendido crear.

Demostrado que la ley, en su texto y en su espíritu, se ha propuesto crear el Registro o Padrón cívico permanente, lo que excluye toda idea de renovación periódica, que ello sería sencillamente contrariar tal propósito y tal creación, basta examinar la manera en que se desarrolla y funciona el mecanismo organizado, para ver que, en ningún momento usa términos ni encierra disposiciones, que no sean consecuentes con fines tan manifiestos.

Creado el Registro o Padrón permanente (art. 21) los capítulos II, III, IV proveen a la designación de las personas, a los procedimientos que deben seguir una vez constituidos en comisiones empadronadoras, y a las reglas que deben observar en la inscripción de las personas que designa como aptas para ello (art. 31) así como la época en que esa inscripción inicial ha de comenzar y terminar. Hecho el Registro en esas condiciones, es sometido en el capítulo V a su depuración, la que se entrega, en primer término, a la acción de las personas y por un tiempo dado, y en que, las Comisiones antes censales, se transforman en Tribunal para resolver sobre aquella acción, con recurso para ante el Juez Federal respectivo. Resueltas las tachas, o sea los expresados reclamos, y después de las ordenaciones que prescribe el art. 40, el Padrón Cívico inicial, definitivo y destinado a ser el permanente y perdurable, se publica íntegro en la época y por los términos que en seguida se señalan. El capítulo VI que, como lo expresa entra a ocuparse de la "Continuación del Registro", hecho, depurado y publicado en la manera, tiempo y forma ya referido y provee a su conservación, mandándole entregar a las oficinas del Registro Civil a las que erige en oficinas permanentes del Registro Cívico Nacional, con los deberes consiguientes (art. 42 in fine) señala la oportunidad en que son admitidas las

reclamaciones o pedidos de inclusión que los ciudadanos tienen derecho a formular, y estatuyendo finalmente, y de la manera que ya lo he consignado, que en la renovación quinquenal, o sea en la ampliación a que se refiere el art. 21, sólo deben inscribirse los que en ese tiempo hubiesen alcanzado o recobrado su capacidad legal de electores o se hallasen, por cualquier causa, fuera del Registro o Padrón Cívico.

Basta esta simple relación de la manera en que se forma, se corrige y se amplía el Registro electoral, para que se impongan las siguientes conclusiones:

1º) Que partiendo de la existencia y persistencia del Padrón declarado permanente, en ningún momento estatuye, ni ha podido estatuir la ley, su renovación o sustitución periódica, por más que en determinadas épocas y por diversas acciones y personas ordene su ampliación o su depuración.

2º) Que, además, la ley sólo confiere a las comisiones censales que crea, la facción inicial del Padrón y su ampliación cada cinco años (arts. 31 y 48).

3º) Que ella entrega, por último, a la acción exclusiva de los electores las correcciones del Registro, consistentes en la eliminación o inclusión de nombres, indebidamente inscriptos o excluidos (arts. 37 y 49), limitando en este punto la acción de las comisiones a resolver sobre esa acción, con apelación para ante el Juez Federal respectivo arts. 37 y 38).

Claramente se destaca de estas conclusiones, el espíritu que campea y domina en las prescripciones de la Ley Electoral que las genera:

Aseguradas las garantías de amplitud, exactitud y seguridad emergentes de la institución del Padrón permanente, ha limitado la ley la acción pública, encarnada en las comisiones empadronadoras, a las funciones estrictamente necesarias a la facción o ampliación del Registro, logrando, con ello, reducir la intervención de la autoridad a su menor expresión, en el deseo, sin duda de alejar en lo posible el peso de su influencia sobre aquellas operaciones. Y entregando a la acción privada de los ciudadanos y electores, exclusivamente, las correcciones de ese mismo Registro, ha alcanzado, por una parte, apartar aquella misma influencia en punto tan importante como la corrección del Padrón, cerrándole el paso con la acción

directa librada a aquellos para enmendar, y con la facultad de reever las resoluciones de las comisiones al respecto, entregada al criterio sereno de la justicia de la Nación y ha establecido, por otra parte, en el elector y en el Juez, el contralor más eficiente y seguro de los errores, falsedades u otros defectos, a que la malicia o la insuficiencia hubieran podido conducir.

No es el caso de comentar este espíritu, esta tendencia de la ley, en el sentido de evitar en todo tiempo la presencia de la autoridad, bajo cualquier forma, en el camino del comicio; baste saber que, siendo ella una aspiración legítima, radicada en nuestra institución democrática, en la propia historia electoral, y que nuestra ley ampara en las disposiciones que comento, para que piense que es el caso de que la ley se ejecute dentro de esa tendencia. inspirándome, como lo ha de hacer V. E. en ideas que no pueden sernos extrañas, así como acatando expresos mandatos de la Constitución que imponen el serio respeto de la ley en el espíritu que la anima.

Son estas, Excmo. Señor, las consideraciones que me mueven, en la consulta que se ha servido hacerme, a manifestar que V. E. debe mandar ejecutar la Ley Electoral en los puntos señalados y en el caso presente, teniendo muy en cuenta:

Lo permanente y perdurable del Registro o Padrón cívico creado por ella.

La limitación dentro de lo cual sólo pueden actuar las comisiones censales, es decir, circunscribiéndose a la ampliación de aquel Registro que no pueden tocar.

El libre ejercicio, en su oportunidad, de la facultad reservada a los ciudadanos para hacerse incluir o para tachar las inscripciones hechas, en la totalidad del Registro existente (art. 47), al amparo de la justicia de la Nación.

De esta manera, apartándose V. E. de las operaciones electorales de que se trata, y reconociendo a cada uno la función que la ley le asigna, dejará expedito el camino a los ciudadanos para la perfección del Registro o Padrón que ha de servir para la más correcta emisión de su voto, y V. E. habrá cumplido, respetando la letra y el espíritu de la ley, como cumple a su leal proceder en la observancia de la regla que establece el inc. 3 del art. 86 de la Constitución. — Septiembre 26 de 1908.

=====

La concesión otorgada por una Provincia para extraer arena en un río navegable que atraviesa su territorio, sin que con ello se afecte la navegación o el comercio que por él se realiza, es título bastante que no puede ser desconocido por el Gobierno de la Nación.

**Don Alejandro Villa, pide permiso para extraer arena en el lecho del Río Paraná Guazú.**

*Excmo. Señor:*

Determinada la precisa situación geográfica de la isla “El Vizcaíno” en el Río Paraná, verificado con la mayor exactitud posible el punto adyacente a esa isla, de donde extrae arena la “Compañía Arenera del Vizcaíno”, punto que es justamente el que pretende el recurrente para ubicar la concesión que gestiona para la misma extracción, y examinados los títulos exhibidos por la mencionada compañía, obtenidos del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, conjuntamente con el derecho otorgado por la ley de ese Estado y decreto de ese Gobierno, para la explotación de la arena en las adyacencias de la isla expresada, pienso que V. E. no tiene razón legal que le conduzca a acordar lo que solicita Don Alejandro Villa, y a desconocer en consecuencia un título acordado por una Provincia Argentina, dentro de lo que es un derecho.

Sirvan de base a esta opinión las siguientes consideraciones:

Que sin entrar a examinar el título que exhibe la Compañía el “Vizcaíno” para fundar el derecho que defiende, en las relaciones o vínculos de derecho que crea entre ella y la Provincia de Entre Ríos, que bajo tal aspecto no es a V. E. a quien correspondería pronunciarse, es indudable que ese título ha sido legítimamente otorgado por esa Provincia, así como el derecho a la explotación de lo que se halle en el lecho del río, que, dentro de su territorio, corre en la parte de que se trata.

Se ha sentado ya, como una jurisprudencia aceptada, que las Provincias son dueñas, pueden disponer, reglamentar, crear impuestos y conceder la explotación de aquellas riquezas (arenas, piedras, etc.) que se encuentren en el lecho de los ríos navegables que bañan su territorio. Así se ha reconocido, desde que tales derechos no aparecen delegados a la Nación, ni desprendido del patrimonio de los Estados respectivos, y así lo ha declarado explícitamente el P. E. en diversos casos y notoriamente en el decreto de noviembre 14 de

1891, cuyas declaraciones son bien explícitas por lo claras y bien autorizadas por las firmas que lo suscriben. Posteriormente se registran declaraciones análogas como en los casos de la solicitud de Vita sobre criadero de ostras en Mar Chiquita y sobre casillas de pescadores en Mar del Plata, que el Gobierno Nacional resolvió de acuerdo con los principios reconocidos y sostenidos por aquel decreto.

Cualesquiera otras concesiones que pueda haber otorgado el P. E. Nacional en contraposición a los principios enunciados y por él sostenidos, por más que se hayan realizado, que subsistan en sus efectos y por más que sean consentidos por quien pudiera oponérseles, no implican ni menos envuelven necesariamente, el desconocimiento implícito de los referidos derechos de los Estados, en el lecho de los ríos navegables que bañan su territorio, y que ha reconocido por actos expresos de ese mismo poder de la Nación, análogos al citado decreto de noviembre 14 de 1891.

Es cierto que los principios referidos limitan y subordinan el ejercicio de los derechos que reconocen a las exigencias y requisitos del tránsito público en las riberas, la navegación o el comercio general y exterior de la República a que los ríos navegables interiores estén afectados, como motivos primordiales y exclusivos de la jurisdicción nacional, según el texto expreso del art. 26, y de los incs. 9 y 12 del art. 67 de la Constitución. Pero todo ello no significa que esa limitación o subordinación afecte la existencia de los derechos de los Estados a que me he referido antes; por el contrario, los corrobora y confirma, sin perjuicio de detenerlos y anularlos en su ejercicio y en sus efectos, ante la navegación y al comercio general, en cuyo caso deben ser apartados para dar paso a los derechos privativos y a la acción exclusiva del Gobierno General dentro de las prescripciones constitucionales que dejo citadas.

Nada induce a pensar en el caso sub-júdice, que la extracción que hace la mencionada compañía sea un obstáculo para la navegación o comercio marítimo, ni tampoco que sea favorable a ello el conceder la misma extracción a un Sr. Villa, con desconocimiento expreso y terminante de un acto del Gobierno de Entre Ríos. Si la explotación de la arena del "Vizcaíno" resultase nociva a la navegación o al comercio del río Paraná, en el punto en que se hace, justificada estaría su prohibición en cualquier momento, pero nunca lo estaría el desconocimiento del derecho de un Estado, con el solo

objeto de otorgar su concesión a distinta persona, que continuaría siendo el mismo obstáculo.

No dudo que estas consideraciones han de influir en el ánimo de V. E., así como la jurisprudencia sentada y a que me he referido, para resolver, como lo dije al principio, contra lo pedido por el recurrente Don Alejandro Villa. — Octubre 1º de 1908.

=====

Cuando en un tratado de extradición, no se ha estipulado que en el caso de concederse las autoridades del país requirente impondrían la pena menor al requerido, tal condición no puede establecerla el juez en sentencia que acuerda la extradición, a mérito de ese tratado.

**Ministro de Estados Unidos, sobre que su Gobierno no garantiza que el castigo de un criminal extraído de esta República sea de conformidad con las leyes argentinas en estos casos.**

*Excmo. Señor:*

Las estipulaciones de un tratado de extradición, como las de cualquier otro, celebrado con una Potencia extranjera, tiene la supremacía y la importancia de todo acto que liga la fe pública y compromete la soberanía de las altas partes contratantes.

En tal concepto, nuestra Constitución (art. 31) atribuye a esos tratados la supremacía que impone a sus propias prescripciones, como a las leyes de la Nación, y a su vez, esas leyes subordinan sus mandatos a las estipulaciones de aquéllos, cuando éstos rozan el leal y cumplido respeto que les impone su origen.

Dentro de este último concepto, nuestra Ley Procesal dispone expresamente (art. 648) sus condiciones y requisitos para autorizar una extradición, cuando existe un tratado con el país requirente, que los estipula y enumera, manteniendo sólo sus disposiciones en el orden interno, dentro del procedimiento judicial (art. 4 in fine del tratado con E. U.) y en tanto no desvirtúan la integridad de lo estipulado.

En el caso sub júdice, es improcedente la condición impuesta por el Sr. Juez Federal, al otorgar la extradición pedida por el Gobierno de los Estados Unidos, porque ni ella está dentro de las estipulaciones del tratado que la gobierna con exclusión de la ley,

ni puede razonablemente imponérsela fuera de él, cuando ninguna de sus cláusulas lo autoriza: no siendo de aplicación, en consecuencia, el art. 667 de la Ley Procesal citada, el que está manifiestamente reservado a las extradiciones requeridas por los países que, sin estarnos ligados por tratados, se presume que, cuando piden la extradición, aceptan esa y las demás condiciones que la primera impone cuando no existe el segundo.

Así, cuando se ha querido poner una condición respecto a la pena aplicable al extraído —habiendo tratado—, se ha consignado en el tratado mismo, como sucedió en el internacional de Montevideo de 1888, cuya cláusula 29 consignó que el Gobierno requerido podría exigir se sustituyera la pena de muerte en el extraído, por la inferior inmediata.

La Suprema Corte de Justicia en innumerables casos y como jurisprudencia constante, ha omitido siempre la condición de que me ocupo, en las extradiciones otorgadas a mérito de tratado pre-existente, no habiéndola olvidado nunca en los casos que éste no existía (Digesto de los fallos de la Suprema Corte por Frías, tomo III, págs. 205 a 207).

Son éstas las consideraciones que me mueven a reputar legítimamente fundadas las observaciones que contiene la precedente nota del Sr. Ministro de los Estados Unidos, respecto de la condición que comento, y a pensar que V. E. debe proceder en el sentido de gestionar su desaparición de la sentencia de setiembre 24 del año corriente, que corre agregada.

Convendría para ello que V. E. remitiera estos antecedentes al Sr. Procurador Fiscal en turno para que, teniendo en cuenta lo que dejo expuesto, haga esa gestión en la forma que corresponda, y sin perder de vista, que, a pesar de tratarse de una sentencia que aparece consentida por ese mismo funcionario, ella no es definitiva, no causa instancia, ni hace cosa juzgada, dada la naturaleza del juicio de extradición, según lo tiene resuelto la Suprema Corte de Justicia en su fallo del tomo 91, pág. 440. — Octubre 24 de 1908.

=====



La expulsión ordenada por el Gobierno del Brasil, de un oficial honorario de nuestro ejército, que sin permiso de las autoridades brasileñas se introdujo en su territorio, debe reputarse como acto legítimo de propia soberanía, sin perjuicio de procederse recíprocamente en casos análogos, y debiendo nuestro Gobierno requerir una explicación amistosa en salvaguardia del prestigio de nuestro ejército.

### **Reclamación contra el Gobierno del Brasil, por haber hecho salir de su territorio a un militar argentino.**

*Excmo. Señor:*

En la expulsión de su territorio, ordenada por el Gobierno del Brasil, del capitán honorario de nuestro ejército don Francisco de Windisch Graetz, que en uso de una licencia del servicio pasó a territorio brasileño, con motivo según lo manifiesta, de visitar intereses privados, no se observa ningún acto de violencia ni descometimiento para el expulsado, ni menos para el grado honorario que tiene en las filas de nuestros ejército.

Ese Gobierno en el caso, ha ejercitado un derecho perfecto al expulsar un extranjero de su territorio, en que, por cualquier razón, no le acomoda su presencia; como lo haría y lo hace el nuestro en igualdad de condiciones y cuando aplica la Ley de Residencia que autoriza al P. E. para ello.

Pero como el Gobierno brasileño declara en su Constitución (párrafo 9 del art. 72) la libre entrada y salida de su territorio de todo extranjero, sin necesidad de pasaporte, forzado se ha visto a dar el motivo, porque procedía así con el Sr. Windisch Graetz, y ha manifestado, como resulta de los antecedentes, que allí se tiene por principio que no penetre en su territorio, aún en tiempo de paz, oficial alguno en actividad de país vecino, sin autorización y conocimiento del Sr. Ministro de la Guerra.

Por más que este principio no se halle consignado entre las reglas de derecho internacional que las naciones observan en tiempo de paz, es de respetarse como un acto excepcional de soberanía de parte de aquel Gobierno, sin perjuicio de tenerlo en cuenta, por nuestra parte, a los efectos que pudiera dar lugar.

Entre esos efectos y en primer término, está el de poner a V. E. en el caso de presentar una reclamación amistosa, en el sentido de obtener una explicación que salve el concepto desfavorable que,

para nuestras conocidas prácticas y leales relaciones internacionales en tiempo de paz con las naciones vecinas, pudiera envolver la expulsión de que se trata, por la causa expresada, así como para mantener a la altura que corresponde la hidalguía que invariablemente supone el título de oficial del Ejército Argentino.

No dudo que el Gobierno del Brasil se apresurará a dar la explicación indicada, como cumple a su cultura, a la franqueza que siempre ha exteriorizado en sus relaciones de vecino, y de respeto por sus jerarquías militares que seguramente se apresurará a extender hasta las nuestras. — Octubre 26 de 1908.

=====

Una empresa ferrocarrilera, que por ley de su concesión está exonerada de toda clase de impuestos, tanto nacionales, provinciales, como municipales, tampoco debe pagar los impuestos de eslingaje y estadística.

**Ferrocarril Nord Este Argentino, solicita se lo exima del pago de derecho de eslingaje y estadística.**

*Excmo. Señor:*

La Empresa del Ferrocarril Nord Este Argentino, que no aparece haberse amparado a la Ley 5315, se encuentra *exonerada de impuestos de cualquier clase*, sean nacionales, provinciales o municipales, durante treinta años, con excepción de los servicios municipales de adoquinado, alumbrado, cloacas y aguas corrientes que utilice, con arreglo a los términos expuestos de la cláusula segunda del art. 4 de la Ley 5000, sancionada en setiembre 29 de 1906.

En presencia de los prescripto en el art. 5 de la Ley 4928 que, después de establecer que el eslingaje *es un impuesto*, lo caracteriza como diferente a los impuestos aduaneros, al determinar que se cobrará, hágase o no uso de peones fiscales, esté o no exonerada de derechos la mercadería, por cualquier concepto, así como de la repetida jurisprudencia sentada por V. E. al respecto, es indudable que, el mencionado impuesto, está comprendido en la liberación que la citada cláusula de la Ley 5000 consagra en favor de la referida Empresa, toda vez que no encuadra, bajo concepto alguno, dentro de los impuestos municipales que constituyen la excepción expresa de la misma.

En cuanto al derecho de estadística, que el art. 8 de la Ley de Aduana 4933, clasifica también como impuesto y que, con sujeción a dicho precepto, sólo afecta a los casos en que se ejercen el comercio de importación y exportación de los productos que enumera, o que se ocupen de operaciones de tránsito para el exterior, tampoco corresponde abonarlo a la Empresa postulante, en virtud de la amplia exoneración de que goza y en razón de que, los materiales o artículos que ella introduce para su explotación y construcción, así como sus operaciones de descarga y transporte, no pueden considerarse comprendidas entre los que refiere la citada cláusula de la Ley 4933.

En consecuencia de lo expuesto, y concordante con lo dictaminado en casos análogos, creo que V. E. debiera acceder a lo solicitado por el Ferrocarril Nord Este Argentino. — Noviembre 4 de 1908.

*Resolución Ministerial en contra: Boletín Oficial N° 4947, de junio 10 de 1910.*

=====

No debe intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores en las diligencias que las autoridades argentinas deseen practicar en país extranjero; de conformidad con el decreto de octubre 11 de 1872, dichas autoridades pueden dirigirse directamente a los representantes diplomáticos o consulares.

**Tribunal Superior de Córdoba, sobre pedido de informe a la autoridad que corresponda en Londres, sobre retiro de un banco del dinero perteneciente a la testamentaria de Don Santiago Temple.**

*Excmo. Señor:*

Persisten hoy las razones que basaron el decreto de octubre 11 de 1872, por el cual se dispuso que, las autoridades nacionales o provinciales de la República que ordenaran diligencias judiciales en el extranjero (exhortos, cartas, rogatorias, etc.), habrían de entenderse directamente con los agentes diplomáticos o consulares de la Nación en el punto donde requiriesen las expresadas diligencias.

Tan inconveniente era entonces como ahora, la demora de aquellas, pasando por el trámite obligado del Ministerio de Relaciones

Exteriores, tan injustificada la responsabilidad que pudiera caberle por esa demora, tan improcedente la constitución de ese Ministerio en un intermediario entre los funcionarios judiciales y los propios agentes diplomáticos, como inmotivada era y es hoy la legalización de documentos que pasando de autoridades a funcionarios argentinos, no salen de la República o sea de su representación.

Reputando pues, en todo vigor el decreto de octubre 11 de 1872, soy de opinión que V. E. debe eliminarse en el caso, y mandar devolver el presente documento para que él sea dirigido a la Legación o Consulado Argentino en Inglaterra para que se proceda a su diligenciamiento en la manera y forma que corresponda. — Noviembre 6 de 1908.

=====

Basta que se constate que una línea férrea afecta al comercio interprovincial, para que competa al P. E. declarar la jurisdicción nacional, tanto más si se halla amparada a la Ley Mitre (5315).

**Provincia de Tucumán, comunica que no acepta la declaración de que el Ferrocarril Nord Oeste Argentino esté sujeto a la jurisdicción nacional por haberse amparado a la Ley 5315, por arrancar y terminar dentro de esa Provincia.**

*Excmo. Señor:*

Cuando el Congreso produce actos o dicta leyes que tienden a reglamentar el comercio de las Provincias entre sí, ejercita una facultad que la Constitución le confiere (inc. 12 del art. 67), y en tal concepto le están inmediatamente subordinados las personas o Empresas que operan como agentes principales de ese comercio.

Tal sucede con las Empresas ferrocarrileras que, aún siendo de origen y recorrido provincial, llegan por su movimiento a participar de una manera directa en el Comercio General de la República, que la Constitución en la cláusula citada y sus correlativas de los arts. 9 y 10, ha entendido poner bajo el exclusivo gobierno de los Estados.

De aquí que, la Ley de Ferrocarriles 2873 declare nacionales, sin distinción alguna, las Empresas ferroviarias que ligan la Capital a las Provincias o a éstas entre sí (inc. 3 del art. 3 de la Ley 2873), que la ley les ofrezca dentro de tal concepto las franquicias de la

Ley 5315, cuando manifestada la voluntad de ampararse a sus disposiciones, las vea sometidas a las obligaciones que son consecuentes a aquellas franquicias; sin perjuicio naturalmente de sus relaciones con los Estados que las autorizaron o cuyo territorio recorren, y que no sean incompatibles con la jurisdicción nacional, bajo el concepto en que ésta les comprende y que dejo expresado.

Así, en el caso *sub-júdice*, el Ferrocarril Nord Oeste Argentino, pidió acogerse a la citada ley; averiguada la participación directa que toma, y que constató la Oficina técnica respectiva, en el comercio interprovincial, se aplicaron los principios que dejo expresados; adentro de ellos se reputó a la expresada línea bajo la jurisdicción nacional y en tal carácter se le consideró susceptible de ser amparada por las prescripciones de la Ley 5315; resolviendo favorablemente sus pretensiones y sin tener en cuenta otras circunstancias que la propia manifestación de voluntad, dentro de los términos de la ley, se dictó el decreto de junio 8 del año corriente que figura en estos antecedentes.

Ahora bien, arrancando ese decreto —tanto en el punto que declara al Ferrocarril Nord Oeste Argentino sometido a la jurisdicción nacional, como en el que accede al amparo a la Ley 5315 por él requerido—, del ejercicio de leyes nacionales dictadas por el Congreso a mérito de atribuciones constitucionales, leyes que, por otra parte, son soberanas en todo el territorio de la República (art. 31 de la Constitución); nada puede influir en sus efectos ni las reservas de la Empresa, ni las observaciones de la Provincia oficiante. Las primeras sólo pueden ser tomadas, como renuncia o modificación al pedido de amparo, y en tal concepto podrían llegar a modificar la aplicación a su respecto de los arts. 8 y 9 de la Ley 5315; pero nunca podrían ser tomadas en consideración por V. E. cuando provee, como en el caso, a la ejecución de una ley de la Nación (2873) cuyo texto y espíritu le induce a considerar a una Empresa como sujeta a la jurisdicción nacional (inc. 2 del art. 86 de la Constitución).

Tampoco pueden influir las segundas en tal acto, dado que la ley que se ejecuta, con ser ley de la Nación, es soberana, y las Provincias están obligadas a conformarse a ella, cualquiera disposición en contrario que contenga en su constitución o leyes respectivas (art. 31 citado).

Y si por razones que no me es dado tener presente, la Provincia

de Tucumán, sufriese, o entendiase sufrir perjuicios con la ejecución de la citada Ley de Ferrocarriles que aplica el art. 1 del decreto de junio 8 de 1908, la jurisdicción y procedimientos para su reclamo es bien conocida y sobre todo extraña a V. E. en los términos del presente asunto.

Soy pues de opinión: Que V. E. debe sostener lo dispuesto en el art. 1 del decreto citado.

Que V. E. debe mantener lo dispuesto en los arts. 2 y 3 del mismo, a menos que la Empresa postulante entienda que las reservas expresadas en agosto 3 del año corriente, implican una renuncia a su anterior solicitud, en cuyo caso, quedaría fuera de los términos de la Ley 5315, por no concurrir ya, la manifestación de voluntad requerida para basar su amparo. — Noviembre 18 de 1908.

=====

Los escritorios para una empresa ferroviaria amparada a la Ley Mitre (5315) deben importarse libre de derechos como material de construcción y explotación.

No corresponde hacer declaraciones generales en materia de importación libre de derechos, conviene determinarlo en cada caso particular que se presente, o resolverlo de conformidad a los procedimientos fijados de antemano.

### **Ferrocarril del Pacífico, sobre liberación de derechos de aduana de unos escritorios.**

*Excmo. Señor:*

Interpretando como corresponde la Ley 5315, en su texto y en su espíritu, al ser ejecutada dentro de los términos del inc. 2 del art. 86 de la Constitución, V. E. dictó el decreto de abril 30 de 1908, en cuyo art. 12 estableció, con toda claridad, la interpretación y extensión que debía darse a la franquicia legal de la primera parte del art. 8 de aquella ley.

Ese artículo declaró con toda precisión que la liberación de derechos aduaneros comprendía:

Los materiales que se introduzcan al país para o en relación a la construcción y explotación del sistema explotado por la Empresa.

Que esos materiales habrían de ser de los comprendidos en el

capital destinado a servir de base para el pago de la contribución única del 3 %, a que se refiere el citado artículo de la Ley 5315.

Y los que, en caso de duda, fueron calificados a los efectos de la liberación, por el Ministerio de Obras Públicas previo informe de la Oficina de Vías de Comunicación.

Los escritorios de que aquí se trata no pueden ser gravados por derechos aduaneros, estando comprendidos dentro de la franquicia respectiva de la ley:

1º — Porque se les introduce como material indudable de explotación, siendo indispensables para sus operaciones más elementales.

2º — Que han sido y son comprendidos como los demás muebles de la administración respectiva, en el capital en que se asienta el 3 % que grava a la Empresa postulante.

3º — Que para el caso de duda, se observa, que ya se ha pronunciado a su respecto y en el sentido indicado, la Oficina Técnica y el Ministerio de Obras Públicas (junio 30 de 1908).

Tales circunstancias son bastantes en mi sentir para justificar la insistencia de la Empresa en el caso, y para que V. E. acceda a lo que pide respecto de los escritorios que refiere.

No considero atendible ni pertinentes los distingos que se hacen sobre la fabricación de escritorios y otros útiles en el país, para significar que la introducción libre de materiales a que se refiere el art. 8 de la Ley 5315, está limitada por la posibilidad de adquirirlos en el país.

Esa ley que tuvo por mira, según el espíritu que inspiró su sanción; la nivelación en el goce de las franquicias acordadas por el Congreso a las Empresas ferroviarias a mérito del inc. 16 *in fine* del art. 67 de la Constitución; el cumplimiento de obligaciones y pago de gravámenes a cambio de esas franquicias, así como la seguridad de su desenvolvimiento contra posibles obstáculos suscitados por las Provincias cuyos territorios atravesaran; esa ley, digo, no se propuso ni tuvo directa ni indirectamente en vista la protección de la industria nacional, cuyos productos en ningún caso entendió imponer a los ferrocarriles que comprende.

Nada se dijo sobre tales productos en la discusión que precedió a su sanción, ninguna distinción consignó su texto que autorice a distinguir hoy, nada estatuyó al respecto al reglamentar sus disposiciones, ni mención alguna hizo al Ministerio de Obras Públicas,

cuando declaró que los escritorios en cuestión eran destinados a la explotación de las líneas que solicitaban su libre introducción.

Esto basta, en mi concepto, para fundar mi opinión contraria a los distingos a que me vengo refiriendo, y por ende para la solución de este asunto favorablemente a lo que la Empresa pide respecto de sus escritorios.

En cuanto a la declaración general que concluye por pedir a V. E., la Empresa postulante, y que apoyan los informes que se consignan en los antecedentes, opino que ella es perfectamente ociosa y más aún inconveniente para la mejor ejecución de la Ley 5315, tanto en relación a los intereses de la Empresa como a los de la Nación que contempla y correlaciona en sus disposiciones.

Es ociosa, porque ya ha establecido V. E., de la manera más acertada y precisa posible, hasta en las de duda, la regla y procedimiento para apreciar y declarar oportunamente cuáles son los materiales liberados por el art. 8 de la Ley 5315.

Es inconveniente, como son todas las generalizaciones que se establecen con un criterio dado y del momento, sobre operaciones y sobre objetos destinados a variar al infinito, tratándose de construcción, explotación, administración etc, de Empresas que abarcan un radio de acción tan importante y extenso como las empresas ferrocarrileras.

Creo más conveniente para V. E. la reserva de juzgar en cada caso, la calificación de los objetos dudosos, a los fines de su liberación de derechos de entrada, como ya lo ha considerado en el decreto reglamentario citado, cuando señala el procedimiento para ello; y reputo esto conveniente a su vez, para las Empresas mismas que, en cada caso, tendrán ocasión de requerir su derecho sin entrar en dudas sobre la aplicación de reglas y criterios establecidos en diversos momentos.

Considero pues que, resuelta favorablemente la solicitud de la Empresa del Pacífico en cuanto a los escritorios de que se trata, debe V. E. abstenerse de toda declaración general en el sentido de lo indicado por ella, e insinuado por los informes subsiguientes. —  
Noviembre 19 de 1908.

=====



No existiendo injusticia notoria, denegación de justicia, ni pronunciamiento efectivo en juicio de parte de autoridad extranjera contra un ciudadano argentino, no procede la reclamación diplomática que se requiere por éste.

**Don Adolfo del Campo, ciudadano argentino, solicitando amparo diplomático para reclamar del Gobierno Oriental, la posesión de una propiedad suya situada en el Paso del Molino.**

*Excmo. Señor:*

El presente pedido de amparo diplomático, del ciudadano argentino don Adolfo del Campo, con motivo de las reclamaciones y juicios que ha sostenido y sostiene con el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, se halla hoy en las mismas circunstancias y condiciones en que se hallaba en 1897 y 1898, cuando fué desestimado su pedido por decreto de V. E. y su reconsideración por mandato del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El tiempo transcurrido, las diligencias practicadas por el recurrente y la intervención del señor Ministro argentino ante el Gobierno de aquella Nación, no ha cambiado el concepto legal y propio del asunto y que, con toda precisión, caracterizó el Sr. Procurador General de la Nación Dr. Kier, en sus dictámenes de febrero 4 de 1896 y de abril 12 de 1898.

Ni antes ni después de esas fechas, ha dejado de oírse al Sr. del Campo por las autoridades competentemente uruguayas, en sus reclamaciones contra el Gobierno de esa República. Los procedimientos judiciales y administrativos, las resoluciones y sentencias dictadas respectivamente sobre pedidos por él formulados o en los juicios sobre posesión y obra nueva que él mismo cita, atestiguan de manera indubitable que estuvo en juicio, que fué oído, y que sus pretensiones fueron materia de sentencias legalmente dictadas.

Esto indica, en primer término, que no existe ni ha existido nunca la denegación de justicia en que el recurrente apoya su pedido de amparo, y ello basta para que, bajo tal punto de vista, sea totalmente improcedente. Para evitar repeticiones, me refiero en este punto, a los citados dictámenes de mi distinguido antecesor el Sr. Dr. Kier.

Tampoco se constata ni menos se evidencia, el despojo irritante ni la injusticia notoria de que el recurrente se dice víctima de las

autoridades uruguayas, en los derechos de dominio que se atribuye; lo que constituye otro de los fundamentos que basan el pedido de amparo de que me ocupo, y con respecto a lo cual considero:

a) No existen en los antecedentes que tengo a la vista, título alguno que determine, ni menos que individualice el dominio del Sr. del Campo, materia del despojo de que se dice víctima, ni plano, mensura o deslinde, que denuncie su extensión o ubicación.

b) Sin tomar en cuenta las referencias de las sentencias que, en copia corren agregadas, y estando como corresponde a su parte dispositiva, es de observarse, como lo hace el Sr. Dr. Kier, que nada se ha fallado en ellas respecto del dominio alegado por el recurrente, por más que se hayan resuelto los interdictos que motivaron esas sentencias. No apareciendo desconocido el dominio que se pretende, no puede darse por existente el despojo ni la injusticia que se alega.

c) No se registran en los antecedentes de este asunto, juicio iniciado ni pleito seguido en forma por el postulante, en que se haya puesto en debate su dominio a los terrenos del Prado, ni que se haya fallado a su respecto, no habiendo encontrado constancia alguna de que el Sr. del Campo haya provocado, o iniciado, o se guido, tramitación alguna para obtener la expropiación con arreglo a la ley de lo que considera de su legítimo dominio.

Estas circunstancias, las apuntadas de los ya citados dictámenes del Sr. Procurador de la Nación y los comentarios que se desprenden del hecho de no haber cambiado la situación creada por la falta de acción legal del recurrente, son bastantes en mi sentir para que V. E. se abstenga de la intervención y reclamación diplomática que se requiere, la que, fuera de toda regla y práctica internacional, no tendría hoy fundamento seguro, ni condiciones para prosperar. — Noviembre 23 de 1908.

=====

Las mejoras hechas por un intruso en tierras de la Nación, no le dan derecho alguno a la tierra, pudiendo tenerlo al reembolso de lo gastado, si hubiera procedido de buena fe y el Gobierno quisiera conservar dichas mejoras.

**Don Pedro Martirena, sobre compra de un lote de tierra  
en la Colonia Victoria en la Pampa Central.**

*Excmo. Señor:*

El hecho de que un intruso haya trabajado un pozo y alambrado en una extensión dada del lote 1 de la Colonia Victoria de la Pampa Central, perteneciente al Fisco de la Nación, coloca al Gobierno en situación legal de hacer suya la obra, previas las indemnizaciones correspondientes al edificante, en el caso en que hubiese motivos fundados para considerar que éste obró de buena fe (art. 2588 del Cód. Civil).

Pero, tratándose de un edificante que, sin pretexto legal alguno, entra a ocupar un terreno del Estado, debe presumirse la mala fe de aquél, y en este caso, el Gobierno se encuentra habilitado para proceder a la demolición de esas obras, a costa del intruso que las ha realizado, para que las cosas vuelvan a su estado primitivo, pero si lo prefiriese, puede conservar el Gobierno lo hecho, reembolsando al autor de tales obras, el valor de los materiales y de la obra de mano (art. 2589 del Cód. Civil).

Todo esto, sin perjuicio de los daños e intereses a que el Gobierno tuviera derecho y como consecuencia de los actos del intruso.  
— Noviembre 26 de 1908.

=====

No debe el P. E. dar curso a informes pedidos por jueces argentinos a ministros extranjeros residentes en nuestro país, sobre cuestiones en litigio referentes a casos, actos, o personas, de la Nación a que pertenecen dichos diplomáticos.

**Juzgado Federal de la Capital, solicita se pida informe al Ministro de Estados Unidos, sobre legitimidad de un billete certificado de Tesorería.**

*Excmo. Señor:*

Reputo inconveniente el pedido de informes que se indica, al

Sr. Ministro de los Estados Unidos, con el objeto manifiesto de concurrir a una prueba privada en asunto entre partes, como son todos los que, como el que motiva el precedente oficio, se refieren a la limitación de marcas de comercio.

No tratándose, por otra parte, de nada personal del expresado Sr. Ministro y si, por el contrario, de informes susceptibles de obtenerse por la prueba misma, insisto en pensar, como lo he significado antes de ahora, que V. E. debe evitar que, por su intermedio, se mezcle injustificadamente el nombre del representante de una Nación amiga, en litigios y debates de carácter privado.

Soy pues, de opinión, que V. E. debe abstenerse de requerir los expresados informes, haciéndolo saber oportunamente al Sr. Juez oficiante. — Diciembre 2 de 1908.

=====

La legalización de firmas, hechas por los Representantes Diplomáticos de un país extranjero ante nuestro Gobierno, se reputa suficiente a los efectos legales, sin necesidad de la legalización consular.

**Ministro de Austria Hungría, consultando sobre legalizaciones de las traducciones de requisitorias, y pidiendo que no se exija la legalización consular argentina, sino que baste la superlegalización del representante diplomático austro-húngaro.**

*Excmo. Señor:*

Con limitadas excepciones, las prácticas internacionales consideraran bastantes las simples legalizaciones de firmas, hechas por las representaciones diplomáticas, en los documentos enviados por los Gobiernos respectivos, para tener efecto en el país en que se encuentran acreditadas.

Entre nosotros, esa práctica ha prevalecido en general, aceptada en la vigencia de nuestros tratados y en la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia.

En tal concepto, no veo inconveniente en que V. E. acepte y convenga dentro de la expresada reciprocidad, en la indicación que formula el Sr. Ministro de Austria-Hungría, respecto a las legalizaciones que en adelante practique dentro de las condiciones que expresa. — Diciembre 3 de 1908.

El plazo dentro del cual deben presentarse los documentos requeridos para la extradición, cuando ha mediado arresto provisorio, se cuenta a partir de la detención del requerido, su término es común, y su duración la que fija el tratado o la ley cuando éste no existe.

La excarcelación bajo fianza, durante la tramitación del pedido de extradición, procede cuando la ley del país requerido la autoriza, considerando al delito como cometido en su territorio.

El hecho de que el Gobierno extranjero que pide la extradición, reputa condenado al que por nuestra legislación es sólo acusado, no modifica el criterio sustentado, respecto de la excarcelación.

**Legación de Italia, sobre interpretación de los plazos para la presentación de los documentos para la extradición y si procede la excarcelación bajo fianza mientras se halle en tramitación el juicio sobre extradición.**

*Excmo. Señor:*

Las cuestiones de índole jurídica que levanta el Sr. Ministro de Italia, con motivo de la aplicación que se ha hecho en caso dado, de algunas cláusulas del Tratado de extradición que, con esa Nación amiga nos vincula, son varias, manifestando el expresado Sr. Ministro su deseo de conocer el criterio del Gobierno argentino a su respecto y a lo cual V. E. se apresura a complacer deferentemente.

Cooperando a ello, vengo a dictaminar sobre tales cuestiones, dentro de nuestro derecho público, aunque con prescindencia absoluta del caso resuelto, en respecto a la cosa juzgada que va envuelta en una sentencia que dictaron Tribunales competentes y extraños a V. E. y consintieron los que fueron parte en el juicio respectivo.

Según la nota de fs. 159, esas cuestiones son las siguientes:

1º) ¿Cuál es, con arreglo al Tratado vigente, el plazo para la presentación de los documentos requeridos para la extradición, consecuencia del arresto provisorio de un súbdito italiano, ordenado y practicado por la Autoridad Argentina, a pedido del Ministro respectivo?

2º) ¿Procede la excarcelación bajo fianza del requerido, mientras se halle en tramitación el juicio sobre extradición?

Tres puntos comprende la primera cuestión:

a) ¿Cuándo empieza a correr el término de dos meses que acuerda para el caso, el art. 18 (2ª parte) del Tratado vigente?

b) ¿Cómo debe contarse ese término o plazo?

c) ¿Cuándo se debe considerar expirado?

El primer punto está resuelto expresamente por el texto mismo de la cláusula citada (art. 18) cuando dice que, la detención preventiva a que se refiere, cesará, si dentro del plazo (término) de dos meses, “a comenzar del momento en que el encausado o condenado fuese detenido” no se presentare...

El momento de la detención, según esto, es el punto de partida del término establecido, y a él deben atenerse los Gobiernos requirientes y requerido para computarlo, sin hacer depender su iniciación de avisos o comunicaciones, que podrán y deberán hacerse entre sí por razón de cortesía, pero que no bastan para modificar el texto expreso de lo estipulado al respecto.

No hay que perder de vista, que la interpretación de la estipulación expresada, no sólo debe hacerse teniendo en mira los derechos de las naciones contratantes para requerirse mutuamente los procesados o condenados por sus autoridades, sino también la garantía de la libertad personal, cuya privación es de derecho estricto dentro de los principios generales y muy especialmente dentro de nuestro derecho público, al que están subordinados los Tratados que nos ligan con otras naciones (art. 27 de la Constitución).

Fijado en esta manera, el punto de arranque del plazo establecido por el art. 18 del Tratado vigente con Italia, a la Legación requiriente corresponde en cada caso, conocer por sus propios medios el momento de la detención del requerido, para empezar a contar el plazo que le asiste para presentar los recaudos necesarios a la extradición que se intente, como consecuencia de una detención preventiva requerida y obtenida con anterioridad.

El segundo punto, o sea la manera cómo ha de contarse el plazo de que se trata, está también resuelto por el propio texto de la cláusula citada, cuando se limita a decir que “deberá cesar (la detención) si dentro del plazo de dos meses a comenzar”...

No observándose en este punto calificación ni distinción alguna relativamente a ese plazo, no hay razón para calificar ni distinguir dónde el Tratado —que es la ley por las partes—, no califica ni distingue; siendo forzoso convenir, de acuerdo con los principios

más elementales del derecho y que la legislación italiana, como la nuestra (art. 28 del Cód. Civil) consagran, que cuando un término no se califica de útil o hábil, se entiende ser un término ordinario, de aquellos que constituye el simple transcurso del tiempo en el lapso señalado.

Este concepto es tanto más aplicable al caso, cuanto que es evidente que el amplio término de que se trata se ha estipulado en relación al tiempo que requieren nuestras comunicaciones con Italia, las que, es notorio, no se interrumpen en ningún momento del año, fuera del caso fortuito o de la fuerza mayor, de lo que no se trata; siendo de recordarse, por otra parte, que entre nosotros no hay días inhábiles, en absoluto, para la presentación de los recaudos de una extradición ante nuestros Tribunales o Autoridades, dado que, hay funcionarios obligados a poner cargo o sea a constatar el día y hora, aún inhábiles, en que se presenten los escritos o documentos que deban agregarse a procesos judiciales, constatación que, por otra parte, merece entera fe en juicio.

El momento, por último, de reputarse expirado el término de que me vengo ocupando, se desprende sin mayor esfuerzo del momento en que se inicia y de la manera en que se computa; ambas cosas han quedado establecidas sobre la base del texto y espíritu del Tratado vigente, que es la única que puede y debe cimentar en el punto, el criterio de interpretación del Tratado vigente con Italia, tanto de parte de V. E. como de parte de aquel Gobierno.

La observación del Sr. Ministro de Italia, en materia de excarcelación bajo fianza, en los juicios de detención preventiva y durante el juicio de extradición consiguiente, se basa en dos circunstancias principales:

1º) En la naturaleza misma del juicio respectivo, el que nunca da por resultado la aplicación de la pena, ni menos causa estado.

2º) En la especial circunstancia del condenado en que, según el criterio italiano se encuentra el individuo requerido a mérito de una sentencia condenatoria dictada en rebeldía por los propios Tribunales; tratándose de un condenado, no puede hablarse de excarcelación bajo fianza, durante el juicio de su extradición.

Respecto del primer término de la cuestión, ocurre observar que el Tratado de extradición con Italia, como todos los otros Tratados celebrados y que celebre la República, están y deberán estar

sometidos siempre a nuestros principios de derecho público (art. 27 de la Constitución), principios para los que son persistentes e inviolables las garantías de la libertad individual hasta el término que la ley señala, cual es en el caso de detención o prisión preventiva, el máximo de la pena que consiente la excarcelación (art. 376 del Cód. de P. Penal, modificado por la Ley 3508); siendo de observarse, en segundo lugar, que el Tratado con Italia, consecuente con la subordinación expresada, respecto al derecho público, tanto de esa Nación como del nuestro, se somete a la legislación atingente a la forma y reglas que, en el país requerido, gobierna la detención de la persona reclamada (art. 18 del Tratado).

Dentro de uno y otro concepto es de aplicación al caso, como la Suprema Corte lo tiene establecido en repetida jurisprudencia (fallo del tomo 91, pág. 120), el art. 674 del Cód. de P. Penal que establece la excarcelación del requerido de extradición, como si el delito imputado hubiere sido ejecutado en la República, y dentro del término del art. 376 de la ley citada, ampliado por la Ley 3508.

Subordinado el Tratado en cuestión, a los principios generales y prescripciones legales mencionadas, poca importancia tiene la naturaleza especial del juicio de extradición, y ninguna la circunstancia de que tal juicio no se proponga dé por resultado imponer una pena o motivar una instancia; cuando la Ley Procesal citada habla de la excarcelación del requerido, toma en cuenta directamente el hecho que motiva la extradición, al consentirla y autorizarla, como si el hecho se hubiera cometido en la República. Y en tal concepto se hace aplicable tanto la citada disposición del art. 674 de la Ley Procesal, como la del art. 504 de la misma, dado que tanto una como otra ampara la libertad individual de nuestros principios constitucionales y dentro de los límites legales que marca el hecho mismo que motiva la extradición.

Es mi opinión pues, en este punto que, no hay razón para sostener la improcedencia de la excarcelación del requerido, durante el juicio de extradición correspondiente, dentro del texto y espíritu estricto del Tratado con Italia.

Radica la segunda circunstancia en que se basa la oposición del Sr. Ministro de Italia contra la excarcelación bajo fianza del requerido durante el juicio de su extradición, en el criterio distinto al nuestro, con que aprecia la situación legal del requerido, condenado en rebeldía por los Tribunales italianos; ese condenado nominal-



mente y sin ser oído, cuyo proceso es susceptible de reabrirse una vez cesada su contumacia, como si la condenación no existiese, podrá ser un condenado para las autoridades italianas, sometido dentro de su territorio y a mérito de sus leyes a los efectos posibles de esa sentencia, en el sentido de considerarle tal o de paralizar la prescripción de la acción penal, pero nunca puede serlo entre nosotros, donde a nadie puede reputarse condenado sino por sentencia consentida en virtud de ley anterior y previo juicio ante Juez competente.

Así lo exige nuestra Constitución (art. 18) a la que está sometido este Tratado como todos los demás (art. 27), así lo considera nuestra Ley de Procedimientos Penales, cuando sus arts. 150 y correlativos mandan suspender el proceso hasta ser habido el procesado, ley que por otra parte, es de aplicación en los casos de detención por razón de extradición, dado que el Tratado respectivo (art. 18) subordina sus estipulaciones a las reglas que gobiernan esas detenciones en el país requerido, y así lo ha entendido nuestra Suprema Corte de Justicia en su constante jurisprudencia, de la cual me limitaré a citar el caso más recientemente resuelto y que creo conoce el Sr. Ministro de Italia, caso de Pablo Viscusi, cuya extradición fuese denegada por el Alto Tribunal.

Reputando pues, y necesariamente entre nosotros, como simple imputado, el condenado en Italia por una sentencia en rebeldía, es fuera de duda que procede su excarcelación bajo fianza, en las condiciones de la Ley Procesal que rige el punto, y a que antes me he referido en las citas que tengo hechas de sus prescripciones.

No se me oculta que esto puede dar lugar a inconvenientes, como el que apunta el Sr. Ministro de Italia, en el caso de Berlin-gueri, que negada su extradición en 1ª instancia fué acordada en la última, no pudiéndose hacer efectiva por no encontrarse el requerido, pero ese inconveniente, muy atenuado por las responsabilidades de la fianza y la deferente atención que invariablemente presta nuestra policía a los requerimientos de los Sres. Ministros extranjeros, no basta para neutralizar el texto y espíritu de las convenciones del Tratado mismo que se invoca, ni menos a desvirtuar las garantías de nuestra Carta Fundamental aplicada por las leyes del Congreso, que, el mismo Tratado expresa someterse.

Insisto pues, en creer, aún bajo este nuevo aspecto, que V. E. no tiene por qué cambiar el criterio sentado por los Jueces y Tri-

bunaics, respecto a la excarcelación de un requerido por el Gobierno de Italia, amparado en ello, por el Tratado de acuerdo con nuestra Constitución, nuestras leyes y con la jurisprudencia de nuestra alta Corte de Justicia. — Diciembre 9 de 1908.

=====

La interrupción de los servicios de un empleado público, proveniente de causas que le son extrañas —en el caso separación injusta de su puesto— no anula su derecho a la jubilación, ni las de sus deudos a la pensión respectiva, y el tiempo de interrupción debe sumarse a los efectos del cómputo de años de servicio.

**Dña Blanca S. I. de Prato, solicitando pensión.**

*Excmo. Señor:*

Es indudable a estar a los antecedentes presentados que el causante de la recurrente, don Agustín Prato, estuvo al servicio de la Nación durante un largo lapso de tiempo, en el que fué interrumpido por acusaciones contra la Oficina donde desempeñara sus funciones.

De la exposición de la recurrente y de la resolución ministerial que corre agregada (Boletín Oficial acompañado) se infiere que con motivo de aquellas acusaciones, el empleado Prato fué separado de su puesto.

Hecha la correspondiente investigación y después de transcurrido un tiempo, Prato volvió a ser incorporado a la Administración, una vez que se constató que él no fué culpable, sino que, por el contrario, su conducta como empleado había sido intachable, como lo expresa la resolución ministerial acompañada, de setiembre 23 de 1893.

La separación pues de Prato de la Administración, no nació de hecho suyo ni de causa o motivo imputable o proveniente de él; nació de la voluntad del Gobierno mismo, quien reconoció más tarde que no había tenido razón para ordenarla. Esa separación injustificada que Prato no pudo prever, y que, aún prevista, no le era dado evitar ni resistir, tuvo para él los efectos incontestables a que se refiere la segunda parte del art. 20 de la Ley 4349, cuando dice que no se considerará interrupción de servicio, la que sea originada "...por fuerza mayor debidamente justificada".

No existiendo pues, legalmente la interrupción que se señala en los servicios de Prato, ellos deben reputarse continuos aún durante su separación momentánea y de fuerza mayor para él; separación que duró desde el 14 de setiembre de 1893 hasta el 25 de setiembre de 1894, o sea un lapso de tiempo que agregado al cómputo general de sus servicios le ponía en condiciones, si viviera, de obtener su jubilación extraordinaria, estando su viuda e hijos en el derecho de obtener la pensión en la proporción que le acuerdan en tales casos el art. 41 y sus correlativos de la ley citada.

Estas consideraciones y las resoluciones dictadas por V. E. de acuerdo con el que suscribe en los casos del ex-contador don Miguel Rodríguez, de Gaspar Reissig y otros, me inclinan a creer que V. E. debe modificar la resolución de la Junta que antecede, en el sentido favorable a la recurrente y dentro de las prescripciones citadas de la Ley 4349. — Diciembre 14 de 1908.

*Decreto en contra: Boletín Oficial N° 4537, pág. 54 de enero 7 de 1909.*

=====

La Sociedad de Beneficencia, es una repartición de la administración pública, que debe ser considerada como institución autónoma, y en tal carácter debe ser autorizada para recibir donaciones, adquirir derechos y contraer obligaciones.

**Sociedad de Beneficencia de la Capital, sobre personería para recibir donaciones e instituciones testamentarias.**

*Excmo. Señor:*

Las cavilosasidades del interés particular ha intentado levantar obstáculos a la acción conocida y respetada de la clásica y tradicional institución de nuestra Sociedad de Beneficencia.

Ello es el motivo por el cual ocurre su Presidente con la solicitud que antecede, requiriendo de V. E. la intervención que le corresponde, a fin de establecer el verdadero carácter en que actúa, asegurando una vez por todas la eficacia de sus actos, aún ante las malas inspiraciones de aquel interés.

La Sociedad de Beneficencia, es una repartición de la administración pública, instituída y consagrada a llenar dos objetos primor-

diales, que la tradición ha confirmado y que la ley ha puesto bajo la égida de V. E. (inc. 16 del art. 9 de la Ley 3727).

Administro con toda autonomía, aun cuando dentro de las reglas de contabilidad que gobiernan la inversión de los dineros públicos, los fondos del tesoro de la Nación que la ley destina a los fines de la beneficencia pública.

Es depositaria de la confianza, caudales y bienes, que la generosidad de los particulares pone en sus manos para los mismos fines, administrándolos por voluntad de ellos mismos, en la fiel aplicación que quisieron darles.

En uno y otro concepto, la Sociedad de Beneficencia tiene y debe tener la libre acción que necesariamente suponen las indicadas funciones; y así como V. E. le asegura la plena libertad, dentro de la ley, para desenvolverse en el primer concepto, justo es que iguales seguridades le otorgue en el segundo, en que sus funciones son tanto más elevadas, cuanto que mayor es la confianza depositada en ella y mayor la responsabilidad de su gestión, dentro del alto carácter que le imprime la circunstancia de ser una rama de la administración pública.

A tal fin, considero que V. E., actuando dentro de las facultades que le atribuye el inc. 16 del art. 9 de la Ley 3727, y tratándose de una repartición que le está directamente sometida, a mérito del art. 2 del Acuerdo de octubre 31 de 1898, debe resolver favorablemente la petición que antecede, en el sentido de acordar a la Institución de la Sociedad de Beneficencia las autorizaciones que requiere para el mejor desempeño de las desinteresadas funciones que le confieren la tradición, la ley y la jurisprudencia, y le disciernen el respeto y la confianza que inspira el alto concepto moral que la rodea.

Procediendo así, proveerá V. E. una vez más, al mejor funcionamiento de una de las reparticiones de la administración, y agregando el prestigio moral del Gobierno al que ya ampara los actos de la Sociedad de Beneficencia, habrá contribuido a aumentar, si ello es posible, la confianza y respeto que inspira la genuina institución de Rivadavia. — Diciembre 17 de 1908.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4595, pág. 781, de diciembre 21 de 1908.*

=====

Los guerreros de la Independencia del Brasil y Paraguay están equiparados a los jefes y oficiales en servicio activo, en cuanto al sueldo y sobresueldo del presupuesto correspondiente a su grado en actividad, pero no a las comisiones del mando que desempeñen, los de igual grado en servicio activo.

**Solicitud del Guerrero del Paraguay, Coronel Mulliardi, sobre liquidación y pago de suplementos a los militares en servicio.**

*Excmo. Señor:*

Adhiero a las conclusiones tanto de la Contaduría General, como a las del Sr. Auditor de Guerra, en lo relativo a la liquidación de los haberes mensuales del recurrente Coronel don Ricardo V. Mulliardi, y en el sentido de que no se haga lugar a lo que pretende respecto al cobro de los suplementos que el Presupuesto acuerda, por razón de la comisión que desempeñan, los jefes u oficiales al mando efectivo de fuerzas o en ejercicio de funciones determinadas en la administración militar.

Cuando la Ley 4707 equipara a los guerreros del Brasil y Paraguay con los jefes u oficiales en servicio activo, implícitamente les reconoce los derechos que, al sueldo y sobresueldo, atribuye el Presupuesto a los militares que se encuentren en tales condiciones, pero, en manera alguna les hace ni puede hacerles titulares o acreedores a aquellos suplementos o gratificaciones, que éste asigna, en razón del mando o función desempeñada, e independientemente del grado o jerarquía que tengan los expresados guerreros.

Reproduciendo los informes citados, y recordando lo que tengo sostenido, antes de ahora, respecto a la asignación que corresponde a los retirados (entre otros, dictamen del que suscribe de diciembre de 1905, excepto del Tte. Coronel Francisco Riveiro), pienso que V. E. debe resolver este asunto como lo he indicado, de acuerdo con los informes a que me he referido al principio. — Diciembre 20 de 1908.

=====

Una simple denuncia, sin que se produzca el hecho positivo que desconozca el dominio adquirido de un particular sobre tierra pública no deja ver la turbación de la posesión, no obliga al Gobierno de la Nación a sanear lo que no se ha reclamado.

Esto no obsta, a que se proceda contra el escribano que actuó en violación de la Ley 4167.

**Dirección de Tierras y Colonias, sobre que los Escribanos Antelo y Cloner no han cumplido con la disposición del art. 14 de la Ley 4167.**

*Excmo. Señor:*

Aun cuando por razones de índole diversa de las que expone el Sr. Procurador del Tesoro en su precedente dictamen, coincido con él, en que no ha llegado el caso ni es la oportunidad de ejercer la acción a efecto de la nulidad a que se refiere el decreto que antecede de noviembre 27 del año corriente.

La denuncia de un comprador de tierra pública, de que, el lote que compró está mencionado en otro título y se le ha sacado a remate, el pedido de aclaración formulado ante la Dirección de Tierras por un rematador sobre los títulos a acciones y derechos de una tierra, que se le encomiendan vender, y que parecen referirse al lote del aludido denunciante, no son circunstancias bastantes, ni menos legales, para que el Gobierno salga espontáneamente a la defensa de los títulos primitivos; no sólo no consta su desconocimiento positivo, ni la turbación de la posesión del denunciante, sino que nadie ha demandado al Gobierno por razón del título acordado, ni de ningún otro, y tampoco el denunciante ni ningún otro, le ha citado de evicción, como sería su derecho, si se le turbase en el dominio adquirido de aquél.

No habiéndose pues, producido ninguna de tales circunstancias legales, ni habiéndose presentado administrativamente ninguna reclamación que motive un pronunciamiento de tal carácter de parte de V. E. no es el caso ni de producir una resolución administrativa, ni de provocar una acción legal que no tiene razón de ser.

Estas consideraciones me inducen a creer que el decreto a que me vengo refiriendo, debe ser suspendido en sus efectos hasta que se produzcan (si ello sucede) las situaciones legales que dejo indicadas,

en cuyo momento recién convendría asumir la actitud que por derecho correspondiera.

Tal suspensión no obsta, para que la Oficina respectiva aplique como corresponde a los Escribanos de que se trata, la prescripción expresa del art. 14 de la Ley 4167. — Diciembre 31 de 1908.

*Resolución de Acuerdo: según nota de enero 7 de 1909.*

=====

Las reclamaciones de carácter civil de un extranjero, residente en país extranjero, no pueden serlo por la vía diplomática. Debe el interesado recurrir para ellos a los Tribunales argentinos, por sí o por medio de representante legal.

**Nota de la Legación de Austria-Hungría, sobre reclamo del Instituto Real de Viena.** \*

*Excmo. Señor:*

Las peticiones que formula el Directorio del Instituto Real de la Industria Casera para Mujeres de Viena, al Sr. Ministro de Austria-Hungría, y que este representante se sirve transmitir a V. E., no están amparadas por las prácticas internacionales, y dentro de nuestra legislación, no existe ninguna prescripción que autorice a realizar por la vía diplomática las diligencias que se requieren.

Estas diligencias consistirían en asegurar una suma de dinero, que se adeuda al Instituto reclamante, por una persona asesinada en esta ciudad, y en la clausura de las cuentas que existan en los Bancos de la Capital, a nombre de la persona muerta, del presunto criminal y de una señora de la íntima relación de la víctima.

Se trata evidentemente de gestiones de carácter civil, entre la Institución acreedora y los herederos de su deudor, tendientes a conseguir el pago de lo adeudado, y en tal clase de gestiones la intervención diplomática queda excluida en absoluto, siendo ante los Tribunales judiciales competentes, que los interesados deben demandar el reconocimiento de sus derechos. Dentro de nuestra legislación, los extranjeros tienen el medio de ejercitar sus acciones, en los casos de connacionales fallecidos en la República sin dejar herederos argentinos, con la intervención acordada a los cónsules respectivos por la Ley 163, para la iniciación de juicios a intestado.

Descartada así la posibilidad de que la solución en trámite, pueda ser considerada como un caso de extradición, con las medidas accesorias de seguridad en los objetos procedentes del delito que la motive, V. E. no puede ordenar ninguna diligencia que tienda a incantarse o asegurar bienes particulares, porque invadiría atribuciones privativas del Poder Judicial, al que deberán recurrir los que se consideran dañados por sus intereses por actos de otras personas.

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. no debe hacer lugar al pedido formulado, y manifestar al Sr. Ministro recurrente, las razones que se oponen a la admisión de su solicitud. — Enero 10 de 1909.

=====

Corresponde a las autoridades administrativas y judiciales de cada provincia la represión de abusos cometidos por las autoridades policiales de la misma.

El P. E. no tiene facultad para intervenir en tales hechos, aún cuando lo sean contra un Obispo, por cuanto no caben en las funciones del Patronato Nacional.

### **Obispo de Cuyo, sobre atropellos policiales.**

*Excmo. Señor:*

Es fuera de duda que la Policía de San Juan, al mandar suspender la ceremonia del culto católico conocida por “misa del gallo” ha atacado la garantía individual que consigna el art. 14 de la Constitución, cuando en su final declara la facultad de todos los habitantes de la Nación (instituciones o personas) de profesar libremente su culto.

La posible alteración del orden o de la tranquilidad pública, que la expresada Policía pudo temer en el caso, no justifica, en manera alguna, aquella suspensión; dado que, además de suprimirle los elementos necesarios para guardar el orden, por ser ello inherente a la propia Institución, no es, suprimiendo o suspendiendo el ejercicio de las garantías constitucionales que se guarda ese orden público que, en realidad, no es sino el amplio goce y tranquilo ejercicio de esas garantías. No se asegura la libre profesión de un culto cualquiera, impidiendo las manifestaciones que le son propias.

Pero, si esas policías han cometido tal ataque, no es a V. E.



sino al Gobernador de la Provincia o a las autoridades judiciales competentes a quienes ha correspondido y corresponde conocer de la denuncia formulada contra ellas por la autoridad eclesiástica: el primero, como superior jerárquico de esas policías cuyo gobierno le pertenece, e igualmente como agente del Gobierno Federal, en defensa de la garantía aludida y cuyo cumplimiento le está impuesto en tal carácter, por el art. 110 de la Constitución; las segundas, en caso de acusación en forma contra las personas, en ejercicio de la propia jurisdicción y aplicando la Constitución y las leyes, lo que constituye su misión primordial.

En cuanto a V. E., creo que bajo ningún concepto le corresponde intervenir en este asunto.

Está fuera de las facultades del P. E. el juzgamiento y pronunciamiento referente al amparo requerido y al cumplimiento de una garantía constitucional que se dice y que aparece desconocida.

Extrañas son a la acción del mismo, las autoridades policiales de un Estado Federal, subordinadas a sus superiores jerárquicos dentro de la propia autonomía de ese Estado.

Y ajenos son, por último, los antecedentes y motivos de la denuncia a las limitadas funciones del Patronato Nacional, que los incs. 7 y 8 del art. 86 de la Constitución atribuye al P. E.

Son estas las consideraciones que me inducen a pensar que la denuncia y pedido de garantías que motiva este asunto, no puede ni debe ser juzgado ni resuelto por V. E. Pienso, por el contrario, que V. E. debe excusar su intervención en este proceso, mandando devolver los antecedentes a quien corresponde, todo ello sin perjuicio de que, el Sr. Obispo de Cuyo promueva, ante la autoridad local administrativa o ante la autoridad judicial competente, las acciones que por derecho correspondan en el caso y que entienda convenir a los intereses que patrocina y que gobierna.

En cuanto a los actos violentos de que aparece como víctima un Sr. Canónigo de aquella Diócesis, pienso que ello es del dominio privado y cae bajo una jurisdicción bien conocida y bien extraña de V. E., lo que me exime de ocuparme de ella. — Enero 12 de 1909.

=====

El empleado que se halla en disponibilidad o con licencia, con goce de sueldo o sin él, no deja de estar en servicio, y en consecuencia, éste no puede considerarse interrumpido a los fines de la jubilación.

**Doña Victoria B. de Antequeda, solicitando su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Como ya lo he sostenido anteriormente y en el caso análogo al presente, de la pensionista señora Dorrego de Sellanes, el empleado que se halla con licencia con goce de sueldo o sin él, no deja de estar en servicio, y por ende no puede éste reputarse interrumpido a los fines de su jubilación.

Como lo he hecho notar también en el citado caso, si no se le hizo personalmente el descuento de ley, era porque no había, durante su licencia, sobre qué hacerlo, no constando en el caso *sub-júdice* que no se haya hecho sobre el sueldo que pagó a la sustituta, lo que es de presumirse.

Creo pues, que deben computarse los servicios de la recurrente durante la licencia que resulta haber gozado, y si con ellos alcanza al término de la ley debe acordársele la jubilación que solicita, dado que aparecen llenados los otros requisitos legales.—Febrero 5 de 1909.

*Decreto de acuerdo Boletín Oficial N° 548, de noviembre 24 de 1909.*

=====

Corresponde el retiro de la personería jurídica de una sociedad anónima que se encuentra en la imposibilidad de reunir el quórum necesario para la asamblea, lo que implica afirmar que no está en condiciones de llenar sus fines.

**Sociedad Cabacal Gold Dragding and Exploration, pide retiro de la personería jurídica por no llenar los fines para que fué creada.**

*Excmo. Señor:*

Las circunstancias denunciadas por el síndico de la “Cabacal Gold Dragding and Explotation Co.”, así como la misma imposibi-

lidad de reunir el quorum necesario para la asamblea que, por varias veces se ha tratado de celebrar, indica que ésta asociación no se halla en condiciones de llenar sus fines, ni de existir legalmente.

En tal concepto, desaparecidas las circunstancias que determinaron el acuerdo de su personería jurídica, según el inc. 4 del art. 318 del Cód. de Comercio, corresponde el retiro de tal carácter, derogando el decreto de mayo de 1905 en que le fué acordado. — Febrero 6 de 1909.

=====

No procede una reclamación diplomática cuando el recurrente, empleado al servicio de un gobierno extranjero, no ha justificado que conserva la ciudadanía argentina (en caso de tenerla), ni tampoco que el Congreso Argentino le hubiera otorgado un permiso especial, para aceptar y conservar dicho empleo, sin perder sus derechos políticos en la República y el derecho al amparo diplomático fuera de ella.

No procede tampoco dicha reclamación, por no haberse justificado que el recurrente haya interpuesto recurso o acción ante las autoridades judiciales del país y que fueran desestimados, o haya sido víctima de una denegación de justicia.

**Don José S. Bazerque, ciudadano argentino, solicitando una reclamación diplomática al Gobierno del Paraguay por daños sufridos en la última revolución.**

*Excmo. Señor:*

La presente requisición de amparo diplomático interpuesto por el señor José S. Bazerque, con motivo de ciertos atropellos de que dice haber sido víctima durante una de las últimas conmociones políticas de la vecina República del Paraguay, carece en mi sentir, de base y debe ser desestimada por V. E.

Sirvan de base a esta opinión, las siguientes consideraciones:

1º Que el recurrente no sólo no ha justificado, como corresponde, la calidad de argentino, que se atribuye, sino que además, siendo empleado del Gobierno del Paraguay, durante los sucesos que relata, no ha justificado tampoco que conservase su ciudadanía argentina (caso de serlo) al amparo del permiso del Congreso, nece-

sario para no perderla cuando se aceptan empleos en país extranjero, y no perder con ella los derechos políticos en la República, así como el derecho a la protección diplomática fuera de ella.

2º Que tampoco ha justificado como corresponde, los hechos que relata, la manera en que se desenvolvieron y el real papel que desempeñó en ellos.

3º Que no resulta haber presentado recurso ni acción alguna ante las autoridades paraguayas, lo que es previo a toda reclamación diplomática, que sólo puede tener lugar, sobre la base evidente de que esas autoridades no hayan oído al recurrente, o que oído al mismo no le hayan hecho la debida justicia, en aplicación de las propias.

4º Que, por último, la calidad del empleo desempeñado por el Sr. Bazerque, la índole de los sucesos que relata, su actitud, su lucha y demás circunstancias que, tan acertadamente hace notar el Sr. Secretario Adscripto en su exposición antecedente, son otras tantas razones que inducen al rechazo de esta reclamación que, bajo concepto alguno es procedente.

La resolución pues de este asunto, creo que debe ser la que he manifestado al principio; sin perjuicio de que el Sr. Bazerque inicie ante el Gobierno del Paraguay los recursos administrativos y legales que las leyes de ese país le aseguran, para obtener lo que en justicia le corresponda, como desagravio e indemnización de las violencias y daños que le han sido inferidos por determinadas personas y con motivo de los sucesos en que se ha visto envuelto.—  
Febrero 16 de 1909.

=====

A pedido del representante diplomático de un país amigo, procede requerir de la autoridad judicial orden para la retención de fondos de un particular, cuando el pedido se formula bajo la responsabilidad civil del gobierno del país requirente, y siempre que dicho país signifique al mismo tiempo la reciprocidad para casos análogos.

**Legación de Chile, pide la retención de los fondos depositados en los establecimientos bancarios de la República, a la orden de Ciro Lara M.**

*Excmo. Señor:*

Creo que V. E. respondiendo al pedido del Sr. Ministro de Chile puede proceder a requerir de la autoridad judicial en turno, la orden de retención de fondos a que el Sr. Ministro se refiere, sin por ello librar orden a tal respecto.

Este pedido debe ser hecho bajo la responsabilidad civil del Gobierno del país requirente y en el concepto de que el Sr. Ministro de Chile significará en la primera oportunidad a nombre de su Gobierno, su obligación a la reciprocidad de casos análogos.

Sírvase V. E. remitir en consecuencia estos antecedentes al Sr. Juez Federal en turno. — Febrero 16 de 1909.

=====

Es al Gobierno Nacional y no la Municipalidad a quien corresponde autorizar las concesiones de Tranways en el Puerto de la Capital.

**Compañía Tranways Puerto y Ciudad de Buenos Aires, sobre autorización para construir ramales en el Puerto.**

*Excmo. Señor:*

Consecuente con ideas que tengo manifestadas antes de ahora, reputo que todas las concesiones de tranways que afectan la zona del Puerto de la Capital, deben ser otorgadas por el Gobierno de la Nación. Entiendo que afectan esa zona todas las líneas que, aún con arranque dentro del antiguo municipio, llevan sus líneas al puerto, ocupando sus calles o arrastrando sus coches o vehículos por las líneas propias o neutras que allí existen.

Dos razones primordiales basan esta opinión.

La supremacía de la jurisdicción del Gobierno Nacional en cuanto a obras públicas, como los tranways de que se trata, en la Capital Federal; lo que surge de las leyes dictadas por el Congreso de acuerdo con el inc. 27 del art. 67 de la Constitución, así como de las facultades del P. E. establecidas por el inc. 3 del art. 86 de la misma.

La necesidad y conveniencia de que en la zona de construcción del puerto de la Capital y en sus adyacencias, no actúe otra autoridad en materia de obras públicas que la del Gobierno, que es quien tiene exclusivamente a su cargo la construcción y quien puede y debe discernir con más acierto, cuáles son las obras, las vías, y aún el movimiento que allí conviene tolerar o desenvolver.

De aquí pues que encuentre justificada la presentación de la compañía recurrente y de que V. E. tome en cuenta el pedido de concesión, resolviéndolo en pro o en contra según así lo aconsejen los informes técnicos que anteceden a los que V. E. crea conveniente oír para mayor ilustración del punto.

En cuanto a la jurisdicción municipal de que aquí se ha tratado, no veo la necesidad ni la oportunidad de entrar a deslindarla.

En mi sentir, la jurisdicción que V. E. ejerce en cuanto a la obra, a los detalles de su construcción y a los requisitos a satisfacerse en tal concepto y en relación al puerto y su movimiento, nada tiene que hacer con la que corresponde a la Municipalidad, a cargo de la cual están determinados servicios y atenciones que son perfectamente conocidos y que, por sí mismo determinan la intervención concurrente de tal autoridad.

Estas consideraciones unidas a la que he tenido ocasión de exponer antes de ahora al respecto (dictamen de mayo 23 de 1908), me inducen a pronunciarme en sentido favorable al pedido de la empresa recurrente, en la manera que ya lo he significado.—Febrero 17 de 1909.

=====

Reconocido el carácter diplomático de un Cónsul General, puede darse curso a un pedido de extradición formulado por él, siempre que ofrezca a nombre de su gobierno la reciprocidad para casos análogos.

**Cónsul General de Dinamarca, sobre extradición  
de George Emile Petersen.**

*Excmo. Señor:*

Reconocido en carácter diplomático el Sr. Cónsul General de Dinamarca, a los efectos de los pedidos de extradición a nombre de esa potencia; creo que puede darse curso al presente, de acuerdo con la ley que rige la materia, (art. 646 del Cód. de Procedimiento Penal) a falta de tratado en vigencia.

En los antecedentes acompañados se hallan reunidos los requisitos del art. 673 y sus correlativos 671 y 672 del Código citado.

En consecuencia creo que V. E. puede dar curso a esta requisitoria, mandando pasar los antecedentes al Sr. Juez Federal en turno a los efectos de la orden de detención provisoria que se pide contra el súbdito dinamarqués que se expresa en la precedente comunicación.

Tal diligencia deberá ser ordenada por V. E. una vez que el Sr. Cónsul requirente ofrezca a nombre de su gobierno la reciprocidad para casos análogos como expresamente lo requieren las disposiciones legales citadas. — Febrero 18 de 1909.

=====

El tiempo que el solicitante ha estado con licencia debe computársele a los efectos de la jubilación.

**Don Juan Villaseca, sobre jubilación.**

*Excmo. Señor:*

La consideración que se hace en la resolución precedente, basándose en el art. 20 de la Ley 4349 para no computar el tiempo que el recurrente se ha encontrado con licencia, es contraria a la interpretación lógica que se le ha dado por V. E. a ese artículo, conforme a la opinión que he tenido oportunidad de manifestar en casos análogos.

En el expediente Dorrego de Sellanes, solicitando jubilación, dije que el hecho de que la postulante haya estado con licencia no destruye la circunstancia innegable de que se hallara en su puesto, sin caer en las interrupciones previstas en el art. 20 de la Ley 4349, desde que por la licencia concedida, el empleado no ha dejado de estar en servicio y a disposición de su superior, que pudo llamarlo en cualquier momento con sólo retirarle aquélla, lo que significa que, los servicios no se han interrumpido en ningún momento, (decreto del P. E. publicado en el Boletín Oficial de fecha 20 de enero de 1908).

En el presente caso análogo al citado, reproduzco las razones expresadas allí, y por ello soy de opinión que V. E. debe mandar reformar la liquidación practicada, en el sentido de computar al empleado don Juan Villaseca los servicios de que se hace mérito, y que la Junta desconoce. — Marzo 9 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4676, pág. 35 de julio 2 de 1909.*

=====

Los servicios prestados en comisión no se computan para fijar el tiempo de la jubilación, pero no producen interrupción en el servicio a los efectos de acordar dicha jubilación.

### **Angela y María Carrasco, sobre pensión.**

*Excmo. Señor:*

La resolución precedente de la Junta de Administración de la Caja de Pensiones, ha aplicado correctamente el art. 3, inc. 5 de la Ley 4349, en cuanto no computa los servicios prestados durante el tiempo en que el Dr. Carrasco ejerció una comisión accidental en la Exposición de París. La supresión introducida por la Ley 4870 al art. 2, inc. 1 de la Ley 4349, quitando la palabra *permanente*, no importa modificar el citado inc. 5 del art. 3, puesto que éste se refiere a la calidad de las funciones desempeñadas, y la modificación al inc. 1 del art. 2 sólo atañe a la duración de los servicios.

Pero considero inaceptable la causal que se invoca para negar la jubilación solicitada. Los servicios prestados al país por el Dr. Carrasco en el cargo de comisionado a la Exposición Interna-



cional de París, si bien, como lo digo, no deben computarse al efecto de la jubilación, no han producido la interrupción en el servicio a que se refiere la segunda parte del art. 20 de la misma ley, pues que dicho empleado continuó prestándolo a la administración en el puesto que fué designado.

Aparte de la evidente injusticia que se cometería privando de la jubilación adquirida por el desempeño de funciones efectivas, a un funcionario a quien se le confían comisiones accidentales, encuentro que atendíendose al mismo espíritu del citado art. 20, la interrupción que perjudica los derechos anteriores, es la causada por el abandono completo de los servicios administrativos.

No es exacto que el art. 12 de la Ley 4870 haya establecido de un modo terminante que únicamente el desempeño de cargos electivos nacionales, no se computará a los efectos de la interrupción, pues en los términos del artículo no se halla esa exclusividad, y de la discusión del proyecto sostenido en la Cámara de Diputados, se ve que las mismas razones que movieron a eximir a los que desempeñasen cargos electivos, de la interrupción de servicios que establece el art. 20 recordado, podría aplicarse a las funciones accidentales, como las ejercidas por el Dr. Carrasco que son igualmente dignas de consideración.

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. no debe aprobar la resolución precedente, y resolver los antecedentes a la Junta, para que practique la liquidación correspondiente, en la forma consignada por el Sr. Asesor de la misma. — Abril 24 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4923, pág. 88 de mayo 6 de 1910.*

=====

Una vez fijada la jubilación, no es procedente la reconsideración.

**Don Antonio Carrozzi, reclama sobre reducción de sus haberes como jubilado.**

*Excmo. Señor:*

Ante todo, reproduzco el dictamen formulado en el expediente agregado por el ex Procurador General de la Nación Dr. Sabiniano

Kier, con fecha 29 de noviembre de 1897, en el que expresa los peligros que trae a la administración pública, las reconsideraciones de las resoluciones definitivas, y añadiré algunas de las razones dadas por el mismo distinguido funcionario, en otro expediente fundando un dictamen análogo.

“Si las cuestiones tanto judiciales como administrativas, han de tener fin, como lo han prescripto las leyes, en beneficio lo mismo de la comunidad que de los intereses privados; si el orden público se interesa en que los derechos adquiridos, bajo el amparo de resoluciones definitivas queden inconvencibles, si el crédito de la administración exige que sus disposiciones sean una realidad para todos, extrañas a los cambios de personal y a las situaciones políticas e influencias accidentales, es necesario que las resoluciones gubernativas no sean susceptibles de recursos de reconsideración, que mantendrían viva e indefinida la discusión de lo ya resuelto. De otro modo, no habrá régimen administrativo ni judicial posible, cada cambio de personal administrativo, daría ocasión a un procedimiento nuevo en expedientes concluidos y archivados.”

A mayor abundamiento, diré, que en el caso sub-júdice, no existe ningún motivo de importancia que aconseje alterar esa regla invariable, fijada por el P. E., y como lo aconseja la Junta de la Caja de Pensiones, debe mantenerse el decreto de fecha 4 de junio de 1895, que resuelve de manera equitativa la situación del recurrente.

Debo agregar, que conforme a lo que dispone el art. 1 de la Ley 4349, y tratándose de una jubilación que fué concedida de acuerdo con la Ley 2219, debe atenderse a su pago con los fondos y rentas de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. — Abril 27 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4750, pág. 119 de septiembre 6 de 1909.*

=====

Los procuradores fiscales federales no pueden ejercer además cargos administrativos o judiciales electivos de las provincias en donde residen.

**Procurador Fiscal Nacional de Córdoba, Dr. Núñez, observa los fundamentos de la circular de fecha 21 de abril de 1909, referente a la incompatibilidad de cargos.**

*Excmo. Señor:*

El Sr. Procurador Fiscal ante el Juez Federal de Córdoba, Dr. Rafael Núñez, al acusar recibo de la circular de V. E. de fecha 21 del corriente, observa que los fundamentos de dicha circular no encuadran en la ley citada, ni están conformes con los precedentes que al respecto podrían invocarse, y sostiene que el cargo que desempeña no es incompatible con el de Diputado a la Legislatura de aquella Provincia que también ejerce.

Todo esto, en mi sentir, es equivocado.

En circular, V. E. recuerda que el P. E. ha considerado siempre que el cargo de Procurador Fiscal ante la Justicia Nacional, es incompatible con el de miembro de algunos de los Poderes Provinciales, o con el de empleado a sueldo de cualquier administración pública.

Agrega, que posteriormente a la fijación de este criterio, consagrado mientras desempeñaba el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el actual Presidente de la Suprema Corte, Dr. Bermejo, la Ley 4578, en sus arts. 7 y 8, ha establecido penas especiales contra "los miembros de la justicia federal y local de la Capital y de las Provincias, comprendidos los Jueces de Paz, Asesores, Fiscales, Defensores y Secretarios, que directa o indirectamente tomen participación política, o que, en cualquier tiempo, hagan acto de adhesión extensible o de oposición manifiesta con relación a los partidos políticos existentes o en formación, salvo el derecho de emitir su voto".

Y termina haciendo presente a los Procuradores Fiscales que, si se hallan en el caso denunciado, deben optar inmediatamente por el cargo que prefieran continuar desempeñando, en defecto de lo cual el P. E. adoptará las medidas que correspondan.

Nada encuentro que objetar, ni del punto de vista de incompatibilidad en el ejercicio conjunto del cargo de Procurador Fiscal

General y el de miembro de algunos de los Poderes Provinciales o el de empleado a sueldo de cualquier administración pública, ni por lo que se refiere a la intervención de dichos funcionarios en las contiendas locales, que les está expresamente prohibida por la disposición legal citada por V. E.

En el año 1893, en una consulta dirigida a ese Ministerio por el Procurador Fiscal de la sección de Jujuy, Dr. Lucas V. Rocha, a fin de saber si existía incompatibilidad entre el cargo que desempeñaba y el de Diputado de la Legislatura de la Provincia, el entonces Procurador General de la Nación, Dr. Kier, decía: "No conozco prescripción alguna de la Constitución Nacional, de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial de la Nación que prohíba a los representantes fiscales el ejercicio del cargo de Diputado Provincial. De la separación e independencia de los Poderes Judiciales de la Nación y Legislativo de la Provincia; el conflicto que podría resultar de la sujeción del fiscal en el orden judicial y la amplitud de garantías e inmunidades atribuídas a los miembros del Poder Legislativo, según la Constitución de Jujuy, podría decirse, empero, sin violencia la incompatibilidad en el ejercicio conjunto de ambos cargos" (Digesto de Justicia, pág. 632).

En 1897, el Dr. Antonio Bermejo, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, se dirigió al Procurador Fiscal ante el Juzgado de San Luiz, Dr. S. Igarzábal, a fin de que se sirviera manifestar si era su intención continuar en el cargo de Ministro de Gobierno o en el de Procurador Fiscal "para adoptar según el caso la medida que corresponda".

"Conceptúa este Ministerio, agregaba, que si bien no existe decisión que establezca expresamente la incompatibilidad entre ambos puestos, ésta resulta del hecho mismo, pues no parece regular que un funcionario que ocupa un cargo importante en la administración sirva al mismo tiempo en la provincial otro también importante, quedando sujeto a una doble dependencia difícil de conciliar."

Como el Dr. Igarzábal no contestara esa nota se dictó un decreto declarando la vacancia del referido puesto de Procurador Fiscal de sección de San Luis, y se nombró en su reemplazo, al Dr. Delfín N. Baca (Digesto de Justicia, pág. 648).

En 1899, siendo Ministro el Dr. Magnasco, el Dr. Baca desempeñaba, además del cargo de Procurador Fiscal, el de miembro del

Superior Tribunal de San Luis. Se le ordenó opción y contestó que optaba por la Fiscalía Nacional.

Y en 1904, la Suprema Corte ha declarado, en el caso del Procurador Fiscal de Corrientes, Dr. Ricardo Osuna, que son incompatibles los cargos de Procurador Fiscal de sección y Agente Fiscal de los Tribunales de Provincia (Fallos, tomo 100, pág. 266).

Dados estos antecedentes, no puede haber duda de que el cargo de Procurador Fiscal ante la Justicia Nacional es incompatible con el de Diputado a una Legislatura de Provincia, máxime teniendo en cuenta que dichos funcionarios reemplazan a los Jueces Federales en los casos de recusación, impedimento, vacancias o licencias de éstos (Ley 4162, art. 3).

Por ello, y atentos los términos de la contestación del Sr. Procurador Fiscal de Córdoba, Dr. Rafael Núñez, opino que el P. E. debe declarar la vacancia de dicho puesto. — Abril 27 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4627, pág. 1280 de Abril 30 de 1909.*

=====

Los religiosos profesos a quienes se refiere el art. 1160 del Código Civil incapacitándolos para contratar, son tan sólo aquellos que pertenecen a comunidades reconocidas por ley.

### **Don Bernardo Vacchina, sobre escrituración de tierras.**

*Excmo. Señor:*

La disposición del art. 1160 del Cód. Civil que incapacita para contratar a los religiosos profesos, tiene por causa su dependencia de las comunidades monásticas en que ingresan, con lo que pierden su capacidad de obrar, conforme a los estatutos a que están sujetos. Pero para que la prescripción de la ley se cumpla, es necesario que la comunidad religiosa, sea de las reconocidas por la ley, pues si no lo fuera, no sería tal comunidad en la República, y desaparecería el motivo de la incapacidad.

Soy de opinión por ello, que V. E. debe hacer lugar al pedido del ocurrente, ordenando la escritura pedida. — Abril 27 de 1909.

=====

En una concesión de obra pública procede la formación de un tribunal arbitral para que dirima las diferencias suscitadas entre el Poder concedente y el concesionario, con motivo de perjuicios sufridos por éste, que tienen su origen en causas de fuerza mayor.

**Ingeniero don Miguel Estrada, contratista de las Obras de Salubridad de la ciudad de Santa Fe, cobrando diferencias de precios.**

*Excmo. Señor:*

El Ingeniero don Miguel Estrada, contratista de las cloacas de la Ciudad de Santa Fe, ha solicitado el aumento de precio en algunas obras de las contratadas y el precio de otras fuera de presupuesto, dividiendo su reclamo en las siguientes categorías:

I. Diferencias de precios ocasionados por la creciente extraordinaria del río Paraná.

II. Trabajos fuera de presupuesto.

III. Trabajos distintos a los proyectados y presupuestados.

IV. Supresión de trabajos complementarios.

Como la Dirección General de Obras de Salubridad resolviera el reclamo en una forma que no convenía a los intereses del Sr. Estrada, éste se presentó ante V. E. pidiendo que el P. E. se pronunciara sobre el asunto, o acordara someterlo a la jurisdicción arbitral.

El P. E. en septiembre de 1908, desestimó el pedido, dejando librada su resolución a la Dirección General de Obras de Salubridad.

No habiendo conseguido el contratista, llegar a un arreglo con esa repartición, se presenta nuevamente ante V. E. solicitando la constitución de un tribunal arbitral, para que se resuelvan todas las cuestiones y reclamaciones que tiene formuladas.

Desde luego, Excmo. Señor, debo manifestar que, a mi juicio, no puede discutirse la facultad del P. E. para resolver este asunto como lo estime conveniente. A las consideraciones aducidas por el Sr. Procurador General Titular, en su dictamen de fs. 61, que hago mío y doy por reproducido en lo que a ese punto se refiere, hay que agregar que el contrato para la construcción de las obras de que se trata sólo fué celebrado *Ad-referendum* entre el Director General

de las Obras de Salubridad y el Ingeniero don Miguel Estrada, pues el P. E., en acuerdo de Ministros, al aprobar la licitación y aceptar la propuesta presentada por Estrada, mandó devolver el expediente a dicha repartición, para que firmara el contrato respectivo, “que será sometido, decía el decreto, a la aprobación del P. E. en oportunidad”. (Decreto de fecha 27 de octubre de 1904. Boletín Oficial N° 3312, de octubre 29 del mismo año.)

Y así se hizo. Elevado el proyecto de contrato, el P. E. le prestó su aprobación en los siguientes términos: Aprobar el contrato *ad-referendum* celebrado entre el Director General (Decreto de fecha 12 de noviembre de 1904, Boletín Oficial N° 3324, de noviembre 15 del mismo año).

Establecido, pues, que el P. E. es el que, en realidad ha celebrado el contrato con el recurrente, no cabe suponer, ni sería dado admitir, que aquél, se ha desprendido de facultades que le son propias, para dejar en manos de la Comisión de Obras de Salubridad la solución de todas las cuestiones o divergencias que pudieran suscitarse con motivo de la ejecución del mismo contrato.

Así, también, lo ha entendido V. E., al dictar el decreto de junio 11 de 1908, por el que se manda devolver este expediente a la Dirección de Obras de Salubridad, “a fin de que, una vez producido el informe de la Sección Técnica a que se hace referencia, y estudiado que sea por la Comisión, *lo eleve a la consideración del Ministerio*, para la resolución que estime corresponder” (Fs. 45 vta.).

Dice el Ingeniero Estrada, “que razones de fuerza mayor, in-  
“ convenientes imprevistos, errores de proyectos, deficiencias de los  
“ mismos, variaciones de jornales, han motivado la reclamación de  
“ resarcimiento de daños, pagos de obras imprevistas, modificaciones  
“ sobre las proyectadas diferencias de precios de materiales y jor-  
“ nales”, e invoca la equidad, la Ley de Obras Públicas, las opinio-  
nes de la Contaduría General y Procurador General titular, como  
asimismo algunos casos resueltos por el P. E. de acuerdo con la  
doctrina que sustenta, para solicitar la constitución de un tribunal  
arbitral, que resuelva todas las cuestiones que tiene formuladas.

En mi sentir, Excmo. Señor, debe accederse a este pedido. Se trata de un contratista de buena fe, que ha llevado casi a término las obras contratadas, y cuya ejecución la ha irrogado, a estar a lo que afirma el Dr. Miguel Esteves, “no ya la privación del lucro,

“sino la pérdida de todos sus bienes, fruto de varios años de trabajo bajo y sacrificios” (Carta de fs. 73).

Las causales invocadas por Estrada, por lo que hace a los puntos o cuestiones que no se hallan especialmente regidos por el art. 41 de la Ley de Obras Públicas, son muy de tenerse en cuenta, para deferir la solución de este asunto al juicio de peritos árbitros. Las crecientes extraordinarias del Paraná, que le obligaron, según dice, a paralizar los trabajos durante año y medio, “siendo en dicho tiempo cuando aumentaron considerablemente los jornales y disminuyó la jornada de 10 horas a 8”, bien pueden constituir la causa de fuerza mayor, que haga viables sus pretensiones, en cuanto al aumento de precio de la mano de obra. El tribunal arbitral estudiará estos puntos y los resolverá como corresponda.

En el caso de don Francisco Lavalle, citado por el Ingeniero Estrada, el P. E. sometió a la decisión de árbitros el costo de unas obras. “Tratándose de una rescisión que ha tenido por base, dice “el decreto, el reconocimiento implícito de una causa de fuerza mayor, los valores a reconocerse *no deben fijarse por una sola de las partes sin el consentimiento de la otra*, y mediando discordancia respecto a la partida excavación, cuya diferencia entre el precio del contrato y el costo efectivo aparece ser de \$ 11.142,05 m/n., *sería justo consentir en el arbitraje pedido para la solución definitiva de esta cuestión*”. (Decreto de fecha 13 de septiembre de 1907, Boletín Oficial N° 4150, de septiembre 16 del mismo año.)

Por lo que toca a los trabajos fuera de presupuesto y trabajos diversos a los proyectados, es de estricta aplicación el art. 41 de la Ley de Obras Públicas, que dice: Si los precios no pudieran determinarse por analogía, se avaluarán por el Ingeniero Inspector de acuerdo con el contratista, y en caso de discordia serán fijados por peritos árbitros.

Pienso pues, Excmo. Señor, que, de conformidad con la Ley de Obras Públicas, en lo que se refiere a las cuestiones en ella comprendidas, y por equidad, en cuanto a las que no están regidas por la disposición citada, debe accederse a lo pedido por el Ing. Estrada, sometién dose a la decisión de árbitros las reclamaciones por él formuladas. — Mayo 12 de 1909.

=====



Los representantes diplomáticos extranjeros, por hallarse exentos de la jurisdicción del país en que residen, no pueden ser requeridos para prestar declaración judicial, sino por medio de oficio dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores, el que, a su vez, requerirá dicha declaración del diplomático, si éste no tiene inconveniente en prestarla.

**Juez Dr. Helguera, pide que el Sr. Ministro de Francia preste una declaración jurada.**

*Excmo. Señor:*

Los Ministros Diplomáticos, por hallarse exentos de la jurisdicción del país en que residen, no pueden ser requeridos sino de conformidad con las prácticas consagradas por el Derecho Internacional, de modo que, en el caso, deberá dirigirse V. E. al Sr. Ministro de Francia, pidiéndole se sirva contestar, bajo juramento, las preguntas contenidas en el presente interrogatorio, si para ello no tuviera inconveniente.

Observo sin embargo, que el Sr. Juez requiriente ha debido hacer el pedido por intermedio del Departamento de Justicia con sujeción a lo resuelto por la Suprema Corte en la causa que se registra en el tomo 97, pág. 274, de sus fallos. Según el Alto Tribunal, en los casos que se soliciten informaciones de Agentes Diplomáticos, los Jueces deberán hacerlo sujetándose a las formas consagradas por el Derecho Internacional, dirigiendo oficio al Sr. Ministro de Justicia, para que por intermedio del de Relaciones Exteriores, les dé el curso correspondiente. — Mayo 20 de 1909.

=====

No corresponde dar curso a notificaciones o emplazamientos suscriptos por ujieres o empleados inferiores de tribunales extranjeros. La legislación argentina y las prácticas internacionales han establecido que es por medio de exhortos de jueces competentes de un país a otro que deben tramitarse las diligencias judiciales.

**Legación Americana, pide se haga una notificación a nombre del Gobierno Egipcio al "London & River Plate Bank".**

*Excmo. Señor:*

Como lo tiene aconsejado esta Procuración General, en casos

semejantes al presente, las requisitorias presentadas por los señores Ministros Diplomáticos que acompañan simplemente notificaciones o emplazamientos suscriptos por Ujieres o empleados inferiores de los Tribunales extranjeros, no deben ser admitidos para dárseles el curso de estilo, pues carecen de las formas y requisitos exigidos por nuestra legislación y por las prácticas internacionales. Estas han admitido uniformemente que es por medio de exhortos de Jueces competentes dirigidos a otros de igual categoría, que deben tramitarse las diligencias judiciales de un país a otro, y sólo en esta forma nuestros Tribunales podrían tomar conocimiento de la requisitoria que se les hace, para acordarla en el caso de que fuere procedente.

Estimo, por lo expuesto, que V. E. no debe dar curso al pedido pasado a mi dictamen. — Mayo 21 de 1909.

=====

Los cónsules argentinos no pueden hacer anotaciones en los registros de nacimientos sin orden del juez competente, cuando se piden fuera de los plazos legales.

**Vicecónsul de Antofagasta, consulta sobre anotaciones  
en el Registro Civil.**

*Excmo. Señor:*

Como ya lo tiene manifestado esta Procuración General, en una consulta semejante dirigida por el Vice-Cónsul en Milán, los funcionarios de esta naturaleza, no pueden hacer anotaciones en los registros de nacimientos, sino de acuerdo con las leyes de la República, conforme a lo que dispone el art. 14 de la Ley 4712, y por consiguiente, la inscripción del nacido en la Ciudad de Santa Fe, que no lo fué en el plazo legal, sólo puede verificarse de conformidad a la Ley de Registro Civil y mediante orden de Juez competente, que deberá ser requerida por persona interesada.

Pero nada obsta que los Cónsules registren en sus libros los reconocimientos de hijos naturales que se hagan ante ellos, en la forma que lo marca el art. 107 del Decreto Reglamentario de la Ley Consular por tratarse de actos para los que tienen atribuciones propias, confiadas por la citada ley, art. 14, y que tendrán valor

en toda la República, siempre que fueren extendidos conforme a su legislación.

Estimo que con lo expuesto, queda evacuada la consulta que V. E. se ha servido hacerme. — Mayo 31 de 1909.

=====

Sólo las autoridades judiciales pueden solicitar la extradición de delincuentes (en el caso, la extradición fué pedida por un gobernador de territorio nacional).

**Gobernador de Neuquén, pide que se solicite de las autoridades de Chile la captura del sujeto Manuel Jesús Soto.**

*Excmo. Señor:*

Soy de opinión de que V. E. no debe hacer lugar a lo que se pide en la nota precedente, y en la forma que corresponda, hacer saber al Sr. Gobernador de Neuquén, que son únicamente las autoridades judiciales las que pueden solicitar la extradición de delincuentes, por delitos sometidos a su conocimiento, y una vez llenadas las formalidades que se exigen para tales diligencias. Así lo dispone el art. 647 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal, y está establecido por los usos diplomáticos. Las autoridades administrativas no pueden formular pedidos de extradición, desde que no les compete el juzgamiento de criminales, ni se hallan en condiciones de llenar el requisito indispensable para que sea procedente, como lo es la sentencia condenatoria o el mandato de prisión, exigido por el art. 651, inc. 1 del mismo Código. — Junio 8 de 1909.

=====

Para establecer un cruce a nivel entre líneas de dos empresas distintas, no es necesario la conformidad de la empresa cuya línea es cruzada; para ello es suficiente la autorización que confiera el P. E., la que, una vez otorgada, no implica la constitución de un derecho adquirido.

**Ferrocarril Central Argentino, sobre cruce de vías.**

*Excmo. Señor:*

El capítulo III de la Ley de Ferrocarriles, que se ocupa de los

gravámenes que deben sufrir las Empresas, contiene en el art. 16 las reglas a que debe sujetarse el cruzamiento de las vías de un Ferrocarril por las de otro en construcción, y dice que una Empresa no podrá oponerse a que se empalme con sus líneas, o sean éstas cruzadas por arriba o por debajo, con tal que los trabajos que se hicieran al efecto, no interrumpen el servicio regular de los trenes de la línea primitiva.

El propósito bien inspirado de esta disposición, es dar facilidades para que los nuevos Ferrocarriles que se proyecten en el territorio de la República, puedan trazar libremente sus líneas donde las necesidades de la industria y de la población llamen estos poderosos conductores de la riqueza, sin que en su camino vean levantarse vallas que interrompan su avance, movidas por el interés de las Empresas ya establecidas, que aspiran a conservar para su proyecto exclusivo las zonas que abarcan, y excluir la competencia que pudieran traerle los futuros Ferrocarriles. Con la única limitación que impone el servicio regular de los trenes, la disposición que autoriza el cruzamiento de líneas, no tiene ninguna restricción, en cualquier forma que se verifique, y el mismo artículo prevee las medidas que deben tomarse para garantizar la seguridad del tráfico. Si el cruce fuera a alto o bajo nivel, ninguna precaución es necesaria, pero si lo fuese al mismo nivel, la segunda parte del artículo ordena la colocación en el punto de intersección, de una casilla y de un guarda camino, encargado de hacer las señales tendientes a evitar choques o contratiempos en el servicio, requiriéndose, asimismo, el permiso del P. E., que nunca importará un derecho adquirido. De suerte que, a estar a lo que prescribe el artículo recordado: a) las Empresas Ferroviarias no pueden oponerse al cruzamiento de sus líneas; b) en caso de ser el cruce a nivel, será autorizado por el P. E.; c) este permiso no importará un derecho adquirido. Sentadas estas proposiciones, la solución del caso sometido a la decisión del P. E., surge de los mismos términos en que ha sido planteado.

El derecho del Ferrocarril Central Argentino, a cruzar las vías del Ferrocarril Córdoba y Rosario, es indudable y está consagrado de una manera categórica por la ley, que prima sobre cualquier decreto que hubiese dispuesto lo contrario, de manera que, una vez que ha llenado las exigencias fijadas para tales casos, no puede coartársele en el uso de una facultad legítima y expresamente acor-

dada. Las razones que en contrario se han formulado, no merecen tomarse en cuenta, pues no se apoyan en ningún fundamento sólido; el Decreto del P. E., de fecha 27 de diciembre de 1889, es anterior a la Ley de Ferrocarriles, sancionada el 24 de noviembre de 1891, y aunque así no fuera, nunca podría derogar la ley (art. 86, inc. 2 de la Constitución); es inexacto que de los términos del art. 16 de la Ley de Ferrocarriles pueda deducirse, ni aún implícitamente, que para los cruces a nivel, se requiere la conformidad de la Empresa, cruzada, pues, aparte de que ello contraría la amplitud con que el artículo autoriza los cruzamientos, si su propósito fuere someter a una Empresa a la voluntad de la otra, debió consignar expresamente tal exigencia, por cuanto importando una restricción a la libertad de obrar, no podría invocarse mientras la ley no lo hubiera establecido.

El P. E. ha ejercitado una atribución que la ley le acuerda, al permitir el cruce a nivel que le fué requerido por la Empresa del Ferrocarril Central Argentino, y bajo este concepto, nada puede observarse al Decreto de fecha 1 de marzo del corriente año, desde que se ajusta en un todo a la disposición legal respectiva, por lo que considero que V. E. debe mantenerlo. Más, si la Empresa del Ferrocarril Córdoba y Rosario estima que ha sido agraviada en sus derechos, por los actos del Ferrocarril Central Argentino, tiene indicado el camino a seguir, por el art. 24 de la ley de la materia, que confía a la decisión de árbitros designados ante el Juez competente, las cuestiones que se suscitaren entre las Empresas, y nunca será un óbice para el ejercicio de tal derecho, el mantenimiento del Decreto de 1º de marzo, puesto que como ya lo dije, los permisos del P. E. relativos a los cruzamientos de vías, no importan derechos adquiridos.

Soy de opinión, por lo expuesto, que V. E. no debe hacer lugar a la reconsideración pedida. — Junio 25 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4694, pág. 577, de 21 de julio de 1909.*

=====

Las denuncias formuladas ante el P. E. contra funcionarios judiciales federales deben pasarse a la Suprema Corte.

**Gobernador de San Juan, formulando una denuncia contra los funcionarios a cuyo cargo se encuentra el Juzgado Federal de dicha Provincia.**

*Excmo. Señor:*

La denuncia que formula el Sr. Gobernador de San Juan, contra los funcionarios a cuyo cargo se encuentra el Juzgado Federal de dicha Provincia, daría lugar, en caso de comprobarse su exactitud, a que la Suprema Corte ejerciera la superintendencia que le acuerda el art. 2º de la Ley 4055, por lo que conceptúo, debe V. E. remitir estas actuaciones al expresado Tribunal a los efectos que hubiere lugar. — Junio 28 de 1909.

=====

Los pedidos de reextradición sólo pueden acordarse con el consentimiento del país requerido, y para que éste se halle en condiciones de prestarlo, debe suministrársele los antecedentes de la respectiva solicitud, para que pueda apreciar si encuadra dentro de los requisitos exigidos por su legislación interna.

**Legación de Francia, sobre reextradición pedida por la Legación de Bélgica, de Eugenio Próspero Beele.**

*Excmo. Señor:*

La Legación de Francia requiere de V. E. el consentimiento que le es necesario, para hacer lugar a un pedido de reextradición formulado por el Gobierno de Bélgica, respecto del sujeto Eugenio Próspero Beele, cuya extradición fué acordada por nuestras autoridades a solicitud de la expresada Legación.

Para que el Gobierno argentino pueda prestar el consentimiento requerido, estimo indispensable que previamente se le instruya de los antecedentes del pedido de reextradición formulado por el Gobierno de Bélgica, a fin de hallarse en condiciones de juzgar si ese pedido se encuentra dentro de las reglas que fija nuestra legislación para tales casos y sólo, en esas condiciones, dar su aquiescencia para

que el Gobierno francés acuerda la reextradición que se le ha solicitado.

A falta de tratado de extradición con Francia, la solicitud en trámite debe resolverse por la práctica uniforme de las naciones (art. 646 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal), y ésta ha restablecido, entre los efectos restrictivos de la extradición, que el Estado requiriente, no podrá hacer lugar a un pedido análogo que se le formule, sin el consentimiento del Estado requerido, pues éste conserva su jurisdicción sobre el extraído, de la que se desprende únicamente a los efectos del juzgamiento de los delitos en cuya virtud acordó la extradición, teoría que ha sido adoptada por nuestra legislación (art. 8 de la Ley 1612).

Para mantener esa jurisdicción, el imperio de las leyes argentinas sobre el sujeto que por su residencia se encontraba sometido a ellas, V. E. debe pedir se le exhiban los documentos con que se ha formulado el pedido de reextradición, y si estuviera conforme con las exigencias de nuestras leyes, para la entrega de delincuentes refugiados en la República, prestar su consentimiento para que el Gobierno francés defiera a lo solicitado por el Gobierno de Bélgica.

Doy, con lo expuesto, por evacuada la consulta que V. E. se ha servido hacerme. — Julio 10 de 1909.

=====

El hecho de que haya pasado algún tiempo entre la presentación de la renuncia de un funcionario que pensaba acogerse a los beneficios de la jubilación extraordinaria y el ulterior reconocimiento por el Consejo de Higiene a los efectos de acordarle dicha jubilación, no constituye una presunción de que la imposibilidad haya sobrevenido en el tiempo que medió entre la renuncia y el reconocimiento médico.

**Don Daniel Anabia, solicita su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

No considero justa la resolución de la Junta de Administración de la Caja de Pensiones, que deniega la solicitud de don Daniel Anabia, ex Ujier de la Cámara de Apelaciones de la Capital, pues están justificados los extremos que exige el art. 19 de la Ley 4349 para tener derecho a la jubilación extraordinaria.

La circunstancia de que haya transcurrido un año entre la fecha en que el recurrente presentó su renuncia del puesto que desempeñaba, y el reconocimiento hecho por el Consejo de Higiene, no implica necesariamente que la imposibilidad sea sobreviniente, como lo afirma la Junta, máxime si se tiene en cuenta que en la nota de renuncia, se hacía presente el propósito de acogerse a los beneficios de la citada ley.

Existe jurisprudencia administrativa en el sentido que lo indico, sentada en el expediente de don Miguel Pascual Morro, resuelto por el P. E. Nacional, con fecha 17 de septiembre de 1906, en el cual se desestimó la resolución de la Junta de Pensiones, y se acordó la jubilación extraordinaria, en razón de haber comprobado el recurrente los años de servicios prestados, y estar imposibilitado para continuar en su empleo.

Es mi opinión, que V. E. debe resolver de una manera análoga el caso recurrente, acordando la jubilación pedida, en la forma aconsejada por la Contaduría de la Caja. — Julio 16 de 1909.

=====

Los gobernadores de provincias, como agentes naturales del gobierno federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación, están obligados a ordenar a los funcionarios de su dependencia que acaten las resoluciones de los jueces federales.

### **Incidente entre el Gobierno de la Provincia de San Juan y el Juez Federal de la misma.**

*Excmo. Señor:*

De los antecedentes que remite el Sr. Juez Federal interino de San Juan, resulta la procedencia de las diligencias adoptadas en el proceso incoado contra el Director de Rentas de la misma Provincia en el que ejerce jurisdicción expresamente acordada por la ley Nacional de Elecciones. La medida pericial ordenada por el Juzgado, está autorizada por el art. 118, incs. 2 y 3 de dicha ley, y la habilitación de horas, a fin de practicar diligencias de prueba, cuya urgencia resultaba de la circunstancia de fenecer el término probatorio, es una facultad elemental de los Jueces en la formación del sumario, que no ha podido ser desconocida.



Estimo, por tanto, que sólo por falta de meditación, han podido las autoridades provinciales de San Juan, estorbar el cumplimiento de las órdenes emanadas de la Justicia Nacional, en causas de su legítima competencia, que en manera alguna afectaban la autonomía de la Provincia, ni el funcionamiento de sus oficinas, desde que consistía únicamente en permitir el acceso a ellas por un breve espacio de tiempo, al Secretario del Juzgado de Sección con objeto de practicar una compulsa de libros.

La obligación de acatar las decisiones de los Jueces Federales, está consignada en el art. 13 de la Ley 48, de jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, la que es ley Suprema de la Nación, conforme al art. 31 de la Constitución, y que las autoridades de cada Provincia están obligadas a respetar, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan sus leyes o constituciones, y para obtener la ejecución de esas decisiones, las autoridades dependientes del P. E. Nacional, están en el deber de prestar todo el auxilio que fuere necesario (art. 13 citado).

El principio de la autoridad de la Nación, para hacer cumplir los mandatos de sus Jueces, está sólidamente establecido en la República, y sería insensato pensar que alguien puede negarse a prestar acatamiento a sus resoluciones osando alzarse contra las disposiciones de nuestra Carta Fundamental.

Soy de opinión, en presencia de estos antecedentes, que V. E. debe prestar el auxilio que le requiere el Sr. Juez Federal interino de San Juan, y a ese fin, dirigirse al Sr. Gobernador de la Provincia, a objeto de que, en su carácter de agente natural del Gobierno Federal, para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación (art. 110 de la Constitución), ordene a los funcionarios de su dependencia que acaten las órdenes del Sr. Juez de Sección, e instándole, para que use de todos los medios de que pueda disponer por la Constitución y las leyes de su Provincia, y evitar así el ejercicio directo de la autoridad del Gobierno de la Nación a los mismos propósitos. — Julio 16 de 1909.

=====

No procede solicitar de los representantes diplomáticos extranjeros ante el Gobierno Argentino, ni tampoco del Ministerio de Relaciones Exteriores, informes respecto a las leyes vigentes en países extranjeros, con el fin de utilizar dichos informes en el curso de un pleito judicial.

**Juez en lo Civil de la Capital, solicita se pida un informe  
al Sr. Ministro de España.**

*Excmo. Señor:*

Considero improcedente el pedido que formula el Sr. Juez en lo Civil de esta Capital, tendiente a requerir del Sr. Ministro de España un informe sobre interpretación de las leyes comunes de su país, para servir de medio de prueba en un pleito seguido entre partes ante su Juzgado.

En un pedido análogo al presente, el Sr. Procurador General titular, tuvo oportunidad de expedirse aconsejando no se le diera curso, por razones que V. E. aceptó en un todo, adoptándose como resolución el referido dictamen, que lleva fecha 18 de julio de 1908, y fué producido en la nota del Sr. Juez Andrés Baires, relativa al juicio sobre nulidad de un testamento de don Cayetano Zapata.

Reproduciré brevemente esas razones: el conocimiento de la legislación extranjera, aplicable a un caso particular sometido a la decisión de un Juez Letrado, se presume al alcance de las partes interesadas y dentro de los conocimientos del expresado Juez, y por ello el art. 13 del Cód. Civil establece que la aplicación de dichas leyes, en los casos que está autorizada, tendrá lugar a solicitud de parte, siendo de su cargo la prueba de la existencia de la misma. Conviene evitar que el debate judicial no siempre sereno, y en el que se ventilan intereses privados, arrastre en su incidencia el nombre y responsabilidad moral de un Ministro extranjero, que expide deferentemente un informe que una de las partes puede reputarlo perjudicial a sus derechos, y no conformarse con él, sin que exista ninguna disposición que obligue a admitir sus conclusiones.

Por lo expuesto, y en atención al precedente establecido, soy de opinión que V. E. no debe dar curso al pedido formulado. — Julio 17 de 1909.

=====

El Poder Judicial es el único facultado para interpretar la ley. El P. E. no debe evacuar consultas en este sentido, por cuanto violaría el art. 95 de la Constitución Nacional.

**Juez de 1ª Instancia de San Nicolás, pide informe sobre uso de terrenos expropiados por el Ferrocarril al Pacífico.**

*Excmo. Señor:*

El informe pedido por el Sr. Juez de San Nicolás, se refiere a la interpretación que debe darse a la Ley 3965, en lo relativo al uso y destino de los terrenos expropiados por la Empresa del Ferrocarril al Pacífico, de conformidad a la misma ley. Considero que V. E. está inhabilitado para expedir el informe que se requiere, y que debe devolverse el oficio al Sr. Juez de San Nicolás, haciéndole presente que son las autoridades judiciales de la República las que están encargadas de la interpretación y aplicación de las leyes, en los pleitos que tramiten ante sus respectivas jurisdicciones, y que esta facultad de interpretar la ley es de ejercicio privativo y exclusivo del Poder Judicial, conforme a la distribución de poderes establecida en la Constitución Nacional, sin que el P. E. pueda en ningún caso arrogarse su ejercicio, so pena de violar el art. 95 de la Constitución. — Agosto 3 de 1909.

=====

La reincorporación al servicio público de un empleado que ha sido indultado por el P. E., implica dejar sin efecto la condena, y, en consecuencia, que ésta ya no puede hacer perder al recurrente su derecho a la jubilación.

**Don Manuel M. Benítez, solicitando su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

La solicitud de jubilación del Sr. Manuel M. Benítez, desestimada por la Junta de Administración de la Caja Nacional, importa un pedido de reconsideración de la resolución del Sr. Ministro de Justicia, de fecha 18 de junio de 1904, que denegó, a mérito de lo dispuesto por el art. 15, incs. 1 y 2 de la Ley 2219, la primera solicitud de jubilación formulada por el recurrente.

Esta solicitud en consecuencia, se rige por la Ley 2219, en razón

de haber sido requerida la jubilación con fecha 8 de junio de 1904, mientras se hallaba en vigencia dicha ley, y la sanción posterior de la Ley 4349, de 10 de septiembre del mismo año, no modifica la situación del recurrente, atento lo que dispone en su art. 60, conforme al cual, sólo regiría desde la fecha de su promulgación.

Esto sentado, es indudable que la Junta de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, no ha tenido facultad para resolver la solicitud en trámite, desde que por la ley de su creación, sólo está autorizada para conocer y decidir las peticiones que se formulen con arreglo a la misma, y por los funcionarios, empleados y agentes civiles, que en adelante se acogieren a sus beneficios, según se desprende de los arts. 1, 8, 9 y 64 de dicha Ley 4349. Tratándose de una solicitud de reconsideración ministerial, y de la aplicación de leyes anteriores a su creación, la Junta ha debido limitar su intervención, como lo ha hecho en casos análogos, a asesorar al P. E. sobre el asunto, en su carácter de repartición administrativa a cuyo cargo se halla el pago y fiscalización de las jubilaciones y pensiones que gravitan sobre la Caja Nacional, sin entrar a decidir cuestiones que son ajenas a la Ley 4349, de cuya aplicación está encargada, ni menos constituirse en revisora de actos de V. E. tomados en ejercicio de atribuciones de privativa incumbencia.

La resolución precedente, en consecuencia, debe considerarse como una mera opinión de la Junta que la expide, y V. E. debe entrar a decidir directamente la petición presentada.

Ahora bien, la resolución denegatoria del Sr. Ministro de Justicia, se fundaba en el art. 15, incs. 1 y 2 de la citada ley, que establece como causas por las cuales no se puede optar a la jubilación, la separación por mal desempeño de los deberes de su cargo, y haber sido condenado por sentencia de Juez competente como autor o cómplice de delito castigado por las leyes comunes. Respecto a la primera de estas causales, sólo existe la referencia hecha en el decreto recordado, no apareciendo que se haya comprobado debidamente, y por el contrario de las actuaciones precedentes, resulta que los delitos imputados a Benítez, fueron por actos extraños al desempeño de sus funciones, y que en éstas llenó cumplidamente las obligaciones de su cargo, con lo cual no sería de aplicación el recordado inc. 1 del art. 15.

En cuanto a la segunda, ha sido reconocida por el recurrente y resulta de otros antecedentes, de que se hará mención. Mas, se

arguye que si bien el recurrente fué condenado en primera instancia por el ex Juez del Crimen Dr. French, a sufrir la pena de tres años de prisión por el delito de defraudación, dicha sentencia se encontraba en apelación ante la Cámara y el indulto acordado por el P. E. Nacional, en decreto de fecha 25 de mayo de 1903, vino a borrar el delito cometido y la condenación impuesta, con lo que desapareció a su respecto la inhabilidad legal recordada.

Es indudable, a estar a los términos expresos del mencionado inc. 2 del art. 15, que la inhabilidad para optar la jubilación, resulta de la condenación impuesta por sentencia de Juez competente en los casos especiales que se determina y por consiguiente, la ley exige que el individuo haya sido condenado para negarle tal derecho. En el caso ocurrente, Benítez no se encuentra dentro de la circunstancia expresada, pues no existe la sentencia de Juez competente que le imponga una condenación, como autor o cómplice, desde que la dictada en primera instancia no quedó firme en razón de la apelación interpuesta, y el indulto acordado por el P. E. vino a suprimir el proceso en trámite, sin que se hubiere llegado a la condenación de Benítez por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

De suerte que el peticionante no se halla en la situación de condenado, que determina la ley como causal para negarle la jubilación, y en consecuencia, no es posible aplicarle la inhabilidad que resulta del inc. 2 del art. 155 ya citado.

No es el caso de entrar a la discusión sobre la amplitud del indulto concedido por el P. E., ni sobre las facultades del Presidente de la República al respecto, pues ni lo uno ni lo otro se halla en debate ni ha sido contradicho, y siendo el P. E. el que debe resolver la presente solicitud, su decisión debe armonizar con la teoría sentada en el decreto que acordó el indulto pedido por Benítez, que es la misma aplicada en diversos casos análogos, según la cual el Presidente puede no sólo indultar al que esté condenado por Juez competente, sino también al que se halle procesado, con lo cual suprime la causa pendiente.

Por lo expuesto, soy de opinión que V. E. no obstante lo dictaminado por la Junta de Administración, debe acordar la jubilación pedida por don Manuel M. Benítez en los términos de los arts. 2 y 3 de la Ley 2219. — Agosto 4 de 1909.

=====

No corresponde dar trámite diplomático al exhorto de un juez argentino dirigido a las autoridades judiciales extranjeras requiriendo extradición, si no contiene el testimonio del auto que decreta la diligencia, la sentencia de condenación si se trata de un condenado, o el mandato de prisión con la designación de la fecha del crimen o delito que la motiva, si se trata de un procesado.

**Juzgado de Instrucción de Salta, pide se remita a las autoridades judiciales chilenas un exhorto requiriendo la extradición de un encausado.**

*Excmo. Señor:*

El art. 651 del Cód. de Procedimientos en lo Criminal, que determina los recaudos que deben contener los exhortos en que se solicite la extradición de delincuentes, dice que habrá de remitirse un testimonio literal del auto que decreta esta diligencia, y además, la sentencia de condenación, si se tratase de un condenado, o el mandato de prisión con la designación exacta y la fecha del crimen o delito que la motivara, si se tratase de un procesado; los datos necesarios para justificar la identidad del requerido, y la copia autenticada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado.

En el exhorto que dirige el Sr. Juez de Instrucción de San Juan a las autoridades judiciales chilenas, no se incluye testimonio del auto en que se resuelve solicitar la extradición del encausado, ni copia de las disposiciones legales aplicables al delito perseguido, cuya fecha tampoco se designa; sin tales requisitos, no puede darse a dicha comunicación el trámite diplomático.

Estimo por ello, que V. E. debe devolver la presente requisitoria. — Agosto 13 de 1909.

=====

Los diplomas profesionales expedidos por las provincias, son actos públicos de las mismas, y por lo tanto, tienen validez en todo el territorio de la República, sujetos a la reglamentación federal o provincial, según los casos.

**Don Arturo Alvarez Costa, sobre revalidación del título de traductor e intérprete otorgado por la Provincia de Buenos Aires.**

*Excmo. Señor:*

El Sr. Costa Alvarez, que acredita ser traductor e intérprete de los idiomas nacional, inglés, francés, italiano y portugués, según resolución del P. E. de la Provincia de Buenos Aires, acordada después de cumplidas las prescripciones establecidas a este efecto, y en uso de atribuciones que le son privativas, se presenta a V. E. solicitando se le conceda la revalidación del título que exhibe, a los efectos de su inscripción en la matrícula nacional.

Si bien es improcedentes la revalidación que se solicita, desde que ninguna ley la autoriza, estimo que puede ordenarse la anotación en las oficinas que corresponda, del título exhibido, a fin de que el titular se halle en condiciones de ejercer su profesión en la Capital Federal. Según el art. 7 de la Constitución, los actos públicos de una Provincia gozan de entera fe en las demás, y el Congreso puede por leyes generales determinar la forma probatoria de dichos actos, y los efectos legales que producirán. Y la Ley 44 de 26 de agosto de 1863, repite en su art. 4 la prescripción constitucional, y establece que los actos públicos, autenticados en la forma ordenada, merecerán tal fe y crédito y surtirán tales efectos ante los Tribunales y autoridades dentro del territorio de la Nación, como por uso y ley les corresponda ante los Tribunales y autoridades de la Provincia de donde proceden.

En el presente caso, media en favor del recurrente la circunstancia principalísima de haber rendido examen de competencia, ante la comisión designada por el P. E. de la Provincia, sujetándose a las condiciones establecidas para tales actos, las que concuerdan con las exigidas por el decreto del P. E. Nacional de fecha 1º de abril de 1897, respecto a los que aspiren en esta Capital al título de traductor público.

Es de tenerse en cuenta, además, que el Sr. Costa Alvarez ha

desempeñado el cargo de profesor de idiomas en el Colegio Nacional de La Plata, y en otros Institutos de Enseñanza de la misma, y acreditando una práctica de diez años en el arte de traducir, habiendo rendido su examen en el local de la Universidad Nacional de dicha Ciudad, y ante una comisión formada de profesores de idiomas de aquel Colegio.

Dándose, pues, por llenado el requisito del art. 8 del recordado decreto, de 1º de abril de 1897, pienso que V. E. puede reconocer la validez del diploma de que se trata, a los efectos que dejo indicados. — Agosto 14 de 1909.

=====

Los diplomas profesionales expedidos por las provincias, son actos públicos de las mismas, y por lo tanto, tienen validez en todo el territorio de la República, sujetos a la reglamentación federal o provincial, según los casos.

**Don Juan Vucetich, pide reconocimiento de su título de Perito Identificador, otorgado por la Provincia de Buenos Aires.**

*Excmo. Señor:*

Estimo que puede accederse al reconocimiento del título que exhibe el recurrente, y ordenarse su anotación en las oficinas que corresponda, a fin de que el titular se halle en condiciones de ejercer su profesión en la Capital Federal y Territorios Nacionales. Según el art. 7 de la Constitución, los actos públicos de una Provincia gozan de una entera fe en las demás, y el Congreso Nacional ha establecido, en la Ley 44, que bastará que dichos actos sean autenticados en la forma ordenada, para que merezcan tal fe y crédito y surjan tales efectos ante los Tribunales y autoridades dentro del territorio de la Nación, como por uso y ley le corresponda ante los Tribunales y autoridades de la Provincia de donde procedan.

El sistema de identificación dactiloscópica ideada por don Juan Vucetich, cuyo nombre lleva, ha alcanzado gran difusión. Sus resultados ciertos, como lo dice el recurrente, han sido proclamados por distintas autoridades y corporaciones científicas del mundo, entre las que figuran la Facultad de Medicina de Lyón, la Academia de Ciencias de Francia, los Congresos Científicos de Montevideo y Río de Janeiro, el Jurado de la Exposición Internacional de Higiene



anexa al 2º Congreso Científico Latino Americano, la Sociedad de Prisiones de Francia, la Sociedad de Medicina de Bruselas, habiéndose adoptado dicho sistema por las legislaciones procesales del Brasil y de la Provincia de Buenos Aires, y por la Policía de la Capital Federal, en el convenio firmado en esta ciudad, con fecha 16 de octubre de 1905, por los delegados de las Policías de Buenos Aires, La Plata, Río de Janeiro, Santiago y Montevideo.

Aunque la legislación federal de procedimientos no ha adoptado aún el sistema de Vucetich, puede asegurarse que no tardará en hacerlo, pues se encuentra a estudio del H. Congreso un proyecto en ese sentido, mientras tanto, es aplicado por las oficinas policiales para la identificación de delincuentes, y a los efectos establecidos en el recordado convenio. Surge de esto, la conveniencia de acordar títulos de Perito Identificador, para que la delicada tarea de auxiliar a las autoridades y oficinas públicas con los informes que sean necesarios para la identificación esté en manos de personas cuya competencia sea una garantía de acierto e inspire plena confianza a los funcionarios que han de utilizarlas.

No estando reglamentada la profesión de Perito Identificador, V. E. tiene facultad para acordar el título respectivo, en los mismos términos que se acuerdan los demás títulos profesionales, según el decreto de fecha 1º de abril de 1897.

La exigencia del examen sería irrealizable en el caso actual, por cuanto no habría a quién confiar su recepción, tratándose de un título que se expide por primera vez; y además, la competencia del Sr. Vucetich está demostrada ampliamente por sus trabajos y publicaciones, que han servido para la divulgación del sistema.

Soy de apinión, por ello, que V. E. debe acceder a lo solicitado.  
— Agosto 21 de 1909.

=====

La residencia de una persona en el extranjero no puede obstar a que se le reconozca el derecho a una pensión; pero para que se le liquide y pague, es necesario la residencia en el país, a cuyo efecto debe acordarse un tiempo prudencial, pasado el cual, si no tuvo lugar el traslado, procede la caducidad de la pensión.

**Doña María Baldez Rosas, sobre pensión.**

*Excmo. Señor:*

Si bien la circunstancia de que la presunta pensionista hija única legítima del jubilado Baldez Rozas, resida en Europa, puede obstar que se liquide y pague la pensión que pueda corresponderle, ello no obsta ni puede obstarle a que se le reconozca su derecho que la ley le acuerda con arreglo a la ley respectiva.

Si reconocido ese derecho, una vez llenados los requisitos legales, como parecen haberlo sido, la mencionada pensionista no viene al país, llenando la exigencia legal de su presencia para obtener lo que, en tal concepto le corresponde, sería el momento de caducar ese derecho, que recién existiría con arreglo a la disposición citada del art. 52 de la Ley 4349.

Soy pues de opinión que el derecho a pensión debe ser reconocido en el caso, pero su realización debe hacerse depender de la presencia de la pensionista, dentro de un término prudencial que justifique su caducidad dentro de los términos de la ley. — Setiembre 2 de 1909.

*Decreto de Acuerdo: Boletín Oficial N° 4646, pág. 531, mayo 24 de 1909.*

=====

Los gobernadores de Territorios Nacionales deben evacuar los pedidos de informes que le son requeridos por los jueces.

**Don Félix Galeano, solicitando garantías para residir  
en el territorio de Formosa.**

*Excmo. Señor:*

Creo muy acertada la indicación de la Inspección de Justicia de pasar estos antecedentes al Sr. Ministro del Interior, para que

haga saber al Sr. Gobernador del Territorio de Formosa, si así entiende convenir, que debe evitar de conducirse de la manera en que lo ha hecho, cuando se le requiere informe en un recurso de amparo que, a mérito de la Constitución de la Nación, interpone un habitante del territorio, haciendo valer las garantías que ella le asegura.

Tal indicación evitará más tarde; que un habitante de la República vea detenidas las garantías constitucionales que le amparan, por diferencias o alejamientos personales entre los funcionarios que están llamados a hacerlas efectivas; que haya funcionarios que se conduzcan de manera poco ecuánime, con escaso respeto para los magistrados judiciales y con desconocimiento, como en el caso sub-júdice, del papel de informante que le cabe, llegando hasta recusar al Sr. Juez, sin ser parte en el juicio en que fué requerido.

Adhiero igualmente a la comunicación que se indica al Sr. Juez oficiante a los fines indicados. — Septiembre 18 de 1909.

=====

El P. E. está facultado para oponer la excepción de prescripción, y también para prescindir de ésta, cumpliendo un acto de equitativa liberalidad, al probársele la legitimidad de la deuda a cargo del Estado.

**Don Eusebio Soria, pide el pago de cuotas de enganche como Sargento 2º del Regimiento 43, que se le adeudan.**

*Excmo. Señor:*

Los haberes que se cobran en este expediente provienen de un contrato de enganche que celebró el recurrente con el Gobierno de la Nación, y que según él, quedó impago en la parte y sumas que indica.

Se desprende de ello mismo, que la relación de derecho creada entre el Gobierno y postulante es de carácter civil, puesto que deriva de un contrato de locación de servicios celebrado entre ambas partes, que no otra cosa importaban los antiguos contratos de enganche que servían de base para la formación de nuestro Ejército de Línea. El Gobierno al celebrar tal contrato, concurría en su carácter de persona jurídica, y se sujetaba a las obligaciones que el mismo le imponía, por lo que le es permitido hacer uso de todas las ventajas

que la legislación positiva le acuerda, cuando obra como parte contratante.

Dentro de ese concepto, adhiero al dictamen del Sr. Procurador del Tesoro, y estimo que en el caso sub-júdice, el Gobierno Nacional está facultado legalmente para hacer uso de la excepción de prescripción. Ahora en cuanto a la parte moral de esta defensa, soy de opinión que, si se comprueba por el solicitante de una manera completa el crédito por haberes impagos el Gobierno cumplirá un acto de justa liberalidad con no hacer uso de ella, teniendo presente la calidad de los servicios contratados y prestados en las filas del ejército, bajo la disciplina militar, y en defensa de la patria y de sus instituciones.

Prescindir en casos como éste, del recurso de la prescripción es un acto que, si omite una defensa legal de los bienes del Estado, satisface un anhelo de justicia y un sentimiento de gratitud para quien expuso hasta la vida en los servicios que prestó. — Septiembre 21 de 1909.

=====

Es improcedente la reclamación que formula la Provincia de Buenos Aires, de la propiedad que ocupa la Sociedad de Beneficencia que está en poder de la Nación desde hace más de medio siglo.

**Provincia de Buenos Aires, reclamando la propiedad del edificio que ocupa la Sociedad de Beneficencia en la calle Reconquista.**

*Excmo. Señor:*

Tan injustificada como improcedente es la reclamación que, por medio de apoderado en pacto de cuota litis, formula el Gobierno actual de la Provincia de Buenos Aires contra el Gobierno de la Nación en demanda del terreno que ocupa, desde hace más de medio siglo, la Sociedad de Beneficencia, en la calle Reconquista de esta Capital.

Falta el Gobierno de Buenos Aires a las más elementales consideraciones que son debidas a todo otro Gobierno y sobre todo al de la Nación, cuando debiendo hacerle un reclamo como el que hace, deja el camino que la propia Institución señala, olvida la acción de

sus propios funcionarios para tratar con los de la Nación, y asocia injustificadamente a sus intereses el interés privado.

Glosa, tergiversa, y desconoce, pactos efectivos que sellaron solemnemente las relaciones establecidas entre Buenos Aires y el Gobierno de la Nación, con motivo de la cesión de la Capital para buscar un título y preparar una acción judicial: lo que pudo muy bien economizarse con sólo formular y gestionar por medio de sus representantes oficiales lo que entendía era su derecho, como lo hicieron otros Gobiernos en casos análogos.

Desconoce al mismo tiempo la respetuosa tradición que envuelve actos históricos que le son propios, como ser la creación de la misma Sociedad de Beneficencia, la provisión que le hizo de sus conocidos recursos, la entrega de la casa que hoy trata de quitarle, así como el concepto de institución y persona capaz de derechos que, a través de tantos años, él mismo le reconoció, en repetidos e innumerables actos públicos.

Felizmente para la caridad pública, tan insólito proceder, tan injustificada actitud, se estrellan ante la improcedencia notoria de este reclamo, clara y explícitamente demostrada por el distinguido abogado de la Sociedad de Beneficencia, el Sr. Procurador del Tesoro y la Contaduría Nacional.

Todos ellos han caracterizado la situación de la Provincia de Buenos Aires en la reclamación que interpone, en tal manera que nada tengo que agregar, sino adherir a lo que han sostenido, concluido y solicitado de V. E. cuando requirieron, como requiero yo ahora, el rechazo inmediato de la insólita reclamación. — Septiembre 22 de 1909.

=====

En un tratado de extradición a celebrarse con Gran Bretaña, por súbditos de ese país a los efectos de la extradición debe entenderse, no sólo los oriundos de Inglaterra, sino también los nacidos en países o territorios sometidos a la soberanía inglesa en calidad de protectorados.

**Tratado de extradición con el Reino de Gran Bretaña, reservándose ambas partes el derecho de entregar o no, sus propios ciudadanos o súbditos.**

*Eccmo. Señor:*

En el concepto del derecho moderno, los súbditos de un país protegido se consideran, bajo el punto de vista internacional, como sometidos a la soberanía del país protector, salvo estipulaciones especiales y conocidas que a ello se opongan, las que no se denuncian como existentes en el caso sub-júdice.

Este, unido a la imposibilidad de operar la extradición con países protegidos, dada la desigualdad en cuanto a la soberanía respectiva y al cumplimiento de los efectos de aquélla, basta para reputar que, cuando el art. 3 del Tratado con la Gran Bretaña habla de los súbditos de ésta a los efectos de acordar o negar su extradición, puede y debe referirse no sólo a los oriundos de su territorio efectivo, sino aún a los nacidos en los países o territorios que están bajo la soberanía ejercida por aquél en calidad de Protectorado.

Esta consideración permite aceptar la extensión requerida por el Sr. Ministro Británico en nombre de su Gobierno, sin que peligre el texto y espíritu en que el Congreso aprobó la citada cláusula del expresado Tratado.

Fuera de esta consideración, ninguna razón de conveniencia se opone a la indicación de que se trata, dado que ella concurre, una vez más, a cimentar nuestras buenas relaciones con la Gran Bretaña y a facilitar nuestro acuerdo de extradición celebrado con esa potencia amiga.

Lo dicho basta para que, por mi parte, apoye lo requerido por el Sr. Ministro oficiante. — Septiembre 25 de 1909.

=====

Los títulos universitarios obtenidos por ciudadanos argentinos que por su cuenta estudiaron en el extranjero, deben ser equiparados a aquellos títulos contemplados en el decreto de febrero 10 de 1906, relativo a los becados argentinos que estudiaron en las Universidades de los Estados Unidos.

**Don Emilio A. Negri, solicita la revalidación de su título de Ingeniero Mecánico obtenido en Suiza.**

*Excmo. Señor:*

El diploma que presenta el recurrente, que me ha sido exhibido, se halla debidamente traducido y legalizado por las autoridades correspondientes, y comprueba los estudios hechos en la Universidad de Zurich, y la expedición a favor del Sr. Negri, del diploma de Ingeniero Mecánico.

Considero de toda justicia amparar al solicitante dentro de los beneficios del decreto del P. E. de fecha 10 de febrero de 1909, que reconocía la validez nacional provisoria a los títulos que obtuvieron los estudiantes argentinos becados en la Universidades de los Estados Unidos de Norte América, desde que median en el presente caso las razones que se tuvieron en vista al autorizar a dichos estudiantes para ejercer su profesión en el territorio de la República.

El hecho de que el peticionante no haya sido becado del Gobierno, es una circunstancia que le favorece en su pedido, pues importa un esfuerzo mayor para la obtención de conocimientos especiales, que podrá aprovechar útilmente en el país. El P. E. así lo reconoció en un caso análogo, según se ve en el decreto de fecha 8 de abril de 1907, relativo a la petición del Sr. Edgar Castro.

Soy de opinión, por lo dicho, que V. E. debe resolver favorablemente la presente solicitud. — Septiembre 28 de 1909.

=====

Las Municipalidades carecen de facultades para ordenar la apertura de un paso a nivel cerrado por una empresa ferroviaria con autorización del Gobierno Nacional, a quien compete exclusivamente la jurisdicción sobre ferrocarriles nacionales.

**Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires,  
sobre apertura de un paso a nivel efectuado por la Municipalidad de Zárate.**

*Excmo. Señor:*

Hay un error evidente de interpretación por parte del Sr. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en la nota de V. E. que motiva estas actuaciones. Según el texto de ese documento insinuábase a aquel funcionario que hiciese saber a la Municipalidad de Zárate que debía abstenerse de abrir un paso a nivel de la línea del Ferrocarril Central Argentino clausurado por la Empresa con autorización del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por donde se manifiesta la jurisdicción nacional que se ejerce sobre las líneas férreas que tienen tal carácter, pidiéndole al propio tiempo y como agente natural del Gobierno de la Nación que ordenara la clausura de aquel paso a nivel.

En cambio, el expresado Gobernador se limita a hacer informar sobre el asunto a la expresada Municipalidad de Zárate, a remitir ese informe y a indicar la conveniencia de que aquel paso a nivel se mantenga abierto.

Cumple en tal situación, reiterar al Sr. Gobernador la nota inicial de este expediente para que proceda en la manera que allí se le indica a mérito de la jurisdicción nacional aludida, y de su carácter de agente natural de la Nación ya insinuado, todo ello sin perjuicio de que V. E. proceda a suscitar los informes e investigaciones conducentes para juzgar sobre la conveniencia de mantener o desistir de la clausura del paso a nivel de que se trata, resolviendo el caso en presencia de los intereses que se dicen lesionados y del pedido formulado por el Sr. Gobernador de Buenos Aires en la nota que antecede. — Septiembre 28 de 1909.

=====



No corresponde dar intervención a un tribunal militar en la denuncia formulada por desacato contra un militar retirado.

**Incidente entre un militar activo y un retirado (Teniente Lagos)  
sobre jurisdicción militar para procesar al segundo.**

*Excmo. Señor:*

Reputo que la opinión que del suscrito, solicita V. E., se refiere a la oportunidad o conveniencia de dar a este asunto la tramitación que indica el Sr. Auditor de Guerra, en su dictamen de fs. 4, cual es pasar estos antecedentes a un Juez de Instrucción para que instruya un proceso al militar retirado a que se refiere, por el desacato que denuncia otro militar en un incidente callejero, y que éste se abstuvo de contener o castigar en el momento en que tuvo lugar.

Los antecedentes y recuerdos que levanta; el dictamen que transcribe el Sr. Auditor de Guerra como parte integrante del que expide, cuando constata que la Cámara Federal de la Capital, ha sentado la jurisprudencia de que los militares retirados están fuera de la jurisdicción militar; y la consulta que evacúa el Supremo Consejo de Guerra y Marina, cuando apoya, confirma y hace suya esa jurisprudencia, basándose en el texto de la ley y en lo resuelto en casos análogos por la misma autoridad de ese fuero, inclinan a pensar que sería de todo punto inoportuno dar a este asunto la tramitación que se indica.

Ya sea que esa tramitación lleve este asunto a la jurisdicción civil, lo que podría suceder ejerciendo el militar acusado los recursos legales que la ley le ofrece, ya sea que lo encauce en la jurisdicción militar por disposición de V. E.; su resultado adverso se conoce de antemano, desde que la sentencia aludida del Tribunal Civil (Cámara Federal de la Capital) y la opinión del Tribunal Militar (Consejo Supremo de Guerra y Marina) niegan de antemano validez a los procedimientos que hubieran de motivarse, decretando V. E. lo que se indica en el dictamen de fs. 4.

Esta circunstancia y lejana probabilidad de que este asunto pueda motivar alguno de los recursos extraordinarios que las leyes autorizan para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recurso que, por otra parte, no puede ni debe apreciar de antemano el que suscribe, miembro de ese alto Tribunal, me inducen a pensar

que V. E. debe abstenerse de ordenar el pase de este asunto a un Juez Instructor Militar, dejar el incidente que motiva estas actuaciones en su carácter de simple hecho policial y mandar al archivo las presentes actuaciones. — Septiembre 28 de 1909.

=====

De conformidad al principio de la libertad de comerciar declarado por el art. 14 de la Constitución, y el art. 3 de la Ley 3180, los comerciantes e industriales pueden excusarse de dar los informes que la Oficina de Estadística les requiera, si estiman que dichos informes ponen en peligro el secreto de sus negociaciones.

### **División de Comercio, sobre dificultades para la recolección de datos para el Censo Industrial.**

*Excmo. Señor:*

Por más respetables que sean las exigencias y necesidades de la estadística general del país, por más importante que sea tal función en el sentido de ilustrar la legislación de la República, en puntos de vital interés para ella, no puede ni debe olvidarse que ese respeto y esa importancia no alcanzan a neutralizar la garantía y derechos que la Constitución declara y que la ley escrita consigna, de una manera expresa y terminante.

El respeto por la libertad de comerciar declarada por nuestra carta fundamental, implica necesariamente el de los actos privados que afectan ese comercio y que, en nada toca los intereses ni las exigencias de orden público que pudieran oponérseles: y ese concepto consagrado por el art. 3 de la Ley 3180 cuando exceptúa de los informes, que impone a los comerciantes, aquellos que comprometan el secreto de su giro comercial o el éxito de su negocio, es bastante claro para que se consideren alejados todos los extraños que puedan desvelar las condiciones que cada uno imprime a su giro comercial privado, dentro de la libertad que le asiste, o poner en peligro ese mismo comercio con conocimientos o revelaciones que no tienen justificación constitucional alguna.

Tales ideas fueron las que activaron la sanción del art. 3 de la Ley 3180 con la salvedad de su final, ...“siempre que (los informes) no comprometan el secreto de su giro comercial o el

”éxito de su negocio”, salvedad de que fué autor el Senado de la Nación al revisar la ley, a mérito de un fundado discurso del Sr. Senador Yofre, que decidió la modificación y su aceptación más tarde por la Cámara de Diputados (Diario de Sesiones del Senado Nacional de 1894, pág. 693).

Ante estas consideraciones y antecedentes, que dan con precisión el espíritu de la Ley 3180 en la parte pertinente a este asunto, creo completamente extemporáneas las citas de legislaciones extranjeras las alegaciones para mostrar que los informes no son para publicarse, las consideraciones que encarecen la importancia de la Estadística que la oficina respectiva dirige, y por fin el criterio justo que, en su sentir, abona la exigencia de los informes resistidos: cuando la ley es clara, en su texto y espíritu, no hay para qué ir a las legislaciones extrañas: aun cuando la oficina no publique los datos que exige, basta su conocimiento por ella para que desaparezca el secreto que la ley contempla, y para que el comerciante pueda creer en el peligro de su comercio, otros medios debe buscar la oficina, en respeto de las garantías de la Constitución y a las reservas de la ley, y por último, debe declinar de un solo criterio que, además de no presentar base para considerarse bueno, no debe con su aplicación exclusiva, constituirse en árbitro único e injustificado de la Constitución y de la ley en casos como el que se trata.

De acuerdo con lo dicho, soy de opinión que la Oficina de Estadística debe abstenerse de exigir informes que los comerciantes reservan, por entender que comprometen el secreto de su giro o el éxito de su negocio, debiendo llenar el vacío que en su obra dejan tales reservas por los medios que estén o que puedan estar a su alcance. — Octubre 20 de 1909.

=====

Los gastos que demande la construcción y conservación de un paso a nivel son por cuenta de la empresa del ferrocarril cuyas líneas atraviesan dicho paso, debiendo entenderse que esta obligación impuesta por el inc. 9 del art. 5 de la Ley 2873, se refiere no sólo a los pasos a nivel ya existentes, sino a aquellos que por las necesidades del tráfico general debieran construirse en virtud de la creación de nuevas calles y caminos públicos.

**Ferrocarril Central Argentino, reclamando de la orden de abrir un paso a nivel en la estación San Isidro.**

*Excmo. Señor:*

El paso a nivel solicitado por la Municipalidad de San Isidro y de que aquí se trata, es necesario, según el informe de la oficina técnica correspondiente y debe abrirse por el Ferrocarril a mérito de la obligación que le impone el art. 17 de la Ley de Ferrocarriles 2873.

Los gastos que ese paso a nivel suponga en su construcción y conservación, al cruzar la línea, tienen que ser de cuenta de la Empresa, la que, por el inc. 9 del art. 5, de la ley citada, debe hacer todos los trabajos necesarios para dejar expedito el tráfico en las calles o caminos públicos que atraviesen el Ferrocarril; debiendo entenderse por el tal tráfico, no sólo en las calles y caminos existentes, sino aquellos caminos que respondiendo a sus necesidades se construyen, y a cuyo paso no puede oponerse, según el texto del ya citado art. 17 de la Ley 2873. Esta última obligación supone lógicamente la de costear las obras que, dentro de su recinto o dominio conduzcan a dejar expedito un tráfico de carácter público y ordenado por autoridad competente, así como a proveer todo lo que, por la ley citada le corresponde proveer en el sentido de la seguridad de ese tráfico y de su línea misma; bajo concepto alguno, el cruce que, dentro del recinto de las líneas férreas, requieren las calles públicas que un Municipio o vecindario exija para su vida o su desenvolvimiento, puede ni debe gravitar sobre la comuna: las obras necesarias a ese cruce tienen lugar dentro de la propiedad del Ferrocarril y han de hacerse teniendo en cuenta su movimiento y exigencias de su especial servicio, lo que sólo pueden y deben apreciar ellos mismos; siendo que, por otra parte, esas obras le están impuestas por tratarse de una servidumbre legal a que están sometidos.

dos, lo cual es según el inc. 9 del art. 5 de la ley citada, la de mantener expedito, en todo el tiempo, el tráfico público del Municipio o vecindario de que se trate.

Estas consideraciones, y las apuntadas por el Sr. Procurador del Tesoro, me inducen a pensar que, el paso a nivel de que se trata debe ser abierto por el Ferrocarril, y costeadada su construcción y conservación por la Empresa misma. — Octubre 22 de 1909.

=====

La tarifa de redespacho debe hacerse bajo la condición ineludible de que no podrá ni deberá tener lugar, sino antes de la entrega de los efectos porteados, o sea antes de la terminación del contrato (art. 170 del Código de Comercio), debiendo tener las empresas depósitos especiales para las mercaderías bajo el control de la autoridad.

**Ferrocarril Central Córdoba, reclamando de una resolución que reglamenta la tarifa de redespacho.**

*Excmo. Señor:*

Las diferentes tarifas ferroviarias instituídas entre nosotros y que responden a satisfacer las exigencias de las empresas, de los cargadores, del recorrido que hacen, de la velocidad y aún del beneficio que las líneas, en general, representan para las poblaciones o pueblos lejanos y aun intermedios, en el dilatado territorio de la República, han sido y debido ser ajustadas a las condiciones de razonables, justas y uniformes a que se refieren los arts. 44 y 49 de la Ley de Ferrocarriles vigente (Nº 2873). Tal ha sucedido con las tarifas parabólicas o terminales de velocidad y otras en aplicación, en que para ser autorizadas por V. E. han consultado aquellas circunstancias, cuya existencia se ha constatado debidamente.

Sin embargo, ocurre que la tarifa parabólica o terminal, si bien ha dado en su aplicación el resultado de beneficiar las poblaciones o ciudades lejanas por el descenso proporcional de la tarifa en relación a la mayor distancia, ha presentado el serio inconveniente de perjudicar con ese descenso, al comercio entre los pueblos o ciudades intermedias y esos puntos lejanos, levantando quejas de parte de aquél, que han inclinado a V. E. a pensar que tal circunstancia sacaba la mencionada tarifa de lo razonable y de lo justo

que debía caracterizarla, como a los demás, según el citado art. 44 de la Ley 2873. En tal concepto fué autorizada la tarifa llamada de *redespacho o reexpedición* en el Ferrocarril Central Córdoba, la que autorizaba a esa Empresa a reexpedir la mercadería que llevará a esos puntos intermediarios para puntos más lejanos o más próximos de su estación de partida, con una rebaja en la tarifa ordinaria y local, y dentro de la referida tarifa parabólica o terminal.

Las condiciones impuestas en este caso especial no han sido de tal suerte que hayan podido ni puedan garantizar contra el abuso de que la reexpedición se haga nominal, en artículos o mercaderías que salen exclusivamente de los puntos intermedios, lo que, por otra parte, ha sido oportunamente constatado, como se hace constar en los antecedentes.

De tal circunstancia y de la naturaleza especial de la llamada tarifa de redespacho, resultan justificadas las tachas que se oponen, las que, si no son bastantes para llevar su derogación o prohibición absoluta, dado que ella concurre en cierto modo, a un movimiento comercial beneficioso que no conviene obstaculizar, conducen sin embargo a buscar los medios para que sea justa, uniforme y legal, como corresponde, con arreglo de la Ley de Ferrocarriles citada, y a las facultades que asisten a V. E. en el caso (inc. 2 del art. 86 de la Constitución).

Consíguese lo primero, quitando a la expresada tarifa el carácter de concesión especial a una Empresa determinada (el Ferrocarril Central Córdoba), y haciendo la materia de una resolución general respecto a todas las líneas de la República que tengan por conveniente aplicarlas: hay justicia en dar a todas las empresas lo que hoy se acordado al Central Córdoba, así como hay uniformidad entre las empresas y entre éstas y sus cargadores, autorizando su uso dentro de iguales condiciones y requisitos. Consígnese lo segundo, además de lo que queda dicho, autorizando el redespacho en su concepto propio y legal, y en manera que, no esté expuesto a constituir abusos o incorrecciones que contribuyan a subvertir la ley, la autorización de V. E. y hasta falsear el propósito de amparar el comercio intermediario en cuyo favor se ha establecido.

Entiendo por redespacho o reexpedición el acto por el cual se hace continuar o volver una mercadería cargada sin que haya terminado el contrato de transporte de que fué materia, es decir, sin que se haya entregado la mercadería al consignatario o dueño o que

no se haya pagado el precio, manteniéndose bajo el dominio o responsabilidad del transportador. En tales condiciones, el acto expresado es perfectamente legal, en cuanto no implica sino la prolongación del expresado contrato mientras se encuentra en ejecución, encuadrando en tal concepto dentro de la prescripción expresa del art. 191 del Cód. de Comercio. En efecto, según tal disposición, el cargador o tenedor de la carta de porte puede cambiar la consignación de los efectos cargados con variación de destino, de camino, y aún pasando más adelante o sea requerir una de las tantas formas de la reexpedición; pero ello sólo puede tener lugar, como ella misma lo expresa, antes de hecha o exigida la entrega de lo porteado en el lugar primitivamente estipulado, exigiendo en todos aquellos casos, y para seguridad de los nuevos derechos y obligaciones creados en la prolongación del contrato, la redacción de una nueva guía, así como la fijación de un nuevo porte o flete; es evidente que la disposición que comento parte de la base, al estatuir lo que estatuye respecto a variaciones de consignación, destino o distancia, de que, las personas que contratan como las cosas materia del contrato son precisamente las mismas que el principio, así que como las variaciones a que se refiere, suponen la existencia de aquél, de tal manera, que terminado el contrato de porte por la entrega de la cosa porteada y pago de flete, no hay posibilidad de afirmar que las cosas redeporteadas sean las mismas que fueron porteadas ni menos que pueda haber variación en las estipulaciones de un contrato que ya no existe legalmente, siendo necesario para que tal suceda, convenir uno nuevo, independientemente del anterior, en cuyo caso no se trata ya de un redespacho o reexpedición, sino de un nuevo contrato de transporte.

Dentro de tales conceptos, es mi opinión que de generalizarse, con autorización de V. E. las tarifas de redespacho que hoy sólo tiene el Ferrocarril Central Córdoba, debe hacerse bajo la condición ineludible de que ese acto no podrá ni deberá tener lugar, sino antes de la entrega de los efectos porteados, o sea antes de la terminación del contrato (art. 170 del Cód. de Comercio), para esto no hay otro medio que autorizar a las empresas para tener depósitos de mercaderías, bajo el control de la autoridad a disposición de los consignatarios o comerciantes, en las estaciones respectivas, las que sólo serán susceptibles de redespacho o reexpedición por cuenta de

sus dueños y en tarifa especial, cuando éstos lo soliciten, por este medio se obtiene:

Que el redespacho o reexpedición se haga dentro del significado legal de la palabra.

Que la operación se verifique dentro de la ley (art. 191 del Cód. de Comercio) y en la oportunidad que ella prescribe expresamente.

Que se evite el falseamiento de la ley, así como la autorización de V. E. oponiendo una valla al abuso de redespachar o reexpedir lo que no ha sido previamente despachado.

Que, por último, con ésto se defienda la justicia y uniformidad en las tarifas satisfaciendo lo prescripto por los arts. 44 y 49 de Ley de Ferrocarriles 2873, sin perjuicio de contemplar los reclamos del comercio intermedio, así como los intereses de la Empresa o Empresas concurrentes entre sí y en relación a los cargadores.

Pienso pues, que V. E. debe derogar la concesión especial otorgada al Central Córdoba de la tarifa de redespacho a que vengo refiriéndome, y hacerla materia de una disposición general, dentro de las condiciones, bases y requisitos, que dejo indicados, y los que V. E. encuentre oportunos para asegurar la realización del redespacho o reexpedición dentro de lo legal, justo y uniforme. — Noviembre 3 de 1909.

=====

Los militares retirados al ser llamados de nuevo a la actividad gozan del sueldo de su grado y dejan de gozar de la pensión de retiro.

**Don Tomás Salinas, Mayor retirado, actualmente en servicio activo.**

**Reclama del descuento que se le hace en su pensión de retiro.**

*Excmo. Señor:*

El militar retirado tiene una situación claramente determinada por la ley respectiva, la que se caracteriza, por su alejamiento de la actividad, a pesar de estar a disposición del P. E. para ser llamado al servicio activo en caso necesario, y por la pensión o auxilio pecuniario que la ley le asegura en la expresada situación, teniendo en cuenta las modalidades que ella misma prevé y expresa.

Cuando el llamado al servicio activo se produce, el militar aban-



dona su condición especial de retirado y asume la de militar en actividad con todas las circunstancias, beneficios y obligaciones que caracterizan esta situación, independientemente de la que tenía con anterioridad. Y así cumple la Nación con pagar al militar llamado a la actividad, el sueldo que en tal situación le corresponde, como cumplía y cumple, pagándole la pensión de su retiro cuando estaba o cuando vuelve a él; de no proceder así, caería en el error de confundir dos situaciones perfectamente deslindadas por la ley y hasta se llegaría a crear a los retirados una situación más ventajosa en el servicio que la de aquellos que están en actividad; lo que no es ni justo ni razonable.

El Sr. Procurador del Tesoro ha demostrado con toda claridad el beneficio que obtiene el retirado en servicio activo, y si él es pequeño, como lo observa, no es razón bastante para quebrar el espíritu bien claro de la ley. Pienso pues que los retirados en las condiciones del retorrente, deben gozar sólo del sueldo de su grado en actividad cuando estén en ella, y de la pensión de retiro que les corresponda cuando estén en esa situación.

Adhiero pues, a lo sostenido por la Contaduría y el Sr. Procurador del Tesoro. — Noviembre 5 de 1909.

=====

En sustitución de los informes policiales, puede admitirse el conocimiento personal de los procuradores fiscales y jueces federales, respecto de las personas que peticionan la ciudadanía argentina, siempre que dichos funcionarios manifiesten que están en condiciones de juzgar sobre la identidad de los solicitantes y sobre sus condiciones para naturalizarse.

**Ministro de Justicia, comunicando al del Interior las dificultades que ofrece el trámite de la obtención de cartas de ciudadanía ante el Juzgado Federal del Rosario.**

*Excmo. Señor:*

Es fuera de toda duda que, cuando la Constitución y la ley estatuyen sobre ciudadanía, exhiben el espíritu más evidente de facilitar la adquisición por los extranjeros del título de argentinos, y en tal concepto la ley ha protegido en lo posible esa adquisición,

habiéndose llegado en el procedimiento a simplificar y facilitar los trámites a tal propósito.

Desgraciadamente y por razones que son de todos conocidas, se ha hecho necesario imponer algunas formalidades y requisitos tendientes a la identificación de las personas, evitando abusos y engaños que era indispensable cortar; a tal propósito se ha estatuido que debe exigirse un informe de la Policía respecto de los extranjeros que requieren la ciudadanía, para no caer en el error de hacer ciudadanos justamente a personas expulsadas por razones de tranquilidad pública o de higiene social.

Si bien este requisito tiene su alta conveniencia, aplicado en general, tiene el inconveniente de ser un obstáculo serio para la naturalización de extranjeros, lo que en realidad contraría el ya expresado espíritu de la Constitución y de la ley en esta materia.

Para que esto no suceda, para que V. E. ejecute la ley en las condiciones que refiere el inc. 2 del art. 86 de la Constitución sin descuidar al propio tiempo, las exigencias de una prudente identificación en casos dados, creo conveniente la indicación de la precedente nota del Sr. Ministro de Justicia, en el sentido de confiar en el conocimiento personal que el Sr. Procurador Fiscal y el Sr. Juez Federal respectivos tengan de las personas que desean naturalizarse, evitándose en tal caso la identificación e informes policiales, siempre que tan respetables funcionarios manifiesten o dejen ver que están en situación de juzgar sobre la identidad de las personas, conocimientos de los testigos y demás condiciones para ser ciudadanos argentinos, tales como la Constitución y la ley lo requiere.

Apoyo pues la indicación formulada por el Sr. Ministro de Justicia y reputo que V. E. debe estatuir lo necesario en tal sentido. —  
Noviembre 5 de 1909.

=====

De acuerdo con lo estatuido por el decreto de junio 30 de 1896, no procede la reconsideración de una resolución administrativa cuando posteriormente no se haya constatado un error de hecho al dictarla, u otra circunstancia capaz de motivar su anulación.

**Ferrocarril Argentino del Este, pidiendo reconsideración del decreto sobre ancho de la zona de terreno para vías y estaciones.**

*Excmo. Señor:*

El Decreto de julio 17 de 1901 resolvió ya definitivamente la zona a expropiarse para ser entregada al Ferrocarril Argentino del Este, una vez consultado todos los antecedentes y con la seguridad del derecho que a la Nación asistía para tal resolución, dado que ello encuadraba en el art. 7 del contrato de concesión del expresado Ferrocarril, que sólo imponía la expropiación y entrega de los terrenos para la vía férrea y estaciones; de acuerdo con dictámenes técnicos se fijó la zona de 20 metros como necesaria en general y ella es la que la Nación debe expropiar y entregar, siendo perfectamente legítimo el Decreto aludido de julio 17 de 1901 que así lo determina.

En tal concepto, y no resultando que posteriormente se haya constatado la existencia de un error de hecho ni circunstancia que pueda motivar la reconsideración pedida, no debe hacerse lugar a ella, teniendo presente lo estatuido por el Decreto de junio 30 de 1896.

En cuanto a los arreglos o transacciones propuestas por la Empresa en el caso, me refiero a los informes de las diversas oficinas, quienes han demostrado su poca conveniencia para los intereses de la Nación, razón por la cual no deben tomarse en cuenta. — Noviembre 5 de 1909.

=====

Los obreros a jornal que tengan el tiempo de servicio necesario para acogerse a la jubilación ordinaria, tienen el mismo derecho a ella que los empleados con remuneración mensual, como así sus derechos habientes a pedir la pensión, subsanándose la falta de contribución a la Caja, en la forma prevista por el art. 62 de la Ley 4349.

**Don Leopoldo Beneghi, foguista de las Aguas Corrientes,  
solicitando jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Estimo que V. E. debe acordar la jubilación ordinaria solicitada por don Leopoldo Beneghi, de conformidad al art. 17 de la Ley 4349, en los términos que ha sido modificado por la Ley 6007, y no obstante la resolución negativa de la Junta de Administración.

La situación de obrero a jornal en que ha revistado el recurrente, no es un óbice para considerarlo como empleado permanente de la Administración, desde que la continuidad de sus servicios prestados durante treinta años consecutivos, le aseguran aquel carácter en la forma que lo prescribe el art. 2 de la Ley 4349. La forma en que se le abonaba la remuneración acordada a su trabajo, no modifica ese carácter, desde que ella era ajena a su voluntad, y depende de la organización del establecimiento en que se encontraba, pero es indudable que dicha remuneración salía de la partida englobada que para jornales de operarios consignaba el Presupuesto General.

En cuanto a la falta de contribución al fondo de la Caja, el caso está previsto por el art. 2, inc. e) del Decreto Reglamentario de la Ley 4349, y esta disposición debe aplicarse.

Por lo expuesto, consideraciones concordantes del dictamen expedido en la solicitud de don Francisco Núñez y resolución del P. E. en la de don Eusebio Loutre (Boletín Oficial de 5 de octubre de 1906), creo que V. E. debe resolver el caso como lo indico. — Noviembre 15 de 1909.

=====

Por orden de la Suprema Corte, procede que el Ministerio de Relaciones Exteriores dé trámite a una notificación a un ministro extranjero, aun cuando éste se haya ausentado del país.

**Suprema Corte pide al Ministerio de Relaciones Exteriores, que haga una notificación al Dr. Víctor M. Maurtua, Ministro ad hoc del Perú.**

*Excmo. Señor:*

Ordenada por la Suprema Corte de Justicia, la notificación de que se trata, su diligenciamiento no puede detenerse por la ausencia de la persona del Sr. Maurtua, tanto más cuanto que, con arreglo al derecho de gentes ella responde a la necesidad de obtener de su parte y con conocimiento de su Gobierno, la declaración de si acepta o no la jurisdicción argentina en este asunto en que actuó como Ministro y a nombre de aquél.

Creo que los antecedentes deben comunicarse, pues al expresado Sr. Maurtua en el Perú, para donde resulta haber partido. — Noviembre 16 de 1909.

=====

No procede solicitar de los representantes diplomáticos extranjeros ante el Gobierno Argentino, ni tampoco del Ministerio de Relaciones Exteriores, informes respecto a las leyes vigentes en países extranjeros, con el fin de utilizar dichos informes en el curso de un pleito judicial.

**Juez de Primera Instancia de La Plata, pide informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre interpretación de leyes.**

*Excmo. Señor:*

Sin detenerse a apreciar los defectos de tratamiento y tono de la precedente comunicación, reputo que no son regulares los informes como el que se pide a V. E. por un Juez Letrado de la Provincia de Buenos Aires, sobre texto y aplicación de una ley extranjera. Las autoridades judiciales argentinas, sobre todo los Jueces calificados de letrados que se encuentran en el caso de aplicar leyes extranjeras, deben conocer su texto y aplicabilidad por medios pro-

prios y personales, en la manera que conocen las leyes de la República.

Por otra parte, el art. 13 del Cód. Civil ha dicho que la aplicación de las leyes extranjeras, en los casos que está autorizada, no tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes, de suerte que cada vez que en juicio civil se invoque la ley de otro país, los litigantes deberán probarla, en la forma que sea oportuna, la que no puede consistir seguramente en dar a V. E. en el litigio una intervención que no le corresponde, ni menos asignarle un papel que repugna a sus funciones.

Soy de opinión por lo expuesto, y como lo he aconsejado en casos análogos, que V. E. no debe dar curso al precedente oficio. —  
Noviembre 16 de 1909.

=====

Los obreros a jornal que tengan el tiempo de servicios necesario para acogerse a la jubilación ordinaria, tienen el mismo derecho a ella que los empleados con remuneración mensual, como así sus derechos habientes a pedir la pensión, subsanándose la falta de contribución a la Caja, en la forma prevista por el art. 62 de la Ley 4349.

**Don Bernardo Navarro, peón de los Talleres de Marina  
solicitando su jubilación.**

*Excmo. Señor:*

Resulta de los informes agregados a este expediente, que don Bernardo Navarro, operario de los Talleres de Marina, ha prestado servicios continuados, desde el mes de abril de 1880 y se halla actualmente imposibilitado de proseguir sus tareas. En tales condiciones, considero que puede acogerse a los beneficios de la jubilación extraordinaria, de acuerdo con lo que prescribe el art. 19 de la Ley 4349.

La situación de obrero a jornal en que se ha revistado el recurrente, no es un óbice para considerarlo como empleado permanente en la Administración, desde que la continuidad de sus servicios prestados durante veintiocho años consecutivos, le aseguran aquel carácter en la forma que lo prescribe el art. 2 de la citada Ley 4349.

La manera como se le abonaba la remuneración acordada a su trabajo no modifica ese carácter, desde que ella era ajena a su voluntad, y responde a la organización del establecimiento en que se encontraba, pero es indudable que dicha remuneración salía de la partida englobada que para jornales de operarios consignaba el Presupuesto General de la Administración.

Por lo que respecta a la contribución al fondo de la Caja debe estarse a lo previsto por el art. 62 de la Ley 4349, y art. 2, inc. e) del Decreto Reglamentario.

En cuanto al cómputo de servicios prestados, deben incluirse los que resultan de la información judicial presentada por el postulante, desde que el art. 56 de la Ley 4349 admite todos los medios de prueba prescriptos por las leyes comunes para la adquisición de derecho.

Por ello, y consideraciones que fundaron la resolución recaída en el expediente de Eusebio Loutre (Boletín Oficial de octubre 5 de 1906), estimo que V. E. no obstante la resolución de la Junta de Administración, debe acordar la jubilación requerida. — Noviembre 18 de 1909.

=====

La facultades que la ley acuerda al P. E. respecto a las sociedades con personería jurídica, no lo facultan sino para examinar si las condiciones necesarias para gozar de dicha personería se mantienen en el funcionamiento que lleva. En ningún caso puede el P. E. intervenir en la vida interna de tales sociedades, sustituyéndose a los asociados o directores para estatuir lo más conveniente a la marcha de las mismas sociedades.

### **Denuncias contra la Sociedad “La Alcantía Popular, Banco Cooperativo Universal”.**

*Excmo. Señor:*

Antes de ahora he tenido ocasión de manifestar a V. E., cuando acuerda la personería jurídica o cuando examina la manera como una asociación o compañía usa de los derechos que le son propios, sólo ejercita la facultad que al efecto le confiera la ley de una manera expresa (art. 318 del Cód. de Comercio en el caso) concor-

dantes con lo que estatuye el inc. 2 del art. 86 de la Constitución.

Tal facultad debe limitarse a examinar si las condiciones necesarias a la personería jurídica están en la asociación que la solicita o si se mantienen en el funcionamiento que lleva, así como si en uno o en otro caso, no se lesiona el interés público y común, todo lo que salve estos límites es extraño a V. E. y debe en consecuencia abstenerse de pronunciarse al respecto.

Tal sucede en el caso *sub-júdice*: según los mismos informes recogidos por la Inspección de Justicia el funcionamiento de “La Alcanía Popular, Banco Cooperativo Universal” es y ha sido correcto en relación a la ley, a los reglamentos y al orden público, lo que basta en mi sentir, para que V. E. se abstenga de producir medida ni resolución contraria a la marcha regular de la asociación.

Que haya necesidad de reformar la organización social para su mayor y mejor desenvolvimiento, que así lo piensen algunos accionistas, la Inspección de Justicia, y hasta pueda creerse por el que suscribe, no es razón bastante para motivar la intimación hecha por aquella Institución a tales fines que, ni aún notificada, encuentro que no asienta en disposición alguna de la ley, mucho menos con la consecuencia de que su inobservancia pueda traer el retiro de la personería que esa Repartición requiere en el caso para la asociación de que me ocupo.

En ningún caso, la ley ha entendido como no ha entendido V. E. que las condiciones para ser persona jurídica o la vigilancia para ver si esas condiciones se observan, puedan autorizar otro criterio que el de sus asociados o directores para saber o estatuir lo más conveniente para su desenvolvimiento. En tal concepto, reputo que la intimación de la Inspección de Justicia hecha en este caso, no radica en la ley y menos puede tener la sanción penal del retiro de la personería jurídica que se requiere, dado que tampoco la establece ni menciona ninguna disposición legal ni administrativa.

Creo pues, que V. E. no debe hacer lugar a lo que la Inspección de Justicia indica, dejando a la asociación de que se trata, tal como se encuentra actualmente. — Noviembre 22 de 1909.

=====



Los obreros a jornal que tengan el tiempo de servicio necesario para acogerse a la jubilación ordinaria, tienen el mismo derecho a ella que los empleados con remuneración mensual, como así sus derechos habientes a pedir la pensión, subsanándose la falta de contribución a la Caja, en la forma prevista por el art. 62 de la Ley 4349.

**Don Erasmo Vigilante, solicitando su jubilación como guinchero del Puerto de la Capital.**

*Excmo. Señor:*

De los antecedentes de este expediente, resulta que el recurrente ha prestado servicios continuados en el Puerto de la Capital, desde el año 1893 hasta el presente, y se halla inutilizado como consecuencia única y exclusiva del accidente que sufrió en actos de servicio y por causa evidentemente imputable al mismo.

En tales condiciones, estimo que puede acogerse a los beneficios de la jubilación extraordinaria, de acuerdo con lo que prescribe el art. 19 in-fine de la Ley 4349.

La situación de obrero a jornal en que el recurrente ha revisitado durante los últimos años de su servicio, no es un óbice para considerarlo como empleado permanente de la Administración, desde que la continuidad de los servicios prestados sin interrupción por espacio de quince años, le aseguran aquel carácter en la forma que lo prescribe el art. 2 de la citada Ley 4349.

La manera como se le abonaba durante dichos años, la remuneración acordada a su trabajo, no modifica ese carácter, desde que ella era ajena a su voluntad, y dependía de la organización del establecimiento en que se encontraba, estando comprobado que dicha remuneración salía de la partida englobada que para jornales consignaba el Presupuesto General de la Administración.

Por lo que respecta a la contribución al fondo de la Caja, debe estarse a lo previsto por el art. 62 de la Ley 4349 y art. 2, inc. e) del Decreto Reglamentario.

Por ello, y las consideraciones que han servido de base a la jurisprudencia administrativa sentada en casos análogos, (Boletín Oficial de 5 de octubre de 1906. Expediente de Eusebio Loutré), estimo que V. E. debe acordar la jubilación solicitada. Diciembre 4 de 1909.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial, enero 25 de 1910.*

Considérase que toda percepción fiscal se verifica regularmente cuando el agente del Gobierno aplica la ley en la forma que lo entiende justa y el particular acepta voluntariamente ese criterio y se conforma con él. En tales casos, el acto se considera irrevocable para ambas partes y no son admisibles reclamos posteriores.

**Dr. Salustiano Zavalía, reclamando de descuentos que se le han hecho en su jubilación cuando desempeñaba el cargo de Diputado Nacional.**

*Excmo. Señor:*

Estimo atinada la observación que formula el Sr. Procurador del Tesoro, respecto de la oportunidad de este reclamo, que no aparece haberse deducido, en el momento en que fueron efectuados los descuentos cuya devolución se requiere.

En la práctica administrativa se considera que toda percepción o pago fiscal se verifica regularmente, cuando el agente del Gobierno aplica la ley en la forma que lo entiende justa, y el particular acepta voluntariamente ese criterio y se conforma a él. En tales casos, el acto se considera irrevocable para ambas partes, y no son admisibles reclamos posteriores, pretendiendo nuevas interpretaciones a la ley.

No ocurriría igual cosa, si el particular hubiese protestado en tiempo, de la aplicación de la ley que considera perjudicial a sus intereses, o si el agente del Gobierno hubiese incurrido en un manifiesto error o en una irregularidad, en cuyos casos el acto fiscal no sería regular, y habría mérito para rever lo efectuado. Como el recurrente no alega encontrarse en tales condiciones, soy de opinión que debe desestimarse su solicitud. — Diciembre 10 de 1909.

=====

Cuando una casa comercial pone en las cajas o envases de artículos que vende bonos que puedan o no encontrarse, que tendrán al azar mayor o menor valor, o no lo tendrán, tal hecho es contrario a la Ley 4097. Cuando esos bonos, empero, tienen siempre el mismo valor uniforme, hay que considerar el hecho como un reclame, que no contraría la referida ley.

**Moore y Tudor, solicitan autorización para la venta de bebidas en los envases con premios reclame.**

*Excmo. Señor:*

Antes de ahora y con motivo de una solicitud igual a la presente de unos Sres. Rodríguez y D'Amico, para poner unos billetes, bonos o cupones, en unos paquetillos de cigarros, tuve ocasión (junio de 1905) de establecer el concepto que, en mi sentir, daba el verdadero alcance a la Ley 4097, lo que debía considerarse juego y lo que no siéndolo, excluía la intervención de V. E. en casos tales.

Por Decreto de junio 7 de 1905 (Registro Nacional, tomo 2, volumen 1, pág. 461) V. E. proveyó de acuerdo con lo sostenido e indicado en el referido dictamen (pág. 458, libro citado).

Aplicando ahora lo que entonces quedó establecido, cumple sostener que si lo que encierran las cajas que se dicen llevarán las botellas patentadas del recurrente, son premios que se encontrarán o no, que tendrán al azar valor mayor o menor o no lo tendrán, se trata de un juego que no encuentro razón para autorizar, dado que ello sería contrariar el espíritu bien perfilado de la Ley 4097. Pero si se trata de premios efectivos y permanentes a obtenerse por el comprador de cada una de las botellas aludidas, y sin que para nada intervenga el azar ni la suerte, creo que no habiendo juego en tal caso, el hecho está fuera de la citada ley y por ende de la autorización de V. E. a que ella se refiere. Por el contrario, en este último concepto, se consigue legal y correctamente el fin que se busca, es decir, que sus propios consumidores se inclinen a inutilizar sus envases, que es lo que se proponen, sin menoscabo de una ley cuya aplicación en el caso indicado y en otros posteriores ha sentado una jurisprudencia administrativa de que no es posible prescindir (Decreto de 6 de julio de 1906, inserto en el Registro Nacional, tomo 2, volumen 2, pág. 8939).

Opino en consecuencia, que si como lo aseguran los recurrentes no se trata de poner en las botellas a que hacen referencia, una

lotería o un motivo de juego, y si, sólo un regalo *reclame* para que los consumidores respondan a lo que se proponen, no es el caso de aplicar la Ley 4097, debiendo prescindirse de toda autorización o permiso previo que no tendría razón de ser alguna ante la libertad que asiste a los recurrentes para proceder en tal sentido. — Diciembre 10 de 1909.

=====

A falta de un agente diplomático acreditado en la República, puede aceptarse y darse trámite a un pedido de carácter judicial formulado directamente al Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, siempre que el país requiriente ofrezca la reciprocidad en casos análogos.

**Ministro de Relaciones Exteriores de Bulgaria, solicitando  
se haga un interrogatorio a un Sr. Frailt.**

*Excmo. Señor:*

En atención a la circunstancia de no tener presentación constituida en nuestro país el Gobierno requiriente, y por tratarse del diligenciamiento de un interrogatorio, estimo que V. E. por razones de cortesía internacional, puede dar curso a la solicitud que se le formula, y pasar estas actuaciones al Sr. Juez Federal a los efectos pedidos.

Considero, sin perjuicio de ello, que V. E. debe hacer presente al Sr. Ministro de Bulgaria, al devolver el oficio diligenciado que este Gobierno exige, la manifestación de reciprocidad en casos análogos, para hacer lugar a esta clase de pedidos, de acuerdo con las prácticas establecidas por el Derecho de Gentes, y que en consecuencia, espera que así se servirá comunicarlo en la primera oportunidad. — Diciembre 15 de 1909.

=====

No puede concederse aprobación a los estatutos de una congregación que no haya obtenido previamente autorización para establecerse en el país, de acuerdo con el inc. 2º del art. 67 de la Constitución, o que no se hallara ya establecida en él al tiempo de la promulgación de la Constitución.

**Congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor de Angers,  
solicitando aprobación de reformas de sus Estatutos.**

*Excmo. Señor:*

La Congregación Religiosa, no autorizada por ley del Congreso, titulada “Nuestra Señora de Caridad del Buen Pastor de Angers”, se presenta con unos Estatutos, cuya aprobación solicita de V. E., y que dice ser la modificación de los que tenía cuando fué autorizada como persona jurídica por Decreto del P. E. de 1 de agosto de 1894.

Teniendo presente, que en los mencionados Estatutos se conserva y establece el carácter de Congregación Religiosa, dado que el nombre que adopta ahora “Instituto del Buen Pastor” no destruye el anterior sino que lo resume, como expresa la cláusula 3ª, in fine de aquéllos. Soy de opinión que V. E. no debe hacer lugar a lo pedido mandando devolver a los recurrentes la solicitud presentada por ser improcedente.

Las razones que tengo para requerir son las siguientes:

1. — Que no hay ley alguna que autorice el funcionamiento en el país, de la Congregación Religiosa postulante, lo que es indispensable según decreto expreso del inc. 2º del art. 67 de la Constitución, para que exista y se le pueda considerar persona legal y hábil para peticionar a las autoridades usar y disponer de su propiedad y ejercer los otros derechos consagrados por el art. 14 de la Carta Fundamental: El uso de tales derechos sólo se acuerda a las personas que tengan y tienen existencia legal o constitucional en el país.

2. — Que así lo ha entendido y debido entender el Cód. Civil cuando, estatuyendo en su art. 33 que son y pueden ser persona jurídica las comunidades religiosas, ha exigido en su art. 45 que sólo comience la existencia de tales personas, cuando fueren autorizadas, *por la ley o por el Gobierno*, siendo indudable que el primer término de lo subrayado (por la ley) alude a la autorización legal a que se refiere la ya citada disposición de la Constitución, inc. 20

del art. 67, cuando de aquellas comunidades o congregaciones se trata.

3. — Que así lo entendió el Congreso Nacional cuando dictó la disposición citada, art. 45 del mencionado Código y así lo significó expresa y terminantemente el Senado de la Nación, cuando rechazó sin dar entrada ni trámite en la memorable sesión de mayo 18 de 1876, la solicitud de una comisión organizada para pedir recursos destinados a reconstruir el Colegio del Salvador, incendiado en febrero de 1875 en esta Capital. Ese rechazo tuvo por fundamento una moción oportuna y un discurso magistral del entonces Senador don Domingo Faustino Sarmiento.

4. — Que así lo ha entendido V. E. en los siguientes casos:

a) Cuando en marzo 20 de 1905 dictó un Decreto, de acuerdo con el informe del señor Procurador del Tesoro y un extenso dictamen del que suscribe, en el cual se negó la exoneración que, con arreglo a la ley respectiva pedían los Padres Lazaristas de esta Capital, del impuesto de contribución directa para el edificio donde enseñaban y enseñan gratuitamente a un crecido número de niños pobres (Registro Nacional, tomo 1, vol. 2, pág. 100, N° 250 de 1906).

b) Cuando por Decreto de junio 23 de 1906 V. E. acordó de acuerdo con el que suscribe, la exoneración de contribución directa, que en marzo negaba a los Padres Lazaristas, a los edificios de Escuelas de las Carmelitas de Santa Teresa y Carmelitas Descalzas de San José una vez que se constató que esos edificios en las condiciones de la ley y que se estableció con toda evidencia que esa Congregación (que ambas resultaron las mismas), existía en la República con anterioridad a la Constitución (desde 1628), lo que la ponía fuera de lo prescripto por el inc. 20 del art. 67 de la misma (Boletín Oficial N° 3802, pág. 86 de julio de 1906).

Creo que lo dicho, basta y sobra para que V. E. en respeto a la Constitución, a la ley, y a la propia jurisprudencia, resuelva este asunto en la manera que lo dejo indicado. — Diciembre 23 de 1909.

=====

El juez a quien corresponde asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores en elecciones municipales de Territorios Nacionales, es el juez local en cada sección o lugar de comicio, excluyendo la facultad de cualquier otro juez para trasladarse de un lugar a otro, aunque tenga jurisdicción sobre el juez local.

**Gobernador de Pampa Central, solicita se dicte una resolución de carácter general, a fin de que no se repita el conflicto surgido con el Juez del Crimen de esa, Dr. Duarte, por interpretación de la Ley Electoral.**

*Excmo. Señor:*

La disposición del art. 54 de la Ley 1532 es suficientemente explícita y comprensiva para que pueda dar motivo a interpretaciones que modifiquen su texto; conforme a ella, para las elecciones de delegados a la Legislatura, de Municipales y de Jueces de Paz, se aplicará la Ley de Elecciones Nacionales, en cuanto no se opongan a las demás disposiciones de la misma Ley 1532, a estar a lo cual, en el caso que motiva la nota precedente era de aplicación el art. 10 de la ley sobre elecciones nacionales, dado que en nada contraría la ya citada ley de territorios nacionales.

Esto sentado, y entrando en la interpretación del referido art. 10, encuentro indudable que el Juez a quien corresponde asegurar la libertad, seguridad e inmunidad individual o colectiva de los electores, es el Juez local, desde que la ley claramente se refiere al Juez Nacional en las capitales o ciudades donde ejerzan sus funciones, y a los Jueces Letrados o de Paz, respectivamente de cada sección o lugar de comicio, quienes deben mantener abiertas sus oficinas durante las horas de la elección.

La enumeración que hace el artículo, deja ver que se trata siempre del funcionario que resida en la localidad donde tiene lugar el acto electoral, y a las oficinas allí establecidas, lo que excluye al facultad de un Juez para trasladarse de un lugar a otro, aunque tenga jurisdicción sobre éste, porque esa jurisdicción se refiere a las demás materias de su competencia, pero no a las que atañen a la función atribuida por la Ley Electoral.

Por ello, soy de opinión que V. E. en ejercicio de la atribución conferida por el art. 8, inc. 2 de la ley sobre Organización de los Ministerios Nacionales, debe contestar la nota precedente haciendo

saber al Sr. Gobernador de la Pampa Central que es a los Jueces locales del lugar de los comicios que tengan lugar en su territorio, sobre todo tratándose de elecciones municipales, a quiénes compete ejercer la facultad prescripta por el art. 10 de la Ley de Elecciones Nacionales, y es a dichos funcionarios a los que debe prestarse la fuerza pública en caso que la requieran. — Diciembre 23 de 1909.

=====

Corresponde el retiro de la personería jurídica de una sociedad anónima que se encuentra en la imposibilidad de reunir el quórum necesario para la asamblea, lo que implica afirmar que no está en condiciones de llenar sus fines.

### **Asociación 'El Hogar', sobre retiro de personería jurídica.**

*Excmo. Señor:*

La poca solidez en la constitución de esta sociedad, ha traído indudablemente, el resultado a que se ha llegado, es decir, a una anarquía entre socios y directores que hace imposible su gobierno y hasta su existencia.

Producida la denuncia que se formuló contra el Gerente, la que resultó infundada en la mayoría de los cargos que la constituían no siendo de mayor entidad el que resultó concreto (falta de sorteos), se inició la escisión entre los directores administradores, haciéndose dos bandos que sólo han actuado para destruirse e inutilizarse por todos los medios. Infructuosos han sido los esfuerzos y tentativas de la Inspección de Justicia para regularizar la situación violenta e insostenible a que ha llegado la Sociedad "El Hogar".

Fuera de dejar —en tal situación—, que la lucha trabada entre las personas se llevará a su término, limitándose la Inspección a vigilar que no fuera violada la ley y reglamentación respectiva, si no estuviera de por medio la autorización de V. E. que da a esa asociación el carácter de persona jurídica. En presencia de esta última circunstancia reputo que la intervención de V. E. procede con arreglo a la ley, de manera que, actuando a mérito de sus prescripciones pueda retirar una personería que no se mantiene dentro de la ley, provocar una liquidación y amparar en tal forma y dentro de su limitada jurisdicción, los intereses que se hallan comprometidos en la mencionada asociación notoriamente anarquizada.



La aludida anarquía ha traído la acefalía de hecho de la administración y dirección de la sociedad; por más que haya un quórum en el Directorio no puede reunirse, y hasta si trata de hacerlo, no tiene donde; los socios activos o están divididos en bandos opuestos y son víctimas de las maquinaciones de los adversarios que, usan los medios conocidos para neutralizar sus derechos y hacer inocua toda resolución o medida que no satisfaga los intereses que el bando persigue: o se formulan protestas y denuncias que sólo tiende a obstaculizar la marcha de la asociación, ésto basta para afirmar sin necesidad de mayor demostración, que ella no puede llenar los fines para que fué creada, estando V. E., a mérito de los antecedentes que corren en autos, habilitado para reputar que, faltando el gobierno y la dirección que la ley considera como indispensable para la existencia de toda asociación, ella no está dentro de las condiciones de la ley (arts. 33, 48, inc. 2 del Cód. Civil y correlativos arts. 318, 335 y 370, inc. 4 del Cód. de Comercio y arts. 40, 42 y 43 del Decreto de noviembre 17 de 1908).

‘ En tales circunstancias y por las consideraciones apuntadas reputo que V. E. está en condiciones y debe proceder como lo indica la Inspección de Justicia en su precedente informe. — Diciembre 24 de 1909.

*Resolución de Acuerdo: Boletín Oficial, de enero 10 de 1910.*

=====



**INDICE ALFABETICO POR MATERIAS**



## Actos Administrativos

- |  | Pág. |
|--|------|
| 1. — Las resoluciones de resoluciones administrativas en materia de ser impugnadas, quien se sienta perjudicado por una resolución administrativa tiene siempre abierta la vía judicial ..   | 81   |
| No deben tener esos títulos de particulares sobre la tierra propia, sino sobre las condiciones de aridez que prescriben las respectivas leyes .....  | 81   |
| 2. — Por regla general no debe hacerse lugar a los reconsideraciones que se piden de actos administrativos, más en casos excepcionales el P. E. puede apartarse de esta regla, lo que no puede equipararse el orden administrativo al judicial, pues el primero carece de la estabilidad del segundo, ya que sus resoluciones pueden ser elevados por los interesados ante los Tribunales Judiciales, y éstos llegar a anularlas .....   | 181  |
| Las Compañías extranjeras cuyo capital, constitución legal y domicilio está en el extranjero y que sólo tiene en el nuestro representantes o mandatarios, deben considerarse excluidas de lo preceptuado en el art. 286 del C. de Comercio (reformado por la Ley 2.528, y sólo deben cumplir con lo dispuesto en el art. 287 de dicho Código respecto a la obligación de registrar sus estatutos e inscribir el nombre de sus representantes a los efectos de la responsabilidad legal que pudiera corresponderle por no proceder en sus operaciones dentro de los preceptos de nuestras leyes ..... | 181  |
| 3. — Los actos y resoluciones del Poder Ejecutivo, no son susceptibles de apelación por ante el Poder Judicial. Los particulares tienen señalado en las leyes el procedimiento a seguir, si consideran que dichos actos o resoluciones vulneran o atentan derechos que les son propios .....   | 419  |

e — No acuerdo con lo estatuido por el decreto de junio 30 de 1896, no procede la reconsideración de una resolución administrativa cuando posteriormente no se haya constatado un error de hecho al dictarla, u otra circunstancia capaz de motivar su anulación ..... 605

**Referencias:**

Constitucionalidad e Inconstitucionalidad: 2.  
Fisco Nacional: 1.  
Jubilaciones y Pensiones: 4.  
Minas: 4, 7, 8.  
Retiros Militares: 4.

**Actos hostiles contra un estado extranjero:**

*Ver. Tomo I, pág. 863.*

**Aduana:** Tomo I, pág. 863.

**INDICE SUMARIO**

Contrabando: 1.  
Comiso: 1.  
Derogación de disposiciones legales: 2.  
Derecho de almacenaje: 3.  
Derecho de Eslingaje: 3, 5, 6.  
Derecho de Estadística: 5.  
Depósitos: 4, 8.  
Exención de derechos: 5, 6, 7.  
Ordenanzas de Aduana: 1, 2, 3.  
Patente de importador: 3.  
Prescripción: 3.  
Procedimiento: 7, 10.  
Rectificación del manifiesto: 9.  
Recursos: 10.

1. — Se reputa contrabando la introducción de mercaderías en contravención a lo dispuesto por los arts. 1036 y 1037 de las Ordenanzas de Aduana, aún cuando no sea con fines comerciales que se introduce la mercadería sino con una finalidad política —en el caso, armas para un partido político con fines subversivos—. El Estado debe apropiarse de la mercadería objeto de contrabando, y pagar a los aprehensores lo que legalmente les corresponde, por concepto de derecho al comiso ..... 384

2. — Debe derogarse un decreto que se opone a una expresa disposición de las Ordenanzas de Aduana, con tanta más razón cuanto que es con respecto de una garantía para el comercio en sus relaciones con la Aduana : ..... 154

3. — No corresponde requerir el pago de impuestos aduaneros que se deben desde diez años atrás, que tienen su origen en errores de cálculo al efectuarse la liquidación, por cuanto el art. 24 de la Ley 4933, limita a dos años el término fijado por los arts. 426, 428 y 433, de las Ordenanzas de Aduanas ..... 367

4. — Los depósitos particulares, habilitados como fiscales, quedan sometidos a las leyes y reglamentos que gobiernan a estos últimos ..... 434

5. — Una empresa ferrocarrilera, que por ley de su concesión está exonerada de toda clase de impuestos, tanto nacionales, provinciales como municipales, tampoco debe pagar los impuestos de eslingaje y estadística ..... 532

6. — La exención de derechos aduaneros a la importación, concedido a una empresa, no implica eximirla del pago de derechos de eslingaje por tratarse de dos impuestos diferentes ..... 423

7. — Los escritorios para una empresa ferroviaria, amparada a la Ley Mitre, deben importarse libre de derechos como material de construcción y explotación.

No corresponde hacer declaraciones generales en materia de importación libre de derechos, conviene determinarlo en cada caso particular que se presente, o resolverlo de conformidad a los procedimientos fijados de antemano ..... 536

8. — Un comerciante que paga patente de importador, no debe abonar derechos por un galpón particular destinado solamente a poner sus mercaderías, géneros o frutos, pues tal depósito no estando destinado a recibir productos ajenos, no es el depósito a que se refiere el art. 14 de la ley de patentes ..... 212

9. — Las rectificaciones en las manifestaciones aduaneras pueden hacerse siempre antes de la verificación ..... 89

10. — Contra una resolución de la Administración de la Aduana, recaída en una causa por diferencias de calidad en la manifestación que ha sido sentenciada por la Suprema Corte de Justicia, procede el recurso de reconsideración.

El procedimiento legislado para el recurso de reposición, en el Cód. de procedimiento para la Capital y la ley de 14 de Septiem-